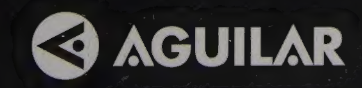
La travesía del desierto

Andrés

ALLAMAND



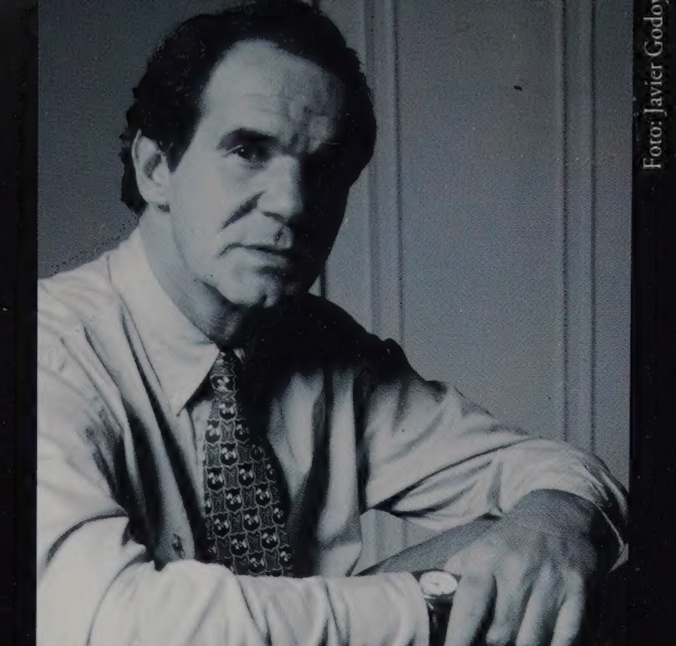


Foto: Javier Godoy

Andrés Allamand nació en Santiago en 1956. Dirigente estudiantil opositor a la Unidad Popular, su vocación pública quedó congelada durante los diez primeros años del gobierno militar. Volvió a la escena pública en 1983 con motivo de la apertura democrática y encabezó un esfuerzo unificador de la derecha que culminó en 1987 con la fundación de Renovación Nacional, de la que fue presidente entre 1990 y 1997.

Líder indiscutido del proyecto de una derecha democrática y libre de las inercias del pasado, Allamand fue la principal figura de la oposición y llegó a la Cámara de Diputados en 1994. A fines de 1997 fue derrotado en su campaña senatorial por Santiago.

Es abogado y está casado con Bárbara Lyon con quien tiene cuatro hijos (María Olivia, María Ignacia,Juan Andrés y Raimundo). Ha publicado una novela de juventud *(No virar izquierda*, 1974, Editorial Edimpres) y varios libros de recopilación de discursos, estudios y conferencias.

Vive en Estados Unidos desde 1998.

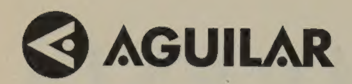
LA TRAVESÍA DEL DESIERTO

ANDRÉS ALLAMAND

A JENNIFER McCOY, CON LA AMISTAD DE

A. ALLAMAND

(OJALÁ TE SIRVA PARA CONOCER MÁS DE CHILE)



- **Grupo Santillana de Ediciones, S.A.**
  Torrelaguna 60, 28043 Madrid, España
- **Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S.A. de C.V.**
  Avda.Universidad 767, Colonia del Valle,
  México D.F. 03100
- **Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. de Ediciones**
  Beazley 3860, 1437 Buenos Aires, Argentina
- **Santillana, S.A.**
  Avda. San Felipe 731, Jesús María, Lima, Perú
- **Ediciones Santillana, S.A.**
  Javier de Viana 2350, (11200) Montevideo, Uruguay
- **Santillana, S.A.**
  Prócer Carlos Argüello 228, Asunción, Paraguay
- **Santillana de Ediciones, S.A.**
  Avda. Arce 2333, entre Rosendo Gutiérrez
  y Belisario Salinas, La Paz, Bolivia

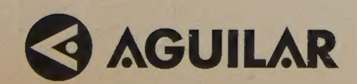
ISBN: 956-239-078-8
Inscripción Nº 109.364
Impreso en Chile/Printed in Chile
Primera edición: julio 1999

Diseño de cubierta:
Ricardo Alarcón Klaussen

Foto de cubierta:
Christian Mc Manus

La travesía del desierto

Andrés Allamand



A Bárbara, lo mejor

Agradecimientos

¡Tengo una lista enorme de agradecimientos! La verdad es que no sé por donde partir.

Quizás deba hacerlo por el presidente del BID, Enrique V. Iglesias, un uruguayo que tiene ADN latinoamericano y corazón chileno. Fue él quien me abrió las puertas de la institución en donde he trabajado desde que vivo en Estados Unidos. También en el BID me dieron orientaciones y más de una mano Carlos Ferdinand, secretario del directorio, y Mario Marcel, representante del gobierno de Chile ante la institución. Durante este período Edmundo Jarquin ha sido mi jefe en la división de Estado y Sociedad Civil. Sólo tengo palabras de reconocimiento y afecto para él y todos los profesionales que forman su equipo de trabajo. Son personas sólidas y humanamente excepcionales. Como no puedo nombrarlos a todos, mejor destacar a las cuatro secretarias: Ana Sylvia, Ana María, Elbita y Miriam. ¡Son encantadoras!

Augusto Varas y Alexander Wilde, de la Fundación Ford, confiaron desde el principio en el proyecto. Helen Mantell, del Institute of International Education, facilitó todo. Arturo Valenzuela, como director del Center for Latin American Studies de la Georgetown University, fue un apoyo inestimable.

También he quedado en deuda con Roberto Chadwick, quien me acogió con gran hospitalidad y me facilitó las céntricas y confortables oficinas de su consultora en Washington.

Antonio Martínez, de Aguilar, se tomó el libro como si lo hubiera escrito él. ¿Qué más puedo agregar?

María Eugenia de la Fuente tuvo infinita paciencia y dedicación en la planificación del trabajo y en los nexos que estableció para sacar adelante el proyecto. Confío en que nunca haya fastidiado tanto como yo a ella al personal de la sección Procesos de Prensa de la Biblioteca del Congreso, con el cual también me siento en deuda. Vaya para este grupo de gente colaboradora y cordial un amplio reconocimiento que quisiera personificar en tres funcionarias notables: Carmen Gloria Acevedo, Nora Fernández y la señora Alicia Zambrano. También recibí colaboración de la sección de Referencia General de este servicio y debo agradecerlo especialmente en la persona de Mariana Wiegand y Neville Blanc. En fin, dentro del equipo de investigación, también me hicieron grandes aportes Verónica Papic, Francisco José Covarrubias, Marcos Riveros, Ignacio Rivadeneira y Amy Mac Kee de la Universidad de Georgetown.

Antes de venir a Estados Unidos me dieron buenos consejos y me ayudaron Juan Eduardo Errázuriz, Roberto Palumbo, Pedro Ibáñez, Vicente Muñiz, Nicolás Ibáñez, Andrónico Luksic, Enrique Barros, Francisco Varela, Jorge Carey, Guillermo Luksic, Bernardo Matte, Arturo Fontaine Talavera y Daniel Platovsky. Algunos de ellos incluso pagaron gastos pendientes de la campaña de 1997 —sé que prefieren que no los nombre— y sin esas contribuciones jamás habría podido venir a Estados Unidos tranquilo.

En febrero de 1998, cuando aún no había resuelto trasladarme, fueron decisivas las conversaciones que tuve con Felipe Larraín en Boston, y con Carlos Portales, embajador de Chile ante la OEA, y John Biehl, embajador ante Estados Unidos.

Héctor Soto fue mucho más que el editor del libro. Me ayudó a pensarlo y a construirlo. Las tres semanas que pasó acá con nosotros fueron intensas en trabajo y creatividad. Después siguió diariamente al teléfono y todo se facilitó —¡milagro!— cuando se dió cuenta que el *e-mail* no muerde. Héctor me dejó escribir de la primera a la última letra y sólo ahí metió su bisturí para mejorar todo, omitir repeticiones y clarificar pasajes que originalmente eran descifrables sólo para mí. No sólo cortó mucho que

sobraba —ahora entiendo por qué los escritores odian a los editores— sino que me hizo agregar cosas que faltaban.

Finalmente está mi familia. Poco faltó para que éste terminara siendo un libro colectivo. ¡Por Dios que recibí opiniones! Pero eso no fue nada comparado con la ayuda que me brindaron. La Bárbara como nadie, ya que ella es la que en mi casa logra que las cosas se hagan. La Olivia, que durante meses compartió conmigo en el metro —de ida y de vuelta a Washington— dudas e inquietudes, días buenos y malos. La Ignacia, lectora voraz, empezó a ayudarme con la corrección de los textos en el computador y terminó editando y corrigiendo con una capacidad asombrosa. Ella conoce las rendijas del libro como nadie. Juan Andrés y su risa contagiosa siempre fue un estímulo, aunque siento que le robé tiempo que necesita. La Dina y la Mariela, dos chilenas de excepción que nos han acompañado en Estados Unidos, aportaron durante todos estos largos meses su buen ánimo y fidelidad a toda prueba. Mi hermano Pablo, desde Chile, nunca dejó de estar atento a los progresos del libro y se mantuvo con las antenas receptivas para trasmitirme novedades —tal vez más de las que yo mismo habría querido— del acontecer político de allá.

Por último está Raimundo. No puedo olvidar los domingos cuando muy temprano se levantaba y se sorprendía de encontrarme trabajando.

—Papá, ¿cuántos *chapters* te faltan de ese maldito *book?* —me preguntaba hastiado, en la jerga bilingüe de los niños de su edad.

Raimundo no sabe que en medida importante le escribí el libro a él.

Para que cuando sea más grande no le cuenten cuentos.

Andrés Allamand
Vienna, Virginia, julio de 1999

Índice

Capítulo I

Suena el teléfono

—Andrés, Jarpa es el nuevo ministro del Interior —me soltó por el teléfono mi amigo Roberto Palumbo—. Vamos a tener que ayudar.

La política estaba volviendo bruscamente a mi vida. También bruscamente, el perfil del régimen militar se había ensombrecido por efecto de la crisis económica y el descontento político. Los días del triunfalismo habían quedado atrás, flacos y desvanecidos. El gobierno asistía impotente a la fulminante erosión de su respaldo ciudadano.

Y respondía mal. La «mano dura» no es un recurso inagotable, aun revestida por la obligación de mantener el orden público. Las manifestaciones de protesta ciudadana iban en aumento. Tal como se presentaba el horizonte, el dilatado y etéreo proceso de transición contemplado en la Constitución de 1980 estaba en severo riesgo.

A las pocas horas de asumir el nuevo titular de Interior, en la tarde del 10 de agosto de 1983, 18 mil efectivos armados salían a la calle para enfrentar la cuarta protesta convocada por la dirigencia opositora. La jornada estuvo cargada de pésimos augurios y, efectivamente, sus costos fueron altísimos: 26 muertos, innumerables lesionados, cientos de detenidos, desórdenes callejeros y hechos de violencia.

Una década atrás —casi una eternidad cuando uno tiene 27 años— me había alejado de la política, salvo dos fugaces

excepciones: un par de días como presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad de Chile, cuando Hugo Rosende imponía como decano sus ideas autoritarias, y un par de intervenciones en televisión, con motivo del plebiscito de 1980.

Ya me había acostumbrado a tomar palco —como observador atento, lo admito— en los temas públicos. Inicialmente, no me había sido fácil. Pertenezco a una generación donde no se usaba, y tampoco era bien visto, mantenerse al margen. Aunque hoy a muchos jóvenes les cueste creerlo, la política es una pasión poderosa a la cual no se renuncia así como así. Menos todavía cuando es abrazada con la fuerza que yo lo había hecho doce años antes.

Asunto de familia

Mi primer recuerdo político es un grito.

Mi madre —que no en balde había estudiado Licenciatura en Historia, era profesora de Filosofía y estaba en tercer año de Derecho— nos había congregado para que presenciáramos un evento histórico.

Repetía casi con majadería, esa mañana del 4 de noviembre de 1970, que por primera vez un marxista alcanzaba democráticamente la presidencia de la República. Y no sólo en Chile, sino en el mundo.

—¡Viva Chile, mierda!— gritó Mario Palestro cuando Salvador Allende se terció la banda.

Mi padre, más que irritado con Allende, estaba indignado con Eduardo Frei Montalva.

—Votamos por Frei hace seis años, lo volvimos a apoyar el año 65 para que atajara al comunismo. ¡Un Congreso para Frei! ¿Sirvió de algo? ¡Hemos terminado donde mismo! —murmuraba amargado.

En mi casa, el triunfo de la Unidad Popular (UP) se vivió como una tragedia. Esa misma noche, el vecino de la casa de al lado —vivíamos en Valenzuela Castillo, entre Pedro de Valdivia

y Antonio Varas —habló con mi padre para avisarle que se iba del país. Antes de un mes ya no estaba. A uno de mis hermanos lo invitaron a Mendoza con todos los gastos pagados, ya que era la forma de comprar dólares. Mi padre —un destacado ingeniero civil— tuvo una oferta de trabajo del extranjero. Recuerdo que era hasta difícil pronunciar el nombre del pueblito español donde supuestamente nos íbamos a trasladar. La proposición era interesante, y no era cosa de desestimarla con ligereza. Mi madre era partidaria de irse; mi padre, no.

Provengo de una familia de clase media tallada en tradiciones de esfuerzo. Mi abuelo paterno, hijo de un inmigrante francés, fue un agricultor talquino que se arruinó con la crisis del 30 y que murió muy joven. Mi abuela debió trasladarse con los hijos a Santiago y, para educarlos y lograr que todos ellos fuesen profesionales, se dedicó a enseñar francés. Mi abuelo materno era marino. Llegó a ser hasta capitán de navío y fundó ni más ni menos que «El Caleuche». Mi abuela era una encantadora uruguaya que cocinaba como reina. Mi padre se formó en una escuela de gran austeridad y en su propio hogar, nos transmitió el mismo apego al trabajo, a levantarse al alba y a la sobriedad que él había respirado en su casa. En nuestra familia nunca faltó ni sobró nada.

En mi casa siempre hubo interés por la política, aunque nadie la había asumido frontal y activamente. Desde muy chico asistía a las conversaciones de los domingos en la tarde, cuando un grupo habitual de «mayores» se reunía a discutir y arreglar el mundo con vehemencia, agudeza y sentido del humor. La estrella del grupo era el cura Osvaldo Lira, un sacerdote de notable inteligencia, tajante y gran polemista, incluso cuando hablaba del tiempo.

—Yo siempre me he considerado un inmigrante —dijo mi padre en la reunión familiar donde se zanjó, finalmente, el dilema de su oferta laboral—. Pero estoy muy agradecido de este país que nos acogió hace dos generaciones y aquí nos quedamos. Los Allamand no arrancan.

Fue asunto terminado. Era noviembre de 1970 y yo tenía 14 años.

Campaña de pelo largo

Durante la UP el conflicto político inundó Chile y nadie fue ajeno al drama latente. Ingresé a la Juventud del Partido Nacional en 1971, con ocasión de la campaña municipal. Fue la primera vez que oí hablar de Sergio Onofre Jarpa. Era el presidente del Partido Nacional (PN), encabezaba la oposición al gobierno de la UP y su candidatura a regidor por la comuna de Santiago era unánimemente considerada como un acto de humildad y valentía política.

Al poco tiempo fui presidente comunal del partido, previo ajuste estatutario, ya que no era habitual que alguien de quince años alcanzara esas responsabilidades.

Con todo, el verdadero bautizo político vendría al año siguiente, cuando Juan Luis Ossa, el presidente de la juventud, me instó a presentarme como candidato a la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES).

Era una candidatura con más de un problema, pero dos eran inevitables. El primero, político: en la elección del año anterior, la derecha no había superado el 3% y el candidato había sido de la Democracia Radical (DR); porque la Juventud Nacional no existía en la federación estudiantil. El otro problema era «administrativo»: yo estudiaba en el Saint George's College y la FESES sólo agrupaba a estudiantes de liceos, no de colegios particulares.

Gracias a la complicidad del rector de mi colegio, Gerard Whelan; a los buenos oficios del presidente del centro de alumnos del Liceo Lastarria, Boris Castro; a la vista gorda de su rector y a la indulgencia de mi papá (no le quedó más que resignarse cuando supo lo que habíamos hecho a sus espaldas), el problema «administrativo» fue superado y a fines de abril mi extemporánea solicitud de matrícula fue aceptada. Así pasé, entonces, a ser estudiante de un establecimiento fiscal.

Fuimos a hablar con Jarpa a la vieja sede del Partido Nacional, en calle Compañía. El edificio, perteneciente al Club Fernández

Concha, se veía hasta más vetusto que ahora. Siempre he pensado que sólo lo mantienen en pie los recuerdos que esconden sus paredes. Jarpa es un tipo que a primera vista impresiona. Seco, adusto. Su figura dominaba una enorme oficina, de muebles grandes y pesados, alfombras gastadas y cuadros antiguos. En esa semipenumbra parecía haberse detenido la historia, pero a Jarpa, que tiene las cejas muy blancas y le molesta la luz de frente, cosa que lo hace mirar a su interlocutor siempre de lado, le acomodaba.

Juan Luis Ossa hizo una breve presentación y entramos de lleno a conversar sobre la mejor forma de enfocar la campaña. Jarpa estaba muy interesado en lo que pudiéramos hacer. Con su voz lenta y arrastrada, se mostró mucho más informado acerca de la FESES de lo que yo imaginaba. Su idea era inequívoca: había que enfrentar a la Unidad Popular en todos los terrenos. No había zonas neutrales. Y a él le parecía no sólo necesario, sino ineludible que abriéramos otro frente de combate.

Jarpa transmitía un fuerte liderazgo y no se guardaba sus opiniones.

—Está todo muy bien —dijo cuando ya terminábamos—. Espero que tenga éxito. Cuente conmigo si necesita apoyo. Llámeme directamente. Es muy importante para el país que al partido y a usted les vaya bien.

—Gracias —atiné a decir, sintiéndome un soldado al que su comandante le encarga la más peligrosa de las misiones.

—Oiga, no lo tome a mal —me dijo al despedirse—, pero ¿no cree que debiera cortarse el pelo?

—¡Cómo se le ocurre! —le respondí—. Si me lo corto, perdemos la mitad de los votos.

Jarpa se encogió de hombros, aunque —estoy seguro— la respuesta no le pareció bien. Está claro, sin embargo, que tenía problemas más serios que el largo de mi pelo. Yo, como todos los jóvenes de mi edad, lo llevaba hasta los hombros.

La campaña fue una experiencia formidable. Obtuvimos un excelente resultado en un terreno donde, hasta entonces, la derecha simplemente no se había asomado. Mis contrincantes fueron Camilo Escalona por la UP y Miguel Salazar, por el

Partido Demócrata Cristiano (PDC), que resultó triunfador. La vida nos volvería a juntar más adelante.

Más allá de la política, siempre agradecí haberme cambiado de colegio, aunque tengo grandes recuerdos del Saint George's. Del Liceo Lastarria, las «Termas de Providencia», conservo buenos amigos y mil anécdotas. El liceo —así lo sigo sintiendo ahora, al igual que la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile— es el Chile de verdad.

Agoniza la democracia

Viví la etapa final de la Unidad Popular en el fragor del activismo político más desaforado. Tenía que desdoblarme entre mi calidad de estudiante de enseñanza media, jefe de la Juventud Estudiantil del PN, dirigente de la FESES y activista político en el sentido más básico. Participé en las campañas parlamentarias de 1973, en las universitarias de ese período y creo que formé parte de cuanto equipo de propaganda mural existía.

Durante la UP, los dirigentes políticos se forjaban en las asambleas y maduraban en las calles. Actuar en política era medirse en todos los terrenos con los organizados y combativos cuadros juveniles de los partidos de izquierda. A veces, literalmente a balazos. Como el 21 de agosto de 1973, cuando en una manifestación estudiantil por las calles del centro —en Compañía esquina de Bandera— fuimos objeto de una artera emboscada. Diego Lepe, un joven dirigente, cayó a sólo dos pasos de mí. Transcribí la experiencia en una novela que me atreví a escribir muy poco después, *No virar izquierda,* donde apenas cambié los nombres de los personajes, pero mantuve fielmente los hechos:

El hijo de puta vestía un pantalón amarillo. Chaqueta larga de cuero café. Jamás me podré olvidar.

Se agachó y escondió detrás de unos pilares de la reja del Congreso. Lo vimos sacar una pistola. Usaba sobaquera. El arma grande y negra, apareció en su mano.

Disparó con precisión asesina.

Uno, dos, tres, cuatro fueron cayendo. Los gritos de horror y dolor nublaban los pensamientos. Las balas zumbaban. A uno le llegó un balazo en la cabeza. Se la rozó. A otro le llegó en la boca. Escupió. No: vomitó sangre.

Locura, estupidez, inconsciencia, la imbecilidad de todos por quedarnos ahí. ¿Arrojo suicida o valeroso? ¡Qué importa!

Tirábamos las piedras con todas nuestras fuerzas, para verlas rebotar inofensivamente a diez o quince metros, desde donde nos seguían disparando.

Cinco, seis, siete. El último fue el peor. El proyectil le perforó el cráneo, buscando quitarle la vida al joven. Después supimos que se llamaba Diego. No lo consiguió. La muerte tuvo que esperar.

Llegó un tipo flaco, alto. Les disparó, ¡qué alegría! Arrancaron. Ahora, los maricones se iban.

La pelea se detuvo. Las mujeres se callaron. El ulular de las sirenas de las ambulancias quebró el súbito silencio.

Los pacos seguían sin aparecer. No supe qué hacer. Estaba atontado. Caminé con las imágenes vividas saltando, mezclándose y entrecruzándose en mi cabeza. Me senté en la escalinata de los tribunales, dominado por la angustia.

Si cuando chico no me hubieran enseñado que los hombres no lloran, me habría puesto a llorar. Me mordí los labios hasta que sangraron. Me enterré las uñas en las palmas de las manos. Transpiraba, sudaba frío.

¡Balearse frente al Congreso! ¡No podía ser cierto! Qué límites horrendos habíamos alcanzado en poco tiempo. El costo social de la revolución, para ellos. Y para nosotros... ¿qué?

Uno de los nuestros, Enrique Opaso —¡las vueltas de la vida! hoy es párroco en Reñaca— alcanzó a llegar a la sede del PN e irrumpió en la sala de la comisión política para pedir ayuda. Juan Luis Ossa tuvo que enfrentarse a balazos con los agresores y no sé qué habría sido de nosotros si no nos defiende.

Así agonizaba la democracia chilena.

Una vez que retornó la calma, llegaron las ambulancias y Carabineros hizo acto de presencia. La sesión de la comisión

política se reanudó y Juan Luis se reincorporó a la misma. No era una sesión cualquiera. Ese día, el partido aprobaba impulsar el histórico acuerdo de la Cámara de Diputados, estableciendo la ilegitimidad del gobierno de la UP, adoptado el 23 de agosto de 1973, con la totalidad de los votos nacionales y demócrata cristianos.

Ya a mediados de 1973, el margen de maniobra para solucionar la crisis del país no era más que una rendija. El fracaso del diálogo Allende-Aylwin, el fallido pero sugerente movimiento militar de fines de junio, el elocuente y sucesivo reemplazo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas (Leigh por Ruiz Danyau en la Fuerza Aérea, Pinochet por Prats en el Ejército y Merino por Montero en la Armada), la beligerante ofensiva de la izquierda más radicalizada, orientada a sembrar la subversión entre los uniformados —junto a muchos otros factores de más larga maduración— se encadenaron con una lógica destructiva.

Refiriéndose a esa dinámica, en agosto de 1973, Tomic describiría en una carta dirigida al general Prats el fenómeno en términos insuperables: «Como en las tragedias griegas, todos saben lo que va a ocurrir, todos dicen no querer que ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda».

Cuando ya la situación no daba para más —y lo digo en forma literal, porque estoy hablando del lunes 10 de septiembre de 1973 en la noche—, intervine en la franja que le asignaba espacio, por cadena obligatoria, a los distintos partidos políticos en la televisión. Algo así como la actual franja política electoral, pero con microprogramas de unos diez minutos que se transmitían al término de las emisiones. Los partidos preparaban sus presentaciones con la debida anticipación y a la Juventud Nacional Secundaria nos asignaron la de ese día.

El tema obligado de esa mañana fue el incendiario discurso del día anterior de Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, en el cual reconoció la existencia de contactos con marineros y suboficiales rebeldes de la Armada. Al alentar la sublevación militar, la UP cruzó el último umbral hacia el barranco.

Junto a Carlos Regonessi y Antonio Cifuentes preparamos cuidadosamente nuestra participación. Demás está decir que los asuntos estudiantiles eran los menos considerados: los nuestros eran los problemas del país.

—Señor Allende, en nombre de los jóvenes, le pedimos que cierre la puerta por fuera —fue la frase con que terminé mi intervención.

Fue lo último que dije. Fue también lo último que la franja transmitió. Fueron quizás, por la hora avanzada, las últimas palabras de una larga etapa democrática que también se cerraba. Los engranajes del Once de Septiembre ya estaban en movimiento y nada ni nadie iba a lograr detenerlos.

Del golpe a clases

Viví el movimiento del Once de Septiembre con alivio, esperanza y también con gran optimismo. Sentí que el país se había salvado del despeñadero en el minuto final y vi en el golpe una reacción no sólo legítima, sino también patriótica que interpretó a una inmensa mayoría ciudadana.

Mi partido, el Nacional, declaró que «el régimen marxista se ha derrumbado bajo el peso de su incapacidad, su sectarismo, su inmoralidad y sus crímenes. A las Fuerzas Armadas ha correspondido la díficil misión rectificadora, guiada por el significado profundo de su existencia institucional e impulsada por la rebelión altiva de todo un pueblo que rechazaba la dictadura marxista».

La Democracia Cristiana afirmó que «los hechos que vive Chile son consecuencia del desastre económico, el caos institucional, la violencia armada y la crisis moral a que el gobierno depuesto condujo al país... los antecedentes demuestran que las Fuerzas Armadas y Carabineros no buscaron el poder... los propósitos de restablecimiento de la normalidad institucional y de paz y unidad entre los chilenos expresados por la Junta Militar interpretan el sentimiento general y merecen la patriótica cooperación de todos los sectores».

Más tajante aún fue Aylwin, quien declaró que «el gobierno de Allende había agotado en el mayor fracaso la vía chilena hacia el socialismo y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista. Chile estuvo al borde del Golpe de Praga, que habría sido tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente».

Más adelante Frei Montalva escribiría:

«El fondo del problema es que el gobierno de la UP, presentándose como una vía legal y pacífica hacia el socialismo —que fue el slogan de su propaganda nacional y mundial— estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria. Las Fuerzas Armadas no actuaron por ambición. Más aun, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso sería ahora el fracaso del país y lo precipitaría a un callejón sin salida».

El Golpe significó retomar un ritmo menos apasionante, pero también menos disociado de la normalidad. Volví, por cierto, a clases. En este plano, mi situación se veía difícil. Apenas un par de notas figuraban en el libro de clases y no creo que en total acumulara más de 30 días de asistencia. Si quería estudiar Derecho iba a tener que «matearme» para rendir una buena Prueba de Aptitud Académica.

—¡Qué bueno verlo, ya lo tenía por desertor! —fue la bienvenida de mi profesor jefe.

Llegan los gremialistas

Poco a poco fui tomando distancia de la política. En ello influyó la inmediata decisión del Partido Nacional de autodisolverse y, por supuesto, la clausura de la actividad política como tal.

Más adelante, incidió la cerrada oposición de los dirigentes gremialistas, que coparon velozmente las pocas estructuras de participación creadas por el gobierno militar y le cerraron las puertas de entrada a todos los que teníamos un «pasado político». En cosa de días, el mérito de haber sido dirigente estudiantil y

haber combatido a la UP se transformó en estigma. En cambio, surgió un Frente Juvenil de Unidad Nacional, un esbozo de movimiento político creado a partir de gente tan distinta como Javier Leturia y Miguel Kast, Ignacio Astete y Jaime Fillol, César Antonio Santis y Jaime Guzmán, Manfredo Mayol y Roberto Viking Valdés, Antonio Vodanovic y Juan Carlos Méndez, además de unos cuantos dirigentes inventados sepa Dios por quién y bajo qué lógica.

La propia Secretaría de la Juventud pasó a ser un feudo excluyente del gremialismo y quienes desconfiábamos de una política juvenil «de funcionarios», definitivamente no teníamos nada que hacer ahí.

No era nuestro tiempo.Tampoco el mío.

Al menos, lo entendí así. Por eso me recluí en lo mío. La publicación de la novela *No virar izquierda* fue un testimonio de lo vivido y también un candado sobre mi experiencia de dirigente político.

Cuando terminé de escribirla —luego de que mi profesor de Castellano del Saint George's, José Simón, la aprobara— la presenté a la Editorial Gabriela Mistral, el nuevo nombre de Quimantú, la empresa pública editorial de los tiempos de Allende. La novelita fue rechazada.

—Es interesante, pero el gobierno no cree prudente publicar un libro que puede ser interpretado como una incitación a la revuelta estudiantil. En todo caso, si consigues alguien que la edite, nosotros no tenemos problemas en distribuirla —me explicaron.

«Conseguí» el financiamiento de mi papá, la imprimió Gonzalo Eguiguren, ex vicepresidente del Partido Nacional, la distribuyó la Editorial Gabriela Mistral y hasta el mismísimo Alone tuvo la gentileza de referirse a ella en su columna dominical de crítica literaria, un privilegio ciertamente inmerecido.

AMOR, GRISHAM Y RUGBY

Cuando pienso en cómo logré separarme de la política durante diez años, siempre concluyo que fue un proceso natural en que me limité a observar de lejos la escena, a establecerme bien en el plano personal y a comprobar que los aires dominantes no iban conmigo. Eran tiempos de cerrado autoritarismo, de censura y de control.

Además, tenía estímulos que me llenaban completamente la vida. Desde luego, la Bárbara, mi mujer. La había conocido el mismo año 1973, en el vértigo de la «toma» de un liceo. Apenas se cruzó su mirada con la mía, se produjo para mí un momento mágico. Nos casamos seis años después. Sin el apoyo de ella, difícilmente hubiera podido embarcarme en los proyectos y desafíos que me ha correspondido afrontar.

Aunque la gente no lo crea, soy un tipo tímido y me cuesta mucho expresar mis sentimientos más personales. ¡No voy a cambiar ahora! Sólo agregaré que la Bárbara es lejos lo mejor que me ha pasado en la vida, y mi familia —la Olivia, la Ignacia, Juan Andrés y Raimundo— lo mejor que Dios me ha dado.

Cuando nos casamos, todavía me faltaba mucho para consolidarme profesionalmente, pese a que trabajé mientras estudiaba en la universidad. Me empeñé en abrirme camino en mi profesión, fui procurador en la Fiscalía del Banco de Chile —donde me enseñaron a trabajar— y después, socio de un estudio jurídico, pionero en el manejo computacional de los sistemas de cobranza judicial. Nunca pensé en ser nada distinto de abogado. El Derecho y su lógica me atraen como nada y disfruto intensamente de la profesión de abogado. Además, a diferencia de la mayoría de mis colegas, me encantan los juicios, me entretienen los alegatos y disfruto con el ruido de la corte y el ajetreo de los tribunales. Como nadie es perfecto, debo admitir que me devoro los libros de Grisham.

Si la política es mi vocación, y las leyes mi profesión, el deporte es —lejos— mi pasión.

Siempre he jugado a todo. Básquetbol, vóleibol, tenis, fútbol —en cuanta liga imaginable— y, por cierto, rugby. Lo descubrí casi por casualidad, a los 20 años, empujado por mi hermano Pablo, y fue una fuente insuperable de emoción, adrenalina, camaradería y aventura física.

El rugby fue para mí más que un simple deporte. Allí se «galvanizaron» muchos de los valores a los que he tratado de ajustar mi vida. Algunos ignorantes sólo ven en el rugby brutalidad, sin darse cuenta de que el control de la violencia del juego es posible sólo a partir de la lealtad y el respeto: al reglamento, a los adversarios, a los compañeros, al juego mismo. El rugby me enseñó a ganar y a perder, a trabajar en equipo, a no quejarme y, sobre todo, a despejar siempre los rencores. El partido se juega a muerte, sin dar ni aceptar cuartel, aplicándonos a fondo por ganar. Pero una vez que termina, termina.

Amar, formar una familia, estudiar, trabajar. Siempre con el acelerador a fondo. ¿Qué más? Durante diez años la vida me llenó la vida.

Tomando distancia

Apoyé al gobierno militar y durante los primeros años yo diría que lo hice con entusiasmo. Era de bien nacido respaldar una administración que se había hecho cargo del país en una encrucijada tan difícil y a petición de nosotros mismos. Siempre pensé que la transformación económica iba bien encaminada, aunque golpeara directamente a nuestra propia familia, como cuando quebró una de las empresas en que mi padre trabajaba.

Mis diferencias venían por el lado político. ¡La feroz crítica a la historia de Chile me resultaba exagerada! Parecía que todo lo que se había hecho antes del Once era un desastre. La censura en bloque a todos los políticos, sin distingos, tampoco era razonable, y menos podía aceptar que quienes nos habíamos jugado por enfrentar a la UP hubiésemos pasado a ser un grupo de gente indeseable y sospechosa.

Me contrariaba el carácter autoritario, la beatería «milica» y la incondicionalidad de los civiles que rodeaban al régimen. Nunca he tolerado el caudillismo y siempre he detestado a los serviles. Sólo un ciego no advertiría en esos años que todo el discurso portaliano sobre las instituciones separadas de las personas y la impersonalidad del poder, no congeniaba con la creciente concentración de poderes en Pinochet. Y cuando alguien llamó a formar un movimiento «pinochetista», me di cuenta de hasta dónde podía repugnarme el culto a la personalidad.

Sin embargo, el factor que me fue separando más y más del gobierno de las Fuerzas Armadas fue el sistemático descrédito a la democracia como sistema de gobierno. Al principio se criticaba a la UP, pero a poco andar el enemigo parecía ser la democracia, los partidos, las elecciones. La democracia era apenas «una forma de gobierno más», como repetía Jaime Guzmán y el resto en coro. En el nuevo sistema institucional no habría lugar para los partidos y cada vez más abiertamente se iba a la raíz: los males estaban en los «endémicos defectos del sufragio universal».

—Yo me voy a morir. El que me suceda también tendrá que morir. Pero elecciones no habrá —anunció Pinochet en 1975.

Con el tiempo esa distancia se iría ensanchado.

El tema de los derechos humanos surgió más tarde.

Por supuesto, nunca fui indiferente, pero es cierto que en los primeros años el drama de los derechos humanos me fue, como a muchos otros, distante. Sin ir más lejos, el que la directiva de la Democracia Cristiana haya ordenado a sus militantes abandonar los cargos públicos en el gobierno militar recién en 1976, es la mejor demostración de lo que afirmo.

¿Jarpa? ¿Apertura política? ¿Redefinir la transición?

Quizás hubiera podido «hacerme el leso», pero uno no se puede negar a sí mismo.

A veces pienso que la vocación política tiene tanto de privilegio como de fatalidad.

Las estrías del régimen

El plebiscito de 1980 tuvo lugar en un momento de franco auge económico. Después de vacilaciones respecto de qué política económica aplicar y de magros resultados originados por la catastrófica situación heredada y por la propia ambigüedad en la conducción inicial —en 1975 el Producto cayó en casi más de un 13% y la inflación bordeó el 350%—, el país había iniciado un sostenido proceso de recuperación, asociado a medidas innovadoras, audaces y coherentes. Entre 1976 y 1980, el PGB (Producto Geográfico Bruto) creció a un promedio del 6,8% anual.

Fue en ese contexto cuando se plebiscitó la Constitución del 80 y es todo un signo de los tiempos y el que, la noche de la celebración del triunfo, el general Pinochet, en un discurso epifánico, haya prometido de todo para los ocho años siguientes —un millón de empleos, 900 mil casas, un automóvil, un teléfono por cada siete chilenos y un televisor por cada cinco— pero nada muy concreto en materia política. Sí, claro, democracia habría, allá lejos, al final de la década.

El éxito económico (que la retórica triunfalista presentaba como un «milagro») del régimen militar se consideraba una condición previa para el avance democrático. Básicamente por eso —y también porque el poder seduce y demora— se había delineado una transición tan prolongada que, por una parte, apoyaba y, por otra, debía retroalimentar y afianzar el desarrollo económico.

Como al principio todo pareció caminar sobre ruedas, no hubo inconvenientes. Pero ya en 1981 las primeras señales de alerta se empezaron a sentir. Y 1982 fue un año desastroso. El producto cayó en un 13% y la inflación, trabajosamente reducida, volvió a superar el 20%. Los principales bancos fueron intervenidos y los dos mayores grupos económicos —Vial y Cruzat-Larraín—, hasta hacía poco símbolos de empuje y progreso, cayeron en falencia. Pero lo más grave fue el desempleo, que saltó al 30%. Un verdadero «cóctel molotov», indigerible para cualquier sociedad.

Como el descontento cundía a raudales, no pasó mucho tiempo antes de que el malestar también encontrara expresión política. Las protestas sociales alcanzaron gran convocatoria, primero como expresión de descontento ciudadano y con posterioridad, como instrumento disociador e insurreccional del lumpen y el extremismo, pero al principio sintonizaron rápidamente con las clases medias. El gobierno perdió no sólo el rumbo, sino también la iniciativa. Por un lado, se le veía paralizado e incapaz de gestar respuestas a la crisis económica. Por el otro, aparecía completamente inmovilizado en lo político, por culpa de un esquema institucional rígido que sólo preveía transformaciones y cambios... ¡para fines de la década! Pero la duda era legítima: ¿llegaría hasta entonces? Los opositores no dudaban.

—¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! —eran los gritos cada día al anochecer.

El que Jarpa, embajador en Argentina desde 1978, fuera nombrado ministro del Interior no dejaba de ser una paradoja. Pinochet llamaba en su hora más amarga a un político de viejo cuño, para impedir el desplome de un gobierno todopoderoso que un par de años antes parecía esculpido en roca.

Todo era ligeramente surrealista. El régimen de acero se estaba agrietando. Un señalado representante de la vieja clase política chilena era el jefe de gabinete del gobierno que mayor desprecio le había profesado a esa estirpe. Y a mí, me llamaban para defender a un gobierno del que jamás había formado parte.

60 MIL ALMAS

La invitación para ayudar al nuevo ministro se tradujo de inmediato en cuestiones muy concretas. Roberto Palumbo redactó una declaración en apoyo a las intenciones aperturistas del jefe del gabinete. Jarpa la aprobó y le pidió a un grupo de dirigentes de la antigua Juventud Nacional que iniciara una campaña de recolección de firmas.

Ese fue el punto de partida. La verdad es que la declaración

—no te enojes, Roberto— no era gran cosa. Llamaba a apoyar la apertura democrática y a «integrarse a un gran esfuerzo solidario que aplaste la violencia mediante el afianzamiento decidido de la libertad, la democracia y la paz social». Nada más.

Improvisando sobre la marcha, porque no teníamos planificación alguna, hicimos el trabajo con gran eficiencia. En menos de lo que canta un gallo, revivimos una red de dirigentes que parecía haber estado esperando una señal para reagruparse. Más adelante nos dimos cuenta de que, para que tuvieran sentido como hecho político, las firmas debían ser procesadas computacionalmente y publicadas en los diarios. Al principio pareció una idea extravagante y difícil de ejecutar. Alguien quedó de consultar, pero, como la consulta demoró más de la cuenta, con el jefe de computación y en sólo un fin de semana, preparamos un programa y montamos el sistema. En quince días, 60 mil firmas impresas en largos listados se fueron amontonando en la sala de computación de mi oficina.

El paso siguiente fue darlas a conocer. Nadie sabía cómo hacerlo. Jarpa tampoco daba luces. Fijamos una fecha y se convocó a una conferencia de prensa. Alguien quedó en preguntarle a Jarpa quién debía hacer de cabeza o al menos dar la cara, pero el ministro no estaba para nimiedades. Sólo unas horas antes de que llegaran los periodistas, su voz resonó en el teléfono de mi oficina.

—Había pensado en otras personas, pero como no se ha podido tomar contacto con ellas, hable usted con los periodistas y despache el asunto de la manera que crea más prudente—. Eso fue todo lo que me dio como instrucción.

Llegó la prensa, la radio y la televisión. Mostré las rumas de firmas, leí la declaración y después contesté las preguntas lo mejor que pude.

Había nacido el Movimiento de Unión Nacional.

El nombre del movimiento me inspiraba toda suerte de reparos, sobre todo por la sigla que originaba: MUN. Parecía una buena denominación para un desodorante, no para una corriente política. Al final, sin embargo, nadie se rió del MUN por llamarse así. En el mundo de las siglas, casi todo está permitido.

Las firmas tuvieron un gran impacto. En los meses siguientes, los cuatro o cinco que habíamos estado en la «operación firmas» nos reíamos de buena gana cuando escuchábamos sesudos comentarios periodísticos sobre la «cuidadosa y bien planificada operación política para generar un partido de respaldo a la apertura iniciada por el ministro Jarpa». Todo había sido un conjunto de reacciones hilvanadas por la improvisación, la casualidad y la intuición. En cualquier caso, la identificación del movimiento con Jarpa era muy alta.

—Usted es el potrillo de Jarpa, ¿verdad? —me preguntó Daniel Galleguillos al entrevistarme por primera vez para una edición dominical de *La Tercera*. Malú Sierra, en el reportaje que me dedicó en la revista *Hoy*, ni siquiera me lo preguntó. Tituló simplemente «El hijo político de Jarpa».

El enojo de Alessandri

«Reclamo para mí el honor de que se llegase a redactar una nueva Carta Política. No estoy de acuerdo con las modificaciones introducidas al proyecto que aprobó el Consejo de Estado y mucho menos lo estoy con la normativa de la transición que se introdujera a su texto».

La voz del viejo y respetado hombre de Estado, inconfundible en su tono altivo y algo nasal, tronó en el amplio salón atiborrado de empresarios, que guardaban religioso silencio. No volaba una mosca en el V Encuentro Nacional de la Empresa, que tuvo lugar en noviembre de 1983.

—Cuando el Consejo de Estado —continuó diciendo Jorge Alessandri— terminó el estudio del proyecto constitucional, señalé que era necesario crear un régimen transitorio que permitiera la entrada en vigencia de la nueva Constitución, inmediatamente después de aprobada por un plebiscito. Para ello, había un obstáculo: la elección de un Congreso, lo que tomaría mucho tiempo. Por eso, propuse la designación de senadores y diputados por la Junta de Gobierno. Es decir, deseaba que el

señor Pinochet continuara gobernando en plena normalidad constitucional y después de cinco años, se reemplazara al Parlamento, así instalado, por otro de elección popular.

Alessandri habló con una franqueza a la que la escena política en esos días de reverencias y eufemismos no estaba acostumbrada. Pocos quedaron inmunes a sus recados. Al equipo económico le reconoció innegables méritos, pero le reprochó suponer «que la economía es una ciencia que puede prever los fenómenos económicos y dar soluciones a todos ellos» e incurrir en «el error fundamental que significa sostener que el Estado debe estar totalmente ausente en el proceso económico».

A quienes abogaban por el reemplazo del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres —cometido en el cual el ministro Jarpa era el más entusiasta—, les señaló que el país no podía desaprovechar a una persona que había despertado gran confianza en la comunidad financiera internacional. Y, para sorpresa de muchos, solicitó al propio general Pinochet, «en la forma más respetuosa posible», que diera «el ejemplo en la prudencia, evitando todo acto o declaración que sirva de pretexto para el agravamiento de este duro trance».

Alessandri concluyó sus palabras con un dejo de amargura:

—La hora que vive Chile es muy difícil. No obstante, tengo la íntima satisfacción de haber realizado, privadamente desde mi retiro, cuanto me era posible para recuperar con rapidez nuestra honrosa vida constitucional. No tuve éxito y mis labios se sellaron.

Un largo y cambiante debate

Las palabras de Alessandri no hicieron otra cosa que reanimar el largo y escurridizo debate sobre la institucionalización del régimen y la transición política, que recorrió los primeros siete años del gobierno militar.

Las corrientes y visiones que se enfrentaron fueron básicamente dos. Los «blandos» (el gremialismo y los civiles de formación más tecnocrática) y los «duros» (los distintos grupos nacionalistas).

En líneas gruesas, mientras los «blandos» eran partidarios de establecer un itinerario político y dictar una Constitución, a los «duros» nadie los sacaba del dogma según el cual el gobierno militar debía definirse en función de metas y no de plazos. La conclusión era obvia: si no querían Constitución, menos querían transición.

La verdad es que sobre este asunto el gobierno militar nunca tuvo las ideas claras.

En julio de 1977, en un acto en el cerro Chacarillas, Pinochet diseñó un plan en tres etapas: una de «recuperación», en que las Fuerzas Armadas mantendrían la plenitud del poder hasta 1980; otra de «transición», en que las Fuerzas Armadas compartirían el poder con la civilidad y se instalaría una Cámara Legislativa que, al término de cinco años, aprobaría una Constitución y elegiría al primer presidente de la República. Allí se inauguraría la etapa de «normalidad».

Sin embargo, dos años después de los anuncios de Chacarillas, el inmovilismo —la gran tentación de los gobiernos autoritarios y de las dictaduras— seguía haciendo de las suyas.

Sólo la mente privilegiada de Jaime Guzmán contribuyó a clarificar el panorama. Guzmán advertía lo que muchos partidarios del gobierno militar no querían ver: «Que la inexistencia indefinida de todo plazo para un gobierno conlleva la constante presión sobre su permanencia o término, especialmente en los momentos de crisis».

Según Guzmán, el principal ideólogo e inspirador político del régimen, lo que correspondía era abocarse a definir «cuáles son los requisitos para disfrutar de una democracia estable» que, de cualquier manera, debía apartarse de los «moldes clásicos y caducos de la democracia liberal», pero también de todo «devaneo proclive a la implantación de un Estado militar que perpetuara a las Fuerzas Armadas en el poder o todo esquema fascista, posiciones ambas que algunos partidarios del gobierno insinúan majaderamente».

A su juicio, se requería un consenso sobre el nuevo ordenamiento constitucional y como elemento fundamental del mismo

«excluir de la vida cívica a las doctrinas totalitarias o violentistas» y un alto grado de desarrollo económico, como «condición previa para que en nuestra patria pueda implantarse nuevamente el régimen democrático de gobierno».

El problema era que el diseño constitucional del régimen no generaba el consenso buscado y la idea de un grado «alto» de desarrollo económico como condición previa para la democracia daba mucho que pensar: ¿quién define qué es un «alto» grado de desarrollo?

A mí me pareció siempre que cualquier plazo sería, hasta cierto punto, arbitrario y que su fijación estaría supeditada, sobre todo, a variables políticas.

En cualquier caso, por lo que Jaime abogaba a brazo partido era por una transición gradual, destinada a «evitar el quiebre brusco que derivaría de un paso abrupto de un régimen militar a otro civil; acostumbrar al país a las nuevas instituciones y facilitar el surgimiento de una nueva generación que encarne los principios inspiradores de la nueva institucionalidad, con el fin de que ésta perdure con solidez y continuidad».

A su modo, el gobierno militar también sucumbió a la tentación utópica del «hombre nuevo».

La Constitución en la pieza oscura

¿De dónde venía el enojo de Alessandri?

Cuando la Comisión Ortúzar, que preparó la nueva Constitución, completó su trabajo en agosto de 1978, Pinochet lo «reenvió» al Consejo de Estado en el mismo mes. El proyecto fue estudiado a fondo durante casi dos años por dicho organismo, integrado por importantes personalidades, incluidos dos ex presidentes, toda vez que Frei —el tercero vivo— se negó a participar. En julio de 1980, Alessandri en persona le entregó a la Junta de Gobierno un nuevo y completo anteproyecto de Constitución Política.

Y empezaron las sorpresas. El texto del Consejo de Estado fue revisado por una comisión *ad hoc* y por la propia Junta de

Gobierno a un ritmo febril. ¿Cuál fue el resultado de esa revisión? El texto constitucional fue modificado en diversos aspectos fundamentales y, de paso, se reemplazó completamente la modalidad de transición propuesta. Ni siquiera hay actas que expliquen los cambios introducidos que, por lo demás, han generado el nudo de los problemas institucionales que hasta hoy —casi veinte años más tarde— siguen latentes. Y cuando todavía los cambios eran objeto de análisis, ¡el régimen convocó a un plebiscito!

¿Qué había pasado? Hasta hoy es difícil saberlo. Quizás una mezcla de elementos. De partida, el influyente ministro del Interior de la época, Sergio Fernández, consideró que «la transición tendría que ser sustancialmente replanteada». También puede haber influido la presión que, en una embestida final, efectuaron los «duros». La hija mayor del propio Pinochet señaló a los cuatro vientos que el proyecto constitucional «no es del agrado de mi padre», con el claro propósito de postergar la definición constitucional. Por otro lado, hasta dónde Pinochet quería compartir su poder con un Congreso, por dócil que le fuera y hasta dónde la Junta quería ver diluido su rol, son cuestiones más que dudosas.

En definitiva, mientras el modelo de transición del Consejo de Estado contemplaba un avance gradual hacia la democracia, el de la Constitución del 80 no lo hizo. Uno cambiaba radicalmente el escenario institucional y el otro, perpetuaba el existente. Uno ponía a funcionar todas las instituciones, el otro las dejaba en el congelador. Uno generaba un enorme progreso en materia de derechos humanos; el otro dejaba las cosas tal cual, lo que a siete años del Golpe era muy injustificado y generaría efectos contraproducentes. Uno desembocaba en una elección normal, el otro en un plebiscito.

¡Por supuesto que no me gustaron los cambios! Y me pareció inaceptable que ni siquiera alguien se hubiera tomado la molestia de explicarlos. También, era forzar demasiado la buena fe ciudadana asignarle al voto *Sí* triple significado: aprobar una nueva Constitución, aprobar una modalidad de transición

imprevista y elegir un presidente de la República por el período de ocho años, pero con normas que claramente apuntaban a que su permanencia en el poder se prolongara por 16. La Constitución prohibía la reelección inmediata del presidente, pero nominativamente eximía al general Pinochet de esa regla.

Los cambios de última hora introducidos al proyecto del Consejo de Estado entregaron una radiografía de Pinochet. Todo el debate anterior había discurrido sobre la base de que el poder político debería ser compartido durante la transición. Pues bien, esa premisa se borró de una plumada. Pinochet, en el último minuto, no sólo no cedió un ápice de poder, sino que aumentó considerablemente el que ya tenía.

La docilidad para aceptar los designios de última hora de Pinochet y la Junta, por parte de los asesores civiles, me pareció abismante. Sólo después del plebiscito, la ciudadanía supo que Jorge Alessandri había renunciado. Fue un secreto bien guardado y lo curioso es que quienes más habían pontificado en favor de una transición gradual no abrieron la boca. Y como era previsible, entró a operar la lógica de las opciones plebiscitarias. O se está a favor o se está en contra, no hay términos medios. Sí o no.

En 1980 el régimen llevó a su paroxismo esta lógica. La convocatoria al plebiscito estableció que el «hipotético rechazo del proyecto aprobado por la Junta de Gobierno significaría el retorno a la situación jurídica y política existente en el país al 10 de septiembre de 1973».

La verdad es que el ex presidente Frei —en un acto público en un Teatro Caupolicán copado por banderas de partidos de la UP— fue certero cuando sostuvo que «eso de volver al 10 de septiembre de 1973 es una de las cosas más increíbles que he oído en mi ya larga vida. ¿Puede un país volver atrás? Es como si quisiera repetir las escenas de un teatro, pero resulta que una parte importante de los actores están muertos, desaparecidos o exiliados. ¿Los van a resucitar? ¿Van a permitir que retornen para reconstruir ese 10 de septiembre?».

Sin embargo, el plebiscito —más que una controversia jurídica o constitucional— se transformó en un referéndum de

apoyo o rechazo al régimen militar y al propio Once de Septiembre. Y si no cabía duda de que, entre tener y no tener Constitución, era mejor tenerla, en esa disyuntiva tampoco había dónde perderse.

El éxito en el plebiscito, reflejado en el abrumador respaldo que recibió la propuesta del régimen, diluyó todas las dudas sobre el camino elegido, dejándolas en el plano de las disquisiciones bizantinas.

No obstante, éstas reaparecerían más tarde, cuando crujió el pedestal en que se apoyaba todo el modelo de transición: el progreso económico.

Capítulo II

La fusta de Jarpa

Era relativamente fácil explicar por qué llegaba Sergio Onofre Jarpa al gabinete: el aislamiento del gobierno y el clima de violencia exigían un cambio de rumbo. Bastante más difícil, sin embargo, era determinar a qué venía.

El día de su juramento, Pinochet dio pocas luces. Jarpa, en sus primeras declaraciones, tampoco fue explícito. Reconoció haber trabajado en una comisión que había elaborado un plan político muy amplio, que incluye «también un mayor énfasis en lo social y está íntimamente ligado a lo económico».

Por lo mismo, desde el primer día fue más fácil hablar de apertura —un concepto más vago y, por lo mismo, más flexible— que de un plan político de contornos definidos.

Así y todo, no cabía duda de que con Jarpa el país iniciaba una nueva etapa política y en el debate nacional se empezaron a llamar las cosas por su nombre. Para referirse al PDC, por ejemplo, la prensa dejó de hablar del «ex Partido Demócrata Cristiano». Bajo su gestión, fue la primera vez que el gobierno militar reconoció a la dirigencia opositora como tal y dejó de definirla como a un simple «puñado de vendepatrias».

Jarpa es un político diestro. Su discurso cambió el tono del país. La nueva autoridad —a diferencia de la anterior, que había terminado tragada por su propia parálisis— dominaba el lenguaje de la política. Tenía respuesta para todo. Un joven periodista le

preguntó su opinión acerca del *sitting* que había organizado Gabriel Valdés en la Plaza Italia, para protestar contra el gobierno.

—Está en su derecho —fue la inmediata respuesta—. Pero que tenga cuidado, porque si se instala en medio de la calle, seguro que Carabineros le da un *washing*.

Jarpa generaba una corriente de buena voluntad. Venía a evitar el enfrentamiento, a aliviar las situaciones más angustiantes y a abrir caminos razonables de entendimiento con la oposición.

¿En qué consistía la apertura? En su vertiente política y en palabras de Jarpa, en «el encargo de avanzar rápidamente en algunas leyes políticas. Va a haber un estatuto de los partidos, registros electorales, un Tribunal Calificador de Elecciones y después se adelantará la fecha para la elección del Congreso».

En su dimensión económica, la apertura consistía en la «introducción de un cambio profundo» en las políticas en aplicación. Y en cuanto a los derechos ciudadanos, apertura equivalía a terminar con el toque de queda y los estados de excepción, a una aplicación «prudente y criteriosa» del polémico artículo 24 transitorio y, sobre todo, a poner fin al exilio.

El equipo de Jarpa —Gonzalo Eguiguren, jefe de gabinete y principal asesor político; Francisco Hernández, el popular *Gabito,* en comunicaciones; Ernesto Rendel en materias económicas; y Enrique Larre en asuntos regionales y municipales— parecía no necesitar más definiciones.

—Hazte a la idea, con Jarpa hay que aprender a tocar de oídas —me dijo *Gabito.*

La verdad es que cada vez que yo intentaba una clarificación acerca de metas, plazos, objetivos, estrategias... tenía la impresión de que el tema molestaba. El plan enfrentaba siempre reparos. Había que empujarlo contra la corriente. Siempre estaba la duda de hasta dónde Pinochet lo apoyaba. Tampoco se sabía cuál era el resto de los respaldos. Por otra parte, el propio Jarpa se mostraba ambiguo. El énfasis político que inicialmente había distinguido a la apertura era; a veces, cambiado por un énfasis económico. Siendo así, el rodaje de las instituciones quedaba de lado y lo fundamental era cambiar el equipo económico. Había

veces en que parecía que lo fundamental era intentar modificaciones en los llamados «mandos medios». Otras, en que lo clave era el Congreso, para lo cual había que aprobar pronto la ley de partidos. De un momento a otro, sin embargo, esa prioridad también se esfumaba.

Mi problema era muy simple. Dirigía un movimiento de apoyo a la apertura. ¿Cómo hacer bien mi trabajo, sin saber qué diablos estaba apoyando? Para peor, todo el mundo —y especialmente la gente de la prensa— suponía que yo mantenía un contacto estrecho con el ministro del Interior, que conocía el detalle de una planificación acuciosa y que, por cierto, estaba al tanto de todas las intrigas palaciegas. Nada más lejos de la realidad.

Para mí resultó claro desde temprano que la apertura habría que leerla en función de las acciones concretas de Jarpa, más que en el acatamiento disciplinado a un libreto.

Jarpa, en las primeras semanas, se movió rápido y en todos los frentes. Su primer paso fue abrir el diálogo con los sectores políticos y para ello, contó con la inestimable ayuda de monseñor Juan Francisco Fresno. El prelado no sólo bendijo la iniciativa, sino que prestó su casa para que se efectuara la primera reunión.

A Pinochet no le gustó mucho la idea y el PS optó por automarginarse. Para Jarpa, tal diálogo tenía un obvio punto de partida: la promulgación de la ley de partidos, para validar una interlocución cívico-militar que, al mismo tiempo, obligaría a los opositores a abandonar su estrategia desestabilizadora. El diálogo también terminaría con su reclamo de ilegitimidad de la Constitución. ¿Cómo se va a seguir denunciando como ilegítimo un ordenamiento en el cual se participa? El gobierno, a su turno, tendría que conceder espacios políticos y terminar con las restricciones a las libertades ciudadanas. ¿No era ése el esquema de otras transiciones?

El intento abortó el primer día, cuando la respuesta de la Alianza Democrática fue una trilogía para el bronce: renuncia de Pinochet, gobierno provisional y asamblea constituyente.

A su vez, en el ámbito económico, la lógica de la apertura

indicaba que había que actuar sobre el problema que había gatillado el desbarajuste: la crisis económica, agravada por serios errores de manejo interno. Había, pues, que corregir el asunto de raíz, a través de una nueva política económica.

Jarpa escogió una reunión del mítico gremio de los camioneros para expresar lo que pensaba:

—Iniciamos una nueva etapa en la conducción económica del país. Los gremios volverán a tener el significado que siempre han tenido en la vida de Chile. Una etapa de confusión, de predominio de los sectores financieros, ha terminado por voluntad del presidente de la República. No necesitamos recetas ni de universidades, ni de gobiernos, ni de partidos políticos extranjeros. Como dice Domingo Durán, ¡aquí vamos a topear con los caballos que tenemos! Y si todos topeamos *pa'l* mismo lado, ¡vamos a salir adelante!

En las oficinas de Odeplan —para Jarpa, uno de los centros neurálgicos de los errores económicos cometidos— las bromas nerviosas no se hicieron esperar.

—Pónganse a buscar «pega». ¡Jarpa quiere cambiar a Milton Friedman por Domingo Durán!

Los enemigos de la apertura

El plan Jarpa siempre tuvo enemigos poderosos.

La Alianza Democrática, un bloque que agrupaba al PDC, al Partido Radical, a la Social Democracia, al Partido Socialista y a la Derecha Republicana, vivía, a raíz del éxito de las protestas, momentos de euforia, pero de poco realismo. Sus dirigentes pensaban que el gobierno ya había caído a la lona y que el poder los aguardaba a la vuelta de la esquina. «El mérito de la oposición —dijo por esos días Edmundo Eluchans— es haber remecido el árbol; el error es querer botarlo».

Pero los enemigos también estaban en las propias filas del gobierno. Incluso dentro del gabinete.

Según Sergio Fernández, el siempre influyente ex ministro del

Interior, el plan Jarpa «representaba una modificación sustancial de la transición» y pensaba que «anularía, en gran parte, los logros renovadores del gobierno de las Fuerzas Armadas, dejándola reducida a poco más que un paréntesis de autoritarismo entre dos regímenes básicamente iguales entre sí. Los elementos fundacionales del régimen podían darse por descartados».

Hugo Rosende, el poderoso ministro de Justicia, no quería ni oír hablar de apertura. Rosende era otro adversario interno temible. En marzo de 1984, inaugurando el año lectivo en la Escuela Militar —ni la oportunidad ni el lugar eran anodinos— se esforzó por hacer ver que «cuando se votó la Constitución se aprobaron no sólo las disposiciones permanentes, sino también las transitorias, un período jurídico que no puede merecer reparo».

Su planteamiento era un rechazo político de fondo a la fisonomía de la transición planteada por Jarpa.

El titular del Interior tampoco tenía las cuentas en paz con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en quien veía a un agente de la política económica rígida y «descriteriada», que tenía al gobierno en llamas y en proceso de fulminante descapitalización política. Además, el ideario de Jarpa —adscrito a viejos moldes proteccionistas— no sintonizaba con la lógica del equipo económico.

Sin embargo, el verdadero enemigo del plan Jarpa era el propio general Pinochet, que nunca le asignó a su ministro un cometido definido de acción y lo desautorizó más de una vez: «¡Que los políticos hablen todo lo que quieran!». Lo más probable es que el general haya visto en el ministro muy poco más que un peón en el tablero de ajedrez que le permitiría ganar tiempo. Eso es lo que Pinochet necesitaba: tiempo, tiempo para que pasara la noche, porque —inevitablemente— ya vendría el amanecer.

Los partidos sin Gobierno

Uno de los efectos más nítidos de la apertura fue terminar, de hecho, con el receso político. Magullados, descabezados y desarticulados, los partidos políticos volvieron con poca brújula.

La disolución de las colectividades marxistas se había decretado casi simultáneamente con la intervención militar de 1973. En la misma ocasión fue dispuesto el receso de los partidos democráticos. Tiempo después, en 1977, se declararon legalmente disueltos todos los partidos, lo que era coherente con la misión fundacional que el régimen ya se había echado sobre los hombros: gestar una nueva institucionalidad política. Pinochet no quería un «simple paréntesis entre dos gobiernos políticos».

Sin embargo, el receso había generado una paradoja.

—Esto es el mundo al revés. La chilena es la única dictadura del mundo donde los organizados son los adversarios y no los partidarios —me dijo con agudeza un parlamentario inglés que en esa época visitó el país.

Era verdad. Los partidarios del gobierno habían acatado el receso partidista no sólo sin chistar, sino casi como una bendición. Los opositores, obviamente, lo habían rechazado siempre.

La izquierda, con enormes dificultades, había logrado mantener precariamente cuadros en el interior del país, pero el costo había sido altísimo. Los comités centrales del PC y del PS habían sido diezmados. En todo caso, producto del forzado exilio, ambos partidos tenían fuerte presencia en el extranjero y otro tanto ocurría con el MAPU, la Izquierda Cristiana e, incluso, el Partido Radical.

El PDC, por su parte, se había adecuado con dificultades a las nuevas circunstancias, pero sin perder jamás un mínimo de organización. Aylwin, Zaldívar, Tomás Reyes y Valdés se sucedieron en la presidencia. Y, lo más importante, pudo formar dirigentes nuevos y mantener, a pesar de todo, gran presencia nacional. En el PDC la cultura de partido nunca estuvo amenazada y es posible que su espíritu se haya fortalecido en las catacumbas de la disidencia. «Salvar el cuerpo y alma del partido» fue la noble tarea que se autoimpuso Aylwin después del Golpe.

Así las cosas, los partidos opositores —más fuertes o más débiles y se reconocieran o no— ahí estaban. Aguardando.

Entre los adherentes al gobierno la situación era la inversa. Los partidos no existían. Por de pronto, el único que podría haber

«subsistido» era el Partido Nacional (PN), pero éste, más papista que el Papa, se había anticipado en cuatro años a la disolución oficial.

El PN se había formado en 1966 sobre las cenizas de los partidos Liberal y Conservador, los dos grandes troncos históricos de la derecha chilena, y el aporte de grupos nacionalistas integrados a la Acción Nacional liderada por Jorge Prat. En pocos años —destacándose en la oposición a Frei y luego encabezando la resistencia a la UP— el Partido Nacional tuvo un importante crecimiento, llegando a superar el 20% de la votación en 1973.

Cualquiera habría dicho que tal partido, o al menos sus integrantes, tras el Once de Septiembre estaban, naturalmente, llamados a jugar un papel destacado. Pero nada de eso ocurrió. El PN, al autodisolverse, se anuló a sí mismo y generó impensados efectos políticos que hasta hoy perduran.

Un hondo pesimismo

¿Qué hubo detrás de la autodisolución del PN? ¿Por qué un grupo que había tenido un papel tan protagónico en la lucha contra la UP, resuelve sin más salir del escenario? El gobierno militar asumía sin ningún programa. Lo único que estaba claro era que la «vía al socialismo» estaba muerta. ¿Cómo no darse cuenta de que había que reemplazarla con algo?

Jarpa estaba a favor de una disolución inmediata y definitiva. Francisco Bulnes, al contrario, era partidario de aceptar el receso partidista, pero consideraba indispensable que la colectividad mantuviera un núcleo dirigente que, sin efectuar actividad proselitista, siguiera atento el devenir del país, ayudara al nuevo gobierno y, más adelante, orientara a la ciudadanía.

Sin embargo, prevaleció sin contrapeso la tesis de Jarpa. Varias razones influyeron en ello.

De partida, los dirigentes unánimemente consideraban que el país requería «desintoxicarse» por un tiempo de la política. Y

además estaban exhaustos. Habían abandonado sus profesiones, descuidado sus actividades y se habían sumido en un feroz combate, tomándoselo como lo que era: una lucha en que les iba la vida. Parecerá muy pedestre, pero al día siguiente del Once todos tenían que empezar a pensar cómo ganarse el sustento.

A su vez, en la mente de algunos de los más destacados dirigentes del PN, se había venido gestando un gran escepticismo hacia la viabilidad de la democracia. ¿Qué lo motivaba?

En primer lugar, los partidos Conservador y Liberal no habían podido evitar la declinación electoral, ni habían sido capaces de articular un programa político que respondiera a la incontenible necesidad de cambio del país. Tenían muchos problemas para desempeñarse con éxito en una democracia —antes electoralmente restringida— que se había masificado bruscamente. Para peor, mientras la izquierda y el centro fortalecían sus partidos, los de derecha languidecían y ya eran presa del «virus» independentista.

En ese trayecto descendente, la derecha había perdido una aliada poderosa: ni más ni menos que la propia Iglesia Católica, que había transitado desde las posiciones más conservadoras, hacia una clara identificación con la Democracia Cristiana, e incluso, con corrientes más hacia la izquierda. Eran los años de los «Cristianos por el Socialismo».

Además, había un «bloqueo» casi imposible de romper para la derecha. Un verdadero círculo vicioso: Chile era un país desarrollado en lo político –que permitía la expresión de todos los sectores— y subdesarrollado en lo económico. En ese cuadro, la pobreza nutría electoralmente a los partidos de centro y de izquierda, y condenaba a la derecha a ser minoría.

—Estoy convencido de que la creación de una sociedad libre sólo se puede hacer sin Congreso y sin partidos —diría años más tarde el primer presidente del PN, Víctor García Garzena.

En parte por todo lo anterior, desde fines de los años cuarenta la derecha no lograba adhesión ciudadana suficiente, ni era capaz de conformar alianzas para disputar la presidencia de la Republica con éxito. El triunfo de Alessandri en 1958 se logró con

un escuálido 31% de la votación y se debió a la fragmentación del campo político en cinco candidaturas y a un golpe de suerte: la candidatura del famoso *Cura de Catapilco* que le arrebató a Allende 40 mil votos... los mismos que le faltaron para superar a Alessandri.

Sin embargo, el gobierno de Alessandri fue la tumba para la derecha. En la elección de 1964, apoyó incondicionalmente a Frei para frenar a Allende, abandonando al radical Julio Durán y, lo que es mucho más grave, abandonando su propia identidad. Y todavía peor, en la elección parlamentaria de 1965, virtualmente fue borrada del mapa: apenas rasguñó 11 diputados de 150.

—A mí me dejaron botado en la forma más vil —me dijo alguna vez el propio Julio Durán, en el restaurante La Mansión de la Novia—. Me hallaban roto, mal hablado y mis corbatas les parecían del peor gusto. Pero eso no era tan grave sino que, por miedo, terminaron además, de rodillas frente a los democratacristianos. Doble traición.

Nunca olvidé el comentario, porque acto seguido, me dio uno de los mejores consejos políticos de mi vida:

—Además yo me confié. ¡Era candidato presidencial! Pero —insistió en tono de confidente— el liderazgo no es como la propiedad que se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces. Hay que ganárselo todos los días. No se olvide usted que es joven y que puede llegar lejos.

Mucho más grave que todo lo anterior, a los ojos de la derecha, fue que durante el gobierno de Frei la democracia perdiera uno de sus elementos esenciales: el respeto por los derechos de las minorías. La traumática reforma agraria —un despojo generalizado— provocó ese efecto y generó consecuencias políticas mucho más profundas que las meramente patrimoniales. La arbitraria supresión del derecho de propiedad fue una señal del mal derrotero a que se encaminaba la democracia.

También influía en el pesimismo de la derecha el clima ideológico. La izquierda parecía montada en el caballo de la historia y el PDC era atraído magnéticamente por la ilusión socialista.

«Los datos demuestran de un modo palmario el agotamiento final del sistema capitalista. La meta suprema de este programa es la sustitución de la minoría por el pueblo organizado en los centros decisivos de poder e influencia que existen dentro del estado, la sociedad y la economía nacionales».

¿Citas del programa de la UP? Nada de eso. ¡Programa presidencial de Tomic de 1970! A partir de esas definiciones nadie podía extrañarse de que en 1972, apenas un año antes del Golpe, el PDC chileno haya adoptado como su planteamiento doctrinario oficial el «socialismo comunitario».

Aunque todo este conjunto de factores provocaba aprensiones, no fueron suficientes para generar el hondo pesimismo que sobrevendría sobre el futuro de la democracia. Éste sólo apareció cuando la izquierda, cada vez en forma más abierta, empezó a renegar de la democracia, a legitimar la violencia y propiciar la vía armada.Todo empezó cuando la izquierda transformó a los adversarios políticos en enemigos que había que aplastar, y se embriagó con la lucha de clases como motor de la historia.

Esa gota colmó el vaso de la derecha. ¿Por qué, hacia 1973, la derecha habría de sentir adhesión fervorosa por un sistema percibido como inepto para hacer progresar al país, crecientemente incapaz de defender derechos básicos, dominado por un clima de agresiva hostilidad en su contra y que engendraba poderosas fuerzas que no disimulaban su propósito de abolir, a la primera de cambio, la propia democracia?

La derecha puede tener muchos defectos, pero nunca ha sido masoquista.

El hecho histórico macizo es que antes de que la derecha se desilusionara de la democracia, la izquierda ya había desertado de ella.Y entremedio, el centro había demostrado ser sólo un dique de papel frente a una izquierda que había abrazado el dogma totalitario y la pasión revolucionaria.

La delgada línea gris

Al escepticismo que sobrevolaba a la derecha sobre el futuro de la democracia, se sumó un factor que la hizo volver la cabeza hacia las Fuerzas Armadas como actor político: la Guerra Fría, que introdujo en la política chilena la intervención extranjera.

Una cosa era lidiar con los adversarios de siempre; otra muy distinta que éstos se identificaran con los propósitos expansionistas de una potencia extranjera. La injerencia cierta de la Unión Soviética y la admiración que la izquierda en pleno dispensaba a Cuba eran amenazas ya no sólo a la democracia, sino a la Patria misma. Y así lo sintió la derecha.

Todo ello fue confluyendo para que la derecha asumiera que se requería un régimen político en el que las instituciones armadas jugaran un rol muy distinto al del pasado. Frente a enemigos de ese calibre, la última línea de defensa —las Fuerzas Armadas— debería asumir posiciones más de avanzada.

Allí mismo, surgió con inusitada fuerza la idea del agotamiento prematuro de la democracia. Si la democracia chilena —elogiada durante décadas— había sucumbido, era porque como sistema no servía en países como el nuestro.

—Hay que hacer un esfuerzo mental, abandonar los moldes caducos de la democracia liberal y pensar en un estado nuevo. Los partidos políticos no tiene lugar en la nueva institucionalidad. Elegir al presidente de la República por sufragio universal se volvería a prestar para una feria de demagogia y de dinero —declaraba Jarpa en abril de 1978.

Si el futuro esquema institucional funcionaría sin partidos o coexistiendo éstos con «las organizaciones intermedias», entonces, en la visión de Jarpa, no era tan grave haber disuelto el PN. Era sólo anticiparse a lo que vendría después.

Durante casi diez años en que la derecha resolvió no agruparse como partido político, se negó a sí misma como protagonista del acontecer del país. Y al hacerlo, delegó en las Fuerzas Armadas gobernantes la totalidad de su soberanía política. Aceptó pasivamente ser reemplazada, interpretada, dirigida y

disciplinada por el gobierno militar. Entre ella y el gobierno, más que una relación de apoyo, fueron surgiendo lazos más bien de mando y obediencia. Algunos dirán que es explicable: las Fuerzas Armadas habían salvado al país, eliminado la amenaza comunista, impuesto el orden que el país reclamaba a gritos y, además, impulsando un proyecto económico social que identificaba en plenitud a la derecha. ¿Qué más podía necesitar? ¿Qué tan grave era omitirse, si quienes tenían el poder eran los mejores traductores del propio pensamiento?

El problema de tal delegación es que adoptó la forma de un mandato. Y las Fuerzas Armadas y, particularmente Pinochet, estimaron que tenía dos características: ser irrevocable e indefinido.

El gobierno sin partidos

A las decisiones del receso y posterior disolución de las colectividades políticas, el gobierno agregó la negativa a formar una agrupación de apoyo a su gestión.

El hecho es revelador de una de las singularidades del régimen militar chileno. Habitualmente, los gobiernos autoritarios funcionan con modelos de partido único, los cuales, a medida que se abren espacios públicos, conviven con partidos opositores que son, a la vez, tolerados y controlados. El régimen militar chileno impulsó un nuevo esquema. Su columna vertebral fueron las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército.

Lo notable fue que los miembros de las Fuerzas Armadas que ocuparon cargos públicos, en general, no se «contaminaron» políticamente. Los miembros de las Fuerzas Armadas trajeron en su mochila un conjunto de valores escasos en el mundo político: cohesión institucional, organización eficaz, disciplina a toda prueba, fuerte mística y, sobre todo, no deliberación. Ello impidió el relajamiento de la disciplina, la generación de controversias internas, el surgimiento de ambiciones personales, las distorsiones en la carrera profesional y el divisionismo político de

efectos disolventes en las estructuras de mando. Nada de esto ocurrió en Chile. Los militares eran la base de sustentación del gobierno, pero lo fueron desde la verticalidad del mando. ¡Innegable mérito del Ejército y del propio Pinochet!

Además, los uniformados que ejercieron tareas públicas lo hicieron con gran dedicación y —pese a toda la leyenda negra que urdió la oposición de entonces— con altos grados de competencia y capacidad. Algunos pensaron que el «motor» de esa mística sólo había sido el anticomunismo, que en más de un momento parecía la religión oficial del régimen, pero bastaba conocer un poco la historia de marginalidad y desprecio de la civilidad que arrastraron los militares durante décadas, para entender que, enfrentados al desafío de gobernar, lo iban asumir como un desahogo para el «sordo rencor» que se incubaba en los cuarteles contra los «señores políticos».

Por otro lado, abundan razones para explicar la desconfianza del régimen en el establecimiento de canales formales de apoyo ciudadano. Una de ellos radica en que los militares se consideraban a sí mismos expresión natural de la «unidad nacional» y siempre han tenido una visión deformada de los partidos al considerarlos «factores de división».

Pero mi impresión es que la razón más importante es que los movimientos de esta índole terminan, inevitablemente, transformándose en actores políticos insoslayables y compartiendo cuotas de poder, mezquinas o generosas según el caso. Algo que, por cierto, contrariaba la matriz del monopolio exclusivo y excluyente del poder.

Para un régimen como el de Pinochet, el hecho de no tener partido o movimiento de apoyo tuvo ventajas, pero también inconvenientes. El más evidente es que la situación se vuelve desequilibrada cuando son los adversarios quienes, de hecho, se organizan y no los partidarios. De ahí la necesidad que sentía el régimen de prolongar tanto como pudiera el receso partidista.

Desde otra perspectiva: ¿cómo enfrenta un gobierno los desafíos electorales sin un partido o movimiento? No había respuesta, salvo que se repitiese el esquema de 1980, cuando el gobierno

y las Fuerzas Armadas actuaron de lleno en la contingencia política-electoral.

Todo lo anterior no significa, por cierto, que no existiera apoyo político al gobierno militar. Existió, y muy importante, desde el primer día. Pero fue inorgánico y unilateral.

La derecha ausente

Como en la política, al igual que en la física, el vacío no existe, ante la abstención de la derecha surgieron dos corrientes: los gremialistas y los nacionalistas. Tales polos, liderados por Jaime Guzmán y Pablo Rodríguez, sólo coincidían en dos cosas: su incondicionalidad a Pinochet y su rechazo a la derecha.

En 1982 surgió Avanzada Nacional, un movimiento de signo populista con inequívoco apoyo oficial, al que Pinochet comparó con «una semilla que, espero, siga germinando y vaya cubriendo con un manto de nacionalismo la patria, para salvarla de cualquier emergencia». Al año siguiente habló de «una mancha de aceite que, espero, siga creciendo a través del país». Era, además, un secreto a voces que había lazos fuertes entre Avanzada Nacional y la CNI, lo que a mí me parecía repulsivo. De hecho, Álvaro Corbalán, su jefe de operaciones y oficial en servicio activo, actuaba desenfadadamente como organizador del movimiento.

Sin existencia orgánica, la derecha derivó hacia una fuerte dependencia política. Sin liderazgos propios, la única luz que la alumbraba era la que provenía del gobierno.

Por otro lado, no deja de ser curioso lo ocurrido con los líderes del antiguo PN. Algunos estaban dentro del gobierno, pero «fuera». Y no era un juego de palabras. Jarpa fue embajador primero en Colombia y luego en Argentina; Sergio Diez, ante Naciones Unidas; Francisco Bulnes, en Perú; y Héctor Riesle, en la Santa Sede.

Es cierto que no faltaron los nacionales que se integraron al equipo económico. El propio Carlos Cáceres y Pablo Baraona

habían sido del PN, pero entraron al gobierno al margen de su antigua militancia. Y, en fin, si bien numerosos dirigentes regionales desempeñaron alcaldías o cargos menores, el camino hacia la efectiva influencia en las decisiones del régimen siempre les estuvo vedado. La autodisolución contribuyó significativamente a ello, pero también ayudó que tenían un pecado irredimible: eran «políticos».

La UDI gana «el quién vive»

Los primeros intentos de reorganizar a la derecha se remontan a principios de 1983. En abril de ese año, un grupo de ex parlamentarios del PN, encabezado por Francisco Bulnes, se reunió para intercambiar ideas acerca del futuro. La iniciativa se hundió en los terrenos de una discusión pantanosa: ¿revivir el antiguo partido o formar una nueva tienda política?

Más adelante, funcionó brevemente el llamado Comité de Acción Cívica, formado por los ex senadores Sergio Diez y Fernando Ochagavía y los ex diputados Juan Luis Ossa, Gustavo Alessandri y Mario Ríos. El propósito que los reunió fue explorar la formación de un nuevo partido que cobijara a todos «quienes compartían las inspiraciones fundamentales del gobierno de las Fuerzas Armadas». El grupo realizó reuniones de trabajo con los dirigentes gremialistas, demócrataradicales, demócratacristianos disidentes (que entonces adoptaron la denominación, nada novedosa, de Movimiento Social Cristiano) e incluso con grupos nacionalistas.

En medio de tales conversaciones, a fines de septiembre y en forma intempestiva —ya que quienes llevaban adelante esa gestión nunca fueron informados—, surgió la Unión Demócrata Independiente. La encabezaba un comité directivo integrado por Sergio Fernández, Jaime Guzmán, Guillermo Elton, Javier Leturia, Luis Cordero y Pablo Longueira. El antiguo gremialismo, tan refractario a la idea de los partidos, se convertía para sorpresa de muchos, en otro partido político más y, no sólo eso, en el primero, ganándole «el quién vive» a todos.

En su declaración de principios la mano de Guzmán se podía reconocer en cada línea. Las ideas centrales eran apoyo cerrado al gobierno de las Fuerzas Armadas, adhesión al régimen político previsto en la Constitución de 1980 como asunto «prioritario» y respaldo a «un sistema económico libre».

En nada de esto había mucha novedad y, en términos contingentes, sólo dos aspectos eran reveladores.

El primero, era la intención de captar principalmente a quienes no habían tenido militancia hasta 1973. Allí se entregaba una clara señal de identidad: no había mayor interés en unirse a los «políticos tradicionales» pre-73, pese a las palabras de buena crianza en orden a confluir, más adelante, en un partido. La declaración, adicionalmente, dedicaba largos párrafos a la necesidad de forjar «un nuevo estilo de hacer política».

A mí no me extrañó tal enfoque. Tenía grabada en la mente un reportaje de la revista *Qué Pasa,* dedicado a la derecha, realizado a fines de 1978. Allí desfilaba toda la fauna derechista. Cuando la revista quiso conocer el pensamiento de Jaime Guzmán, la respuesta fue elocuente: «No me siento parte de ese conglomerado que se llama la 'derecha política chilena', con cuyos integrantes sólo he compartido el apoyo a la candidatura de Jorge Alessandri. El resto de mi vida política la he desarrollado como gremialista y como independiente, por lo que me considero ajeno al reportaje para el cual se me pide una opinión».

El segundo aspecto de interés era la fuerte argumentación a favor de «la instalación de un Congreso Nacional antes de la fecha constitucionalmente prevista, uno más de los aspectos que propuso don Jorge Alessandri en 1980», admitiendo así la insuficiencia del diseño de transición vigente y sumándose al planteamiento de Jarpa, aunque éste siempre tuvo en mente un Congreso elegido.

En todo caso, lo que no quedaba claro, era por qué Sergio Fernández —el primer vocero de la UDI— respaldaba con tanta energía la fórmula que él mismo había suprimido en la última etapa previa a la aprobación de la Constitución.

HORA DE GRUPÚSCULOS

El nacimiento de la UDI, desató una dinámica compulsiva de reafirmación de la identidad en todos los pequeños grupos en que se subdividía la centroderecha. Hubo episodios muy curiosos: Silvia Alessandri, Carmen Sáenz de Phillips y Alicia Ruiz-Tagle de Ochagavía dieron por reconstituido de hecho el PN. «Capillas podrá haber muchas, pero catedral hay una sola».

La misma lógica alcanzó a otros grupos, cada cual con sus propias razones y pretextos. La Democracia Radical, añorando participar en la reconstitución del viejo árbol radical; los socialcristianos, aduciendo que la convocatoria al PDC era más fácil desde una tienda propia; los diversos grupos nacionalistas, invocando que había llegado el momento de desplegar su ideario.

Cada día surgía un nuevo grupo. Como dijo un periodista, robándose una expresión de la transición española, la apertura era una «sopa de letras». Todos los grupos rivalizaban entre sí, intentando que las siglas de sus denominaciones prevalecieran en la opinión pública.

Dos ingredientes adicionales contribuyeron a la «inflación» partidista. El retorno de los «políticos» era novedad y se requerían sus opiniones sobre los más variados temas. La fama y el reconocimiento político parecían al alcance de cualquiera. Como dijo Jorge Alessandri, «la apertura ha provocado la proliferación de toda clase de grupos y grupúsculos y que personas sin significado alguno en la vida nacional, aparezcan ahora con la clara intención de encauzarla». A su juicio, «¡un espectáculo lamentable!».

El segundo ingrediente de la fragmentación fue la idea de nominar un Congreso Designado. Era natural que esa perspectiva abriese toda clase de apetitos. Si había designación, habría cuoteo y eso, por mucho que no sonara bien, podía ser muy agradable.

En medio de esta efervescencia, quienes estabamos detrás del MUN, no nos dejamos llevar por el entusiasmo. Las miles de firmas recogidas daban cuenta de una apreciable convocatoria, pero era forzar la mano hacer de ellas el pedestal de un partido.

Siempre barajamos la idea de armar un partido más amplio que el antiguo PN, que agrupara a todas las fuerzas de centro-derecha. Por lo mismo, fuimos receptivos a las innumerables gestiones unitarias que se realizaron. A poco andar, sin embargo, quedó claro que no habría unidad posible con el grupo que se había apropiado del nombre del PN. La UDI, por su parte, ya estaba formada y era una realidad política indesmentible. El resto, a su turno, había levantado sus propias banderas.

El asunto estaba claro. Había que desmarcarse de la sopa de letras. La etapa del MUN —corta, intensa, prolífica— estaba terminada.

La Unión Nacional

A fines de noviembre de 1983, dos meses después del nacimiento de la UDI, fundamos la Unión Nacional.

El camino iba a ser largo. No habría unidad a corto plazo y, más que eso, la existencia de un grupo que se apoyaba en el nombre del Partido Nacional sería un elemento de confusión. En la primera etapa tendríamos el desafío de generar una fuerza con dos ideas que parecían contrapuestas: conseguir que la UN fuera el lugar natural para la derecha tradicional, la misma que había militado en las filas del PN y se había probado en la lucha contra Allende y, al mismo tiempo, lograr erigirnos en un espacio de convergencia para gente sin ese pasado.

Mi idea era un partido programático, abierto, donde pudieran confluir distintas vertientes. Además, estaba seguro de que los partidos antiguos no iban a lograr mayor adhesión que en el pasado. Todo lo contrario: los veía con muy poco magnetismo para atraer a nuevos sectores ciudadanos.

En nuestras conversaciones previas a la formación de la Unión Nacional quedó en claro que teníamos que tratar de innovar en la forma de constituir el partido. Queríamos formar un partido «de abajo hacia arriba», con flexibilidad y márgenes lo más abiertos posibles. Además, la primera tarea debía ser incorporar a la

mayor cantidad de figuras representativas del antiguo PN, pues a diferencia de la UDI nunca abjuramos de la derecha tradicional.

La comisión organizadora reflejaba los criterios antes expuestos. Sus doce miembros (Gustavo Alessandri, Amelia Allende, Carlos Caminondo, Alberto Espina, Luis Valentín Ferrada, Sergio Gamboa, Félix Viveros, Fernando Maturana, Juan Luis Ossa, Carlos Reymond, Jaime Torrealba y yo) éramos una buena mezcla, tanto de dirigentes del viejo partido,como de sectores independientes, líderes de movimientos regionales y jóvenes.

En nuestra declaración inicial no sobraba ni faltaba ninguna palabra. El punto de partida era la necesidad de participar activamente en la nueva etapa del país, formando un «nuevo y gran movimiento político unitario, democrático, amplio y renovador». Propiciábamos «como régimen político, una democracia representativa, que recoja nuestras tradiciones y experiencias, respetuosa de los derechos de las personas, libre de totalitarismos, ajena a las presiones externas y depurada de los vicios que perturbaron la vida política en el pasado».

En el ámbito económico-social, adheríamos a la economía de mercado, a la libertad económica y a la propiedad privada; abogábamos por «iguales oportunidades básicas para todos» y «la necesaria presencia, fiscalizadora, normativa y subsidiaria del Estado».

Valorizábamos «la tarea histórica» del gobierno militar y nos comprometíamos «desde una posición de independencia» a apoyar una transición pacífica y sostenida hacia la plena democracia. Aquello de «independencia» fue la única palabra que no cayó bien en el Ministerio del Interior. Obvio. Y fue el sello distintivo de la UN, el que rompió el esquema conforme al cual los movimientos políticos se encasillaban rígidamente en la beligerancia opositora o en la incondicionalidad sumisa exigida a los partidarios.

Con esos planteamientos, iniciamos un intenso plan de giras por todo el país, tomando contacto con antiguos dirigentes e invitando, formalmente, a los movimientos locales a integrarse a la Unión Nacional.

Después del verano de 1984, durante el cual trabajamos intensamente, el balance entre la Unión Nacional y el grupo que aspiraba a revivir el PN era ampliamente favorable para nosotros. La mayoría de los ex parlamentarios estaba incorporada, teníamos comisiones organizadoras funcionando en cada ciudad importante y la integración de los movimientos locales había sido un éxito. Paralelamente, la acción política desplegada por el «nuevo» PN se desdibujaba al desplazarse hacia la oposición. Para nuestra gente, lo más lejos era la «independencia» respecto del gobierno militar. Ni un paso más allá.

Don Pedro

En abril de 1984, recibimos un refuerzo contundente: don Pedro Ibáñez ingresó a Unión Nacional.

Había conocido a don Pedro en el período anterior a 1973, muy a la pasada. Tenía, como toda la gente del PN, un gran respeto por él. Además de ser quizás el único chileno que hablaba de libertad económica y de libre mercado en tiempos que hasta la gente de derecha tenía desviaciones intervencionistas, a don Pedro se le conocía por ser el mentor de la mejor organización del partido. Su zona, Valparaíso y Aconcagua, era el ejemplo a imitar. Su hoja de vida en el partido acumulaba proezas políticas y electorales. La última había sido sacar en la elección de 1973 más diputados en Valparaíso que el PDC… con menos votos, gracias a una férrea disciplina y a una estratégica división de territorios entre candidatos.

Desde los comienzos de la Unión Nacional me entendí a la perfección con don Pedro, un hombre simplemente excepcional: empresario exitoso, político de fuste, artífice de una prestigiosa universidad, aficionado al cultivo de rosas, frustrado concertista en piano, arquitecto de vocación, guía experto de cada rincón de Valparaíso y agricultor enamorado de Aconcagua. A los pocos meses casi «vivía» en su departamento-oficina de Avenida Providencia al llegar a Salvador. Allí, junto a su fiel y diligente

secretaria, Ximena Jáuregui, y dos empleadas —Carmen y Eliana— que lo atendían con gran cariño, en cosa de días pasé de «don Andrés» a «Andresito».

La política más que estudiarse, se vive. Se aprende oyendo. Se transmite. Las interminables conversaciones con don Pedro —noctámbulo empedernido— están entre las mejores y más formadoras experiencias de mi vida. No eran fáciles ni dóciles. Y si bien teníamos muchos puntos de acuerdo, también teníamos diferencias. Yo admiraba la democracia norteamericana y él —gran hincha del sistema político inglés— tenía una pésima impresión de aquélla. Según él, yo profesaba un optimismo exagerado en la democracia como sistema político en general.

—Es como la juventud. Se pasa con el tiempo —me decía.

Cuando yo lo punzeteaba por sus opiniones fuertemente críticas de la democracia, su respuesta lo retrataba bien:

—¡Hombre! Yo creí que era posible otro régimen político. Esa posibilidad se frustró y yo voy a respetar siempre las reglas... a diferencia de muchos que lo hacen sólo cuando les conviene.

Don Pedro transmitía un conjunto de valores indispensables para la política. El sentido de equipo, la importancia asignada a la organización, la formación de los jóvenes y un sentido natural de liderazgo: «Nunca le tenga miedo, Andrés, a defender sus ideas. Y nunca le importe tampoco quedarse solo».

Otro aspecto notable era su idea de separar el mundo político del mundo empresarial, proviniendo él claramente del segundo. Su enfoque era certero: los hombres de empresa debían obligatoriamente interesarse en los asuntos públicos, pero jamás aprovecharse de esa cercanía.

—El estatismo es malo —solía recordar— por las tropelías que en su nombre urden los socialistas, pero es aún peor por la manera en que aprovechan de él los malos empresarios.

Cuando en abril de 1984, don Pedro resolvió incorporarse a la UN, lo hizo a su manera: revivió al PN de su región y acto seguido lo «fusionó» con nosotros. Todo en una semana.

A la vuelta de Valparaíso, después del acto público que formalizó el ingreso, le mencioné el punto a Fernando Maturana,

ex diputado y ex vicepresidente del Partido Liberal y del Nacional, con quien, codo a codo, formábamos la nueva colectividad.

—¿Se fijó, don Fernando, que ellos no se «integraron» como los demás movimientos, sino que se «fusionaron» con nosotros —le comenté.

—Por supuesto —me dijo, sonriendo y quitándole toda importancia—. Y ahora estoy más optimista que nunca con este partido. La flota acaba de registrar su primer transatlántico.

A las pocas semanas, creo que fue Alberto Espina quien le endilgó el sobrenombre cariñoso que en adelante todos usaríamos: «tío Peter».

Don Pancho

El 17 y 18 de agosto de 1984 convocamos al primer consejo general en Valparaíso. En la oportunidad se designó la primera directiva, presidida por mí e integrada por los ex diputados Fernando Maturana, Gustavo Alessandri y Gonzalo Yussef como vicepresidentes. La secretaría general quedó en manos de Renato Sepúlveda y la tesorería, la asumió Alfredo Alcaíno B. Alberto Espina fue electo presidente de la juventud.

En la oportunidad se adoptó una resolución política que argumentaba con fuerza sobre nuestro propósito de contribuir «a atenuar desde ya situaciones inconvenientes, propias de los gobiernos militares en general, y del caso chileno en particular». Tales inconvenientes eran la «falsa sensación de seguridad que proviene del poder militar y el vacío político que generan los gobiernos autoritarios», cuya amplitud y gravedad sólo se constata al término de tales regímenes, «cuando se advierte que la sociedad carece de ideas y proyectos políticos, de civiles preparados para sucederlos y de organizaciones capaces de tomar sobre sí la responsabilidad del gobierno». También había una fuerte crítica a la voracidad e irresponsabilidad de algunos grupos empresariales: «El abuso de las libertades económicas debilita todo el sistema fundado en ellas y puede volcarlo en sentido opuesto».

Sin embargo, como tantas veces ocurre en estas jornadas políticas, lo más importante no fueron las resoluciones formales, sino la intervención de Francisco Bulnes.

Bulnes destacó nuestra disposición siempre favorable a la unidad e insistió en la idea de un «gran partido que pueda tener distintas alas, pero que sea capaz de interpretar y representar a ese conglomerado que hay en Chile de derecha y centroderecha».

Su intervención incluyó importantes temas políticos: la necesidad de legalizar los partidos, tener en un plazo prudente un Parlamento funcionado e impulsar una verdadera transición.

A todos aquellos aún indecisos respecto de dónde militar, les recomendó ingresar a Unión Nacional, aclarando que él aún no lo hacía sólo por estar desempeñando tareas en el Consejo de Estado.

La intervención de Bulnes —un hombre de enorme prestigio político y gran respetabilidad democrática— nos entregó el mejor apoyo para la tarea que teníamos por delante. Aunque la odiosa disputa por la representación de la derecha aún subsistiría por un tiempo, y aunque el nombre del partido no estaba con nosotros, sí habíamos conseguido la legitimidad histórica.

—Ha sido un paso muy importante —me dijo el siempre sagaz Fernando Maturana—. La gente razona en simple. Si la derecha no está donde está Bulnes, Ibáñez, Victor García, Ossa, yo mismo y desde luego tú, ¿entonces dónde está? Además, todos ven a Jarpa detrás.

Fue un gran espaldarazo. Don Pancho cumpliría su promesa al año siguiente, en agosto de 1985, y la flota del partido registraría su segundo transatlántico.

Los equipos humanos que se armaron en la Unión Nacional fueron un modelo de convivencia y afinidad. Como todo partido, no fue una taza de leche, pero nos respetábamos, nos queríamos, y lo pasábamos bien. Estábamos todos en el mismo barco y —un aspecto no menor— remando para el mismo lado. Después, serían muchas las oportunidades en que, viviendo momentos muy negros en Renovación Nacional, miraríamos los días de la Unión Nacional con nostalgia.

Una indisimulada nostalgia.

Capítulo III

Naufragio en la Junta

El fracaso del diálogo fue el primer traspié para el plan de Jarpa. Sin embargo, fue un revés relativo, puesto que el mayor costo lo pagaron los partidos opositores. Jarpa había abierto una posibilidad; la Alianza Democrática había hecho exigencias desmesuradas y carentes de todo realismo político.

En este contexto, la respuesta de Jarpa fue que su plan de todas maneras seguiría adelante.

—Ningún gobierno supedita sus planes al gusto de la oposición —afirmó a la prensa. Lógico: más aún si era de un gobierno autoritario.

La oposición cometió un error de proporciones al confundir el desprestigio con la agonía, y suponer que el gobierno militar iba a traspasarle mansamente el poder como el bastón en una carrera de postas. Todo político —y los de la Alianza Democrática lo eran de tomo y lomo— debe saber que el poder, más que merecerlo, hay que conquistarlo.

En cualquier caso, la falta de realismo de la Alianza Democrática disimuló otro elemento: la fragilidad de la adhesión del propio Pinochet al plan de su ministro del Interior. Había que hurgar demasiado en sus discursos —con detectores semánticos— para encontrar algo medianamente parecido a un compromiso presidencial. Las palabras más próximas eran de septiembre de 1983: «El gobierno considera la posible realización en el futuro

de un plebiscito para consultar a la ciudadanía sobre eventuales modificaciones constitucionales respecto del sistema legislativo».

Eso era todo. Una forma bastante hermética de aludir a lo que podía ser algo así como un Congreso anticipado. Era ciertamente tibio. Incluso vago. Pero igualmente en el Ministerio del Interior se afirmaba que «allí estaba el compromiso del presidente».

Había declaraciones menos crípticas del mandatario, que tampoco eran precisamente diáfanas:

—Se ha iniciado un estudio de las llamadas leyes políticas. El gobierno ha autorizado a los medios de expresión a decir lo suficiente, no más. Tiene que ser una cosa como en la logística: poco a poco. Y aquí podemos ver, señores, cómo es este país. Todos quieren tener su partidito, chico, grande, mediano. Entonces, ley de partidos políticos, registros electorales, ley de elecciones. Ahí se podrá llamar a plebiscito para decir: ¿quieren ustedes Congreso? Y a lo mejor la ciudadania dice ¡No! Y ahí se quedan con las ganas.

Al inicio de 1984, transitando sigilosamente por los círculos más endógenos del régimen militar, Jarpa intentó plasmar su plan político: logró que el general Pinochet enviara a la Junta de Gobierno un proyecto de reforma constitucional para adelantar la instalación del Congreso.

Sin embargo, por una razón hasta hoy indescifrable, a tal reforma se le introdujo un agregado insólito: una facultad presidencial para llamar a consultas destinadas a aprobar las leyes políticas. Nadie pudo explicar este dispositivo. Si se iba a adelantar la instalación del Congreso, ¿para qué, entonces, darle facultades legislativas al presidente? Por por otro lado, ¿acaso se pretendía marginar a la Junta del proceso legislativo previo a la referida instalación anticipada del Congreso? Absurdo. Ya era difícil sortear que la Junta se desprendiese de las facultades que le permitían participar en la institucionalidad del régimen. ¿Qué sentido tenía hacer las cosas más cuesta arriba?

Nadie pudo explicarlo.

Ocurrió entonces lo que tenía que ocurrir. El proyecto naufragó sin remedio en la Junta de Gobierno.

La especulación sobre las razones del fracaso abundaron.

Quizás las cosas fueron más simples y terminó primando la filosofía «de patota» popularizada por el almirante Merino:

—Llegamos juntos y nos vamos juntos.

Interludio populista

Con todo, la derrota de Jarpa en el plano político obtuvo a cambio una compensación. En el mismo momento que naufragaba la reforma en los pliegues del proceso legislativo de la Junta, Pinochet, teniendo seguramente a la vista una economía que no repuntaba, un clima de agitación en las calles que no decaía y la insistencia de Jarpa en cuanto a que era imperativo cambiar la conducción económica, reemplazó a Carlos Cáceres. Por varios años Jarpa y Cáceres no se hablaron.

En abril de 1984 entró a tallar la dupla Luis Escobar Cerda-Modesto Collados, nuevos conductores de la economía, bajo la inspiración directa de Jarpa.

Otra compensación no pasó de ser un modesto caramelo: clausurada la posibilidad del Congreso anticipado, el gobierno aceptó impulsar un Consejo Económico Social como canal de participación ciudadana. Se trataba claramente de una ironía, si se tiene en cuenta que todos sus integrantes eran designados nominativamente por el gobierno.

En esas condiciones, la apertura cambió de prioridades y objetivos. El énfasis se volcó al área económica, pero las propuestas en ese ámbito dejaron mucho que desear. Jarpa, al principio, había simplificado y hasta cierto punto ironizado con el sentido de la rectificación buscada.

—¿Cuál es la diferencia entre el nuevo y viejo equipo? —se le preguntó.

—Se trata sólo de problemas de mentalidades. Los que somos gásfiteres queremos hacer las cosas rápido, ir a lo práctico —fue una de sus respuestas.

Pero en realidad no era así. Se trataba de bastante más que de un problema de velocidad. La propuesta del nuevo equipo

implicaba, en rigor, entrar a otro modelo de desarrollo, pasando de la economía social de mercado a un esquema de cuño intervencionista. Escobar partió induciendo una política fiscal expansiva para financiar obras públicas. Después procedió a cerrar la economía elevando los aranceles a 35% e impuso sobretasas a más de 240 productos. También estableció nuevos subsidios. Y, para peor, las medidas evidenciaban falta de coherencia global. La verdad es que la dupla Collados-Escobar nunca funcionó.

El mundo empresarial se inquietó y cundió la incertidumbre en todos los sectores. Los dirigentes empresariales levantaron su voz. *Economía y Sociedad*, la influyente publicación dirigida por José Piñera, planteó una crítica demoledora: la nueva orientación económica tenía un mal diagnóstico de las causas de la crisis, adoptaba un estilo de retórica populista y las soluciones a las que recurría —intervencionismo, proteccionismo y negociaciones con grupos de interés— eran una vuelta al pasado.

La respuesta de Escobar no se dejó esperar:

—Piñera tiene complejo de presidente o, por lo menos, de ministro de Hacienda. Yo le recomendaría que se espere. ¿Qué edad tiene Piñera? Menos de 40. Yo ya tengo 57. Él tendrá oportunidad de salvar al país después.

Resumen: el país iba por mal camino. Años más tarde el propio Boeninger describió el trance con todas sus letras: un «interludio populista».

La crisis hizo emerger en el mundo de la derecha una preocupación —si se quiere en forma incipiente— hasta entonces ignorada: la importancia de la política.

Hasta esa fecha vastos sectores, especialmente del empresariado, se habían alcanzado a ilusionar con un mundo perfecto... sin política, sin elecciones, sin contradicciones, sin demasiados debates y con un gobierno que no sólo imponía orden, sino que además, impulsaba políticas económicas correctas y bien inspiradas. Así las cosas, ¿qué tan importante era la democracia?, ¿qué tan necesario era el debate de los asuntos públicos?, ¿por qué no seguir así por mucho, mucho tiempo?

Esa visión se resquebrajó cuando los que la apoyaban advirtieron su indefensión frente a medidas equivocadas y políticas públicas erróneas. Aceptar un régimen autoritario que hace lo que uno cree que debe hacerse no cuesta demasiado. Pero, ¿qué pasa cuando ese régimen equivoca el rumbo y no hay forma de hacerlo rectificar?

Yo tenía la impresión —más bien la esperanza— de que la crítica situación del país iba a tener un subproducto: aumentar la convicción de que a la larga, incluso para hacer negocios, la democracia es insustituible y superior a las formas autoritarias.

De la apertura a la cerradura

Los problemas surgían de todos lados. En Unión Nacional empezábamos a reclamar del gobierno una clarificación del sentido de la apertura. Para ello, insistíamos en que era necesario fijar un itinerario institucional para la transición.

Como nada de eso ocurría, en marzo fijamos el nuestro. En 1984 —dijimos— debían promulgarse las principales leyes políticas; en 1985 tendría que venir el plebiscito imprescindible para reformar la Constitución, y en 1986 cabría elegir y, ojalá instalar, el Congreso Nacional.

Rechazada la reforma constitucional, la dimensión política de la apertura se desvaneció progresivamente. Su médula era anticipar el funcionamiento del Congreso y para ello, no había vía libre. Siempre, por supuesto, podrían revisarse los criterios, pero esto no pasaba de ser una ilusión óptica.

Al inicio de su gestión, Jarpa había anticipado que la primera ley en dictarse sería la de partidos, ya que éstos deberían estar funcionando a «mediados de 1984». Para tal efecto, una subcomisión del Consejo de Estado —integrada por Francisco Bulnes, Jaime Guzmán, Luz Bulnes y Gustavo Cuevas Farren— había preparado un anteproyecto.

Por primera vez, se trabajó dentro de un sistema relativamente participativo, apartándose del hermetismo con que funcionaba

el sistema legislativo, ya que todos los interesados pudieron hacer llegar sus observaciones. En abril de 1984 el general Pinochet recibió el texto y anunció un «pronto» despacho a la Junta. Cumplió su palabra a fines de mayo, pero las 20 mil firmas previstas originalmente como requisito para constituir los partidos políticos aumentaron, por efecto de una misteriosa multiplicación a 150 mil.

Era una cifra absurda. El propio Jarpa había contribuido al despropósito, luego de que en una conferencia en el Centro de Estudios Públicos (CEP) se había declarado partidario de exigir a los partidos 200 mil firmas, por lo bajo, para constituirse.

De ahí en adelante —qué otra cosa podía suceder— el proyecto se empantanó. En octubre se anunció que se había llegado a un «acuerdo» entre la Junta y el Ejecutivo en torno a las 100 mil firmas. Poco después esa cifra, también estratosférica, quedó en nada.

La idea de un número tan alto de firmas era indefendible conceptualmente y la argumentación en su contra fue encabezada por el propio Jaime Guzmán y Francisco Bulnes. La objeción de fondo era que un número excesivo de firmas, lejos de incentivar el derecho de asociación, lo constreñía severamente. Era, según ambos, una exigencia absurda para partidos que recién estaban naciendo.

La exigencia de Pinochet se apartaba de toda esa argumentación. Bulnes fue incluso más lejos y llegó a afirmar que, en tales condiciones, «las distintas corrientes políticas no intentarían siquiera constituir un partido y preferirían seguir actuando al margen de la ley». A él le preocupaba que se llegara al término del gobierno militar sin partidos, «que es cuando serán más necesarios».

A su turno, la oposición —aún lejos del realismo— se negaba a aceptar una legislación proveniente de una institucionalidad que consideraban ilegítima y veía en la normativa una maniobra para maniatarlos en la legalidad del régimen. Efectivamente, las normas contemplaban la exigencia de un acatamiento formal a la Constitución, lo que a esas alturas suponía para los opositores ponerse mansamente en manos del gobierno.

Ya a mediados de año, la situación era compleja para nosotros. La apertura que habíamos respaldado estaba completamente desperfilada. El rumbo económico era cada vez más errático. La prensa hablaba del ministro del Interior como «de la apertura o la cerradura» y Jarpa complicaba aún más las cosas convocando públicamente a formar un movimiento de apoyo al gobierno, de carácter «nacional y popular», precisamente cuando nosotros afianzábamos nuestro perfil independiente.

Trauma latente

A medida que el ministro Jarpa fue fracasando en los objetivos que lo llevaron al gabinete, la oposición democrática sacó cuentas alegres e intensificó su apuesta a las protestas, bajo el convencimiento de que por esta vía el gobierno, más temprano que tarde, iba a tener que ceder.

Los hechos, sin embargo, no evolucionaron en esa dirección. A la Alianza Democrática le faltó no sólo el sentido de la ubicación para saber a quién tenía al frente, sino también la capacidad para intuir quiénes podían ubicarse detrás de sí.

No deja de ser una ironía que el gobierno de Pinochet haya comenzado a vencer su aislamiento político, precisamente en la misma medida en que la oposición democrática se mostró más comprometida con la estrategia de las protestas. Tales jornadas se fueron haciendo cada vez más violentas —no porque sus organizadores lo quisieran, sino porque el PC y otros grupos radicalizados las utilizaron como paraguas para sus planes de insurgencia popular—, y la reacción natural de gran parte de los sectores medios fue descolgarse de las movilizaciones. Los sectores que querían una protesta pacífica, se dieron cuenta de que las cosas estaban yendo demasiado lejos, cuando poblaciones enteras quedaban sin luz, cuando grandes zonas de las ciudades eran controladas por bandas de lumpen y agitadores, cuando el testimonio cívico de malestar y rechazo era reemplazado por la pedrada y la bomba incendiaria.

Por esta vía, la oposición democrática conseguía portadas y notoriedad en la prensa mundial, pero era muy poco lo que ganaba en credibilidad política. De hecho, con las protestas la Alianza Democrática probó tener gran capacidad de convocatoria, pero en todo momento estuvo muy lejos de calificar como fuerza política capaz de constituir gobierno.

La otra subestimación de la Alianza —también de orden político— fue tanto o más grave que las anteriores. Sus dirigentes, creyendo que iban a ser capaces de mantener el control de las movilizaciones, se negaron hasta el final —en realidad hasta el atentado en contra del general Pinochet— a reconocer la capacidad de la izquierda marxista para instrumentalizar las protestas en beneficio de sus viejas, manidas y sentidas utopías de insurgencia popular.

Las protestas demostraron que en apenas tres años el gobierno militar perdió parte importante del apoyo ciudadano, pero también revelaron que a las dirigencias opositores les quedaba todavía mucho, demasiado por aprender para tomar algún día las riendas del país.

Sin embargo, todo aquel proceso demostró que a más de una década de la UP, el horror al caos, al desorden, a la política de tomas, asaltos y motines, seguía estando vivo. Puede ser explicable que eso no lo hayan comprendido los socialistas, que nunca han tenido las cuentas muy en paz con el orden como valor de la política; pero cuesta entender que el PDC, seducido con la estética de la revuelta, se haya embarcado en esta aventura sin reparar en que se encaminaba directo al fracaso.

Quizás eso sólo refleje que en la vida política ahuyentar los traumas del pasado es tanto o más difícil que en la vida personal. Y eso era la UP: un trauma latente.

Bajo lluvia ácida

¿Por qué se derrumbó la democracia chilena?

¿Cómo pudo sucumbir una de las democracias más prolongadas y estables de América Latina?

En cualquier caso, lentamente. Jamás de la noche a la mañana.

Sólo una mezcla abigarrada de elementos puede explicar el fenómeno. Pero, ¿cuáles fueron los factores corrosivos?

Un primer grupo puede rastrearse en el sistema partidista.

En Chile, el sistema de partidos se estructuró desde el principio en torno a ideologías, lo que constituye una rareza en América Latina, donde la regla general es que los partidos cobijen en su interior las más disímiles propuestas ideológicas. Pero, además de ideologizado, el sistema de partidos fue siempre altamente competitivo. Si en muchos países los partidos son organizaciones elitistas con poca penetración en la sociedad —algo así como colectividades superestructurales—, en Chile el sistema invadía todas y cada una de las esferas del tejido social, politizando al extremo las organizaciones de la sociedad civil. Hacia los años 60 hasta las elecciones de juntas de vecinos, centros de padres o clubes deportivos se libraban en código partidista y ¡para qué decir los sindicatos y federaciones estudiantiles! Los partidos no sólo competían fieramente, sino que lo hacían sin descanso y en todo lugar.

Se trataba, además, de un sistema polarizado, donde la derecha e izquierda tenían no sólo fuerza, sino rasgos muy marcados de identidad. Como la distancia ideológica entre las «puntas» del espectro era muy grande, ocurría lo que en todo sistema polarizado: el centro, lejos de «anclar» el sistema, se convierte en una fuerza inclinada a mimetizarse con uno de los extremos. De ese modo, el centro se diluye y volatiliza. En consecuencia, su dinámica no es centrípeta y estable, sino centrífuga e inestable.

Un segundo grupo de pistas del colapso político puede encontrarse en el edificio institucional. Aquí, el rasgo más importante era que el sistema parecía pensado para generar, de adrede, gobiernos de minoría. Las características ya mencionadas del sistema de partidos, la desincronización entre las elecciones presidenciales y parlamentarias, un sistema electoral proporcional que favorecía la fragmentación, la renovación parcial del Senado y, sobre todo, la arraigada tradición de que el Congreso Pleno debía elegir presidente de la República, al candidato que hubiera

alcanzado «un voto más» en las elecciones, fueron factores que se articularon para producir presidentes en permanente doble minoría: frente al electorado y frente al Parlamento.

Está claro en cualquier caso que ni el sistema de partidos, ni las inconsistencias del edificio institucional generaron una masa crítica suficiente para desplomar la democracia. Los elementos que faltaban vinieron de la mano de una ideologización extrema de la política. La borrachera ideológica desencadenada a partir de los 60 fue como inyectar veneno en las venas de un organismo sin defensas.

Ese proceso tuvo dos puntos álgidos.

El primero fue la transformación del centro político, cuando el PDC reemplazó al viejo Partido Radical. El radicalismo había desempeñado como nadie el papel de articulador de entendimientos. Era la bisagra que el sistema necesitaba para no entramparse. «No se puede gobernar con los radicales... pero tampoco sin ellos». Sin embargo, el PDC renegó desde temprano de ese papel, aspirando a ser un partido de «vanguardia», animado por la mística mesiánica del «camino propio». Frei, en 1964, lo dejó más que claro: «Ni por un millón de votos cambiaré una coma a mi programa».

El segundo fue la «leninización» de la izquierda.

Las características del sistema de partidos, el edificio institucional, la radicalización de la izquierda y la «lluvia ácida» de la ideologización, que no sólo entregaba a cada actor recetas para resolver todos los problemas de la sociedad, sino también estigmatizaba las negociaciones como una traición a la utopía, terminaron enfermando de muerte a la democracia chilena.

Lenin entre nosotros

¿Cuándo la izquierda desertó de la democracia? Es difícil saberlo con exactitud, porque cuesta demasiado caminar entre densas sombras de ambigüedad.

Ambigüedad es la palabra, porque los partidos de la izquierda

chilena mantuvieron definiciones programáticas que negaban la democracia desde temprano. ¿Qué otra cosa es declararse marxista-leninista y propiciar la dictadura del proletariado? Sin embargo, se comportaban por regla general apegados a los cánones del juego democrático y, al menos, profesaban respeto por sus formas.

La ruptura más clara es la que se gesta a partir del enorme influjo que desata la revolucion cubana. La revolución es asimilada al interior de una épica que mezcla el idealismo romántico con la nostalgia por Robin Hood, trasladado a la Sierra Maestra. A ese complejo de emociones también entra la fascinación por la lucha de David y Goliat a 60 millas de Miami, el aprecio a una estética de barbas, puros encendidos y trajes de fajina, la embriaguez de la ruptura con la sociedad burguesa y el culto al supuesto coraje de la guerrilla, bastante más atrayente como opción política que la rutina de las negociaciones partidistas y los retos electorales.

Para muchos analistas, el momento en que la ambigüedad deja de ser tal es el Congreso que el Partido Socialista realiza en Chillán en 1967: «La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y su posterior defensa y fortalecimiento. Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso que nos lleva a la lucha armada».

Pero es erróneo e injusto cargarle la mano sólo al socialismo. Durante mucho tiempo se ha afirmado que el PC chileno nunca se infectó con ese virus. La versión, sin embargo, no resiste mayor análisis. Los comunistas gritan y vociferan menos que los socialistas, pero siempre hablan en serio.

Ya a principios de los años 60, Luis Corvalán, el eterno secretario general del PC, afirmaba que las elecciones «ofrecen en esta época la posibilidad de cocinar a la burguesía en su propia salsa. La diferencia entre la vía pacífica y la vía armada sólo está en el empleo dominante de las armas como medio de lucha. En el curso del proceso revolucionario puede ser conveniente

pasar de una vía a otra. Ningún partido comunista que acepta la vía pacífica rechaza a priori la vía armada». ¡Claro como el agua! Más adelante, en el libro *27 horas,* posterior al triunfo de Allende, se aborda el tema de si entregarían el poder en 1976, al término del mandato. El pensamiento de Corvalán camuflado en ambiguas respuestas es fácil de adivinar:

—Ya veremos, ya veremos…

Más elocuente es el reconocimiento, cuatro años después del Golpe militar, del Pleno del PC de 1977: «Al sostener desde 1956 la posibilidad de la vía pacífica, tuvimos en cuenta que se trataba sólo de una posibilidad y además que, de abrirse paso la revolución por dicha vía, en algún momento podría surgir la alternativa de la lucha armada. Consecuentemente, nos preocupamos desde 1963 de la preparación militar del partido…». ¡Desde 1963! Así tampoco a nadie puede extrañar que se admita que después de la elección parlamentaria de marzo de 1973 «lanzamos la consigna de *no a la guerra civil* y, simultáneamente, intensificamos la preparación combativa de aquellos militantes que trabajaban en el frente militar y los pertrechamos con algún armamento».

Nadie ha descrito el fenómeno mejor que Eduardo Frei padre: «Para todos los partidos de izquierda la democracia existente en Chile era falsa y formalista. ¿Por qué respetar, entonces, esa democracia que era, según ellos, una gran farsa y un tremendo engaño? ¿Por qué ahora perdida, se le añora y se la defiende cuando antes se la execró sistemáticamente? ¡Qué paradoja es llorar hoy sobre una democracia que dijeron que era oprobiosa y nada valía!».

Falsa coartada

En el Chile de los últimos años se ha visto un intento manifiesto de relativizar, compasivamente, la gravedad de los planteamientos y conductas a los que llegó la izquierda en su etapa de radicalización. La trampa consiste en reconocer sólo inmadurez

donde había pertinacia y sólo entusiasmo, donde existía agudo fanatismo. Es curiosa la maniobra de aplicar a la conducta de toda la izquierda la misma receta que se recomienda para los niños taimados: no hacerles caso, no llevarlos de apunte. Por esta vía, se termina admitiendo que la izquierda no pensaba nada de lo que decía, no creía en nada de lo que escribía, no aspiraba a nada de lo que predicaba y nunca realizó esfuerzos por alcanzar aquello por lo cual luchaba.

No. Nadie tiene derecho a una coartada así, apoyada en el cinismo. Ninguna fuerza política puede exigir que sus adversarios no tomen en serio sus palabras.

Lo cierto es que la Unidad Popular, en su conjunto, tiró de la espoleta.

Al principio, con bastante buena voluntad y siempre en arenas movedizas, podría haberse aceptado que Allende quiso efectivamente inaugurar una nueva forma de alcanzar el socialismo: la vía chilena, distinta por lo menos en sus tramos iniciales de la ortodoxia prescrita por Lenin para el control del poder total.

Incluso, alguien podría haber afirmado que Allende, tras ese empeño inédito, estuvo siempre en una triple minoría: frente al país, que sólo le había dado un poco más de un tercio de los votos, frente al Congreso y… frente a su propia alianza política, que a veces lo interpretaba refutándolo. Pero no es sano convivir con mitos.

—Algunos han pretendido que el segundo camino hacia el socialismo excluye la dictadura del proletariado. Y han buscado amparo en las palabras presidenciales. Esta ha sido una vieja pretensión de la socialdemocracia europea, que los hechos han demostrado infecunda. El socialismo supone un largo período de transición caracterizado políticamente por la dictadura del proletariado y ningún camino hacia él puede evadir el punto —escribía José Antonio Viera-Gallo, un moderado de hoy.

Porque en realidad desde el principio parten las dudas. Por ejemplo, ¿quien era Allende?, ¿que pensaba?, ¿para qué sostuvo públicamente que aceptar el estatuto de garantías exigido por el PDC había sido una viveza estratégica? ¿Para qué reconoció con

desparpajo que «no soy presidente de todos los chilenos»? ¿Cuál era la verdadera personalidad política de Allende? ¿La del presidente del Senado de Chile o la del jefe de OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), un tinglado de respaldo a la subversión armada? Difícil saberlo, ya que desempeñaba simultáneamente ambos cargos.

Lo concreto es que, a poco andar, de la vía chilena quedaba poco: Allende fue claramente sobrepasado por sus seguidores… pero tampoco hizo demasiado por impedirlo. Aquí las interpretaciones son disímiles. Es posible, como se ha dicho, que haya sido incapaz de poner orden en sus filas y de buscar entendimientos con el PDC para impedir la catástrofe. Es posible que lo haya paralogizado el «avanzar sin transar» de su propio partido, el PS. Es posible también que el momento histórico haya terminado quedándole grande y se haya seducido hasta extremos enfermizos con su infatuada conciencia de político con «buena muñeca». Es posible, asimismo, como creen otros, que nunca haya estado dispuesto a pagar el precio de un acuerdo como el que se necesitaba en 1973, cuyo costo inmediato habría sido la ruptura de la UP.

La opinión de Aylwin poco después del golpe era lapidaria, aunque hoy no sea la misma:

—Hasta hace algunos meses yo tenía la impresión de que Allende podía ser prisionero de los grupos extremistas totalitarios que prevalecían en su combinación y que él no se atrevía a romper con ellos. Ahora me inclino a creer que simuló su vocación democrática, o por lo menos, con el tiempo la cambió.

Como todo mito, la figura de Salvador Allende seguirá rodeada de misterios y se alimentarán hipótesis e interpretaciones encontradas acerca de su vida, trayectoria y destino. Tendrá que pasar más tiempo para que los juicios decanten. Todavía circulan muchas versiones que, pretendiendo iluminar el pasado, lo que en realidad hacen es comerciar con el presente y, eventualmente, con el futuro: comerciar amistades, liderazgos, apoyos necesarios o provechosos.

De una cosa no tengo dudas: Allende tuvo más coraje para morir que para gobernar.

En la muerte que él eligió para sí —libre, digna, intransada y respetable— Allende entró a la historia por una puerta de grandeza a la cual su gobierno nunca lo había acercado.

JUEGO DE PIERNAS

En el segundo semestre de 1984, en un cuadro en que la apertura hacía agua, acosada desde afuera y bloqueada desde dentro, recrudeció la actividad terrorista y las peticiones de «mano dura» se multiplicaron.

En octubre, el general Pinochet leyó un discurso —signo inequívoco de que no se trataba de una de aquellas improvisaciones que a todo el mundo descolocaban— para comunicar un nuevo curso político:

—Se dará cumplimiento integral a las normas relativas a modalidades y plazos establecidos en las disposiciones transitorias de la Constitución Política. El gobierno no promoverá ningún diálogo con la oposición, ni aceptará iniciativa alguna que signifique modificar el itinerario fijado en la Constitución—. También agregó que la ley de partidos sería la «última en promulgarse».

Un balde de agua fría cayó sobre el Ministerio del Interior y los restos de una apertura exhausta. No sólo no habría Congreso, sino que tampoco partidos legalmente constituidos. ¿Qué quedaba entonces del diseño original? Poco, muy poco.

Cuando se filtró que La Moneda pensaba implantar el estado de sitio, también se supo que Jarpa había renunciado y con él, todo el gabinete. La razón invocada por él era descabellada, y apenas un pretexto: una reunión en Roma entre obispos chilenos y exiliados marxistas lo había dejado «absolutamente fuera de toda posibilidad de trabajar». Y fue más inverosímil que aceptara permanecer en el Ministerio, luego de un pequeño, pero significativo cambio en el gabinete. En esas condiciones, ¿qué tan extraño podía ser que al día siguiente se impusiera el estado de sitio?

Yo estaba en Estados Unidos en esa fecha, invitado a observar la elección presidencial de 1984 que ganó Reagan por amplio margen. En un diario, al final de una nota informativa titulada «Estado de sitio en Chile», supe del «pequeño» cambio: Francisco Javier Cuadra había sido nombrado ministro secretario general de Gobierno.

Me sorprendió y me alegré. Conocía a Francisco Javier desde los tiempos de la Juventud Nacional. Luego, cuando él estaba en la fiscalía del Banco Continental, trabajamos juntos, ya que mi oficina prestaba servicios profesionales a esa institución. Incluso, me pidió que estudiara los antecedentes de su hermano menor, que quería empezar a trabajar como procurador. No sólo hice eso, sino que José Miguel Cuadra fue mi procurador durante un par de años. Un tipo responsable y serio, aficionado a la lectura y fanático del cine.

Le había perdido la pista a Francisco Javier. Sabía que ejercía la profesión de abogado en el estudio de su padre y que hacía clases en varias universidades. Pero no tenía la menor idea de que estaba tan involucrado en política y nunca se me había pasado por la cabeza la posibilidad de que Pinochet lo tuviera en mente para un cargo tan importante.

Llegando a Chile lo llamé para felicitado y preguntarle qué pensaba hacer.

La respuesta no pudo ser más clara.

—Primero, poner orden. La apertura de Jarpa es un completo desastre, ¡un desorden total!

—¿Qué piensas hacer?

—Reencauzar el proceso político. El nuevo curso de acción es la proyección del régimen. Aunque sea a patadas, vamos a hacer entrar al país a una nueva etapa política.

Eso de las patadas estuvo de más. Para una mente sofisticada como la de Cuadra, ésa era una vulgaridad innecesaria.

A principios de febrero de 1985, cuando ya era imposible estirar más la cuerda, Sergio Onofre Jarpa renunció. Nunca se sabrá a ciencia cierta cuán voluntaria y cuán obligada fue la renuncia.

Tan descapitalizado estaba el equipo de Jarpa puertas adentro, que hasta pocas horas antes del cambio de gabinete nadie en el Ministerio del Interior tenía la más remota idea de «quién es ese señor Ricardo García, que viene a reemplazar a Sergio». Con Jarpa, como inmediata carambola, abandonó también la cartera de Hacienda, Luis Escobar, cargando sobre sus espaldas los resultados de una gestión muy controvertida.

En opinión de la mayoría de los analistas y dirigentes políticos, la palabra que en ese momento mejor definía la gestión de Jarpa era «fracaso», pero era ceguera pura no reconocer que el escenario político que dejaba era muy diferente —en atmósfera, en temperatura, en tentativas— al que existía cuando había asumido su cargo, dos años atrás.

Al abandonar La Moneda, Jarpa estaba lejos de proyectar la imagen de un derrotado. Y hasta el minuto final lo acompañó su proverbial cancha con los periodistas.

—¿Va a ser candidato?

—¿Candidato a qué?

—Bueno, a la presidencia. ¿A qué más?

—A lo mejor voy a ser presidente del Club de Huasos de Villa Alegre.

¿Cuántos ministros del Interior que han «fracasado» son despedidos por los periodistas preguntándoles por su futura candidatura presidencial?

Unos años más tarde, el propio general Pinochet revelaría su apreciación personal sobre la apertura encomendada a Jarpa.

Para Pinochet, todo había sido, apenas, un «juego de piernas».

Capítulo IV

Las firmas de Washington

—No insistan —les dije—. Antes de viajar, advertí que no iba a firmar ninguna declaración.

—Vas a ser el único de todos nosotros —me previno Gabriel Valdés.

—Así será, pero no voy a cambiar de opinión. Yo los respeto a ustedes. Respétenme ustedes a mí.

—Déjenlo así. No tiene importancia. Andrés tiene sus razones —intervino don Luis Bossay, presidente de la Social Democracia.

¿Que había pasado? ¿Cuál era la discusión?

En mayo de 1985, los institutos de los partidos Demócrata y Republicano de los Estados Unidos organizaron en Washington, por separado, conferencias cuyo tema central eran los procesos de transición a la democracia. Por supuesto, tratándose de un análisis comparativo, el caso de Chile adquiría elevada temperatura política.

Para mí, las invitaciones constituían un desafío, ya que mi experiencia en este tipo de reuniones era cero y tenía que presentar en un ámbito complejo un partido nuevo, conseguir que no me metieran en el saco de la oposición y evitar, por otro lado, que me empujaran al redil del gobierno militar. Además, era evidente la simplificación con que se observaba el fenómeno chileno desde el extranjero.

En esa oportunidad preparé con especial cuidado un análisis del proceso político chileno y la fracasada apertura.

¿Qué decía?

En primer lugar, que la Constitución de 1980 había ratificado la legitimidad del gobierno y entregado una prueba fehaciente del respaldo del régimen a esa fecha. Advertía, sin embargo, que era fuente de graves conflictos haber establecido en ella dos regímenes diferentes —el autoritario-militar hasta 1989 y el democrático-protegido a partir de esa fecha— sin disposiciones para pasar de uno a otro en forma progresiva. La apertura había sido una etapa política imprevista en el diseño institucional del gobierno militar, «detonada» por las protestas sociales y, en menor medida, por el rechazo «al propósito de mantener en la interdicción política al país luego de diez años».

En segundo lugar, que el gobierno militar, presionado por las protestas, había iniciado conversaciones con la oposición democrática, pero que sus ofrecimientos nunca fueron claros y explícitos, y que al menos respecto del jefe de Estado la disposición al diálogo bien pudo haber sido una estrategia destinada sólo a superar la crisis.

Indicaba, además, que la Alianza Democrática, al insistir en la ilegitimidad de la Constitución, había subestimado el poder del régimen y sobrestimado el de las protestas, «proporcionando al gobierno pretextos para abandonar sus ofrecimientos previos». Al final, habían terminado «por enfrentar al gobierno en el terreno en que éste era y es más poderoso: el de la fuerza».

Recordaba que el PC «jamás había estado interesado en el éxito de la apertura», ya que su estrategia apuntaba no sólo a «derribar el gobierno militar, sino que, al mismo tiempo, sustituirlo por un poder avanzado con vista al socialismo», posibilidad que, como demostraría el caso de Nicaragua, es más factible «si el pleito se resuelve por la vía del enfrentamiento con la dictadura».

Por último, señalaba que la centroderecha había intentado, sin éxito, encontrar una «fórmula intermedia entre el régimen que se resistía a realizar avances democráticos y aquellas fuerzas

que pensaban que cualquier progreso que no fuera un cambio inmediato de gobierno era insuficiente».

Tal era la médula de nuestro análisis. Aunque no nos quedábamos ahí: abogábamos por la recuperación del ejercicio de los derechos políticos fundamentales (derogación del estado de sitio y fin de la censura a los medios de comunicación) y por un amplio acuerdo nacional para impulsar la transición.

El viaje en cuestión adquirió imprevistamente gran importancia pública y generó un fuerte debate interno, porque Gabriel Valdés declaró a la salida de una reunión que él pensaba que «Estados Unidos podía hacer más por Chile» y porque al final de la conferencia del Partido Demócrata se suscribió la declaración sobre Chile, que todos firmaron salvo yo y que se interpretó como «intervención desembozada en asuntos internos».

La polémica duró varios días e involucró a numerosos interlocutores. Incluso al más inesperado, el propio general Pinochet, quien luego de fustigar a Valdés y al resto de los políticos que había viajado a Estados Unidos, me dejó caer un elogio: «Nos alienta la actitud honesta asumida por quien en el extranjero hizo públicas sus diferencias con ese proceder».

Me acuerdo del episodio porque allí fijamos una política que seguiríamos contra viento y marea, y porque fue la primera y última vez que recibí una palabra amable de parte del general.

Granos del régimen

Tras la salida de Jarpa del gobierno, en febrero de 1985, la nueva etapa política empezó con un hecho feroz: en plena vigencia del Estado de Sitio, fueron secuestrados y degollados tres dirigentes comunistas. El espectro de la guerra sucia dominó la atmósfera del país. Tiempo después, en el contexto de una sórdida pugna entre servicios de seguridad, pudo comprobarse la autoría del crimen por parte de Dicomcar, una división de inteligencia de Carabineros. El hecho descolocó absolutamente al gobierno y al general director de la institución, César Mendoza,

quien insistentemente había negado toda relación de las fuerzas de orden con los crímenes. Pero los antecedentes aportados por el proceso que llevó el ministro José Cánovas fueron más fuertes y, en agosto de 1985, la Junta de Gobierno perdió al segundo de sus integrantes de la primera hora.

—¿Por qué se va, general? —le preguntaron.

—Porque se me antojó no más —contestó. Y desde la metafísica de su sentido común alcanzó a mascullar una suerte de vaticinio histórico— Se está desgranando el choclo.

El propósito declarado del estado de sitio era generar un nuevo clima apto para reorientar el proceso político. Para ello, el gobierno se endureció y puso en vigencia una rígida censura de prensa que a muchos les recordó los peores momentos del régimen de Franco. Sin embargo, el talento político de Francisco Javier Cuadra no se reducía a aplicar medidas represivas.

Efectivamente, en esos días emergió con singular fuerza el concepto político de la «proyección del régimen», asociado desde el principio a la inmutabilidad de la Constitución y a la postulación presidencial del general Pinochet a través del mecanismo plebiscitario.

El concepto de «proyectar» el régimen siempre fue equívoco. De partida, mal se podía proyectar un régimen autoritario cuyo término estaba previsto en la propia Constitución el día que entrara en vigencia el articulado permanente.

¿Qué se trataba de proyectar?, ¿El gobierno militar propiamente tal? Tampoco, ya que por propia definición tenía plazo fijo.

Al final, todo era mucho más simple. Porque la idea de «proyectar el régimen» fue inevitablemente asociándose a la reelección plebiscitaria del general Pinochet.

Y si alguien tenía dudas, él mismo se encargó de aclararlo, en una de esas improvisaciones con las que el general revelaba sus intenciones y deseos profundos. El jefe del Estado aprovechó la entrega de un conjunto de viviendas sociales en Concepción para enunciar una curiosa interpretación del cronograma constitucional:

—Algunos no han entendido: la Constitución fijó 16 años, siendo los ocho primeros para normar; es decir, para dictar leyes,

reglamentos que la complementen. Y los ocho que continúan son para aplicar esas leyes en forma real.

Para que a nadie le cupiera duda, Pinochet señaló en la oportunidad que el régimen iba a continuar más allá de 1989 y que «nosotros no vamos a entregar el gobierno por el puro gusto».

La declaración —no era para menos— desató una fuerte tormenta política. Todos reaccionaron en contra, comenzando por la propia Junta de Gobierno, que aclaró no tener todavía ninguna definición en materia de candidatos.

La propia UDI salió a decir que la Constitución «en ninguna parte contempla un plazo de 16 años» y yo mismo declaré «que la transición debía culminar en 1989 y no empezar en esa fecha».

Sin embargo, más allá de las reacciones que provocaron sus palabras, el general Pinochet salió con la suya al posicionarse de espacios que iba a ser muy difícil disputarle cuando llegara la hora de designar al candidato.

Su impresionante instinto político rendía frutos. Si en 1983 la pregunta de rigor era si el régimen lograría sobrevivir en el corto plazo, lo concreto es que tres años después ya se estaba hablando de su proyección. El gobierno no sólo se había salvado. Ahora pisaba fuerte y retomaba la iniciativa.

La parábola del escorpión

En todo, caso la mentada «proyección» no contemplaba papel alguno para los partidos. Simplemente los ignoraba. Don Pedro Ibáñez renunció al Consejo de Estado, explicando que lo hacía para dedicarse a organizar la Unión Nacional. «El gobierno militar terminará un día y es peligroso e inconveniente la inexistencia de fuerzas políticas civiles, debidamente preparadas para hacer frente a esa contingencia». Cuando le preguntaron si nos preparábamos para ser los herederos del régimen militar, su respuesta fue notable:

—No somos de los que se pasean nerviosamente esperando a que muera el tío rico. Nosotros nos estamos preparando para

que en Chile haya una fuerza política organizada con conciencia clara de lo que es preciso hacer para gobernar Chile.

Don Pedro tenía esas respuestas que desarmaban a los adversarios o entrevistadores. Había sido en un foro de televisión cuando un diputado comunista lo había definido y emplazado majaderamente una y otra vez como un hombre «rico». Un rico que, por ser tal, pensaba como pensaba. A la quinta alusión don Pedro no resistió más:

—Excúseme, hombre —interrumpió con lentitud patronal— usted está equivocado. Yo no soy rico, soy inmensamente rico. Y soy rico porque trabajo desde los 16 años, porque vengo de una familia emprendedora y porque todo lo que me he ganado ha sido con mi esfuerzo...

Dos minutos después, estaba transmitido el mejor mensaje político del pensamiento de derecha acerca del esfuerzo personal, los beneficios de la competencia, la importancia de ofrecer y aprovechar las oportunidades, la necesidad de no resignarse a ser empleado pudiendo ser empresario...

Mientras tanto, ¿qué había sido de Jarpa? ¿Cuánto duraría fuera de la política activa? Quienes lo conocíamos, sabíamos que no demasiado. Aunque no necesitaba invitación alguna para incorporarse a la Unión Nacional, él no se demoró mucho tiempo en hacernos saber que no ingresaría a nuestro movimiento.

Las relaciones políticas —no las personales, que por lo demás nunca fueron gran cosa— entre los dirigentes de la UN y Jarpa se habían enfriado a medida que se desperdigaba su gestión al frente del Ministerio del Interior.

La UN había iniciado un lógico camino de independencia en la misma medida que el gobierno se mantenía enclaustrado y aferrado a una lógica de transición que nosotros no compartíamos. El tema era confuso: nunca se sabía hasta dónde Jarpa estaba molesto con el gobierno y Pinochet por el fracaso de la apertura. Para todos nosotros estaba claro que Jarpa, en definitiva, no había tenido piso para avanzar.

Sin embargo, la fuente de mayor distancia con Jarpa no estaba en los aspectos políticos, sino en los económicos. La UN,

en la medida que había acogido a dirigentes con mayor formación en el área económica (Francisco Pérez Mackenna, Renato Gazmuri, Hernán Echaurren, Gastón Cummins, Cristián Schiessler, Carlos del Río, entre otros) fue perfilando un pensamiento cada vez más distante de la gestión de Jarpa. En tal rumbo, la opinión de don Pedro Ibáñez fue fundamental.

En cualquier caso, por esas fechas Jarpa tenía otro proyecto partidista en mente. Se pondría a la cabeza del Frente Nacional del Trabajo, una iniciativa coherente con las singularidades de su lógica política:

—No es el tiempo de estar organizando partidos políticos, de estar dividiendo a la opinión pública, sino de plantear algunas pocas ideas fundamentales, en las cuales coincida un gran sector de la opinión pública, especialmente la gente incorporada a las actividades del trabajo y la producción, y de crear un frente para defender los valores nacionales. En esas semanas, *Hoy* publicó un artículo que pasaba revista a la nutrida trayectoria partidista de Jarpa. Sus adversarios siempre trataban de vincularlo de joven a movimientos de influencia nacional-socialista, pero yo nunca conocí un antecedente que lo demostrara. Lo concreto es que había sido agrario-laborista, pero en 1952, en vez de apoyar a Ibañez, respaldó a Matte. En 1958, en vez de estar con Alessandri, se alineó con Frei, asumiendo un rol destacado en su campaña. Más tarde se incorporaría a la Acción Nacional de Jorge Prat y ahí saltaría al Partido Nacional.

El nuevo movimiento de Jarpa, el FNT, no tenía un mensaje político nítido. Más bien, insistía en las ideas de avance legislativo que el propio Jarpa había impulsado sin éxito desde el gobierno. Pero en materia económica su planteamiento era más claro, porque atribuía a la apertura económica efectos negativos, abogaba por aranceles diferenciados, mayores protecciones para la agricultura y fórmulas generalizadas de alivio a los sectores gremiales más endeudados.

En realidad, no era sólo por esa lucha que el ex ministro había vuelto al ruedo: el FNT era un nuevo referente político. Jarpa inició un fuerte proselitismo en regiones y a poco andar incorporó al

Movimiento Social Cristiano, dirigido por Juan de Dios Carmona y William Thayer.

Las relaciones entre el nuevo movimiento y la Unión Nacional no pudieron inaugurarse peor. Hacia fines de 1985, Sergio Onofre Jarpa emprendió un fuerte ataque contra la iniciativa más importante que hasta entonces Unión Nacional había emprendido: el Acuerdo Nacional.

La mesa de la Iglesia

La preocupación de la jerarquía eclesiástica por la situación del país no cedió en un solo momento durante el régimen militar. La Iglesia Católica es depositaria de un capital político importante y su intervención en la contingencia pública ha sido recurrente. Después de 1973, esa tradición no pudo menos que robustecerse por la proscripción de la actividad política, el cierre de los canales de expresión de la inquietud ciudadana y el profundo compromiso que contrajo la Iglesia con los derechos humanos, luego que el Poder Judicial decidiera lavarse las manos y medio país cerrara los ojos.

Empeñado en abrir instancias de diálogo y reencuentro, en 1983 el arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, había «prestado la mesa» para el primer —y frustrado— diálogo gobierno y oposición. Ahora, se propuso promover directamente un acuerdo entre las fuerzas democráticas para iniciar, una negociación con las autoridades, a fin de gestar una transición ordenada y consensual hacia la democracia.

Hombre bueno de alma, y libre a los ojos del gobierno de toda sospecha de politiquería o progresismo, nadie estaba en mejor posición que el prelado para acometer semejante tarea. Trabajó en un clima de reserva y pragmatismo para tender puentes de entendimiento.

Así las cosas, en mayo de 1985 fui invitado a desayunar a su casa. Me recibió en compañía de José Zabala de la Fuente y en un ambiente particularmente cómodo para mí. Don Pepe era

amigo de mi padre desde los tiempos de la universidad y sus hijos habían estudiado en el Saint George's, tal como yo.

—Los políticos nunca se ponen de acuerdo en nada. No tienen generosidad —me dijo de entrada. Enseguida, y por espacio de un par de horas, intercambiamos opiniones sobre la situación política y los peligros que amenazaban la convivencia. Don Pepe tomaba notas y parecía cotejar otras opiniones.

Al final de la reunión, me dijo que me mandaría llamar cuando «las cosas hayan avanzado». A principios de agosto me pidieron que asistiera a una reunión, a la que también concurrirían dirigentes de los partidos de la Alianza Democrática y el PN. Especialmente invitado —aunque a título personal, como personalidad— estaría don Francisco Bulnes.

El día de la cita amaneció frío y nublado. Pasé temprano a buscar a don Pancho a su casa de Darío Urzúa con Marchant Pereira.

—Ésta es mi última gestión política —me dijo mientras enfilábamos por la carretera al sur—. Yo ya hice mi vida política y ella fue muy generosa. Colaboré lealmente con el gobierno militar. Sin embargo, he ido perdiendo la esperanza. ¡Mira en qué terminó lo del diálogo y lo inútil que fue trabajar tanto en una ley de partidos! ¡Ha sido postergada quién sabe para cuándo! Voy a jugar mi prestigio para ayudar al retorno a la democracia, porque así como van las cosas, no descarto que vayamos a un enfrentamiento.

En la primera reunión que tuvo lugar en una helada casona de los jesuitas en Padre Hurtado, se definió un procedimiento: José Zabala, Fernando Léniz y Sergio Molina prepararían un documento que sería sometido a la consideración de los partidos. Actuarían como representantes directos de monseñor Fresno bajo el título de «coordinadores».

En la segunda reunión, que se realizó el 20 de agosto en el Círculo Español, se dio a conocer el meditado y laborioso texto. ¿Asistentes? Dos por partido: Gabriel Valdés y Patricio Aylwin, por el PDC; René Abeliuk y Mario Sharpe, por la Social Democracia; Hugo Zepeda y Armando Jaramillo, por el Partido Republicano;

Patricio Phillips y Pedro Correa, por el Partido Nacional; Enrique Silva Cimma y Luis Fernando Luengo, por el Partido Radical; Carlos Briones (el último ministro del Interior de Allende) y Darío Pavez, por el PS; Luis Maira y Sergio Aguiló, por la IC. En resumen, la totalidad de la Alianza Democrática ampliada hacia la izquierda con la Izquierda Cristiana y hacia la derecha, con el PN y nosotros. En cualquier caso, la UN tenía un pequeño privilegio: éramos el único grupo que tenía tres representantes. Fernando Maturana y yo, además de don Pancho, quien seguía actuando a título individual, aunque por esos días se incorporaría formalmente a nuestras filas.

Ya de la primera lectura del documento y de su distribución numerada a los asistentes (para evitar filtraciones a la prensa) quedó de manifiesto que era un texto general, claramente moderado, que mezclaba principios, declaraciones casi programáticas y propuestas concretas para darle fluidez a la transición.

—¿Qué le parece? —le pregunté a don Pancho.

—Está bien para partir —fue la respuesta—. Recoge muchas de nuestras ideas. Además, es un documento redactado cuidando cada sílaba.

—No se equivoquen —interrumpió Fernando Maturana—. Aquí la piedra de tope va a ser el tema del comunismo. El párrafo al respecto está muy mal para nosotros. Acabo de revisarlo.

Comunismo y póker

Así fue.

Vista a la luz de hoy, la obstinada estrategia anticomunista del gobierno militar se ve anacrónica. Y aún así, no dejaba de ser una ironía que en 1985, mientras en Chile el comunismo seguía en el centro del debate, en los dominios del «hermano mayor» —como llamó el Presidente Allende a la Unión Soviética— éste empezaba a caerse a pedazos al ritmo de la «glasnost», la «perestroika» y el propio Gorbachov.

El tema de la proscripción del marxismo terminó eclipsando a todos los demás, lo cual fue una injusticia. Con todo lo decisivo que pudiera ser dejar a los partidos totalitarios fuera del sistema político, el documento tocaba cuestiones mucho más sustantivas para la estabilidad democrática en el largo plazo. Pero nosotros sabíamos que era un requisito *sine qua non* para las Fuerzas Armadas: ellos exigirían que el futuro sistema político estuviera constitucionalmente «inmunizado» contra la acción de los partidos marxistas.

La verdad es que a mí siempre la proscripción me pareció un debate más político que práctico y siempre tuve otra convicción: «al comunismo se le puede detener con un régimen militar y contener con mecanismos legales, pero sólo se le puede derrotar en democracia, ganándole la batalla en la mente de las personas».

A la hora de almuerzo, Patricio Aylwin, Luis Maira y yo nos juntamos con los coordinadores para ver si podíamos alcanzar una solución. El problema no era de redacción. No era de agregar o quitar una coma, introducir una palabra más fuerte o más suave o negociar una cosa por otra. El tema era conceptual, e inevitablemente conducía a dividir las aguas entre quienes estaban a favor de la proscripción legal de los grupos totalitarios y los que estaban en contra.

En algún momento, para destrabar la discusión, planteé el problema en términos prácticos.

—Vamos a lo concreto. Si el día de mañana un partido legalmente constituido proclama su adhesión a la vía armada, como lo hizo el PS en su famoso Congreso de Chillán de 1967, ¿debería ser sancionado por el Tribunal Constitucional?

—¿Por ese solo hecho? —preguntó Sergio Molina.

—Por ese solo hecho —confirmé yo.

Se produjo un silencio.

—A mí me parece que sí —dijo Aylwin—. Tiendo a creer que sí.

—Yo creo que no —dijo Maira.

No había acuerdo.

El asunto se postergó para el día siguiente —sábado en la tarde— en la casa de Fernando Léniz. Si había humo blanco, todo el grupo se reuniría el domingo para la redacción final, porque se habían forjado amplios consensos respecto del resto de los contenidos.

En la mañana trabajé con Juan Luis Ossa y don Pancho Bulnes en diversos textos que, siendo todos aceptables, tenían pequeñas diferencias de matiz que los hacían interpretar con mayor o menor precisión nuestro planteamiento. Pero todos incorporaban un concepto básico: la idea de un Tribunal Constitucional revestido de facultades para sancionar a los partidos que, por sus «actos u objetivos», atentaran contra los principios del régimen democrático. En lo de los «objetivos» estaba la médula, ya que dicho concepto incluía los fines y propósitos de la acción política. Así, se iba al fondo: la izquierda ya no podría retornar a la ambigüedad de profesar objetivos totalitarios impunemente.

A pesar de ser mi primera negociación política de envergadura, estaba tranquilo. En cierto modo, estábamos en una posición de ventaja. O había proscripción o, simplemente, no había acuerdo. La participación de UN era crucial para el éxito de la iniciativa. Sin nosotros, todo iba a ser apenas otra acción política de la oposición; con nosotros, el asunto cambiaba radicalmente. Podía ser un Acuerdo Nacional llamado a interpretar no sólo a los enemigos del gobierno militar, sino también a partidarios suyos. Partidarios con matices y todo lo que se quiera, pero gente de afinidades, al fin y al cabo. ¿Quién podía considerar enemigo del gobierno a un Francisco Bulnes, a la fecha todavía consejero de Estado, ex embajador de Pinochet y redactor reciente, a instancias del propio gobierno, del anteproyecto de ley de partidos políticos?

Maira intentó sin mayor éxito que abandonara mi punto de vista. A su turno, yo jamás dejé de insistirle a Aylwin que «no podía ser intelectualmente inaceptable para un demócrata cristiano chileno un principio constitucional que es plenamente válido para un democratacristiano alemán». Efectivamente, la Constitución alemana prohíbe los grupos antidemocráticos.

Pasado un buen rato, parecía inevitable que termináramos repitiendo la larguísima discusión de dos días atrás. Sin presionar más de la cuenta, insistí dirigiéndome a Fernando Léniz:

—Don Fernando, este mecanismo de resguardo del sistema político es indispensable. Hay que partir por rechazar todo cuanto huela a totalitarismo y de allí expresar los demás consensos que el país requiere. De otro modo el gobierno rechazará todo de entrada y el esfuerzo sera inútil.

De pronto, Sergio Molina sugirió que revisáramos el enésimo texto que había preparado. Maira, sabiendo que había estirado la cuerda hasta el límite, sugirió una redacción de la que Molina y Zabala tomaron nota. Aylwin y yo le hicimos unos pequeños agregados.

Aunque diferente a los nuestros, ese texto me pareció más que aceptable. Como lo haría un jugador de póker, traté de que no se me notara la satisfacción en la cara y pedí un teléfono para consultarle a don Pancho.

Llamé a don Pancho —gran amigo de Fernando Léniz, puesto que ambos compartieron el directorio de Soprole durante años— y se lo leí. Su respuesta no se dejó esperar.

—Acéptelo, Andrés. Está mejor que los que discutimos en la mañana.

Fue imposible que en ese momento no recordara una anécdota que me había contado Jarpa y en la cual también intervenía don Pancho. Estaban discutiendo el borrador del acuerdo de la Cámara de Diputados, que declaraba la ilegitimidad del gobierno de Allende. El texto había sido preparado por el PN, con una destacada intervención de Bulnes, que redacta con elegancia y simpleza. Ese borrador le había sido enviado a Aylwin, quien lo devolvió con algunas notas. El grupo redactor, a primera vista, rechazó las observaciones, pero ahí intervino Jarpa.

—Déjenlo tal cual —pidió—. Ahora está más duro que antes… y es bueno que tenga una huella digital de Aylwin.

Era todo un signo de los tiempos: faltaban menos de dos semanas para el 11 de septiembre del 73.

Contento, volví a la reunión y, tratando de aparecer impasible, me limité a anunciar.

—Don Pancho está conforme.

La negociación había terminado. El gran obstáculo estaba despejado.

Tierra común

Al día siguiente, se avanzó en el resto de los contenidos.

El preámbulo contenía una exposición de principios y envolvía un compromiso con los valores democráticos; con un marco político-económico-social para garantizar la gobernabilidad; con el retorno de las Fuerzas Armadas a sus funciones permanentes; con el pleno respeto de los derechos humanos; con las exigencias de justicia, pero también con el espíritu de reconciliación nacional. Por último, los firmantes se comprometían a «rechazar la violencia, de donde quiera que ésta venga, como método de acción política».

El primer capítulo, contenía la elección democrática de la totalidad del Congreso; un procedimiento de reforma constitucional más flexible; la elección directa del presidente (lo cual suponía eliminar el plebiscito); un Tribunal Constitucional con adecuada representación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial; una mejor regulación de los estados de excepción y el controvertido párrafo sobre la proscripción de los grupos totalitarios:

«Los partidos, movimientos o agrupaciones cuyos objetivos, actos o conductas no respeten la renovación periódica de los gobernantes por voluntad popular, la alternancia en el poder, los derechos humanos, la vigencia del principio de legalidad, el rechazo a la violencia, los derechos de las minorías y los demás principios del régimen democrático definidos en la Constitución serán declarados inconstitucionales. Esta calificación le corresponderá al Tribunal Constitucional».

Otro capítulo incluía la idea de «eliminar cualquier incertidumbre respecto del régimen socioeconómico que imperará

una vez restablecida la normalidad». Por último, un tercer capítulo proponía el término de los estados de excepción, del exilio, de la intervención universitaria y el compromiso de no aplicar el artículo 24 transitorio; también consultaba la formación de registros electorales, el fin del receso partidista, la aprobación de una ley electoral y el equitativo acceso a los medios de comunicación.

El mérito del documento fue múltiple. De partida, contenía un conjunto de coincidencias que perfilaban una mejor transición. Pero, más allá de eso, se trató del primer intento de otorgar —entre fuerzas políticas adversarias— contenidos comunes a la democracia que estaba por venir, rompiendo una lógica de antagonismos que había erosionado los fundamentos mismos del sistema político vigente hasta el año 73. Es del Acuerdo Nacional, en realidad, de donde nace la democracia de los consensos.

En una aproximación de más corto plazo, el documento era también un triunfo nuestro, a lo menos en dos sentidos: a partir de su suscripción, la Alianza Democrática abandonaba su rechazo a la institucionalidad y se allanaba a aceptar el principio de la proscripción ideológica de los grupos totalitarios.

El documento, es cierto, no contenía una adhesión en letras de molde a la Constitución de 1980, como hubiera querido La Moneda, pero todo el texto discurría en ese entendido. Quedaban atrás las exigencias de asambleas constituyentes, renuncias incondicionales, plazos anticipados.

Tan evidente era lo anterior que el propio gobierno militar, en su declaración oficial del 3 de septiembre respecto del Acuerdo, partía por apreciar en el documento, «como elemento positivo, un progreso en la comprensión del momento que vive el país, especialmente al constatarse que ahora los planteamientos se han formulado dentro del marco jurídico vigente».

—¿Qué más nos pueden pedir? —preguntaba René Abeliuk, presidente de la Social Democracia.

—Estoy agradecido de Dios de estos ciudadanos —dijo monseñor Fresno al recibir el texto en su casa.

Internamente, quedaba el último trámite: obtener la ratificación de la comisión política.

Don Pedro Ibáñez allanó el camino:

—La parte económica —señaló— podría haber quedado mejor, pero en general está bien. Si el gobierno sabe aprovecharlo, tiene ahora un gran instrumento al alcance de la mano.

La unanimidad estaba lograda.

El día terminaba muy bien. Era, además, un buen día: el 26 de agosto es el cumpleaños de la Bárbara.

A la mañana siguiente ya nadie tenía dudas. Al menos en algo, todas los editoriales y analistas coincidían: el Acuerdo Nacional era un hecho político de gran envergadura y proyección. Como en tantas oportunidades, *La Segunda* había marcado la pauta noticiosa: el titular con la noticia cubría toda la primera página y adentro venía el texto completo del documento.

Bajo fuego cruzado

—¿Viste los diarios? —sonó la voz de don Fernando Maturana en el teléfono, muy temprano en la mañana.

—Sí —fue mi respuesta, preocupada—. Usted tenía razón. La mano viene pesada.

—Te lo advertí —agregó—. Sin embargo, lo están haciendo mal. Las dos declaraciones que vi tienen el mismo sello. Aquí hay mano de intendente. No te sorprendas. El gobierno no acepta nuestra independencia. Hay que estar preparados para una andanada.

Fernando Maturana se refería a las declaraciones que publicaba *El Mercurio* el 10 de octubre, varias semanas después de suscrito el documento, en las cuales dirigentes de UN de Temuco y Cauquenes criticaban el Acuerdo Nacional. Lo curioso era que ambas tenían la misma estructura: partían con una queja formal por no haber sido consultados y protestaban por la heterogeneidad de los firmantes, gente del PDC y ¡horror! de la propia UP. La misma fórmula se repitió en otras ciudades.

Era una maniobra trazada más allá de los límites del partido. Nuestros propios dirigentes nos informaban acerca de cuales

autoridades de gobierno les habían solicitado efectuar las declaraciones, facilitándoles incluso borradores de las mismas.

—¿Qué tienen ustedes que andar firmando acuerdos con ministros de Allende? —era la crítica a la orden del día.

Hoy, a la distancia, no parece razonable tal objeción. Para que el país funcionara en el largo plazo íbamos a tener que alcanzar, concebir y negociar muchos otros acuerdos con adversarios políticos. Sin embargo, era una cuestión de piel. No había vuelta que darle: a partir de la década del 60 y después de tantos años de enfrentamiento y polarización, Chile era una «nación de enemigos», como se titulaba un libro de Arturo Valenzuela y Pamela Constable, publicado en esos años.

El Acuerdo enfrentó varios problemas, ninguno de los cuales lo desmerece en su importancia histórica. El grupo de coordinadores, que con tanta sincronía y precisión había trabajado en la etapa previa, olvidó hacer el cronograma para el día después. Aun cuando el Acuerdo constituía un documento que por su naturaleza estaba destinado antes que a nadie al gobierno, hubo un par de voces disonantes en la materia. La más sorprendente fue la de Gabriel Valdés, quien, al cuarto día de haberlo suscrito, declaraba que el documento «no sería enviado al gobierno».

Al mismo tiempo, por no ser el Acuerdo ni una alianza ni una coalición de partidos, resultaba extremadamente difícil «dirigirlo». Durante meses, los dirigentes del PN y nosotros le insistíamos sin éxito a los coordinadores que debían efectuar una gestión formal ante el gobierno.

Sin embargo, los mayores problemas surgieron del ámbito universitario, donde los partidos de la Alianza Democrática comenzaron a pactar con el Partido Comunista, lo que era contradictorio con el compromiso de rechazo a la violencia.

Para complicar las cosas, Jarpa, que al principio había reaccionado bien, también las emprendió en contra del Acuerdo, afirmando que el tratamiento del PC era «muy vago», aunque estaba claro como el agua. Ninguna reacción, en todo caso, fue más adversa que la de la UDI y particularmente la de Jaime Guzmán, quien volvió a revalidar sus títulos como polemista

diestro e infatigable. Su estrategia consistió en formularle reiteradamente preguntas al Acuerdo, a fin de demostrar las diferencias entre sus miembros.

En todo caso, más allá de la mala fe que envolvía tratar al Acuerdo como un programa político, cosa que evidentemente estaba muy lejos de ser, a Jaime Guzmán siempre le preocupó sobremanera que el gobierno fuera a quedar en una posición de aislamiento y que hacia adelante la contienda política chilena se expresase en dos bloques: a un lado la civilidad democrática y al otro el gobierno y las Fuerzas Armadas.

Nunca fue ésa nuestra intención y tampoco nos interesaba que el Acuerdo fuera evolucionando hacia una coalición de partidos.

En cualquier caso, la intransigencia de la UDI se contrabalanceó con la del PC:

—El acuerdo declara inconstitucionales a las fuerzas de izquierda. ¿Cómo puede el Partido Comunista aceptar un acuerdo que lo excluye de la vida política? —preguntaba airado Volodia Teitelboim.

Al otro extremo, Pinochet criticó fuertemente la «ingenuidad» de quienes nos habíamos sentado en la misma mesa con dirigentes de la UP. La respuesta de Bulnes fue renunciar al Consejo de Estado.

Los gendarmes del acuerdo

A fines de noviembre, estábamos entre la espada y la pared: el gobierno no mostraba receptividad alguna y la Alianza Democrática seguía en la ambigüedad frente a la movilización social. Las contradicciones internas se multiplicaban. Al interior del Acuerdo, nosotros habíamos asumido el ingrato papel de custodios, para evitar que se desnaturalizara.

—Los de UN se creen los gendarmes del Acuerdo —nos dijo por la prensa el presidente del PS, Carlos Briones y el sobrenombre quedó.

En ese escenario francamente incómodo, resolvimos hacer públicas nuestras discrepancias dirigiendo una carta a los coordinadores «para manifestarles nuestra fundada preocupación ante la progresiva desnaturalización» que el Acuerdo Nacional estaba experimentando. Les planteamos la inconsecuencia de mantener pactos electorales con el Partido Comunista y la negativa por parte de algunos de los suscriptores a entender que el documento era un instrumento para negociar con el gobierno.

Al mismo tiempo, hablé con Fernando Léniz.

—La carta es una oportunidad para enderezar el asunto. Hay que obligar al gobierno a que conteste y de paso, terminar con el argumento de que el texto jamás le ha sido entregado.

Hermógenes Pérez de Arce insistía en su columna que «habría cabido esperar que el texto hubiera sido sometido oficial y formalmente a las más altas autoridades en uso del derecho de petición que franquea la Constitución Política» y el ministro del Interior, Ricardo García, decía que a él no «le constaba que el texto hubiera sido enviado al gobierno».

—Andrés, el Acuerdo se lo enviamos al gobierno al día siguiente de firmado con una carta del cardenal a Pinochet. Está publicado en todos los diarios y se discute todos los días desde hace tres meses. ¿Cómo alguien puede decir que no lo ha recibido o de buena fe reclamar que no lo conoce?

—No me convenza a mí. El punto es que hay que terminar con el pretexto. Si lo rechaza, todos sabemos a qué atenernos; si abre la puerta, el objetivo del cardenal se cumple.

La verdad es que todo era un poco ilógico. Se discutía la entrega de un documento público y archiconocido que había sido deferentemente enviado por el cardenal Fresno al presidente de la República y respondido por éste a través de su ministro secretario general de la Presidencia... pero se argumentaba que no había sido entregado.

La respuesta de los coordinadores se produjo la tercera semana de diciembre y nos dio la razón en toda la línea:

«El propósito básico del Acuerdo es buscar un entendimiento con el gobierno y las Fuerzas Armadas. El Acuerdo no es un

documento de oposición al gobierno. A nuestro juicio, el espíritu del Acuerdo es de oposición a pactos electorales con el PC, si ellos tienen un carácter esencialmente político e incluyen grupos o partidos que no respeten el rechazo a la violencia».

El asunto no terminó ahí. Porque cuando los coordinadores pidieron las audiencias, el resultado fue insólito. El ministro del Interior adujo «no tener tiempo» para recibirlos y los derivó al subsecretario del Interior. La audiencia de éste duró apenas unos minutos y consistió, únicamente, en la entrega de una fotocopia del documento. ¡Cómo si nadie lo conociera! Sin embargo, tres días después el propio Pinochet recibía a monseñor Fresno. Era el día de Navidad, 24 de diciembre de 1985.

Cuando el cardenal quiso tocarle el tema, Pinochet lo paró en seco.

—Mejor demos vuelta la hoja —fueron sus tajantes palabras.

LLAVE MAESTRA

El cardenal Fresno ni siquiera fue capaz de reaccionar. No le salió el habla. Ni ahí ni después. Sólo le encargó a Sergio Molina que emitiera una declaración relatando el incidente, con lo cual la famosa frase se hizo pública. También quedó en claro que el propio Pinochet había dado orden a su ministro del Interior de no recibir el Acuerdo.

«Lo que propone el Acuerdo Nacional es válido para Chile y llegará el momento que así se reconocerá», terminaba la declaración de Sergio Molina.

El cardenal Fresno se ganó la animosidad del gobierno militar por mucho tiempo. En el olvido quedaron las palabras con que la señora Lucía Hiriart había recibido la noticia de su nombramiento como arzobispo de Santiago, en reemplazo del cardenal Silva Henríquez: «Parece que Dios nos ha oído».

Años después, Cristián Zegers, director de *La Segunda,* escribiría que con el «Acuerdo Nacional por primera vez se otorgaba

más importancia a las características de la futura democracia que a la forma de alcanzarla», haciendo notar que había sido «la llave maestra del espíritu y los contenidos de la transición finalmente lograda».

Desde el punto de vista de la UN, la suscripción del Acuerdo fue una demostración definitiva de independencia frente al régimen. Esta actitud generó distancias que terminaron siendo insuperables para muchos círculos del gobierno. Pero al mismo tiempo despertó respeto, autoridad y nuevas lealtades en el mundo político chileno e internacional.

El tiempo se encargaría de demostrar que los consensos fraguados al interior del Acuerdo adquirirían plena vigencia años después, al ser recogidos casi íntegramente en la reforma constitucional de 1989.

El Acuerdo sirvió para reconstituir lealtades políticas que estaban congeladas o se habían debilitado tras largos años de antagonismos y fue escenario de encuentros y reencuentros. Tengo grabado en la memoria uno realizado en Caracas. Ahí conocí a Carmen Lazo, *La Negra* Lazo.

—Qui'hubo, cabro. Tú debes ser Allamand. He oído hablar de tí. Yo conocía a tu suegra, la Silvia Correa, una mujer macanuda, buenamoza. ¿Sigue en la DC? Me acuerdo que peleábamos harto...

Antes que pudiera responderle, llegó Fernando Ochagavía:

—¿Cómo estás, *Negra?*

—Más o menos, no más, Fernando. Tú sabes que aquí algunos están muy bien y otros no tanto...

Estaba claro que el exilio era una experiencia compartida sólo en términos muy relativos. Concretamente en Caracas, algunos ex UP era unos potentados mientras *La Negra* Lazo estaba mal. Su combativa forma de ser estaba minada por un aire de derrota y, además, dejaba entrever lo evidente: jamás se adaptaría a otras latitudes, siempre sería extranjera en cualquier lugar del mundo.

Carmen Lazo se quedó en silencio y, con los ojos fijos en un punto que no estaba ahí, agregó después una frase que nunca olvidé, porque resume mejor que un ensayo el drama del exilio:

—Además extraño mucho el pescado frito... de allá.

Capítulo V

El otoño del Acuerdo

La frase de Pinochet al cardenal Fresno —«mejor demos vuelta la hoja»— fue una manera, más gráfica que elegante, de decir no se hable más del asunto. Y el gobierno nunca volvió a mencionar el Acuerdo, que dejó de ser operativo y finalmente languideció.

Durante 1986 algunos dirigentes —Gabriel Valdés y Eugenio Ortega a la cabeza— hicieron un intento por «profundizarlo» que terminó en un documento suscrito por todos los partidos integrantes más el Mapu, el Movimiento Liberal, el Partido Humanista y la Izquierda Cristiana.

En realidad era un pre-programa de gobierno. La UN rechazó el documento por considerarlo, más que una extensión del Acuerdo, el germen de una alianza política de los partidos opositores al gobierno militar.

El Acuerdo Nacional mantuvo una presencia más «virtual» que operativa.

Rememorado de año en año como un hito clave, era un referente obligado para los dirigentes y autoridades extranjeras que —a veces en tropel— visitaban Chile e invariablemente se reunían con quienes habían sido sus artífices y suscriptores.

Sin duda alguna, el más importante de estos encuentros fue la audiencia con Juan Pablo II, en los salones de la Nunciatura durante su inolvidable visita de seis días de abril de 1987. Fue una clara deferencia, y un fuerte espaldarazo.

La visita papal a Chile repercutió en términos políticos, porque su mensaje de paz ganó un espacio que después nadie ni nada pudo confiscar. Varios de sus planteamientos —Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento; los pobres no pueden esperar y, sobre todo, el amor es más fuerte— se grabaron a fuego en el corazón de todos.

Fue un mensaje oportuno porque, luego de rechazado el Acuerdo, la sociedad chilena estaba atrapada por la polarización. El PC convocó a transformar 1986 en el «año decisivo». La Alianza Democrática se embarcó en un intento final de derrotar al régimen por la vía de la movilización social, incurriendo en un serio error de percepción y estrategia. Si las protestas ya se habían agotado en 1984, ¿qué se podía esperar de ellas en 1986? Además la economía, bajo la conducción de Hernán Büchi, mostraba claras señales de recuperación.

Por su parte, el gobierno —sin prisa, desde luego— se abocó a ejecutar su proyecto de transición reducida al estudio y promulgación de las leyes orgánicas constitucionales. Un proceso técnico, lento y despojado de toda expectación ciudadana. Si el gabinete de Jarpa había tenido protagonismo y una marcada densidad política, el que encabezó Ricardo García nació políticamente jibarizado.

En cualquier caso, García desempeñó su cargo con honestidad y equilibrio. Durante su gestión tuvo lugar uno de los episodios que definió el desarrollo político posterior, aunque aun hoy pocos lo sepan y menos lo recuerden.

La aprobación de la ley orgánica del Tribunal Calificador de Elecciones pareció otro trámite en el andamiaje jurídico, pero a sus espaldas se libró toda una batalla. La Constitución era más que clara al señalar que el Tribunal debía entrar en funciones para la primera elección de parlamentarios, esto es, después del plebiscito presidencial. Ello significaba, ni más ni menos, que este plebiscito, al igual que el del año 1980, se efectuaría sin registros electorales, el más elemental requisito para hacer confiable cualquier acto electoral.

Después de varias discusiones en las comisiones legislativas, así lo determinó la Junta de Gobierno.

Sin embargo, se topó con un obstáculo imprevisto que, pese a los denodados esfuerzos que personeros del régimen efectuaron, fue imposible remover. A un miembro del Tribunal Constitucional que debía revisar la ley, Eugenio Valenzuela, se le puso entre ceja y ceja que ello no podía ser y estirando con elástico las normas constitucionales, se las arregló para redactar y aprobar un fallo (apenas cuatro a tres) ordenando que el plebiscito se efectuara con registros electorales. No sólo eso, tal acto electoral también debería tener apoderados acreditados en las mesas, un derecho que debían ejercer los partidos políticos.

Conclusión: a la fecha del plebiscito los partidos también debían estar legalizados.

SEPTIEMBRE ROJO

Aunque 1986 no fue la hoguera que imaginó y planificó en su momento el PC, de todas maneras fue un año violento. Las descalificaciones se hicieron más frecuentes y el debate público más sombrío. La vigencia del Estado de Emergencia y Estado de Peligro de Perturbación Interior, enardeció la convivencia y asoció el artículo 24 transitorio a simples excesos autoritarios. La verdad es que ninguno de los dos se justificaban y el argumento que el gobierno usaba para imponerlos era débil. Si para enfrentar al terrorismo hubiera que recurrir siempre a los estados de excepción, estos serían la norma general en todos los países. A tres años del término del gobierno militar, una exigencia básica era que las personas pudieran ejercer sin restricciones sus derechos políticos y civiles.

No contento con el tiempo que había perdido en el reto de democratizar al país, el gobierno desperdició una valiosa oportunidad para avanzar en la transición en el ámbito municipal. La Constitución eliminó la elección directa de alcaldes y se hizo intervenir en su designación a los consejos regionales y comunales de desarrollo (Coredes y Codecos). La fórmula fue presentada como un triunfo sobre la voracidad de los partidos

y la politización de los municipios, pero sólo llegó a aplicarse en las postrimerías del régimen, manteniéndose entretanto la designación de los alcaldes en manos de Pinochet.

Otra medida insensata era mantener el exilio que afectaba a miles de personas. Era una herida abierta y después de trece años de gobierno militar carecía de toda justificación política. El argumento que las autoridades daban para mantenerlo —controlar el terrorismo— era absurdo ya que los terroristas jamás pedían permiso para entrar al país.

Con la sensación que el país estaba empantanado, viajé al Reino Unido en 1986 para dar a conocer los planteamientos de la Unión Nacional. Fue un viaje provechoso, porque me confirmó el inusitado interés que generaba en Europa el caso chileno, y específicamente el Acuerdo Nacional.

Un historiador inglés —creo que fue Harlod Blackemore— que conocía Chile como la palma de su mano, me hizo una broma que se me vino a la mente el domingo en que las radios y los canales informaban frenéticamente del sangriento atentado al general Pinochet.

—El Acuerdo Nacional tendrá mucha importancia. Es un punto de quiebre en muchos sentidos. Pero tiene un error original —me dijo el profesor.

—¿Cuál? —le pregunté intrigado.

—Debió firmarse no la última semana de agosto, sino la primera de septiembre. En Chile todo lo verdaderamente importante tiene lugar en septiembre— y despachó una lista interminable: Primera Junta de Gobierno, suicidio de Balmaceda, matanza del Seguro Obrero, aprobación de la «ley maldita», elecciones presidenciales, golpe y suicidio de Allende, asesinatos de Prats y Letelier, plebiscito para aprobar la constitución y varios más que no me acuerdo.

Dicho y hecho: septiembre era el mes. Si el debate durante el año había discurrido entre tópicos reiterados y desgastados —sin moverse ni para adelante ni para atrás— el descubrimiento de las armas de Carrizal Bajo, ingresadas al país por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez con ayuda cubana, y el atentado contra el

general Pinochet el domingo 7 de septiembre de 1986 modificaron completamente el cuadro político.

Fueron cuestiones muy graves y de enorme repercusión. Súbitamente el discurso antisubversivo del régimen dejó de ser simple retórica represiva y se llenó de contenido concreto. La opinión pública independiente, por primera vez en mucho tiempo, dimensionó el tipo de opciones que estaban en juego. La oposición democrática quedó a la intemperie tras comprobar con decepción que su estrategia de movilización social había sido usada como mascarón de proa de objetivos extremistas que nada tenían que ver con la restauración de la democracia. La visita que poco después hicieron a Chile un par de funcionarios del Departamento de Estado tuvo gran importancia. Reunidos con los dirigentes de la Alianza Democrática, su mensaje fue muy directo.

—La cantidad de armamento es enorme. Pero, además, el embalaje permite mantenerlo oculto por años sin que se dañe.

Cualquiera que oyera la advertencia sacaba la conclusión: el armamento era para dos revoluciones. Una contra Pinochet, otra para alcanzar el poder después de que éste fuera derrotado. Nada nuevo: los comunistas siempre fueron maestros para apoderarse de las revoluciones desde adentro.

De la noche a la mañana la oposición democrática tomó conciencia de su ingenuidad. El PDC se apresuró en separar aguas y revisar críticamente la confianza que había depositado en jornadas de protesta que se le habían escapado de las manos. Por esos días, José Joaquín Brunner hizo circular un *paper* de notable lucidez que terminó por restar todo fundamento intelectual a las movilizaciones, abogando —antes que fuera demasiado tarde— por un dramático cambio de estrategia.

Sin remilgos ni subterfugios, afirmaba que la movilización social había «fracasado» por «débil, ocasional, fragmentaria» y por chocar sistemáticamente «contra su propia ambigüedad en cuanto a las formas de lucha que tolera o acepta, lo que en el extremo resta credibilidad a la oposición en su conjunto y favorece a la oposición armada y más radicalizada».

Su conclusión era que la oposición se «encuentra en una posición extremadamente débil, debido a que ha venido desarrollando una estrategia hegemonizada por el MDP y que, una vez fracasada ésta, la deja desprovista de una estrategia de lucha». Su propuesta era más que clara: un cambio total de estrategia hacia la búsqueda de una salida política que «no puede crearse al margen de las condiciones establecidas por la Constitución de 1980».

Lo definitivo es que ese año, y sobre todo después del atentado a Pinochet, el debate sobre la transición quedó completamente agotado.

La transición que no fue

Para la UN, el 86 fue un año de organización interna, elaboración intelectual y afianzamiento de nuestras relaciones internacionales. Una vez más el principal gestor fue don Pedro Ibáñez. Los políticos de pura opinión pública suelen subestimar estas tareas. Es en estos dominios donde la política toma sus resguardos frente a dos de sus mayores riesgos: el caciquismo personalista y la fugacidad cortoplacista. Sin organización, sin reflexión interna, sin instancias de formación, los partidos no son nada, por mucho que en un momento dado logren capturar una importante fracción del electorado. Hicimos —recuerdo— un trabajo muy fuerte en las universidades, cuyos frutos pudimos cosechar muy poco tiempo después a través de un grupo de dirigentes de gran categoría.

De la revista *Renovación,* que se publicó desde 1984 hasta 1987, se llegaron a distribuir más de 50 mil ejemplares por número. El director responsable de la revista —y no pocas veces también el financista— era Roberto Palumbo, y la editora, Fernanda Otero, quien ya comenzaba a desplegar los rasgos que la distinguen: estudiosa, comprometida con sus causas, inteligente y… muy porfiada.

El acogedor departamento de don Pedro casi era la casa matriz de la revista. Aparte de Roberto y la Fernanda, Juan Luis

Ossa, que siempre se reservaba la última palabra a la hora de redactar los textos, don Fernando Maturana, divertido y agudo, y yo mismo, formábamos el equipo permanente. Si alguien hubiera preguntado qué le sobraba a don Pedro, la respuesta habría sido generosidad y vocación de servicio. Y qué le faltaba: horario. Jamás tuvo noción del reloj.

Un editorial del *Renovación,* titulado «La transición que no fue», clausuraba el tema en diciembre de 1986.

«Toda transición bien concebida supone el reemplazo progresivo de los mecanismos de un régimen autoritario por otros de tipo democrático, combinando adecuadamente elementos de cambio y de continuidad.

«1986 demostró que la transición así concebida ya no se produjo. Y tampoco se produjo el derrumbe del régimen a que apostó la oposición y por el que se jugó el comunismo, ya que éste en definitiva se afianzó.

«A partir de ahora, el tema de fondo ya no será la transición sino la sucesión presidencial. El país se verá enfrentado a una disyuntiva electoral que, más que culminar una etapa de avance progresivo a la democracia, marcará abruptamente el incierto comienzo de otra».

Al final del año era evidente que las tareas que nos habíamos propuesto estaban sobredimensionadas para el tamaño de nuestra organización. En dos palabras, éramos un partido demasiado nuevo y pequeño como para pretender —simultáneamente— que un gobierno militar todavía muy poderoso cambiara su diseño institucional, y una alianza de partidos formada por colectividades grandes —con mucha historia, recursos, estructura y raíces— cambiara en forma radical de planes y estrategias.

Si queríamos influir más, teníamos entonces que ser más fuertes, organizarnos mejor y aprender a interpretar a más gente.

El desafío era ineludible: había que encarar la unidad de la centroderecha.

Tarea de titanes

Sí claro, pero era una tarea de titanes que debía partir desde un buen diagnóstico de las causas que generaban la fragmentación de la derecha. El tema había estado siempre arriba de la mesa y Juan Luis Ossa lo abordó en un artículo notable. El «flaco» y su mujer, Lucía Santa Cruz, eran voz autorizada a la hora de abordar cualquier tema importante.

El análisis partía destacando que a diferencia de nuestros adversarios, los derechistas se apresuraban a definirse como «independientes». ¿De dónde provenía esa actitud? A su juicio, de «una idiosincrasia marcadamente individualista y con frecuencia egoísta, que se afana en alcanzar éxitos personales mientras observa con indiferencia la actividad pública o mira con recelo los partidos, en cuanto éstos podrían exigir algún compromiso o limitar la autonomía personal». Por esta línea de análisis, el artículo explicaba «la espontánea adhesión de muchos derechistas hacia los caudillos políticos de tipo personalista, hábito que, por una parte, permitía a ese electorado desentenderse de la actividad política y, por la otra, delegar sus responsabilidades en expectativas mesiánicas».

Desde esta perspectiva, Juan Luis verificaba que la dispersión había aumentado durante el gobierno militar tras la autodisolución del PN, el receso partidista y el constante discurso de «desprestigio a los partidos y a los políticos imputándoles —sin distinciones— todos los males». También influían las lógicas discrepancias frente a la gestión del gobierno militar —en un cuadro general de apoyo a su tarea— en materias concretas, como por ejemplo, la utilización de determinados instrumentos de política económica.

Dos elementos había que añadir. El primero era que algunos derechistas atribuían a la «actividad política una finalidad primordialmente defensiva, razón por la cual prefieren instintivamente el autoritarismo militar». El segundo consistía en una distinta manera de apreciar el pasado: «muchos que fueron deliberada e injustamente agraviados entre 1964 y 1973 siguen

todavía reaccionando bajo el influjo de esa experiencia; otros, también agraviados durante ese lapso, creemos que —sin olvidar esas experiencias— es indispensable realizar un esfuerzo por superarlas, para así poder transmitir al resto del país la misma actitud». Viniendo de quien venían, había grandeza en esas palabras. Juan Luis Ossa fue torturado en Investigaciones durante el gobierno de la Unidad Popular.

En la derecha necesitábamos un antídoto para terminar con la fragmentación y fórmulas para dejar atrás las causas que estaban en la génesis del divisionismo. Era efectivo que la falta de una organización partidista en los últimos diez años afectaba, pero también influían otros factores: la mayor o menor cercanía de unos y otros respecto del gobierno, las discrepancias en torno a la transición y a la arquitectura constitucional del régimen, las distintas perspectivas sobre el sistema democrático, las aproximaciones disímiles acerca de la forma de avanzar hacia una economía cada vez más abierta y competitiva.

A fines de 1986, diversos grupos se disputaban la representación de la derecha y aún no estaba claro quiénes iban a perdurar y quiénes a perecer.

Los grupos nacionalistas, y particularmente el MAN (Movimiento de Acción Nacional), eran un enigma y el hecho de estar fraccionados en distintos liderazgos los desdibujaba todavía más. En general, los nacionalistas seguían reiterando su histórica tendencia a la anarquía. Además, el momento no era propicio para ellos, desde que la recuperación económica en marcha estaba debilitando el estatismo ancestral de su discurso.

El FNT (Frente Nacional del Trabajo), que se había articulado en torno a reivindicaciones económicas y que apelaba al mundo del trabajo, recogía el eco de los planteamientos que Jaime Larraín inyectó en algunos movimientos políticos en los años 50, y a esta sensibilidad unía un fuerte nacionalismo, expresado en su vaga reivindicación de los rasgos más definitorios de la chilenidad. Pero allí tampoco había un partido con ideario propio. Sin Jarpa el FNT era inconcebible.

El PN tampoco había logrado superar los niveles mínimos

de organización. La utilización del nombre del partido —que después de todo era su principal activo político— se fue desgastando y ya era evidente que los ex nacionales no podían reivindicar para sí mismos la categoría de herederos únicos de lo más representativo de la derecha. Por lo demás, el PN se había decantado hacia la Concertación, ámbito donde ya estaban el Partido Republicano (agrupado en torno a don Hugo Zepeda) y el Movimiento Liberal (nucleado alrededor de Hernán Errázuriz).

Así las cosas, las dos fuerzas de mayor perfil eran claramente la UN y la UDI. Ambos grupos habíamos ido coincidiendo en materias económicas y las mayores diferencias radicaban en la distinta apreciación del articulado permanente de la Constitución y, más que eso, en la independencia frente al gobierno. En rigor, la Unión Demócrata Independiente nunca fue demasiado independiente; nosotros, en cambio, estábamos siéndolo cada día en mayor grado.

A partir de ese cuadro político e inducida por la inminencia de un plebiscito que ponía de manifiesto que el régimen militar no iba a ser eterno, la idea de la unidad fue madurando y ganando espacio. El plebiscito iba a poner al país frente a un dilema electoral —quizás si aún más dramático que el del 70 ó el 64— y el tiempo estaba corriendo.

La promulgación de la ley de partidos políticos favoreció las intenciones unitarias. Sin ser un umbral prohibitivo, iba a costar conseguir las 30 mil firmas exigidas por la normativa legal. Pero si los partidos llegaban a inscribirse separadamente, después sería casi imposible fusionarlos. Una vez constituidos, los grupos políticos tienden a priorizar más las diferencias —lo que les concede identidad— y no lo que comparten con otras agrupaciones.

Poco a poco me fui convenciendo de que había que actuar con prontitud. El escenario de ese momento no sólo no se repetiría, sino que tampoco duraría. Finalmente, también ayudaba la voluntad de unidad que expresaba con vehemencia la ciudadanía de la centroderecha. No podía entender la dispersión, y comprobaba con alarma que ante una alianza opositora cada

vez más consistente, la derecha continuaba desarticulada y en permanente conflicto.

—¿Qué esperan ustedes para ponerse a trabajar juntos?—. Era la crítica más frecuente que recibíamos.

Un fin de semana largo en Cachagua, precisamente en casa de Juan Luis y la Lucía fuimos proyectando una gestión para unir a la derecha.

—Ahora tiene que resultar. No se resiste otro llamado más que quede en nada —decía Juan Luis.

Era cierto. Durante los últimos años eran incontables los llamados que se ahogaban en su propia retórica. El esfuerzo consistía en inventar una fórmula distinta, que en sucesivos borradores fue adquiriendo fisonomía.

Tomada la decisión de convocar a la unidad —y luego de haber consultado a nuestros dos próceres, don Pedro y don Pancho— la comisión política de UN aprobó la iniciativa.

Al día siguiente —en una operación rápida— la directiva arropada por Bulnes e Ibáñez, y sin decir agua va, llamó a formar un partido que representara a todos los grupos de centroderecha por igual.

La unidad de las tribus

El aspecto más original del llamado era el procedimiento que proponíamos para forjar la unidad. El documento lo detallaba paso a paso con precisión milimétrica. Primero: las directivas renunciarían a sus cargos y a las denominaciones de los partidos que dirigían. Segundo: las agrupaciones se fusionarían de inmediato y designarían una directiva y un tribunal supremo provisorios, incorporando figuras independientes. Tercero: esos organismos prepararían una declaración de principios y un estatuto interno, constituirían legalmente el partido, organizarían la incorporación de afiliados y, completada ésta y alcanzadas las metas legales, convocarían a una primera convención nacional. Cuarto: a tal convención asistirían delegados, según un sistema

que «premiaba» la representación de las provincias que mejores resultados hubieran tenido en el reclutamiento de militantes. Quinto: tal convención aprobaría definitivamente la declaración de principios y los estatutos, elegiría democráticamente a las autoridades y fijaría la línea política de la colectividad.

La declaración tuvo impacto y fue recogida ampliamente por los medios de comunicación. A todos los pilló de sorpresa. Los teléfonos empezaron a sonar sin descanso en nuestra sede. Desde el primer minuto me di cuenta de que habíamos acertado un pleno. Las reacciones recogidas durante el día hablaron por sí mismas.

—Sólo puedo manifestar que la UDI estudiará el llamado con la mayor atención y con la disposición que merece —dijo, cauteloso pero abierto, Jaime Guzmán.

—No basta con agrupar gente de derecha y formar un tercio de la opinión pública. No sacamos mucho con acuerdos de directiva, si la mayoría de la opinión pública está orientada hacia una posición de centro —dijo Jarpa, reticente—. Además, queremos saber si se van a retirar del Acuerdo Nacional —agregó, echándole pelos a la sopa.

—Me parece positivo —expresó de la boca para afuera Germán Riesco, en su calidad de presidente subrogante del PN, aunque lamentó que el llamado se extendiera hacia sectores «donde no me parece clara la vocación democrática» en clara alusión a la UDI. A nosotros nos reservó otra simpatía: «Es bueno que vuelvan al redil, desde el cual nunca se debieron ir. Es la vuelta del hijo pródigo». Y para fijar mejor su posición, agregó que la derecha debía unirse y luego, «buscar una concertación con fuerzas distintas al sector nuestro».

Así las cosas, no iba a ser fácil llegar a puerto, pero el objetivo de la convocatoria estaba logrado. Quienes rechazaran la unidad tendrían que argumentar muy bien o pagar un alto costo. Además, tal como pensábamos, la renuncia a todos los cargos directivos y al nombre mismo del partido, caló extraordinariamente bien en la opinión pública.

La fórmula tenía la ventaja de resolver los dos mayores problemas contra los cuales se habían estrellado las propuestas

unitarias anteriores. El primero era quién dirigiría el nuevo partido. El segundo, cómo se resolverían las diferencias internas. No es jactancia decirlo: hasta ese momento nadie había encontrado un mecanismo para resolver los problemas de la conducción y la orientación política.

Era entendible. Ninguno de los dirigentes de los partidos existentes quería renunciar a una posición expectante y como nadie sabía cuánto «pesaba» cada partido, todos tenían la legitima expectativa de estar encabezando un grupo político de insospechado futuro. La fórmula propuesta resolvía de plano ese problema.

Mínimo común denominador

—Andrés, no traiga a la UDI. Es imposible entenderse con ellos —dijo Jarpa cuando almorzamos en el Club de la Unión.

—También hay que dejar afuera todo lo que tenga olor a Chicago —agregó Ángel Fantuzzi.

—¿No será mejor fusionar sólo a la UDI con la Unión Nacional? —me preguntó Jaime Guzmán cuando lo visité en su departamento—. El período de Jarpa al frente del Ministerio del Interior fue muy duro para mi gente. Y te advierto que veo imposible cualquier entendimiento con el Partido Nacional. No representan a nadie y es un hecho que se fueron a la oposición.

—Queremos pedirte una serie de precisiones —me dijo Germán Riesco, cuando lo visité en la vieja sede del PN de calle Compañía. Acto seguido, lejos de preguntarme nada, descalificó tajantemente a la UDI y al FNT e insistió en la estrategia política de convergencia hacia la Alianza Democrática.

¿Qué duda podía caber? La unidad no estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, los editoriales de los diarios eran unánimes en apoyar la iniciativa. Esta vez, al menos el divisionismo saldría caro.

La idea ganó terreno donde más importaba: en la opinión pública y en los sectores independientes afines a la centroderecha.

La unidad era compleja, pero posible. Y había otro elemento clave: nadie cuestionaba la validez del procedimiento ideado para alcanzar la unidad.

Los partidos reaccionaron finalmente de distinta manera. La UDI convocó a una sesión especial de la comisión política para tratar el tema. El FNT nombró una comisión *ad hoc* dirigida por Juan de Dios Carmona. Las mayores reticencias seguían estando en el PN.

—¿Éste es un partido para Pinochet? —me preguntó Raquel Correa en *El Mercurio.*

—Estamos haciendo un partido que trascienda a Pinochet el 89. Este no será un partido de apoyo al gobierno.

—¿Por qué prescindieron de Avanzada Nacional?

—Porque somos partidarios de la democracia representativa, de la economía social de mercado y estamos llamando a formar un partido independiente del gobierno. Ninguno de esos elementos conforma la plataforma de Avanzada Nacional.

—¿Por qué dejaron fuera a los partidos Republicano y Liberal?

—Porque forman parte de alianzas opositoras, no reconocen la legitimidad de la Constitución y no aceptan los plazos de término del gobierno militar. En todo caso, nos interesa que en la futura democracia estemos todos juntos.

—¿Qué aporta el FNT?

—La imagen de Jarpa, su capacidad de trabajo y de mucha gente que lo sigue.

—¿Qué aporta la UDI?

—Un grupo de profesionales altamente calificado, un nuevo estilo de hacer política, la voluntad de imprimirle seriedad a la acción política y escaparle a la demagogia. Y su capacidad de organización.

—¿El Partido Nacional?

—Experiencia. Talento político de quienes han sido personeros importantes de los partidos de derecha.

—¿Y qué aporta UN?

—Yo creo que somos el mínimo común denominador entre los cuatro.

—Supongamos la siguiente situación: el general Pinochet candidato único designado por la Junta. ¿Qué hace Andrés Allamand el día del plebiscito?

—Le voy a contestar en la víspera de la elección. Pero yo creo que pensando en los intereses superiores del país, la presidencia del general Pinochet debe terminar definitivamente en 1989.

Esta última respuesta provocó reparos en mi propia gente.

—Te equivocaste —fue el comentario que recogí al llegar al día siguiente a la sede de la UN. Sentía también haber sido extremadamente fiel a la estrategia y al pensamiento de todos.

—¿Dónde está el problema? —pregunté intrigado.

—Tus declaraciones les tienen que haber caído pésimo a los futuros socios. Especialmente a los más pinochetistas —fue la respuesta.

—Mejor así —dije—. Que queden claras las cosas desde el principio.

Lo concreto es que, disgustados o no con mis palabras, el 24 de enero de 1987, los dirigentes de la UDI resolvieron acoger nuestro llamado unitario, postulando la «inmediata fusión» con nosotros. La UDI acogía nuestra propuesta «en el entendido que tal fusión quedaba abierta a los otros dos conglomerados que han sido destinatarios de la convocatoria de Unión Nacional en la medida que en ellos se constate —leal y recíprocamente— un grado similar de concordancia».

La razón estaba a la vista: para Guzmán y su gente, el acuerdo entre nosotros era suficiente. Si los demás querían sumarse, bien, que lo hicieran, pero de lo contrario no se dilataría la convergencia, ni mucho menos quedaría la fusión supeditada a que otros resolvieran adoptar idéntico camino. Tal actitud, resuelta y sin ambages, hizo desaparecer las reticencias que hasta ese momento exhibía el FNT.

—Estamos de acuerdo en una incorporación sin condiciones —declaró Jarpa al día siguiente.

—Ya somos tres en esta iniciativa —agregó Ángel Fantuzzi.

En el PN las cosas se dilataron más.

Así y todo, hacia fines de enero se había avanzado rápido y sobre ruedas. La acogida a nuestro llamado no podía ser más satisfactoria. Quedaba encontrar el nombre del presidente y, pese a que nos devanábamos los sesos, nadie daba en el clavo.

Nace una estrella

—Tengo el nombre —me alcanzó a decir Carlos Reymond, *Talo,* un destacado dirigente de gran experiencia política y hábil como pocos para sacar adelante gestiones complejas—. Si resulta, el problema está resuelto.

La verdad es que el problema había ido en aumento. Los nombres que se proponían no calzaban con el propósito o simplemente generaban inmediato rechazo en alguno de los grupos… y siempre alguien, con buenas maneras, se encargaba de hacerlo saber. El tiempo pasaba y el nombre no aparecía.

—Es Ricardo Rivadeneira —dijo Carlos Reymond.

—¿Quién es? —pregunté yo.

—Lo conozco —me dijo Jarpa cuando le conté la idea—. Es de San Fernando. No va a ser fácil convencerlo.

—Es la persona más excéntrica que he visto —dijo Guzmán cuando supo—, pero puede resultar.

¿Su perfil? Abogado, miembro del Consejo de Defensa del Estado, poco más de 50 años, independiente pero siempre cercano a la política. Los que rebuscaron en su historial anotaban que había trabajado con Jorge Prat, cuando éste había sido ministro de Hacienda de Ibáñez. Era amigo personal de Arturo Fontaine y Gonzalo Vial. Inteligente, prestigiado abogado penalista. Sin duda, hombre de derecha y de derecho. Moralmente intachable. La imagen misma de la integridad personal y familiar. A mí terminaron de convencerme dos recientes actuaciones suyas. Había integrado una comisión sobre el exilio formada por el propio gobierno hacia 1982 sugiriendo lo único razonable: ¡que terminara ya! Y, en representación del Consejo de Defensa del Estado, había actuado con particular

energía en el caso del Banco de Chile. Yo leí dos atributos que no siempre van juntos: independencia política e independencia económica.

Con el tiempo trabé con Ricardo y su mujer, Mercedes Hurtado —todo un personaje ella misma—, una amistad que va mucho más allá de la política. En su casa siempre cabe alguien más en la mesa y los problemas se miran a la luz del deber ser. Más aún, Ricardo estuvo presente en una y otra forma en todos los momentos importantes que vinieron después. Y que no fueron pocos.

De una larga lista de nombres —desde Carlos Cáceres a Manuel Feliú, desde Jorge Cauas a Beltrán Urenda— el de Ricardo fue el que generó mayor aceptación. Ahora, sólo quedaba un escollo: convencerlo.

Carlos Reymond, que había dado con el nombre, planeó una amistosa emboscada. Le pediría a Ricardo Rivadeneira que viniera a su oficina donde, sin previo aviso, se encontraría con Jarpa, Carmona, Guzmán y yo.

El plan funcionó perfecto.

—Hay cuatro personas que quieren hablar contigo —le venía diciendo Carlos Reymond al momento de introducirlo a la sala de reuniones.

Ricardo nos saludó, se sentó con cara de estar entre intrigado y nervioso. De inmediato, Jarpa, sin darle mucho tiempo para reaccionar, le reseñó la importancia política del proyecto en que estábamos embarcados.

Ricardo escuchaba y asentía, sin decir palabra, como diciéndonos «que bien, los felicito, pero… ¿qué vela llevo yo en esta procesión?». Al final de la intervención de Jarpa, Ricardo se abrió. Dijo que compartía la idea de unificar a toda la derecha en una gran tienda política, agregando que todos los que suscribían este ideario político no podían menos que estar dispuestos a colaborar.

—¡Qué bueno entonces que quieras participar! —le dijo Jarpa al vuelo— porque hemos pensado que tú eres la persona adecuada para dirigir ese partido.

Después de meditarlo unos días, con el fuerte impulso de su mujer, Ricardo Rivadeneira aceptó ser presidente de Renovación Nacional.

Convenir el nombre del partido fue más fácil. En una reunión en casa de Carlos Reymond se abordó el tema.

Jaime estaba en una idea poco tradicional. Pensaba en algo asi como «Partido del Progreso». Yo, por mi parte, no tenía nada preconcebido, sino una idea de Luis O. de Castro, secretario general de la UN, y Juan Luis Ossa: Renovación Nacional. Después de darle vueltas un buen rato entramos a tierra derecha.

—Tiene que estar el concepto de «nacional» —dijo Jarpa.

—Pero pongámosle algo que mire para adelante —agregué yo. ¿Qué tal Renovación?

Al tiro sonó bien: Renovación Nacional. Todos asintieron.

—¿Quieres agregarle algo? —le preguntó Ricardo Rivadeneira a Jaime Guzmán.

Seguro que éste le agrega lo de independiente, temimos varios. ¿Renovación Nacional Independiente? Habría sido un nombre a lo Hugo, Paco y Luis: cada uno ponía una palabra.

Jaime, leyéndonos la mente a todos, sonrió y luego de esperar un poco selló el asunto:

—Está bien así. Además lo de independiente sería redundante, ¿no es cierto?

—El país pasará a vivir momentos de definición en el campo político y electoral, en plazos que son inminentes y abrumarán a los desprevenidos. Buscaremos y estaremos abiertos a concertar fórmulas políticas civilizadas de convivencia. Acataremos invariablemente la libre determinación del pueblo. Aspiramos a ser gobierno si el pueblo nos elige, pero aceptaremos ser oposición si ésa es su voluntad. Se oirá poco mi voz, porque mi misión consistirá mucho más en oír que en hablar, mucho más en servir que en sobresalir... Terminada esta etapa pretendo volver a mis actividades privadas, dejando el puesto a quien, como yo ahora, sienta que no es tiempo de eludir responsabilidades —declaró Ricardo Rivadeneira al asumir formalmente su puesto.

La mesa se completó con un vicepresidente por cada grupo (Guzmán, por la UDI, Carmona por el FNT —ya que Jarpa adujo «no tener tiempo»— y yo por la UN). Jaime Guzmán propuso a Gonzalo García Balmaceda como secretario general. Gonzalo es abogado, pero había derivado a la administración de empresas y se había desempeñado con éxito como gerente general de la FISA. Serio y organizado, era garantía para todos. Su nombre fue aceptado de inmediato. Gonzalo, que nunca había tenido militancia política, era hijo de Víctor García Garzena, un muy notable hombre público, primer presidente del Partido Nacional y destacado senador. En su caso, en cierto modo, la historia se repetía: el carácter independiente de don Víctor había facilitado su designación como primer presidente del PN en 1966. Veinte años después, un hijo suyo acometía una tarea parecida.

La comisión política de RN se integró con cuatro miembros de cada partido y ocho independientes nombrados de común acuerdo. La UDI nombró a Pablo Longueira, Andrés Chadwick, Javier Leturia y Luis Cordero. El FNT, a Juan de Dios Carmona, Willliam Thayer, Luis Angel Santibáñez y Gonzalo Eguiguren. Nosotros, a don Francisco Bulnes y don Pedro Ibáñez, a Juan Luis Ossa y Alberto Espina.

Para mí no fue fácil hacer esta última designación: don Fernando Maturana, que me había acompañado con gran lealtad desde 1983, reclamaba con buenos argumentos ese puesto para sí. Yo resolví entregárselo a Alberto Espina, no sólo por sus méritos sino porque no quería que la UDI expresara el monopolio de los jóvenes. Había otra razón, rara en política: siempre hemos actuado como hermanos.

La comisión política se completó con ocho independientes que nunca lo fueron tanto: Patricio Guzmán Mira, Carlos Alberto Cruz, Rafael Vicuña, Luis Fidel Lobos, Ernesto Silva, Aquiles Cornejo y Mario Cáceres, y la única mujer, Lucía Maturana.

Ricardo Rivadeneira y yo éramos partidarios de seguir adelante con la fusión, iniciando desde luego la constitución del

partido pero dejando siempre la puerta abierta al PN. Jarpa y Guzmán se opusieron tajantemente.

En todo caso, tres meses más tarde el PN nos dirigió una larga carta con varias exigencias, pero ni aun cumpliéndolas sus directivos nos garantizaban la integración con nosotros. Nos decían, sí, que en tal caso «sería mucho más fácil». ¡No hubo quién no interpretara la respuesta como una argucia!

Al final, el sábado 7 de febrero de 1987, afinamos la declaración que se publicaría al día siguiente, anunciando con formalidad el nacimiento del nuevo partido. Había transcurrido exactamente un mes desde nuestro llamado unitario. Yo estaba feliz. Ese día cumplía 31 años.

El símbolo de RN, una estrella en líneas tricolores, fue diseñado por el arquitecto Carlos Alberto Cruz.

—Para que mantenga la idea de nuestra bandera. La idea de patria. Y para que exprese la unidad. Por eso las líneas se entrecruzan. Ojo, no es una estrella cualquiera. Esta estrella tiene fuerza.

Es cierto: siempre tuvo fuerza; casi nunca, unidad.

Señal de independencia

Todos nos fuimos de vacaciones. Ricardo Rivadeneira partió, como siempre, a la cordillera y quedó inubicable. Y justo el panorama nacional se complicó por esos días con el impactante testimonio que entregó Armando Fernández Larios en Estados Unidos, vinculando al Ejército y a la DINA con el asesinato de Orlando Letelier.

Nunca tuve dudas de que la forma como el nuevo partido reaccionara frente a ese hecho marcaría su perfil. Antes que nadie lo imaginara Renovación debería demostrar hasta dónde llegaba su independencia frente al gobierno.

Junto a Jaime Guzmán emitimos el martes 10 de febrero de 1987 una declaración expresando, como vicepresidentes de RN, nuestro estupor «pues por primera vez un oficial del Ejército de

Chile admite su relación personal con el crimen de Orlando Letelier e involucra en el mismo a su superior directo». Este último alcance lo agregó Jaime de puño y letra: su rompimiento con el general Contreras había sido definitivo y frontal.

Pedíamos a las autoridades políticas, judiciales y militares agotar los medios para esclarecer el caso y sancionar a los responsables con todo el rigor de la ley.

Fue sugestivo que Juan de Dios Carmona, el otro vicepresidente, finalmente se excusara de firmar la declaración. Cuando le dije que no podíamos como partido quedarnos callados frente al escándalo, coincidió conmigo pero me pidió que hablara primero con Jaime Guzmán. Una vez que lo hice y convine con él el texto de la declaración, se la leí a Carmona, pero éste se fue por las ramas. En breve, no se atrevió. Muy poco tiempo después —a mediados de junio del 87— Jarpa lo desplazaría cuando decidió asumir personalmente el cargo que había rechazado seis meses antes.

El asunto no era anecdótico, ni mucho menos. Porque las decisiones de RN estaban llamadas a tener amplia repercusión nacional e impactar sobre el gobierno militar, embarcado, a su turno, en su propia ruta política. La Moneda no podría mirar impasible lo que pasaba al interior de la colectividad que aglutinaba a toda la derecha, más aún considerando que su intervención podía marcar la diferencia entre ganar o perder el plebiscito. O que Pinochet fuera o no el candidato.

Así las cosas, si bien el nacimiento de Renovación Nacional satisfacía las viejas aspiraciones de unidad compartidas por la ciudadanía proclive a la centroderecha, la fundación del partido llenaba de ansiedad y sobresalto a los que entendían que un cuadro de dispersión era mucho más funcional a sus designios y estrategias. Una derecha amplia, organizada y poderosa, salvo que fuera dócil, iba a complicar el naipe.

Quizás por primera vez, y desde los inicios del gobierno militar, una página de la historia política de la derecha no había sido escrita en La Moneda.

El régimen no se quedaría de brazos cruzados.

Capítulo VI

¡Soltar amarras!

La formación de Renovación Nacional fue un ejemplo atendible de racionalidad política. En contraste —estamos a principios del año 87— la oposición al gobierno militar todavía se desgastaba en el divisionismo y los errores estratégicos. Más aún, en sus filas rondaba el pesimismo y crecía la exasperación.

—Cuando tenía 20 años, en Chile había mucha injusticia y desigualdad, pero había libertad. Al cabo de 50 años, hay más injustia y no tenemos libertad. ¡Somos una generación fracasada! —le dijo en una entrevista Patricio Aylwin a Mónica González.

Que la derecha hubiese puesto su casa en orden terminó siendo, más que una ventaja, sólo una ilusión.

Porque el orden, efectivamente, duró poco.

En cualquier caso, no partimos mal. En abril completamos los trámites para la constitución legal.

Completar 33.500 firmas en todo el país era un desafío difícil. Nunca antes en la historia chilena un partido de derecha había tenido una militancia de esa magnitud.

A mediados de marzo, el gran hecho político fueron las entrevistas de prensa que otorgó Ricardo Rivadeneira, en las cuales tomó más distancias respecto del gobierno de lo que cualquiera de nosotros habría anticipado.

—El exilio, sencillamente, debe terminar. Analizar caso por caso es injusto y arbitrario. ¿En mérito de qué se juzga?

—Habría preferido que la intervención de las Fuerzas Armadas hubiera sido más corta.

—Sustituiría el plebiscito por elecciones abiertas, competitivas y libres.

—Preferiría que fueran los partidos políticos los que eligieran candidatos para proponerlos al país y no los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que ¡jamás! deben exponerse a una derrota.

—No creo que el general Pinochet corresponda a la imagen de un gobernante portaliano. Se podría comparar con O'Higgins pero no con Portales, que era un gran creador de instituciones y se retiraba para verlas funcionar. El gobernante personalista se imagina que nada puede funcionar sin su permanencia en el poder.

Nadie se extrañó demasiado cuando luego de estas declaraciones, *La Nación,* el diario del gobierno, inició una fuerte campaña contra el presidente del partido. El alegato de Ricardo cayó pésimo en La Moneda.

Tres son multitud

Constituido como colectividad política a partir de tres grupos que tenían historias y perfiles claramente diferentes, al interior de Renovación Nacional se comenzaron a dar equilibrios y contrapesos que nadie pudo prever.

La identidad política de la UDI era muy fuerte. Tenía ventajas no sólo en relación a los restantes ex grupos de la derecha sino, como vino a comprobarse después, frente a todo el espectro político chileno: un liderazgo interno indiscutido, un sentido de la disciplina similar al de los cuarteles, un estilo de hacer política inconfundible, un sentido de pertenencia al grupo tan profundo como intransable, una mística salida casi de otra época y una vocación de poder sin freno.

Puesto que el Frente Nacional del Trabajo respondía a una atrasada concepción del desarrollo económico, no había dudas

de que la UN y la UDI tendíamos a coincidir mucho más que Jarpa y su gente en el modelo de economía de mercado.

Pero la cosa cambiaba cuando pasábamos a la política. Porque en este campo la UDI y el FNT terminaban invariablemente siendo mucho más pinochetistas que la Unión Nacional. Unos y otros eran también, a la primera de cambio, críticos de las «debilidades» de la democracia liberal.

Si también generacionalmente la UDI y UN eran grupos mucho más afines, lo cierto es que en términos estrictamente afectivos nos sentíamos más próximos al FNT. Después de todo, habíamos coincidido con Jarpa, en el antiguo PN y en las luchas contra la UP. Por mucho que con frecuencia no entendiéramos sus pasos políticos, su figura nos seguía inspirando respeto y aprecio.

En términos de trabajo político real –organización, contacto con las bases, formación de cuadros—, la UN y la UDI en poco coincidían con las corazonadas e improvisaciones del FNT.

En concreto, las antiguas identidades de UN y el FNT tendieron a desaparecer y la UDI, a la inversa, nunca abdicó de su identidad. Ni siquiera hizo un intento,

La forma en que se comportaron estas identidades una vez constituido el partido, daría para un estudio sobre las dinámicas de grupo.

Uno de los episodios más elocuentes se produjo cuando Jaime Guzmán —movido por una vieja aspiración— consiguió el acuerdo de Jarpa para proponer a la comisión política una iniciativa legal que hiciera más rigurosa la proscripción al comunismo. La iniciativa pretendía que los movimientos y personas sancionadas en virtud de esa disposición no podían ser sujeto lícito de opiniones políticas y, por ende, ningún medio de comunicación podía recoger sus puntos de vista y ni siquiera mencionarlos.

A nosotros nos parecía que ello iba más allá de la propia Carta Fundamental y entraba en franco conflicto con los derechos de información y opinión. Era claro cuál iba a ser la réplica

opositora: el gobierno estaba aplicando un verdadero «apartheid» cívico, reeditando la vieja «ley mordaza».

Cuando el tema fue debatido en la comisión política, sufrimos una derrota aplastante. 17 miembros aprobaron la propuesta de Guzmán y Jarpa; la posición nuestra apenas consiguió tres votos: el de Ossa, Espina y el mío, ya que ese día no asistieron ni Bulnes ni Ibáñez. Ni los independientes que nosotros mismos habíamos llevado a la comisión política nos acompañaron.

El vuelo del boomerang

En cualquier caso, más allá de ésta y otras divergencias, desde el principio el partido estuvo tensionado centralmente por el mecanismo de sucesión presidencial.

—Contrariamente a lo que algunos piensan, el plebiscito favorecerá electoralmente sólo a la oposición —declaré a fines de mayo de 1987.

—La oposición piensa lo contrario. Está lanzada por una campaña de elecciones libres y rechaza el plebiscito —me contra preguntaron.

—La oposición se equivoca hasta para darse cuenta de lo que le conviene. El plebiscito resolverá todos los problemas en que la oposición se ha debatido estérilmente sin atinar a nada. La campaña por el *No* se puede hacer incluso sin candidato y sin ofrecer más programa que la derrota del régimen. Además, el plebiscito unificará a la oposición democrática con la marxista, y el gobierno ni siquiera podrá reprochárselo.

—Sin embargo, es posible que el presidente Pinochet, de ser candidato, pueda ganar el plebiscito— volvieron a la carga

—Los incondicionales de Pinochet, al insistir en el plebiscito, cometen el mismo error de quienes dirigieron la campana de don Jorge Alessandri en 1970, cuando rechazaron la segunda vuelta electoral y se jugaron al «todo o nada», convencidos en su injustificado triunfalismo de que lo obtendrían «todo». Ya sabemos el costo que el país pagó por ese error.

Era una ofensiva a fondo. Yo sentía que mi deber era intentar impedir una candidatura que aparecía, cada día más, como un hecho inexorable.

En septiembre, en *Economía y Sociedad*, publiqué un artículo que condensaba todos los argumentos contrarios a un plebiscito confrontacional y se abría, «en subsidio», a la designación de un candidato aceptable para el régimen militar y, al mismo tiempo, capaz de concitar una amplia convergencia de los sectores democráticos en torno a su nombre.

El artículo remataba con un principio fundamental: erradicar la idea que a las Fuerzas Armadas les correspondía la tarea de generar alternativas políticas para el futuro.

Sin embargo, no pasó de ser un solitario ejercicio intelectual, porque no surtió efecto alguno en el grupo hacia el cual iba dirigido: los altos mandos de las FF.AA. y los sectores que los influían políticamente.

Años después, Edgardo Boeninger admitiría que nuestra argumentación estaba «bien provista». Según él, «en 1988 la oposición no estaba madura para tener un candidato ni un programa común. Fueron en verdad la propia campaña del plebiscito y el espectacular triunfo del *No* los factores que permitieron —en el curso de 1989— la construcción de una efectiva alianza opositora».

Dinamita mojada

A esas alturas, mi tesis tenía un poderoso aliado intelectual que —efímero y todo— era además una figura clave de RN: Jaime Guzmán.

Hasta 1987 Jaime pensaba que «si el presidente Pinochet quisiera aspirar a ser reelecto, le convendría más un sistema de elección competitiva contra uno o más candidatos y no un plebiscito. Porque, en ese caso, operan los anticuerpos que existen respecto de cualquier persona; en cambio, habiendo otros candidatos, también operan los anticuerpos de los contendores. No

puede ser alguien demasiado polémico, con fervorosos partidarios y enconados adversarios».

Este retrato no era, ni por asomo, el de Pinochet.

La opinión de Jaime era sin duda importante porque provenía del círculo cercano al general. Pero no era la única opinión en este sentido que emanaba de allí.

—Proponer un candidato es un compromiso extraordinariamente perjudicial para las Fuerzas Armadas y por tanto para el país, porque no les corresponde estar participando en elecciones con candidatos propios —agregaba Jarpa.

—Es la menos deseable de las posibilidades —había declarado el mismísimo William Thayer.

Entre los partidarios independientes del gobierno militar no había dos opiniones.

—Es la peor de todas las fórmulas. Soy absolutamente contrario a la idea de Pinochet en un plebiscito —pensaba Francisco Bulnes—. Si Pinochet pierde, y creo que perderá, las rechazadas por el país serían las Fuerzas Armadas.

La Junta también vacilaba.

—El candidato debe ser un civil, de entre 52 y 53 años, de centroderecha —había declarado el almirante Merino a *The Economist*.

—El candidato ideal debe ser un civil. Las Fuerzas Armadas no deben ser juez y parte. Las Fuerzas Armadas son garantes del proceso, no parte del proceso —agregó en la misma línea el general Matthei.

Tal como iban las cosas, no había que ser adivino para advertir que en algunas regiones el generalísimo del *Sí* iba a ser un general de Ejército en servicio activo y el generalísimo del *No* el obispo de la zona. ¿A quién le podía gustar que tales instituciones se trenzaran en una contienda política?

Hacia mediados de año, la definición política en términos de favorecer una y otra fórmula —elecciones o plebiscito— ya estaba afectando la gobernabilidad del partido. Era un tema tan crucial que no era fácil, como en el dominó, «pasar».

La directiva de RN convocó a una comisión política ampliada

que tuvo lugar el 21 de julio del año 87 en el hotel Las Acacias para abordar el problema.

El voto político aprobado en la oportunidad, lejos de resolver las diferencias, se limitó a explicitarlas. RN dejó ver que tenía opiniones encontradas en relación con la sucesión presidencial y proclamó que había considerado —vaya novedad— dos fórmulas principales. Una era hacer una elección abierta, conjuntamente con la elección parlamentaria. La otra era mantener la fórmula plebiscitaria, «en el supuesto de que ella promueva y facilite el entendimiento entre los sectores antimarxistas y genere un respaldo popular mayoritario». Ambas líneas eran válidas y la resolución definitiva correspondería al primer consejo general.

Ese voto político se peleó palabra por palabra. Recuerdo que luego de muchos tiras y aflojas en la redacción, puesto que el acuerdo debía ser adoptado por unanimidad y ser capaz de interpretar a toda la militancia, le pregunté a Jarpa cómo encontraba que estaba quedando el texto.

—Está perfecto —me respondió—. Cualquier persona que lo lea entenderá que la fórmula del plebiscito está dinamitada.

No era para tanto, por cierto. En el fondo, la declaración hacía patente la insalvable ambigüedad que al respecto ya coexistía en el partido. Obviamente a quien más perjudicaba ésta no era a RN sino al general Pinochet en su propósito de obtener la nominación. Tal ambigüedad no podía romperse desde dentro, pero sí desde fuera.

Cuatro días después de esa declaración, Pinochet adoptó una decisión que influiría dramáticamente en la vida de RN: nombró, de nuevo, a Sergio Fernández como ministro del Interior.

Pinochet por Pinochet

A los pocos días de asumir Fernández, recibió a la directiva en pleno de RN y despejó todas las dudas.

—Estoy aquí para ganar el plebiscito con el general Pinochet a la cabeza. Conozco bien el debate que existe en RN, pero rechazo un cambio en el sistema. Además, hay que terminar de una vez por todas con la confusión entre los adherentes del gobierno militar. ¡No se puede seguir perdiendo el tiempo!

Fernández quería transmitir un mensaje rotundo y lo hizo. Además, no pidió ayuda. Al revés, insinuó que existía mucha gente lista para empezar a trabajar por Pinochet. Por supuesto, había un lugar para nosotros, pero era decisión nuestra subirnos al carro o no.

Ni Ricardo Rivadeneira ni Gonzalo García querían hablar. Después de lo que acababan de oír, no tenía sentido hacerlo. Pero yo no me contuve.

—Ese plebiscito no hay cómo ganarlo —le señalé al ministro para dejar constancia de mi desagrado—. Y usted será el principal responsable de ese tremendo error.

—En 1980 muchos me dijeron lo mismo. Vamos a volver a ganar. Y si perdemos, ahí está la Constitución que dice muy claro cómo el país sigue adelante —contestó Fernández, sin amilanarse.

Cuando terminaba la audencia, Ricardo le planteó a Fernández —en un tono aún más calmado que el habitual— que en la comisión política había destacados dirigentes, de partida cuatro ex senadores, que llamados a asumir nuevamente tenían serias preocupaciones por el plebiscito.

—Llévales mis saludos y diles que se queden tranquilos. La responsabilidad exclusiva es del gobierno, no de los políticos y menos de los partidos.

Al salir de La Moneda y en el momento en que cada cual partía a buscar su auto, Ricardo Rivadeneira me detuvo un segundo y me dijo:

—Esto no tiene remedio. Cada día tengo menos que hacer al frente de Renovación Nacional.

Después de la reunión con Sergio Fernández, la directiva se reunió con todos los integrantes de la Junta de Gobierno. En cada reunión efectuábamos una exposición equilibrada de las

ventajas y desventajas de la fórmula plebiscitaria versus las elecciones libres. Jarpa, hábil como siempre, prefería que fuera Jaime Guzmán quien explicara por qué era inconveniente un plebiscito con Pinochet de candidato.

Desde luego, yo era el que menos intervenía en esas reuniones. Mi posición era demasiado clara desde antes.

Al final me quedé con cuatro impresiones. Una, que el más receptivo había sido el general Matthei. Dos, que el almirante Merino era una completa incógnita. Tres, que no deberíamos contar con el general Stange. Por último, el general Gordon —ex director de la CNI— podía ser sustituido en cualquier momento y ni siquiera votaba. La letra chica de las disposiciones transitorias disponía que para ese efecto operaría la junta de comandantes en jefe, es decir no la Junta de Gobierno. O dicho de otro modo, Pinochet votaría por sí mismo.

Acorralando a RN

Al margen de estas incidencias, como era inevitable que ocurriera, continuaron las presiones para «matricular» a RN anticipadamente con el *Sí*. Yo no me resignaba. Aunque en el partido un contingente importante estaba ya alineado con la tesis del gobierno —incubándose una divergencia interna en la que ya no habría tregua— los meses siguientes me mantuve sin cejar en favor de las elecciones abiertas.

Hacia octubre del año 87, Jarpa hizo unas declaraciones apoyando la idea de un plebiscito con Pinochet a la cabeza. Yo sostuve que sus dichos transgredían la resolución de julio y anticipaban decisiones que sólo el consejo general estaba autorizado a adoptar. Jaime Guzmán declaró que si bien «jurídicamente» la decisión de respaldar a cualquier candidato le correspondía al consejo general, él «no tenía dudas que todo el partido apoyará al candidato que propongan los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas».

—No haré más declaraciones por un tiempo— se limitó a

decir Ricardo Rivadeneira, aflojando cada vez más las riendas de la conducción.

En paralelo al debate interno, que cada vez adquiría mayor temperatura —aunque era imaginable por esa fecha el punto de ignición que alcanzaría más adelante— se desataba otra pugna: la campaña para conseguir firmas para la legalización del partido. En la misma medida en que las posiciones políticas se separaban, cada grupo acentuaba ese esfuerzo. Como el futuro consejo general sería decisivo y el sector que afiliara más gente tendría mayores posibilidades de prevalecer, juntar firmas se transformó en una algida competencia.

Por entonces, una sospecha inicial se transformó en evidencia. La UDI contaba con un abierto apoyo del Gobierno para conseguir las firmas. Lo comprobamos, como ocurre tantas veces en política: por casualidad. Una dirigente juvenil que buscaba adhesiones en Santiago Poniente fue abordada por un dirigente vecinal para ofrecerle «otro grupo de trescientas firmas con el mismo trato: pago de la renovación del carnet de identidad y 900 pesos por cada una». Después se amontonarían denuncias sobre vehículos municipales y funcionarios de ministerios encargados de esa tarea.

A principios de diciembre de 1987, RN completó la recolección de 61 mil firmas. Era casi el doble de la exigencia legal y pasábamos a ser el primer partido político en conseguirlo.

—La decisión originaria de conformar una alternativa política con personalidad e identidad propia, voluntad y capacidad de ser mayoría, y resuelta a gravitar decisivamente en el desarrollo del país es una realidad tangible —dijo Ricardo Rivadeneira ante la mirada de satisfacción de todos los miembros de la directiva central reunidos en la sala de conferencias del Servicio Electoral.

En los días siguientes, Rivadeneira rehuyó todos los contactos con los periodistas que buscaban su opinión sobre el futuro del primer partido cuyos aficionados superaban, en forma holgada, los umbrales de una ley muy exigente. A la semana, envió una declaración escrita a los diarios.

Contenía su renuncia indeclinable a la presidencia de RN.

BENDITA «UNANIMIDAD»

Ricardo Rivadeneira consideró que tras la constitución legal del partido su misión estaba cumplida y que no era el hombre idóneo para lo que venía. Se había pronunciado por elecciones abiertas; era partidario de reformar la Constitución y de terminar con el exilio. También de buscar fórmulas para solucionar los casos pendientes de derechos humanos. Nada de esto se había podido llevar adelante, y el mundo de la derecha derivaba hacia un *Sí* a todo evento.

No improvisó una sola línea de su intempestiva renuncia.

Mi primera reacción fue instantánea. Sin él de presidente, me iba a resultar muy difícil defender internamente nuestras posiciones.

Casi no tuve tiempo para pensar en cómo su renuncia modificaba los equilibrios internos. Se convino que al otro día la comisión política designara al sucesor. En esa oportunidad Gonzalo García se mostró firme partidario de que Jarpa asumiera la dirección del partido hasta el consejo general. Guzmán mostró bastante reticencia. El tema no se trató mayormente, ya que Jarpa mismo lo cortó en seco.

—¿Por qué propusiste a Jarpa? —le pregunté a Gonzalo García.

—Porque es el único que puede manejar el partido —fue su respuesta—. La elección interna está a la vuelta de la esquina y los ánimos están cada vez peor. Tu gente y la UDI andan como el perro y el gato. Jarpa tiene experiencia al frente de partidos. Otro independiente sería un completo desastre. Aquí se necesita alguien que mande. Y además, aunque a ti no te guste, don Sergio es pinochetista. Eso debiera dar garantías suficientes en La Moneda.

Al día siguiente tuvo lugar una larga y dura reunión de la comisión política. La gente de la UDI y los independientes más cercanos a ella rechazaron la postulación de Jarpa. Luego

intentaron que se postergara la resolución del tema. El resto estaba firme en la postulación de Jarpa, quien había abandonado la sala para no estar presente en el debate acerca de su nombre.

Después de un par de horas en que los argumentos iban y venían, quedaba sólo un recurso: votar. Así se hizo. Jaime Guzmán había recordado un instante antes algo que a mí no me había pasado inadvertido: el estatuto exigía dos tercios. Según mis cálculos los votos estaban justos. No sobraba ninguno. Sí podía faltar uno... porque Jarpa no votaría por sí mismo.

Gonzalo García contó los votos. ¡16 a favor, siete en contra! Faltaban dos. ¿Qué había pasado? Como la votación era secreta, el resultado sólo podía ser explicado en función de conjeturas, pero las caras de todos eran una pizarra donde estaban marcadas con tiza fosforescente las preferencias. Luis Angel Santibáñez, nominado por el propio FNT y proveniente de una inexistente agrupación, había votado contra Jarpa.

Vuelta al debate. La tensión seguía en aumento. Unos eran partidarios de levantar la sesión, otros de repetir la votación. Al final se impuso este criterio. La reunión ya se prolongaba casi por cuatro horas ininterrumpidas. Era un «gallito» sin misericordia. Jarpa se incorporó a la sesión. Los periodistas se paseaban afuera. Olían el conflicto desatado.

La votación se repitió y entonces un independiente cambió de opinión. No tuve duda. Había sido Carlos Alberto Cruz, en un lógico afán de desbloquear una situación que se hacía insostenible. Todavía faltaba uno. William Thayer propuso entonces que se computara a favor de Jarpa su propia preferencia. Si él aceptaba ser nominado, tácitamente estaba votando por sí mismo. ¡Dos tercios con fórceps!

Entonces Guzmán, que se había opuesto a Jarpa con todas sus fuerzas, viró bruscamente.

—Digamos mejor que la designación fue por consenso —propuso ante la sorpresa de todos.

Un aplauso cerró la sesión. Jarpa, un tanto emocionado, enfrentó a un gran número de periodistas.

—Se le ve emocionado, don Sergio —le dijo uno.

—Así es —respondió—. Lo estoy porque mi designación se produjo por consenso.

El Mercurio leyó bien lo ocurrido: «En el futuro próximo, RN enfrentará opciones cruciales que tocan los puntos subrayados en la renuncia de su ex presidente. Dada la calidad de sus dirigentes y la preparación y cultura de su militancia, seguramente superiores al promedio, difícilmente caerá en la subalterna pero fácil salida de la división interna ante los conflictos».

¿Fácil? No se equivocaba el editorialista cuando decía que la navegación futura de la colectividad debería hacerse entre peligrosos arrecifes:

En apenas tres días el paisaje interno cambió dramáticamente.

Me acordé de la frase de Harold Wilson, ex primer ministro británico: «A week in politics is a lot of time».

Entregando la oreja

A partir de la elección de Jarpa, las cosas ya nunca más dejaron de estar al rojo. Surgió una nueva composición de fuerzas y la pugna por la presidencia del partido tenía cara y nombre: entre Jarpa y Guzmán iba a estar la pelea.

Si hubiera tenido que apostar antes de la renuncia de Rivadeneira acerca de cómo se daría la contienda interna, habría jugado mis fichas a que la UDI y la gente del FNT tratarían de constituir una lista conjunta. Era lo políticamente previsible y lo ideológicamente coherente ya que ambos se habían deslizado al abierto respaldo de Pinochet, dejando en el olvido todos sus argumentos contrarios. Pero hay veces que las decisiones políticas transitan por otras coordenadas.

El cronograma electoral dio el vamos a la campaña interna. La elección de los dirigentes regionales fue fijada para la tercera semana de marzo de 1988. El consejo general, convocado para mayo, estaría compuesto por 334 miembros, de los cuales 125 representarían a la Región Metropolitana y 209 a regiones.

Inmediatamente quedó claro el panorama electoral.

En un alto número de zonas y sectores se organizaron listas unitarias que respondían a una efectiva integración de las antiguas tendencias o a una sola de ellas, ya que no en todas partes los tres antiguos grupos tenían presencia. En las demás zonas habría listas en competencia y dirimirían las urnas.

Al principio algunos dirigentes intentaron minimizar las diferencias, pero era tapar el sol con un dedo.

—Vamos a arrasar en la Región Metropolitana —declaró Pablo Longueira—. Hay que reconocer que existe división. Hay una generación que reclama su legítimo derecho a asumir un liderazgo político.

Inmediatamente la contienda interna se tiñó con el dilema que atravesaba todo el escenario político del país. La UDI planteó la elección abiertamente entre pinochetistas y antipinochetistas, partidarios o adversarios del plebiscito.

Y ocurrió lo inevitable: su repercusión superó con mucho los márgenes de RN.

La Época, a fines de febrero sintetizaba así el conflicto:

«El sector de Unión Nacional encarna a un proyecto de derecha chúcara, que se ha mostrado indócil con Pinochet y con la idea de conservar un régimen pretoriano; el sector de Sergio Onofre Jarpa podría tomar el camino del autoritarismo civil con la misma soltura que el de las fórmulas corporativistas. El sector de la UDI representa el respaldo orgánico a cualquier candidato que el Ejecutivo proponga, pero especialmente a Pinochet y su campaña, diseñada como una verdadera apisonadora. La alianza actual de la UN con Jarpa no es algo que agrade al Ejecutivo. El triunfo interno de esa línea tendría un significado preciso: el plebiscito podría ser condicionado por la principal fuerza política de los afines».

No era sólo eso. El eje «partidarios-adversarios» de Pinochet era un formidable recurso para la campaña interna. Y la ex UDI lo estrujaba. Forzó y obtuvo un acuerdo de la comisión política donde se resolvía «orientar desde ya el trabajo organizado y resuelto del partido a favorecer el triunfo de la proposición de las Fuerzas Armadas y de Orden para la próxima sucesión

presidencial». ¡Aun antes de que se definiera el candidato! Jarpa algo ayudó señalando que «habíamos resuelto la causa, pero no el nombre», ya que todavía no había candidato formal y Juan Luis Ossa dijo que no habíamos entregado un cheque en blanco. La dinámica de la campaña interna nos exigiría avanzar todavía más en esa dirección. Obligados y a contrapelo, pero entregando la oreja.

—Si para algo ha servido la campaña interna ha sido para matricular a todo el mundo con el *Sí*—ironizaban los UDI.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Durante todo el verano de 1988 me ocupé personalmente de la campaña interna. Recorrí el país y pude constatar de qué forma intervenían algunos alcaldes: funcionarios premunidos de listas de votantes y montados en camionetas municipales contactaban, uno a uno, a los militantes y los instaban a apoyar las listas de la UDI; también me di cuenta de que la organización del antiguo FNT era mínima y, a la inversa, cobraba importancia el incesante trabajo que desde 1983 veníamos haciendo en la UN.

A principios de marzo denuncié la intervención del gobierno. Jarpa, más cauto, pero plenamente informado de lo que ocurría, aseveró que «hacía fe» de mi palabra.

Puesto que en regiones la mayoría de las listas eran unitarias, la competencia sólo se desató en Santiago, Valparaíso, Antofagasta y en menor medida Concepción. En estos puntos el alineamiento fue siempre el mismo: los UDI a un lado, la gente de la UN unida con el FNT al otro.

En cualquier caso, para los que teníamos puestos los ojos en los números el panorama era claro. Y por eso estábamos muy tranquilos: en todo el sur y el norte teníamos una ventaja abrumadora y en las pocas provincias donde habría elecciones competiríamos mano a mano. En Santiago no teníamos opción en las zonas donde la UDI había instalado su poblacional —el Poniente— y sí teníamos ventaja en Santiago Oriente.

Lo concreto, sin embargo, es que más allá de los cálculos, la elección de delegados se convirtió no sólo en una disputa encarnizada sino también agria. No había día en que no tomáramos nota de escándalos, peleas y episodios lamentables, y estos desbordes inevitables trascendían a la prensa.

—Hay que terminar el espectáculo —le escuché decir un día a Gonzalo García con un sentido de urgencia no muy distante de la rabia—. Estamos perdiendo todo el gran capital que era la buena imagen del partido ante empresarios y ejecutivos jóvenes. La gente está indignada y no puede entender que no seamos capaces de arreglar este lío.

Gran parte de la tensión se descargaba en él, porque estatutariamente le correspondía a él dirigir la elección. Se mantenía siempre sereno, nunca perdía la calma, recibía los reclamos de todos y actuaba dentro de sus posibilidades; pero a medida que pasaban los días, su cara empezaba a reflejar tensión.

Nuestras reservas se cumplieron cuando el Servicio Electoral rechazó 12.404 firmas de las originalmente presentadas: los datos estaban mal, los nombres eran inexactos, las direcciones inexistentes, faltaban firmas. A ojos vista, algo irregular había en las fichas objetadas.

Las puertas del horno

Días antes del inicio de las elecciones, Jaime Guzmán, en una reunión de mesa directiva, planteó reclamos respecto de dos o tres sectores de la Región Metropolitana donde, según él, candidatos de origen UN y FNT, impedían que las elecciones tuvieran lugar con transparencia. Afirmó que nuestras listas estaban llamando a votar en lugares no autorizados. Jarpa y Gonzalo García acogieron su reclamo, sin pronunciarse sobre el fondo. En verdad se sumaba a otros presentados por diversos dirigentes de ambos bandos y que la secretaría canalizaba automáticamente al tribunal supremo. Con el reclamo de Jaime la secretaría general tuvo especial deferencia, puesto que junto con remitirlo a

esa instancia de decisión, contempló la posible postergación de las elecciones allí donde se comprobaran los problemas.

En todo caso, en paralelo, diversos dirigentes del partido instaban a los bandos a evitar la confrontación, en resguardo de la sensatez de un proceso electoral que parecía a punto de escaparse de las manos. De ahí salió la idea de una reunión entre los dirigentes de las campañas. Pablo Longueira, Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma y Cristián Leay por los ex UDI. Bernardo Matte, Alberto Espina y yo por la tendencia que reunía a gente de ancestros UN o FNT. Asistiría al comienzo de la misma Gonzalo García. Yo le pedí también a Jaime que concurriera.

—Yo apruebo la reunión —me contestó—. Ojalá lleguen a acuerdo. Yo voy a participar en la preparación de la reunión y me mantendrán informado de su desarrollo.

—¿Por qué no vienes?

—Si Jarpa no participa, tampoco lo haré yo. Aquí hay un asunto que no me gusta. La elección real se da entre la UDI y UN. Tú y yo llevamos el peso de la campaña. Pero tú y Jarpa están aliados. Entonces él aparece como un gran árbitro imparcial. Y no es así. Y quiere presentarse en el consejo como gran aporte a la unidad. Y eso es falso.

Jaime estaba tenso. Además lo noté —algo raro en él— visiblemente nervioso.

La reunión partió esa noche y duró hasta la madrugada. Al final, a eso de las 4:30 horas —ellos y nosotros, me imagino que calculadora en mano—, llegamos a un acuerdo, para evitar las *ajizadas* elecciones en la Región Metropolitana. La tendencia proveniente de la UDI tendría 81 consejeros nacionales. La de UN y el FNT 41 y los tres restantes serían nominados de común acuerdo ¡Así se garantizaba la gobernabilidad y la paz del partido hasta el consejo general!

—Podríamos haber aflojado entre siete y diez más sin haber comprometido la mayoría —me dijo Bernardo Matte, que era quien más había empujado el acuerdo.

Bernardo es uno de mis mejores amigos y un caso inusual. Son pocos los empresarios de gran nivel que se mezclan en la

vida de los partidos. Y más escasos aún los que no sólo no aspiran sino que rechazan sin vuelta cualquier cargo público. Además, sin que nadie pudiera equivocarse de su adhesión al interior de la derecha (veníamos juntos desde la Juventud Nacional) era respetado por todos los grupos.

Nos fuimos a dormir, por fin tranquilos. Quedamos de juntarnos a las 10:30 de la mañana para ponernos de acuerdo en cómo efectuar el anuncio.

A la hora señalada, apareció Andrés Chadwick.

—Estamos reunidos con Jaime y le estamos explicando el acuerdo. Hay problemas, pero quédate tranquilo que todo va a salir bien.

—Yo estoy súper tranquilo. El problema es que se agota el tiempo. La elección parte mañana. Esto hay que dejarlo listo ahora.

—Apenas terminemos te llamo. Antes de las doce.

Entretanto, Gonzalo García le explicó el acuerdo a Jarpa, quien consideró que estaba bien, pero que habíamos cedido mucho en favor de la UDI. Jarpa citó a una reunión de mesa para las cuatro de la tarde, para ver cómo se procedía.

—Estamos más o menos —me dijo Andrés Chadwick cuando llamó a las 2:00 de la tarde.

—¿Cómo que más o menos?

—Mira, Jaime está de acuerdo, pero cree indispensable complementar el acuerdo.

—¿Con qué? ¡Ayer dejamos todo cerrado!

—Mejor que él te lo explique.

—Bueno —le dije fastidiado—. Voy a comer algo y vuelvo. Hay reunión de directiva citada a las 16:00 de la tarde.

Golpe de mano

Cuando volví, algo raro circulaba por el aire. Un número inusual de dirigentes que no era de la sede central merodeaba por la entrada y en los pasillos de la calle Suecia.

Subí al segundo piso. Directo a la oficina de Jarpa. Allí estaba Gonzalo García. El aire era pesado. Una secretaria de La Moneda había llamado a Gonzalo Eguiguren para decirle que Dinacos —la división de comunicaciones del gobierno— estaba citando a una conferencia de prensa que daría Jaime Guzmán en la sede a las tres y media. ¿Sobre qué?, ¿y por qué se metía Dinacos?

—Va a pedir que don Sergio renuncie —fue la escueta pero explosiva respuesta.

A los pocos minutos llegó Jaime y nos entregó una copia de la declaración que leería en unos minutos más. Se confirmaba el rumor: Guzmán pediría la renuncia de Jarpa.

Todos leímos la nota, con correcciones de puño y letra del propio Jaime. La tensión era aplastante. Mi cabeza funcionaba a mil por hora tratando de anticiparme a lo que vendría. Éste sí que era un asunto grave.

—Jaime, usted está cometiendo un gran error —le dijo Jarpa—. No hay razón para lo que usted pide. Y la forma como lo presenta me deja a mí por los suelos. Yo tengo muchos defectos, pero no soy cobarde. Esto es un chantaje y yo no se lo voy a aceptar. Sólo le pido que recapacite.

—Jaime te ruego que no lo hagas —literalmente le imploró Gonzalo García.

Jaime impertérrito se mantenía en silencio, mientras Gonzalo y Jarpa se esforzaban por hacerlo desistir con más y más argumentos, pero estaba claro que Guzmán no daría su brazo a torcer.

Jaime dio su conferencia de prensa. Y prendió la mecha que haría explotar a Renovación Nacional.

Según Guzmán, el acuerdo adoptado para «fortalecer la unidad del partido y no deteriorar seriamente su proyección futura», exigía que la directiva renunciara en pleno; que los «responsables de las dos listas en competencia designaran un vicepresidente cada uno, y que ambos designaran un presidente y secretario general de «efectivo consenso y eficacia, circunstancias que hoy ostensiblemente no existen, y que la directiva así surgida postulara a la reelección en el consejo general de mayo».

Tales eran los «complementos» que me había anunciado Andrés Chadwick. ¿De dónde Guzmán había sacado que de una cosa se derivaba la otra?

Traducción de su fórmula: se reemplazaba a Jarpa y a Gonzalo García; Guzmán y yo, como responsables máximos de las listas en competencia, designaríamos una directiva provisonal que se transformaría en definitiva. Una suerte de «consulado romano» para mantener el control del naciente partido.

Era una fórmula imposible de aceptar, ofensiva para Jarpa y Gonzalo García. Y que pulverizaba todo vestigio de democracia interna. Un golpe de mano audaz y avasallador.

Los cantos de sirena partieron de inmediato. Ernesto Silva habló con el propio Bernardo Matte para que yo considerara «con cabeza fría la propuesta». Les mandé decir que para una cosa así jamás contarían conmigo.

—Esto no se arregla a lo compadre —declaró el mismo día Jarpa.

Los acontecimientos se precipitaron. La comisión política «deploró» la acción de Guzmán. La directiva llamó a efectuar las elecciones y a subsanar los inconvenientes en las localidades donde la elección se postergó. La UDI llamó a la abstención. En los lugares de votación —entre los que querían votar y los que querían impedirlo— se produjeron múltiples peleas. Por los diarios el conflicto arreciaba: la UDI inició una feroz campaña de descrédito político y personal contra Jarpa.

El sábado 19 de marzo, en que terminaba la votación en la sede central, se produjo un incidente que podría haber pasado a mayores. Apareció un grupo de pobladores en una micro —no eran ni siquiera militantes— a amenazar a los dirigentes y militantes que estaban votando. Tal actitud superaba todo lo imaginado hasta entonces. La situación hacía recordar a los grupos de choque y matones a sueldo de los tiempos de la UP. Varias peleas se detuvieron antes de que se transformaran en una batalla campal. Nunca en mi vida había visto a Jarpa tan furioso. El grupo no paró de insultarlo con virulencia y grosería. Gonzalo García llamó a Carabineros. Cuando llegó la policía,

el que dirigía el grupo ordenó la retirada. El episodio impactó de tal manera que hasta los más favorables a buscar un entendimiento descartaron esa opción. ¿Qué futuro podía tener un partido donde las diferencias se arreglaban acarreando lumpen?

El acarreo del lumpen fue el motivo que tuvo el tribunal supremo para inhabilitar por un año a Pablo Longueira como dirigente, porque estaba acreditado «por confesión del señor Longueira Montes, por antecedentes públicos y notorios y por la constatación personal del presidente del Tribunal—, que para impedir u obstaculizar el desarrollo normal del acto electoral condujo grupos de personas de otras comunas, en gran cantidad, a la sede del partido».

El presidente del tribunal, Walter Siebel, un abogado de enorme prestigio, lo había presenciado todo, porque estaba en la sede al momento de los hechos.

—Me recordó las actuaciones de la juventud nazi —dijo, aún lívido.

Guzmán insistía en buscar una negociación; Jarpa la rechazaba de plano.

Pedro Ibáñez, Francisco Bulnes, William Thayer, Juan de Dios Carmona, Gonzalo Eguiguren, Miguel Luis Amunátegui, Patricio Huneeus, Renato Gazmuri, Juan Luis Ossa y Patricio Mardones presentaron un reclamo ante el tribunal supremo. La polémica ardía y la verdad es que la batería argumental de Guzmán era —quizás si por primera vez— muy pobre.

¿A título de qué había intentado «complementar» el acuerdo de la Región Metropolitana con una fórmula que nadie jamás siquiera había insinuado? ¿Qué justificación tenía restarle todo poder al futuro consejo, que se limitaría a ratificar una directiva previamente acordada entre él y yo? Y si las irregularidades eran tan graves, ¿por qué se habían allanado al acuerdo en toda la Región Metropolitana en vez de continuar con las acciones ante el tribunal supremo? ¿Y ese sólo hecho no sanaba todo? Si la UDI tenía la mayoría entre los consejeros generales, ¿por qué no esperó apenas dos meses para hacerla valer en el propio consejo?

La mejor demostración de la debilidad argumental de Guzmán es que en su larguísimo escrito de respuesta ante el tribunal supremo, el corazón de su defensa era que el «problema actual tiene parte importante de su origen en la designación de Sergio Onofre Jarpa como presidente del partido». ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Según Guzmán, allí había quedado «minada irremediablemente la confiabilidad de Jarpa» y al descubierto «sus ambiciones sin freno». Entonces ¿por qué él mismo había sugerido que se le nombrase por unanimidad?

La falta de una argumentación fuerte le exigía también centrar las diferencias en la «incompatibilidad de estilos». El argumento se esfumó cuando la UDI movilizó pobladores en clara actitud de amedrentamiento. ¿De qué nuevo estilo de hacer política estábamos hablando? Tampoco ayudaba a su causa la virulencia en contra de Jarpa y su argumento de que todo era para que Renovación se comprometiera con el *Sí*. ¿No eran acaso Jarpa y Guzmán tan pinochetistas el uno como el otro? Si de eso se trataba ¿cómo explicar que su propuesta inicial hubiera sido armar conmigo, el más distante de todos al *Sí*, la nueva directiva del partido?

Para Jarpa la UDI era un «partido dentro del partido». No habría negociaciones ni se aceptaría el chantaje. Y tampoco tenía pelos en la lengua:

—La UDI es un movimiento con procedimientos comunistas —declaró.

Veredicto y rompimiento

Y el 15 de abril de 1988 el tribunal supremo resolvió, en fallo dividido, expulsar a Jaime Guzmán, desestimando sus «laberínticas argumentaciones». Acto seguido, los miembros de minoría del tribunal renunciaron al organismo... y al partido. No fueron las únicas renuncias. Todos los dirigentes de la UDI renunciaron e inmediatamente constituyeron una agrupación cuyo nombre no dejó dudas acerca de su significado político: La UDI por el *Sí*.

Para *El Mercurio,* las causas de la crisis no habían quedado claras: «Las referencias a dos estilos diferentes de hacer política no parecen ser razón suficiente como para justificar una división entre dos grupos que sostienen principios comunes. Nadie ha explicado tampoco en qué consisten esos estilos»

¿Qué había pasado? Nunca tuve dudas de la razón que movió a Jaime. Cuando le informaron del acuerdo alcanzado en la Región Metropolitana advirtió, con su lucidez habitual, lo evidente: para ellos el control del partido estaba perdido. Además, él y su gente estaban seguros de que en tal consejo nosotros —y particularmente yo— levantaríamos con fuerza nuestras tesis antiplebiscito con Pinochet. Aunque objetivamente nuestra postura no tuviera posibilidades de éxito, según ellos podía ser muy perjudicial para esa candidatura, tras la cual a esas alturas la UDI, incluido Jaime, había cerrado filas. Existía otro elemento: la total desconfianza hacia Jarpa.

Andrés Chadwick la dejó en evidencia:

—El precio que ha tenido que pagar es verse desenmascarado en sus ambiciones, que apuntan a la Presidencia de la República. Sólo esto último explica que Jarpa se haya aliado con el sector más antipinochetista de RN, encarnado por Andrés Allamand, Francisco Bulnes y Pedro Ibáñez. Guzmán no sólo se las frustró, sino que demostró que no es confiable para dirigir un partido que apoye el *Sí,* porque sólo una eventual derrota de Pinochet haría factible la candidatura del propio Jarpa en las elecciones abiertas que sobrevendrían.

Capítulo VII

Saltan los tapones

El quiebre de RN pulverizó la idea de una centroderecha unida en un solo partido. Nada nuevo bajo el sol. En todo el siglo XX la derecha se había aglutinado —sin perjuicio de grupos menores de escasa significación— sólo en dos etapas: de 1966 a 1973 en el Partido Nacional, y de 1987 a 1988, en Renovación Nacional. Algo así como ocho años en casi 90.

El joven partido no fue capaz de sobreponerse a la coyuntura y la contingencia arrasó con todo. En definitiva, el gran detonante fue el dilema del *Sí* y el *No*, que por lo demás, era el de todo el país.

Sin embargo, visto en retrospectiva, mi diseño original era demasiado ambicioso. Es difícil hacer un partido político y aún más hacerlo en la derecha, que siempre ha funcionado bajo la égida de caudillos o de notables y sabe poco de decisiones participativas y de mecanismos de democracia interna. Era una apuesta suponer que grupos heterogéneos se amalgamarían fraternalmente sin fisuras en un partido nuevo.

Por último, si se piensa que las determinaciones de Renovación influirían en la crucial decisión del régimen militar sobre la candidatura del general Pinochet, queda claro que el amperaje era muy alto para cables tan precarios: inevitablemente saltarían los tapones.

La planificación de esa candidatura no contemplaba rol político alguno para los partidos. El esquema previsto era que

subsistieran fragmentados, presumiblemente algo enemistados entre sí y sin mayor relevancia. Siempre se les podría invitar a un par de almuerzos bien publicitados en La Moneda, brindarles algún otro gesto de cortesía y posiblemente asignarles —a las órdenes de algún intendente, claro— tareas proselitistas, pero de participación en decisiones políticas, ¡ni hablar!

Pinochet nunca creyó en los partidos y lo más cerca que estuvo fue aceptar «corrientes de opinión», que en sus palabras se diferenciaban de los partidos porque «éstos son estables y aquéllas sólo existen mientras se cumple un objetivo determinado, como apoyar un candidato, pero luego se deshacen, dejan de tener influencia, son temporales».

Tal escenario cambió bruscamente cuando la derecha apareció unida, afirmando su identidad y en vías de recobrar autonomía. Pinochet debe haberse sorprendido. Él se seguía sintiendo titular de un mandato irrevocable e indefinido.

El caso es que ahora RN estaba quebrada y lo probable es que la división fuera para largo. Si bien en política las heridas sanan, y es frecuente que enconados adversarios terminen de aliados, no es menos cierto que las peleas más duras, las heridas más dolorosas y los odios más profundos son los que se producen dentro de la propia familia política. La ruptura había sido un desgarro importante, gatillado por factores muy diversos. Había, claro está, una fuerte divergencia en el ámbito de las ideas, pero también emergió una enorme desconfianza política y personal. En política la intensidad de los conflictos políticos o ideológicos no necesariamente genera rupturas por sí misma. Los quiebres son inducidos por la incapacidad de alcanzar acuerdos en la forma de resolverlos o por la negativa a acatar el resultado de tales procedimientos una vez que han sido aceptados.

Había surgido también un encono enorme. Toda la última etapa del conflicto la transitamos equilibrándonos en la cornisa de la violencia física. Don Pancho Bulnes era el más impresionado.

—Desde la UP que no me insultaban con tanto rencor —repetía a quien quisiera oírlo.

¿Cuáles serían los efectos de la ruptura en el largo plazo? Difícil saberlo.

En el corto plazo, un efecto se hizo obvio rápidamente. Ya no había fuerza posible para levantar una candidatura alternativa a la de Pinochet. Tal opción sólo se podría haber cristalizado con una Renovación Nacional fuerte.

Estaba amargado. Consideraba que mi participación en el Acuerdo Nacional y en la fundación de RN eran las dos iniciativas más importantes de mi vida política. Las propuestas del Acuerdo tarde o temprano adquirirían plena vigencia. Por ahora, sólo hibernaban. Pero ¿y la derecha?

SÍ, PERO...

Más allá de los esfuerzos publicitarios y de que ahora avanzaríamos a la democracia, lo concreto es que la imagen del general Pinochet no era ni sería jamás la de un demócrata. Para peor, el país ya llevaba diez años debatiendo acerca de cuán democrático sería o no sería el régimen institucional posplebiscito. ¡Y vaya que subsistían interrogantes!

A mediados de 1988, viajé a una reunión de la Pacific Democratic Union, que es la rama que agrupa a los partidos de centroderecha de la Cuenca del Pacífico: Japón, Corea, Taiwán, Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Canadá y otros. Me correspondió abrir el debate con una exposición sobre el plebiscito chileno y quedé con sentimientos encontrados. No tuve ningún inconveniente en demostrar los éxitos de la transformación económica del país. La verdad es que al tema de los derechos humanos no se le puso demasiada atención (¿será que no interesaban mucho en ese «barrio»?). Hubo numerosas preguntas sobre la forma en que se iban a realizar los comicios y mi impresión es que el auditorio quedó razonablemente convencido de la limpieza que tendrían. No esperé que mi opinión en cuanto a que las Fuerzas Armadas chilenas no eran corruptas causara tanta sorpresa. Y donde no tuve ningún éxito fue en

tratar de demostrar el carácter democrático de la Constitución de 1980.

El representante del Partido Liberal de Australia, Robert Hill, definió el cuadro perfectamente.

—Okey. Chile no tendrá un *semi-democracy* como es tan habitual en el Asia Pacífico, ni tampoco una *full democracy.* Será una *sui generis democracy.*

Para nadie es un misterio que la consigna más poderosa en toda contienda electoral es la que plantea que ha llegado el «tiempo de cambiar». Dieciséis años y medio es demasiado tiempo incluso para un gobierno exitoso en una democracia sólida. En Chile el poder se había ido personalizando cada vez más en Pinochet. No era fácil convencer a la gente de la conveniencia de que una misma persona lo ejerciera por casi un cuarto de siglo. Ni tampoco convencerse uno mismo.

La verdad es que el primer eje de la campaña, dictadura-democracia, nunca supe abordarlo de una manera mínimamente convincente. No había cómo. En cuanto al segundo, continuidad-cambio, lo mejor que conseguí fue establecer «que si gana el *Sí* van a conservarse demasiadas cosas que deben cambiar y si gana el *No* van a cambiar demasiadas cosas que deben mantenerse».

La campaña tuvo asimismo otro eje: el progreso existía, era innegable, pero alcanzaba sólo a algunos.

—En Chile hay cinco millones de pobres —había declarado Alejandro Foxley, generando un gran revuelo e impactando por la fuerza de la imagen utilizada.

También en esa dimensión el *No* ganaba terreno.

Para peor, yo tenía incluso dudas sobre las ventajas de un eventual —casi imposible— triunfo del *Sí.* Pero me las guardaba en mi fuero interno. ¿Traería la paz entre los chilenos? ¿Qué democracia surgiría sabiendo la opinión que Pinochet tenía de ella y de los partidos? ¿Reconocería la oposición su derrota? ¿Cuál sería la reacción de la comunidad internacional? ¿Alguien se atrevía a apostar a una disminución del terrorismo? ¿Volverían las Fuerzas Armadas a jugar un papel institucional

ajeno a la política contingente o, al revés, se mantendrían de lleno en aquélla?

La mecánica plebiscitaria convertía a las Fuerzas Armadas en un actor de evidente naturaleza política. A mí era lo que quizás más me perturbaba. Consideraba que era, de alguna forma, negar el papel que ellas mismas se habían asignado en 1973: ordenar el país, reconstruirlo, mantenerse por sobre los bandos políticos y luego de creadas las condiciones retirarse a sus altas funciones. ¡Todo ello estaba cumplido a satisfacción! Las propias Fuerzas Armadas habían definido cuándo y cómo querían entregar el poder. ¿Cuál era el afán de continuar al mando del país? ¿Qué intervención más directa puede haber en política que nombrar un candidato presidencial? Y además éstas perderían. Triste lápida para un orgullo ampliamente compartido: aquél del «ejército vencedor, jamás vencido».

No sólo eso. El *Sí* y el *No* generarían alineamientos políticos de larga duración. Los bloques políticos se producen en torno a quiebres sociales, grandes debates o coyunturas históricas. Votar *Sí* o *No* provocaría rasgos de identidad similares a los que aportó en su momento estar a favor o en contra del Once de Septiembre.

Larga era la lista de mis aprensiones, pero en definitiva terminaron valiendo poco frente a mi propia gente. Por de pronto, un número muy alto de dirigentes de Renovación quedó contento con que la Constitución no se hubiera cambiado. Profesaban tal admiración y gratitud al general Pinochet que ello los cegaba. A los líderes se les sigue: no se les cuestiona. Si Pinochet había perseverado en el plebiscito, por algo sería, pensaban. Otros consideraban que habíamos hecho bien al intentar cambiar el curso de las cosas, pero una vez fracasados no teníamos más alternativa que bajar la cabeza y entregar nuestro apoyo. El grupo de los abiertamente disconformes era pequeño y derivó hacia la resignación. ¿Votar que *No?*

Inimaginable. Esa carta no estaba en el mazo.

En todo caso, la mejor justificación me la dio años después Sergio Diez.

—En política se gana o se pierde con los de uno. Lo demás es deslealtad y oportunismo.

Y no cabía duda que «los de uno» estaban a rabiar con la candidatura de Pinochet. A fin de cuentas nuestra resolución fue trabajar por el *Sí,* con el máximo de independencia posible. Así lo hicimos, con lealtad y esforzándonos al máximo.

Hacia el final quedamos tranquilos, pero era una sensación extraña.

—Hemos participado en la campaña, pero no en su conducción —fue el resumen de Jarpa.

CAMPAÑA MILITAR

La campaña no sólo debía enfrentar ejes adversos, sino también manejar equilibrios muy difíciles: mantener la imagen de éxito económico, la mitología del «país ganador», pero atraer a sectores que aún no recibían los frutos del progreso; mostrarse como una fuerza vencedora y simultáneamente trabajar con el temor de la vuelta a la UP; afirmar que el itinerario constitucional se cumpliría sin cambios e insinuar que el *No* traería inestabilidad. Ecuaciones difíciles de armar, equilibrios delicados de mantener.

La propia campaña dejaba mucho que desear. Era cien por ciento apoyada en el aparato de la administración interior del Estado. Los intendentes, gobernadores y alcaldes eran los verdaderos jefes del *Sí* en todo Chile... muchos de ellos miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas.

—Hiere mi conciencia jurídica, como hombre de derecho, que generales en servicio activo anden proclamando candidaturas presidenciales —había dicho don Francisco Bulnes meses antes.

Era una campaña marcadamente oficialista, más de funcionarios que de voluntarios, con poca sintonía con la opinión pública y todavía menos con nuestros dirigentes políticos. Fue un tributo a la rigidez y al anacronismo propagandístico. Los

publicistas de La Moneda siempre creyeron tener al frente a la UP y no a una Concertación de partidos que logró neutralizar con éxito las municiones del oficialismo.

Hacia donde uno mirara, nuestra gente manifestaba temores y decepciones.

—Por favor, hagan algo… ¿Cómo vamos a ganar una campaña con gente que no sabe de política? —preguntaban nuestros dirigentes más experimentados.

—Los comités cívicos son un desastre —decían los presidentes comunales refiriéndose a unos organismos de fachada que debían llevar el peso del trabajo en terreno.

—¿Dónde está la propaganda? —reclamaba todo el mundo.

—Todas las noches hacemos el ridículo —se quejaban los jóvenes—. ¡Pónganle garra a la franja!

La franja televisiva fue mal utilizada de principio a fin y quizás en ella se reflejaron mejor que en ningún lado los vacíos del *Sí*. Desde la primera semana el *No* obtuvo fuertes ventajas. De hecho, el primer error se cometió antes. El gobierno —con mal ojo— estimó que tendría baja audiencia. Se equivocó de plano: más del 90% de los votantes la vio. Fue un poderosísimo instrumento de propaganda.

Finalmente la franja del *Sí* descendió a la infamia: llegó al recurso de utilizar a la primera cónyuge de Ricardo Lagos —una persona aparentemente desestabilizada emocionalmente— para denostar al *No*. Una bajeza incalificable.

No obstante esos lastres, tampoco faltaban razones para votar que *Sí*. Para partir había un voto de leal agradecimiento por haber desalojado a la UP que muchos no olvidaban. Pero era mucho más que eso.

El azul del balance

Viernes 2 de abril de 1982. Bloemfontaine es una ciudad en el corazón de Sudáfrica. El equipo comía temprano y ajeno al ambiente de algarabía de otras oportunidades. La gira llegaba a su fin.

¿Qué hacían cinco chilenos —entre ellos yo— incorporados a Los Pumas? A principios de los 80, el «apartheid» estaba en su punto más alto. Cuando el gobierno argentino supo que su equipo de rugby realizaría una gira por Sudáfrica, le negó el permiso: «Los Pumas son la selección argentina. No son un club. Se quedan en casa».

Alguien inventó un resquicio. ¿Qué tal armar un equipo de Sudamérica? ¡Así se obviaban todos los problemas políticos! Cuando la prensa sudafricana se enteró, bautizó al nuevo equipo: en vez de Pumas, Jaguars.

Hugo Porta —el capitán del equipo— pidió silencio con cara seria.

—Muchachos —dijo— tengo una noticia importante: nuestro ejército ha recuperado las Malvinas. Estamos en guerra con Inglaterra! ¡Viva la Argentina! Me han ofrecido suspender el compromiso, pero mañana haremos el mejor partido de nuestra vidas.

Así fue. Los Jaguars-Pumas le ganaron a los Springboks 21 a 15. Hugo marcó los 21 puntos.

El vuelo de vuelta le pareció a mis amigos argentinos una eternidad. Yo pensé en Pinochet. ¡De la que nos había salvado!

Cuatro años antes Argentina y Chile habían estado literalmente a minutos de la guerra. Pinochet había manejado el conflicto admirablemente y la historia se lo reconocería.

Pero no sería el único logro. El gobierno militar había sido, en muchos terrenos muy exitoso. Y sin duda, el más innovador del siglo XX en términos de país.

¿Cuál sería su legado positivo? Haber impedido la instalación de una dictadura comunista y, sobre todo, la adopción temprana de un sistema económico capaz de dejar atrás la pobreza, gatillar el desarrollo y abrir oportunidades de progreso para todos.

El gobierno militar chileno realizó una transformación económico-social de alcances fenomenales cuyo punto de arranque fue advertir que el modelo vigente de «desarrollo hacia adentro» —recargado de estatismo y proteccionismo, lastrado

de inflación y desequilibrios, sofocado por regulaciones y pervertido por la discriminación— no podía dar más de sí.

El cambio originado por el gobierno militar tuvo el enorme mérito de ser pionero. Hoy es parte del paisaje bajar aranceles, privatizar, impulsar un régimen laboral moderno, poner en marcha un sistema previsional apoyado en la capitalización individual y en la administración privada de los fondos, implementar una red social focalizada hacia los más pobres y abrir nuevos espacios a la iniciativa privada en campos antes reservados al Estado. Pero no era así a mediados de la década del 70. Ni por asomo.

¿Qué hubo tras la decisión de Pinochet? ¿Intuición, visión, conocimiento? Para mí, una gran demostración de liderazgo y coraje político para mantener firme el timón cuando el mal tiempo arreciaba. Lo digo porque hay quienes creen ver en el nexo Pinochet-economistas sólo el rostro de la conveniencia. El modelo le aportaba una propuesta coherente y de paso le brindaba una coartada para el ejercicio prolongado del poder: si el gobierno chileno no se hubiera embarcado temprano en un proyecto de transformación de gran envergadura, jamás habría podido sostener aquello de las «metas y no plazos». Una revolución de esa magnitud —eso es lo que era— necesitaba tiempo.

Desde el otro lado, Pinochet le aportaba al equipo económico algo quizás aún más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones. Más de alguna vez en el frío penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían ese problema.

Desde un ángulo muy diferente también hay que calibrar lo que tal modelo representaba políticamente para la derecha: ni más ni menos que el término de la «sequía» programática. ¡Aquí estaba el proyecto modernizador que tanta falta había hecho para tener mejor suerte en la competencia democrática anterior a 1973! ¡Por primera vez en décadas la derecha era portadora de

un proyecto ideológico frente al cual los adversarios parecían sin respuesta!

Lo remarcable del gobierno militar chileno no fue ni su carácter ni su duración. Hay otros gobiernos autoritarios prolongados que pasan sin pena ni gloria. Fue que —como pocos— tuvo un proyecto. «La transformación chilena no fue un milagro. Fue un programa» —ha escrito Hernán Büchi.

Hay que reconocerlo: cuando la sociedad chilena pedía a gritos cambios, cuando la economía se debatía entre la ineficiencia y la frustración, la democracia chilena fue miope y sorda. Extravió el camino. Se equivocó. Puso los énfasis donde no debía. Y tuvo que ser un gobierno militar el que devolviera al país la viabilidad que había perdido.

A partir de 1973 Chile comenzó —bien, regular o mal— a valerse por sí mismo y a atreverse a competir. Aprendió además una lección histórica: que son los propios países los que con sus políticas labran la prosperidad o se estancan en el subdesarrollo. El día que Chile dejó de echarle la culpa de su pobreza a otros comenzó a conectarse con la modernidad.

Sirenas de alarma

Cerradas las campañas, los días previos al plebiscito no podían quedar destinados a otra cosa que a la preparación de apoderados y a los últimos detalles de la jornada electoral. En Renovación preparamos bien las actividades del día D, conviniendo que todos los militantes debían votar temprano —algunos dirigentes como Jarpa y don Pedro lo hacían en provincias— para reunirnos a eso de las siete de la tarde en la comisión política. La idea era esperar juntos los resultados. En todo caso, el día anterior habíamos dejado lista una declaración publica para el caso de una derrota.

La percepción dominante era que si ganaba el *Sí* hablaría La Moneda; en cambio, si ganaba el *No,* quienes iban a tener que hablar éramos nosotros. Mejor estar preparados.

Ricardo Rivadeneira siempre recordaba el día que ganó Allende: la famosa Casa de la Victoria, la arrogante sede del comando alessandrista, esa noche se vació. Los encargados de la campaña se borraron y llegó el momento en que no había nadie que fuera a la televisión. Al final, el que sacó la cara fue Pablo Rodríguez.

Entre lunes y martes me dediqué a atender a las delegaciones extranjeras de la International Democratic Union, a los enviados del Partido Republicano de los Estados Unidos y a la delegación internacional que presidía el ex jefe de gobierno español, Adolfo Suárez.

Tuve otras dos reuniones importantes. Una con Genaro Arriagada, coordinador general de la campaña del *No,* y otra con Óscar Godoy, integrante del Comité de Personalidades por las Elecciones Libres. Establecimos un sistema expedito de comunicación a través de teléfonos directos y un horario en que nos hablaríamos de todas maneras para intercambiar informaciones. Noté en Genaro una confianza absoluta en el triunfo, pero gran desconfianza en la que sería la reacción de Pinochet. Óscar, que había estudiado en profundidad las encuestas, me aseguró que todas eran coincidentes y que no veía cómo el *Sí* podría descontar la ventaja. Esa línea doble sería mi «teléfono rojo».

En Renovación montamos un sistema de información en las quince ciudades claves del país y en la mayoría de las comunas de Santiago a partir de una muestra seleccionada de mesas, para conocer la tendencia apenas empezara el recuento.

El martes me fui temprano a la casa, después de refutar una versión del Departamento de Estado respecto de un posible fraude en el plebiscito.

Como a las 11:00 de la noche, me llamó Isidro Solís para pedirme una reunión urgente. Conozco a Isidro desde el Liceo Lastarria. Es miembro del Partido Radical y colaboraba estrechamente con Aylwin, al punto que algunos envidiosos se quejaban de que el futuro presidente le daba trato de «regalón». Más adelante sería nombrado a cargo de Gendarmería y, posteriormente, director de Seguridad Pública.

—Vente para acá —le dije.

Apareció a los quince minutos.

—Creemos que mañana gana el *No* y nuestro temor es que haya gente pensando en un golpe de Estado —me dijo de entrada—. Tenemos información de la mejor fuente.

—No creo —dije yo—. No hay condición alguna para algo así.

Durante casi media hora continuó la conversación. Yo insistía en saber de dónde sacaban ellos la información, para calibrarla en términos de confiabilidad, y argumentaba que a esas alturas del proceso nadie podía desconocer el resultado electoral. Las Fuerzas Armadas no se prestarían para una aventura así, en Chile no había tradición de fraude, estaba montada una fenomenal red opositora de control, las cadenas internacionales de televisión se habían instalado hacía una semana y los observadores extranjeros eran decenas. ¿Cómo podía desconocerse el resultado? Ellos insistían en que no eran fantasías.

—Bueno —les dije como para terminar—, ¿y por qué me lo cuentan a mí?

—Aylwin, Lagos, Silva Cimma y los demás dirigentes de la Concertación están informados. Ellos pensaron que era bueno que tú estuvieras al tanto.

Al rato hubo un segundo telefonazo.

—Hola, ¿Andrés? Habla Camilo Escalona. ¿Te acuerdas de mí?

—Hola, Camilo —respondí con sorpresa: hacía más de quince años que no sabía de él.

Con Camilo Escalona y Miguel Salazar habíamos sido los candidatos a la FESES el año 1972. Luego del golpe, Camilo se exilió. En algún momento oí que vivía en Alemania Oriental y que había ingresado a Chile en forma clandestina. Camilo —socialista hasta la médula— siempre fue un tipo directo, serio y de pocas palabras. Adversario duro, pero leal. Mi impresión era que en la campaña de 1972 había sido menos agresivo conmigo que los propios DC. Debe haberle parecido una rareza que un derechista incursionara en terrenos tan hostiles.

Después de un par de palabras me explicó el motivo de su llamada:

—Mañana vamos a ganar, pero no se va a reconocer nuestro triunfo. Te llamo para saber cuál va a ser la actitud de ustedes.

¿Qué estaba ocurriendo en la dirigencia concertacionista? Tenía dos posibilidades. Repetir la conversación con Solís o enojarme. Pero tomé un camino distinto.

—Camilo, tú me conoces. ¿Para eso me llamas? Tú sabes la respuesta. Ninguno de los nuestros va a desteñir.

El día más tenso

El miércoles 5 de octubre de 1988, con toda su carga de expectación y temor, de leyenda e historia, ya había empezado.

A las 6:30 estaba en pie, vestido y listo. Con dos horas por delante sin nada que hacer, salvo esperar que llegara el diario y alguien se levantara para tomar desayuno. Me instalé en el living a matar el tiempo. No habían sido meses fáciles. Aunque muy a contrapelo, había trabajado duro, recorriendo el país y organizando trabajos electorales en mi calidad de secretario general de RN. El partido se había movilizado con energía y hasta donde era posible habíamos actuado en forma independiente. Teníamos un ejército de apoderados que cubrirían casi todas las mesas. Tenía tranquilidad con el trabajo realizado y la importancia del partido quedaba en evidencia en diversos detalles. Por ejemplo, Jarpa asistiría en la noche, junto a Aylwin, a un programa especial de Canal 13, tan pronto se conociera la tendencia de los resultados. Estaba claro que iba a ser el programa más importante de todos.

Al rato tiraron el diario sobre la reja.

Apenas lo abrí, me fijé en una información de la primera página: «Encuesta Skopus da 55,3 al *Sí* y 46,1 al *No*». Las bajadas daban cuenta que la encuesta estaba hecha 48 horas antes y, según ella, por 700 mil votos ganaría la opción *Sí*. La crónica era breve y bastante confusa. Afirmaba que el *Sí* había recuperado terreno en las zonas rurales y las ciudades de tamaño pequeño. Además, se sumaban a la opción *Sí* «los 200 mil sufragios que

provendrían de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias». Sin embargo, algo —no sabía qué— me parecía raro.

Revisé el resto del diario y encontré mis declaraciones referidas al rumor esparcido por el Departamento de Estado. Sus términos eran categóricos: «La hipótesis debe descartarse por absurda e irreal».

Al terminar la lectura, volví a la primera página. Algo no cuadraba.

—No suma —pensé—. Los números de la encuesta no cuadran. Mejor dicho suman más de cien.

Partí a la cocina a buscar un lápiz. Incrédulo de mi propio hallazgo. ¿Un error de esa magnitud en un diario como *El Mercurio?* Difícil. ¿Habría sumado mentalmente mal? Como soy muy malo para las matemáticas, sumé yo mismo arriba del diario. No daba. 55,3 más 46,1 suman 101,4. ¿Una encuesta publicada el mismo día del plebiscito que suma más de 100%? Lo hice de nuevo. Igual. Los periodistas explican errores de este tipo atribuyéndolos a «duendes». Pero ¿anda tanto duende suelto cuando hay plebiscito?

Voté temprano y maté el tiempo durante el resto del día. La proverbial tradición cívica de los chilenos se reflejaba en largas colas y enorme afluencia de votantes.

Apenas empezaron a contarse los votos quedó claro que ganaría el *No.* ¡Nunca hubo incertidumbre! Genaro Arriagada me había dicho el día anterior que ellos darían cómputos sólo a partir de haber procesado 500 mil votos o más. Toda la información de nuestra pequeña red era consistente. Don Pedro Ibáñez llamó un poco antes de las 7 de la tarde. No tenía dudas: en Valparaíso el *No* ganaba también.

A las 7:30 apareció en televisión el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, y entregó el primer cómputo: 57,36 para el *Sí;* 40,54% para el *No* sobre un total de apenas ¡79 mesas!

Era inverosímil ya que a esa hora el volumen de información debía ser mucho mayor. ¿Qué valor podían tener 79 mesas? Parecían haber sido escogidas con pinzas. Y la tendencia era inversa a la de todas las otras fuentes. La comisión política

resolvió que debíamos esperar. Las radios dieron cuenta de una declaración muy rara del propio general Pinochet, desde los patios de La Moneda, que daba cuenta de «informaciones inquietantes sobre gente con pasamontañas y armas».

Mi «teléfono rojo» sonaba sin descanso. El Comando del *No* refutaría esa cifra. A las 9:00 de la noche Genaro leyó un cómputo que minutos antes yo mismo se lo había anticipado a Jarpa: 58,7% para el *No,* 41,3% para el *Sí* sobre aproximadamente 200.000 votos.

El peor escenario estaba configurándose: dos resultados distintos para la misma elección. La temperatura empezó a subir.

—Trate de averiguar qué pasa en La Moneda —me ordenó Jarpa.

Sergio Fernández no estaba disponible. Alberto Cardemil hablaría en pocos minutos más. Parecía no haber ningún asesor a leguas a la redonda.

A las 10:00 de la noche habló Cardemil por segunda vez: 51,3% para el Sí; 46,5% para el *No.* No tuve ninguna duda: esa información estaba amañada. Seis horas después de haberse empezado a cerrar las mesas ya debería existir información a raudales en el sistema del gobierno. Pero eso no era lo más grave. ¿Cómo podía ir ganando el *Sí* en los cómputos de La Moneda y perdiendo en todo el resto? Se inició una discusión en la comisión política entre los que eran partidarios de esperar y los que eran partidarios de declarar que tales cómputos no coincidían con nuestras informaciones, para advertir al gobierno que nosotros no comulgaríamos con ninguna rueda de carreta. Sergio Molina, del Comité de Elecciones Libres, entregó un cómputo favorable al *No* y la Casa por el *Sí* uno favorable al gobierno. Entretanto, un canal pasaba... dibujos animados. Si lo que quisieron era tranquilizar a la ciudadanía, lograron lo contrario.

Hablé con Bernardo Matte que había ido a La Pintana a recoger a un grupo de apoderados —varios eran estudiantes universitarios— que se habían quedado aislados.

—¿Los pudiste recoger? —pregunté.

—Pude, después te cuento cómo —me contestó—. Acá el

ambiente está pesadísimo. La gente está muy alterada. Estoy preocupado por el resto de los cabros jóvenes.

El *jeep* de Bernardo, una esquina antes del lugar de encuentro con el grupo de apoderados, fue rodeado por una turba de manifestantes. Un cabecilla se asomó a la ventana y al ver un equipo de video resolvió que eran periodistas. Fue más lejos: colgado en la pisadera gritó que había que dejar pasar a la TV extranjera. ¡Confundieron a Bernardo con un periodista sueco que había estado ahí el día anterior!

FIN DE FIESTA

Un poco después de las 11 de la noche, me llamaron del Canal 13. Todo estaba trastocado. El programa entre Aylwin y Jarpa, que en principio estaba previsto para las 10 de la noche —se suponía que a esa hora la tendencia sería clara— todavía estaba en veremos. Pero la idea era salir al aire antes de la medianoche. Jarpa debía irse de inmediato al canal, Aylwin ya iba en camino.

La reunión de la comisión política fue suspendida. Jarpa se paseaba en su oficina.

Le conté que lo esperaban en el Canal 13.

—¿Qué pasa con Cardemil? —preguntó—. ¿No iba a dar ya un tercer cómputo?

Entretanto Óscar Godoy había llamado para entregar información actualizada del Comité por Elecciones Libres. A esas alturas, no había ninguna duda: ganaba el *No.* Ya existían cómputos fehacientes sobre más de dos millones de votos.

—Llama de nuevo a La Moneda —me sugirió Gastón Cummnis.

—Yo voy a hablar con mi papá —dijo Evelyn Matthei.

En La Moneda, Sergio Fernández no salía al teléfono. Y Cardemil estaba preparando el esperado tercer cómputo. Inicialmente se había anunciado para las 11:15 horas y estaba demorado. No me iba a quedar por segunda vez esperando que alguien saliera al teléfono.

—Señorita, dígale al ministro, o a quien sea que ande por ahí, que Renovación Nacional va a declarar que el gobierno esta engañando al país —le advertí.

—Un segundo, don Andrés.

Apareció Carlos Goñi, abogado asesor del ministro, militante de la UDI.

—Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué esperan?

—Quédate tranquilo —dijo—. No hay problema. Se va a dar un cómputo de un millón de votos favorable al *Sí*.

No lo podía creer. Me enfurecí.

—¡Están locos! ¡La oposición tiene listo un cómputo de dos millones de votos con el *No* adelante! Jarpa se va yendo al Canal 13. Aylwin le va a tirar dos millones de votos arriba de la mesa. ¡Están cometiendo una brutalidad!

Debo haber gritado porque mi oficina se llenó de gente.

—Calma, calma —pidió Goñi—. Esa es la información que hay. Nos hemos demorado para estar seguros.

—¡Cómo que ésa es la información! ¡Esto va a estallar en pedazos! Lo único que te digo es que si dan ese resultado ¡saldré a la televisión a decir que es mentira!

Le conté a Jarpa.

—Llamemos a Alberto Cardemil —fue su reacción serena—. ¿Alguien tiene el número a mano?

Apareció el número. Llamó él mismo.

Alberto se puso al teléfono.

—Oiga, Alberto —dijo Jarpa— usted no se va a prestar para ninguna lesera, ¿no?

—Don Sergio —contestó Cardemil—. Usted me conoce. No me voy a prestar para ninguna lesera.

El tercer cómputo había abortado. Alberto Cardemil hablaría recién a las 2:00 de la mañana, cuando todo estaba oleado y sacramentado.

Jarpa partió al Canal. Desde allá me llamó Gutenberg Martínez que acompañaba a Aylwin. Estaban preocupados porque Jarpa no llegaba..

—Don Sergio ya salió —le dije.

—Tengo las cifras nuevas —me dijo—. El *No* aumenta su ventaja.

—Anótaselas en un papel y entrégaselas directo a Jarpa.

Evelyn Matthei había por fin hablado con su padre.

—Mi papá está claro. Sabe que ganó el *No.* Él y los demás de la Junta están muy enojados. Tienen una reunión con Pinochet que se ha postergado como tres veces.

En el Canal 13 Jarpa fue el primer partidario del *Sí* en reconocer la derrota. Explosión de júbilo en el Comando del *No;* ira contenida en La Moneda. Descompresión y alivio en todo el país. A la una de la mañana, yo leí una muy breve declaración a nombre del partido que reconocía el triunfo del *No.* La UDI no dijo esta boca es mía.

A veces pienso que sólo los políticos le damos tanta importancia al reconocimiento del triunfo del adversario. Me imagino que alguna gente debe considerarlo casi un trámite superfluo. ¿Qué importa reconocer la derrota? Importa, y mucho. Es una demostración de juego limpio, de caballerosidad, de reconocimiento de la decisión soberana del pueblo.

Al llegar a La Moneda, el general Matthei se sumaría a Jarpa: «Tengo bastante claro que ganó el *No*». Al parecer, la reunión fue borrascosa. Hasta hoy se especula con una supuesta solicitud de facultades extraordinarias para Pinochet que la Junta habría negado. Cuando Fernández explicó los alcances del resultado, presentándolos como un gran éxito, Matthei habría preguntado con inusual ironía:

—¿Dónde está la champaña?

A la sesión tampoco le faltaron contornos tragicómicos: en medio de la tensión, el general Valenzuela, ministro de la Presidencia, se desplomó desmayado. No resistió la intensidad del trance.

En cualquier caso, para lo que no existe hasta hoy ninguna justificación razonable es para la dilación en la entrega de los resultados. Algunos de los que estuvieron ese día en La Moneda han explicado que los funcionarios de gobierno encargados de transmitir los resultados demoraron hasta el límite el despacho,

anonadados por la derrota: ellos mismos le habían asegurado a sus superiores un aplastante triunfo del *Sí*. En todo caso, lo que la historia sí ha consignado es que a las 2.00 de la mañana el vicecomandante en jefe del Ejército se habría cuadrado frente a Pinochet:

—El Ejército está listo mi general, a sus órdenes.

—La Constitución se cumple, señor vicecomandante —fue la respuesta de Pinochet, frase idéntica a la pronunciada por el general Ibáñez 60 años atrás.

Cuando Jarpa volvió a la sede, todos los dirigentes le tributamos un gran aplauso. Había estado grande.

Al día siguiente, casi sin cambios, leímos la declaración que teníamos preparada desde el día anterior: gran reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su gestión al frente del país, un pequeño «recordatorio» del error que había significado perseverar en el plebiscito y a mirar hacia adelante: «Se ha perdido el plebiscito, ahora hay que ganar las elecciones».

Capítulo VIII

Grabando...

El mismo día que se aprobó la Constitución del 80 fui invitado a un foro en Televisión Nacional. Estaban Pablo Rodríguez, Ricardo Claro, Juan de Dios Carmona, Silvia Pinto, William Thayer, Enrique Campos Menéndez y otros que olvido. Un lote grande… y pesado.

¿Qué hacía yo ahí? No tenía cargo alguno, no formaba parte de ningún grupo ni participaba en política. Al parecer una intervención mía la semana anterior había agradado a los productores. Y allí estaba entre la flor y nata de quienes apoyaban al gobierno militar.

Hasta los últimos tres minutos del programa no me daban la palabra. Al final, el conductor dijo algo así como «escuchemos ahora a los jóvenes». Intervine diciendo que lamentaba discrepar con lo que había oído —descalificación absoluta de los puntos de vista opositores y panegírico de la nueva Constitución— porque pensaba que el sentido del voto *Sí* era avanzar a la concordia nacional más que seguir entrampados en rencores pasados. No fue más que eso ¡y se acabó el programa! Sin siquiera pensarlo me había quedado con la última palabra.

Mis expresiones contrastaron tanto con las de los demás que el director, acogiendo un generalizado sentimiento de molestia en el grupo, me pidió que cambiara mi intervención.

—Andrés, vamos a grabar de nuevo tu parte.

Yo me negué.

—Entonces te borro del programa —fue su amenaza.

Pero no podía hacerlo porque si bien mi intervención era la última había aparecido fugazmente en cámara un par de veces antes. La solución fue literalmente un «parche»: consistió en alargar la grabación del foro. Nos instalaron a Thayer, Carmona, Campos Menéndez y a mí —mudo y con cara de amurrado— en el estudio y cada uno de ellos habló. Luego «pegaron» el nuevo final sin que nadie se diera cuenta.

La anécdota es reveladora del clima de inflexibilidad bajo el cual tuvo lugar el plebiscito y del engreimiento en que cayó el régimen con su victoria.

Exactamente ocho años y un mes más tarde, después de otro plebiscito, el ánimo del régimen militar sería muy distinto.

ECOS DE AFGANISTÁN

1980 fue un mal año para la democracia en el mundo. En toda América Latina sólo México, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Perú eran democracias. Y algunas muy recientes. ¿México democracia? Calzaba mejor el apelativo que le endosó Vargas Llosa: la «dictadura perfecta».

América Central se bamboleaba entre gobiernos militares y caudillos inescrupulosos, alternando corrupción institucional, clientelismo político y nepotismo a tajo abierto.

El comunismo tenía una enorme fortaleza. Vietnam sólo estaba cinco años atrás. Y las famosas frases del Che Guevara aún resonaban: «Crear dos, tres... muchos Vietnam. El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo sin odio no puede triunfar».

La Unión Soviética dominaba el segundo mundo y quería ir más lejos. Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Hungría y, en menor medida, la hoy dispersa

Yugoslavia estaban sometidos a su férreo control. Y no era fácil salir de ahí. La «Primavera de Praga» había sido aplastada apenas en 1968. Cuba no sólo exportaba la revolución en esta parte del mundo: tenía un inmenso ejército combatiendo en África.

La izquierda ejercía una fuerte hegemonía intelectual y política. Y la contramarea aún no empezaba. Margaret Thatcher había llegado al poder dos años antes. Ronald Reagan obtendría su victoria a fines del mismo año 1980. La revolución conservadora-liberal todavía no partía y la debacle del «imperio del mal» no se la imaginaba nadie.

Tal contexto internacional es decisivo para entender las definiciones constitucionales adoptadas por el régimen militar. La erosión, desgaste y derrumbe de la democracia chilena fue percibido en función del avance comunista y la expansión soviética. El régimen militar chileno siempre se vio a sí mismo como un puesto de avanzada en la lucha del mundo libre contra el comunismo.

Y si se necesitaba una confirmación, ella vino desde la cúspide.

—¿Por qué la Unión Soviética invadió Afganistán? —le preguntaron a Leonid Breznev el mismo año 1980.

—Para impedir un nuevo Chile —fue su respuesta.

¡NI LOS GRIEGOS!

¿Cuál fue el eje central de la arquitectura política de la Constitución de 1980? Un doble convencimiento: que la democracia liberal era incapaz de contener la agresión comunista y que Chile no debía retornar al esquema institucional previo a 1973.

En el debate del Consejo de Estado se llegó más lejos: don Pedro Ibáñez y Carlos Cáceres en su «Voto de Minoría» plantearon derechamente «afianzar el carácter militar del régimen y restringir considerablemente la utilización del sufragio universal».

—Tratamos de ir al fondo del problema —me dijo más de una vez don Pedro—. Yo nunca pretendí que mi voto pasara por el filtro de los llamados principios democráticos. Se trataba

de algo distinto. Ni más ni menos que fundamentar un nuevo régimen político.

A todo esto Carlos Cáceres no le iba en zaga:

—Al establecerse el sufragio universal como forma de generación de todos los poderes públicos se inyecta en el sistema la raíz de su destrucción.

Cuando don Pedro y Carlos Cáceres expusieron su pensamiento en el seno del Consejo de Estado, el ex presidente Gabriel González Videla les salió al frente:

—Tales ideas son totalitarias y fascistas. Serán explotadas en Chile y en todo el mundo. Propiciarlas llevará a un desastre político. El conocimiento público sobre el punto puede producir gravísimas reacciones de opinión pública dañándose aún más el prestigio de Chile.

La segunda línea de pensamiento conducía inevitablemente a que la tarea del gobierno militar fuera gestar una institucionalidad diferente de la anterior.

La «ingenuidad» de las democracias liberales fue conjurada atenuando la importancia del sufragio universal con un decisivo tercio del Senado designado, excluyendo de la vida cívica a las doctrinas totalitarias, creando un Consejo de Seguridad Nacional y asignando a las Fuerzas Armadas un claro rol político, junto a inusitados grados de autonomía e incluso una nueva noción de obediencia al poder civil. También se vigorizó el presidencialismo en extremo, incorporando facultades insólitas en cualquier régimen no parlamentario como la de disolver la Cámara de Diputados. No sólo eso. El mismo Senado quedaba tan desmejorado que Bulnes dijo que era «un cuerpo sin alma».

El procedimiento de reforma de la Constitución era un cerrojo triple, con engranajes que se hacían más exigentes dependiendo de la importancia de las materias afectadas. En general toda reforma requería 3/5 de los votos de senadores y diputados. Para un segundo grupo de reformas ya no bastaban 3/5, sino que se necesitaban 2/3 y además el acuerdo del Presidente. Por último si la reforma se refería a los capítulos estimados más importantes, se agregaba otro requisito más: no sólo 2/3 y

acuerdo del Presidente, sino que ratificación de un segundo Congreso. Que nadie se llamara a engaño: Era una Constitución pétrea.

Pinochet en su ejemplar el «Arte de la guerra» de Sun-Tzu tiene subrayado el siguiente pasaje: «quienes son excelsos en el arte de la guerra cultivan su propia justicia y protegen sus leyes e instituciones. Así hacen que su gobierno sea invencible».

Al lado opuesto, los opositores tenían juicio formado sobre esa arquitectura institucional.

—La Constitucion de 1980 niega la democracia —declaro el «Grupo de los 24», el embrión de la futura Concertación de Partidos por la Democracia.

El juicio era exagerado y no reconocía ninguno de los indudables méritos de la Constitución, especialmente el llamado «orden económico» y —¡vaya paradoja!— el adecuado tratamiento legal de las garantías individuales contenida en los artículos permanentes, pero reflejaba un serio conflicto político. ¿Cómo puede funcionar una democracia cuando una parte significativa del país rechaza la Constitución en que ésta debe fundarse?

No era el único problema. Muchas de las disposiciones del texto constitucional generaban escepticismo y rechazo incluso en partidarios del gobierno militar. No hay que olvidar que el proyecto emanado del Consejo de Estado, fue significativamente modificado por la Junta de Gobierno antes de plebiscitarlo.

Sin ir más lejos, apenas Alessandri tomó conocimiento de los cambios redactó inmediatamente su renuncia aunque autorizó a que sus cercanos dijeran que votaría afirmativamente en el plebiscito de 1980: creía que eran más graves las consecuencias de no tener Constitución.

¿Cuál fue la razón fundamental de la renuncia de Alessandri? Los cambios que, según el ex presidente, tendían «a radicar el poder no en el gobierno elegido por el pueblo soberano, sino en las Fuerzas Armadas». Alessandri en este tema no se andaba con medias tintas:

—Ningún civil que se respete podría ser presidente de la República con tales artículos —llegó a sostener.

Siempre tuve aprensiones con la Constitución del 80. Me parecía que el hiper-presidencialismo respondía una lectura histórica equivocada ya que el conflicto presidente-Congreso no tenía tanto que ver con las facultades de ambos, sino con que el sistema generaba presidentes minoritarios. Los senadores designados siempre me parecieron una institución antidemocrática al distorsionar la voluntad popular e involucrar de lleno a las Fuerzas Armadas en la política contingente. También me parecía muy inconveniente el rol asignado a las Fuerzas Armadas. Aquí había un solo camino: dejarlas más allá de la política contingente, a riesgo de desnaturalizar su esencia.

Tenía otra certeza que se me fue acentuando en los viajes y contactos con el exterior: el sistema político que instauraba la Carta de 1980 no sería considerado genuinamente democrático en ninguna parte del mundo. Por último, no dejaba de ser intelectualmente arrogante la pretensión de «reinventar» la democracia poniéndola a resguardo de todas sus acechanzas. ¡Ni los griegos!

País encajonado

—Los chilenos votaron que yo no siguiera, pero de ningún modo por un cambio de la Constitución. ¡No habrá cambios constitucionales! —advirtió Pinochet días después de la derrota de octubre de 1988.

—Chile entero fue derrotado por la demagogia y el engaño. El resultado no le da a nadie derecho a modificar ni una coma de nuestra Constitución —escribió Pablo Longueira.

—El gobierno no considera reforma ni en sus plazos, ni en sus efectos ni en ningún otro aspecto de la Constitución —declaraba impertérrito, Sergio Fernández, cuyos días como ministro estaban contados.

—La izquierda no descansará hasta que la Constitución tenga otra firma y otra fecha —afirmaba Luis Maira, desde la vereda del frente.

—Es políticamente inadmisible que el presidente Pinochet continúe gobernando como si nada hubiera pasado —declaraba Aylwin.

Lo decía por algo: durante toda la campaña plebiscitaria había insistido en que el voto *No* abría paso a una elección abierta de presidente y debía conducir a negociaciones para reformar la Constitución.

El problema era complejo: La Constitución tenía plena vigencia y el respaldo de las Fuerzas Armadas, pero la mayoría del país se había expresado en contra. Más todavía, era previsible que tal mayoría ganara las próximas elecciones presidenciales y el nuevo gobierno consideraría la Constitución «una camisa de fuerza». Si no lograba la mayoría parlamentaria para modificarla argumentaría que mecanismos espurios —el sistema electoral y los senadores designados por Pinochet— impedían la expresión de la mayoría ciudadana. Las consecuencias de ello estaban cantadas: alta tensión política, fuerte inestabilidad institucional. ¡Imposible imaginar una peor forma de reinaugurar la democracia!

Yo estaba convencido de que la Constitución debía reformarse ahora. Después de la derrota del plebiscito, el resultado de la futura campaña era previsiblemente negativo. Pero si su eje era el tema constitucional, sería desastrosa. Ni candidatos ni proyectos, sólo una reiteración acentuada del escenario democracia-dictadura. A un lado, la Concertación con un fuerte apoyo ciudadano e inmenso respaldo internacional. Al otro, las Fuerzas Armadas atrincheradas tras la tarea de hacer cumplir, contra viento y marea, una Constitución rechazada.

Me parecía oír la propaganda. ¿Está usted a favor de un sistema donde el general Pinochet nombra nueve senadores y el pueblo elige sólo 26? No. ¿Está acuerdo con un sistema que impide a la izquierda organizarse políticamente? No. ¿Con el exilio? No. ¿Con el Consejo de Seguridad Nacional? No.

Pero, ¿cómo convencer al gobierno?

—No reformen la Constitución —fue la recomendación final del ministro del Interior al despedirse de Pinochet y saludar fríamente a su sucesor, Carlos Cáceres.

El país estaba encajonado entre los que no querían aceptar ni la primera letra a la Constitución y los que querían que no se le moviera una sola coma.

La cuenta a medias

El 30 de noviembre de 1988, luego de muchos estudios, la comisión política de RN, presidida por Jarpa, aprobó unánimemente una propuesta de reforma en base a un anteproyecto preparado por Carlos Reymond, Francisco Bulnes, Ricardo Rivadeneira y Miguel Luis Amunátegui: el artículo octavo era reemplazado por el texto convenido en el Acuerdo Nacional; el Consejo de Seguridad Nacional sufría cambios en su integración y en sus facultades; el presidente perdía la facultad de disolver la Cámara, el sistema de reforma constitucional se flexibilizaba y se zanjaba el tema de los senadores designados. «RN estima que todos los miembros del Parlamento deben arrancar su origen de la soberanía popular. Excepcionalmente RN participa de la idea de que los ex presidentes integren el Senado por derecho propio».

—Pídale usted una audiencia al ministro del Interior y le entrega el documento. No quiero que digan que estamos actuando a espaldas del gobierno —fue el encargo de Jarpa al finalizar la concurrida conferencia de prensa en que dio a conocer la propuesta de Renovación.

Lo cumplí esa misma tarde y tuve una larga conversación con Carlos Cáceres. El ministro tomó atentas notas en un block de apuntes que siempre tenía a mano.

—Reforma va a haber de todas maneras. Ahora o después —dije, en el tono más persuasivo posible al final. —Si es ahora, es con las Fuerzas Armadas en el gobierno; si es después, es con las Fuerzas Armadas fuera del gobierno. No tiene dónde perderse, Carlos. Convenza a Pinochet.

Me quedé con la impresión de que Cáceres ya había iniciado el esfuerzo destinado a persuadir a Pinochet y su círculo más

próximo, si no de la conveniencia, al menos de la inevitabilidad de la reforma.

—Veremos como le va —fue el parco comentario de Jarpa—. Allá adentro cuesta mucho conseguir las cosas.

La actitud del gobierno era una incógnita. En cualquier caso, no podíamos quedarnos inmóviles.

Gutenberg Martínez y yo éramos secretarios generales del PDC y RN y «brazos derechos» de Aylwin y Jarpa. Un par de semanas después del plebiscito acordamos que luego de que cada partido fijara una posición, exploraríamos la realización de una reunión conjunta entre las directivas.

A fines de diciembre Gutenberg habló con Aylwin y yo con Jarpa.

—Está bien. Pero sólo con Aylwin y la Democracia Cristiana. Yo no me entiendo con el resto de la Concertación —dijo Jarpa—. Además, el gobierno no va a aceptar a los socialistas. Pinochet no va a dejar que ninguno de sus ministros se siente con ellos en la misma mesa.

De tal exigencia surgió una fórmula que tuvo innumerables ventajas: RN y el PDC convinieron en establecer una «comisión técnica» que sometería una propuesta de reforma a consideración de los partidos. Para que tuviera total independencia, sus miembros actuarían «a título personal» sin comprometer a sus mandantes.

La fórmula le permitió al PDC incorporar (con nuestro silencio cómplice) a toda la Concertación: a Francisco Cumplido, se agregaron José Antonio Viera-Gallo, Adolfo Veloso y Carlos Andrade, en nombre del PPD, PS y Partido Radical, respectivamente. A nosotros nos permitió incorporar a tres destacados académicos: Óscar Godoy, Enrique Barros y José Luis Cea. Esa representación tenía «origen» RN, pero iba más allá de la sola derecha. Los tres, junto a Francisco Bulnes, Ricardo Rivadeneira, Miguel Luis Amunátegui y Carlos Reymond eran un equipo inmejorable.

El 21 de diciembre de 1988 se efectuó la reunión prevista en un salón del Hotel Carrera. Ambas partes acudieron con su

plana mayor y al final del encuentro, Aylwin y Jarpa leyeron declaraciones previamente intercambiadas.

En la periferia del régimen militar aparecieron voces críticas. El *ethos* de la política chilena seguía siendo el conflicto y la animosidad. Pero había más. La verdadera molestia era otra. ¿Quién había «autorizado» a RN a buscar acuerdos destinados a modificar la Constitución del régimen militar con los adversarios del gobierno?

Para mí, la reunión era un acto de autonomía. Los civiles organizados ejercíamos nuestro derecho a configurar la institucionalidad democrática en la que deberíamos desenvolvernos. ¿Por qué debíamos aceptar mecanismos institucionales inconvenientes para el país? Éramos un partido político formado por gente que asumía sus responsabilidades. No un regimiento más.

También pensaba que era el inicio de una nueva etapa de relaciones entre la derecha —representada por RN— y el PDC. Si por el peso de la historia —reciente y remota— el PDC continuaba con la anomalía de aliarse hacia su izquierda, ambos partidos debían ser los soportes de la gobernabilidad. Más aún, si hacia adelante la política discurriría en torno a dos coaliciones, rompiéndose así los tres tercios, los partidos mayoritarios de cada una anclarían el sistema en el centro. En una frase: aliados para construir una democracia estable, adversarios para disputar legítimamente el poder.

Esa misma tarde, con *La Segunda* en la mano y una foto de la reunión en primera página, me llamó Gutenberg.

—¿Qué te pareció todo?

—Imposible mejor.

Pagamos a medias la cuenta del hotel.

El impasse Maira

A fines de diciembre de 1988, Aylwin solicitó una entrevista al ministro Cáceres para tratar el tema constitucional, anunciando que iría acompañado de Ricardo Lagos, Enrique Silva

Cimma y Luis Maira. Carlos Cáceres concedió la audiencia, pero exigió no incorporar a Maira «pues se trata de un dirigente de un partido político en formación en el cual militan, como producto de una alianza política de largo alcance, comunistas y otros sectores que desconocen la institucionalidad».

La Concertación, como era de esperar, dio por suspendida su petición de audiencia.

Fue una escaramuza absurda. En todo caso, Jarpa mostró, una vez más, su olfato. Los socialistas no tendrían pase libre en La Moneda. Pero aunque pareciera lo contrario, Cáceres había entreabierto la puerta.

No hubo que esperar demasiado. El 11 de marzo, Pinochet anunció que había «instruido al ministro del Interior para que, previa consulta a los partidos, me informe sobre la conveniencia de introducir algunas modificaciones a la Constitución Política».

Cáceres había logrado un imposible. Pero tenía un mandato intrincado. Debía ser un negociador de ida y vuelta. Convenir una reforma con los partidos y convencer del mérito de la misma a Pinochet. Nada fácil. El «mandato» señalaba taxativamente las áreas que deberían explorarse ¿Qué razón había para ello?

—Para que no se arranque con los tarros —explicaba el círculo más cercano a Pinochet.

—Para estar seguros de que no habría desautorización —justificaban los cercanos al ministro.

En todo caso, no había en tales áreas sorpresa. Al abanico de temas conocido sólo se agregaba el acortamiento del primer período presidencial de ocho a cuatro años.

—¿De quién es ese invento? —pregunté.

—Facilita todo. A Pinochet le gusta y a Lagos le parece impecable. ¿A quién le importa de donde salió? —fue la respuesta que me dio *Talo* Reymond.

Carlos Cáceres inició una ronda de conversaciones con los dirigentes de todos los partidos en La Moneda. El primero fue Jarpa. Al día siguiente estuvo con Aylwin. Siete años habían transcurrido desde que un ministro del Interior del régimen

militar se sentara a conversar con los dirigentes de la oposición. Después desfiló el resto. Nadie se acordó del impasse Maira.

Nada es perfecto

La comisión técnica RN-Concertación completó su trabajo a principios de abril de 1989.

Ésta era su columna vertebral: cambiaba el artículo octavo, a través de una redacción idéntica a la del Acuerdo Nacional, aumentaba el número de diputados y de senadores, eliminaba los senadores designados y propiciaba un sistema electoral proporcional. Al Consejo de Seguridad le agregaba dos miembros civiles (el presidente de la Cámara y el Contralor General de la República) y se atenuaban sus facultades. Por último, se facilitaba la reforma de la Constitución.

Los miembros de RN concurrieron a los acuerdos dejando estampadas tres reservas: no suscribían el apoyo al cambio del sistema electoral, pensaban que los ex presidentes debían integrar el Senado y creían que los capítulos más importantes de la Constitución debían modificarse con requisitos más exigentes.

—La izquierda no se lo va a tragar —le comenté a Miguel Luis Amunátegui, cuando revisamos el texto del informe.

—No se van a atrever a desautorizar a su gente —fue su respuesta.

Mi impresión —que se demostró errada— surgía simplemente de revisar los acuerdos alcanzados: en la proscripción de los movimientos antidemocráticos se aceptaba nuestro principio de sancionar «objetivos, actos o conductas»; aunque modificado, se mantenía el Consejo de Seguridad Nacional y de la inamovilidad de los comandantes en jefe no se hablaba. Ello generaba un resultado políticamente muy importante: Pinochet mantendría su cargo hasta 1997. En materia de reforma constitucional, nuestros representantes habían logrado que se aceptase que el quórum base fuera de 3/5 de los parlamentarios en ejercicio, es decir, una mayoría exigente y difícil de alcanzar.

Era cosa de comparar el punto de partida de RN y el de la Concertación. Nuestra gente había hecho un trabajo excepcional.

Desde La Moneda, mientras tanto, Carlos Cáceres afinaba su propuesta. Tenía una ventaja: arriba de la mesa estaba el acuerdo RN-Concertación, que marcaba el rango de la maniobra. Podía mover sus piezas con todo el juego desplegado en el tablero.

El 27 de abril una noticia remeció el ambiente: Cáceres había renunciado luego de presentar un proyecto de reformas que Pinochet rechazó. Sin embargo, al final del día, Cáceres fue confirmado en su puesto.

¿Qué había pasado? Misterio. Mi impresión es que Pinochet utilizaba como recurso un camino más «duro» que el que le ofrecían sus asesores. Pero con la cuerda tensada al máximo, su gran instinto político lo prevenía de dar pasos en falso.

Al día siguiente de haber renunciado, Cáceres habló al país con un lenguaje muy diferente al de Pinochet, reconociendo, para sorpresa de los opositores más recalcitrantes, que el «gobierno no hace obras perfectas» por lo que la «bondad de las normas de la Constitución de 1980 no obsta a que pueda ser perfeccionada».

Y propuso la siguente fórmula: reemplazo del artículo octavo, incorporación de un civil más al Consejo de Seguridad y cambio de sus facultades y, lo más importante, flexibilización del sistema de reforma con una fórmula menos exigente que la original pero más alta que la que quería la Concertación. El Senado quedaba igual: un tercio designado.

Nuestra reacción fue positiva. La propuesta ministerial acogía la línea gruesa del pensamiento constitucional de RN.

La Concertación rechazó la reforma.

—La propuesta del gobierno no ofrece ninguna base de avance y en torno a ella no hay ninguna posibilidad de acuerdo —declaró el mismo Aylwin.

En realidad no era así. La respuesta era un exabrupto. La verdad venía de otra parte. Al interior de la Concertación la izquierda había aceptado a regañadientes el acuerdo con RN.

Muchos de sus dirigentes pensaban que se había negociado mal con RN y responsabilizaban a José Antonio Viera-Gallo por «muy blando»; a Adolfo Veloso por «muy técnico»; a Carlos Andrade, por «muy académico», y a Francisco Cumplido por «muy componedor».

Y había otra razón.

—El propósito fundamental de la propuesta es cerrar la pequeña válvula que tiene la Constitución y que permite modificarla con el 60 por ciento del Parlamento —señaló Ricardo Lagos.

¿A qué se refería Lagos?

Una válvula en el cerrojo

Toda fortaleza tiene un flanco débil. Y todos los esfuerzos por fosilizar la Constitución se evaporaron cuando se descubrió que sus altos quórums no se aplicaban al capítulo XIV que contenía el procedimiento global de reforma de la carta fundamental ¡Un error increíble! Pero así era. Lo que para Lagos era una «válvula», era un enorme «forado» en la lógica del gobierno militar. La grieta de la Constitución del 80 era un secreto a voces. Muchos en la Concertación pensaban que el mejor negocio era apostar a obtener el 60% del futuro Congreso y, con esa mayoría, cambiar primero el capítulo sobre la reforma y posteriormente la Constitución a voluntad.

Estoy absolutamente seguro de que tal elemento fue determinante, así como también influyó que en el gobierno militar se constatase los peligos de haber diseñado una Constitución hiperpresidencialista…pensando que el general Pinochet ganaría el plebiscito. Ahora tocaría estar al otro lado del mesón y era evidente la conveniencia de disminuir algunas de las exorbitantes facultades del Ejecutivo, como la de disolver la Cámara de Diputados o aquélla inaudita que le habría permitido aprobar leyes sólo con mayoría en una cámara y apenas un tercio de la otra.

Por último, también influyó un factor que en esos meses nunca tuvo aristas muy públicas, pese a su capital importancia. Las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas eran leyes ordinarias y en consecuencia susceptibles de ser modificadas conforme a mayorías simples. Sin reformar la Constitución no había forma de darles un rango jerárquico más alto... que fue precisamente lo que ocurrió. Con ello —aunque sólo se advirtiera mucho después— se definió uno de los rasgos más salientes de la transición y el nervio de muchos conflictos posteriores.

REPONIENDO EL MANTEL

El fracaso de la reforma era el peor de los escenarios.

Había que actuar antes de que la situación se decantara y se hiciera irreversible.

—Llamemos a Aywin —le sugerí a Jarpa—. Impidamos que el diálogo se clausure.

—¿Usted cree que acepte? —preguntó con dudas.

—La izquierda impuso su criterio. Pero no se olvide que Aylwin es casi seguro presidente. A él no le conviene que el asunto se cierre. Déjeme hablar con el *Gordo* Correa. Él, más que nadie, tiene que estar atravesado.

Lo llamé.

—¿Por qué tiraron el mantel? —le reproché, y luego—: Enrique, ¿cómo salimos del enredo?

—No se me ocurre.

—Juntemos a Aylwin y Jarpa mañana a primera hora. Digamos que el acuerdo RN-Concertación sigue a firme. Una sola señal: el diálogo sigue abierto. Y un solo mensaje: lo que no se hace ahora lo aprueba el primer Congreso más adelante.

—Conforme, a las 9:00 —dijo al rato Correa.

Un personaje Enrique Correa. Influyente. Operador. Multifacético. ¿Cuántos voceros gubernamentales en el mundo son capaces de la proeza de sobrellevar una leve tartamudez? Uno de sus amigos lo describió en forma incomparable:

—El *Gordo* es único. Cuando teníamos 15 años nos hizo demócrata cristianos. Cuando teníamos 25 nos transformó en marxistas. Cuando teníamos 35 nos hizo socialdemócratas. Ahora que tenemos más de 45, quiere que seamos liberales. ¡Nadie puede!

Aylwin vino a Renovación Nacional, junto a Enrique Correa, el primer socialista en pisar la sede de un partido de derecha en quizás cuántas décadas. Resultado: los acuerdos RN-Concertación seguían en pie. Había que reanudar el diálogo.

Pero no sería fácil.

Mientras se efectuaba la reunión Jarpa-Aylwin se difundía la respuesta del gobierno a través del propio Cáceres:

—La Concertación, junto con rechazar de plano la proposición del gobierno, cierra toda posibilidad para lograr el consenso ciudadano. Ante esa negativa no cabe proponer reforma alguna. Los chilenos tendrán que velar para que sean electas personas que desde el Congreso eviten el desmontaje de la nueva institucionalidad.

Las dos semanas siguientes fueron de fuertes recriminaciones entre gobierno y Concertación. Después de meses de negociaciones, esfuerzos, declaraciones y reuniones, el país había llegado al convencimiento de que las reformas eran importantes y necesarias. ¿No coincidían en eso gobierno y oposición? También era claro que se habían alcanzado significativos acuerdos y que las diferencias graves se reducían a dos aspectos: senadores designados y sistema de reforma. Simplemente no era presentable que cerca de la meta todo volviera al punto de partida.

De alguna forma la Concertación había flexibilizado su postura. Faltaba ahora el gobierno.

—La idea es que se avance en esta etapa todo lo que se pueda a través de la iniciativa del propio gobierno y los temas que queden pendientes serán abordados por el futuro Congreso —le recordaba Jarpa haciéndole ver el riesgo del inmovilismo.

EL DIÁLOGO CLAVE

El 10 de mayo RN movió otra pieza: Jarpa y Reymond propusieron una nueva fórmula para resolver los dos problemas pendientes: aumentar a 40 los senadores elegidos y mantener a los designados sólo por cuatro años. Y en materia de reforma a la Constitución, se mantenían los 3/5 como norma general, pero las reformas de los capítulos I, III y XIV (el del forado) requerirían 2/3.

El mismo día y con gran notoriedad, también se movió Hernán Büchi, que «reflexionaba» sobre su posible candidatura presidencial. En un memorándum dirigido a Cáceres, Jarpa y Aylwin también propuso soluciones para los dos puntos más conflictivos: la regla general para la reforma debía ser 3/5, pero sugería, durante algún tiempo, establecer un quórum más alto y consideraba que «los senadores designados son un factor moderador que se justifica probablemente sólo en un período de transición»; más tarde debían abolirse.

Siempre he creído que la aterrizada propuesta de RN y la intervención de Büchi fueron fundamentales para que el gobierno reiniciara las negociaciones. Ambas eran coincidentes y provenían del partido afín más fuerte y del candidato preferido del régimen militar. Tarde o temprano la reforma sería inevitable. Pero no todos lo pensaban así. La UDI insistía en que era «esencial» que cualquier cambio en las normas sobre reforma exigiesen «la concurrencia de dos congresos sucesivos» con lo que se volvía al punto que había desatado el conflicto y se desahuciaba todo acuerdo.

El 12 de mayo, dos días después de la declaración de RN y la intervención de Büchi, y a diez días apenas de haber desahuciado «definitivamente todo acuerdo», las negociaciones se reanudaron en las manos directas de Cáceres, Aylwin y Jarpa.

El lunes 29 de mayo Cáceres, Aylwin y Jarpa pactaron una reunión para finiquitar la negociación. Jarpa me pidió que organizara un encuentro previo con Aylwin. La información que él manejaba era que Aylwin tenía muchas dudas y estaba sometido a fuerte presión de la izquierda.

Quedamos de juntarnos a primera hora de la tarde en mi casa de calle Hendaya. Aylwin vendría con Boeninger.

La primera parte de la conversación fue general. Mi argumento era que Aylwin tenía que resolver qué gobierno quería hacer:

—Para el país y para usted es mejor iniciar un gobierno de transición con la legitimidad de las instituciones resuelta, aunque no le gusten del todo. De lo contrario ese tema va a consumirlo. ¡Va a tener que dedicar toda su gestión a la reforma constitucional!

—Tampoco se olvide que despejado el tema constitucional tendrá una relación más ordenada con los militares —agregó Jarpa.

Después abordamos los dos temas pendientes: con el mecanismo de reforma no había problema. La Concertación ya había aceptado la fórmula de RN: 3/5 como norma general y 2/3 para los capítulos más importantes, incluido el de las propias reformas.

Pero no había acuerdo en los senadores designados. Aylwin insistía en que debían eliminarse.

—El problema no es con nosotros, don Patricio —argumenté yo—. El gobierno no acepta eliminarlos.

—¿Cree usted que Cáceres podrá moverse en ese punto? El ha dicho que le importa más el sistema de reforma que los designados —le preguntó Aylwin a Jarpa.

—Podemos ver —dijo Jarpa—. Pero creo que Cáceres no puede ir más lejos.

Boeninger señaló que a él le preocupaba sobremanera el Tribunal Constitucional. Jarpa puso cara de extrañeza. Era un tema al que nunca se le había dado demasiada importancia.

—A ver —dijo Aylwin, volviendo a la piedra de tope—. Aquí hay que resolver. Yo estoy convencido de que esta reforma hay que sacarla adelante.

—En materia de designados tenemos pleno acuerdo con RN —intervino Boeninger.

—No completo —interrumpió Jarpa—. Nosotros no vemos mal que los ex presidentes integren el Senado.

—De acuerdo —aceptó Boeninger—. Quiero decir que es un tema que no debiera generar dificultades a futuro. El problema lo tienes tú Patricio. Vas a tener que gobernar con nueve designados. Además con el acortamiento del plazo del primer gobierno a cuatro años, tú no serás senador al final del período.

—Ya me había dado cuenta —dijo Aylwin—. No es problema. El compromiso es que se quedan sólo un período. Yo no voy a aceptar una reforma con nombre propio y contradictoria con la idea de eliminarlos. ¡Yo siempre he estado en contra de que existan esos senadores!

—Esa fue nuestra última propuesta: los designados sólo se quedan un primer período, después se van —terció Jarpa que se había mantenido a la expectativa.

—Bueno —dijo Aylwin—. Yo estoy dispuesto a aceptar. Pero voy a hacerle una última carga a Cáceres y si no resulta le voy a pedir una señal que los designados se terminan más adelante.

La «última carga» resultó infructuosa, pero Aylwin obtuvo lo que buscaba en subsidio. Muy crípticamente logró que se eliminara de la Constitución una norma que decía que las vacantes de designados debían llenarse de inmediato. Hacia adelante no habría reemplazos. Se nombraban una vez y luego morían. Era la «señal» de que la institución sería transitoria.

La primera y única reunión conjunta Cáceres-Jarpa-Aylwin había sido la definitiva.

La última valla

Al día siguiente nos reunimos Jarpa, don Pancho, Ricardo Rivadeneira, Carlos Reymond, Miguel Luis Amunátegui y yo. Se había alcanzado un acuerdo histórico. Pero había surgido un problema: Boeninger había enviado un «anexo» para ser suscrito por RN y la Concertación. Dos carillas con dos puntos: el primero eliminaba los senadores institucionales al final del primer período y el segundo cambiaba el sistema de nombramiento del Tribunal Constitucional.

Boeninger esperaría ese papel en su oficina y luego acompañaría a Aylwin a una reunión final con toda la Concertación. Según Boeninger, el papel era «indispensable». Y así aparecía. Ese mismo día los dirigentes del Partido Socialista declaraban en los diarios que «no concederían el consenso».

Todos dudamos. No por el contenido del papel, sino por las interpretaciones de un acuerdo de esa índole. Rivadeneira propuso llamar al propio Cáceres.

—Mira Ricardo, —le advirtió el ministro—, si ustedes firman ese papel, no hay reforma. El gobierno no puede llegar a un acuerdo y aceptar que al mismo tiempo se llegue a un acuerdo complementario distinto. Todos van a hablar de un acuerdo público y de otro privado. Para mí es inaceptable.

Cáceres tenía razón. ¿Qué hacer?

—Déjenme ir a hablar con Boeninger. Yo le voy a explicar —solicité.

—Dile que se olvide del papel —dijo Rivadeneira, medio en broma medio en serio— y que en cambio yo los invito a todos a comer a mi casa. Así hacen negocios los caballeros.

Partí.

—Edgardo —le dije de entrada—, olvídate de ese papel. Nunca existió.

A continuación le expliqué por qué era imposible suscribirlo.

—¿Pero qué garantía puede haber respecto a que al resto de las reformas se harán? —preguntaba Boeninger.

—Nuestra seriedad: Renovación estuvo de acuerdo en hacer esos cambios aun antes de empezar a conversar con ustedes.

—Déjame preguntarle a Patricio.

Lo hizo delante mío. Yo estaba seguro de que Aylwin no iba a dejar que el acuerdo se esfumara. Por la cara de Edgardo me di cuenta de que la cosa iba bien.

—Dile que a cambio Ricardo invita a comer a su casa a todos los que han participado —le dije en voz baja.

Edgardo repitió el ofrecimiento. La exigencia fue retirada y la comida aceptada.

Antes de 45 minutos estaba de vuelta en Antonio Varas. Nadie se había movido de la oficina de Jarpa.

—Estamos listos —les dije—. Cambié el papel por la comida.

—Ojalá Ricardo no se olvide de avisarle a la Merce —agregó Carlos Reymond entre las carcajadas de todos.

EL PLEBISCITO OLVIDADO

El último día de mayo el general Pinochet informó por cadena nacional «que se había logrado el consenso» para modificar la Constitución. La Concertación, a través de Aylwin, señaló que daba su «aquiescencia» a las reformas, pero dejó constancia de su «profunda insatisfacción» por no haber alcanzado todos sus objetivos en la negociación.

La referencia a ese sentimiento refleja hasta qué punto la Concertación terminó la negociación con un sabor amargo.

El plebiscito se efectuó el 30 de julio. El *Sí* obtuvo el 85,7% y el *No* 8,2%. Sólo el PC llamó a votar negativamente.

No todos los partidarios del gobierno militar fueron a votar de buena gana. El propio Sergio Fernández reconocería más tarde que lo hizo con «ánimo sombrío». En su opinión, la derogación del artículo octavo era una «claudicación», la institución de senadores designados se debilitaba en forma «incomprensible» por el aumento de los electos y la no renovación de las vacantes intuyendo lo que había tras la «señal» de Aylwin y le parecía peligrosa la modificación «radical» del sistema de reforma.

Un periodista le preguntó a Pinochet qué opinaba respecto de que la reforma constitucional incluyera propuestas de la oposición:

—Está equivocado. Las reformas las hice yo. Las anuncié el 11 de marzo. Ésas son las reformas que quiero yo —fue la respuesta.

Con la reforma quedé más que contento. En sí misma, era un cambio radical en la forma en que el país había encarado durante la última década y media sus dilemas constitucionales. La

Constitución había sido vista como una herramienta contra los rivales políticos. El gobierno militar había impuesto su planteamiento, logrando ratificarlo en un plebiscito. La Concertación, con su exhortación a una asamblea constituyente, había amenazado simplemente con lo contrario. Unos y otros querían que la vigencia de la Constitución diera cuenta de la derrota del adversario político. Tal lógica debía ser desterrada. Una Constitución no puede ser un arma que los rivales políticos usan alternativamente. Tampoco un factor de división. Al revés, en cualquier democracia bien asentada, la Constitución une, aglutina y cohesiona a la ciudadanía.

Había sido un proceso complejo. Una negociación tensa y enrevesada. Quizás algo hermética para la ciudadanía. Años más tarde en un foro en una universidad un dirigente estudiantil de la Concertación me preguntó:

—¿Cuándo voté para que Pinochet fuera senador vitalicio? Yo nunca acepté eso.

—Lo aprobaste cuando votaste que *Sí* en el plebiscito de 1989 —fue mi respuesta.

La comida en la casa de Ricardo Rivadeneira se efectuó el miércoles 7 de junio.

A los postres hablaron el dueño de casa y Patricio Aylwin. El ambiente fue relajado y cordial. Asistieron todos los invitados... menos Jarpa.

Simplemente no llegó.

Capítulo IX

Apartado del piño

Febrero de 1989.

Jaime Guzmán desde el Festival de la Canción de Viña del Mar, que no se perdía por nada del mundo, dirigió un tiro frontal e intempestivo. En una entrevista dijo que las diferencias entre la UDI y RN eran una distinta identificación con el régimen militar y el «estilo»:

—Quienes se hayan sentido interpretados por Jarpa en Canal 13 la noche del plebiscito tienen razón para sentirse más cómodos en Renovación. Al contrario, quienes se hayan visto defraudados por su actitud, desconfiable y acomodaticia, tienen un buen elemento de juicio para sentirse más identificados con la UDI.

La comisión política de RN emitió una declaración de respaldo a Jarpa, haciendo ver que los ataques en su contra eran producto de «una incontrolada animosidad y encono» de Guzmán.

Jaime, lejos de amilanarse, disparó de nuevo, cuidando cada palabra:

«La única contraparte de Aylwin en el programa más importante en la noche del plebiscito fue Jarpa. Eso lo situó en la condición objetiva de intérprete de las fuerzas del *Sí*. En vez de asumir ese papel, el señor Jarpa:

a) Enfatizó diferencias con importantes sectores que habían apoyado al *Sí* y a los cuales anteriormente él condujo en muchas jornadas, diciendo ahora que no pertenecía al mismo «piño».

b) Se esmeró por tomar distancia del gobierno, subrayando que su participación en éste había sido muy limitada y circunscrita».

Lo del «piño» arrancaba de una respuesta del propio Jarpa. Cuando una periodista le señaló que él representaba a la derecha, efectivamente Jarpa separó aguas y pidió que no lo metieran en el mismo «piño».

Guzmán de allí sacaba una conclusión: «Actitudes como la del señor Jarpa son el factor que más dificulta y retarda la unidad de los partidarios de una sociedad libre».

Entonces, intervino el propio Jarpa. Lo dijo todo en tres puntos:

«1) No tengo tiempo para seguirme ocupando de las insidias y maniobras del señor Guzmán, de cuyas consecuencias él tendrá que hacerse cargo.

«2) El país conoce sus procedimientos y conoce también cuál ha sido mi conducta política, antes y durante el actual gobierno.

«3) En las próximas elecciones quedará esclarecido quién tiene mayor respaldo ciudadano. Si Renovación Nacional o el partido que encabeza el señor Guzmán».

En ese clima la derecha debería enfrentar la primera elección presidencial y parlamentaria desde 1973.

¡A SUS MARCAS!

Las escaramuzas habían partido varias semanas antes. Exactamente el 30 de diciembre de 1988 apareció un pequeño aviso en *La Segunda:* «Nuevos desafíos, nuevas metas, nuevos éxitos. ¡Feliz Año! Joaquín Lavín I., candidato a diputado por Las Condes».

Fue el disparo de largada. Con un año de anticipación saltaba al ruedo la primera candidatura parlamentaria.

Ese mismo día adopté una decisión importante para mi vida política: no sería candidato al Parlamento. Hasta ahí mi mente

estaba ocupada en la reforma constitucional y el aviso me hizo comprender de golpe y porrazo la envergadura de la tarea que Renovación tenía por delante. El aviso de Joaquín fue eso: un aviso. Estábamos atrasados. No nos podían seguir madrugando.

En pocos meses deberíamos levantar una candidatura presidencial y las candidaturas parlamentarias, preparar un programa de gobierno y terminar la negociación constitucional.

Tenía que optar: o ser candidato u organizar una campaña partiendo por lo más complejo que es negociar el puzzle parlamentario. No me sentía capaz de hacer ambas cosas bien.

Cuando consulté a mis cercanos me encontré, como siempre, con opiniones distintas.

—No me convence que te quedes fuera del primer Parlamento —me dijo don Pancho Bulnes.

—Es la primera y no la última elección —me dijo don Pedro Ibáñez—. Organizar la campaña va a ser muy difícil. Es un sacrificio que vale la pena.

—Al partido le conviene, pero no sé si a usted —me dijo Jarpa—. Es una decisión suya.

Al interior del partido había quienes no veían ninguna incompatibilidad. Yo tenía entonces una muy alta valoración en la opinión pública y mis bonos estaban en alza. En esos meses, una encuesta en que participaron dirigentes de todo el espectro me distinguió como el «más destacado» de toda la generación de políticos surgida después de 1973.

—Tienes la campaña hecha. Por donde te presentes vas a ganar. Asígnate el distrito más fácil y dedícate a todo el otro enredo —me aconsejaban algunos.

También le pregunté a gente de fuera del partido. Arturo Fontaine T. me planteó una cuestión de fondo:

—Yo creo que debes ser diputado y obtener una gran votación. Los liderazgos en la derecha nunca se han construido en torno a partidos. Para un político de derecha es más importante tener una base electoral propia.

Tenía razón. Sin embargo, ¡ésa era precisamente la tendencia que había que romper!

Resolví por lo tanto quedarme en la banca y no jugar un partido para el que me había preparado durante tanto tiempo. ¿Cómo me sentí? Mal. Racionalmente estaba convencido de que era la mejor decisión para RN, pero igual sentía las tripas apretadas. En el fondo estaba triste. Siempre he querido jugar los partidos. Y más aún, los que son a estadio lleno. Sin embargo, me autocondenaba a la banca.

Gotas de tinta china

—Mi opinión personal es que no deben permitirse pactos electorales —declaró el ministro del Interior, Carlos Cáceres, junto con enviar a la Junta un proyecto de ley para prohibirlos.

¿Cuál era la lógica tras esa determinación del gobierno militar? Forzar las «omisiones». En términos gruesos, la Concertación tenía dos partidos principales: la DC y el PPD, partido instrumental que agrupaba a la izquierda democrática. Si el sistema binominal —una auténtica obra de ingeniería electoral— funcionaba con pactos, la lista de la Concertación podría formarse con un candidato de cada partido. Si no se autorizaban los pactos, la Concertación debería dividirse en dos listas o establecer un sistema de omisiones: donde se presentara el PDC no podría ir el PPD y viceversa. De esa forma, cada vez que el PDC no presentase un postulante se beneficiaría la centroderecha.

Sin embargo, todo el diseño fallaba por un detalle: para que funcionara la derecha debería ir necesariamente unida. Y estaba muy dividida.

Al principio el gobierno militar consideró que el sistema serviría precisamente para arreglar los líos de la derecha. El razonamiento era que RN y la UDI deberían simplemente dividirse los distritos.

—No les quedará otra alternativa que ponerse de acuerdo —pensaban en La Moneda—. Y desde acá podremos mover hilos para conseguirlo.

Y ése fue el razonamiento que explicaba el prematuro lanzamiento de Lavín. Era una pica en Flandes. El sería el candidato único en Las Condes, la UDI «retribuiría» apoyando a un RN en otro distrito. Por supuesto, era una decisión unilateral. A nosotros ni siquiera nos había consultado.

—El sistema de «canje» o «compensación» distorsiona la libre expresión de los ciudadanos, que en muchos distritos se verán impedidos de votar por el partido y candidato de su preferencia —dijo Federico Mekis, nuestro futuro candidato a diputado por Rancagua explicando nuestro rechazo frontal a la idea.

Había más. No existía ningún criterio objetivo a disposición de los partidos para dividirse y asignarse entre sí los distritos del país y, en el caso de la centroderecha, llevar un solo candidato era arriesgar la elección del parlamentario: apenas se dibujaron los distritos, quedó claro que en muchos la derecha debería presentar dos muy buenos candidatos para que en conjunto superaran el umbral del 33% y no fueran doblados por la Concertación. En ellos, deberíamos sudar tinta china para asegurar un diputado.

Tras bambalinas se desplegaron grandes esfuerzos para convencer al gobierno y a la propia Junta. RN a favor de los pactos; la UDI en contra. Finalmente nuestra argumentación prevaleció: el sistema binominal funcionaría con pactos.

EL CANDIDATO QUE SE RESISTÍA

En RN rondaba una convicción que Jarpa expresaba como nadie.

—Hay que plantear una nueva alternativa y no repetir las fuerzas del *Sí* contra las del *No*. Hay que crear un nuevo escenario político, buscar una convergencia hacia el centro.

¿Cómo originar ese nuevo escenario? Mi idea era hacerlo perfilando una fuerza que reflejara abierta convicción hacia la democracia y no que se limitara a aceptarla como un evento

inevitable, que mostrara ánimo de depurar la institucionalidad de residuos autoritarios, que valorando el enorme mérito de la trasformación económica asumiera que habían zonas extensas donde el progreso se miraba desde la vereda del frente y que propusiera ideas para aquellos campos en que la modernización o no había partido o estaba estancada. Y, por supuesto, había que tener una política global respecto de las violaciones a los derechos humanos.

Mi convicción era que había que apoderarse de la idea del futuro y asumir que sólo ahora la transición partiría en serio.

Renovación Nacional tenía un candidato natural: el propio Jarpa. Y si bien, su trayectoria no calzaba exactamente con tal propuesta había mostrado ductilidad. Y no sería la primera vez que alguien desde dentro del régimen se abría paso para encabezar la verdadera transición.

Sin embargo, Jarpa rechazó la idea.

—No soy ni voy a ser candidato a la Presidencia de la República. Lo sabe el partido y todo el país. Yo no soy hombre de dos palabras —declaró a la prensa.

En nuestras conversaciones Jarpa explicaba los inconvenientes de su eventual candidatura: infernales relaciones con la UDI, mala llegada al mundo empresarial «que no me perdona la gestión Escobar», distancia con *El Mercurio* (con el cual en esos días polemizaría con vehemencia, ya que el diario le imputaba inventar candidatos presidenciales para quemarlos) y ningún respaldo del gobierno, más todavía después de la designación de Carlos Cáceres en Interior. Sin embargo, el mayor inconveniente era económico: una campaña requeriría enormes recursos de los que el partido no disponía. Y que Jarpa no ayudaría a conseguir.

—Todo es remontable, menos el tema de los recursos. Y yo soy pésimo para pedir plata —decía Jarpa.

También daba otro argumento:

—Si yo llegara a ser candidato, nos van a cobrar un precio en la lista parlamentaria —decía Jarpa—. Y eso no le conviene a Renovación. ¿Usted cree que podemos ganar? Yo no. ¡Obtengamos una buena representación parlamentaria!

La Concertación había dejado establecido un criterio al respecto: la DC, a cambio del apoyo a Aylwin, abandonaría 15 de los 60 distritos y varias circunscripciones senatoriales. En la centroderecha el precio sería similar, pero ¿sería bueno renunciar a cargos parlamentarios a cambio de tener un candidato presidencial que no ganaría?

El tema tenía otra implicancia: el momento estelar de la vida de todo partido es levantar una candidatura presidencial. ¡Y en Renovación nadie quería dejar de hacerlo!

Nombres al baile

En ese cuadro resolvimos que el consejo general considerase todas las postulaciones presidenciales ajenas a Renovación —cuidándonos de no renunciar a nuestro derecho— y empezamos a explorar un acuerdo parlamentario con todos los partidos afines.

Por el puesto máximo no faltaban interesados: Pablo Rodríguez, Sergio Diez, Arturo Alessandri, el propio Pinochet —entrando y saliendo como posibilidad—, Julio Durán y algún otro figuraban en la lista.

En todo caso, el mejor perfilado era un candidato que, tal como Jarpa, parecía no querer serlo: Hernán Büchi, el ministro de Hacienda.

¿Cuál era, a juicio de Jarpa, el mejor? Una alternativa diferente: el doctor Fernando Monckeberg, a quien había impulsado personalmente a lanzar su candidatura independiente. ¿Qué opinaba de Büchi?: «Es quien tiene la mayor probabilidad de ser el candidato del gobierno. Forma parte de sus equipos y es muy influyente en él».

Todos los precandidatos presidenciales tenían algo en común: eran independientes. Y ése era un aspecto que en RN mirábamos más como un pasivo que como un mérito:

—Hacer política improvisada en víspera de elecciones, a través de grupos independientes, no ha dado buenos resultados.

¿Por qué le va bien a la oposición al gobierno militar? Porque tiene partidos organizados, eficientes y permanentes. ¡Ésa es nuestra desventaja, andando en la idea del independentismo y atacando a los partidos! —señaló Jarpa en una aplaudida intervención ante la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio.

Más adelante agregó que «seguir insistiendo en independientes no es lo que resulta mejor» y se quejó de que «ahora que se plantea la campaña, algunos dicen que los dirigentes políticos no sirven. ¿Qué quieren disolver los partidos de nuestro lado? Si es así dejemos todo en manos de los independientes que dirigieron la campaña de don Jorge Alessandri y del pasado plebiscito. ¡Ahí están los resultados!».

A todo esto, ¿en qué estaba el gobierno? Complicado, pero no sólo por la derrota plebiscitaria, sino porque debería allanarse al traspaso del poder y crear condiciones políticas para que su obra no fuera demolida por el nuevo gobierno. Era una paradoja: del protagonismo máximo en el plebiscito, en el cual la participación de los partidos había sido mínima, ahora debería asistir a una campaña en manos de los partidos. Por primera vez en La Moneda alguien debe haber pensado que la política antipartidos no había sido una genialidad.

En todo caso, el gobierno acuñó un término para definir lo que sería, al menos de la boca para afuera, su actitud frente a la elección: «prescindencia».

—Lo mejor que podría hacer el gobierno es no participar en la campaña —dijo Jarpa tomándole la palabra.

La verdad es que nunca fue tan así.

—Ya les voy a decir a quién debemos apoyar. No nos apuremos —anticipó Pinochet en esos mismos días.

EL FENÓMENO BÜCHI

—Quiero presentarte a Hernán Büchi. Tú sabes que su nombre suena como posible candidato y es bueno que lo conozcas. Hernán está de camping en el sur pero vuelve a fines de

febrero —me dijo Luis Larraín, ministro de Odeplan, a quien conocía desde el colegio.

Büchi era un sobresaliente ministro de Hacienda. Era deportista, usaba el pelo largo y desgreñado, y a todas luces esquivaba la parafernalia tan propia de los funcionarios del gobierno militar. Yo le tenía espontánea simpatía.

La conversación no sirvió para mucho. Hernán sólo dijo que estaba analizando una posible candidatura ya que después del plebiscito su nombre había empezado a sonar al vaivén de una frase simple pero pegadora: «Büchi es el hombre». Su nombre empezó a subir en las encuestas como levadura. Todo tenía la fuerza de la espontaneidad. La prensa lo bautizó como «el fenómeno Büchi».

Al margen del comando independiente que impulsaba su candidatura, se organizó un grupo para estudiar su respaldo en un terreno más político. Varios de sus integrantes eran amigos míos: Arturo Fontaine Talavera, Enrique Barros, Juan Hurtado, Carlos Cruzat y algún otro. Papel importante tenía Cristián Larroulet, el más cercano colaborador del ya evasivo ministro. Al poco tiempo, Bernardo Matte —muy próximo a ese grupo— me aseguró que Hernán contaba con el total respaldo de la comunidad empresarial:

—Tiene de apoyo todo el rechazo que genera Jarpa.

Varios pensaban que Büchi originaba un escenario político alejado de los ejes tradicionales… exactamente lo que en RN estábamos buscando.

Büchi claramente rompía esquemas. Para *The New York Times,* su aspecto era una mezcla «de guerrillero izquierdista y cantante de rock». Su trayectoria podía identificarse con el gobierno militar, sin embargo su figura era percibida con grados de independencia respecto del régimen. Era un agente de la transformación económica y la política un espacio abierto para él, si se resolvía a incursionar en ella con audacia y autonomía.

Si alguien se remontaba a su pasado universitario, se podía topar con sorpresas: Büchi, lejos de unirse a la derecha, se había alineado en la izquierda. Según Arturo Fontaine T. en Büchi se

combinaban «la transparencia y el enigma». Su propia figura era una «trasgresión dentro del orden, una reivindicación del gesto individual que no queda sometido al estilo militar» y por ello «rompe esquemas, penetra en el voto *No* y sobre todo en la juventud».

¿Era razonable suponer que Hernán pudiera ser independiente del régimen que había servido? Muchos pensábamos que sí. ¿No es, por definición, independiente un tipo que nunca se peina, que jura como ministro con *yellow boots,* que almuerza apenas un yogurt, que ama los animales, que rehúye de la pompa como de la peste y que —mientras todos especulan si aceptará ser candidato presidencial— parte con unos amigos a ascender el Aconcagua?

En una de esas reuniones surgió una idea que luego se plasmaría: el generalísimo ideal de una candidatura Büchi era Sebastián Piñera. Gran empresario, inteligente como el que más, sólida formación académica, buen organizador, trabajador infatigable. Más significativo aún: notorio partidario del voto *No.*

Al que no lo convencía para nada era a Aylwin.

—¿Por qué cree que Büchi es buen candidato? Para mí es el más fácil de enfrentar y al revés ¡por Dios! Sergio Onofre me complica— me señaló el mismo día que nos juntamos en mi casa a tratar el tema constitucional.

Cuando me di cuenta que empezaba a mirar con buenos ojos una posible candidatura de Büchi, hablé con Jarpa. Además, era muy importante indagar su opinión acerca de la idea de explorar la posibilidad Büchi:

—Lo que veo es que lo están empujando muy fuerte desde el gobierno. Para serle franco, no me lo imagino de candidato. En todo caso, tiene luz verde. Échele para adelante con su exploración. Veamos en qué termina todo.

Hernán renunció al gabinete en abril de 1989 e inició un período de «reflexión» antes de aceptar la candidatura.

Sebastián asumió como generalísimo y al día siguiente el único que «reflexionaba» era Büchi. Se organizó a la velocidad del rayo todo el trabajo propio de una campaña en forma. Las adhesiones surgían por doquier. Se armó un equipo a cargo del

programa. Otro grupo analizó las últimas campañas electorales en Estados Unidos y Europa para determinar la mejor asesoría externa. Nadie se fijaba en gastos: se escogió la misma agencia de Margaret Thatcher.

La actividad era intensa: la idea central era que mientras «reflexionaba», Büchi tomaba contacto con el país. Audiencia con el cardenal Fresno, visitas a hospitales, reunión con sindicalistas, audiencia con la Comisión Chilena de Derechos Humanos (pese a los comentarios negativos que ella generó en las filas del gobierno), viaje al Perú para conversar con Mario Vargas Llosa que estaba en plena campaña presidencial. ¡Una agenda repleta!

La Concertación, que al principio había mirado por encima del hombro este «invento», empezó a preocuparse. ¿Cómo nos dimos cuenta? Fácil. Empezaron a atacarlo con especial virulencia.

En esos días, visitó Chile Jacques Seguela, un afamado publicista francés, en cuyo currículo figuraban exitosas elecciones presidenciales, incluida la última de Mitterrand en la que había inventado el slogan triunfal: «La fuerza tranquila». Cuando le mostraron fotos de los candidatos, dejó un comentario que preocupó a más de uno en la Concertación.

—Tengan cuidado. Aquí los papeles están cambiados. Yo habría jurado que el candidato de la derecha era Aylwin y el de la izquierda Büchi.

Todo funcionaba a la perfección… salvo Büchi. Cada vez se le notaba más contrariado, más tenso. Se podía sentir el peso en los hombros que lo aplastaba. El contraste entre Hernán y Sebastián era del cielo a la tierra. Hernán sufría, Sebastián disfrutaba.

La contradicción vital

Mi participación en la pre-campaña me generó un serio problema en RN. Gonzalo Eguiguren y Ángel Fantuzzi me acusaron de actuar en forma desleal con Jarpa.

—Es inadmisible que el secretario general del partido esté

participando en una campaña de alguien que no es militante —reclamaron.

Jarpa me respaldó plenamente frente a la acusación. Incluso en una conferencia de prensa explicó que yo era su «brazo derecho», confirmó que mis actividades con Hernán Büchi se habían realizado con su previo conocimiento y cuando le preguntaron con algo de insidia por mí, enterró a mis críticos:

—Allamand sería un extraordinario candidato si tuviera la edad, pero pienso que más adelante va a ser presidente de todas maneras.

En el equipo cercano a Büchi empezamos a sufrir una enorme paradoja: mientras más apoyo recibía su candidatura, más angustiado, contrariado y forzado se veía al indeciso candidato. Pero su evidente reticencia era el mejor combustible para el equipo. Todos coincidían en que si se seguía ganando terreno, Hernán no podría negarse a aceptar la candidatura. Era puro voluntarismo, ya que el cuasi candidato no parecía dispuesto a resolver nada por sí mismo.

Pasaba el tiempo y el resultado de la «reflexión», en vez de aclararse, se oscurecía. Un hecho externo precipitó todo: Canal 13 invitó a un foro a Aylwin y Büchi para el lunes 15 de mayo. Sería un hito en la televisión chilena. Nunca se había celebrado un debate de claros rasgos presidenciales. Aceptar el foro era aceptar la candidatura.

A mitad de la semana previa empezó a percibirse que el asunto no caminaría. Hernán estaba hecho un nudo. El peso sobre los hombros casi le impedía caminar. El jueves en la tarde estaba prevista una reunión para revisar el discurso de aceptación formal de la candidatura —previsto para el sábado 13— y aportar ideas para el debate. Pero no fue para eso.

—Estoy muy agradecido de todos, pero no voy ser candidato. Simplemente no soy capaz —pidió abrumado.

Silencio. Alguien con buen criterio propuso revisar el tema al día siguiente. Sebastián tenía un foro en televisión con Gutenberg Martínez como representantes de Büchi y Aylwin, respectivamente. Algo así como un «preliminar» del encuentro de fondo previsto para tres días después.

—Sebastián, si no quieres, no vayas a la televisión —autorizó Hernán.

—Voy igual. Seré tu jefe de campaña hasta el último minuto.

El grupo tenía distintas sensaciones. Unos estaban desolados, otros irritados. ¡No había derecho para dejar que las cosas hubieran avanzado tanto y empacarse como las mulas, en el último minuto! Al medio, en minoría, los comprensivos. La mayoría estaba perpleja. A mí me preocupaba que si Büchi cambiaba la decisión había mil cosas que hacer antes del lunes; si la mantenía, una sola, más difícil que todas las anteriores juntas: explicarlo al país.

Al día siguiente Hernán mantuvo su decisión. Ya se notaba cambiado. El peso sobre los hombros había desaparecido.

El domingo en la mañana —el sábado quedó para «rumiar» todo lo que había pasado— nos juntamos a redactar el discurso de renuncia el propio Büchi, Sebastián Piñera, Enrique Barros y yo.

Hernán estuvo apenas unos minutos: tenía un compromiso. Volvería en la tarde a mirar el resultado. Los tres nos miramos ¿Qué diablos puede ser más importante que renunciar a una candidatura presidencial?

Nuestra idea era adaptar el texto del discurso de aceptación, lo que no dejaba de ser una ironía. Palabras pensadas para aceptar, servirían para rechazar. A mí me daba vuelta que la candidatura había enfrentado un obstáculo humano, no una dificultad política. Si dábamos sólo argumentos políticos, nadie se tragaría el cuento. Había qué decir la verdad. Hernán era un tipo honesto consigo mismo y con los demás. La mayoría de los candidatos no pueden saltar las vallas exteriores; Hernán se había doblegado ante un muro interior. ¿Cómo trasmitir eso?

Agarré un papel y escribí un párrafo:

«Quiero que sepan que he hecho todo lo posible. Me he esforzado hasta el límite. Pero no he podido superar esta contradicción vital. Quizás algunos, mirando lo favorable que me son las encuestas, pensarán que esta razón no es lo suficientemente poderosa. Los que me conocen saben hasta qué punto es seria,

honesta y responsable. Tengo el mayor respeto por la vida política en democracia, pero no tengo vocación. Y sin vocación no puedo ser candidato».

Así quedó. El borrador de Arturo, las ideas de Sebastián, el orden mental y la buena pluma de Enrique hicieron el resto. Tres carillas manuscritas —que Evelyn Matthei pasó al computador a última hora del domingo— notables por su contenido e intensidad emocional.

Hernán las leyó al día siguiente, el lunes 15 de mayo. Después, como siempre, salió a correr.

Menos que cero

La renuncia de Büchi provocó un enorme vacío político. A un par de meses de inscribir las candidaturas, estábamos en menos cero. No sólo no teníamos candidato, sino que había quedado en el aire la sensación de que por alguna razón enigmática la mejor carta se había perdido. Pero también existía la visión opuesta: el episodio Büchi había inclinado los dados hacia lo seguro y conocido. ¡Ya estaba bueno de inventos! Jarpa contaba con el respaldo unánime de Renovación Nacional y ningún otro candidato siquiera se le aproximaba en apoyo efectivo. Si bien hacia el interior de RN mi ayuda y la de otros dirigentes a Büchi, era mirada con una mezcla de ironía y reproche, hacia afuera era un activo: nadie podría acusarnos de haberle cerrado el paso a Büchi por afán partidista.

La comisión política a fines de mayo le pidió formalmente a Jarpa que «reconsiderase su negativa a postular al cargo de Presidente de la República». A principios de junio aceptó.

El camino parecía despejado, pero era un campo minado.

El Mercurio editorializó resumiendo los argumentos que luego se repetirían una y otra vez en los círculos de la derecha. Según el diario, la candidatura Jarpa tenía aspectos positivos y negativos. Entre los primeros ser respaldado por RN, «que se ha consolidado como la fuerza política de mayor representatividad

dentro de la centroderecha», su «experiencia y talento político» y «según sus partidarios» —el articulista salvaba su posición— «su independencia respecto del gobierno» por haber «protagonizado en los últimos meses un giro hacia el centro político y un correlativo distanciamiento de posiciones y colectividades oficialistas». Luego venían los negativos: su figura «suscita desconfianza en algunos importantes sectores afines a la centroderecha»; «las diferencias personales que mantiene con otros dirigentes hacen suponer a algunos que su candidatura sellará la división de las fuerzas proclives a la obra institucional del régimen» y su persona es la de «un político tradicional, la cual parece haber experimentado una suerte de desprestigio en los últimos años».

El estilo mercurial no disimulaba la fuerte crítica, incluso en los momentos en que la centroderecha estaba sin candidato.

Después fue peor. Los dardos y la aversión se multiplicaron.

—Jarpa no tiene perspectivas de ganar— dijo Jaime Guzmán desde el primer día.

—Es un candidato perdedor —sentenció Álvaro Bardón, ex ministro y presidente del Banco del Estado.

—Jarpa no tiene ninguna aceptación en la UDI. ¡No vamos a aceptar que después de 15 años volvamos a las mismas caras e ideas del pasado! —declaró Pablo Longueira.

También había dificultades en la estructura interna de la candidatura. Jarpa no lograba organizar un equipo de campaña y no había estrategia de ninguna naturaleza. El tiempo se perdía entre amigos personales con buenas intenciones, malas ideas y pocos aportes prácticos. Tampoco se articulaba un discurso público potente. Pero donde el asunto hizo crisis desde el primer día fue en los respaldos económicos. La reunión semanal con el equipo más directo —Gonzalo Eguiguren, Manuel Feliú, León Dobry, Víctor Manuel Ojeda y yo— era patética. Todas las gestiones fracasaban. No habría un peso para Jarpa en el mundo empresarial.

Eran muchos los problemas a la vista. Pero el mayor era el propio Büchi.

La amenaza fantasma

Una semana después de su renuncia, empezaron a aparecer afiches en las calles abogando por el retorno de Büchi. El comando independiente que había impulsado la candidatura en la primera etapa no cejaba.

Büchi nunca rechazó esa campaña y su hermetismo se empezó a interpretar como tácita aceptación. Seguía callado, viajaba al extranjero, pero se mantenía accesible a sus antiguos colaboradores, a las autoridades del régimen militar y destacados empresarios.

Jarpa, a todo esto, peleaba contra una sombra. Pero era peor que enfrentar al campeón mundial de peso pesado. Jaime Guzmán, puntualizaba que Büchi «nunca ha dicho que su renuncia sea irrevocable».

A principios de julio, apenas un mes antes que expirara el plazo para inscribir las candidaturas, la situación era exasperante: ¡todo estaba paralizado!

—Quedan apenas 42 días para inscribir las candidaturas. Büchi dispuso de seis meses para una primera meditación. Renunció al Ministerio de Hacienda el 3 de abril y reflexionó 42 días. El 15 de mayo, horas antes de leer su discurso de aceptación y de enfrentar a Aylwin en un debate televisivo, señaló tajantemente que renunciaba a ser candidato. Han pasado otros 45 días. Ha tenido tiempo más que suficiente para tomar una decisión. ¿Qué pasa si finalmente no acepta? ¿Y si acepta y en medio de la campaña se desiste? ¡La espera sólo favorece a Aylwin! —declaré a los diarios, fastidiado.

Pero ya a esa fecha algún secreto mecanismo mental había empezado a alterar la decisión de Hernán. El retorno se hizo inminente.

—Yo creo que Büchi no es un fantasma. De repente va a aparecer como candidato —declaró en esas semanas el almirante Merino.

—A quién prefiere, ¿a Büchi o a Jarpa?

—A Büchi porque mueve más gente —respondió para rendirse a la chunga, rúbrica infaltable cuando hablaba en serio—. Además, ya dije que Jarpa no jugaba golf, así que por eso, no.

El día antes de aceptar la candidatura, el 12 de julio, Hernán apareció por mi casa.

—Voy a ser candidato —me dijo.

—Cometes un gran error. Nadie entenderá tu renuncia y menos tu vuelta. En unos años más, puedes ganar. Si lo haces ahora, nunca será igual y vas a perder lejos —fue mi único comentario.

Hernán estaba absolutamente resuelto. Toda vacilación se había esfumado. Era otra persona. A primera vista, había un solo rasgo del Büchi anterior: el peso sobre los hombros estaba de vuelta.

Marciano en Lonquimay

La aceptación de Büchi dejó a RN en una posición complicada. Jarpa era nuestro candidato y teníamos un consejo general citado para los días 15 y 16 de julio con el objeto de formalizar su candidatura.

La primera reacción fue enfrentar a Büchi. Jarpa se encargó de que todos entraran en razón. Si no habíamos podido derrotar al fantasma, más difícil sería hacerlo al cuerpo presente. ¿Y si llevamos dos candidatos presidenciales?

—Nos barren —fue la conclusión inmediata de Sergio Romero, entonces precandidato a senador independiente con apoyo de RN—. Los que vayan acollerados con Büchi tendrán todo el respaldo empresarial y del gobierno, incluidos gobernadores y alcaldes. En igualdad de condiciones compito con cualquiera, pero no voy al matadero.

Tenía razón. Jarpa lo sabía y con gran nobleza facilitó las cosas. El mismo sugirió que postergáramos nuestro consejo general y dejó al partido en libertad de acción.

—Preocúpese de la lista parlamentaria —me ordenó—. Esto no tiene vuelta.

Aunque la presión sobre RN era muy grande, los dirigentes del partido querían llevar a Jarpa hasta el final. *El Mercurio* se anticipó a advertirnos que «las encuestas lo señalan (a Büchi) como el candidato afín a la centroderecha que tiene la mayor opción» y que esta realidad «debía ser tenida en cuenta por las directivas partidistas». La Moneda, supuestamente «prescindente», nos hizo saber su opinión más que clara:

—Andrés, transmítelo en Renovación. Habrá apoyo para Büchi, no para Jarpa.

Y otro tanto hicieron algunos de los empresarios más importantes para el finaciamiento del partido.

—¡No nos cabe en la cabeza que estén pensando en seguir con Jarpa! Para esa candidatura no hay plata. ¡Que quede claro!

Aquí valía poco tener el partido más organizado, un ejército de dirigentes en todo el país y un candidato solvente. Tampoco valía nada argumentar sobre el peligro de apostar a una persona que había mostrado facetas tan complejas. Más todavía: Una candidatura presidencial es una inversión, ya que instalar un nombre en el firmamento político de un país cuesta a veces varias elecciones. Terminada la campaña, ¿Büchi seguiría en la política?

Büchi inscribió su candidatura presidencial apoyado por un grupo de personalidades: Modesto Collados, Arturo Fontaine Aldunate, Fernando Léniz, Hermógenes Pérez de Arce, Julio Phillipi, Guillermo Pumpin, Eugenio Valenzuela, Sebastián Piñera, Cristián Larroulet y el padre del candidato, don Hernán Büchi Guzmán. Como generalísimo asumió Pablo Baraona. Claro como el agua con quién estaba la derecha y el gobierno. ¿Los empresarios? Lo habían apoyado desde el primer minuto. No necesitaban firmar.

Pese a todo, nuestro consejo general, en un acto de rebeldía postrera, proclamó a Jarpa candidato presidencial. Jarpa asumió la responsabilidad con un mandato «para resolver lo mejor para Chile» y declinó con cuatro días de diferencia, haciendo ver «que, valorando especialmente la unidad de la centroderecha, he resuelto el apoyo a la candidatura presidencial de Hernán Büchi».

Renovación Nacional se cubrió con la niebla de la derrota y la imposición.

Antes que ello ocurriera preparé un documento que le fue entregado formalmente a Büchi: allí se consignaba que no hay democracia sana sin partidos estructurados; advertía que la adhesión a las personas no es comparable con la función estabilizadora de las organizaciones permanentes; recordaba que el avance de las tendencias socializantes se debió tanto a su primacía ideológica como a su organización»; y atribuía nuestro retroceso a la falta de propuestas y al desmembramiento de los partidos, para terminar afirmando que la campaña debía constituir el primer desafío de la nueva democracia y no el último acto del régimen que termina.

—¿Qué quisiste hacer? —me dijo mitad en serio, mitad en broma Fernando Maturana, ahora candidato a senador por la IX Región—. ¿El testamento de un partido obligado a apoyar a un independiente?

—¿Usted qué piensa de Büchi?— le pregunté sin contestar.

—Lo mismo que mis votantes de Lonquimay: que es un extraterrestre.

Lengua rota

No había tiempo para lamentarse y me volqué de lleno a la campaña parlamentaria.

Después de infructuosos y extenuantes esfuerzos para organizar una lista amplia, terminamos por convencernos que lo único viable era una lista RN-UDI incluyendo a independientes. Fue imposible integrar a candidatos de la Democracia Radical y del Partido Nacional ya que o no tenían postulantes mínimamente viables o bien hacían exigencias inauditas.

De otro lado, sólo Renovación estaba en condiciones de presentar candidatos solventes en todo el país. El gobierno estaba informado al milímetro —a través de Cáceres, en persona— de las negociaciones para llenar las listas del sector y se mostraba muy preocupado por el resultado electoral.

Caso aparte fue el tema —ya entonces emblemático— de Las Condes. Nosotros le planteamos al equipo negociador de la UDI, que no era razonable que insistieran en la candidatura de Joaquin Lavín porque sería derrotado por Evelyn Matthei. A mí me parecía una candidata insuperable: tenía nombre, imagen y juventud. Reflejaba convicciones distanciadas del fanatismo y había enfrentado los temas de derechos humanos con valentía. A la inversa, la actitud beligerante asumida por Joaquín, pese a su simpatía personal e indudables méritos (*La revolución silenciosa* había sido un gran best-seller) fue contraproducente y su *slogan,* «un gallo de pelea», resultó pésimo.

—La UDI necesita a Lavín en Las Condes aunque se pierda —fue la tajante expresión de Pablo Longueira. Y de ahí nadie lo sacó.

La inscripción de las listas de diputados de la derecha fue considerada por la prensa como un «espectáculo lamentable». La verdad es que no hubo dificultades mayores entre RN y la UDI, sino con el gobierno. La tal «prescindencia» empezó a borrarse cuando empezaron a llegar peticiones para que en las listas se incluyeran candidatos que daban «garantía» a La Moneda. El problema era que tales candidatos no aportaban nada... salvo el nombre.

—El problema para organizar las listas ha sido la interferencia de funcionarios de gobierno —explicó Jarpa a los periodistas—. Si en un distrito tenemos que llevar a un fulano que no es de ahí y ni siquiera existe su partido, perdemos a un candidato que sí tiene votos. ¡O se hace un pacto para sacar el mayor número de parlamentarios o para darle figuración a los amigos!

Al final, a la lista RN-UDI independientes, se agregaron otras cuatro: una integrada por la Democracia Radical, Avanzada Nacional y otros grupos menores; otra del Partido Nacional; una tercera del Partido del Sur y una última integrada por una facción liberal y un grupúsculo socialista.

Una seria dificultad entre RN y la UDI surgió al momento de inscribir los candidatos al Senado. En la mañana nos reunimos Jarpa y yo con Joaquín Lavín y Pablo Longueira ya que subsistía

un problema: RN insistía que en la V Región a nuestro candidato Sergio Romero lo debía acompañar el dirigente sindical Hugo Estivales; la UDI postulaba como independiente a Edmundo Eluchans. Al no haber acuerdo, Jarpa propuso que el tema lo zanjara Büchi, el candidato presidencial del pacto.

Así se acordó y quedamos de reunirnos a las 7 de la tarde en la sede de Renovación para, luego de conocer la decisión de Büchi, ir a inscribir las listas al Servicio Electoral.

A la hora convenida llegó Pablo Baraona, generalísimo de la campaña.

—¿Qué resolvió Hernán? —le preguntamos.

—Estivales —fue la respuesta—. Ya se lo comuniqué a la UDI.

Pero la UDI no aparecía. Un par de horas después supimos qué pasaba: no aceptaba la resolución de Büchi. Si no se inscribía a Eluchans, simplemente no habría lista.

¡Era inaudito! En la mañana habíamos convenido un arbitraje y ahora simplemente se desconocía.

Tres horas más tarde Pablo Baraona se había fumado dos cajetillas completas de cigarrillos. El asunto se puso color de hormiga. Yo estaba crispado de rabia.

—Cede tú. De lo contrario, no va a haber lista parlamentaria. Y eso sí que será un desastre —me pidió Pablo Baraona.

No quería hacerlo. ¿Por qué tenía que ceder, una vez más, Renovación?

Pasó otra hora y entonces me llamó Bernardo Larraín, presidente del Tribunal Supremo.

—¿Qué pasa con la lista? —me preguntó impaciente.

Le expliqué.

—¿Pretendes no inscribir la lista parlamentaria por una cosa así? Me da lo mismo que la UDI esté faltando a su palabra. Tu obligación es que la derecha tenga representación parlamentaria ¡Déjate de estupideces! Además, Edmundo es mucho mejor candidato que ese tal Estivales, al que nadie conoce. ¡Parte ahora mismo al Servicio Electoral!

Así lo hice, mordiéndome la lengua de rabia.

LAS LLAVES DE LA TRANSICIÓN

La campaña de Büchi desde el principio se separó absolutamente de los partidos. Y su contenido poco y nada tuvo que ver con la imagen del Büchi anterior a la contradicción vital. En la práctica la campaña no fue mucho más que una reiteración del *Sí* y el *No.* Mientras Büchi era «el hombre», Aylwin planteaba «gana la gente». Después de 16 años de autoritarismo, lo único que el electorado no quería era un «segundo» hombre. La campaña careció de contenidos programáticos fuertes y a medida que se fue acercando el día de la elección, Hernán —que desplegó un gran esfuerzo personal— terminó siendo más el candidato del gobierno que terminaba que el de una fuerza proyectada a una nueva etapa.

Büchi no alcanzó el 30% frente al 54% de Aylwin.

Aylwin repitió la votación del *No.* Hernán obtuvo casi 13% menos que el *Sí.* ¿A dónde fueron a parar los otros votos? Mayoritariamente a Francisco Javier Errázuriz, quien con un discurso populista y centrando sus ataques en Büchi logró una votación sorprendentemente alta: 15,4%. En todo el país la lista parlamentaria RN-UDI superó la votación de Büchi.

La campaña fue áspera para los candidatos de RN ya que los recursos, que fueron abundantes para la campaña presidencial, a nivel parlamentario se centraron en los candidatos de la UDI o en los independientes más caracterizados por su afinidad con el régimen. Y para peor, el gobierno jugó su influencia a favor de ellos, al extremo que con Jarpa nos vimos obligados a denunciar al ministro secretario general de Gobierno, Cristián Labbé «la evidente discriminación de que son objeto los candidatos de Renovación Nacional en los programas que ha organizado el Canal 7». ¡Realmente el manejo del canal estatal era impúdico!

No obstante ello, el resultado fue muy bueno para nosotros. En términos globales, la lista parlamentaria RN-UDI alcanzó un 34,2%, en tanto que la Concertación obtuvo un 51,3%. Las

otras cuatro listas de derecha obtuvieron en conjunto un 7,1%, quedando en conjunto apenas 2,7% abajo del resultado del plebiscito. Los candidatos RN alcanzaron un 18,2%, los de la UDI un 9,1% y los propiamente independientes el restante 6,9%

Elegimos 48 diputados y la Concertación 72. Renovación eligió 29, la UDI 11 y fueron electos como independientes 8 que a poco andar se agregaron a uno u otro partido, salvo Antonio Horvath, que se mantuvo como tal. De este modo los diputados de RN subieron a 33 y los de la UDI a 14.

En la elección de senadores la derecha eligió 16 contra 22 de la Concertación, que nos dobló en tres regiones.

Renovación eligió cinco senadores (Ignacio Pérez, Sergio O. Jarpa, Mario Ríos, Francisco Prat y Hugo Ortiz) y la UDI dos (Jaime Guzmán y Eugenio Cantuarias). Además se eligieron nueve independientes, de los cuales siete (Julio Lagos, Alberto Cooper, Sergio Romero, Sergio Diez, Bruno Siebert, Enrique y Sebastián Piñera) se incorporaron a RN y uno (Beltrán Urenda), a la UDI, permaneciendo Arturo Alessandri como independiente.

Al día siguiente de la elección, había aprendido una máxima de la política partidista: «Las elecciones las ganan los candidatos y las pierde el partido».

También sentí en carne propia la crítica interna al momento de designar a los candidatos. Lo más odioso fue imponer —con el respaldo resuelto de Jarpa, quien incluso le grabó frases radiales de apoyo— la candidatura de Sebastián Piñera por Santiago Oriente, ya que en Renovación no lo conocía nadie. Aunque enfrentaría a Hermógenes Pérez de Arce —el claro favorito—, nunca tuve dudas de que Sebastián ganaría y así ocurrió.

Sin embargo, la elección más importante fue la de Santiago Poniente. Jaime Guzmán enfrentó en compañía de Miguel Otero a una dupla en el papel invencible: Andrés Zaldívar y Ricardo Lagos. En el caso nuestro, convencimos a Miguel Otero que acompañara a Jaime Guzmán en el último minuto. ¡Nadie quería presentarse! Miguel Otero —quien partió la campaña con un conocimiento de la opinión pública que no superaba el 3%, sin apoyo de buenos diputados y con un exiguo respaldo económico—

hizo una campaña heroica, como rezaba su lema, «con ñeque». La llegada fue muy estrecha: Andrés Zaldívar obtuvo 407.890 votos y Ricardo Lagos 399.408. Contra todos los pronósticos, Jaime Guzmán alcanzó 224.302 votos, seguido a una cabeza por Miguel Otero que sumó 196.603. ¡Algo que nadie imaginaba! A la Concertación le faltó sólo un puñado de sufragios para doblarnos. Aunque nadie lo recuerda, en esa oportunidad hubo un candidato —Sergio Santander, sólo un alcance de nombre con el cuestionado ex dirigente deportivo— que en la lista liberal-socialista sacó sorprendentes 60.000 votos arrebatándoselos principalmente a la Concertación. Un perfecto y anónimo *Catapilco.*

Jaime Guzmán, para mí, demostró en esa campaña sus hechuras de líder político. Fue candidato en el lugar más difícil y sacó adelante con brillo la campaña. Que su resultado porcentualmente no haya sido el mejor, lejos de desmerecerlo, confirma el riesgo que adoptó al ser candidato.

Si Ricardo Lagos hubiera ganado y Jaime Guzmán perdido, la historia política de Chile se habría escrito distinto.

A la hora de sumar los futuros votos en el Congreso el panorama quedó muy claro: la Concertación tenía mayoría en la Cámara, pero no en el Senado. Para cualquier ley importante se requerirían los votos de Renovación Nacional. Los nueve senadores designados habían sido nombrados mayoritariamente por Pinochet por lo que siempre fue claro dónde se alinearían.

La prensa leyó lo que eso significaba: Renovación no sólo era la segunda fuerza política del país. Tenía además «las llaves de la transición».

Capítulo X

La llave y la ganzúa

El cambio de mando tuvo lugar el 11 de marzo de 1990 en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso aún en terminaciones. Pinochet debería desprenderse de la banda presidencial, para que el presidente del Senado —que debía ser elegido pocos minutos antes— se la terciara a Patricio Aylwin. Antes deberían reunirse el Senado y la Cámara de Diputados, tomar los juramentos de rigor a los parlamentarios y elegir sus respectivas mesas.

Ya me había resignado a ver la ceremonia por televisión cuando me llamó por teléfono Enrique Correa, futuro ministro secretario general de Gobierno. Yo no era parlamentario, no era funcionario del régimen entrante ni saliente y el protocolo era rígido: dos entradas por diputado. Tuve que admitirle que no estaba entre los invitados… y en mi voz debe haber oído que me moría de ganas de ir.

—¡Te has ganado de sobra un lugar! Van para allá un par de nuestras entradas —me dijo amablemente Enrique.

Partimos con Bernardo Matte. La ceremonia tuvo toda la carga eléctrica que el formato de sobriedad admitía. No me perdí un detalle y no me pasó inadvertido el gesto de Aylwin a Pinochet antes de ponerse la banda. Fue una leve alza de los hombros como queriendo decir: ¡Mire las vueltas que tiene la vida! Usted y yo aquí. ¡Quién lo habría pensado!

Después los gritos se hicieron ensordecedores. Nos fuimos caminando hacia donde habíamos dejado el auto. Un grupo de eufóricos manifestantes se cruzó con nosotros tapándonos de insultos, más como parte del festejo que como agresión.

—¡Fascistas de mierda! ¡Por fin se fue Pinochet!

Ahora quien se encogió de hombros fui yo. Eran insultos inmerecidos. Aunque me saca de quicio la cobardía de los que gritan parapetados en el anonimato del grupo, ni me inmuté. Lo que me tenía atragantado era la derrota estrepitosa que, un par de horas antes, habíamos sufrido en el Senado.

¡La UDI había dado un completo golpe a la cátedra! Durante diciembre se habían efectuado diversas negociaciones entre Renovación y la Democracia Cristiana para resolver el tema de la presidencia del Senado. La Concertación tenía 22 votos y la oposición 16. Había nueve senadores designados. La mayoría simple era 24.

El planteamiento de Renovación era que el plazo de la presidencia del Senado debería dividirse por mitades entre el gobierno y la oposición. El candidato de ellos era Gabriel Valdés; el nuestro Jarpa. La UDI negoció sigilosamente el apoyo a Valdés, a cambio de la vicepresidencia del Senado, una vicepresidencia de la Cámara y una posición privilegiada para ellos en las comisiones de trabajo. Para la Concertación fue un acuerdo redondo, mucho más barato que el que podría haber obtenido negociando con nosotros.

En un abrir y cerrar de ojos RN, el partido con más del doble de diputados y una representación senatorial seis veces superior a la UDI, había quedado como el partido minoritario, marginado de la administración del Congreso por los próximos cuatro años. De nada sirvió que demostráramos que la UDI había hecho un negocio de exclusivo interés partidista que perjudicaba las posibilidades del bloque opositor.

El episodio me sirvió para aprender que en política el pragmatismo puede llevar muy lejos. También aprendí que a veces es más difícil administrar el triunfo que la derrota. Y como si todo ello fuera poco, me quedó más que claro que RN seguía

teniendo la llave de la transición... pero que la UDI tenía una ganzúa.

CAMBIO DE MOTOR

La mala negociación de las mesas —en lo que confluyó el exceso de confianza y una mala apreciación de la capacidad estratégica de los demás—, fue un traspié que reflejaba un problema mayor.

Después del éxito electoral costaba organizar el trabajo en RN. Había ineficiencia y descoordinación. Los periodistas decían que el tándem Jarpa-Allamand ya no funcionaba tan bien. El proceso de toma de decisiones se había tornado más complejo: los nuevos parlamentarios reclamaban legítimo protagonismo y los perdedores un espacio. La prensa comentaba que «RN llega siempre tarde a los temas».

A su turno, Jarpa había entrado en una etapa de enigmático silencio. Más que abatido, parecía aburrido. La señal privada que enviaba era que no seguiría al frente del partido. Más adelante lo diría públicamente:

—Es tiempo de que se incorpore un nuevo equipo a las tareas directivas. Es lógico reemplazar a los que tenemos el «motor gastado» por el tiempo y las difíciles circunstancias en que nos ha correspondido actuar. No dispongo del tiempo necesario para dedicarlo a la presidencia del partido.

Si era claro en cuanto a que no postularía a la presidencia, se volvía críptico y elusivo al opinar sobre quién debía ser su sucesor. Nadie lo sacaba de una frase que parecía cuña para la TV:

—Voy a estar de acuerdo con lo que resuelva el consejo general.

La actitud de Jarpa fue creando un vacío de conducción. RN necesitaba renovar su dirigencia, definir una estrategia frente al gobierno y delinear un programa de acción política con un horizonte de a lo menos cuatro años, es decir, con la vista puesta en 1993.

Al interior de RN ya se perfilaban dos visiones. Una planteaba asumir la cerrada defensa del gobierno militar frente a todo intento de cambio y sugería una oposición frontal. La otra planteaba una política de acuerdos con el nuevo gobierno. También era distinta la visión acerca de quién era el «rival» político inmediato. Unos sostenían que lo prioritario era no permitirle por ningún motivo a la UDI capitalizar el respaldo del «pinochetismo»; otros pensábamos que más importante era salir a conquistar el electorado independiente y de centro, recuperando a la pasada a todos aquellos que habiendo apoyado gobierno militar le habían vuelto la espalda. Compitiendo con la UDI, sólo nos derechizamos, pero no ganamos una sola adhesión más.

Había otra interpretación más contingente: Jarpa sostenía que la jugada de la UDI en las mesas parlamentarias le restaría el apoyo de los partidarios del gobierno militar y veía una oportunidad para recoger un gran respaldo. Yo veía lo contrario. Más allá de que nos irritara, la hábil movida de Guzmán era indicativa de la flexibilidad con que habría que moverse en el nuevo escenario político. Por un incidente —importante a lo mejor, pero sólo un episodio— no debíamos alterar nuestros roles. Nosotros habíamos crecido en una posición de razonable independencia. ¿Por qué trastocar ahora los papeles?

¿No era más fácil concentrarse en hegemonizar la derecha como pretendía la UDI? Quizás, pero la radicalización de un partido como RN no le servía al país y no tendría destino: ese lugar ya estaba sobrepoblado.

Doble lealtad

Debo admitirlo: yo quería que al gobierno de Aylwin le fuera bien, que tuviera éxito.

Estaba convencido de que las conductas de los actores políticos durante un primer gobierno democrático debían ser distintas a las de un régimen plenamente estabilizado. Toda transición

es frágil porque mezcla las angustias de los que se van con las urgencias de los que llegan y las herencias autoritarias con jóvenes instituciones democráticas.

A mi juicio, el régimen democrático, después de su largo y traumático desgaste al compás de conflictos desbordados, beligerancias agudas e intolerancias extendidas, sólo podía restablecerse a través de una experiencia opuesta, de cooperación y solidaridad. Era necesario expresar una doble lealtad: no sólo hacia el adversario político, en este caso el gobierno, quien debería saber que al frente tenía una oposición fuerte pero limpia, sino al régimen político mismo. Había que rehacer confianzas entre personas, grupos, partidos, sectores ciudadanos. Lo único que no podía ocurrir era reiniciar la competencia democrática retornando al *ethos* pre 73 como si nada hubiera pasado.

Además en los últimos años habían surgido indicios de que el país podría generar una atmósfera de consenso en torno a la democracia representativa y a la economía de mercado: una plataforma común de despegue dejando atrás décadas de proyectos antagónicos y excluyentes. Pero tal convergencia no caería del cielo. Exigiría un enorme esfuerzo político.

En consecuencia, no se trataba sólo de definir una estrategia frente al nuevo gobierno. Lo que se necesitaba era un planteamiento de fondo para encarar la transición y una visión para la derecha en la nueva democracia.

¡Había que perfilar una oposición capaz de levantar su éxito a partir de sus acciones, no del fracaso del gobierno! ¡Llevábamos 30 años de enfrentamientos y disputas! El país no querría repetir sus desgarros. Estaba seguro de que en la mente de los chilenos había espacio para una ecuación política distinta de la predominante: los partidarios del gobierno militar no parecían mostrar real interés por la democracia y sus valores; sus opositores, que se presentaban como partidarios de la democracia —aunque muchos arrastraban credenciales harto dudosas en ese terreno— expresaban un rechazo visceral a las transformaciones de la última década. ¿Por qué no intentar una síntesis distinta? ¿Por qué no pensar en una fuerza política capaz de

preservar lo valioso del gobierno militar y, al mismo tiempo, de jugarse por una democracia renovada y mejor?

Madera de derecha

No son fáciles de escrutar las razones por las cuales una persona termina siendo de izquierda, centro o derecha. Estoy cada vez más convencido, eso sí, de que aunque influye el colador de la razón el origen está en las raíces de cada cual.

Soy de derecha por el clima de responsabilidad que respiré en mi familia. El sentido de superación y esfuerzo que animó a mis padres gravita en mis opciones políticas.

Soy de derecha porque me gusta el orden, aborrezco el estatismo y aprecio mucho más los fueros individuales que las aproximaciones colectivistas para abordar los problemas de la sociedad.

Soy de derecha porque respeto la historia y me importan las instituciones que dan fisonomía a los países.

Soy de derecha porque admiro a los criados a la intemperie y a los que salen adelante solos contra el mundo.

Soy de derecha porque desconfío de la ingeniería política y creo en la vitalidad que emerge de un orden social libre.

Soy de derecha porque me alegro de los éxitos ajenos.

Así como me gusta su culto al esfuerzo individual, su sensatez, y su resguardo a los derechos de las personas, detesto en la derecha lo que pueda haber de altanería y arrogancia. No me gustan quienes son proclives a estas mezquindades, que me resultan patéticas. Me irritan los que, sin haberle ganado a nadie, miran por encima del hombro a quienes no forman parte de su mundillo.

Por supuesto, entiendo mi afinidad con la derecha sólo a partir de una firme adhesión a la democracia, a las ideas del estado de derecho, a la igualdad de oportunidades y a la libertad como un desafío en todos los planos. No creo en el relativismo, pero sí en la tolerancia.

Aun creyendo en la fuerza vital de la libertad soy contrario al desenfreno que termina aplastando las igualdades básicas de la sociedad. Al estado le asiste una función normativa y fiscalizadora intransferible, tiene una misión irrenunciable en la ayuda a los más necesitados y debe impedir el abuso de los poderosos.

Precisamente porque éstas han sido desde siempre mis convicciones, mi diagnóstico era que se requería una nueva visión de la derecha. Y esa nueva visión debía partir de una acertada composición de lugar ¿Por qué la derecha —fuerza mayoritaria hacia el fin de los años 40— había retrocedido hasta jibarizarse en los años 60? Y tan importante como ello, ¿cuáles habían sido los cambios que habían tenido lugar desde entonces?

Las explicaciones para esta derecha crepuscular progresan en dirección al análisis de una doble incapacidad. Incapacidad, por un lado, para plantear un proyecto político modernizador apto para recoger una adhesión mayoritaria; e incapacidad, por el otro, para gestar alianzas con el centro político. En lenguaje de Tomás Moulián, para «cortejar al centro».

Nuevo amanecer

Desde un punto de vista puramente intelectual las posibilidades de la derecha eran promisorias en el nuevo Chile democrático. Varios factores la favorecían. De partida, la bancarrota ideológica, política e histórica del socialismo a partir del derrumbe del Muro de Berlín. La agonía del socialismo —el «real» y el otro— estaba llamada a ser el fenómeno político más importante de la última parte del siglo XX. Si antes del 73 la atmósfera cultural del mundo favorecía a la izquierda, influyendo de manera determinante en la competencia política, a principios de los 90 la corriente iba en la dirección inversa. El impulso primario que durante décadas movilizó a la derecha —el sentimiento de autodefensa en respuesta a la amenaza de sus adversarios— había sido superado por la historia.

De otro lado, y a diferencia de lo ocurrido en distintos países, el gobierno militar, que había impulsado un completo y audaz proyecto de modernización de la sociedad, había terminado bien. Bastaba comparar. Habitualmente los regímenes autoritarios, en lo político finalizan sus días en la anarquía, agitación social, crisis de legitimidad e incertidumbre institucional. Y, en lo económico, en un cuadro de acelerado aumento de la pobreza, alta deuda externa, inflación, corrupción del aparato público y falta de guía en el manejo macroeconómico. No era el caso de Chile.

Dicho en pocas palabras, el punto de partida era bueno. ¿Qué faltaba?

Para mi gusto, recoger con fuerza el ideario de la derecha que se había ido imponiendo en todas partes —poder a las personas, iniciativa individual, descentralización de la sociedad, nuevos espacios para la acción privada, oportunidades similares para todos— y enfatizar las dos tendencias fundamentales que recorrían el mundo, ya que en ambas la derecha debía sentirse muy cómoda.

La primera era la democracia misma. La izquierda había combatido —en Chile y en el mundo— a la democracia liberal intentando reemplazarla por el eufemismo de la «democracia popular». Pues bien, la democracia liberal había triunfado sin contrapeso. ¡Era nuestro triunfo! Sin embargo, en Chile no podíamos reclamarlo, ya que regía un sistema político con importantes componentes que —¡vaya paradoja!— abjuraban de la democracia liberal. Eran los famosos «resguardos de la democracia protegida» o los «enclaves autoritarios», según quien los mirara.

Lo curioso es que tales resguardos tampoco se justificarían —aun en la lógica de sus autores— hacia delante, puesto que su fundamento básico era prevenir la amenaza comunista potenciada por el imperialismo soviético. Pues bien, ¡hasta la propia Unión Soviética se había pulverizado! Para mí, estaba claro como el agua: un proyecto de derecha debía reconciliarse con los principios de la democracia liberal, desprendiéndose tan rápidamente como fuera posible del lastre autoritario.

En esa misma línea —me parecía— debíamos abordar el tema de los derechos humanos. La bandera de los derechos humanos jamás había sido de la izquierda. ¿No habían defendido los socialistas de todos los colores cuanta revolución —rusa, china, cubana, coreana, vietnamita— que invariablemente los había aplastado? Pues bien, tampoco debíamos permitirnos perder esta bandera y debíamos encontrar la manera para reasumir tal defensa.

La segunda de nuestras prioridades debía ser profundizar la economía social de mercado. Si uno miraba la fenomenal transformación económica gestada bajo el gobierno militar, podía descubrir elementos que habían configurado un verdadero círculo virtuoso: iniciativa privada, incentivos a la competencia, mercados transparentes e informados, fuerte presencia normativa y fiscalizadora —no productiva— del Estado. Los mayores espacios otorgados a las personas generaban aumentos cualitativos de creatividad, la competencia incentivaba la eficiencia y la productividad, la transparencia de los mercados aumentaba los rangos de elección de las personas y la redefinición del rol del Estado lo ubicaba en su papel natural. Las áreas donde tales criterios se aplicaban —el sistema previsional, por ejemplo— mostraban notable progreso; las áreas donde estaban ausentes —el sistema educacional, por ejemplo— mostraban retraso y estancamiento.

En tal profundización debíamos poner acento en un aspecto habitualmente postergado: Chile había ido progresando pero al precio de grandes desigualdades. ¡A ningún partido de derecha del mundo el tema le era indiferente! ¿Qué razón había para no ponerlo en el centro de nuestra atención?

ATRACCIÓN FATAL

En la nueva etapa no seríamos nosotros quienes deberíamos deambular con ansiedad en busca de un proyecto político inspirador. Tal sería —al menos por algún tiempo— el destino de

la izquierda. Y sin ir más lejos, el PDC ya estaba convocando a un gran congreso ideológico para iniciar un postergado *aggiornamiento*. Lo necesitaba. ¿En qué remoto confín del mundo se había extraviado para siempre el «socialismo comunitario»?

Chile históricamente había tenido un esquema de tres tercios: derecha, centro e izquierda. Tal esquema en sí no dice nada. No es ni bueno ni malo. Lo que lo hizo perverso fue la nula capacidad de conformar alianzas estables para generar gobiernos mayoritarios. En las décadas previas a su derrumbe, el sistema político chileno derivó hacia una mecánica de doble oposición. El tercio que ganaba la presidencia se enfrentaba a los dos restantes... los que a su turno rivalizaban entre sí, incapaces de gestar una alternativa común. Alessandri enfrentó a la izquierda y al PDC. Frei a la derecha y la izquierda. Allende a la derecha y el PDC.

La Concertación rompía con ese esquema. Para algunos, era una alianza circunstancial, pero a todas luces se trataba de un serio esfuerzo político. La lógica de la Alianza Democrática traspasada a la triunfante Concertación era generar un entendimiento histórico de largo aliento entre el PDC y la izquierda democrática que, si lograba prevalecer, cambiaría por un par de décadas el mapa político del país.

No era un asunto menor. Tampoco era anecdótico, sino revelador de una enorme voluntad el que tal alianza se apoyara en una doble ruptura histórica. El PDC chileno había nacido para enfrentarse a la derecha, pero también a la izquierda, y el socialismo, por su parte, había ligado su trayectoria histórica al comunismo.

Muchos observadores pensaban que el esquema político para Chile debía ser una gran alianza que marginara hacia la derecha las expresiones autoritarias y nostálgicas del gobierno militar y hacia la izquierda las fuerzas aún contagiadas de socialismo e impregnadas de sentimientos revanchistas. En lenguaje partidista eso significaba una alianza entre RN y el PDC. En el papel una coalición así podía tener ventajas, pero enormes dificultades prácticas la hacían inviable. La mayor era la mentalidad de los dirigentes del PDC. No se trataba sólo de que la

«lucha contra la dictadura» los hubiera hermanado con la izquierda. Bastaba rascar sólo un poco la cáscara para que emergiera el viejo resentimiento antiderechista de la Falange. La izquierda siempre ha ejercido una atracción fatal sobre el PDC chileno y ello no cambiaría fácilmente. Un asunto distinto era la votación democratacristiana. Siempre he pensado que ese mundo tiene natural distancia con el socialismo y puede compartir fácilmente el ideario innovador que caracteriza a la derecha en cualquiera de las democracias avanzadas.

No había que ser un genio para advertir que cerradas las posibilidades de una alianza formal, la única posibilidad de ser mayoría pasaba por invadir y conquistar al menos parte del mundo democratacristiano y de su periferia. Ir poco a poco sembrando para generar más adelante una convergencia directa con los votantes.

De lugarteniente a presidente

Por esa fecha, después de diversas reuniones con las figuras de mayor peso (Pedro Ibáñez y Francisco Bulnes, Ricardo Rivadeneira, Carlos Reymond, Miguel Luis Amunátegui) y con el equipo joven (Alberto Espina, Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, pero también Bernardo Matte, Gastón Cummins, Renato Gazmuri, Daniel Platovsky, Federico Mekis, Raúl Urrutia, José A. Galilea, Teo Ribera y varios más) definimos una estrategia frente al enervante silencio de Jarpa: aceptaríamos sin problemas su continuidad al frente del partido, pero bajo su dirección propondríamos un equipo ejecutivo, humanamente cohesionado e intelectualmente compenetrado para hacer el enorme trabajo que teníamos por delante. No fue fácil llegar a ese acuerdo: en el equipo joven Alberto Espina era partidario de negociar con Jarpa; Sebastián y la Evelyn, más bien de enfrentarlo.

Al final resolvimos que sólo si Jarpa desistía de postular presentaríamos nuestra opción y me encargué de aclararlo en todas las entrevistas:

—Yo soy el lugarteniente de Jarpa. Ojalá sea él quien conduzca el recambio y la modernización. Aspiro a ser presidente de RN sólo si Jarpa insiste en no serlo.

Para la casi unanimidad del partido ésa era, de lejos, la mejor fórmula. Después del quiebre con la UDI nos habíamos entendido sin mayores problemas enfrentando álgidos conflictos y acometiendo con éxito empresas políticas de envergadura.

Si Jarpa no era candidato, nosotros organizaríamos una lista. Si él no intervenía, yo estaba seguro de ganar. Si lo hacía a favor nuestro, nadie se atrevería a desafiarnos; si lo hacía en contra, la elección sería muy estrecha. Pero incluso esa elección era una fantástica oportunidad para desplegar nuestro proyecto frente al partido y al país.

A todo esto, Jarpa no cambiaba su posición. Y nadie lo sacaba de su hermetismo. Insistía en que no sería candidato y tampoco quería abundar en detalles sobre cómo debía conformarse la nueva mesa. La impresión que daba es que el tema le molestaba.

—Que lo resuelva el consejo general —era su muletilla. Y de ahí no salía.

Pero, ¿cómo podía resolverlo el consejo general? No era automático. Había que mostrarle listas, alternativas, fórmulas. ¿O alguien creía que una lista se conformaría a viva voz entre 400 personas?

—A Jarpa hay que rogarlo —insistía Gonzalo Eguiguren.

Llegar al consejo general en total penumbra era muy inconveniente. En ese escenario, al calor de discursos encendidos se conformaría una mesa improvisada, sin equilibrio, sin programa y sin nada claro hacia adelante. Era el *modus operandi* en el cual Jarpa se movía como pez en el agua.

Cuando el consejo general se fijó para los días 4 y 5 de agosto de 1990, formulamos en la comisión política una propuesta reglamentaria para que las listas a la directiva central se presentaran con tres semanas de anticipación. Jarpa, advertido, no asistió a la sesión.

La defensa de la iniciativa la hizo Francisco Bulnes. Luego de explicarla, sintetizó:

—Es necesario modernizar el partido con un programa político claro, una propuesta de acción y una reforma de estatutos. Eso no lo puede hacer una directiva improvisada y electa a los gritos.

—Esa fórmula le quita atribuciones al consejo general —argumentó en contra Gonzalo Eguiguren, en compañía de Ángel Fantuzzi.

—Al revés —respondió Bulnes—. De acuerdo con mi fórmula, el consejo general puede adoptar una resolución plenamente informada y con el máximo de antecedentes. Para eso requiere conocer las listas y sus programas con un plazo previo.

—Así Jarpa no se presentará —adujo Fantuzzi.

—Ese argumento es absurdo —terció Rivadeneira—. En el partido hay unanimidad para apoyar a Sergio. Él no necesita que lo aclamen. Si quiere seguir de presidente, sólo tiene que inscribir una lista.

El debate se mantuvo con los más cercanos a Jarpa y al final de la sesión, que imperceptiblemente se fue poniendo tensa, se votó. El resultado fue abrumador a favor de la propuesta de inscripción anticipada de listas. Quienes habían defendido la tesis derrotada no disimularon su disgusto. El solo hecho de votar había tenido un tenue olor a desafío.

A contar de ese momento empecé a recorrer el país para intercambiar ideas con los dirigentes sobre la modernización del partido. El fortalecimiento de Renovación a raíz de las elecciones era impresionante. Había sedes por doquier y la motivación de los dirigentes era enorme. ¡Con un partido así se podrían hacer grandes cosas!

Yo tenía otra razón para ser optimista: el equipo humano de RN. Allí había una mezcla muy notable de juventud y experiencia, aires modernos junto a la sagacidad de los años, apertura al mundo y conocimiento profundo de lo chileno. Antiguos y exitosos políticos de la mano con jóvenes que se habían destacado en el ámbito profesional y empresarial conformaban un tejido social que ningún otro partido podía exhibir. A los Jarpa, Bulnes, Ibáñez y Rivadeneira se sumaban grandes cartas. ¿Dónde

había un empresario como Sebastián, un dirigente gremial de alto nivel como Sergio Romero o Julio Lagos, ¿una mujer con la proyección de la Evelyn, parlamentarios tan prestigiados en sus zonas como Enrique Larre, María Angélica Cristi, Teo Ribera, Baldo Prokurica, José García y, en fin, tantos y tantos más?

En el curso de las siguientes semanas se produjo otro hecho importante. Las finanzas del partido se empezaron a vaciar. Ya hacia fines de junio y julio, RN no tenía recursos para pagar a sus empleados. Las empresas y personas que aportaban recursos para el partido dejaron de hacerlo, con diversas excusas, pero la razón era una sola: querían saber cómo se resolvería el problema de la futura dirección.

Con mi aversión al tema, no me quedó más alternativa que preguntar qué pasaba.

—Nuestros dadores de sangre han vuelto a hablar mal de Jarpa. Estamos igual que cuando renunció Büchi y tratamos que fuera candidato. No nos quieren dar plata —me informó Tassilo Reiseneger, nuestro abnegado tesorero una tarde que lo encontré, entre planillas y calculadoras, preparando la cuenta que rendiría ante el consejo.

—¿Qué cuenta vas a rendir? —le pregunté acordándome de que en el consejo anterior había arrancado una carcajada general cuando advirtió que su cuenta sólo tendría tres palabras: «No hay plata».

—Ahora tendrá siete palabras. «No hay plata y además tenemos deudas» —me contestó recurriendo al mejor repertorio de su humor alemán.

Amigos todos

Mientras se acercaba el plazo de inscripción de las listas, los esfuerzos finales para persuadir a Jarpa resultaron estériles. En un par de oportunidades diputados y senadores le renovaron su apoyo incondicional sin éxito: Jarpa se mantenía inmutable. Unos días antes del vencimiento del plazo me llamó a su oficina.

—Hace meses que advertí que no postularía y no me creyeron. En la vida se cumplen etapas y los amigos no lo entienden. Ya le va a pasar a usted.

Yo me mantuve a la expectativa. No era exactamente una declaración de apoyo. Pero respiré cuando me preguntó:

—¿Cómo piensa formar su mesa?

—Espero mantener a varios de los que están y quiero incorporar unos nuevos —fue mi vaga respuesta para ganar tiempo y averiguar qué pensaba.

Jarpa mantuvo el silencio y esperó que yo hablara. Él lo haría después.

—Bueno, creo que Miguel Otero debe quedarse, al igual que Gonzalo Eguiguren. Félix Viveros está haciendo un buen trabajo en la secretaría general.

—Está bien —me dijo—. Yo había pensado en los mismos. Al igual que en Espina.

—Sí, Alberto, por supuesto. Me interesa mucho incorporar a la Evelyn y a Sebastián —agregué.

Se echó para atrás en el sillón y pareció reflexionar.

—Creo que es un error. Ni la Evelyn ni Piñera deben quedar.

—¿Por qué? —pregunté algo sorprendido.

—La Evelyn ha hecho unas declaraciones sobre el tema de los derechos humanos que han caído pésimo en el partido y para qué le digo en las Fuerzas Armadas.

Era cierto, pero en caso alguno me parecía un elemento que la inhabilitara. Era ya una figura emergente de la política y sería un aporte para el trabajo de la directiva.

—Don Sergio —argumenté—. Las mías han sido peores.

—Así será. Pero usted no es hijo del comandante en jefe de la Fuerza Aérea.

—¿Y Piñera? —pregunté.

—Yo sé que es muy amigo suyo. Es recontrainteligente y tiene plata. Incluso, cuando quiere, puede ser simpático. Pero yo lo he visto en el Senado. Es acaballado y atropellador y además viene llegando al partido. Tiene objetivos y no se detiene hasta alcanzarlos. Es mejor tenerlo un poco más controlado. Que aprenda y

haga el servicio militar. En el Senado le va a ayudar pero en la mesa va a ser un dolor de cabeza para todos, incluido usted.

Me quedé callado calibrando la situación. No eran imposiciones... pero parecían.

—Yo lo quiero ayudar, Andrés. Hágame caso —me dijo en el único momento en que la conversación tuvo calidez.

Para los códigos herméticos de Jarpa era una demostración de confianza, casi de cariño. Yo no podía salir con una niñería como «déjeme pensarlo» o «voy a consultar».

—Conforme —dije simplemente.

Jarpa se paró y me dio la mano. Como siempre con fuerza. Al rato hablaba con los periodistas e informaba que apoyaría mi lista. «Yo soy amigo de Allamand; él es amigo mío y todos son amigos de ambos», fue la frase que eligió para expresarlo.

Al día siguiente todos los titulares daban cuenta del hecho. *La Época* tituló en primera página: «Jarpa cede el paso a Allamand».

La directiva quedó integrada al final por seis vicepresidentes. ¡Seis! Miguel Otero y Gonzalo Eguiguren eran primero y segundo, y luego, sin prelación, venían Alberto Espina, Carlos Reymond, Enrique Larre y Marina Prochelle. Félix Viveros mantenía la secretaría general y Cristián Correa —que había desempeñado con gran eficiencia el cargo en la campaña de Miguel Otero— quedaba de tesorero.

¿Por qué Jarpa no quiso seguir? ¿Alguna vez realmente estuvo dispuesto a ceder el paso? Entre todas las razones que en esos días entregó a la prensa, el propio Jarpa deslizó una hasta entonces omitida: «Desde la elección de parlamentarios estamos en una situación económica difícil. Espero que la próxima mesa directiva tenga la posibilidad de resolver definitivamente la situación; que tenga más apoyo que el que he tenido yo. Hay gente que mientras esté yo en la presidencia —por diferentes motivos, derivados de lo que hicimos el 83 y el 84— estará en contra de apoyarnos».

En las insondables razones que tuvo para abandonar la presidencia quizás haya tenido algo que ver. La gestión Collados-Escobar seguía penando.

Los unos y los otros

Mi decisión, al igual que la de no postular al Parlamento, tuvo entusiastas partidarios y también detractores. El equipo más «cercano» era fuerte partidario de la idea. Don Pedro Ibáñez era el primero: había que capitalizar el triunfo electoral, afianzar estructuras, imponer normas internas, impedir que el partido se «parlamentarizase», apoyar al Instituto Libertad —nuestro propio *think tank*— abrir las puertas a la generación empresarial y fortalecer el pensamiento económico del partido.

Además, rebosaba de optimismo y estaba dispuesto a emplear todas sus energías en uno de sus proyectos más anhelados: hacer funcionar un partido de derecha con criterios de gestión empresariales: «Por fin, creo que se puede construir un partido en serio».

Las aprensiones venían por otro lado. Juan Luis Ossa y Lucía Santa Cruz consideraban prematuro que asumiera la presidencia, argumentando que la derecha era muy tradicional, que estaba acostumbrada a liderazgos fuertes y a formas conservadoras. Según ellos, mi edad sería un obstáculo casi insalvable, ya que las figuras mayores, especialmente las que detentaban cargos parlamentarios, no se «tragarían un presidente con casi la mitad de los años». De igual forma, estimaban que con un camino tan exitoso a la espalda, tenía ganado un sitial hacia adelante y que era mejor tomarse un tiempo, formarse una posición económica más sólida y hasta vivir en el extranjero.

—Ya has hecho mucho. Estudia afuera un par de años —opinaban.

Óscar Godoy tenía otro enfoque: para él era evidente que nuestro proyecto sería fuertemente resistido, dentro y fuera del partido, por lo que había que juntar mucho más «masa crítica» para impulsarlo. Era mejor ser un ala minoritaria dentro del partido, con soltura para enviar un mensaje consistente hacia la ciudadanía, con tiempo para formar dirigentes y fuerza para

lograr una aceptación interna más meditada de los puntos de vista y preparar mejor la plataforma de lanzamiento. Óscar pensaba que era más conveniente estar lejos de las responsabilidades de la conducción a la espera de un mejor momento para asumirla.

En el primer argumento, el trasfondo era algo así como «no estás preparado tú ni los demás»; el trasfondo del segundo argumento era «no están preparados ni el partido ni la derecha».

Era evidente que algo de razón había en ambos argumentos y yo, pese a que ansiaba ser presidente, no estaba tan ciego para no advertirlo. Además, mis amigos se preocupaban más de mi futuro que del partido, pero la argumentación perdía solidez cuando yo preguntaba qué pasaría hacia adelante. ¿Quién dirigiría RN? ¿Cómo se perfilaría la derecha?

La marcha del país no se congelaría a la espera de que maduraran todos los elementos. No cabía duda que era una empresa difícil. Pero, ¿no era también cierto que todas las iniciativas políticas que había emprendido —partiendo por la lejana FESES allá por 1972— estaban igual jalonadas de riesgos? ¡Siempre había buenas razones para no hacer las cosas!

En el fondo me sentía capaz de salir adelante y deseaba intensamente asumir el desafío.

La democracia de los acuerdos

El consejo general se celebraría en el frío pero solemne salón de honor del Congreso en Valparaíso. Todo ayudaba: una reunión para celebrar el éxito en la pasada elección parlamentaria, un edificio por conocer que ya estaba cargado de historia, estar en contacto con los antiguos y nuevos dirigentes, en fin, el cambio de directiva. Todos intuían que se iniciaba una etapa distinta. ¿Cómo sería la derecha sin Jarpa a la cabeza?

Los delegados fueron recibidos con una voluminosa carpeta que contenía el programa de trabajo de la nueva directiva. ¡Varias semanas trabajamos con Carlos Cruzat en su preparación!

Las paredes estaban tapizadas de afiches que no parecían políticos y mostraban a un par de jóvenes. La leyenda era directa: «Renovación Nacional, un partido para el siglo XXI».

¿Qué diría el nuevo presidente? El sábado no abrí la boca y me dediqué a masticar mi intervención programada para el domingo en la mañana.

Aprovecharía la oportunidad para fijar una política. Bajaría todas mis cartas. También resolví —eran mis primeras modestas órdenes— que el consejo se abriera a la prensa de principio a fin, lo que no es habitual en algunos partidos que prefieren el hermetismo. Acepté también que como parte del programa se organizara una fiesta con orquestas, cantantes populares y micrófono abierto para quienes se animasen a ocuparlo.

A medianoche, cuando la fiesta ardía, se produjo un pequeño problema. Los encargados de la organización habían mandado a hacer unos sombreros de plumavit, típicos de las convenciones norteamericanas. Al llegar Jarpa vio las bolsas que los contenían y ordenó con una mueca de fastidio que no fuesen distribuidos a los delegados.

—¿Qué tienen que ver esas cosas con un partido chileno? —preguntó con disgusto, ante el desconcierto del par de jóvenes encargados de distribuirlos.

El inconveniente se resolvió solo. Cuando cantaban Los Huasos de Longaví, grupo folclórico que había acompañado a Jarpa durante la última campaña, alguien descubrió las bolsas y empezó a repartir los sombreros. ¡Todos se los pelearon como recuerdo!

—Viejo mañoso. Si hubieran sido chupallas seguro que no habría reclamado —comentó un testigo del episodio.

El domingo en la mañana, cuando comencé mi intervención el salón de honor estaba atiborrado. Mis padres habían viajado especialmente desde Santiago y la Bárbara había llevado a las niñitas, entonces apenas de 10 y 9 años. Juan Andrés tenía 3 y Raimundo 2.

Partí recordando que hacía «veinte años exactos de que Chile eligió a Salvador Allende». En un par de pincelazos tracé la

trayectoria descendente del socialismo y ascendente de la libertad para afirmar que a nuestro pensamiento le había llegado su hora, que lo concreto era que «la revolución, allí donde se impuso, fracasó; donde no prevaleció, nadie la añora. Entre la Plaza de Tiananmen en Pekín y la Puerta de Brandeburgo en Berlín hay demasiados ejemplos de rebeldía que lo atestiguan. La revolución siempre estuvo condenada. Nunca asumió el desafío de la libertad. Y al oprimirla y sofocarla, terminó suicidándose».

El primer planteamiento de fondo fue que mientras «nuestras ideas son crecientemente mayoritarias, nuestro partido no lo es». Había, entonces, que abocarse a la tarea de crecer, lo que nos conducía «a la decisión crucial de este consejo: resolver qué tipo de partido aspiramos a constituir y qué papel pretendemos desempeñar en la vida nacional. Una primera opción es ser un grupo monolítico, que no efectúa avances doctrinarios, no incursiona en temas polémicos y se mantiene apegado al ideario más convencional; la segunda opción es conformar un partido más amplio y flexible, cuyo crecimiento hacia otros sectores implica ajustes programáticos, incursionar en temas no abordados y desarrollar un ideario más amplio. El primer camino perfila una centroderecha dedicada sólo a servir de contrapeso, a frenar cambios radicales y a permanecer como minoría. El segundo camino perfila a la centroderecha con vocación de mayoría, le exige más amplitud ideológica y una disposición abierta a la innovación. Tal actitud la obliga a presentar un proyecto de futuro y a constituirse en una real alternativa de gobierno».

La argumentación, siempre en términos de disyuntivas, recalcaba que «la primera opción está más preocupada de lo que pasó hace veinte años; a la segunda le interesa más protagonizar lo que ocurrirá en los próximos veinte».

—Al consejo general le corresponde escoger.

Ahí estalló el primer aplauso y recién allí me sentí presidente de Renovación Nacional.

Después no resultó difícil delinear una política orientada a construir la «democracia de los acuerdos» asumiendo que las naciones en que éstos prevalecían se destacaban por su «estabilidad

y progreso»; a marcar la importancia de las «políticas de estado» (suprapartidistas y de largo aliento), a contribuir a la reconciliación admitiendo todos sus responsabilidades en el proceso que condujo a que se violaran los derechos humanos y, por último, a terminar con una falsa disyuntiva: «En el pasado Chile sacrificó su crecimiento buscando distribuir una riqueza exigua, pero en la última década privilegió el crecimiento desatendiendo problemas sociales acuciantes».

Al final del discurso me salí del texto escrito y miré de frente a los asistentes:

—Aquí está la gente que, con imaginación y esfuerzo, ha hecho y hará que el país progrese. Aquí están los futuros alcaldes. Aquí están los futuros intendentes y los futuros ministros. Señores miembros del consejo general: ¡en algún lugar de este salón de honor está sentado el futuro presidente de Chile!»

Todo el consejo saltó como resorte.

El aplauso y los vítores fueron ensordecedores. Yo mismo me sorprendí.

Luego, un grito unánime:

«¡Jarpa, Jarpa, Jarpa!».

Campamentos del Everest

El Mercurio prodigó inusuales elogios a la nueva directiva: «El enfoque analítico con que asume sus tareas permite presumir que ese partido jugará un rol importante en el país. Los partidos oficialistas dejan entrever su preocupación por esta centroderecha renovada, que efectivamente puede calar hondo en el centro político y erigirse como una opción seria para Chile. Las ideas que representa obtienen hoy amplia aceptación en el mundo y puede esperarse que en nuestro país, una vez superados los traumas del pasado reciente, logren concitar el respaldo de la mayoría».

La Época escribió que «sorteando los más difíciles desfiladeros que pudo encontrar, Andrés Allamand quebró finalmente la

resistencia que le opusieron el «jarpismo» y los grupos más conservadores», pero presagió que muchos se sentarían a ver la caída no sólo de un «líder audaz, sino de un proyecto estratégico que les causa escozor y desagrado». Para *Hoy* la «asunción de Allamand es uno de los grandes misterios de la política chilena, porque lo que él representa es una postura minoritaria en su partido».

Todos los análisis abundaban en aprensiones sobre el futuro; hablaban de una mesa «embargada» por el «jarpismo» y listaban las tareas que tenía por delante como campamentos para ascender al Everest: «establecer un liderazgo personal armonizando a los señores feudales de la derecha y las presiones inorgánicas del empresariado, navegar entre conservadores y liberales, manejarse —sin ser parlamentario— con un grupo de senadores que oscila entre la hostilidad y la indiferencia, opacar a Pinochet sin perder a los «pinochetistas», modernizar un partido con crisis de crecimiento, intentar rearmar el trabajo conjunto con la UDI, negociar con el gobierno con pragmatismo opositor pero visión de Estado, mantener las virtudes de rugbista, como la velocidad, el ataque y la audacia que bordea la imprudencia, y mejorar la frágil defensa aprendiendo a precaverse de las emboscadas».

Cuando las leí, me abrumé. ¡Descargaban las baterías hasta del más pintado!

Otro análisis advertía con lucidez una cierta paradoja, al recordar que todos los avances «progresistas impulsados en los últimos años por Allamand han sido amparados bajo el ancho escudo protector del cacique conservador», es decir, del propio Jarpa.

Era efectivo. Ahora habría que avanzar sin escudo y al frente del pelotón. Más tarde aprendería que la política no se nutre de la infantería.

Capítulo XI

La pena más grande

—Papá —gritó María Olivia por el teléfono. ¡Pasó algo terrible! Juan Andrés se cayó a la piscina.

Atrás se oían gritos. El timbre de voz de mi hija mayor denotaba la tragedia. Me quedé helado. Salí corriendo. No agarré ni la chaqueta. Siempre supe que era un accidente muy grave. Quizás el peor. Félix Viveros manejó mi auto. A la Clínica Alemana. Luego a la Clínica Las Condes.

Todo se agolpa. Los llantos. La angustia. Los sentidos paralogizados. La mente aturdida. El dolor apenas contenido. Los médicos taciturnos. Las enfermeras tensas. Las caras sombrías. Los pronósticos reservados. Los amigos en pleno. Las lágrimas encarceladas. La impotencia transformada en oxígeno. La resignación imposible. Las oraciones silenciosas. Los rezos entre dientes. Las miradas al cielo. Los hombros caídos.

La segunda noche mi primo Francisco Allamand, heredero de las mejores tradiciones médicas de la familia, me tomó del brazo, me apretó con toda su fuerza y me habló de frente, haciendo a la Bárbara a un costado.

—Andrés, afírmate. El niño, se nos está muriendo.

—Mierda —susurré, mordiéndome los labios para no llorar—. Pero ¿cómo está?

—Peleando. Es un Allamand —me dijo y se metió de vuelta a la UTI.

Juan Andrés sobrevivió sólo por su gran fortaleza física y empujado por la entereza sobrenatural de la Bárbara. Siempre he pensado que ella impidió que muriera, sobre todo aquella noche cuando llamamos a nuestros amigos más cercanos, para esperar abrazados, el desenlace inminente.

Juan Andrés salió adelante.

Pero todo cambió.

Yo no fui nunca más el mismo.

Nada fue igual.

Nada.

Ni nadie.

Inundado por la pena me sumergí en el trabajo.

No era fácil. Era como vivir desdoblado. El alma a un lado; la mente en otra. Creo que encontré en las responsabilidades y en el trabajo —aún más duro, aún más horas— un precario refugio. ¿Consuelo? No, de ninguna manera. No existe.

LAS VÉRTEBRAS DE LA AGENDA

La agenda del nuevo gobierno no planteaba grandes enigmas: poner en rodaje a las instituciones democráticas, lograr que las Fuerzas Armadas retornaran a roles propios de la normalidad y abordar los problemas de derechos humanos. Desde el principio quedó claro que los cambios institucionales se abordarían al final del período, con una salvedad: los gobiernos municipales. Otro aspecto de la agenda sería la bullada reinserción internacional, que bien manejada podía otorgar enormes beneficios a Chile dado la estelaridad de su proceso político. Por último, dar curso a un programa económico sin grandes definiciones y de lineamientos ambiguos, en que se anticipaba que lo fundamental sería introducir «énfasis social» en el sistema.

Frente a tal agenda había dos alternativas.

Una era coherente con la llamada «democracia de los acuerdos» y asumía que los problemas que enfrentaba el nuevo gobierno eran también, de alguna manera, problemas propios

y, en consecuencia, cabía destinar tiempo y esfuerzo para contribuir a solucionarlos.

La otra alternativa, más tradicional, era asumir que los problemas del gobierno eran del gobierno y no nuestros.

La primera línea conducía a coprotagonizar la transición; la otra, a observarla desde un lugar privilegiado. Una apostaba al éxito del proceso, con una mirada de retribución política de largo plazo. La otra no ligaba el éxito de la acción política al éxito de la transición, sino que creía que una mala gestión del nuevo gobierno era el camino más expedito para recuperar el poder.

Desde el principio me jugué con fuerza y alma por la primera línea. Por supuesto que así como el gobierno tenía su agenda, nosotros también teníamos la nuestra. En materia de relaciones cívico-militares, estábamos por una política de apego a la legalidad ya que sólo la ley otorgaría el paraguas protector para que los conflictos no se desbordasen. En materia de derechos humanos, nos opondríamos a la derogación de la ley de amnistía de 1978, no alentaríamos ningún revanchismo de la izquierda y tampoco permitiríamos que los hechos se revelaran distorsionados o ajenos a su contexto histórico. Esa era nuestra línea de demarcación. Tampoco cohonestaríamos acción alguna que reclamase privilegio o protección para crímenes cometidos después del período cubierto por esa ley. Tales hechos tendrían que ser investigados y sancionados. No justificaríamos lo injustificable.

En materia económica, nuestra carta de navegación sería simple: defender la columna vertebral del modelo económico gestado durante el régimen militar. Los grandes cambios que el gobierno demandaba en materia tributaria y laboral debían reducirse a lo justo y necesario. Sólo aceptaríamos ajustes razonables que no alteraran la lógica del modelo.

Por último, en materia de reforma municipal, mi planteamiento era categórico: el absurdo sistema de la Constitución del 80 debía ser abolido sin más. Había que ir a un sistema de elección de alcaldes vía sufragio universal en una fecha razonable.

El gobierno tenía su estrategia. Nosotros la nuestra.

Con ropa ajena

Cuando Alejandro Foxley se sentara en su escritorio se encontraría con números infinitamente mejores a los que hallaría todo otro ministro de Hacienda de cualquier país latinoamericano retornando a la democracia. La solidez y el dinamismo de la economía fueron factores muy favorables para la transición. Pero la situación era paradójica. La Concertación había ganado el plebiscito y la campaña presidencial poniendo por delante una fuerte crítica contra el modelo, al igual que la candidatura populista de Francisco Javier Errázuriz y la interpretación más extendida (entre otras, en un estudio realizado por el CEP) era que el factor determinante de la derrota del *Sí* había sido la insatisfacción económica. Una motivación incluso más fuerte que los derechos humanos o la desaprobación a la figura de Pinochet.

¿Cómo se comportaría la izquierda? ¿Hasta dónde llegaba la tan mentada «renovación socialista»? Por otra parte, ¿no habían sido los miembros del equipo económico —la mayoría proveniente de Cieplan— fieros e implacables críticos de cada una de las transformaciones que impulsó el gobierno militar? Alguna vez leí que a Aylwin, cuando todavía no era candidato, le preguntaron qué mantendría del gobierno militar: «Tendría que mirar con lupa», fue la respuesta. Aylwin —uno de los políticos menos renovado en su ideario económico— claramente se sentía incómodo en la lógica de una economía de mercado. ¡Los mismos que criticaron ácidamente el modelo, ahora debían administrarlo! ¿No era el caso del propio Foxley? Innumerables artículos y libros permitían pensar así. ¿Y qué decir de Carlos Ominani, el flamante ministro de Economía? ¿O incluso de René Cortázar, a cargo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social? Y así suma y sigue.

El cuadro general era preocupante: programa ambiguo; equipo económico sin experiencia, que pasaba de la placidez y pausa de los centros de estudios a los apremios y urgencias ministeriales;

ambiente de natural desconfianza en el mundo empresarial y una demanda social largamente contenida. Además, una coyuntura compleja. El país había crecido en 1989 a un asombroso 10,2% como consecuencia de políticas monetarias y fiscales expansivas. Pero la inflación proyectada para 1990 se aproximaba al 30% y las importaciones mostraban una curva ascendente preocupante. Curso de Introducción a la Economía: había que ajustar. El tranco no era sostenible. Para peor, la guerra del Golfo dispararía los precios del petróleo.

Entretanto, ¿cuál era objetivamente la situación? Felipe Larraín, a quien conocía desde hacía tiempo y consultaba permanentemente, tenía un diagnóstico: «Hacia el fin del gobierno militar, la economía chilena había completado exitosamente su estabilización y ajuste estructural. El país lideraba la implementación de un número importante de reformas económicas, entre otras, comercio exterior, seguridad social y privatizaciones. La última mitad de la década había sido el subperíodo con mejores resultados».

Esas eran las buenas noticias. Ahora las malas: «El salario mínimo era en términos reales 35% más bajo que en 1980, las pensiones del sector público habían declinado en términos reales en un 10% desde 1985 hasta principios de los 90, los subsidios destinados a las familias extremadamente pobres había declinado en un 50% en términos reales entre 1981 y 1989 y los beneficiarios del gasto social habían caído en un 20% desde 1985».

Sin embargo, había que preservar a toda costa el modelo económico, aunque todavía no se vieran todos los frutos del esfuerzo y el reparto de ellos no fuese el ideal. ¡Había costado demasiado llegar donde estábamos! El imperativo era impedir que Chile repitiera la ruta desastrosa de la Argentina de Alfonsín, el Brasil de Sarney o —lejos el peor de todos— el Perú de Alan García.

Ese era un problema esencialmente político. Había que entender como se veían las cosas al frente. Edgardo Boeninger, instalado en el poderoso Ministerio Secretaría General de la Presidencia, afirmaba que «el imperativo era dar legitimidad social y

política a un modelo económico que acarreaba con el pecado original de haber sido implantado por la repudiada dictadura».

¿Y cómo hacer eso? Transformando el modelo chileno en un auténtico proyecto nacional. No podía seguir siendo «sólo» el modelo de la derecha. O de los empresarios en exclusiva. O del gobierno militar. Mucho menos de Pinochet y los *Chicago boys*. Había que hacerlo el proyecto de todos. Y para ello, en vez de negarle al nuevo equipo económico a priori competencia técnica y voluntad de aplicarlo, había que facilitar las cosas. No podíamos pretender que se hiciera lo que habríamos hecho nosotros en el gobierno. Pero era bueno evitar confusiones: las elecciones las habían ganado ellos.

Mi idea central era que había que atraer al gobierno y la Concertación hacia adentro del modelo y no empujarlo hacia fuera.

Algunos de los más recalcitrantes partidarios del régimen militar, especialmente aquellos que habían participado en su gestión, no pensaban así. Estaban resentidos y con razón: llegarían al gobierno los que habían sido sus más fuertes críticos, quienes cosecharían y se pasearían por el mundo vistiendo ropa ajena. ¡Qué pedalaream cuesta arriba! En la próxima elección la gente les cobraría la cuenta.

Nunca compartí esa visión y esa estrategia que, aun en caso de ser exitosa, podía rebotar. Quizás la gente castigaría al nuevo equipo económico, pero de paso el sistema entero corría el riesgo de sucumbir. Había que tener visión de largo plazo, horizontes, perspectiva.

La ruta de las cabras

A mediados de 1990 me preguntaron cuál sería el mayor fracaso del nuevo gobierno. Contesté sin dudarlo: «El mayor fracaso para Chile, y para la propia centroderecha, sería que al final del gobierno de Aylwin surgiera la impresión que la economía social de mercado no funciona en democracia».

Estábamos al medio de dos fuegos: los que habían modelado la

transformación económica se oponían tenazmente a los cambios, cualquier modificación sería para ellos un retroceso injustificable y pronosticaban las peores consecuencias. Y por otro lado, los que deseaban introducir cambios los demandarían radicales, globales y profundos. Unos y otros se retroalimentarían y argumentarían con el tejo pasado, extremando sus puntos de vista. Y nosotros estaríamos al medio: criticados desde ambos lados, pero también buscados por ambos. Íbamos a necesitar mucha «sintonía fina».

Frente al gobierno nuestro mensaje fue inequívoco. Contarían con nosotros aun para decisiones políticamente impopulares, siempre y cuando las medidas a adoptar no distorsionaran las bases del modelo. Sebastián Piñera en el Senado y Evelyn Matthei en la Cámara les garantizaban seriedad y competencia técnica. Yo mismo aportaba apoyo político. Además, siempre habría teléfono abierto para conversar los temas.

Y el teléfono se usaba. Una tarde me llamó Boeninger para preguntarme si podía pasar por su casa temprano al día siguiente. Estaría con Enrique Correa, ministro secretario general de Gobierno. El gobierno en esos días —afectado por el alza del petróleo y el inminente aumento de la inflación— tenía mil ideas y ninguna clara. Algunos dirigentes políticos y autoridades proponían cambiar la composición del IPC sacando los precios vinculados al petróleo.

—¿Qué te parece una medida así?

—Ni pensarlo. Es una tontería técnica y políticamente es una lesera aún mayor —dije yo—. El gran problema de ustedes es ganar credibilidad frente al empresariado, los inversionistas, la comunidad financiera internacional. Todavía nadie les cree que puedan manejar esto bien. Si a la primera de cambio actúan como las cabras, ¿quién les va a creer?

Correa sonrió. Boeninger, más alemán, preguntó por eso de las cabras.

—Muy simple: ¿qué hacen las cabras cuando se asustan? Arrancan cabeza gacha *p'al* monte.

Se acabó el desayuno.

Mucho después sabría que ese mismo día Alejandro Foxley comentó el tema con Pedro Aspe, el ministro de Finanzas mexicano del entonces rutilante Salinas de Gortari.

—Mano, no se te pase por la cabeza tal cosa.

Impuestos a la vista

Aylwin nunca lo escondió durante la campaña: si él ganaba, subiría los impuestos.

El principal compromiso económico de su candidatura sería pagar la llamada «deuda social». Y para ello su primera medida sería impulsar una importante reforma tributaria. En el lenguaje político de Aylwin, eso significaba incorporar el valor de la «solidaridad» al manejo de la economía; en el lenguaje de la Cepal y Boeninger, impulsar el «crecimiento con equidad».

La reacción empresarial no se dejó esperar. Rechazaron tajantemente cualquier alza y auguraban muy negativos efectos si se producían: las inversiones se paralizarían, el crecimiento se detendría, el desempleo aumentaría. ¡Una letanía!

El Gobierno no se inmutó: anunció un proyecto de ley e invitó a conversar a los partidos de oposición.

A todo esto, en Renovación el convencimiento era que la prioridad era generar un cuadro de estabilidad. ¡Nada peor que incertidumbre en una variable clave para la confianza del mundo empresarial! De igual forma, pensábamos que había holguras para reforzar los programas sociales.

En los primeros contactos entre el gobierno y RN se intentó cuadrar los números. ¿Cuánto esperan recaudar?, fue nuestra pregunta de rigor: 600 millones de dólares, contestaron. ¿Para gastarlos en qué?, fue la segunda interrogante: En un amplio programa social, fue la vaga respuesta.

Desde el comienzo quedó claro a nivel técnico que para llegar a esa cifra los aumentos de los impuestos a las empresas y a las personas tendrían que ser exorbitantes. No hubo más alternativa que

pensar en el IVA, cosa que el programa de la Concertación no contemplaba.

Al interior de RN acordamos que los aumentos de impuestos deberían ser moderados, transitorios y de destino conocido. Además, exigiríamos una condición central: ésta sería la única reforma tributaria global de toda la administración Aylwin. Primera y última.

Fue relativamente fácil acordar con el gobierno los porcentajes del aumento una vez que se estableció que el IVA subiría a 18%. Los impuestos a las empresas volverían a calcularse sobre base devengada y subirían sólo del 10% al 15% (cifra muy inferior al promedio de todo el gobierno militar y al contemplado por el programa de la Concertación); se modificó el sistema de tributación de renta presunta a efectiva para la agricultura, minería y transporte (que se prestaba a grandes abusos y había sido un planteamiento del propio gobierno militar) y se aumentaron las tasas en los tramos más altos de los impuestos personales, manteniendo la exención para los más bajos.

Los problemas surgieron con la transitoriedad de la reforma y la resistencia del gobierno a «ligarla» a un programa social específico. En este punto Sebastián fue inflexible: no aceptaríamos que el gobierno quedara con vía libre para gastar la plata en lo que quisiera. La pretensión de Foxley era inaceptable: que nosotros pagáramos los costos políticos de aumentar los impuestos y que ellos se llevaran los aplausos por el programa social.

Pero Foxley tampoco cedía:

—Sebastián, entiende. El ministro de Hacienda soy yo. No tú.

Al final el asunto se zanjó y Foxley tuvo que explicar formalmente en el Senado cuál sería el destino de la mayor recaudación. Y en el Parlamento se logró que los aumentos de impuestos a las empresas y personas fueran transitorios: sólo hasta 1993. El PS, ajustándose al programa de la Concertación, quería que toda la reforma se financiara con impuestos directos y exigió que el incremento del IVA también fuera hasta 1993 ¡Buena idea! Su argumento era conceptualmente correcto, aunque

después el PS y la propia Concertación lo olvidó. El IVA es un impuesto regresivo, ya que castiga a la población que destina virtualmente todo su ingreso a consumo.

Como era previsible que ocurriera, nuestros problemas surgieron respecto de nuestro propio electorado.

¿Un partido de derecha a favor de aumentar los impuestos?

Nuestra explicación enfatizaba que «por regla general» no éramos partidarios de incrementar los impuestos, pero insistíamos en que estábamos ante una situación excepcional.

—La reforma es pan para hoy y hambre para mañana —decían los diputados de la UDI.

—La reforma hipoteca el futuro del país —afirmaba la Sofofa.

—Afectará el empleo y las remuneraciones, postergando la posibilidad que la mayoría de los chilenos mejore su calidad de vida —declaraba la Confederación de la Producción y del Comercio.

A nosotros la argumentación nos parecía efectista y exagerada. Casi una forma de nueva demagogia. La demagogia antigua era que se podía hacer casi todo; la nueva era que no se podía hacer nada sin que el país se cayera a pedazos.

Pero, además, existía otra razón decisiva para zanjar la discusión de negociar o no con el gobierno.

¿Cuántos votos tenemos para rechazar una reforma? —les preguntábamos a quienes planteaban que había que oponerse a fardo cerrado.

Las cuentas del Senado hablaban por sí mismas. La Concertación partía con 22 votos. Había nueve senadores designados. La mayoría era 24. Para aprobar la reforma la Concertación tenía que obtener apenas dos votos en un universo de nueve. No había dudas: los tenía en el bolsillo.

Pero no era gratis desafiar al nuevo gobierno. Si los enfrentábamos, nos quedaríamos sin posibilidad de negociar los términos de la reforma y, en consecuencia, el escenario más probable era que la Concertación impusiera una reforma reñida con el modelo de desarrollo. Políticamente, por otro lado, por esta vía le estábamos regalando al gobierno una excusa para amparar

cualquier deficiencia en su gestión. Casi se podía oír lo que dirían:

—Los responsables de no haber resuelto los problemas de los más pobres que se arrastran por 17 años son la derecha y el Senado. ¡Allí están los culpables!

La argumentación era difícil de refutar, pero fue inútil: aumentar los impuestos tenía un costo hacia la derecha y lo tendríamos que asumir en soledad.

Un dirigente empresarial me lo dejó claro:

—No tengo dudas de que hay que negociar. Y el arreglo no es malo. Pero nosotros vamos a rechazar siempre, por principio, cualquier aumento de impuestos.

A principios de mayo —un récord de tiempo— se aprobó la reforma. Nuestra predicción había sido correcta. Sólo la UDI votó en contra e hizo gran caudal en contra nuestra. Según ellos, al aprobar el alza de impuestos habíamos «traicionado los principios».

Sebastián Piñera, principal artífice del acuerdo y gran negociador del mismo, lo resumió de la mejor manera:

—La democracia de los acuerdos entró en acción.

El tiempo demostraría el error de las predicciones catastrofistas. Hacia fines del gobierno de Aylwin los resultados económicos hablaban por sí mismos.

En esa época —1993— se volvió a plantear el tema tributario y nuestra primera reacción fue exigir el cumplimiento del acuerdo. Sin embargo, el gobierno nos ganó de mano e inició conversaciones directas con el sector empresarial. En una comida en la casa de Hernán Briones, a la que asistió toda la primera división de la dirigencia empresarial, Foxley obtuvo el acuerdo de la SOFOFA para dejar el impuesto a las empresas en forma definitiva en 15% y ya nadie cuestionó seriamente la base de cálculo. El sector empresarial tampoco objetaba que el IVA siguiera en 18%. Además, en este último caso, había un fundamento técnico: bajar abruptamente el IVA habría generado déficit fiscal, salvo que se hubiera disminuido el gasto, afectando eventualmente la tasa de interés.

Ese acuerdo debilitó nuestro piso negociador.

—No sean más papistas que el Papa —nos dijo Foxley de entrada.

La UDI mantuvo su intransigente posición: no participarían en ningún acuerdo tributario y rechazarían «por principio» cualquier alza. En ese escenario yo me preocupé de dos cosas: que participara en el resto de la negociación el nuevo presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, José Antonio Guzmán —para atenuar la crítica desde el sector empresarial— y que el nuevo acuerdo tuviera la aprobación explícita de Eduardo Frei, a esas alturas candidato único de la Concertación y casi seguro futuro jefe de Estado.

El nuevo acuerdo dejó el impuesto a las empresas tal cual, disminuyó los impuestos a las personas como se había originalmente pactado y elaboró una fórmula para el futuro del IVA. A contar de 1998, indefectible y definitivamente bajaría a 17%. Del mismo modo, se avanzó en eliminar la doble tributación y se establecieron algunos mecanismos de fomento al ahorro.

El resultado global del acuerdo era valioso: otros cuatro años de estabilidad tributaria. Y la señal política lo era aún más: hacia adelante los impuestos deberían bajar, en ningún caso subir.

El talón laboral

Nuestra apreciación del régimen laboral del gobierno militar era claramente positiva. Era correcto en su inspiración, drástico en sus alcances y pionero en la necesidad de construir una de las bases fundamentales para el funcionamiento de la economía social de mercado. Sin embargo, tenían su talón de Aquiles: se cuestionaba su legitimidad política.

En esencia, el problema no era muy distinto al de la reforma tributaria. El régimen laboral era considerado ilegítimo y altamente perjudicial para los trabajadores. Bien o mal, correcta o incorrecta, tal era una visión compartida por las organizaciones sindicales y la totalidad de los partidos de la Concertación.

Por ellos, ojalá volver al antiguo Código del Trabajo. Así, aunque no con esas mismas palabras, lo decía el programa de la Concertación: «La institucionalidad laboral vigente ha puesto a los trabajadores en una situación de grave desprotección. Proponemos introducir cambios profundos en la legislación laboral para la recuperación de los derechos de los trabajadores».

En las antípodas, los autores de la reforma consideraban una herejía introducirle cualquier modificación. Aquí coincidían con los empresarios más reacios a todo cambio. Vuelta a lo mismo: a dúo pronosticaban el apocalipsis ante la menor enmienda.

Nosotros creíamos posible mantener la columna vertebral y sobre todo la inspiración del plan laboral, abriéndonos sí a algunas enmiendas.

Un hecho significativo trajo aguas al molino de la reforma laboral. En abril de 1990 se firmó el llamado Acuerdo Marco cuyo título es «Chile: una oportunidad histórica». La importancia del documento estaba en quienes lo suscribían y en lo que decía: Lo firmaba la Confederación de la Producción y el Comercio y la CUT. Por primera vez empresarios y trabajadores miraban el futuro en conjunto.

En esa perspectiva —más allá de algunas concesiones semánticas— era claramente un documento pro economía de mercado y propiedad privada, firmado por una central sindical cuyos dirigentes, socialistas y comunistas en su mayoría, tenían considerable poderío. Quizás si hasta más poderío que representatividad.

El principal gestor de ese acuerdo fue Manuel Feliú y me consta que se llevó más de un mal rato con su propia gente.

—¿Qué tiene que andar Feliú firmando acuerdos con la CUT? —preguntó por los diarios más de algún dirigente empresarial.

—Es un error darle personería a la CUT —criticaban otros.

La discrepancia, a fin de cuentas, era de fondo y ponía en entredicho el valor de tales acuerdos. Manuel Feliú hacía ver que el problema era de capacidad de diálogo y voluntad de acuerdo. «Eso —decía— es lo que realmente hace a un país democrático. Así se hace un país grande; lo demás genera un país mediocre».

Yo me preguntaba algo distinto: ¿Cómo no entendían algunos dirigentes empresariales que así se ganaba la batalla de las ideas?

El documento se refería a las reformas laborales, dando por hecho que se llevarían adelante. El gobierno despachó a mediados de julio al Parlamento tres proyectos distintos que se agregaron a uno anterior sobre centrales sindicales. La voluntad de acuerdo quedó de manifiesto en un hecho sintomático: los proyectos entraron al Senado y no a la Cámara. Estaba claro por qué. El gobierno no tenía mayoría en el Senado. Para aprobarlos tenía que negociar y llegar a un acuerdo político. Sólo luego de aprobados se enviarían a la Cámara. Al revés era imposible: el Senado habría tenido que desautorizar a la Cámara donde la Concertación tenía clara mayoría.

Los proyectos abordaban materias distintas. ¿Cuáles eran los cambios más importantes y conflictivos?

Se derogaba la atribución unilateral del empleador de despedir a un trabajador sin expresión de causa. En adelante los empleadores deberían justificar —con razones objetivas— la necesidad del despido. Nadie quedó conforme con el cambio: los empresarios pedían mantener las cosas como estaban y la CUT, inamovilidad absoluta.

En el caso de las indemnizaciones por años de servicio, el proyecto eliminaba el tope máximo de cinco meses y expresaba la intención —sólo la intención— de establecer en el futuro un seguro de cesantía.

Ambas propuestas tenían un claro sesgo antiempleo. Lejos de proteger a los trabajadores aumentaban el costo de la contratación. Y una legislación laboral no sólo debe ocuparse de los que tienen trabajo, sino también de los que no lo tienen y de quienes lo buscan por primera vez.

También estaba el intento de trasladar el ámbito de negociación desde la empresa a la rama o área de actividad y retornar al antiguo esquema de la huelga. Eso equivalía a volver a concebir la huelga como un instrumento de conflicto político y una expresión de larvada lucha de clases.

Manuel Feliú, planteó que el proyecto era incompatible con el modelo de desarrollo y «significaría forados en la embarcación en que vamos».

Quien tomó el tema con mayor vehemencia y casi como cruzada personal, fue el ex ministro José Piñera: «Es un tango —dijo— entre el gobierno y las centrales sindicales». Además, recordó las palabras de Manuel Bustos, que había amenazado con sacar a cientos de miles de trabajadores a la calle si no se aprobaban las reformas en los términos que él quería. Piñera advirtió:

—Esto lo está diciendo con una pistola descargada, porque no tiene ningún poder para eso. Si aprueban esta ley el gobierno le está cargando la pistola a Bustos para paralizar a Chile.

Pero junto con la guerra de declaraciones se inició el trabajoso proceso de búsqueda de entendimientos.

Tres meses después se logró acuerdo entre RN y el gobierno. ¿Con qué resultados? En materia de despidos se mantuvo la propuesta del gobierno de incorporar la causal de «necesidades de la empresa», pero frente al reclamo del trabajador no había derecho a reincorporación obligatoria y el empleador debía cancelar la indemnización con un recargo del 25% si el despido era injustificado. Las indemnizaciones, a su vez, quedaron con un tope de once años. La negociación colectiva se mantuvo —salvo acuerdo en contrario de las partes—en el ámbito de la empresa. En la huelga el empleador mantuvo el derecho a reemplazar trabajadores y éstos a «descolgarse». Sin volver al esquema anterior.

Como yo no participaba directamente en las negociaciones —que estaban radicadas en Sebastián Piñera y Ángel Fantuzzi, con la valiosa colaboración de Álvaro Pizarro— me preocupé de que quedara siempre en claro —de nuevo— que ésta sería la primera y única reforma laboral del gobierno de Aylwin. Y así fue.

A todas luces fue una buena negociación. Sin embargo, no todos lo entendieron así. La CUT y dirigentes del Partido Socialista expresaron —a mitad de camino entre la desazón y la indignación— que «se había abdicado frente a la derecha».

Al igual que tratándose de la reforma tributaria, el tiempo diría quién estaba en lo correcto. Más que eso: durante todo el

gobierno de Frei, la Concertación intentó sin éxito nuevas modificaciones. Ello demuestra, más que mil palabras, lo bien que actuó nuestro equipo negociador y lo moderado que fueron los cambios. Hacia fines de los 90 la reforma laboral tenía casi una década de vigencia.

AL MAESTRO CON CARIÑO

A principios de 1991 —el primer año pasó volando— yo escribía que Chile había «conjurado una doble amenaza: la proveniente de los proyectos primitivos del gobierno en materia tributaria y laboral». Agregaba que «las concepciones originales de ambas reformas, que sufrieron importantísimas alteraciones durante la tramitación legislativa, constituían objetivamente un lastre para el desarrollo y hubieran herido letalmente al sector productivo».

Con ocasión de un seminario, a mediados de año apareció en Chile el profesor Arnold Harberger, el «padre» de los *Chicago boys*. Y cuando sus alumnos esperaban que avalara sus críticos puntos de vista que demolían el manejo del gobierno, Harberger sorprendió a todos con su respuesta: ¿Qué nota le pone al manejo económico?

—Un 6,7. Chile mantiene la mejor economía del mundo.

Yo, más que rápido, publiqué un artículo llamado «La opinión del maestro», en el cual, apoyándome en las declaraciones de Harberger, planteaba que la centroderecha debía convencerse de que la «apropiación» por parte de los adversarios de nuestro pensamiento económico era un éxito y no una derrota: no nos habían «robado banderas» ni nada parecido («no hay mayor triunfo político que la adhesión de los rivales»). Si queríamos que la economía de mercado fuera un proyecto nacional, es decir de todos, no podíamos pretender administrarla en exclusiva: algunas veces los conductores serían nuestros adversarios.

Frente a los que nos reclamaban «más perfil opositor», nuestra respuesta era que una crítica de Renovación implacable tendría sólo efectos negativos: no lograría que se enmendasen rumbos

(nadie le hace caso a quien lo insulta); perdería credibilidad al pronosticar catástrofes inexistentes y, por su influencia generaría incertidumbres empresariales que afectarían al sistema en su conjunto.

Mientras tanto, en mi interior, cruzaba los dedos.

Poco a poco y con el tiempo hasta los sectores dirigentes más críticos a nuestra política empezaron a alabar «el clima de estabilidad que vive el país». Era una alabanza algo incoherente: no se podía elogiar la estabilidad y al mismo tiempo repudiar los acuerdos que la generaban.

Hacia el final del gobierno de Aylwin el balance era el siguiente: la economía creció a un promedio del 7%; la inflación, también en promedio, había sido de un 17% y declinaba; el desempleo descendió por debajo del 6%; el ahorro se mantuvo en torno al 24%. En el cuadrenio 1990-1994 la pobreza se redujo de un 38.6% a un 27,5% y la indigencia —que describe la situación de quienes apenas sobreviven— había disminuido desde un 12,9% a un 7,6%. Era cierto que el escenario interno había sido muy positivo y que ninguna crisis foránea nos había impactado. Era cierto que las cosas podrían haber sido aún mejores con un gobierno más convencido de las aptitudes del modelo y más imaginación para innovar pero lo concreto es que los resultados eran buenos y los malos augurios se habían desvanecido.

Más importante aún: la gestión modernizadora del gobierno militar, que era la base de esos resultados, no sólo no se había erosionado, sino que estaba más firme que nunca.

Capítulo XII

EL VIRUS DE LA INTOLERANCIA

Durante mucho tiempo, todos los 31 de diciembre, pocas horas antes de la llegada del Año Nuevo, llamaba por teléfono a mi padre un personaje a quien el resto de la familia conocía por su apodo: *Camión Petrolero.*

Lo hacía sólo para darle las gracias.

—Usted sabe, don Miguel, que estoy vivo por usted. ¡Ando de prestado!

Mi padre fue nombrado por el gobierno militar interventor de Indugas, una empresa metalúrgica que él había formado desde el primer ladrillo. A mediados de 1972, la industria fue tomada por sus trabajadores y pasó a formar parte del «área social». Indugas —incrustada en pleno cordón Cerrillos— se había ganado el prestigio de ser un nido de extremistas: semanas antes del Golpe, un grupo de sus trabajadores, usando una camioneta de la compañía, asesinó a un oficial de Ejército.

Pocos días después del Once, se presentó a Indugas una patrulla militar a cargo de un joven oficial. Le avisaron a mi padre cuando ya habían detenido a más de una docena de trabajadores y se aprestaban a subirlos a un vehículo.

—Señor interventor, tengo instrucciones de detener a esta gente. ¡Estos huevones son todos dirigentes comunistas! —dijo el oficial.

Para mi padre, que conocía por su nombre a todo el personal, casi ninguno le era familiar. Todos recién llegados… salvo el

Camión Petrolero, que se ganó el sobrenombre por la voz pastosa y llena de resoplidos de los que fuman 40 cigarrillos diarios.

—La mayoría no es de acá, pero al último de la fila —dijo mi papá— sí que lo conozco. Yo respondo por él. Tiene que haber un error en su lista. No es un huevón comunista. Es huevón no más.

¿Cuántas veces se repitieron incidentes similares? Las tragedias políticas, a diferencia de los terremotos, no afectan a todos por igual: sólo algunos las sufren. Los demás, al principio al menos, ni siquiera se enteran. Y no faltan, desde luego, los que debiendo saber, hacen lo imposible para no darse por enterados.

El tema de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile es complejo e ingrato. Complejo porque la verdad se aviene poco con las simplificaciones. E ingrato porque este capítulo representa el peor legado que dejó el proceso de división que vivió la sociedad chilena a partir de los años 60. Las atrocidades cometidas antes y durante el gobierno militar en esta materia no surgen de la mente extraviada de un extremista o de un sargento sádico. No hay que engañarse: responden a un fenómeno social extendido, al odio, a la intolerancia, al propósito de aniquilación del adversario, al afán de conquista del poder total, a la idea demencial de construir un Chile dejando literalmente fuera a una parte de los chilenos.

Fue en ese clima de odiosidad y confrontación donde se fraguaron los gérmenes del desprecio a la vida y a la dignidad de quienes no pensaban igual. Fue también en ese suelo donde creció el pasto de la ceguera y de la insensibilidad. Basta pensar en las palabras del presidente de la Corte Suprema, al inaugurar el año judicial de 1975:

—En cuanto a torturas y otras atrocidades, puedo afirmar que aquí no existen paredones y, cualquier información en contrario se debe a la prensa proselitista de ideas que no podrán prosperar en nuestra patria. La Corte de Apelaciones de Santiago y esta Corte Suprema, han sido abrumadas en su trabajo con los numerosos recursos de amparo que se han interpuesto, so pretexto de las detenciones que ha decretado el Poder Ejecutivo.

Y luego una frase increíble:

—Esto ha traído perturbaciones quitando a los tribunales superiores la oportunidad para ocuparse de asuntos urgentes de su competencia.

Otro presidente de la Corte Suprema diría años más tarde que el asunto de los detenidos-desaparecidos lo tenía «curco».

Luego, por supuesto, la evidencia fue apareciendo.

Irrefutable.

Cancha rayada

—No acostumbro a amenazar a nadie. Yo sólo advierto una vez. El día que me toquen a alguno de mis hombres, ¡se acabó el estado de Derecho! No lo repito más, pero sepan que va a ser así. ¡Bien clara la cosa!

Esa fue la advertencia de Pinochet en octubre de 1989.

El programa de la Concertación ayudaba poco:

«El gobierno democrático promoverá la derogación o nulidad del decreto ley sobre amnistía de 1978».

Y había otro grave problema: el primer gobierno democrático partió con 397 denominados presos políticos, provenientes en su mayoría de la extrema izquierda. Sobre muchos de ellos era atendible la duda sobre si habían sido juzgados y condenados con la garantía del debido proceso que asiste a todo ciudadano, más allá de si es inocente o culpable.

El cuadro, al otro lado del espectro, era tremendamente asimétrico: ningún agente de los servicios de seguridad del régimen militar estaba en prisión.

Era necesario rayar la cancha. Pero, ¿cómo abordar el tema?

Un artículo de Gonzalo Vial publicado allá por 1985 me había causado gran impacto. Bajo el título de *Como un cáncer,* el comentario partía haciendo notar que los regímenes políticos eran juzgados con distinta vara por los contemporáneos y por la historia. Los primeros eran sanguíneos y superficiales en sus juicios; la segunda corregía tales deformaciones. Sin embargo,

destacaba que en el ámbito ético el juicio de la posteridad era aún más duro y allí había que ubicar toda la gama de crímenes detestables —un cáncer social— que habían tenido lugar durante el régimen militar, cuya gravedad y falta de esclarecimiento empañaban irreparablemente una gestión exitosa en tantas otras esferas. Pero aún más, si el sentido mismo del Once había sido impedir a tiempo las atrocidades propias de los regímenes comunistas, ¿cómo incurrir en la misma conducta?

El enfoque era correcto: cohonestar los abusos en materia de derechos humanos no era ser fiel al Once de Septiembre. Era traicionarlo.

El problema era que en el mundo de la derecha las violaciones a los derechos humanos —salvo contadas excepciones— habían sido primero negadas, luego minimizadas y, por último, con diversos argumentos, excusadas. Pero todas las «justificaciones» laboriosamente construidas se derrumban como un castillo de naipes al primer análisis objetivo.

De partida, la «inevitabilidad» de los abusos era relativa. Es efectivo que cuando se combate con la vida de por medio se producen abusos, pero ¿cómo calificar de «inevitables» asesinatos como el de Carlos Prats, Orlando Letelier, Tucapel Jiménez, el brutal atentado a Bernardo Leighton o la *razzia* sistemática —durante años— en contra de dirigentes del PS y el PC? La tesis de que «estábamos en guerra» era igualmente inaceptable, incluso dando por sentado que había existido tal guerra: la más encarnizada de las guerras no autoriza para torturar o ejecutar sin proceso. Ahí estaba la «caravana de la muerte» del general Arellano Stark, con su reguero de fusilamientos y ejecuciones. ¿Cómo siquiera explicar algo tan horrendo? El argumento de «ellos o nosotros» no sólo era malo sino además peligroso: equivalía a admitir que no había diferencias entre «ellos y nosotros». ¿Qué distingue a un terrorista que pone una bomba de un agente de seguridad que, luego de apresarlo, lo asesina?

Otra coartada era la que obligaba a analizar al gobierno militar en «paquete». Según esta línea, el gobierno militar era una unidad indivisible: el Golpe, la transformación económica, el

modelo institucional y los problemas de derechos humanos no admitían evaluaciones aisladas. O a favor o en contra. En paquete.

La negativa a separar el juicio en distintas áreas tenía un trasfondo que a mí siempre me pareció inmoral: subliminalmente se sugería que el precio a pagar por los aspectos positivos del régimen eran los abusos a los derechos individuales: «Costos fijos, fijos son». De esta forma, estar «agradecido» por la acción liberadora del Once, aprovechar las oportunidades empresariales o simplemente disfrutar del orden, llevaba de la mano, como contrapartida obligada, una mirada condescendiente sobre abusos injustificables.

Es cierto que la comunidad internacional siempre tuvo respecto del régimen militar una mirada sesgada y desbalanceada. Algunas naciones que se erigían como nuestros Catones, tenían una trayectoria negra en el respeto a los derechos humanos y algunos de los críticos «locales» más enconados habían sido furiosos revolucionarios hasta hacía pocos años.

La paradoja era que a Chile lo «perjudicaba» su historia democrática y el prestigio de nación apegada al Derecho. Más de una vez lo escuché en el extranjero: a Chile no se le medía comparándolo con las naciones menos desarrolladas sino con los niveles más exigentes. Para Chile tampoco valía aquel argumento tan usado —en voz baja— por tantos regímenes autoritarios en orden a que grupos enquistados en sus cuerpos militares eran los que cometían las tropelías. ¿Grupos apartados de la disciplina en un ejército como el chileno? Impensable.

En todo esto también estaba la zona oscura de la autonomía de los servicios de seguridad. En las autocracias, la represión parte como objetivo acotado, a poco andar adquiere una dinámica difusa y al final se convierte en una compulsión paranoica que reconoce en la realidad la trama de una gran conspiración. Así ocurre siempre.

VIENTOS Y TEMPESTADES

¿Debíamos los partidarios de la intervención militar pretender que ésta se llevara a cabo con traje de etiqueta? Ciertamente

no. No se trata de eso. Ello habría sido una expresión de cinismo. Una intervención militar —especialmente cuando enfrenta fuerzas que durante años se pavonearon de su poderío— es inseparable de grados de violencia. ¡No hay revoluciones de guante blanco!

De ahí viene la legitimidad moral de la amnistía, que siempre ha sido el camino —duro y amargo, pero inevitable y necesario— para que sociedades desgarradas por el enfrentamiento alcancen la reconciliación. Hay una expresión española que define como ninguna el concepto: «pasar página». Los países que superan regímenes autoritarios siempre recurren a alguna forma de amnistía que deja atrás un pasado donde se mezclan culpas y responsabilidades. La política es el arte de combinar ideales y objetivos a veces contrapuestos. A un lado la verdad y al otro la reconciliación; a un lado la justicia y al otro la paz.

En el caso chileno, la amnistía estaba en vigor desde 1978 y sus efectos jurídicos ya se habían producido de manera irreversible. Los hechos ocurrieron una década y media antes. ¿Cuánto se podría avanzar con la reapertura de los procesos? ¿Qué posibilidades reales habría de imponer sanciones a los culpables?

Rivadeneira tenía, además, un argumento que hacía fuerza.

—¿Sabes lo que va a pasar si se deja sin efecto la amnistía? Se va a cometer de alguna forma una injusticia. Se va a llegar al sargento tal o al teniente cual y se les va a sindicar como autores materiales de graves crímenes. Pero aquellos que daban las órdenes seguirán intocables.

Aquí surge el primer marco para dividir las aguas: gran parte del problema era cómo la derecha debía juzgar las gravísimas violaciones a los derechos humanos. ¿Reconocerlos como tales o negarlos aun frente a una montaña de evidencias? ¿Censurarlos o avalarlos como inevitables? ¿Condenarlos con claridad o darles cobertura moral y política?

Nunca he tenido duda: lo correcto era admitir lo que estuvo mal, no justificar lo injustificable y asumir nuestra responsabilidad política reconociendo que nuestra voz —como derecha— brilló por su ausencia durante un tiempo demasiado largo. ¿No le exigíamos a diario a la izquierda que reconociera que su conducta

había erosionado la democracia y gatillado —ella antes que nadie— la violencia? Tampoco se trataba de equiparar responsabilidades. La de ellos era ¡mucho más alta! La izquierda sembró los vientos, pero, ¿y nosotros no teníamos ninguna culpa en nada de lo que había pasado?

Desde siempre le he atribuido a tal reconocimiento una enorme importancia. Aunque duela admitirlo, demasiada gente en la derecha aún piensa —aunque no lo diga en público— que lo ocurrido no estuvo mal, que fue necesario o que, como a veces he escuchado, «fueron pocos los que cayeron» o «¡qué tanto se quejan, cuenten los muertos en otros países!». Creo que hay que erradicar estas visiones. ¿Qué se desprende de ellas? En el fondo, que no hay censura a lo ocurrido.

El reconocimiento de los agravios cometidos favorece el perdón y el perdón hace más fácil el olvido. La reconciliación exige cerrar heridas, sellar con cicatrices. Pero, ¿cómo se le pide al agraviado que busque paz en la amnesia sin que nadie le diga, desde el frente, que al menos lamenta lo ocurrido? ¡Hay que ayudar a olvidar!

Sin embargo, y por lo mismo, el respeto a la ley de amnistía era también nuestra definición y raya divisoria. ¡El propio gobierno la había dictado en 1978! Su sola dictación reconocía que las situaciones anormales de conflicto habían quedado atrás. Y en el caso de los detenidos-desaparecidos —más allá de los tecnicismos acerca de si el secuestro es o no un delito permanente— siempre estaríamos por reconocer el derecho de las familias de las víctimas a honrar a sus muertos y exigir información acerca del lugar donde reposan sus restos.

Pisagua quiebra el marco

Apenas asumió, el gobierno de Aylwin lanzó una amplia iniciativa legal: rebajar las penas de diversos delitos que estaban contemplados en leyes especiales —antiterrorista, de seguridad del Estado y de control de armas—, agilizar los juicios para los

«presos políticos», suavizar la ley antiterrorista y derogar la pena de muerte. Los periodistas las bautizaron como «leyes Cumplido» en referencia al nombre del ministro de Justicia.

El propósito concreto era obtener la libertad de los llamados «presos políticos», categoría que el gobierno daba a los integrantes de los grupos subversivos apresados durante el régimen militar por delitos que iban desde asesinatos de carabineros a figuras menos graves, como el auxilio médico a extremistas.

—¡Es absurdo! No podemos aceptar una rebaja de penas generalizada que beneficie para adelante a los delincuentes y terroristas —me dijo Alberto Espina camino al Congreso donde la discusión de estas leyes ya había comenzado.

—Habla con Ricardo Rivadeneira y veamos si podemos proponer una solución de fondo.

Así, de la pluma de Rivadeneira surgió un documento denominado Acuerdo Marco. El texto distinguía entre hechos de violencia anteriores a marzo de 1990 y posteriores a esa fecha. Hacia atrás, establecía una rebaja de penalidades que en la práctica terminaba con los juicios que afectaban a los extremistas encarcelados y al mismo tiempo beneficiaba a los agentes de seguridad involucrados en casos de represión, con la salvedad de los autores de asesinatos. Hacia adelante, a diferencia de lo que pretendía el gobierno, se establecían duras sanciones para los culpables de actos terroristas.

El Acuerdo Marco lograba un equilibrio entre la necesidad de avanzar en la reconciliación y el deber de administrar justicia. ¡Era ni más ni menos una extensión de la amnistía!

Alberto Espina inició el trabajo para que la fórmula fuera acogida. El gobierno, a través de los ministros Cumplido y Boeninger, le dio su visto bueno. Otro tanto hizo el Ejército.

—¿Salen libres los del atentado en mi contra? —preguntó Pinochet cuando fue consultado.

—A la larga, sí. Salen todos, pero esto también ayuda a su gente —fue la respuesta de Espina.

El fiscal Torres Silva objetó el acuerdo y defendió a brazo partido a la justicia militar negando toda irregularidad en sus procedimientos.

—Mi general, deje las cosas como están —fue su consejo.

—Si la fórmula ayuda a arreglar el problema, yo no pongo inconveniente —dijo Pinochet ante la mirada atónita del fiscal Torres.

El Acuerdo Marco fue suscrito en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a mediados de junio de 1990: además de los parlamentarios de RN y la UDI, firmó toda la Concertación. El presidente de la República —anticipando el previsible efecto en la izquierda— ordenó al ministro Cumplido que sólo lo aceptara si había unanimidad. Y la hubo. Todo estaba bajo control.

O casi todo. Porque precisamente en ese momento se produjo un horrendo hallazgo: en Pisagua fueron descubiertas fosas con restos de ejecutados. La exhibición de esas imágenes en la televisión produjo consternación nacional y reacciones políticas: el PS se descolgó del acuerdo y el PDC se dividió. A los pocos días, toda la Concertación abandonaba el Acuerdo Marco. La primera oportunidad para resolver los complejos problemas de derechos humanos se había desvanecido.

Indultos para la paz

Hacia fines de 1990 la situación era de bloqueo: las leyes Cumplido, en su versión original de rebaja generalizada de penas, fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, pero no tenían mayoría en el Senado. La ley antiterrorista que el país necesitaba tampoco mostraba progresos.

El 25 de octubre Alberto Espina entró a mi oficina luego de una larga reunión con Jarpa.

—Don Sergio nos va a proponer modificar la Constitución para darle a Aylwin la facultad de indultar a los terroristas presos.

¿En qué estaba pensando Jarpa?

—Si el gobierno quiere liberar a quienes han cometido actos terroristas debe asumir la responsabilidad de su iniciativa y sus consecuencias. Facultar al presidente para que los indulte

sirve al objetivo de la reconciliación, a solucionar los problemas del país y a promover la unidad nacional —explicó.

Sin duda era una medida audaz pero no resultaría gratis: se opondrían el Ejército y la UDI y, en general, amplios sectores de la opinión pública difícilmente entenderían nuestra motivación.

—¿Hay piso para empujar una cosa así? —pregunté.

—Se van a tener que jugar Jarpa y tú. Y si agregamos que la facultad de indultar sea transitoria y aplicable sólo a hechos anteriores a 1990 podría aprobarse —contestó Alberto.

—Yo apechugo. Esto es clave para sacarle una bomba de tiempo a la transición. Pero, prepárate, porque nos van a sacar los ojos.

La tramitación interna de la iniciativa enfrentó resistencias pero fue aprobada por los organismos del partido. Luego me entrevisté con Aylwin en La Moneda para proponérsela formalmente al gobierno.

—Yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad que Renovación Nacional me entrega. Lo agradezco ya que permite solucionar una grave dificultad para el país —dijo el presidente.

El día que se debía votar en el Congreso Pleno se produjo un altercado en nuestra sala de senadores.

—Voy a votar en contra de la reforma —anunció Hugo Ortiz—. ¿Por qué tenemos nosotros que andar arreglando problemas que no son nuestros? Varios senadores tenemos la misma posición. ¡Y no aceptamos órdenes!

—¡Qué se ha imaginado! —lo cortó Jarpa en seco—. ¿Somos o no somos un partido? ¡Aquí el que no acepta las decisiones del partido se manda cambiar!

El Congreso Pleno aprobó la reforma por 131 votos a favor y 23 en contra y una abstención… de María Angélica Cristi. Todos los demás RN apoyaron. La UDI votó como tabla en contra y los institucionales se dividieron: a favor lo hicieron Olga Feliú, William Thayer y Carlos Letelier; en contra Sergio Fernández, Vicente Huerta, Ricardo Martin, Ronald Mc-Intyre y Santiago Sinclair.

Fue en ese momento cuando Jaime Guzmán pronunció su célebre discurso rechazando el proyecto con facultades de indulto. Sería el último de su vida.

La comisión Rettig

A principio de su gobierno y en paralelo con las leyes Cumplido, Aylwin personalmente se abocó a la iniciativa de formar una comisión para establecer la verdad de lo ocurrido en Chile en materia de derechos humanos. El decreto que la creó la denominó Comisión de Verdad y Reconciliación, pero a poco andar pasó a ser conocida por el apellido de su presidente, Raúl Rettig.

Dentro del partido las opiniones estaban divididas. Había quienes creían que debíamos descalificar la comisión de plano y los que creíamos que eso sería un error. ¿De qué otra forma podría abordarse el tema? Un elemento influía en nuestra gente: el mensaje del Ejército era rechazar la comisión, restarle personería y no brindarle por ningún motivo legitimidad.

La directiva preparó un documento que hizo llegar reservadamente al propio presidente Aylwin. Nuestras observaciones se referían al período histórico del análisis de la comisión, ya que no considerábamos razonable que el punto de partida fuera 1973 sino, al menos, 1970. Hacíamos ver que la comisión no debería invadir facultades de los tribunales de justicia. Señalábamos que debían considerarse violaciones a los derechos humanos tanto las perpetradas por servicios de seguridad como por grupos terroristas, y que debía buscarse una «verdad innominada», esto es, ajena a identificar individualmente a eventuales culpables, puesto que de este modo podría burlarse la amnistía y abrir paso a una cadena interminable de represalias y contrarrepresalias.

Si bien Aylwin —según lo supimos después— tomó en cuenta varias de nuestras reflexiones, descartó de plano nuestra idea de un plazo anterior al golpe. La competencia abarcaría el período entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, vale decir, exclusivamente el gobierno militar.

Aylwin fue cuidadoso al escoger los nombres de la comisión. Puso a Raúl Rettig a la cabeza e incorporó a Jaime Castillo y José Zalaquett, ambos de innegable trayectoria en las organizaciones de derechos humanos. Llamó a Laura Novoa, Mónica Jiménez y al constitucionalista José Luis Cea, todos de gran prestigio. Y como todavía esos nombres no aseguraban la pluralidad necesaria incorporó el senador institucional y ex ministro de la Corte Suprema, Ricardo Martin, y al historiador y ex ministro de Educación Gonzalo Vial Correa. Como secretario ejecutivo fue designado Jorge Correa Sutil.

Al interior del partido no prosperó la tesis de los que querían que se descalificara *a priori* el cometido de la comisión; al revés, se impuso la idea de hacerle llegar nuestros puntos de vista y la directiva en pleno acudió a la comisión en junio de 1990. Una de las páginas más tristes de la historia de Chile emergería de su informe meses después.

¿Cuánto vale la transición?

Era previsible que entre las Fuerzas Armadas y el gobierno surgieran, como en toda transición, tensiones. «Turbulencias» en el lenguaje de Boeninger; «reventones», en la terminología de los cuarteles.

Ningún analista podría haber previsto el origen de la primera crisis, que no surgió ni por problemas de derechos humanos, ni por citaciones a los juzgados, ni por fricciones políticas entre el Ejército y el gobierno.

Surgió por tres cheques girados por el Ejército a nombre de un hijo de Pinochet —Augusto—, por una cifra cercana a los 972 millones de pesos.

La noticia la tuve cuando Francisco Javier Cuadra me invitó, junto a Alberto Espina, a comer a su casa con el general Jorge Ballerino y el abogado-coronel Juan Romero, para tratar un tema «castrense de gran importancia».

Ballerino y Romero nos explicaron que estaba en marcha

una maquinación con el objeto de «enlodar a la institución» y «desprestigiar políticamente al general Pinochet», cosa que el «Ejército por ningún motivo iba a aceptar». El tono era limítrofe con la amenaza.

¿Cuál era el problema?

En el curso de 1988-1989, en una operación oscura y llena de irregularidades, el Ejército compró acciones de una sociedad denominada PSP, que previamente había adquirido la empresa Valmoval, destinada a fabricar fusiles de guerra. Para esta operación, PSP obtuvo, en un procedimiento marcado por el tráfico de influencias, cuantiosos créditos de CORFO y el Banco del Estado. El precio cancelado por el Ejército se giró nominativamente en tres cheques a la orden del hijo del general, quien supuestamente habría actuado sólo como mandatario de los vendedores.

Cuando la situación se reveló, la Cámara de Diputados formó una comisión investigadora. Y a medida que la investigación avanzó, la situación se fue complicando. Los militares que asistían entregaban versiones parciales, contradictorias y en algunos casos inverosímiles. Toda la investigación se orientaba a determinar el grado de conocimiento que Pinochet pudiera haber tenido de la participación de su hijo Augusto en la operación, ya que de ello podría derivarse no sólo responsabilidad administrativa, sino incluso penal.

Alberto Espina me trasmitía su preocupación por el rumbo de la investigación, por la poca colaboración del Ejército y por las pistas que nuestra propia acuciosidad dejaba al descubierto. Efectivamente algunos de los militares interrogados faltaban a la verdad. Espina y los diputados RN de la comisión investigadora, llegaron a la convicción de que el asunto no podía ser más turbio, que la participación del hijo de Pinochet y de varios oficiales de Ejército era inaceptable dentro de principios éticos elementales, pero también que no había pruebas suficientes para formarse igual convicción respecto del conocimiento del general Pinochet de los hechos.

—El viejo no está metido —me dijo Alberto—. Son otros los que se robaron la plata. A él lo vamos a defender. Y todavía

estoy impresionado por lo que me dijo cuando lo visitamos en Bucalemu.

—¿Qué cosa? —le dije.

—Nos preguntó a Raúl Urrutia y a mí si teníamos hijos. Y después ¿sabes lo que nos dijo? Nunca escupan al cielo. Esas fueron sus palabras.

Hacia fines de enero de 1991, la comisión investigadora redactó un informe muy deslavado. El papel de la Cámara como ente fiscalizador fue triste ya que el ruido había sido mucho y las nueces pocas, ya que nadie se atrevió a hacerlas crujir. El gobierno presionó directamente a los parlamentarios de la Concertación en la redacción de las partes más espinudas del informe y la inteligencia de Enrique Correa inventó un término elusivo para justificar el ablandamiento.

—Hay que «contextualizar» el informe en el marco más amplio de la relación de las Fuerzas Armadas y la civilidad —era su insistencia. No se trataba de majadería de su parte: había algo perentorio tras su demanda.

En la mañana del día que debía votarse el informe de la comisión, todavía se trabajaba en la redacción de las conclusiones. Eran seis y la última se refería al general Pinochet. El texto era el siguiente: «Que existen antecedentes relativos al conocimiento por parte del comandante en jefe del Ejército de la existencia de la empresa PSP S.A. y su relación con el Ejército de Chile; también existen antecedentes que indican que las facultades del comandante en jefe respecto de la administración, adquisición y enajenación de bienes de cualquier especie pertenecientes a dicha institución estaban delegadas en la vice comandancia en jefe; y, que, no es posible aseverar que el comandante en jefe del Ejército tenía conocimiento de la participación de su hijo en los hechos materia de esta investigación».

En la presidencia de la Cámara estaban reunidos José Antonio Viera-Gallo, el ministro Correa y el grupo redactor y, al teléfono —con parlante abierto— el general Ballerino.

El informe final queda con sólo cinco conclusiones. Al general Pinochet no se le menciona.

—La transición vale más de tres millones de dólares —concluye Enrique Correa.

Entre líneas

¿Qué había pasado? ¿Por qué el gobierno era el principal interesado en licuar el informe de la comisión?

Hacia fines de 1990 —pocas semanas antes— el panorama era crítico para el Ejército y el comandante en jefe: el Informe Rettig estaba *ad portas* y la comisión de la Cámara de Diputados parecía haber acumulado evidencias contra Pinochet. El general Ballerino habla con Jarpa y le pide que explore con Aylwin una salida política. No se menciona cuál, pero no hace falta: la situación de Pinochet se hace insostenible.

Jarpa habla con Aylwin. Nadie lo podría haber hecho mejor. No es necesario haber estado ahí para saber cómo se desarrolla la audiencia. Largos rodeos, frases que insinúan más que afirman, pausas que hablan, todo se subentiende entre líneas. Son los códigos de dos maestros de la política. Zorros viejos. El mensaje ha sido eficazmente transmitido. El presidente recibirá al general Pinochet. Jarpa preparó el camino. Será Pinochet quien toque el tema; Aylwin estará bien dispuesto.

El presidente recibe al general el martes 18 de diciembre en la mañana… en su propia casa. La Moneda puede tensar el ambiente y el ideal es que la atmósfera otorgue confianza. Jarpa espera en su oficina de Antonio Varas.

Al cabo de un par de horas, suena el teléfono.

—Don Sergio —anuncia agitada una secretaria—. Lo llama el presidente Aylwin.

—Buenos días, Sergio Onofre. Estuvo por acá el general, como usted me había pedido. Conversamos harto rato, pero no hablamos del tema.

Jarpa se sorprende. ¿Cómo que no hablaron del tema? Algo debe haber pasado.

—Ubíqueme a Ballerino —ordena Jarpa a otra secretaria.

—Es cierto —le confirma Ballerino.

—No entiendo nada —dice Jarpa, empezando a asumir que quizás ha jugado un papel absurdo.

—Mi general dice que el presidente no le dio lado —atina a explicar Ballerino.

Jarpa se encoge de hombros. Yo pienso ¿quién tenía que darle lado a quién?

Aylwin y Jarpa, socios de operaciones exitosas y fracasadas, cómplices de silencios, alternativamente aliados y adversarios, no volverían a hablar del tema.

Los acontecimientos ya vienen con vértigo.

El ministro de Defensa, Patricio Rojas, informado de lo ocurrido y viéndose a sí mismo en un papel indecoroso, cita a Ballerino. ¿Cómo puede estar planteándose la salida de Pinochet a sus espaldas? Según Ballerino, Rojas le exige la renuncia de Pinochet antes del 15 de abril de 1991. Según Rojas, él jamás formuló tal petición.

Los críticos de Rojas sostienen que el ministro calibró mal la situación de Pinochet y quiso colgarse una medalla: la de haber conseguido que Pinochet se fuera. Pensó que sólo faltaba un pequeño empujón. Si así fue, se quedó con las ganas.

Los críticos de Ballerino afirman que fracasada la gestión directa Pinochet-Aylwin, Ballerino calibró bien la situación: Pinochet no cedería y en horas pasó de favorecer su salida a constituirse en el principal defensor de su permanencia al frente del Ejército.

El mismo día —19 de diciembre— un titular de *La Segunda,* a partir de una información obtenida en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, irrita sobremanera a Pinochet: siente que alguien azuza los perros tras él.

El país aprecia un inusual movimiento militar en todo el territorio. No es un golpe ni una sublevación sino una feroz advertencia. Algún genio descubre en algún polvoriento reglamento un eufemismo inigualado: no es una asonada, no es un movimiento, no es un acuartelamiento, no es ni eso ni lo otro, es un «ejercicio de alistamiento y enlace». La primera gran crisis de la transición ha estallado.

Sin embargo, el «ablandamiento» del informe sobre los «pinocheques» fue sólo uno de los efectos de esa acción militar.

En perspectiva, el más importante de todos fue que el Ejército pudo comprobar la vulnerabilidad del gobierno y de la propia Concertación al lenguaje de la fuerza. Sin disparar un solo tiro —el movimiento duró menos de 24 horas— el Ejército cambió el paisaje político. También emergió un aspecto perturbador: situaciones familiares del general Pinochet serían elementos a considerar en el futuro proceso político.

Por último, se reiteraba una constante de la vida política de Pinochet: de episodios de gran debilidad emergía fortalecido. Su sexto sentido es el instinto del poder.

Navidad en La Habana

Supe del «ejercicio de enlace» en el lugar menos pensado: Cuba. ¿Cómo habíamos llegado a La Habana?

Varios meses antes, Soledad Correa llamó a la Bárbara para decirle que estaba en Chile un reputado neurólogo cubano, Lázaro Álvarez, atendiendo de una dolencia en el cuello a Angélica Délano, entonces casada con Carlos Cardoen.

—Le he pedido a Lázaro que examine a Juan Andrés. Va para tu casa con un chofer —le dijo a la Bárbara.

Mi mujer agradeció el gesto y al rato apareció quien con el tiempo se transformaría en uno de los mejores amigos de nuestra familia.

El diagnóstico fue coincidente. Juan Andrés tenía graves secuelas del accidente. La novedad estuvo en otro lado.

—Lleven el niño a Cuba. Allá podemos ayudarlo.

La Bárbara y yo nos miramos agradecidos pero conscientes de lo que eso significaba. Le expliqué a Lázaro un poco quién era y cuál era mi posición política. ¿El presidente de RN en la Cuba de Fidel?

Lázaro no dijo nada, pero al cabo de un par de meses recibimos una invitación formal del propio Fidel Castro para viajar

con Juan Andrés a Cuba y ver en el terreno sus posibilidades de recuperación. Resolvimos partir. Agradecidos, intrigados y… muy nerviosos. Las familias que han pasado por situaciones como la nuestra saben que hay una sola tranquilidad: intentarlo todo.

Desde la llegada al aeropuerto José Martí noté que nos recibían con especial deferencia. A la salida del avión estaba el mismo Manuel Piñeiro, el famoso y temido *Barbarroja,* mentor de cuanto movimiento guerrillero comunista había azotado América Latina en las últimas décadas.

—¿Quién es? —me preguntó el neurólogo chileno, Bolívar Valenzuela, que nos acompañaba.

—Es un funcionario de Relaciones Exteriores. Está casado con una ensayista chilena, Marta Harnecker —preferí contestar ateniéndome estrictamente a la verdad… pero muy parcial. Tampoco le dije que era una eximia divulgadora del marxismo, discípula de Althusser y que su libro sobre el materialismo histórico se leía como manual de cortapalos en los cursos de adoctrinamiento del comunismo latinoamericano.

La Navidad de 1990 no pudo ser más triste. Las niñitas y Raimundo se habían quedado en Chile y nosotros pasábamos las horas entre hospitales y centros médicos, asomándonos a un mundo desconocido… pero amable hasta la exageración. Para peor, en Cuba la Navidad no se celebraba. La ciudad, bella como pocas, pero a mal traer, no tenía un solo adorno navideño. La Habana se veía desolada.

El mismo día 24, como a las 9:00 de la noche, apareció en la casa donde nos alojábamos la directora del Centro Médico a cargo de Juan Andrés.

—Acaba de llamar el comandante y avisa que viene a visitarlos para preguntar por el niño y conocerlos —nos anunció agitada.

Al rato, con un gran despliegue de seguridad, apareció Fidel Castro.

Muchas veces había pensado cómo sería toparse de frente con una figura histórica y, en términos políticos, con un adversario

mítico. Si hay un personaje que concentra, por muy razonables motivos, la animosidad —cuando no el odio— unánime de la derecha chilena es precisamente Castro. Jamás habría pensado que la vida nos pudiera cruzar.

Fidel Castro saludó muy formalmente. Sus gestos son parsimoniosos. Habla como meditando en voz alta.

—¿Puedo conocer al niño? ¿O ya está durmiendo?

—Todavía está despierto —le dijo la Bárbara.

Castro se pasó la siguiente hora y media preguntando por el accidente e interrogando a los médicos del centro que —enterados de la visita— habían aparecido en bloque. Fue impresionante ya que demostró no sólo genuino interés sino conocimientos médicos inusuales.

Cuando estimó que el extenso interrogatorio había concluido —para alivio de los médicos— casi excusándose le dijo a la Bárbara.

—Lamento haber llegado tan de improviso, pero he ordenado algo de comida y un pastel para que compartamos con los compañeros del Centro. Además, me imagino que acá habrá algún pisco sour o un buen vino tinto. ¿O esta familia no es chilena?

La comida se prolongó hasta las 5:00 de la mañana. Al principio en torno a una mesa, donde uno de sus ayudantes instaló una grabadora de bolsillo. Al rato, bastó un ademán de Castro para que fuera retirada. Demás está decir que fue una de las conversaciones más interesantes de mi vida. Los temas: todos. El mundo, Estados Unidos, la revolución, la Unión Soviética, Chile y por supuesto Cuba, que ya estaba en una situación crítica— el «período especial»— al evaporarse la ayuda del bloque soviético.

—¿Qué transformación es esa que va a terminar con la URSS (nadie allá hablaba de Rusia) desintegrada? *La perestroika* terminará «caotizando» todo— opinaba Castro.

Y los temas más disímiles. Uno insólito:

—¿Me podrías hacer un favor la próxima vez que vengas? —me dijo— ¡A Anselmo Sule siempre se le olvida!

—¿De qué se trata?

—¿Me podrías traer una caja de kiwis? No de frutas, sino de

planticas para hacer unos cultivos y ver si se puede explotar agroindustrialmente. Estamos en «período especial».

Así lo hice meses más tarde. ¿Cómo conseguí las «planticas»? Me las regaló Evelyn Matthei de un vivero de su padre.

Y algo aún más increíble.

—¿Qué te parece el movimiento militar de hace unos días?

—No sé. No estoy muy informado —respondí cauteloso.

Y de golpe y porrazo.

—¿Tú crees que Pinochet es corrupto?

Se produjo un silencio.

—No creo —contesté yo—. Quizás es simplemente débil con su familia.

—Yo tampoco creo que sea corrupto. ¿Sabes por qué?

Y antes que nadie pudiera esbozar palabra agregó:

—Pinochet es el líder de un gran ejército. El Ejército chileno está entre los más profesionales, preparados, combativos y disciplinados del mundo. Tiene una historia impecable. ¡Un ejército así jamás aceptaría a un líder corrupto!

Gracias a Cuba

Visitamos Cuba muchas veces y Juan Andrés logró notables progresos. Las autoridades cubanas tuvieron inmensos gestos de generosidad y amabilidad. Algunos de nuestros mejores amigos viven en La Habana.

Conocer Cuba fue una experiencia humana y política que nos marcó. En lo humano, tendría que ser un mal nacido para no estar siempre agradecido. Las atenciones que recibimos de parte de Fidel Castro, de dirigentes cubanos del más alto nivel, como Carlos Lage, Roberto Robaina, Ricardo Alarcón y Felipe Pérez, o de menor rango, como Emilio Vidal, amigo entrañable; de médicos, como el propio Lázaro, de personal paramédico, como Óscar, Miraida y Julio, que incluso vivieron con nosotros algunos meses en Chile, superan todo cuanto sea imaginable. Que Fidel Castro, apenas supiera que andábamos por

allá, invariablemente se dejara caer por la casa en que alojábamos —muchas veces sin que siquiera estuviera la Bárbara o yo— deja entrever un cariño sobrecogedor. ¿Cuántas horas el jefe máximo de la revolución cubana se ocupó personalmente de nuestro hijo? Muchas, más de lo cualquiera pudiera creer.

Gran experiencia humana fue también conocer gente a la cual quizás de otra forma nunca habría tratado.

—Oiga Andrés, sé que usted va mañana a Cuba. ¿Le importaría llevar un paquete para mi nieta? Son cosas chicas, jabón, pasta de dientes, shampú, pero que allá hacen tanta falta —me pidió una vez la propia *Tencha* Allende.

De cada uno de esos encuentros y conversaciones aprendí algo: una perspectiva distinta, un enfoque inadvertido. Si algo le hace mal a la democracia es la estigmatización de los adversarios y si algo le hace bien es la tolerancia.

En lo político también fue una experiencia fascinante. Tuve la oportunidad de adentrarme en los misterios de la revolución cubana y mirarla sin caricaturas. La experiencia cubana refleja como un espejo la tragedia del socialismo y en general de la izquierda: la incoherencia entre lo que persigue y los medios para lograrlo.

Un vez discutimos sobre el Estado. Mi argumento era que el error capital de la revolución era pretender organizar verticalmente la sociedad desde un Estado hipertrofiado.

—La revolución se hizo para dejar atrás el capitalismo— me dijo Castro.

—Así será, pero si quiere sobrevivir tarde o temprano deberá dejar atrás el socialismo.

Fidel Castro tiene respuesta para todo. Y además se ha leído todo. Es gallego, tozudo como nadie y vivo como el hambre. A veces creo que sabe que su modelo no funciona… pero que no encuentra cómo cambiar sin renegar de sí mismo, de los sueños alimentados desde la travesía del Granma y de los «principios de la revolución».

—Mira, chico, es interesante hablar contigo. Acá vienen dos tipos de personas: los que me vienen a adular y los que me vienen

a sermonear. ¡Y yo estoy muy viejo y tú muy joven para ambas cosas!

Ojalá Cuba encuentre luego su camino hacia la democracia y el respeto de los derechos individuales. Los cubanos no se merecen un régimen que está en la vereda de la historia, cuyos escasos éxitos no disimulan la profundidad de su fracaso y que— peor aún— les arrebata la libertad.

En cualquier caso, es una lástima que muchos no entiendan que Cuba cambiará en forma digna o no lo hará.

La verdad oficial

El 3 de marzo de 1991 se dio a conocer el Informe Rettig. Me impactó profundamente.

El relato pormenorizado de los métodos de tortura revela una jerga infernal: la «parrilla», aplicación de electricidad a un prisionero atado a un catre metálico; «colgamientos», suspensión de las víctimas de alguna de sus extremidades: «submarino», hundimiento de la cabeza del detenido en un recipiente con líquido sucio y su variante «submarino seco», con una bolsa plástica para generar la asfixia. Era espeluznante comprobar que, según la comisión, existió en el período 1974-1977 «un patrón de planificación previa y coordinación central que revelan en su conjunto, una voluntad de exterminio de determinadas categorías de personas», con lo que se aludía a los dirigentes del MIR, PC y PS.

En 1973 las Fuerzas Armadas tomaron rápidamente el control del país, no hubo verdaderamente focos de resistencia y las amenazas de grupos paramilitares sólo fueron bravatas. Era cosa de leer los números: las 2.279 muertes reportadas por la comisión (luego el número aumentaría en casi 900 casos): 1.068 víctimas de agentes del Estado, 957 detenidos desaparecidos y 90 víctimas de particulares actuando bajo pretexto político. Se sumaban 168 víctimas de violencia política, categoría que incluía 87 caídos durante 1973, 38 en protestas y 39 en enfrentamientos y otros.

La diferencia entre los caídos de uno y otro bando era gigantesca.

La Comisión incluyó en su informe un marco histórico —redactado por Gonzalo Vial— que dejó de manifiesto la enorme responsabilidad de la izquierda que con su radicalización provocó un «clima objetivamente propicio a la guerra civil» que prevalecía en el país al 11 de septiembre de 1973. El trabajo de los comisionados no invadió la competencia de los tribunales de justicia, se apegó a la idea de «verdad innominada» y acogió la tesis de que los actos terroristas son también violaciones a los derechos humanos, contrariando a los partidos de izquierda que insistían en que tal categoría sólo era aplicable a los agentes del Estado.

La polémica no se hizo esperar y las instituciones armadas —al igual que la Corte Suprema— rechazaron el informe… sin refutar sus hechos.

Después de que el presidente Aylwin se dirigió al país para dar a conocer el informe y luego de haber dicho lo que dijo —«yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas»— lo llamé por teléfono para felicitarlo. Había actuado con gran estatura.

Yo pensaba —y así lo declaré— que el informe iba a ser «devastador para la derecha».

Pero no fue así.

Jaime Guzmán

El día lunes 1 de abril de 1991 amaneció con la atención política vuelta a unas declaraciones de Luis Corvalán, quien había señalado que los comunistas debían mantener una estrategia militar «por si las moscas».

—Con la misma lógica del señor Corvalán, el gobierno debiera aplicarle la ley de seguridad del Estado y meterlo preso «por si las moscas» —contesté cuando me pidieron una opinión.

Fueron las últimas risas del día.

Horas más tarde alguien interrumpió la sesión de la comisión política de RN.

—¡Balearon a Jaime Guzmán! Está muy grave en el Hospital Militar.

Nunca fui amigo con Jaime Guzmán, pero nadie que lo conociera podía dejar de admirar su talento, penetrante inteligencia y simpatía. Ejercía en la UDI un liderazgo omnicomprensivo: líder, ideólogo, organizador, recaudador de fondos, filósofo, amigo, profesor, consejero matrimonial, asistente espiritual, sabelotodo, inspiración máxima.

Jaime tenía rasgos que habitualmente no van juntos. Por ejemplo, un humor muy notable (imitaba a la gente con la agudeza de un actor profesional) y una persistencia infinita. Cuando los demás creían que no valía la pena seguir polemizando, él estaba recién empezando. Manejaba maravillosamente sus tiempos personales y tenía la habilidad para hacer que los demás aceptaran sus mañas sin chistar. Como dormir siesta aunque el mundo se viniera abajo. ¡Si hasta se las arregló para convencer a Gabriel Valdés de que el Senado empezara a sesionar más tarde, después de almuerzo!

Jaime Guzmán tenía salidas únicas.

—Hay que desconfiar de la gente gorda —me dijo un día a título de nada.

—¿Por qué? —le pregunté a mitad de camino entre la risa y la sorpresa.

—Porque los gordos, salvo los enfermos, que son estadísticamente los menos, no tienen disciplina y no se quieren a sí mismos. Si tuvieran la primera o lo segundo no serían gordos.

Otro día las emprendió contra la lectura.

—¿Cuántas horas lees al día? —me preguntó.

—No sé, todas las que puedo.

—Es un error. De los 40 años para arriba uno aprende poco de los libros. Yo gasto más tiempo pensando que leyendo.

¡Y cómo lo hacía! Jaime razonaba bien hasta cuando estaba equivocado.

Una vez me preguntó por el rugby. Le intrigaba el reglamento

y lo comparaba con el del fútbol, deporte del que era árbitro aficionado.

Cuando le expliqué los fundamentos del juego los captó al vuelo y entonces su preocupación derivó hacia otro lado.

—¿Y es razonable golpearse de esa manera? Nada es más ajeno a mi forma de ser —me dijo.

—¿Cómo no? La política es mucho más dura —retruqué.

—La fuerza es la negación de la política.

—Seguro —dije para molestarlo—. Pregúntale a Pinochet.

—No te equivoques. La fuerza en la política nunca puede ser permanente y siempre hay que canalizarla hacia normas. Y Pinochet lo entiende mejor de lo que tú te imaginas.

Jaime tenía un tremendo coraje, pero distanciado de toda forma física. Cuando las discusiones subían de tono, se desarmaba. Ese no era su campo.

—¿Nunca te han agredido? —le pregunté una vez.

—Cada vez que me han insultado, jamás he pretendido defenderme a golpes. Los enfrento con calma y eso los desarma.

Desde el día que lo mataron, me pregunto qué sentirá aquel al que le han disparado. ¿Sorpresa, miedo, rabia? ¿Estupor, impotencia? Jaime —estoy seguro— alcanzó a darse cuenta de que lo iban a matar. Tenía una vida religiosa tan intensa que me lo imagino tranquilo, casi resignado en manos de Dios. Sus amigos dicen que estaba espiritualmente preparado para morir. No tengo dudas.

En muchos aspectos políticos teníamos claras discrepancias. De partida la Constitución de 1980, que Jaime veneraba. Nunca entendió mi aprecio por «los viejos políticos», a quienes tributaba apenas un respeto formal. Nuestro enfoque sobre la situación sobre los derechos humanos durante el régimen militar era muy disímil y, según él, yo vivía obsesionado con la idea de ser mayoría:

—Es un error. A mí nunca me ha preocupado mucho. Lo importante en política es influir.

La ruptura de RN nos distanció enormemente y alguna vez dije que Guzmán era tan altruista en sus objetivos como inescrupuloso

en sus procedimientos. Sin embargo, siempre le tuve respeto y admiré la entrega total por su causa.

Una personalidad única como la de Jaime habría seguido dejando huellas no sólo en la trayectoria de la derecha, sino del país. Es difícil adivinar los efectos políticos de largo alcance de su muerte trágica y prematura a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista. Dos efectos más contingentes quedaron claros inmediatamente. Su asesinato le inyectó un espíritu de misión enorme a toda la UDI y desvaneció parte importante del impacto que en caso contrario —creo— el Informe Rettig habría provocado en nuestra gente.

Heridas abiertas

Después del Informe Rettig y de la liberación por parte de Aylwin de los presos políticos, la caldera bajó de presión. Sin embargo, las heridas siguieron abiertas.

El propio Aylwin ofició a la Corte Suprema haciéndole ver que en su criterio la correcta interpretación de la amnistía exigía que los tribunales investigaran los delitos, incluyendo la identificación de los culpables, para sólo entonces dictar los sobreseimientos definitivos.

A contar de 1991 la interpretación de la amnistía sufrió vaivenes, pero en general la Corte Suprema se apegó al criterio tradicional. Pero aún así, el problema de los detenidos-desaparecidos no se extinguió. La razón es que al secuestro no se le aplica amnistía alguna.

A medida que avanzaba el gobierno de Aylwin fue quedando más en evidencia que el tema de los derechos humanos no había sido resuelto. Reaparecía como los brazos de una Medusa una y otra vez. El gobierno y los dirigentes políticos habíamos sido incapaces de arribar a una solución global. Argentina, Uruguay, Brasil y tantos otros países lo habían logrado ¿Por qué nosotros no?

En agosto de 1993, cuando ya se acercaba el fin del gobierno,

el cuadro se había tornado particularmente complejo. Centenares de militares eran citados a los tribunales, pero los juicios no avanzaban. El malestar en las Fuerzas Armadas y en las agrupaciones de familiares de las víctimas configuraba un círculo vicioso que nadie se atrevía a romper.

Aylwin resolvió entonces jugarse una carta final enviando al Parlamento un proyecto de ley para agilizar los juicios pendientes y evitar la publicidad de las diligencias a fin de impedir prejuzgamientos, lo que era un punto ultrasensible para los militares. El proyecto nombraba ministros en visita a cargo de los juicios, garantizaba a los testigos el poder declarar fuera de los tribunales y el secreto de la información que se aportara al proceso.

El proyecto tuvo efímera vida. El PS lo vetó de entrada argumentando que impediría conocer la verdad y determinar la identidad de los culpables y tampoco ayudaron los auditores de las Fuerzas Armadas que lo miraron con desconfianza.

El presidente admitió la derrota y paralizó la tramitación de la ley, pese a que se había jugado por ello, al punto que se le conocía por «ley Aylwin». El proyecto podría haberse aprobado con los votos del PDC y la oposición, pero consideró el costo demasiado alto: ahí se estaba jugando el quiebre de la Concertación.

Fue una mala señal. De ahí en adelante muchas iniciativas necesarias en esta materia se entramparían: los cálculos partidistas empezaron a valer más que objetivos de beneficio para el país. El panorama se hizo más turbio cuando en los días finales de su gobierno indultó a los terroristas que participaron en el atentado contra el general Pinochet. Su propósito fue obvio: no quiso que su sucesor heredara el problema, pese a que el propio Pinochet le sugirió lo contrario. La garantía de que los indultos no iban a lavar delitos de sangre se disipó tras bambalinas. El primer gobierno democrático terminó con los problemas de los derechos humanos todavía latiendo. La asignatura quedó pendiente.

Capítulo XIII

Ciudad de césares

«El vía crucis de Allamand» tituló en portada *Qué Pasa* a principios de 1991.

La directiva central, «armada a cuatro manos» junto a Jarpa, pese a todos mis esfuerzos, jamás pudo actuar como un ente cohesionado. La comisión política que surgió del consejo general de Valparaíso era menospreciada por los parlamentarios, que la consideraban un grupo de «comentaristas políticos» y de «derrotados» en alusión a que sus integrantes no tenían dedicación completa a la política o habían tenido mala suerte en la elección parlamentaria. El contraste con la anterior mesa y comisión política era demasiado grande. Si aquéllas habían funcionado como reloj, ésta era una máquina con los engranajes oxidados. A poco andar, desde dentro de la propia mesa empezaron a arreciar las críticas contra Félix Viveros —encabezadas por Gonzalo Eguiguren— que derivó en la renuncia de éste y en su reemplazo por Roberto Ossandón.

Roberto es un aporte para cualquier partido. Es comprometido y está animado por una gran vocación de servicio. Aunque es lo contrario a un político al 100%, durante años abandonó su oficina de abogado para dedicarse a las pesadas tareas organizativas. Cuando lo invité a integrase a la directiva, le anticipé convincentemente que había algunos problemas, pero que lo peor había quedado atrás. Cuando nos acordamos, ¡sólo nos reímos de mi desubicado vaticinio!

Más adelante, ante la imposibilidad de ejercer el cargo por sus responsabilidades parlamentarias, abandonaron la directiva Enrique Larre y Marina Prochelle, y logré (no sin enfrentar y doblegar la resistencia de Jarpa) que se incorporaran Evelyn Matthei y Francisco Javier Cuadra. Ambos eran de mi confianza.

Un partido funciona bien cuando reúne una historia común, trayectorias afines, respeto por la institucionalidad partidaria, coincidencia en una estrategia política, adhesión a un mismo proyecto y, sobre todo, sentido de pertenencia y voluntad conjunta de acción. En RN tales elementos no existían en calidad ni en cantidad suficiente.

A su vez, con el restablecimiento democrático, las circunstancias habían cambiado muy rápidamente para los partidos. Antes de la instalación del Parlamento, éstos tenían órganos de poder únicos y centralizados. Ahora todos los partidos debían adaptarse a la realidad del Poder Legislativo y establecer formas adecuadas de relación con sus parlamentarios.

Para ninguno fue fácil y para Renovación menos. No sólo porque era un partido demasiado nuevo, sino porque pertenecía a un sector donde el respeto por las instituciones partidistas es escaso. Por otro lado, el plantel parlamentario era muy grande —particularmente en el Senado— y muchos de sus integrantes tenían vinculaciones tenues con la colectividad. La radiografía de los senadores era elocuente. Eran doce —al igual que la bancada del PDC— pero siete, es decir más de la mitad, habían sido electos como independientes incorporándose con posterioridad al partido, y de los cinco restantes sólo Jarpa tenía alguna trayectoria en Renovación.

Además era un conjunto heterogéneo, de formación diferente, extracciones distintas y sensibilidades de pronto casi contradictorias. Si uno miraba las otras bancadas, advertía rasgos de homogeneidad. En la nuestra no había operado la misma tijera. ¿Qué tenían en común Piñera y Siebert? ¿Ignacio Pérez y Francisco Prat? ¿Sergio Romero y Hugo Ortiz? Por último, ninguno era tímido y de personalidad pasiva. Al revés, con ese

plantel habría sido imposible organizar un equipo de fútbol: todos habrían querido ser capitán y jugar de centrodelantero.

Un día Arturo Alessandri, que almorzaba a diario con nuestros senadores al igual que William Thayer, me preguntó:

—¿Vienes a almorzar a Bosnia-Herzegovina?

Don Arturo, con su habitual jovialidad, había bautizado de la mejor manera a nuestros representantes en el Senado.

—No sabes cómo te compadezco ¡Debe ser imposible dirigir un partido donde todos son repúblicas independientes! —agregó.

Era casi imposible. La verdad es que la sala de senadores siempre fue un dolor de cabeza, no tanto por la oposición que muchas veces formulaba a las decisiones políticas que se adoptaban a nivel central, sino porque nunca actuaba como cuerpo. Y ello se expresaba incluso en las votaciones más insignificantes. En las bancadas hay opiniones divergentes, pero todas buscan presentar un frente común. En Renovación eso jamás ocurrió. Y nada tenía que ver con los grupos o alineamientos que luego surgieron. Simplemente había una mayoría «transversal» que reivindicaba la autonomía de cada senador para votar siempre como le pareciera. Como me dijo una vez Gabriel Valdés:

—Los senadores de Renovación votan juntos sólo por casualidad.

El Gabinete en la sombra

A poco de asumir la presidencia de RN impulsé una idea para organizar, en forma moderna y eficiente, el trabajo del partido. Era el «Gabinete en la Sombra».

La idea era funcionar como la oposición en los regímenes parlamentarios. La gestión de cada ministro es fiscalizada por un personero de la oposición que cuestiona sus políticas y plantea cursos alternativos. En nuestro caso, definimos 19 áreas, cada una de las cuales tenía un jefe. Bajo él se armaban grupos de trabajo con los parlamentarios de las comisiones correspondientes

en la Cámara y el Senado y militantes destacados. La coordinación general la hacía el Instituto Libertad, presidido por Francisco Javier Cuadra.

La presentación, realizada en uno de los salones del Hotel Carrera, fue impecable. Estaban los nombres más destacados del partido: Jarpa, por decisión propia, en Defensa; Sergio Romero en Agricultura; Ricardo Rivadeneira en Justicia; Bruno Siebert, recién ingresado a RN, en Obras Públicas; Sebastián Piñera en Hacienda, entre otros.

Aunque la presentación fue impecable y la recepción de la prensa muy positiva, la iniciativa nunca caminó. Los jefes no consideraban a los miembros de su equipo que no fuesen diputados o senadores. Todos a su vez, perdían rápidamente interés puesto que el trabajo era esporádico, poco reconocido y completamente descoordinado.

—Es imposible trabajar con los parlamentarios. Estoy perdiendo el tiempo —me dijo Francisco Javier Cuadra a poco andar.

No había ni disciplina ni espíritu de cuerpo para una idea así. La iniciativa murió sin pena ni gloria, simplemente de inanición.

Muñecas de colección

Y había otro problema: Aylwin me ignoraba deliberadamente y mantenía con Jarpa —muñeca equivalente y político antiguo como él— una relación bilateral, paralela y directa con la que se saltaba a la directiva.

Tan obvia era la situación que la prensa especulaba acerca del tema. *Qué Pasa* la atribuía a tres razones: «La primera es que se entiende mejor con Jarpa porque pertenecen a la misma generación. La segunda es que no quiere legitimar a Allamand como líder de la oposición porque considera que su proyecto puede arrebatarle electores al PDC en el futuro. La última es que siente que Jarpa es más fuerte y prefiere tratar con quien manda realmente en el partido». Para la revista *Hoy*, «No hay buenas posibilidades de entendimiento entre Allamand y su estilo

directo, nada protocolar, casi impúdico, y el trato reverencial lleno de formas propio de Aylwin».

El que Aylwin me ignorara no me gustaba, pero tampoco me quitaba el sueño. Incluso, me daba libertad para ser crítico de su gestión, lo que de paso servía para acallar a quienes me acusaban de ser condescendiente con el gobierno. Algo así como ser duro en las formas y abierto en lo sustantivo, la norma inversa al modo de ser de la política chilena.

—El gobierno debe ponerse los pantalones frente al problema del terrorismo —declaré cuando asesinaron a Jaime Guzmán.

—Prefiero a Aylwin de estadista que de humorista —respondí cuando el Presidente comentó que si la oposición quería tanta privatización, por qué no se privatizaba el Ejército.

—Los problemas no se arreglan con pataletas —comenté cuando Aylwin visitó Arica y enfrentó con duras palabras las contramanifestaciones de grupos de mujeres.

Aylwin —un hombre de genio ligero— consideraba hirientes estas expresiones y se molestaba sin remedio. Era una guerrilla que tuvo su punto más alto cuando le pedí una audiencia y me la negó por escrito, aduciendo «falta de tiempo». Se armó una pequeño escándalo y el incidente le costó más al gobierno que a la oposición. Pero lo concreto era que para liderar a la oposición también perjudicaba tener mala llegada ante el dueño de casa de La Moneda.

La madre del cordero

Sin embargo, el propio *Qué Pasa* señalaba que el «problema de fondo de Allamand, y por lo tanto de RN, es uno que va mucho más allá de nombres o episodios de chismografía política y está relacionado con el futuro de la centroderecha. Es normal que en los partidos convivan tendencias y también que ocurran conflictos entre las directivas y los parlamentarios. El hecho que el presidente no sea la figura de mayor peso tampoco es inusitado. El origen del conflicto en RN radica en el audaz estilo y el

proyecto que busca imprimir Andrés Allamand, que en grandes líneas consiste en sepultar la tradición de la antigua derecha y asumir un credo liberal, capaz de atraer electores en el centro».

Ahí estaba la madre del cordero. No era sólo una cuestión de estilo. Había serias diferencias políticas: mayor o menor apertura frente al gobierno, mayor o menor adhesión frente al legado institucional del gobierno militar, mayor o menor sensibilidad a los temas de derechos humanos, mayor o menor condescendencia frente a los problemas personales de Pinochet, mayor o menor importancia asignada a expandir nuestras fuerzas hacia el centro político.

Visto en perspectiva, también influía el que la «democracia de los acuerdos» fuese una política a contrapelo de los instintos naturales de la militancia de Renovación Nacional, que estaba por una oposición más de armas tomar. Toda política que contraría las inclinaciones naturales, y que además es de relativo largo plazo, exige análisis fino, disciplina interna y paciencia. Cada cosa había que explicarla: un partido de derecha no tiene que justificar por qué se opone a que suban los impuestos, pero sí tiene que estar unido y ser persuasivo para explicar por qué acepta alzarlos temporalmente.

Otro elemento al que atribuí gran importancia —aunque luego me ha parecido menos relevante— fue la falta de un verdadero debate interno entre los planteamientos divergentes.

En un partido político democrático, cuando hay visiones diferentes se plantean y la competencia interna las dirime. Los que ganan ejecutan la política mayoritaria; los que pierden se suman a esa ejecución o toman prudente distancia, pero no la bloquean. Ése es él corazón de la democracia interna de cualquier partido y la base esencial de la lealtad entre sus miembros.

Sin embargo, mis detractores nunca presentaban formulaciones alternativas y tampoco competían por la dirección. Es más, obstaculizaban sistemáticamente la aplicación de las políticas. Esa oposición tenía a su alcance un recurso efectivo: la prensa. En un partido, la «contra», por definición, es noticia y tiene a disposición todos los micrófonos. En RN esa actitud era pan de cada día.

Este rasgo se transformó en la forma de ser de RN, con grave deterioro para nuestra imagen y la convivencia interna. ¡Nunca fui capaz de impedirlo! Para peor, el incentivo no podía ser más perverso: los leales a las políticas adoptadas estaban condenados al anonimato, mientras los críticos ganaban espacio en los medios de comunicación. No sólo eso, muchas veces con el propósito de arreglar las cosas la directiva y yo mismo terminábamos prestando más atención a los desleales que a los otros.

Para la prensa, RN era un partido muy desordenado. Don Pancho Bulnes patentó otra imagen: siempre reclamaba contra los que estaban trasformando al partido en una «vulgar montonera».

¿Por qué digo que a la distancia la falta de debate interno no fue tan relevante? Porque en importantes dirigentes la voluntad de acatar sus resultados nunca existió.

La encuesta de Damocles

No tiene nada de extraño, en ese cuadro, que para la UDI —partido con una cohesión y una disciplina táctica que siempre he admirado— el hábito de «mordernos las espaldas» se convirtiera en un negocio fácil. Y aparentemente productivo: ellos se presentaban como la «única oposición».

La derecha es «encuesta-adicta». Vive aferrada a las encuestas y sus resultados la sacuden hacia la euforia o la hunden en la depresión.

Durante mi primer período al frente de Renovación, las encuestas fueron una permanente espada de Damocles. Al asumir la presidencia, en agosto de 1990, RN figuraba con un 9,9% de adhesión y la UDI un 5,8%, guarismos que podían leerse con cierto escepticismo ya que el año anterior, los dos partidos en conjunto habíamos sacado casi un 35% de los votos. ¿Se había evaporado el 20% restante? En diciembre, bajamos ambos partidos: nosotros a 8,1% y la UDI a un 3,5%. ¡Harto poco! En marzo de 1991, a la vuelta del verano y cuando ya los acuerdos laborales y tributarios se habían materializado, el panorama no

variaba: RN 9,9% y la UDI 5,5%. Sin embargo, a contar de la muerte de Jaime Guzmán las cifras cambiaron dramáticamente. En julio ambos partidos estábamos empatados: RN 6,0 y la UDI 5,8%. Hacia diciembre se invirtieron por primera vez los porcentajes: la UDI alcanzó un 9,3% contra un 8,2% de RN. En abril de 1992, cuando ya las elecciones municipales estaban a la vista, el resultado fue desastroso para nosotros: 7,2% para la UDI y apenas 5,3% para RN.

Durante todo ese período, los adversarios internos hablaban de la necesidad de cambiar la línea y... la conducción. Mis argumentos eran que la adhesión del electorado de derecha no responde a los partidos y que la UDI subía más por el efecto del asesinato de Guzmán que por otra razón. A su vez, también influía que durante todo 1991 la UDI había organizado una fuerte campaña de reclutamiento de figuras. En esos meses la colectividad reforzó sus cuadros con Hernán Büchi, José Piñera y Hernán Larraín y otros destacados dirigentes vinculados al gobierno militar.

Yo estaba seguro de que RN era castigada, más que por sus políticas, por el clima de conflicto interno que reflejaba hacia afuera. Para esto último existía un sólido dato. Si bien es cierto que la evaluación del partido caía, ¿cómo explicar el sólido respaldo que seguíamos mostrando en encuestas Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, Alberto Espina y yo mismo? Era tan alta la calificación del grupo y su sello tan nítido, que alguien lo bautizó como La Patrulla Juvenil.

Nudo municipal

Yo agachaba la cabeza y esperaba. ¿Qué otra cosa me quedaba?

Afianzar un liderazgo no se logra de la noche a la mañana. No podía aspirar a tener el prestigio interno que Jarpa, Bulnes o Ibáñez se habían labrado durante décadas. El desorden se revertiría cuando los causantes se dieran cuenta de que, a la larga, perjudicar al partido también era negativo para ellos mismos. Además, me tranquilizaba, que pese a todo, la política trazada

se había ido ejecutando. Cuando más adelante llegara el tiempo de preguntarse cómo Chile había logrado preservar en democracia las orientaciones correctas del modelo económico diseñado por el gobierno militar y cómo había construido una gran convergencia para el desarrollo futuro, entonces, sólo entonces, se valoraría el esfuerzo de RN.

¡Eso era lo más importante! El resto, gajes del oficio.

A medida que avanzaban los meses empezó a perfilarse la elección municipal como una prueba de fuego para nuestra política.

Al principio, algunos de los nuestros defendieron el régimen municipal establecido por la Constitución, que no contemplaba la elección de los alcaldes por voto directo, Jarpa se había anticipado a rechazar «el proyecto de la Concertación que propone la elección política de los alcaldes y concejales» por considerarlo «un sistema superado». La UDI formulaba una doble objeción: la elección de alcaldes debía efectuarse junto con los comicios presidenciales y parlamentarios de diciembre de 1993 y sostenía que el sistema de elección directa de alcaldes politizaría absolutamente las municipalidades, con un claro retroceso respecto de la tecnificación de la acción municipal que se había logrado en los últimos años. En nuestras filas algunos se oponían porque preferían el sistema sin sufragio universal y porque rechazaban cualquier cambio constitucional.

Aylwin había anunciado en su primer mensaje al Parlamento, en mayo de 1990, que se impulsaría de inmediato la elección municipal, pero que no se avanzaría en la regionalización, a la cual calificó de *terra ignota*. Nuestro planteamiento se afinó de inmediato: exigiríamos vincular la reforma municipal a la regional —una vieja aspiración de nuestros dirigentes, y un paso al frente en nuestro concepto de sociedad descentralizada—; buscaríamos acuerdo con la UDI para encontrar un sistema electoral adecuado y trataríamos de definir una fecha razonable para la misma. ¿Cuál era ésa? Cualquiera en el segundo semestre de 1992, esto es, hacia la segunda mitad del mandato de Aylwin.

En todo caso, el gobierno tozudamente había hecho aprobar un primer proyecto en la Cámara sin incorporar ninguno

de nuestros puntos de vista. Como era de esperar, fracasó en el Senado a principios de 1991. Pero era igualmente claro que volvería a la carga luego del verano.

A su vez, después de tal rechazo, también empezó a variar el punto de vista de quienes en nuestro sector rechazaban las elecciones municipales. Mantenerse en la postura no sólo era oponerse cerradamente a la democratización municipal, contrariando las expectativas de la ciudadanía, sino exponerse a una mayoría incontrarrestable de alcaldes de la Concertación. En efecto, el mandato de los alcaldes designados por el gobierno militar empezaría a expirar y, sin reforma municipal y elecciones, el gobierno de acuerdo a la ley podría designar a los alcaldes de las comunas más importantes del país y también —tal como lo había hecho el gobierno militar— manipular a los Codecos y Coderes para nombrar alcaldes incondicionales.

En ese escenario, durante los primeros meses de 1991, RN y la UDI alcanzamos un doble acuerdo para enfrentar las elecciones. Fue complejo, pero sin la tensión de otras negociaciones que en esa oportunidad llevamos a cabo con Joaquín Lavín en un clima de camaradería.

Planteamos como fecha de las elecciones el mes de junio de 1992 y propusimos un régimen electoral que fue una demostración del talento electoral de la UDI: sería alcalde el candidato que obtuviera individualmente más del 35% de los votos. Si nadie obtenía esa cifra, la elección correspondería al concejo comunal que estaría integrado por un número par de miembros (seis, ocho o diez, dependiendo del tamaño de la comuna). Si éstos no llegaban a acuerdo para elegir un alcalde, el período de éste se dividiría por mitades.

El sistema no era el mejor desde el punto de vista municipal, pero maximizaba nuestras opciones ya que en muchos lugares podíamos aspirar a obtener la mitad del consejo municipal y de esa forma compartir con la Concertación el período. La Concertación —¡era que no!— puso el grito en el cielo, pero la fórmula contó con inesperados, aunque ocultos, aliados: los partidos de la Concertación, con la excepción del PDC.

La fórmula propiciada por el PDC era un trabalenguas de tres pasos: «Será alcalde el candidato más votado, del subpacto más votado, de la lista más votada». En pocas palabras: casi siempre un democratacristiano. Nuestra fórmula exigía a la alianza de gobierno un conjunto de complejas negociaciones —que fue bautizado como «protocolo»— conforme al cual los partidos de la Concertación accedían en determinadas proporciones a diversas alcaldías. Sin proponérnoslo, le creamos un enorme problema, ya que tal «protocolo» resultó un serio dolor de cabeza para los partidos del gobierno.

El segundo texto se denominaba «Acuerdo privado» y establecía la forma en que RN y la UDI integrarían las listas: «Cada partido tendrá derecho a llevar como mínimo dos candidatos en cada comuna» y «la determinación del resto de los candidatos se efectuará de la siguiente forma: en las comunas correspondientes a cada distrito en que un partido tenga diputado o haya obtenido más votos que el otro, tendrá de inmediato derecho a llevar tres candidatos. El sexto cupo se determinará de común acuerdo». De no existir ese acuerdo, la discrepancia se resolvería sobre «la base de una fórmula determinada teniendo en cuenta criterios objetivos».

—Déjame hacer una consulta final —pidió Joaquín cuando terminamos de redactar los papeles.

Me pareció bien. Yo también debía conseguir acuerdo de la comisión política.

Después de esa consulta, se agregó el siguiente párrafo:

«Las materias contenidas en este documento sólo podrán ser alteradas mediante acuerdo expreso y escrito de las directivas de ambos partidos. Ningún partido podrá invocar circunstancias sobrevinientes para justificar una alteración unilateral de lo pactado».

En agosto de 1991, el gobierno, representado por el ministro del Interior, Enrique Krauss, y todos los presidentes de partidos políticos suscribimos el *Acuerdo sobre la reforma a la administración comunal y regional,* que recogía casi íntegramente nuestros planteamientos. La primera elección de carácter nacional que

debería enfrentar como presidente de RN se empezaba a dibujar en el horizonte.

La democracia de las alternativas

En la tierra derecha de las elecciones municipales, las presiones para un cambio en la línea política se hacían cada vez más fuertes.

—El partido está desperfilado —señalaban algunos.

—Esta oposición «blanda» ahuyenta a la gente —agregaban otros.

—Hay que hacer oposición, es decir o-po-ner-se —argumentaban terceros.

—No entiendo nada —repetía el diputado Hugo Álamos que también había sido parlamentario antes de 1973—. Antes, cuando estábamos en la oposición, siempre votábamos en contra del gobierno. Ahora también somos oposición, pero las cosas más importantes las votamos juntos con el gobierno. ¡Nadie entiende nada!

—Andrés, abre los ojos. La UDI se está quedando con toda nuestra gente— me decían varios.

A todo esto, Aylwin, por esos días, había ni más ni menos clausurado la transición: «No se puede hablar de que sea necesario prolongar la transición, porque a mi juicio la transición ya está hecha. En Chile vivimos en democracia».

Sólo un ciego no advertía que el país estaba iniciando una nueva etapa y que el partido debería adaptarse a ella. Pero yo tenía dudas sobre cómo realizar el ajuste. ¿Cómo evitar la impresión de que estábamos borrando con el codo lo escrito con la mano?

La política de acuerdos con el gobierno no había sido una improvisación. Al revés, respondía a una convicción. Habíamos pagado costos importantes hacia nuestro electorado más duro, pero ahora lo que correspondía era defender lo realizado y salir a cosechar. De otro lado, yo nunca había logrado que internamente se definiera en qué habíamos estado mal. ¿Qué deberíamos

haber hecho distinto? ¿Seguir la misma política que la UDI? Era todo contradictorio: ¡Los mismos sectores que desde fuera del partido nos criticaban ácidamente por débiles frente al gobierno, eran los que decían estar felices por el clima de armonía y progreso del país!

El consejo general anual —el primero que me correspondía presidir— estaba programado para comienzos de septiembre en Osorno. Junto al equipo más próximo, le dimos vuelta al tema hasta encontrar una solución. Necesitábamos un concepto para reemplazar la «democracia de los acuerdos» que sintonizara mejor con la nueva realidad política. Así nació la «democracia de las alternativas», nuestra idea fuerza para la nueva fase política.

Al inicio del consejo, me esforcé por explicar casi pedagógicamente lo que habíamos hecho remontándome a la fundación de RN.

La primera etapa (1987-1988) había sido de formación del partido y el principal objetivo fue constituir una fuerza política que se preparara para representar a la derecha en la renaciente democracia. Tal tarea había exigido recuperar y renovar una identidad política propia y había concluido junto con el plebiscito de 1988.

La segunda etapa (1988-1989) estuvo destinada a facilitar la transición entre el régimen militar y el primer gobierno civil y a participar en la primera elección democrática. Los hitos de esta etapa habían sido las reformas constitucionales y la campaña presidencial y parlamentaria de 1989, de donde RN emergió como la segunda fuerza política del país.

La tercera etapa (1990-1991) había estado destinada a consolidar el sistema democrático. En ella, a través del logro de distintos acuerdos —tributario, laboral, municipal y facultad de indulto presidencial— contribuimos al clima de estabilidad que vivía el país, que contrastaba con la atmósfera de conflicto que agobió a los países que transitaron por procesos históricos semejantes.

Ahora debía iniciarse una etapa de legítima competencia al interior del sistema, por supuesto distinta a la de décadas anteriores. En los 70 se produjo el apogeo de los proyectos utópicos,

ideologizados y recíprocamente excluyentes; en los 90 debíamos configurar un proyecto nacional compartido que cobijara opciones políticas sanamente competitivas.

La conclusión era que las democracias inteligentes eran aquellas que lograban equilibrios lúcidos entre acuerdos y alternativas y, los énfasis cambiantes entre unos y otras debían ser percibidos como rasgos de vitalidad.

En materia propiamente municipal, el planteamiento de la directiva no tuvo sorpresas: conforme a los compromisos alcanzados, debíamos materializar nuestro acuerdo con la UDI.

Todo estaba en relativo orden en el consejo general, hasta que Jarpa intervino al final del primer día. Hizo un discurso salpicado de temas. Recordó la UP. Alabó al gobierno militar. Reclamó por la agricultura. Denunció la politiquería y, sintonizando a la perfección con el auditorio, le hizo al gobierno de Aylwin un grave cargo: «La corrupción, el contubernio y el negocio político ha empezado a hacerse presente en esta nueva democracia»

El consejo, hasta ese momento algo monótono, enfrascado en conceptualizaciones, quedó enfervorizado. Jarpa hizo un discurso magistral. Yo, para mis adentros, admiraba su destreza oratoria y al mismo tiempo pensaba que era un acróbata. Hacía apenas unas semanas que había impulsado una gestión, ciertamente a mis espaldas y de todo el partido, ni más ni menos que para prorrogar el mandato de Aylwin de cuatro a seis años. ¡Y ahora lo zamarreaba sin misericordia! Como resumió con acierto la revista *Hoy*, «Jarpa se dio el gusto de hablar sobre varias cosas para decir una sola: aquí mando yo».

Por supuesto, mi cuidada estrategia de deslizar al partido suavemente desde la «democracia de los acuerdos» a la «democracia de las alternativas» pasó a mejor vida. Pero lo grave no estuvo ahí. A fin de cuentas, en todo esto había mucho de explosión retórica. Lo grave estuvo en que Jarpa fustigó fuertemente a la UDI, al extremo de dejar colgando el acuerdo municipal:

—Es fácil decir unidad de la oposición. ¿Vamos a ganar con eso? Hay pocas ventajas y mucho lastre. No vamos a gobernar

este país haciendo alianzas con grupitos que están más preocupados de hacernos zancadillas.

Y luego planteó una vaga idea de «hacer campaña con los que tienen votos e incluir organizaciones de corte gremial-vecinal».

Al día siguiente tuve que sudar para que no se desbaratara el acuerdo con la UDI, aunque Jarpa logró establecer que era sólo «en principio» y que debía estar abierto a la incorporación de otras fuerzas. Un par de días después, *El Mercurio* en un editorial dejaba constancia de que «Allamand había tenido que defender trabajosamente el acuerdo unitario», para luego dejar caer una certera profecía: «En el interior de RN hay fuerzas y concepciones discrepantes cuya armonización puede no resultar fácil a la hora de enfrentar desafíos doctrinarios y electorales decisorios».

El vaticinio era sombrío, pero mucho más amargo fue recibir a la vuelta del consejo la noticia del ataque cerebral que sufrió don Pedro Ibáñez. Yo, que pensaba que no me cabía más pena, tuve un duro aprendizaje porque comprobé que siempre cabe más. ¡Por Dios que nos haría falta de ahí en adelante!

Bolsa de gatos

Con todo, una vez que se alejaron los ecos del consejo general, parecía que podríamos suscribir el pacto electoral sin inconvenientes y abocarnos de lleno a preparar la próxima elección municipal, la primera en 21 años.

Pero ocurrió todo lo contrario: la relación con la UDI, después del asesinato de Jaime Guzmán, llegó a un pésimo nivel. En el mes de septiembre la UDI efectuó un congreso doctrinario que más pareció un encuentro para denostar a RN. Julio Dittborn nos acusó de «clasistas» y Hernán Larraín aludió despectivamente a RN, diciendo que «no estamos por el travestismo político».

Al final, más que las ideas, el gran insumo «ideológico» del evento fueron las diatribas en contra de RN y una bravuconada exhortando a optar por «el camino propio».

Nada de esto, sin embargo, habría sido trascendente si no fuera por dos elementos que situaban el desencuentro en un contexto distinto. La UDI, envalentonada por su repunte en las encuestas, desconoció el texto expreso del acuerdo electoral y exigió una repartición paritaria de cupos en todo el país. Y, a su vez, mis amigos en el gobierno y en el PDC me advirtieron que estaba avanzando muy rápidamente con la UDI en una propuesta de reemplazo del sistema binominal por uno proporcional.

No sólo eso: la UDI quería un tratamiento legal para los candidatos independientes que los obligaba a entrar en los partidos y, como si todo esto fuera poco, vetaba el ingreso de la UCC al pacto por un asunto «de principios».

—Nada hay más ajeno a nuestro partido que la demagogia y el populismo en la acción política —declaraba Joaquín Lavín.

—No tenemos afinidad alguna con ese partido ni con la persona que lo maneja —agregaba Jovino Novoa, el nuevo presidente de la UDI, a mediados de octubre de 1991.

Pasaban los meses, los problemas continuaban y las relaciones entre ambos partidos iban de mal en peor. No se avanzaba un milímetro y subsistían tres puntos de desacuerdo: ¿Cómo asignar a esas alturas el famoso «sexto» cupo?, ¿cómo integrar a los independientes?, ¿aceptar a no a la Unión de Centro Centro? Luego nosotros agregamos un cuarto: sin acuerdo para mantener el sistema binominal en 1993, tampoco habría pacto electoral en 1992. Si la UDI cambiaba unilateralmente el sistema electoral —un aspecto no controvertido en la derecha— debía estar dispuesta a enfrentar, también sola, los futuros desafíos electorales.

La discrepancia adquirió, como era de esperar, carácter público y nos enfrascamos en una agria polémica.

A mí me irritaba que la UDI faltara a su palabra en un tema que se había discutido hasta la saciedad. ¡Era inaudito que ahora pidiera para sí siempre el «sexto» cupo!

¿Cuál era, por otro lado, la racionalidad de ponerle trabas a los independientes? Longueira la había explicado:

—La UDI prioriza a los candidatos que sean militantes del partido.

Un problema igualmente arduo era el tema de la UCC, que debía manejar con cuidado, ya que no faltaban las voces al interior de Renovación que habían vuelto a la idea de pactar con la UCC «y operarnos de una vez por todas de la UDI».

Mientras tanto, la Concertación tomaba palco. Las semanas transcurrían, nadie encontraba una solución y las reuniones entre los partidos se hacían cada vez más ásperas.

La Concertación vio una oportunidad: le ayudarían a la UDI legislando en contra nuestra en materia de independientes. ¿Gratis? En política nada es gratis. El precio sería alto: la UDI debería facilitar que se aprobara el proyecto de ley para el financiamiento estatal de la campaña municipal.

La derecha —y particularmente la UDI— siempre se había opuesto al financiamiento público y, en esa materia, mi posición favorable era muy minoritaria. ¿Cómo resolver el problema? La fórmula se fraguó en una reservada comida en Cerro Castillo entre Enrique Krauss, Edgardo Boeninger, Enrique Correa, Jovino Novoa y el hábil Juan Antonio Coloma: cuando se tratara el tema del financiamiento estatal en el Senado, la sala debería resolver que la norma en cuestión requeriría sólo de mayoría simple y no de 4/7 como toda ley orgánica. Los dos senadores de UDI votarían a favor. Acto seguido se votaría la norma en cuestión, pero con el umbral de aprobación ya rebajado. Los dos senadores UDI votarían en contra, pero ya habrían abandonado la sala algunos senadores institucionales y otros votarían con la Concertación, en el número necesario para que la norma fuera aprobada.

Simple. Casi estético. Astuto.

¿Operador de esa sutil maniobra? Sergio Fernández.

La operación funcionó. Y la norma fue aprobada ante el estupor de nuestros senadores. La indignación cundió.

—RN no debe materializar un pacto municipal con la UDI —dijo Jarpa y acto seguido censuró la actuación de los senadores designados «que se dicen fuera de la confrontación de intereses políticos». Renovación Nacional inmediatamente impugnó la ley aprobada ante el Tribunal Constitucional.

La sangre no llega al río

La pelea había trascendido a los diarios y amenazaba con afectar el resultado de la elección. Cuando la sangre estaba por llegar al río, me reuní con Bernardo Matte para analizar la situación. Fue una conversación muy útil. Bernardo es frío, tiene una mente empresarial y diversos cables a tierra.

—Salte de la refriega. Desde afuera a todo el mundo le da lo mismo la pelea por el famoso sexto cupo o lo que sea. ¡Yo sé que es importante, pero estamos igual que siempre! Nuestra gente ni siquiera quiere saber quién tiene la razón. Lo verdaderamente importante es armar esa lista de una vez por todas.

Tenía razón y yo mismo me lo había planteado durante las últimas semanas. El problema era saber de qué manera podía configurase una alianza estable si compromisos tan evidentes se pasaban por alto. En fin, había que seguir intentándolo. Llamé a Jovino Novoa y quedamos en realizar un esfuerzo postrero.

En Renovación preparamos bien nuestra estrategia: no transaríamos el asunto del sistema electoral futuro. Pretenderíamos que el «sexto» cupo se distribuyese en proporción al tamaño de los partidos, pero cederíamos hasta un 50% para cada uno. Y el tema de la UCC lo cederíamos sin mayor problema. Por lo demás la UCC estaba encrespada al máximo con la UDI y había iniciado una fuerte propaganda en todas las radios: su consigna era ir sola.

Afortunadamente se creó un buen ambiente y al cabo de tres días de negociaciones pude redactar un acuerdo que se aprobó sin mayores cambios: el sexto cupo se repartiría por partes iguales, ambos partidos «resolverían de común acuerdo» cualquier propuesta sobre modificación del sistema binominal y la UCC quedaría fuera del pacto. Con esto último en mi fuero íntimo estaba contento: siempre he considerado que Errázuriz es políticamente indeseable.

El acuerdo iba más allá del tema municipal: expresaba la voluntad de enfrentar las elecciones de 1993 a través de «una plataforma política presidencial, una candidatura unitaria y un

pacto parlamentario» que les permita competir a ambos partidos «en igualdad de condiciones, ya que ésa es la mejor fórmula para aumentar las expectativas de éxito electoral y regular, en forma equilibrada y justa, las relaciones entre colectividades que aspiran a generar una alianza política y electoral estable». La fórmula no podía ser más clara: la UDI y RN postularían un candidato en cada distrito. ¿El tema de los independientes? A esa altura había poco que hacer, ya que estaba en manos del Tribunal Constitucional, instancia que más tarde validó ampliamente la tesis de RN.

Ahora, sí, ¡subieron bandera! La campaña municipal había empezado.

La cabeza en su sitio

A pesar de todo, Renovación Nacional funcionó en la campaña de 1992 como reloj suizo.

El lanzamiento fue sensacional: trajimos como invitado estelar a Andrés Pastrana, ex alcalde de Bogotá, actual presidente de Colombia —con quien trabaríamos una amistad que hasta hoy se prolonga—; llenamos el salón plenario del Edificio Diego Portales; Sebastián Piñera inventó un muy buen slogan (¡Juégale limpio a tu comuna!) y elegimos una gráfica y una música moderna y pegajosa cantada por Miguel Piñera.

Aprovechando nuestra experiencia de la campaña anterior trabajamos a la perfección los ejes temáticos. La Concertación había politizado al máximo la campaña al extremo que Enrique Correa llegó a hablar que su resultado originaría un «mandato para las reformas constitucionales que el país necesita». A la inversa, nosotros la despolitizamos: «El mejor alcalde es el mejor vecino».

Todos los días viernes un equipo pequeño (Isabel Izquierdo, Rodrigo Ubilla y yo mismo) preparaba un informe de no más de tres carillas con frases, argumentos, cifras y todo aquello que pudiera necesitar un candidato en campaña.

Trabajábamos sin descanso, multiplicándonos, en forma

organizada y eficiente. La campaña fue mucho más corporativa y organizada que la parlamentaria de 1989.

Todo caminaba a la perfección. Teníamos una estrategia electoral clara y una ejecución que superaba los niveles de las otras campañas.

Sin embargo, las encuestas que ya nos venían tratando mal, fueron un dolor de muelas, afectaron la recaudación de fondos, pusieron nervioso a todo el mundo y deprimieron a los candidatos. La última semana los pronósticos eran como la noche oscura. ¡Ninguna encuesta le daba a la lista de la centroderecha más del 15%! ¡Y en ninguna Renovación superaba el 10%! El triunfalismo de la Concertación era inaguantable y la suficiencia de los dirigentes del PDC no se hizo esperar: el resultado sería una avalancha democratacristiana, una marea «azul».

A mí, esas cifras no me calzaban por ningún lado. Había recorrido gran parte del país, tenía buena información y siempre he confiado en mi instinto electoral... para evaluar a los demás. Cuando me entraban dudas, preguntaba a los más cercanos o llamaba a alguna comuna o provincia.

—No puede ser —me decía Roberto Ossandón.

—Debe haber errores de metodología —enfatizaba Rodrigo Ubilla.

—Acá las cosas se ven bien —me contestaban invariablemente desde regiones.

Era tanta la desazón ambiental que el último día, luego de hacer una evaluación con todos los antecedentes disponibles, aventuré un resultado en una concurrida conferencia de prensa saliéndoles al paso a las malditas encuestas:

—En la próxima elección habrá dos derrotados: las encuestas que durante todos estos meses nos han perjudicado y la Concertación que nos ha extendido un certificado de defunción por anticipado! La centroderecha obtendrá el 30% de la votación!— anticipé ante la mirada escéptica de los periodistas.

Era un riesgo y, si fallaba, no faltarían quienes me lo recordarían. Pero mi obligación era hacer todo lo posible para que no cundiera el derrotismo en el tramo final.

Para peor, bruscamente la campaña empezó a ser enjuiciada como un plebiscito a mi gestión personal. No sé de dónde arrancó, ya que era una elección municipal, pero el asunto agarró cuerpo. El mismo día de la elección *El Mercurio* en un amplio reportaje, se preguntaba: «¿Termina el liderazgo de Allamand?» y luego anticipaba que lo más probable sería que entre la UDI y RN «la diferencia fuera mínima».

El día 28 junio fue de nervios. Y un elemento familiar agravaba la tensión: mi padre era candidato en la comuna de Vitacura.

Hacia las ocho de la noche, respiré tranquilo: la lista RN-UDI estaba a milímetros del 30% de la votación y en su interior Renovación Nacional alcanzaba el 18%, cifra muy superior al 11,4% de la UDI. La lista de la Concertación logró un 52,8% del cual un 28,9 correspondió al PDC; el PS y el PPD sumaron un 17,8% y el Partido Radical un 5,3%. El Partido Comunista llegó al 6,5% y la UCC se empinó a un sorprendente 8,1%, apenas unos puntos por debajo de la UDI.

La catástrofe que nos habían vaticinado no se había producido. Al revés, RN había elegido 77 alcaldes y la UDI 18.

Renovación era claramente el segundo partido político del país. Nuestra votación superaba al PS y al PPD unidos, vale decir a la izquierda democrática junta. No se había producido la tradicional tendencia electoral chilena: no había ningún aumento de votos hacia el gobierno en la primera elección de su período (Frei, electo en 1964, había hecho saltar al PDC desde un 15,9 al inigualado 42,9% de los votos y Allende, electo en 1970 con un exiguo 36%, había logrado que la Unidad Popular saltara al 50%).

De todos los resultados, el que me llegó más cerca fue, por supuesto, el triunfo de mi padre en Vitacura. Al lado, en la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín obtenía la primera mayoría sobre mi amigo Raúl Torrealba, que logró un meritorio segundo lugar. Joaquín no sólo se cobraba merecida revancha de su resultado de 1989 sino que iniciaba una carrera de horizontes insospechados.

La interpretación de la prensa no dejó dudas del significado

más político de la elección con respecto a RN. «Allamand revalida su conducción», titulaba un diario al día siguiente. «Las encuestas que anunciaron una catástrofe en RN fallaron en sus aspectos predictivos. Allamand ha logrado revalidar su dirección que se veía torpedeada por sectores internos cada vez más rebeldes en la medida en que los sondeos auguraban una importante estampida de votos», sostuvo *Cosas*. Incluso, varias semanas después, las revistas insistían en que Allamand se «había salvado de la guillotina».

Por supuesto, no faltaron los que se ocuparon de clarificar que no había que «personalizar» el éxito del partido. Claro, si el resultado hubiera sido malo habría sido al revés. Me acordé de la frase de John Kennedy: «En política la derrota es huérfana y la victoria tiene mil cabezas».

Una frase de Rafael Otano resumía la impresión que prevalecía en el mundo político: «La cabeza de Andrés Allamand quedaría, al menos durante un tiempo, en su sitio».

Los más eufóricos sacaban una cuenta alegre: la derecha tenía un sólido 30%. Un firme piso de losa. La UCC había obtenido más de un 8% y esos votos, no siendo quizás químicamente de derecha, tampoco eran electorado natural de la Concertación. Sólo captando esa votación y recogiendo algún desgaste de la coalición gobernante, estábamos en el umbral del 40%. Y un sector que se aproxima al 40% es, en cualquier democracia del mundo, alternativa de gobierno.

Al final obtuve lo inesperado: el día antes de la elección estaba en juego mi liderazgo y nuestra política; el día después ambos estaban firmes como un peral.

Campaña larvada

Tales eran las cuentas alegres. Pero en RN la campaña municipal no había sido la única. También se había librado otra campaña. No abierta ni pública, pero que ya había sembrado malas semillas.

Sus candidatos no habían competido por cargos y sus nombres no figuraban como candidatos a alcalde en ninguna comuna, pero habían tenido alta presencia pública y virtualmente habían recorrido —esforzándose por no coincidir en fechas y lugares, pero pisándose los talones— todo el país.

Sebastián Piñera y Evelyn Matthei —dos amigos a quienes yo mismo había incorporado a la política y reclutado para RN— se habían trenzado en una fuerte contienda que cada vez me resultaba más difícil arbitrar.

Capítulo XIV

Reclutas para la patrulla

No me acuerdo exactamente cuándo conocí a Evelyn Matthei. Sí me acuerdo cuando la invité a ingresar a Renovación Nacional.

Fue a principios de 1988. Canal 13 había iniciado un ciclo destinado a los partidos políticos en formación. El primer programa, asignado al PPD, dio lugar a un hecho político imborrable: Ricardo Lagos emplazó al propio Pinochet, mirándolo fijamente a la cara y apuntándole con el dedo. ¡Ahí mismo se catapultó su liderazgo! El equipo PPD —Lagos, Jorge Schaulsohn, Carolina Tohá y Armando Jaramillo— cumplió su rol a la perfección.

Esa noche me dormí tarde: el programa siguiente correspondía a RN y, para desgracia nuestra, estábamos en medio de la crisis interna con la UDI. Además, nuestro posible equipo estaba cojo: faltaba alguien que representara juventud, aires nuevos y que estuviera lejos del conflicto. No sólo eso: a mi modo de ver, debía tratarse de una mujer.

El nombre de Evelyn Matthei me saltó con entusiasmo. La había visto un par de veces en unos almuerzos en el Club de La Unión que organizaba Augusto Schuster y sabía que trabajaba en Bancard, una de las empresas de Sebastián Piñera.

Fui a hablar con ella. Le dije que el país entraba en una nueva etapa y que mucha gente que nunca siquiera lo había pensado debía ahora interesarse por la política y los partidos.

—Quiero que te incorpores a RN y que nos des una mano ahora, que la necesitamos. Quiero que vengas a la televisión, a *De Cara al País.*

No fue fácil convencerla. ¡Hasta con el propio general Matthei tuve que hablar!

—No sea porfiado, iñor —rezongaba Jarpa—. No va a resultar. ¿Usted cree que alguien entra a un partido con todo este lío?

—Usted lo verá. Y va a ser un impacto. ¡Cuándo nos tienen contra el *ingoal* hay que salir jugando a la mano!

Jarpa entendió poco la alusión al rugby. Evelyn Matthei fue al programa. Y al día siguente ya era una figura emergente en la política chilena. Tenía magia para la televisión.

No me acuerdo exactamente cuándo conocí a Sebastián Piñera. Sí me acuerdo cuándo lo invité a ingresar a Renovación Nacional.

Fue también a principios de 1988. Antes nos habíamos hecho buenos amigos. Los fines de año en su casa del lago Caburgua se transformaron en una tradición. Allí, junto a un gran «choclón» de familias, hacíamos deporte, largas excursiones, competíamos en cuanto juego inimaginable, depredábamos los corderos de la zona en asados al palo, le pasábamos revista al año que terminaba y tirábamos líneas para el que venía. Para mí, Sebastián representaba un «reclutamiento» emblemático: origen PDC, firme partidario de la modernización económica del gobierno militar, convicciones democráticas intransables, preocupación por la pobreza. El día que los chilenos adscritos a esa definición se sumaran a RN nuestra expansión sería una realidad.

—Pese a tus esfuerzos, ustedes van a votar por Pinochet. Yo no. Hablemos después del plebiscito —me dijo, cuando rechazó mi primera invitación para ingresar a RN.

Durante la primera etapa de la campaña de Büchi, pude ver sus enormes condiciones naturales para la política. Muy poco después de la renuncia del candidato, fui junto a Eduardo Frei a un debate a la televisión. Al final del mismo, los periodistas nos

sometieron a un pin-pon de preguntas rápidas. Frei anunció allí que sería candidato a senador por Santiago. Cuando me preguntaron con quién lo enfrentaría RN, dije lo que venía pensando hace varios días, aunque no lo había hablado con nadie... ni siquiera con el interesado:

—Sebastián Piñera sería un extraordinario candidato a senador.

Dos días después de su triunfo en Santiago Oriente, en diciembre de 1989, Sebastián se incorporaba a Renovación.

La carrera prematura

—Piñera puede ser el hombre—, fue el titular de una entrevista a Jarpa en *La Nación* el 2 de febrero de 1992.

El tema presidencial había ido ganando terreno en el escenario político durante todo 1991 aunque era extemporáneo, ya que la elección estaba muy lejos: tendría lugar recién a fines de 1993. La razón fundamental fue que el PDC y la UDI plantearon que ellos tendrían «abanderados símbolos» para la campaña municipal de junio de 1992. El del PDC sería el propio Frei, recién electo presidente del partido, quien visitaría «todas las comunas del país» y el de la UDI sería Hernán Büchi, quien había ingresado a esa tienda hacía poco, criticando muy duramente la «democracia de los acuerdos» impulsada por RN. El símbolo del PPD-PS era Lagos, pero ello resultaba más complejo de utilizar: era ministro de Educación.

Jarpa fue tajante en el tema. Él no sería candidato por ningún motivo... menos teniendo tan fresco el fiasco de 1989. Había que pensar en otra persona y Piñera no le parecía mal. Más aún, Sebastián no escondía que tenía en mente esa candidatura y había logrado mucho apoyo a nivel de senadores. Los diputados también la veían bien: le sobraba energía, tenía una mente rápida como la luz, ya era un senador sobresaliente y haber sido elegido por Santiago era una señal nítida de su llegada a la ciudadanía.

A mí, qué duda podía haber, su candidatura me parecía muy bien. Ya el año anterior, cuando me preguntaban por candidatos en RN, siempre decía lo mismo:

—Jarpa es el liderazgo vigente, Piñera el emergente. RN tiene dos excelentes cartas presidenciales.

De igual forma, al interior de la llamada *Patrulla Juvenil* tampoco había dudas de que ésa era la mejor opción. En nuestras conversaciones siempre estaba claro que Piñera sería nuestra carta presidencial y que todos apoyaríamos a Evelyn como candidata a senadora por Valparaíso: no teníamos senador allí, era la segunda región del país y una gran plataforma para alguien que recién se empinaría sobre los 40 años.

Sin embargo, se cruzaron dos fenómenos: de un lado, Sebastián se fue enajenando todos los apoyos que había conquistado y el nombre de Evelyn Matthei empezó a ser mencionado más y más como opción. Primero entre diputados y luego entre senadores. A su vez, las encuestas le empezaron a ser favorables.

Al principio no me tomé en serio el asunto: no creía que estuviera preparada y estaba seguro de que ello se notaría a poco andar. De igual forma, tampoco se me pasaba por la cabeza un enfrentamiento Piñera-Matthei. ¡Eran amigos y se conocían desde hacía años! Formábamos un grupo humano que funcionaba bien, que trabajaba codo a codo y que tenía una clara identificación con un proyecto político. Yo pensaba que el «jarpismo» iba a levantar una candidatura propia, pero jamás se me pasó por la cabeza que la propia Evelyn pudiera recibir tal respaldo. Es más: discrepaba fuertemente de las ideas económicas de esa tendencia; su apertura al tema de los derechos humanos le había valido un «veto» del mismo Jarpa a la hora de integrar la directiva y consideraba que la Constitución necesitaba importantes reformas.

Más tarde se escribiría toda una historia negra acerca de una supuesta «discriminación machista» en contra de la Evelyn. Todos los que vivieron esa etapa saben que no fue así. Incluso, más de una vez tuve que tragarme las críticas de otras parlamentarias y diversos dirigentes que se quejaban porque todo el partido

—y yo como presidente— siempre estaba por darle a la Evelyn la máxima proyección y estelaridad.

«YOUR BUSINESS, DEAR»

El clima de RN, sin embargo, cambió cuando los respaldos a la Evelyn empezaron a teñirse de virulencia contra Piñera. Al principio eran ataques aislados, pero fueron ganando más y más intensidad. Y el asunto tomó otro cariz cuando Jarpa, en otra de sus movidas imprevistas, empezó a apoyar a Evelyn Matthei y a incubar una odiosidad y resentimiento feroz contra Piñera.

En plena campaña municipal el conflicto Piñera-Matthei iba *in crescendo*. A duras penas logré postergar el tema internamente hasta después de la elección. Yo vivía un serio conflicto: como presidente del partido se me pidió no apoyar públicamente a ninguno de los dos candidatos y adoptar una política de neutralidad. Era una petición bien unilateral, ya que Gonzalo Eguiguren y Cristián Correa, vicepresidente y tesorero de la mesa, eran activos miembros del comando de la Evelyn. También era una petición muy difícil de cumplir para mí: yo no le había escondido a nadie que consideraba esa candidatura sin destino. Me abstuve de dar opiniones públicas y nunca nadie pudo denunciar una sola actuación mía o de la directiva —en la que había, por lo demás, una mayoría de adversarios a Piñera— destinada a favorecer o perjudicar a uno u otro candidato. Finalmente, el asunto adquirió otra connotación cuando Jarpa —de hecho, el «padrino» de la candidatura Matthei— se tomó el asunto como una guerra personal contra Piñera.

Años más tarde, comiendo en un restaurante caminero junto a Bruno Siebert y Enrique Larre —un caballero por los cuatro costados— el primero me lo reconocería con todas sus letras.

—¡Apoyamos a la Evelyn sólo para cerrarle el paso a Piñera! Así además le quebrábamos el espinazo a una línea política tibia con el gobierno militar que nunca nos gustó. ¡Contigo nunca ha habido nada personal!

Después de la elección municipal, la situación de RN era inmejorable. Habíamos tenido éxito electoral, nuestra política estaba validada y, como si eso fuera poco, teníamos claramente perfilados dos candidatos a falta de uno, con una altísima valoración en la opinión pública e inmensa llegada en los medios de comunicación.

El consejo general previsto para fines de julio en La Serena debía servir para varias cosas. Antes que nada, para reafirmar la alianza política y electoral con la UDI. Mi idea era invitar a Jovino Novoa al consejo y sellar ahí mismo, con su presencia, la Coalición para el Progreso, el nombre otorgado a nuestra alianza. ¿Y si lo pifiaban? La rivalidad con la UDI está igual que siempre, pensaban algunos. Ésa era la primera prioridad. Luego venía resolver a través de qué mecanismo se elegiría el candidato presidencial de Renovación, el cual luego debería disputar con la UDI la nominación de toda la centroderecha. Aquí eran dos las opciones: dejar la resolución al propio consejo general o establecer una elección de todos los militantes.

Los «jarpistas» favorecían que el consejo mantuviera la facultad y la razón era obvia: suponían que allí tenían mayoría. Los «piñeristas», en cambio, favorecían la elección directa.

El consejo se desarrolló aparentemente con normalidad y generalizado buen ánimo. El discurso de Jovino fue recibido con aplausos —antes intervine para preparar el ambiente— y finalmente prevaleció la tesis de que el consejo general elegiría nuestro candidato presidencial: la mayoría, incluso varios destacados partidarios de Piñera, consideraban que era mejor así.

Sin embargo, un aspecto alteró el clima general: aun cuando Jarpa resolvió no ir a La Serena («tengo un problema con el capataz y debo arreglar unos caballos»), decidió filtrar a la prensa una carta que me había dirigido una semana antes con fuertes críticas a Piñera. La razón era que el jefe de la Región Metropolitana, Cristián Barra —un destacado dirigente universitario y amigo de todos nosotros— había sido contratado en Bancard. Jarpa leía ahí lo que después repetiría una y otra vez: «Piñera se está comprando al partido».

Yo inmediatamente le dije a Jarpa que enviaría su carta al tribunal supremo —lo que hice— y le manifesté que un número muy importante de dirigentes del partido trabajaban en empresas o vinculados a otros dirigentes, especialmente parlamentarios. ¿Estableceríamos una inhabilidad generalizada?

La verdad es que no pasaba de ser un pretexto para empezar a dispararle a Piñera. Pocos días después Jarpa diría que era «una persona relacionada con el aspecto económico y financiero, que vive en otro mundo, ajeno a las preocupaciones sociales, que no corresponde al estilo del pueblo chileno». Después cargaría aún más la mano, enardeciendo desde el primer día la campaña interna.

En La Serena, Sebastián —que estaba muy afectado por la denuncia que los periodistas le refregaban una y otra vez— le representó el problema a la Evelyn.

—Gringa, es una acusación injusta y mal intencionada. Tú también conoces a Cristián Barra, trabajaste conmigo durante años en Bancard y sabes que no es cierto de lo que me acusa Jarpa. ¡Frena tú este asunto!

—*Its your business, dear. Not mine* —fue su respuesta.

La resplandesciente *Patrulla Juvenil* estaba trizada.

Un par de días más tarde Jarpa proclamaba oficialmente la candidatura de Evelyn Matthei. El *Qué Pasa* dijo que había sido «el rugido de Jarpa» y concluyó lo que todos sabían: «La guerra entre el líder de RN y Sebastián Piñera está declarada».

El dedo de Claro

El Bone's es un restaurant de Atlanta donde se come una carne espectacular. Esa noche Pedro Pablo Díaz, gran amigo de Sebastián desde la universidad —y sobre todo gran amigo de todos sus amigos— era el anfitrión de una mesa en que estábamos Patricio Silva, embajador de Chile en Estados Unidos, la Bárbara y yo. Nosotros veníamos llegando de Houston, desde la Convención Republicana, y teníamos un intenso programa

en el Emory Hospital, para estudiar las posibilidades de recuperación de Juan Andrés. Paralelamente, yo debía asistir a una conferencia en el Carter Center.

Apenas llegamos a la casa de Pedro Pablo, donde estábamos alojando, sonó el teléfono. Apenas lo tomó, se puso blanco.

—¡Andrés, agarra el teléfono de la cocina! —gritó.

—Acaba de pasar una cosa increíble —le decía su hermana Margarita Díaz, atropellándose junto a su marido José Manuel Monckeberg—. Sebastián fue al programa de Jaime Celedón en Megavisión. El mismo en que estuvo la Evelyn el domingo pasado. Apareció antes Ricardo Claro y puso una grabadora y se escuchó una cinta en que apareces hablando tú y Sebastián. Hablan de que el *Pelao* Richards va a acorralar a la Evelyn Matthei. Imagínate el escándalo que hay. ¡La cinta es una sarta de garabatos!

A Pedro Pablo no le salía el habla y no le salió por un buen rato.

—¿Reconoció Sebastián o lo negó? —pregunté yo.

—Reconoció que había estado mal.

Respiré. Por esas cosas inexplicables de la mente se me vino a la cabeza Watergate: lo que derrumbó a Nixon fue haber mentido.

¿Qué había pasado?

El domingo anterior, el 16 de agosto, Evelyn Matthei había asistido a un programa de Megavisión conducido por Jaime Celedón. Todos coincidieron en que su participación había sido pobre y que se le notaba muy tensa. Los periodistas —Jorge Andrés Richards, pero sobre todo Pilar Molina— le preguntaron con agresividad, pero sin traspasar el umbral de lo normal.

Ese 23 de agosto, al siguiente programa, el invitado era Sebastián Piñera. Ricardo Claro, empresario y dueño de Megavisión, se había «autoinvitado» al espacio. Habiéndole anticipado minutos antes a Jaime Celedón que «traigo una bomba», al final de su intervención —en el bloque inmediatamente anterior al ingreso de Piñera al estudio— sacó de un maletín una grabadora y luego de anunciar que había recibido una información «bastante grave, en el sentido de que la independencia de este programa puede aparecer amenazada», apretó un botón y puso al

aire una cinta que, según él, «me entregó hoy día, después de almuerzo, un señor que no conocía».

La cinta en cuestión era una conversación entre Pedro Pablo Díaz y Sebastián Piñera —muy inconexa, llena de garabatos— en que ambos hablan sobre cómo el periodista Jorge Andrés Richards podía «acorralar» a Evelyn Matthei durante el programa al que asistiría el mismo día. Fue impresionante, no tanto por el contenido de la conversación —es cosa de mirar la transcripción para comprobarlo— sino por la forma, por la crudeza del diálogo y la manera impactante en que todo el asunto se presentó. Además, para muchos televidentes, el contraste de la actitud de Sebastián fue brutal: en una entrevista de Raquel Correa en *El Mercurio* de ese mismo día, Sebastián había señalado que la competencia interna con la Evelyn lo obligaba a una mayor delicadeza y deferencia, por el hecho de ser mujer y amiga.

Al apretar el botón de la grabadora —momento en que la marca Kioto se hizo famosa para siempre— Claro hizo estallar uno de los mayores escándalos políticos de la historia del país. Semanas más tarde, el ministro en visita, Alberto Chaigneau, a cargo de la investigación judicial que se abrió a instancias del gobierno, diría que el empresario, al hacerlo, pensó que era «sólo un disparo, pero le salió un cañonazo».

Hasta el cogote

A todo esto, yo en Atlanta, en casa de un Pedro Pablo Díaz todavía mudo, que ni siquiera podía reconstituir bien la conversación que habían difundido, recibía decenas de llamados de Chile. Gran parte de los dirigentes de RN estaban en la casa de Sebastián y de allí me llamaron urgiéndome a que volviera. No era necesario que me lo dijeran. Tan pronto supe lo que pasaba, mentalmente cancelé todo lo que tenía que hacer en Estados Unidos y me puse en plan de regresar en el primer avión.

Pero no podía: todos los vuelos a Chile desde Atlanta pasaban

por Miami y el areopuerto estaba cerrado por un gigantesco huracán de nombre… *Andrés.*

Al final, tuve suerte. Agarré un avión a Baltimore para viajar el día siguiente saltándome Miami y estuve un día completo encerrado en mi pieza del hotel reflexionando y hablando por teléfono con Chile. ¡Ni siquiera fui al acuario que siempre había querido conocer! Desde ahí hice mis primeras declaraciones a *La Segunda* y fijé una línea argumental:

—Rechazo categóricamente la forma de proceder de Sebastián Piñera. Así como antes he objetado que partidarios de Evelyn Matthei hayan descalificado personal y políticamente al senador Piñera, a él le formulo idéntico reproche. Pero interferir las conversaciones telefónicas es un delito y transformarlas en un hecho de repercusión política no tiene precedente en el país. Cuando en una sociedad se traspasa el umbral del respeto a la privacidad, se validan los peores procedimientos y se cae en un tobogán que conduce a un barranco sin fondo. La actuación de Ricardo Claro me parece definitivamente incomprensible. Hay que ser muy ingenuo para pensar que esto es una simple coincidencia. Esta es una operación y a mí me preocupa el daño que le pueda ocasionar a Renovación Nacional, cuando el horizonte político del partido estaba lleno de promisorias posibilidades.

Ese mismo día hablé con *El Mercurio,* luego de tener una serie de conversaciones con gente de RN. Allí me impuse de que el partido había sacado una declaración muy similar a mis comentarios, redactada por Francisco Javier Cuadra, quien estaba indignado con lo ocurrido. La misma noche del programa, incluso, había llamado a Héctor Riesle, otro de los panelistas, para ponerlo de vuelta y media por su agresividad con Sebastián, quien por lo demás se mantuvo de cuerpo presente en el programa aunque internamente sintiera que lo había atropellado un camión.

De todas las personas con que hablé, el más enfático fue Roberto Ossandón.

—Andrés, créeme. La gente de la Matthei está metida en esto. No tengo ninguna prueba, pero es la actitud, la forma en que hablan y se mueven, ¡todo los delata! La Evelyn está irreconocible.

Yo pensé que iba a llegar hecha una fiera, pero está más preocupada que enojada. Ya vas a ver. ¡Están metidos en este forro hasta el cogote!

Cuando me preguntaron acerca de la ola de sospechas que involucraban a gente de RN en el episodio, respondí una frase que resultó una profecía:

—No quiero imaginar que alguien de RN haya proporcionado la cinta a la TV o que hubiera sabido lo que iba a ocurrir y guardara silencio.

Del verdadero alud de informaciones, lo que me dejó más pensativo fue saber que Miguel Otero —presidente subrogante— había corregido el borrador de Cuadra... para omitir toda referencia a Ricardo Claro.

Realmente me pareció inexplicable, aunque Claro fuera un tipo poderoso y gran contribuyente a las finanzas de RN. Es cierto que algunos tiritan sólo de pensar en tenerlo como enemigo, pero su versión acerca de cómo había recibido la cinta era inverosímil: ¿quién recibe en su casa a un desconocido un domingo en la tarde, le acepta una cinta y sin siquiera cerciorarse de que no está trucada, la pone al aire en un programa de televisión pocas horas más tarde? ¡Nadie! Y menos alguien inteligente como Claro. Estaba mintiendo, sin duda. O conocía y confiaba en la persona que le había entregado la cinta o la había recibido de otra manera. Una de dos.

Lo que no me sorprendió nada fue la actitud de Jarpa contra Piñera. Como dijo el senador Ignacio Pérez, «lo pateó en el suelo». Lo más suave que le dijo fue «poco hombre».

Yo hice ver que Jarpa es «la figura más representativa de RN. Debe aportar la serenidad y no echarle más leña al fuego».

Pero más adelante sería aún peor:

—Piñera es como maleta de contrabandista. Tiene doble fondo —insistió Jarpa.

—Jarpa es un matón de boca grande y alma pequeña —respondió Piñera.

La Bomba que viene

Apenas llegué a Chile hablé inmediatamente con el gobierno, concretamente con Enrique Krauss, el ministro del Interior, quien me aseguró tajantemente que ni ellos ni Carabineros ni Investigaciones tenían nada que ver en el asunto. El tema no era menor, ya que un tiempo antes había estallado otro escándalo de espionaje —los llamados planes Halcón— que le había costado la salida al director de Investigaciones.

—Tengo claro que con la respuesta que te doy me juego la cabeza —me dijo Krauss, amigo de mis padres desde siempre—. Pero lo mismo saben los jefes de Carabineros e Investigaciones.

Llamé entonces a Jorge Ballerino al Ejército, que negó todo.

—¿Por qué nos involucran? —me preguntó irritado rechazando tajantemente toda participación de la institución.

—¿Quiénes más que ustedes, Carabineros e Investigaciones tiene equipos para hacer algo así? Te pido que averigües bien. No vaya a ser que terminen con los dedos metidos en el enchufe.

Al par de días me llamó de vuelta.

—Andrés, te confirmo que no tenemos nada que ver. Y te aviso que si se sigue insinuando lo contrario, nos vamos a querellar contra quien sea. ¡Y eso vale también para ti!

El mismo día que llegué estaba convocada una reunión de la directiva. Asistieron todos sus miembros y por unanimidad acordamos que Ricardo Rivadeneira se hiciera parte en la querella interpuesta por el gobierno por el delito de «intercepción de comunicaciones telefónicas». Aprobaron esa resolución Miguel Otero, Cristián Correa y Evelyn Matthei. Después uno de ellos me confesaría que al hacerlo tuvo exactamente la sensación de estar poniéndose la soga al cuello.

Dos días más tarde, Roberto de Andraca organizó una comida ultrasecreta en su casa a la que asistimos Claro, Piñera y yo para intentar buscar una solución al problema. No se avanzó nada. Claro insistió en su versión inverosímil y a mí me pareció que estaba desenfocado en el problema. ¡Su obsesión era hacer que al programa del domingo siguiente concurriera el

arzobispo Oviedo y bendijera la reconciliación entre él y Piñera cerrando el capítulo! ¡Era no entender nada de nada!

Por supuesto su alambicada «solución» no funcionó. El domingo siguiente Ricardo Claro hizo una pomposa declaración en la cual mantuvo su versión original. Dijo que había actuado sin consultar a nadie y todo lo había hecho «por el bien del país». Todos los integrantes del programa renunciaron, en censura a Claro: lo suyo había sido una encerrona.

Esa primera semana Evelyn Matthei hizo tres cosas: «Perdonó» públicamente a Sebastián, insistió una y otra vez en que ni ella ni nadie de su comando tenían nada que ver con el asunto y empezó a argumentar que interceptar conversaciones telefónicas inalámbricas... no era delito.

Los dos meses siguientes fueron propios de una novela policial. Desde el primer día empezaron a aparecer pequeños indicios que inevitablemente derivaban hacia la participación de gente del comando de Evelyn Matthei en la entrega de la cinta a Claro. El primer dato importante en tal sentido fue comprobar que Francisco Ignacio Ossa —hermano de Juan Luis y pieza clave del comando de la Evelyn— se había reunido con Ricardo Claro en un almuerzo el domingo 23, pocas horas antes del famoso programa y luego se había juntado en la calle —donde varias personas conocidas los vieron, incluido un hijo de Ricardo Rivadeneira— con la mismísima Evelyn Matthei. Más adelante Evelyn reconoció algo muy extraño: que se había impuesto de que Richards la iba a «apretar» por un telefonazo a su celular ¡el mismo día del programa! La llamada provenía del conocido maquillador Gonzalo Cáceres, quien supuestamente habría oído a Piñera hablar con Richards. El problema es que la investigación acreditó que la llamada había durado 17 segundos... apenas para decir hola y chao.

Era tal el impacto que el programa había creado que Santiago entero se llenó de rumores... y datos que saltaban por aquí y por allá. Más adelante, dos antecedentes aumentaron las sospechas. El primero fue un inocente comentario que llegó a oídos de una hija de la periodista Gloria Stanley quien se lo trasmitió a

su madre: no había que perderse el programa de Megavisión porque «iba a quedar una grande». Yo mismo —conozco a Gloria —comprobé el cuento: era cierto.

Pero mucho más decisivo fue lo que me dijo Carlos Reymond:

—He recibido una información bajo secreto profesional (expresión que hasta ahí no podría imaginar lo importante que luego sería) que me permite asegurarte que Francisco Ignacio Ossa y Ricardo Claro, en un almuerzo el mismo día del programa de Sebastián, escucharon la cinta. Más aún, después de hacerlo, Francisco Ignacio llamó de ahí mismo a la Evelyn. No me preguntes nada, es todo lo que puedo contarte.

Entretanto la investigación judicial se había iniciado y desfilaban por los tribunales los dirigentes de RN. Desde el primer día, Ricardo Rivadeneira estableció una buena relación con el ministro, quien le soltó una apreciación:

—Me están mintiendo. Ayúdeme usted a que digan la verdad.

A mí me parecía bastante ilógico el curso de la investigación ya que a Claro, que para mí era la punta de la hebra, no lo citaban. Cuando me correspondió ir a declarar, frente a una horda de periodistas, insistí en mi tesis de que ésta era una «operación de inteligencia» y emplacé a Ricardo Claro para que terminara con su «inverosímil explicación» de cómo había recibido la cinta, que no era creíble ni siquiera para «un niño de diez años».

No me lo perdonó nunca más. ¡Fui vetado de todo programa político de Megavisión por años! Y los periodistas que cubrían las noticias pasaban muy malos ratos explicándome por qué las notas que hacían nunca se incluían en los noticiarios. Pero me consolaban: «Al menos tú sales de vez en cuando. ¡A Piñera, Claro no nos deja ni filmarlo!»

Mientras tanto, se abrían otros frentes. Un premonitorio reportaje de *El Mercurio,* de Blanca Arthur, titulado acertadamente «La bomba que viene», hacía notar que se estaba, al parecer, frente a una «bien montada operación de inteligencia para sacar de la pista presidencial» a Piñera y adelantaba una hipótesis

(«la más probable») que era lava hirviendo. Para tal operativo quizas se habrían «usado los nexos que establecieron algunos personeros de RN cuando pasaron por el Ministerio del Interior con agentes o ex agentes de la CNI. Y por lo que se supone, o bien los primeros pidieron ayuda para desbancar a Piñera o los agentes la ofrecieron». La respuesta de Jarpa y su gente no esperó: se querellaron criminalmente.

Más adelante, el artículo anticipaba que la investigación judicial aclararía la «verdadera participación de dirigentes de RN en este operativo que va desde la posibilidad que hayan sido autores intelectuales, hasta que hayan actuado de correo, o al menos hayan sabido lo que venía y no lo hayan atajado».

A esa altura nuestras sospechas iban en aumento: el que miente en cosas chicas esconde algo grande. Y todos los días, por angas o por mangas, se agregaban nuevas contradicciones o mentiras. Ricardo Rivadeneira me hizo una advertencia de la que nunca me despegué:

—Aquí no sabemos qué terreno pisamos y el efecto que puede provocar que los descubramos. Que ellos confiesen. Mi impresión es que no van a resistir mucho más.

Heridas en el ala

A todo esto, en el frente político, Sebastián resolvió «congelar» su candidatura y volcarse por entero a investigar quién había montado el espionaje. La campaña de la Evelyn seguía adelante, pero estaba herida en el ala. De hecho, no sólo la feroz crudeza de la propia cinta dañó seriamente sus perspectivas; el mismo efecto tuvo su actitud posterior y la gradual aparición de más y más evidencias.

El segundo fin de semana de octubre correspondía efectuar el consejo general para renovar las autoridades del partido. Para variar, el sector «jarpista» amenazó con levantar una lista paralela lo que no concretó. Yo mantuve la misma lista de los dos años anteriores, sólo que ahora estaba reducida en número. Los

vicepresidentes eran Rivadeneira, Espina y Reymond; el secretario general Roberto Ossandón y el tesorero Cristián Correa. El único cambio era Rivadeneira por Otero.

Dos días antes del consejo, Roberto Palumbo —que integraba el comando de Evelyn Matthei— organizó una reunión con Jarpa y Gonzalo Eguiguren para tratar el tema de la campaña presidencial y la conducción del partido. Me pidieron que como presidente asumiera un rol activo en la campaña de la Evelyn.

—Prefiero renunciar —fue mi respuesta—. Yo sigo sin entender por qué ustedes la apoyan. Y además, su comando está metido en lo de la cinta y los van a pillar.

Jarpa quedó muy molesto con la respuesta y mis relaciones con él, que ya estaban frías, quedaron gélidas. Lo que no quedó gélido fue el ánimo de Jarpa. El sábado 10 de octubre, antes de inaugurarse el consejo, tuvo un violento altercado —manotazo incluido— con un asesor de Piñera, Jorge Mitarakis, por una infantil disputa acerca de una carpeta de propaganda de la Evelyn, que este último había retirado de una mesa sin permiso.

A mitad de la mañana, cuando la nueva mesa ya había asumido, Ricardo Rivadeneira me confidenció al oído.

—¿Te fijaste que la Evelyn llegó tarde hoy día? Pues bien, venía con la Fernanda Otero. ¡Se abrieron! Hablaron con Palumbo y ahora lo están haciendo con Jarpa.

—¿Qué pasa con Palumbo? No lo veo.

—Quedó tan choqueado, que se fue a dar una vuelta. ¡No puede creer que lo hayan engañado desde el primer día!

De cualquier forma, el consejo deparaba una sorpresa adicional. Con el pretexto de existir «una campaña» para denigrar al Ejército e involucrarlo en el tema del espionaje, Jarpa, Siebert y otros parlamentarios promovieron una resolución que no sólo la rechazaba sino que tenía un «agregado» muy importante: obtener una resolución que descartara tajantemente cualquier modificación de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas.

La historia de tal ley es un episodio oscuro del proceso de reformas constitucionales de 1989. Cuando el Ejecutivo planteó en esa oportunidad aumentar el quórum de esa ley de simple a 4/7,

tanto el equipo negociador de RN como la Concertación lo aprobaron de inmediato en un doble entendido: que la ley se mantendría en los términos entonces vigentes o que, en el evento de modificarse, se haría consensualmente. Pues bien, el gobierno militar en las postrimerías de su mandato dictó una nueva ley, alterando los términos de la preexistente, consagrando grados inéditos de autonomía para las instituciones armadas respecto del poder civil y menoscabando fuertemente las atribuciones presidenciales.

Durante el transcurso del consejo tuve que esforzarme para atenuar los términos de esa declaración y me preocupé de dejar constancia de que era una materia que nunca había sido objeto de un estudio pormenorizado al interior de RN. Sostuve en consecuencia, que no correspondía despacharla de la manera que pretendían los autores de la declaración. Después vine a caer en cuenta de un hecho sintomático: no obstante que Jarpa fue informado esa mañana de la participación de un oficial de Ejército en el espionaje, igual perseveró en sacar adelante la mentada declaración.

Un par de días después, Evelyn Matthei le contó por primera vez su versión completa a Ricardo Rivadeneira y Carlos Reymond. Según ella, el día 23 de agosto la había llamado a su casa una persona que dijo ser un radioaficionado para decirle que tenía un antecedente importante que trasmitirle en relación con su campaña. Ella quedó de juntarse en el Coppelia —un conocido café de Providencia— para recibirlo. Antes de acudir a la cita, había llamado a Francisco Ignacio. Ossa para que la acompañara. El encuentro había tenido lugar en el lugar convenido. El sujeto y una acompañante, luego identificada como su mujer, le habrían hecho escuchar la cinta. Más tarde, el sujeto se había identificado como oficial de Ejército y le habría entregado la cinta pidiéndole únicamente que le cortaran un pedazo al principio y otro al final para que no se pudiera identificar su origen. Ella, muy impactada, había ido junto a Francisco Ignacio. a la casa de Cristián Correa, quien, una vez informado, dio dos consejos:

—Cuéntenle a Claro e infórmenle a Otero.

Lo primero lo hizo Ossa y ahí mismo partió el vértigo: Claro

les pide que le entreguen la cinta para difundirla en el programa de la noche. Luego de consultar a la Evelyn —y pese a la cerrada oposición de su marido, Jorge Desormeaux— acceden. Francisco Ignacio corta la cinta tal como el oficial lo había pedido y se le entrega a Ricardo Claro.

Lo segundo lo hizo a primera hora del día siguiente Evelyn Matthei: Otero —presidente subrogante de RN en mi ausencia— le aconseja que guarde completo y total silencio acerca de lo ocurrido. ¡Una actitud inexplicable!... salvo porque él entendió, según sostuvo, que la confesión era al amparo del secreto profesional.

Cuando el sábado 17 de octubre, en una larga conversación, la Evelyn me repitió el cuento, no le creí una palabra:

—Me estás mintiendo —le dije—. Tu relato no se sostiene. ¿Un oficial de Ejército actuando así? ¿Cómo consiguió la cinta? ¿Quién se la dio ? ¿Sacar material clasificado del regimiento así como así? ¿Por qué no lo recibiste en tu casa si era un desconocido?

Tenía cien preguntas más que hacerle. Pero la respuesta de la Evelyn me dejó en claro que por su parte no habría avance alguno.

—Tampoco me creíste que podía ser mejor candidata que Piñera.

Una brasa en el bolsillo

Las siguientes semanas fueron de negra angustia. Ricardo Rivadeneira y yo coincidíamos en que la versión era inconsistente. Para mí, estaban actuando bajo amenaza o en circunstancias todavía peores. Por alguna razón no querían contar la verdad. La petición de la Evelyn era una sola: buscar una salida al estilo de lo que habían hecho los democratacristianos en el caso «Carmengate» (un fraude electoral en una elección interna del PDC que terminó salpicando al mismísimo Aylwin, pero que entró al cofre hermético del bien común del partido). Pero no se podía. Aquí había una investigación judicial que tenía su

propio ritmo, no sabíamos con qué estábamos lidiando y, para peor, la Evelyn insistía en seguir con su candidatura presidencial: una clásica fuga hacia adelante.

Pocas veces una información me resultó más difícil de manejar. Era una brasa ardiendo en un bolsillo. Todos los días veía cómo la pertinacia en la mentira hacía difícil toda salida. La Evelyn negaba toda participación suya en cuanto programa de televisión la invitasen y los miembros de su comando insistían en lo mismo. La convivencia en el partido era simplemente insoportable. Los diarios decían que el clima interno de RN tenía al partido sumido en el «más negro abismo», mientras Ricardo Rivadeneira seguía aferrado a su premisa: «que ellos confiesen; aquí puede pasar cualquier cosa».

Yo tomé otra decisión: con el único que hablaría sería con Rivadeneira. Así lo hice y, como era de esperar, ello causó gran molestia en Sebastián, Alberto Espina y Roberto Ossandón.

—Somos tus compañeros de directiva y tus amigos. ¿Cómo nos haces esto?

—Es mejor para todos —fue mi respuesta—. Después entenderán.

A todo esto, yo seguía acumulando antecedentes. ¡Todos los días alguien me llamaba para aportarme un dato! A veces servían, otras no valían nada. Todos los dirigentes de RN tenían el espionaje entre ceja y ceja.

—En el Ejército hay una enorme procupación —me dijo Francisco Javier Cuadra—. La idea que hay es que los están inculpando. Si tú tienes información relevante, creo que debieras comunicarla.

—¿Y quién me asegura a quién debo dársela? —fue mi respuesta.

Un par de días después solté prenda:

—Usted parece tener información importante y no quiere comunicárnosla —me dijo sin identificarme un oficial de alto rango en forma perentoria—. Está equivocándose. Si pasa algo, será responsable por guardar información que nos habría permitido evitar desgracias mayores.

Me quedé helado.

—Busquen allá arriba en Peñalolén —dije indicando el Comando de Telecomunicaciones del Ejército.

A mediados de octubre tuvimos una reunión Ricardo Rivadeneira, Jarpa y yo para tratar el espinudo y agobiante tema. Pese a que Jarpa estaba muy exasperado, convinimos en que para generar un cuadro que permitiera buscar una solución política y al mismo tiempo descubrir la verdad había que bajar ambas candidaturas.

—Ni la candidatura de Evelyn Matthei ni la de Sebastián Piñera unen a Renovación Nacional. Hay que buscar alternativas distintas para alcanzar la unidad del partido —declaré el 20 de octubre saliendo de la reunión.

—Habiendo una convención por delante, nadie puede decir que la postulación de Evelyn Matthei llega hasta las últimas consecuencias —agregó a continuación coordinadamente Jarpa.

La estrategia fracasó. Al día siguiente, la Evelyn aseguró que su campaña seguía adelante al tiempo que refutaba rumores de que se «bajaría» a cambio de un ocultamiento de lo ocurrido. Sin embargo, eso no fue lo más extraño: por primera vez en meses, Sebastián y la Evelyn se juntaron, conversaron un par de horas y convinieron en que realizarían «trece seminarios juntos en las regiones del país». Me resultó una idea descabellada, pero igual tuve que apoyarla. ¡Era tan descabellada que ni siquiera avanzó un milímetro! Pocos días después Sebastián le daba una entrevista a Raquel Correa en la que afirmaba que tenía «re-co-no-ci-mien-tos» de que la cinta había sido escuchada antes por el comando Matthei.

—¿Quién te lo dijo? —le pregunté.

—La Evelyn —me respondió y lo hizo con desagrado, porque ella le había contado que Rivadeneira y yo teníamos, desde semanas antes, antecedentes que nunca le habíamos mencionado.

De ahí para adelante mi relación con Sebastián se enfrió. ¡Y eso que todos los días me criticaban por pasarle información!

Las declaraciones de Sebastián precipitaron todo. El resto de la semana se fue entre álgidas reuniones acerca de cómo contar

lo ocurrido. El eje Correa, Ossa y Matthei se quebró absolutamente: la propia Evelyn había roto el compromiso de silencio y además con el propio Sebastián. Cristián Correa hizo un completo relato a la directiva del partido. Luego tuvieron lugar frenéticas reuniones donde se discutía qué debería explicarse a la opinión pública. En realidad, para Ricardo Rivadeneira y para mí eso era bien poco importante: ni él ni yo confiábamos en la versión que se daría. Para mí lo importante era terminar con la angustia, que a nadie le pasara nada (aquello de las «desgracias mayores» me tenía sin dormir), y una vez que hablaran, dijeran lo que dijeran, la verdad-verdad tendría que imponerse.

El sábado 7 de noviembre —después de 70 días de tajante negativa— Evelyn Matthei enfrentó a la prensa en Antonio Varas.

El día anterior había ido a prestar declaración «voluntaria» ante el ministro, para «contar toda la verdad». Apenas lo supo Francisco Ignacio. Ossa dijo: «Yo también voy». Fue un día curioso. Ricardo Rivadeneira habló con el ministro Chaigneu para que tomara las declaraciones esa misma tarde. Pablo Rodríguez, que a todo esto era el abogado defensor de Ricardo Claro, se topó con Rivadeneira en los tribunales. Rodríguez le dijo que su cliente estaba muy molesto conmigo por mis declaraciones en su contra, que consideraba muy «ofensivas».

—Estoy estudiando si hay mérito para querellarnos —le dijo.

Rivadeneira se limitó a responderle que la Evelyn estaba en ese mismo momento reconociendo que ellos le habían entregado la cinta a Claro. Pablo Rodríguez se puso pálido: a él también Claro le había mentido. Al final de las largas declaraciones de Ossa y Matthei, el ministro Chaigneau cruzó una pocas palabras con Ricardo Rivadeneira.

—Muchas gracias, Ricardo, por toda su colaboración a la justicia... pero debo decirle que me siguen mintiendo.

Lo que el ministro no le contó a Ricardo fue que unos días antes le había despachado una citación a Evelyn Matthei: quería interrogarla antes de decretar su desafuero.

De todas formas, la declaración de la Evelyn explotó como una bomba de racimo.

No sólo ella había mentido: también sus colaboradores directos, Cristián Correa y Francisco Ignacio Ossa.

Y Ricardo Claro: era falsa su versión de cómo había recibido la cinta.

Miguel Otero quedó en una posición muy comprometida: la defensa de la Evelyn negó tajantemente que ella le hubiera hablado bajo «secreto profesional». Más que eso: le imputaron a Otero haber actuado para favorecer su propia postulación a la presidencia de la República.

Y hasta Héctor Riesle había mentido: Ricardo Claro lo había citado a su casa minutos antes del programa, habían escuchado juntos la cinta y... habían preparado el rol que ambos desempeñarían más tarde. ¡Patético!

Las esquirlas de verdades y mentiras llegaron prácticamente a todos los rincones de Renovación Nacional.

«HUACHITO, YA TODO SE SABE...»

Ese fin de semana fue eterno para todos. Yo tuve que partir a un bautizo del hijo de Eugen y Lisellote Roth en Temuco, ya que era el padrino. Por eso sólo estuve un rato en la casa de Rivadeneira, a donde llegó Evelyn Matthei después de confesar ante la prensa. El tema era uno solo: en la declaración de la mañana no se mencionaba al capitán Diez, sino que se insistía en el cuento del radioaficionado.

La Evelyn insistió en hablar... con Pinochet, pero estaba en Punta Arenas. El tema se derivó a Ballerino, quien estaba jugando golf y partió más que rápido a la casa de Rivadeneira.

—Te advertí de los dedos en el enchufe —fue todo lo que alcancé a decirle y salí corriendo al aeropuerto.

La Evelyn se negaba a dar el nombre del oficial si no le garantizaban absoluta protección para él. Ballerino rechazó la petición: era inadmisible. Después de un rato, la Evelyn le dijo el nombre: el capitán Fernando Diez, quien al rato fue detenido en el Comando de Telecomunicaciones.

El domingo fue otro día sin pausa. A primera hora apareció un miembro del Ejército en la casa de Evelyn Matthei con un álbum de fotos para que reconociera a Diez, pero ella se negó. Con Rivadeneira partió después de almuerzo a la casa de Ballerino y apareció de nuevo el álbum: Evelyn no reconoció a nadie. Desde la casa de Jorge Ballerino llamaron a Jarpa, para ver si creía posible establecer alguna negociación con el gobierno.

—Ya es muy tarde, Evelyn.

Otro intento.

—Voy a llamar a mi papá. Es muy amigo del ministro Rojas.

Hay estupor en la cara de todos. En esa casa, ése es un nombre impronunciable. Llama a su padre y la respuesta de su mamá la deja de una pieza.

—Tu papá está en la casa del ministro Rojas.

Al rato vuelve a insistir.

—Véngase para acá. Tengo algo importante que decirle —le dice el general Fernando Matthei.

Parte rápido, siempre con Rivadeneira. Y el estupor se transforma en asombro: el gobierno está al tanto de todo. Por sus propios medios, conoce toda la historia, incluida la identidad del capitán Diez. Así se lo ha dicho personalmente el ministro Rojas.

Vuelta a la casa de Ballerino. La orden es ubicar a Ossa para que identifique a Diez ya que la Evelyn insiste en que es mala «fisonomista». Comienzan a ubicarlo, pero nadie sabe dónde está. El único dato es que salió después de almuerzo. Empiezan a correr los minutos. La inquietud se transforma en preocupación y la preocupacion en temor.

—A éste lo mataron —dice Ballerino un par de horas más tarde y ya nadie respira. Al rato suena el teléfono celular de la Evelyn y no, no lo han matado. Es Ossa. Calma otra vez. Aparece al rato. Ahí está el álbum. Parten luego a Peñalolén ni más ni menos que con el brigadier general Ricardo Contreras, comandante del Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén quien, sin saberlo, cumple sus últimas gestiones en ese cargo. Poco después sería relevado de su puesto y llamado a retiro. A

él se le aplica un concepto a veces un tanto elástico: «responsabilidad del mando».

En Peñalolén el encuentro entre Diez y la Evelyn es dramático:

—Huachito, ya todo se sabe. Tienes que decir la verdad. Nada te va a pasar, tenemos los mejores abogados.

El oficial de inteligencia se va de negativa y afirma que es víctima de una celada. ¡La familiaridad del trato le provoca irritación y pánico! A gritos, amenaza con suicidarse. Hay varios generales y oficiales de la Brigada de Inteligencia del Ejército presentes. ¿Qué hacían allí el domingo a las 10 de la noche? ¿Quién los mandó llamar? ¿Y para qué?

Primicia noticiosa

Ya es lunes 9 de noviembre: mi teléfono suena temprano. La misma voz que me advirtió sobre «evitar desgracias mayores» me señala: «El capitán Diez ya está confeso. Mañana presta declaración. Es importante que lo sepas. Maneja esa información».

Mensaje recibido.

Llego a la sede de Antonio Varas y ya hay una nube de periodistas.

—Un oficial del Ejército está confeso de haber entregado la cinta a Evelyn Matthei —declaró—. Mañana será puesto a disposición de los tribunales.

A la 1:30 de la tarde una declaración oficial del Ejército me desmiente: afirma que los antecedentes que «involucrarían» a un miembro de la institución están siendo investigados y «a la fecha no se han obtenido antecedentes que permitan acreditar o desvirtuar esta información». Es obviamente un comunicado falso: el ministro de Defensa, Ballerino y todos los que han estado encima del asunto saben que la participación del capitán Diez está más que comprobada. Pero Jarpa dice a las radios que él «le cree más al Ejército» que a mí.

Peor para él, porque al día siguiente se comprueba que mi «dato» era certero: otra declaración oficial del Ejército admite

que el capitán Diez reconoció «por propia iniciativa» haber efectuado la grabación «mientras manipulaba un equipo de la unidad a que pertenece». Esa confesión es como las otras: falsa, pero la madeja se va desenredando.

El jueves de esa misma semana Cristián Correa me pide a mí y a Ricardo que asistamos a una reunión con sus abogados: Juan Eduardo Palma, que lo representa frente al tribunal supremo de RN, y Nurieldín Hermosilla en el ámbito propiamente judicial. El objetivo de la reunión es uno solo: quieren informarnos que darán a conocer diversos testimonios de Evelyn Matthei que involucran «a lo menos a un coronel» en el tema de las cintas. ¿Las cintas? Sí, las cintas. No se trata de una sola. La propia Evelyn le mencionó su existencia a Cristián Correa.

—¿Cómo reaccionó la Evelyn? —preguntó Ricardo.

—Se derrumbó —fue la respuesta de Nurieldín Hermosilla—. Pero cuando se cuenta la verdad se cuenta entera.

Más adelante, en el proceso judicial habría un careo: Correa insiste en su versión; la Evelyn la niega. Dice que fue una «broma».

A la salida hice dos «telefonazos» y pacté dos reuniones, una detrás de otra: la primera con Krauss, la segunda con Carlos Cáceres. La con Krauss era obvia: el gobierno debía saber lo que estaba pasando. A la salida de La Moneda declaré a los periodistas que había ido a agradecer la «comprensión del gobierno».

¿Por qué la reunión con Cáceres? Porque sus contactos con el Ejército eran inmejorables y ante el cariz de los hechos había que tratar de tener algún canal confiable abierto.

—¿Qué te parece si llamo a Jorge Ballerino? —me preguntó Caceres.

Dudé un instante, pero acepté. No sólo porque los dos eran muy amigos, sino porque igual Ballerino iba a saber.

Nos reunimos los tres en casa de Cáceres en calle Presidente Errázuriz. Relaté lo que sabía y después conversamos a fondo todo el tema. Al final Ballerino dejo entrever una enorme preocupación.

—Esto es gravísimo para la institución —dijo en tono solemne.

Después he pensado que fui muy ingenuo. Quizas debí hablar sólo con Cáceres. En una de ésas, fui a mostrarle al zorro dónde estaban las llaves del corral.

Un ministro y dos hipótesis

El viernes recibí un llamado del ministro de Defensa, Patricio Rojas.

—Tengo una información oficial de la mayor gravedad que darte. ¿Puedes venir mañana a mi casa?

Allí estuvimos con Ricardo Rivadeneira el sábado 15 de noviembre. El ministro Rojas estaba en compañía del subsecretario de Guerra, Marcos Sánchez.

—Quiero informarles que el gobierno tiene antecedentes directos y definitivos de que la diputada Matthei recibió la cinta una semana antes de lo que afirma. La entrega de la cinta no es una operación aislada, sino que compromete gravemente a personal del Ejército con alcances aún no precisados.

Tenía razón Rojas para estar tan seguro de la información: le había sido proporcionada directamente por el vicecomandante del Ejército, general Jorge Lúcar, y por el comandante de Peñalolén, general Ricardo Contreras.

Durante la reunión se conversó sobre las dos hipótesis posibles frente al caso. Una se ajustaba a la versión Matthei. Es decir, la cinta fue entregada por un oficial que corrió con colores propios. La otra era distinta. Todo el cuento del Coppelia no pasaba de ser una fachada. En verdad lo que había ocurrido era que un grupo del Ejército había establecido un flujo de información hacia el comando Matthei. La cinta era sólo una de tantas. También habían transcripciones mecanografiadas. El problema era hacer aparecer la cinta de Piñera de una manera que no levantara sospecha: de allí el invento del radioaficionado y el raro encuentro en el Coppelia. El destino de la cinta era el tribunal supremo, la directiva del partido o la comisión política, pero todo se trastocó brutalmente con la intervención de Ricardo Claro. Al

aconsejar Cristián Correa que le contaran a Claro y al pedir éste que le entregaran la cinta, se generó un curso que nadie había previsto. De allí las reuniones, las consultas y las conversaciones a ritmo frenético de los implicados en las horas previas al programa. ¡Aquel que grabó y ordenó entregar la cinta jamás pensó que Claro detonaría la bomba por televisión!

A todo esto, el ministro de Defensa quería pedirnos que dejáramos el caso en manos del gobierno y, sobre todo, que cortáramos todo contacto directo con los mandos del Ejército. El subsecretario Sánchez me preguntó cómo había sabido, antes incluso que el gobierno, que Diez había confesado. Le dije que a través de un llamado anónimo. Ni Rojas ni él me lo creyeron.

—Aclarar este asunto compete sólo al Ministerio de Defensa —reafirmó Rojas—. No corresponde que dirigentes políticos tengan interlocución directa con el Ejército

Nos miramos con Ricardo Rivadeneira. La verdad es que no había inconveniente. Era incluso mejor.

—El lunes informaremos a la comisión política —le advertí.

Bastante impactados volvimos a la sede de Renovación donde, para variar, estaba la nube de periodistas.

—La entrega de la cinta no fue una operacion aislada —declaré.

Piromanía

El lunes 16 de noviembre informamos a la comisión política acerca de la reunión con el ministro Rojas. Todos quedaron consternados. ¿Cuándo emergería de una vez por todas la verdad?

Sin embargo, un par de días más tarde, Enrique Correa afirmó que la información proporcionada por Rojas a RN eran sólo «conjeturas». Y el 19 de noviembre el ministro Rojas declaró a los diarios que «no corresponde al Ejército ni a mí señalar ni precisar la fecha exacta de la entrega de la cinta, porque ése es un asunto que corresponde estrictamente al plano político de Renovacion Nacional». Según él, era algo que nosotros debíamos

averiguar. ¡Definitivamente absurdo! ¿Cómo podríamos haberlo hecho nosotros? ¿No nos habían exigido dejar todo en manos de ellos? Resumen: vuelta en 180 grados. Aun así, cuando los periodistas le preguntaron al ministro qué opinaba acerca de la fecha de entrega de la cinta, la respuesta pareció volver atrás: «Cualquiera que vea el programa no necesita ser un investigador muy despierto para saber qué es lo que puede haber ocurrido».

El hecho concreto es que de allí en adelante el gobierno se cerró como ostra. La conclusión la sacó Ricardo Rivadeneira:

—Hay que olvidarse del gobierno. Por alguna razón tomó otro rumbo.

En todo caso, luego de una reunión Aylwin-Pinochet el gobierno ordenó al Ejército efectuar una investigación interna para aclarar lo ocurrido. ¡Era lo mínimo! Las versiones oficiales eran contradictorias con otros antecedentes y no aportaban luz acerca de lo acontecido. El gobierno exigía una aclaración en forma. A cargo de la investigación fue designado el auditor general: general Guillermo Garín.

El 16 de diciembre el propio Pinochet informó que la investigación había terminado: «Estoy mandando un documento a la presidencia de la Républica y una copia al Ministerio de Defensa». Y luego declaró:

—El informe es confidencial. Hay más implicados.

Sin embargo, dos días más tarde el ministro de Defensa declaraba que el informe «no aportaba mayores novedades», pues se limitaba a reiterar hechos ya comunicados por el Ejército antes de que se ordenara la investigación: que estaban en revisión los procedimientos internos y que un par de generales habían sido cambiados de puesto. ¡La nada misma! Y el Ejército decía que Pinochet había sido «malinterpretado».

Un reportaje de *El Mercurio* de ese domingo recogió nuestro punto de vista: «Allamand desmiente el Informe Garín».

Unos meses más tarde averiguamos lo que había ocurrido. El famoso informe nunca llegó a manos del gobierno, sino apenas delgadas tres carillas de conclusiones, porque cuando el ministro Rojas lo solicitó se encontró con una sorpresa:

—No es posible, señor ministro. El informe, por instrucciones superiores, ha sido incinerado —oyó atónito.

¿Qué hizo entonces el gobierno de Aylwin ? ¡Nada!

Años más tarde, frente a un café, Enrique Correa lo admitiría.

—¡Para qué te voy a decir una cosa por otra! En el asunto del espionaje... ¡no nos pudimos portar peor con Renovación!

Al fragor de los fallos

Entretanto, el escándalo ganaba y ganaba portadas de diarios y revistas.

El 15 de diciembre el ministro Chaigneau terminó su trabajo sometiendo a proceso al capitán Diez por el delito de «intercepción o interferencia maliciosa de telecomunicaciones» y a Ricardo Claro, Francisco Ignacio Ossa y Evelyn Matthei como encubridores del delito, razón por la cual pidió el desafuero de la diputada. Acto seguido se declaró incompetente. La causa pasó a la justicia militar. Al único que absolvió fue a Cristián Correa, el que más tarde me diría:

—Di dos malos consejos partiendo a Buenos Aires. Cuando volví, todos estaban arriba del tren de negar todo. Me debí bajar en la siguente estación. Y lo que más me duele, es que he hecho sufrir a mi mujer (Ana María Illanes) lo indecible.

La Corte de Apelaciones, sin embargo desestimó la petición de desafuero de Evelyn Matthei y, más adelante, en enero de 1993, la Corte Marcial determinó que escuchar una conversación telefónica privada, grabarla y difundirla no constituía delito, dejando sin efecto todos los autos de procesamiento.

A su vez el tribunal supremo de Renovación Nacional dictó su sentencia: Evelyn Matthei fue sancionada con la pérdida de sus derechos como militante por espacio de diez años y con la imposibilidad de optar a cargos públicos. Correa y Ossa fueron sentenciados a lo mismo por un plazo de tres años. Miguel Otero recibió sólo dos y a Piñera únicamente se le sancionó con

una censura por escrito e inhabilidad para optar a cargos directivos por un año.

El fallo desató un nuevo vendaval, ya que las sanciones aparecían —y eran— asimétricas. Por supuesto, nada dije. Lo último que podía hacer era debilitar la autoridad del tribunal, aunque con Ricardo señalamos que la sentencia podría «revisarse más adelante» ya que todos tienen derecho a una «segunda oportunidad». La reacción de Francisco Ignacio Ossa y Evelyn Matthei no se hizo esperar: me responsabilizaron a mí del fallo y adujeron que yo tenía un «compromiso indebido con Piñera», aludiendo a una supuesta dependencia económica. La «guerra sucia» de RN, como tituló una publicación, llegó a su apogeo. Que formularan cargos políticos era algo comprensible en la desazón con que recibieron las sentencias, pero lo otro, más aún en gente que me conocía bien, fue un motivo de gran dolor personal y familiar. Al poco tiempo renunciaron a Renovación. El hijo de Jarpa, Francisco, por entonces presidente comunal de Las Condes, habló incluso de un «par de líderes corruptos», aludiéndo a mí y a Sebastián.

Todo en verdad fue muy duro e injusto. Sin embargo, la experiencia más dolorosa de todos estos hechos fue la fisura de las amistades, incluso algunas antiguas. El amargo episodio produjo un distanciamiento con Juan Luis Ossa, que es mi amigo de toda la vida —él y la Lucía Santa Cruz son los padrinos de Juan Andrés—, si bien luego de un tiempo lo superamos, como hace la gente que se quiere y respeta. Ambos estaban en Europa cuando ocurrió todo y, semanas después, cuando volvieron ya los acontecimientos habían adquirido un curso inamovible.

Es comprensible la recomposición. Los hermanos son los hermanos. Punto final.

Coroneles sueltos

El traspaso del caso a la justicia militar fue lo mismo que echarle una camionada de tierra. El proceso pareció dirigido a no

encontar ningún culpable, no seguir ninguna pista, no reparar en ninguna contradicción flagrante. Ojalá dejar todo en nada.

Basta revisar el expediente para advertir cómo la investigación de la justicia militar fue apenas una parodia. Inclúso todos los aspectos de la investigación practicada por el ministro Chaigneau, que deberían haber conducido a aclarar lo ocurrido, se abandonan o simplemente se ignoran.

Son demasiados los cabos sueltos. De partida, quién y cómo se grabó la conversación es un misterio. Hay demasiadas versiones contradictorias, pero lo único claro es que el azar no interceptó la llamada. No en vano el capitán Diez era un sujeto formado en las tareas de inteligencia. Su currículo es nutrido: ex agente de la CNI, luego traspasado a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), experto en instalaciones telefónicas. ¿Quién cree que un impulso —mitad visceral, mitad romántico— lo hizo sacar la cinta del regimiento, traspasarla de un casette a otro y luego ir a entregarla en un lugar público —casi como queriendo ser visto— acompañado de su mujer? Ninguna explicación hay para un hecho clave: la cinta que el capitán Diez le entrega a Evelyn Matthei está editada, ya que los casi ocho minutos de la conversación original están comprimidos en poco más de tres. Tiene 17 cortes, la velocidad está aumentada y los garabatos están agrupados. ¿Quién la editó? Sólo una cosa se sabe: no fue Diez.

Ese solo hecho derrumba la tesis de la actuación solitaria y sin planificación. Otro aspecto oscuro es cómo obtuvo el capitán Diez el teléfono de Evelyn Matthei y luego cómo logró Francisco Ignacio Ossa comunicarse tan fácilmente con él varias veces antes del desenlace. Un aspecto muy significativo —que la investigación de la justicia militar simplemente omite— tiene que ver con lo que habría ocurrido efectivamente el día que Evelyn Matthei y Francisco Ignacio Ossa concurren al Coppelia. De partida, ambos testimonios no coinciden respecto del recorrido que habrían efectuado, luego de que el capitán Diez abordó el vehículo. Sin embargo, aún más importante que ello es la declaración prestada voluntariamente por el abogado Leonardo Montero y su mujer, Isabel del Valle, en el proceso: estas

dos personas afirman que estaban estacionados frente al Mall Panorámico y que vieron a Ossa y Matthei caminar hacia el auto que estaba estacionado, exactamente al lado de ellos, abordarlo y luego partir. Pues bien: ni Evelyn Matthei ni Ossa jamás dijeron que se habían estacionado allí ni en ninguna otra parte: sólo declararon haber recogido al capitán Diez y, luego de una vuelta, haberlo dejado en Lyon con avenida 11 de Septiembre. Nunca dijeron que se habían detenido ni menos bajado del auto. El ministro Chaigneau careó a Ossa con Montero y su mujer: cada cual se mantuvo en sus dichos. Ossa negó tajantemente el hecho y los testigos declararon haber incluso bromeado con el cuidador de los parquímetros acerca de la «propina que le había dejado la diputada». Alguien dice la verdad y alguien miente. No hay que ser investigador privado para darse cuenta de por qué a Chaigneau le interesó el dato: si Montero y su mujer están en la verdad, se concluye que la ida al Coppelia fue sólo una fachada para aparecer recibiendo la cinta en tal lugar.

Muy notable también es lo que ocurre cuando el fiscal militar oficia al ministro Rojas para que informe sobre la fecha de entrega efectiva de la cinta: Rojas, en vez de contestar, se niega aduciendo que el oficio «interfiere en materias propias y exclusivas de un ministro de Estado».

Tampoco hay explicación para otro hecho revelador: el capitán Diez admite en el proceso que su primera confesión fue formulada siguiendo una pauta de oficiales de la DINE. ¿Puede imaginarse algo más irregular? Hay mucho más. Diez fue procesado sólo por dos delitos menores: «incumplimiento de deberes militares» e «incumplimiento de órdenes superiores». Esta última acusación se basaba en la existencia de una orden registrada en un libro oficial del Comando de Telecomunicaciones que prohibía «la búsqueda, intercepción, escucha, grabación y localización de emisiones civiles de todo tipo». Pues bien, tal orden databa del 20 de mayo de 1992, pero a la defensa de Diez no le costó nada demostrar que era una burda falsificación: tal orden estaba antedatada y sobrepuesta a otra fecha. Por supuesto, la justicia militar nada hizo para averiguar quién había ordenado efectuar

tal falsificación, practicada después que estalló el escándalo, en un organismo cuya importante misión es efectuar tareas de inteligencia externa de gran importancia para la seguridad del país.

En fin, de que la famosa cinta no fue la única que circuló en esos días hay más de un antecedente concluyente. Sin embargo, las restricciones para accionar en el proceso de la justicia militar, una sensación de náusea generalizada con todo lo que tuviera que ver con el espionaje y la necesidad de concentrar la atención en el esfuerzo de darle viabilidad política a Renovación Nacional nos fueron alejando de la investigación. Incluso Sebastián entró en ese carril, aunque en su caso influyeron otros dos hechos: el primero, un cuasi secuestro de su hijo Cristóbal con el sello indeleble de la amenaza y luego una conversación con el propio presidente de la República.

A principios de marzo de 1993, Sebastián se topó en el Congreso con Mariana Aylwin, quien le preguntó qué había pasado con la investigación. Sebastián le hizo un breve relato, mostrándose descorazonado tanto porque nadie en Renovación quería saber más del asunto como porque el gobierno —concretamente el Ministerio de Defensa— ni siquiera había reclamado por la incineración de la investigación.

—Hoy mismo hablo con mi papá —le dijo la Mariana.

Aylwin recibió dos días después en su casa a Sebastián, quien le hizo un pormenorizado relato. La reacción del presidente no se hizo esperar:

—Sebastián, esto no va a quedar así. Mañana parto a Europa, pero a mi vuelta tendrá noticias mías.

Ello nunca ocurrió: mientras estaba Aylwin en el extranjero, «un pesado boinazo», según lo calificó Ascanio Cavallo, cayó sobre el país. Otro movimiento militar de efectos similares al «ejercicio de enlace» tuvo lugar motivado —otra vez— por una mezcla de problemas judiciales de efectivos del Ejército y la reapertura de procesos que afectaban a familiares de Pinochet. De allí arrancaron una serie de negociaciones entre el gobierno por un lado, representado para este efecto por el vicepresidente Krauss y el ministro Enrique Correa, y el Ejército por el otro,

encabezado por el propio Pinochet y el general Ballerino. Lugar de los encuentros: la casa del general Ballerino... hecho más elocuente que mil palabras. Allá se trasladó el vicepresidente Krauss. Todavía peor, durante estas negociaciones se intercambiaron «minutas» entre las partes, configurándose uno de los episodios más reveladores de la relación cívico-militar durante la transición. Allí el gobierno —se quiera reconocer o no— adoptó una serie de decisiones políticas de importancia, entre ellas, dejar de tramitar la modificación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas.

El «boinazo» tuvo un rebote imprevisto en RN. Yo formulé, tan pronto se produjo claras declaraciones de respaldo a la autoridad democrática. Pues bien, el senador Francisco Prat presentó su renuncia a la vicepresidencia para expresar su desacuerdo con mi actuación. Tal como me lo dijo por teléfono, él consideraba que lo que correspondía era apoyar sin reservas la «legítima manifestación de molestia del Ejército». Al día siguiente, me imagino que se dio cuenta de que su actitud era impresentable: retiró su renuncia ante la comisión política.

En esas mismas semanas, y a partir de lo ocurrido, todos en RN y el propio Sebastián fuimos cerrando mentalmente un capítulo estremecedor de nuestra vida política y personal:

—Hasta aquí no más llegamos —concluimos.

La cola del diablo

Los efectos políticos del espionaje fueron evidentes: la opción presidencial de RN en su conjunto se evaporó.

Internamente los daños fueron trágicos. La convivencia interna se resquebrajó y la «patrulla juvenil» se desarticuló por completo.

Muchas cosas confluyeron para que los eventos que remecieron a Renovación, y de pasada al país político, tuvieran lugar. En el origen están, una vez más, las diferencias entre los proyectos que cohabitaban en RN. Lo único que no lo hizo nítido es la

mayor anomalía política del conflicto interno: Evelyn Matthei fue puesta a la cabeza de una postulación cuyo contenido, al menos hasta ese momento, le era ajeno. Ese mismo hecho tiñó de aristas personales una pugna que de lo contrario habría seguido carriles más políticos: una candidatura habría representado el ala más liberal, la otra el ala más tradicional. Al mismo tiempo, la personalización de la pugna a partir de las descalificiones personales caldeó el clima de la competencia interna. Ciertamente hubo inexperiencia y un ímpetu demasiado avasallador. Todo era muy rápido: visto a la distancia, parece casi absurdo que los dos candidatos presidenciales de alguna forma vinieran llegando recién a la política. La competencia se desbordó temprano y no hubo forma —ni yo como presidente logré— mantener las aguas en el cauce. Hubo demasiada pasión en cada paso, mucho fuego en cada discrepancia y se traspasó demasiado livianamente la línea de la deslealtad. Hubo inmadurez sin duda: pero ése es un cargo que sería injusto achacárselo solamente a los protagonistas cronológicamente más jóvenes. ¡Algunas de las actuaciones más censurables pertenecen a quienes hacía ya muchos, muchos años habían abandonado el colegio!

Años después del episodio, sigo pensando que no hubo un involucramiento institucional del Ejército como tal en el diseño de la operación de inteligencia que, primero, interfirió las conversaciones telefónicas de los dirigentes de RN y luego puso la cinta de marras en manos del comando de Evelyn Matthei. Sí creo, en cambio, que un grupo enquistado en las alturas del Ejército —con evidentes motivaciones políticas— actuó para neutralizar el despliegue de un proyecto político que contrariaba sus convicciones. Y también pienso que, una vez que estalló el escándalo, el Ejército como tal impidió que la verdad aflorara ...para lo que contó con la desilusionante complicidad del gobierno.

Las actuaciones de destacados dirigentes de Renovación fueron censurables, pero en abono de ellos hay que apuntar el clima enardecido que otros habían creado, el fragor de una competencia desbordada y un hecho que nadie puede obviar: ¿cuántos partidos o instituciones resistirían si las conversaciones

de sus dirigentes al fragor de los conflictos internos fueran difundidas a través de la televisión?

No se trata de recurrir al tan manido mal de muchos que termina operando como consuelo de tontos. Se trata de mirar las cosas despojados tanto del cinismo con que muchas veces se juzgan los actos ajenos, como de la benevolencia oportunista con se analizan los propios.

Es evidente que las actuaciones de los protagonistas de RN generaron efectos de magnitudes que ellos nunca sospecharon. Es también razonable pensar que se fueron enredando en sus errores iniciales —como tantas veces ocurre en la vida— dando todos los días pasos hacia el abismo: al negar su intervención al día siguente del fatídico programa, dinamitaron los puentes para retroceder y se ataron con cadenas a una versión sin salida. También debe haber influido el ánimo de proteger el origen de la cinta, al propio Claro —también atrapado en una mentira pública— y de no involucrar a personas que apoyaban a Evelyn Matthei, los cuales no tenían la más remota idea de lo que había ocurrido y que desde el primer día pusieron las manos al fuego por ella.

Pero sobre todo no puedo dejar de pensar en que quizás los protagonistas de este episodio jugaron el papel de marionetas en un tablero que no conocían y al interior de una trama que nunca sospecharon.

Aún a la distancia no puedo olvidar el dolor y la amargura que el espionaje generó en nuestras familias, sin excepción. Y así como en ellas hubo algunos que reaccionaron mal, otros lo hicieron muy bien. Ninguno de nosotros olvida la actitud de Cecilia Morel, la mujer de Sebastián. Sus amigas le dicen *Chica* pero ahí demostró que es lo contrario: serena, casi estoica, apuntaladora a más no poder.

Quizás tenga razón Milan Kundera cuando afirma que sin secretos, ni el amor ni las amistades son posibles. O *La Nación,* que interpretó simplificando: «Cuando hay guerra acuden los militares». O el propio Jarpa cuando, recurriendo a la sabiduría campesina, atribuyó lo que había ocurrido a una causa inescrutable:

—El diablo metió la cola.

Capítulo XV

Año de Murphy

A fines de 1992, un periodista me preguntó qué esperaba del nuevo año.

—Poco —le contesté—. Me conformo con que sea mejor que el anterior.

Hasta entonces, no conocía la ley de Murphy: «Las cosas malas siempre pueden empeorar».

Así sería todo el año 1993.

El fallo del tribunal supremo dio lugar a un consejo nacional para tratar sus efectos. Los presagios no podían ser peores y anunciaban la guerra mundial. El ambiente era pésimo, los analistas auguraban un quiebre inminente, la especulación periodística era intensa.

Un día antes que se inaugurara el consejo y después de semanas sin hablarnos, me reuní en la casa de Gonzalo Eguiguren con Jarpa, a instancias de nuestro anfitrión. Como siempre, le pedí a Ricardo Rivadeneira que me acompañara. La reunión fue corta y al hueso.

—Usted sabe que yo no mando recados. Yo no estoy de acuerdo con lo que han dicho de usted, pero todos son mayorcitos de edad —dijo de entrada para despejar el tema—. Jarpa estaba extraordinariamente molesto con el fallo disciplinario.

—¡Es una barbaridad! ¡Absolutamente descontrapesado! Yo estaba tranquilo —confesó—, porque me imaginé que usted

habría hablado con los miembros del tribunal, pero Ricardo me ha dicho que usted no hizo nada. ¡Han cometido una brutalidad!

Lo que son las cosas —pensé para mis adentros—. Unos me critican por influir; otros por no hacerlo.

No dije nada. A esas alturas, lo único que me importaba era el futuro del partido. ¿Cómo salir del atolladero?

—Para mí, lo fundamental es que tengamos rápido un candidato presidencial. Necesitamos movilizar al partido hacia adelante. La única manera de enterrar la pesadilla es empezar algo nuevo —dije teniendo en mente que «subir loma hermana almas», como enseña Martí, guardándome, claro, el origen de la cita.

—Estoy de acuerdo —contestó Jarpa—. Pero su amigo Sebastián insiste en ser candidato.

—No puede ser —le dije yo—. Hace semanas que vengo diciendo que eso divide irremediablemente al partido. Pero usted tampoco —aproveché de aclarar— porque hay gente que anda proclamando su nombre y quiero decirle que genera el mismo efecto que el de Sebastián. ¡División total!

Antes que Gonzalo pudiera meter baza, Jarpa anuló su propia opción.

—Por mí, olvídese. Descárteme desde ya.

El resto de la conversación fue para barajar nombres de dentro y de fuera del partido. Yo me quedé con una certeza: contra todas mis convicciones, el candidato no podría ser de RN. Todos, cuál más cuál menos, habían estado envueltos en la refriega y además —y quizás por lo mismo— nadie generaría un apoyo lo suficientemente fuerte como para poder sacar adelante una empresa muy cuesta arriba. Habría que buscar afuera.

A la salida —¡cuándo no!— una periodista de *Las Últimas Noticias* estaba esperando con un fotógrafo, oportunamente dateados de la reunión. Al día siguiente, la foto fue primera página, y el titular, elocuente: «¡Exclusivo! Jarpa y Allamand lograron acuerdo para evitar quiebre de RN!». Hasta un premio le dieron al fotógrafo por la exclusiva!

El consejo fue una taza de leche. Un discurso apaciguador de Ricardo Rivadeneira marcó el tono. Jarpa no asistió. Yo no

hablé. Fue una catarsis contenida y, por lo mismo, inútil. Lo único importante fue que se fijó otro consejo para el 23 de enero, con el propósito de nominar al candidato presidencial del partido.

Todos los consejeros nacionales convinieron unánimemente en que no podíamos pasar el verano sin candidato. El partido —pulverizadas sus dos opciones— tenía que gestar una nueva candidatura que lo cohesionara y le ayudara a recuperar su sitial. El razonamiento era correcto y había sólo un problema: el candidato no existía.

Se busca...

Lagos y Frei estaban en carrera, pero en la centroderecha nadie estaba parado en la cancha. ¿Qué era, entonces, lo único razonable?: convenir ahora mismo un candidato con la UDI. Alguien de consenso que trajera la paz al sector y al cual pudiéramos, a través de un trabajo largo, potenciar y hacer competitivo. Y, para que fuera de consenso, tenía que tener una característica. La que a mí menos me gustaba: ser independiente.

Me fui a hablar con Jovino Novoa, tragándome mis propias convicciones acerca de los candidatos independientes. No sólo eso: tragándome también mi rabia por todo lo que había ocurrido, mi angustia por no saber de qué forma el conflicto podría haberse evitado, mi impotencia frente a la acción de los militares y mi desilusión ante la total negligencia y desinterés del gobierno para ayudarnos. En fin, para qué seguir. La desazón se me tiene que haber notado a cuadras de distancia. ¡Seis meses atrás había llamado a Jovino para que asistiera a nuestro consejo de La Serena, cuando el sol que nos alumbraba era más radiante que el del propio Elqui!

Le planteé la tesis de una candidatura rápida, independiente y consensual. Y le sugerí cuatro nombres, cuyo orden había pensado cuidadosamente: Carlos Cáceres, Manuel Feliú, Fernando Léniz y Arturo Alessandri.

—A mí me da lo mismo —le dije—. Para nosotros todos califican. Escoge tú.

Jovino, que nunca se apura, hizo lo obvio. Primero me reprochó el «escándalo» de RN que había perjudicado a todo el sector, sin por supuesto mencionar el espionaje del Ejército. Agregó que siempre había visto mal ambas candidaturas. «Débiles y sin destino». Acto seguido, dijo que la UDI no renunciaba a un candidato propio y si queríamos una candidatura unitaria desde ya tenía un nombre para ofrecernos.

—¿Cuál? —pregunté pisando el palito como un niño.

—Hernán Büchi —me dijo—. Ustedes ya lo apoyaron. Háganlo de nuevo.

—¿No hay otro en la lista?

—Claro —fue la respuesta—. Yo mismo.

Pensé que era broma y la reunión no avanzó mucho más. No era broma. Era en serio.

Verso a verso

Ante el fracaso de la gestión, no había otro camino que iniciar acercamientos directos con los posibles candidatos. El escollo era obvio: no es lo mismo ser candidato de un sector que de un partido y tener que competir con el candidato del otro partido. Y ser de un partido dividido, desgarrado y todavía marcado por el escándalo político.

Ideológica y políticamente estaba más cerca de Manuel Feliú y de Fernando Léniz, que se apartaban de un esquema de derecha tradicional, empresarios, de mentalidad amplia y sobrados méritos. Léniz había sido ministro del gobierno militar y coordinador del Acuerdo Nacional. Feliú, como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, fue el gestor de importantes acuerdos con el sector laboral. Pero también veía ventajas en los otros dos nombres.

Arturo Alessandri, senador por Antofagasta, tenía el respaldo del apellido, simpatía a toda prueba y un rasgo valioso: carecía de adversarios en la UDI y RN.

Carlos Cáceres era hombre de prestigio. Había sido presidente

del Banco Central, ministro de Hacienda y el último ministro del Interior del gobierno militar. Presidente de Libertad y Desarrollo, tenía enorme llegada con los empresarios y era de hecho el gran recolector de las platas de la comunidad empresarial.

Respecto de Cáceres, a mí me daba vuelta, una y otra vez, el tema del voto de minoría. Pensaba que en una campaña podía ser un argumento letal.

—¡Convéncete! —me dijo *Talo* Reymond, quizás el principal impulsor interno de esa candidatura—. Para que haya candidato unitario tiene que ser del gusto de la UDI, no tuyo.

Estaba claro. Nuestro proyecto difícilmente podría expresarse en la campaña presidencial venidera, pero cuando el barco ha naufragado es estúpido preocuparse de la marca del bote salvavidas.

Me lancé, entonces, a hablar con cada uno de ellos, pero nada resultaba.

Fernando Léniz fue terminante: no estaba disponible.

Arturo Alessandri aseguró que sólo aceptaría ser candidato si ambos partidos lo proclamaban «simultáneamente».

Carlos Cáceres pareció meditarlo y ayudó que todos los senadores de RN se lo pidieran, pero a fines de enero agradeció y declinó el ofrecimiento.

Manuel Feliú no parecía muy convencido, aunque fue siempre el más dispuesto de los cuatro.

Entretanto, Jovino Novoa formalizó su propia candidatura. Antes que yo reaccionara, lo hizo Jarpa:

—Generalmente —dijo—, en vísperas de una definición se hacen estos apoyos para hacer un homenaje a una persona, como lo hizo el PC con Pablo Neruda en 1970. Eso está bien, pero no sigamos gastando el tiempo en saludos a la bandera cuando otros están haciendo campaña en serio.

Mientras, no faltaban los problemas. Al interior de RN había una línea que se negaba a aceptar la idea de un candidato independiente —de «emergencia interna», como alguien lo bautizó—. Y proponían cualquier nombre, partiendo por Piñera, que mantenía intacto su apoyo y la motivación de sus seguidores.

Para ellos, el espionaje había sido una brutal y desleal manera de «descarrilar a la locomotora». En las calles de Santiago empezaron a aparecer rayados:

—¡Vamos, Sebastián! —decían.

Otro grupo postulaba a Jarpa. Si no va a ser senador, ¿qué mejor que sea nuestro candidato presidencial? En regiones surgía el nombre de Mario Ríos, vivo por milagro después de un grave accidente automovilístico. Internamente el nombre con mayor fuerza era el de Sergio Diez. Él, con razón, también dudaba. Los últimos meses se había enfrentado duramente con la mayoría de los senadores defendiendo la campaña de Sebastián y, claramente, no era una figura del agrado del mundo «jarpista».

—Papá, no te metas. Los senadores te *rajan* todos los días. Te van a dejar solo al minuto siguiente de nominarte —dijo su hijo Sergio, quien en una reunión político-familiar convocada para zanjar el asunto dio además el argumento definitivo: «Te necesitamos más en el Senado».

Pero había más candidatos. José Piñera renunció intempestivamente a la UDI y lanzó su candidatura presidencial. Pepe tuvo una deferencia conmigo. Me llamó y tomándonos un café en su sede de calle Holanda —junto a Mark Klugman, su principal consejero— me informó de sus planes. Había resuelto ser candidato presidencial y lo anunciaría en cosa de horas. Al mejor estilo de la derecha. Sin preguntarle a nadie.

—¿Cómo reaccionó la UDI? —indagué.

—Estuve con Longueira y Jovino. Me advirtieron que jamás me apoyarían.

La película era clara: Pepe correría hasta el final y la UDI nunca lo apoyaría. El autoproclamado candidato me pidió que lo respaldara. Según él, yo podría cuadrar fácilmente a todo Renovación.

—Pepe, para mí es muy difícil —contesté trabajando de diplomático—¡A Sebastián lo acaban de fusilar! ¡Ni siquiera está enterrado! Entre la gente nuestra tu candidatura va a caer pésimo.

Ninguna de mis apreciaciones le hizo mella. Si los otros posibles candidatos, cuál más cuál menos, mostraban vacilación,

Pepe reflejaba una determinación a toda prueba. Yo pensé para mis adentros: éste no sólo tiene ideas, le sobran ganas. ¿Cómo pasarle un poco de ambas cosas a cualquiera de los otros cuatro?

Y además, cual fantasma emergiendo, volvía a aparecer el nombre de Francisco Javier Errázuriz. El cuadro de la derecha no podía ser más complejo.

Mientras tanto, se acercaba el día del consejo general fijado para el 23 de enero. Durante la última semana, me concentré en convencer a Manuel Feliú. Para ese propósito fue clave una reunión que tuvimos con Jarpa y otros miembros de la directiva. Manuel asumía que era imposible obtener el apoyo de la UDI, pero sobre todo le preocupaba que al final, en vista de la contienda UDI-RN, surgieran voces para un «tercer» candidato. Nosotros le aseguramos que lo acompañaríamos hasta el final.

—Voy a llamar a Arturo Alessandri para asegurarme de que no va a entrar a última hora. Y no me importa competir con Jovino. Será una competencia de caballeros. Piñera no va a dar su brazo a torcer y a Fra-Fra hay que saber tratarlo —concluyó con optimismo—. En todo caso, ustedes se las arreglan para proclamarme por unanimidad —pidió—. Si es así, cuenten conmigo. ¡Quiero ayudar a RN y la derecha!

Era más que razonable. Lo mínimo era ser el candidato de toda RN. Jarpa me miró a mí. Esa sería mi responsabilidad.

Trabajé incansablemente con diputados, senadores y miembros del consejo para convencerlos. Al principio me iba pésimo. ¿O sea que se van a salir con la suya? ¡Somos el partido más grande de la oposición y otra vez sin candidato! Poco a poco lograba al menos, como cuña, introducir mis argumentos. Hacia mitad de la semana previa al consejo pensé que había logrado cruzar el umbral de la mayoría. Las cosas empezaban a verse mejor.

Una cobra bajo la almohada

Error. Error.

El miércoles en la noche, dos días antes del consejo, con los votos decisivos de Hugo Ortiz, Ignacio Pérez y Sebastián Piñera, el Senado destituyó al ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda.

La acusación había sido interpuesta semanas atrás por los diputados de la Concertación contra cuatro ministros.

¿La razón? «Notable abandono de deberes», que es la única causal que la Constitución contempla. El cargo concreto era denegación de justicia en varios casos de derechos humanos.

Nuestros diputados en la Cámara estaban unánimente en contra de la acusación, que violentaba abiertamente el principio de que al Congreso no le corresponde impugnar ni revisar los fallos judiciales.

Sin embargo, tras la fachada de tal acusación, se fue articulando, en la sombra, una segunda acusación dirigida contra Hernán Cereceda y que nada tenía que ver con el fundamento de la acusación original. Su cuerpo difuso pero mortal como una cobra bajo la almohada eran múltiples denuncias sobre prácticas corruptas atribuidas al magistrado. Los votos de la Concertación estaban seguros en razón de los motivos invocados en la acusación original, pero faltaban votos y sólo alguno de los nuestros podía inclinar la balanza.

El tema adquirió carácter público cuando el diputado Jaime Campos señaló que el acusado era el «arquetipo del juez venal». Sebastián fue particularmente sensible al alegato. Hugo Ortiz era prístino e iba más lejos: le «constaba» que Cereceda era un corrupto. Ignacio Pérez asistió a toda la tramitación de la acusación en la Cámara.

La mejor demostración de que la acusación se distorsionó en el camino fue que los otros tres jueces acusados fueron absueltos. Si no hubiera intervenido la razón oculta, todos deberían haber corrido la misma suerte de Cereceda.

Estalló otro escándalo de magnitud. No era para menos. Todos los diarios consignaron la información en primera página. Por primera vez en la historia de Chile se destituía a un ministro de la Corte Suprema.

—Es una grave deslealtad política —afirmó la UDI. Su comisión política, reunida en forma extraordinaria, acordó no «integrar una lista parlamentaria con RN si incluye a quienes votaron a favor de la acusación».

—Han actuado como verdugos —señaló el senador Francisco Prat y pidió fuertes sanciones «contra una minoría que constantemente ha entorpecido el trabajo partidario con su individualismo y deslealtad constante».

—Se ha hecho un daño muy grande al país. Las consecuencias pueden ser impredecibles —dijo Jarpa.

El más desolado, aparte del propio destituido, por cierto, era el diputado Jorge Morales. Jorge —médico, ex alcalde de La Serena y Coquimbo, ex radical, experto en la vida y temas afines, hombre de alegría fácil y tristezas profundas— es uno de mis amigos más apreciados del mundo de la política. En el hecho, oficiaba de cabeza de los adherentes de Sebastián a nivel de diputados y al ser sorteado en la comisión informante de la acusación defendió la tesis contraria a la misma.

—No sólo yo —me dijo— sino que varios de nosotros le fuimos a rogar a Sebastián que no votara a favor. El insistió que se había formado la convicción íntima que Cereceda era un tipo corrupto. Le hicimos ver que ése no era el motivo de la acusación. Pero fue inútil.

—Si hay quienes no están dispuestos a tener una mínima actitud de cohesión y de lealtad con el equipo, es evidente que sería mucho mejor que abandonaran RN —atiné a decir ante una marea de periodistas. La directiva en pleno declaró después que la votación de nuestros senadores «bajo ninguna circunstancia compromete al partido como tal».

Ninguno de los tres senadores iba a renunciar. El que sí lo hizo, en señal de protesta, fue Alberto Cardemil. Pero a los pocos días retiró su dimisión.

El consejo general del día siguiente había cambiado dramáticamente de foco. El tema presidencial pasó bruscamente al segundo plano. Nadie estaba dispuesto a considerarlo mientras no se tratara el tema acusación. Pero el asunto iba más lejos. Todos los «jarpistas», más los partidarios de Evelyn Matthei (aunque éstos aún transitaban entre la vergüenza y el desconcierto), más los indignados por lo ocurrido de todos los colores, presionarían por echar a Piñera, Hugo Ortiz e Ignacio Pérez. Estaba claro que no procedía una sanción del tribunal supremo, pero si la censura política del consejo era muy virulenta, quizás la permanecia de ellos se haría imposible. Además, mis propias declaraciones del día anterior facilitaban ese curso. El panorama no podía ser peor.

¡AQUÍ NO SOBRA NADIE!

Los animales tienen un hábitat natural. El mío es el consejo general. Es un ambiente en que me siento cómodo. Desde que se inaugura, coloco todos mis sentidos en su desarrollo. Olfateo el aire. Miro las caras. Me fijo en cómo se sientan los dirigentes. Con quién y dónde. Intuyo el estado de ánimo. Sé que es un cuerpo veleidoso: a veces hay que persuadirlo, otras seducirlo. Unas pocas imponerse, forzando la mano. Conocía de memoria el nombre y apellido, el distrito y el cargo de cada uno de sus 400 miembros. Y así les daba la palabra. Nominativamente.

Toda la mañana el consejo se abocó al tema acusación. Al inaugurarlo había afirmado que «en Renovación no sobra nadie», en una clara marcha atrás respecto de la anterior declaración y había sugerido la incorporación de un senador a la mesa para hacer más gobernable el partido.

Los tres senadores se defendían argumentando que habían actuado «en conciencia» y que la propia ley de partidos les impedía a los dirigentes incluso efectuar recomendaciones «en los casos en que el Senado esté llamado a obrar como jurado». A

comienzos de la tarde, estaba claro que el consejo sólo formularía una censura fuerte. Ni expulsión, que no procedía, ni petición de renuncia, que se había disipado. La sangre no llegaría al río. La designación del nuevo miembro de la mesa recayó en el senador Francisco Prat.

Al caer la tarde aún no se empezaba a ver el tema presidencial. Yo en la mañana apenas había insinuado que el consejo debía estar abierto a considerar un independiente, pero el asunto se puso negro. Una gran mayoría del consejo era partidaria del candidato propio. Luis Valentín Ferrada proclamó a Jarpa. Yo paré las orejas. Jarpa hizo como que no oía. Nada. El acuerdo de la casa de Gonzalo Eguiguren se respetaría. Mario Ríos inscribió su candidatura e hizo un emocionante discurso tocando todas las fibras de la identidad partidista.

—¿Qué vamos a hacer? —me preguntó al oído Alberto Espina. Son casi las siete y todavía nadie nombra a Feliú. Los versos vienen para un candidato del partido.

—No sé —le contesté—. Voy a esperar que se abra una rendija.

—Difícil —me dijo Alberto—. ¿Crees que podrás sacar un conejo del sombrero?

Una hora después se abrió la rendija. Me autoasigné la palabra y expuse las razones por las cuales el partido debía optar por la candidatura de Feliú. Después de ocho horas de debate, se había abierto un pequeño espacio de reflexión. Sergio Diez, Jarpa y Sebastián apoyaron con nobleza, lo que fue fundamental, ya que de alguna forma estaban tácitamente renunciando a opciones personales. Jarpa ayudó a levantar el último obstáculo: convenció a Mario Ríos de que depusiera su candidatura. Mientras tanto, en sus oficinas, esperaba Manuel Feliú. Mandé a llamarlo y —si lo hubiéramos preparado no habría salido mejor— nuestro candidato inició su intervención ante el consejo exactamente a la hora de inicio de los noticiarios. En directo y con plena cobertura.

Manuel inmediatamente captó la adhesión del consejo general. Hizo un discurso impecable. ¡Teníamos candidato presidencial!

A la semana siguiente, *Qué Pasa* habló de la «carambola» de Allamand, afirmando que con un solo «movimiento» había logrado dos objetivos: resolver la crisis interna de presidenciables y lograr un aliado para el proyecto político renovador.

Yo, en cualquier caso, quedé exhausto.

Viajé de inmediato a Cuba, donde se había reanudado el tratamiento de mi hijo Juan Andrés. Siempre duermo en los aviones. Pero esa vez estaba tan cansado que no pegué un ojo. La primera semana en La Habana hice lo que nunca hago: dormir.

El flautista de Unimarc

La candidatura de Feliú partió bien. Perfiló de inmediato su sello: un hombre abierto, partidario de los acuerdos y demócrata sin coartadas.

—¿Qué opina del gobierno de Pinochet? —le preguntaron.

—Le pongo un siete.

—¿Y del de Aylwin? —le volvieron a preguntar.

—También un siete. Cada uno cumplió bien su deber en distintas etapas.

Manuel tenía una llegada fácil con la gente y se expresaba bien. Era un empresario minero, de provincia y de una trayectoria que no respondía al prototipo general. Era una adecuada carta de presentación hacia la clase media y los sectores del trabajo, que era precisamente hacia donde teníamos que expandirnos.

Sin embargo, la UDI demostró que se había tomado en serio el nombre de Novoa.

—Feliú tiene que partir por demostrar sus méritos —declaró de súbito, en un obvio cuestionamiento, Hernán Büchi.

Fue sólo el primer disparo. Después los tiros se transformarían en rutina. El secretario general de la UDI, Domingo Arteaga, descargaría todas las baterías.

—No entiendo. Soy tan amigo del padre de ese joven —se quejaba Manuel, demostrando candor respecto de la rudeza de las competencias políticas.

Sin embargo, la mayor fuente de problemas vendría por otro lado. ¿Cómo articular las listas parlamentarias?

Nuestro punto de partida era el acuerdo con que habíamos enfrentado la campaña municipal: igualdad de condiciones, lo que significaba que ambos partidos tendríamos un candidato en cada distrito y cada región.

Imprevistamente, sin embargo, surgió un hecho raro: ¡la UDI ahora consideraba absolutamente indispensable incorporar a la UCC! Yo no lo podía creer. Un giro de 180 grados. Se desvanecían todas las engoladas declaraciones de apenas seis meses antes en cuanto a no pactar con Errázuriz por un asunto «de principios».

Una seguidilla de declaraciones de dirigentes de la UDI para justificar la voltereta señalaban que el «errazurizmo» era «indispensable» para garantizar a lo menos un tercio de la Cámara. ¿Por qué lo hacían? Estaba cantado que ello potenciaría la posición negociadora de Errázuriz hasta el infinito. Y cualquiera sabía como negociaba: infatigable, cambiando a diario de posición, con total desenfado. En menos que canta un gallo, Errázuriz se aprovechó de la situación y se ubicó como el gran extorsionador: él estaba en condiciones, según como pactara, de «definir la sobrevivencia misma de la derecha». Y así lo declaraba a diestra y siniestra.

Para mí, Errázuriz era, y así lo dije públicamente «un encantador de serpientes». Carlos Reymond lo definió mejor:

—Conozco a mucha gente que le falta un tornillo, pero sólo a uno que le sobra uno.

Pero el asunto no terminaba ahí: en opinión de la UDI no sólo había que integrar a la UCC sino que debíamos aceptarles la exigencia de distritos cerrados o exclusivos. Es decir, los dos partidos principales debían renunciar a presentar candidatos, asignándole los dos cupos a la UCC.

Obviamente, la pedida de la UCC no se hizo esperar: ¡quince distritos exclusivos! Una cifra absurda, si se piensa que la UDI tenía apenas catorce diputados.

Pero había más: la UDI exigía «protección» para algunos de

sus parlamentarios. En esas localidades —tal como lo hacía el PDC, el partido grande de la Concertación— RN también debía abstenerse de presentar candidatos.

—Así nos descuartizan el partido, fue la reacción generalizada y espontánea en RN.

Mientras tanto, en el plano presidencial las cosas no fueron mejor. ¿Cómo elegir el candidato? Se pensaba en una convención.

Pero también aquí surgía un problema: mientras la UDI exigía absoluta paridad en los convencionales, nosotros reclamábamos que debía haber alguna proporcionalidad que reflejara el tamaño relativo de los partidos.

La negociación se veía difícil y la gente más cercana a mí me recomendaba que no me inmiscuyera, porque era una tarea ingrata y de altos costos, pero a la larga, indefectiblemente, terminaba preso del enredo. Para peor, con Manuel pasó lo mismo.

¿Por qué arreglar las listas parlamentarias era tan fácil para la PDC, el principal partido de la Concertación, y tan difícil para RN, el principal partido de oposición?

Muy simple: la Concertación en la mayoría de los distritos tenía una votación superior al 55%. De esa cifra el PDC podía aspirar en general al 30% y la izquierda unida a algo más del 20%. Si ambas fuerzas se dividían ésta última desaparecía del mapa. La izquierda tenía un solo camino: pactar o pactar.

A nuestro lado, la situación era muy distinta. Bordeábamos el 30% entre los dos partidos. Frente a una Concertación unida, no nos sobraba ningún voto. La división era fatal. Los cálculos estaban arriba de la mesa: si íbamos en listas separadas, RN podía aspirar a unos 20 diputados y la UDI apenas a cinco o seis. En la relación RN-UDI, una victoria... pero pírrica. En el fondo una irresponsabilidad enorme y una regresión al año 1965. La UDI podía suicidarse, pero de paso nos asesinaba políticamente. Por eso su poder era enorme.

Todo iba de mal en peor. La candidatura de Manuel Feliú estaba empantanada por la falta de arreglo parlamentario y Errázuriz aumentaba sus exigencias. Ya no sólo quería quince

distritos sino que exigía que retiráramos nuestros parlamentarios en ejercicio para hacerle hueco a sus candidatos en los distritos de mayor votación de la centroderecha. No aceptaba suscribir ningún compromiso en materia presidencial (es decir, mantenía su propia candidatura) y tampoco se allanaba a un acuerdo programático. Además, nos amenazaba diariamente que si no accedíamos a sus peticiones… pactaría con la Concertación.

Internamente, el asunto también se oscureció. A diferencia de la negociación de 1989, cuando tuvimos una plataforma clara y sin fisuras, y por lo mismo pudimos negociar con fuerza, ahora fue imposible lograr algo parecido. Al revés, el clima de división larvado que venía desde el espionaje emergió con toda su fuerza. En 1989 los únicos que negociábamos éramos Bernardo Matte y yo, (con el respaldo de Jarpa para cada decisión importante). Ahora los parlamentarios, especialmente los que veían peligrar su reelección, mantenían contactos informales con los negociadores de la UDI y la UCC, quitándole el piso al equipo negociador. Otro tanto hacía la periferia más cercana a Jarpa —Gonzalo Eguiguren —que a espaldas de la directiva se reunía con los negociadores de la UDI divulgando información reservada y debilitando todos nuestros argumentos.

No pudimos ordenar adecuadamente la casa. Todos opinaban que había que hacer sacrificios por la unidad del sector, siempre —claro está— que no fuera en sus regiones o distritos. La UDI desde el principio se manejó admirablemente bien. Cohesionada y con propósitos claros. La UCC no tenía problemas. Errázuriz la manejaba como una sucursal de sus supermercados UNIMARC.

Cadena de desencuentros

Poco a poco fui advirtiendo que llegábamos a una encrucijada. Tal como en 1989, la elección presidencial y parlamentaria dibujaría el mapa político futuro. Era muy importante: la

transición no estaba completa, más allá del optimismo de Aylwin. El tema institucional simplemente se había postergado y los problemas de derechos humanos emergerían en cualquier momento. Pero había algo más: el proyecto político de renovación de la derecha también estaba a prueba. Desde la ruptura de 1987, e incluso antes, se habían perfilado a trazos gruesos dos proyectos diferentes en la derecha: el nuestro y el de la UDI.

Estuvimos con el Acuerdo Nacional, la UDI lo impugnó. Quisimos levantar una alternativa a Pinochet, ellos se jugaron por él. Votamos por reformar la Constitución, ellos lo hicieron de última hora y de mala gana. Levantamos la democracia de los acuerdos, ellos la rechazaron. Creíamos que la Constitución requería de nuevas reformas para depurarla de rasgos autoritarios, ellos la querían tal cual. Pensábamos que el rol institucional de las Fuerzas Armadas debía cambiar; ellos, dejarlo intacto. Queríamos abrirnos al mundo del centro, ellos no compartían esa inquietud.

Algo andaba mal. Teníamos una fuerte representación parlamentaria, la última campaña municipal había sido un éxito, y teníamos un proyecto político que desplegar. Pero no se podía. La intervención de un grupo del Ejército había decapitado nuestras candidaturas presidenciales. Y la imposibilidad de alcanzar acuerdos nos conducía a una situación cercana al quiebre. *El Mercurio,* con su poderosa influencia, había tomado partido a favor de la tesis de la UDI. Y como si todo ello no bastara, empezó la presión empresarial.

La caja negra

El financiamiento de la política en Chile es una caja negra, pero en el caso de la derecha lo es aún más. Hay un grupo de personajes que en los hechos manejan ese financiamiento. Lo hacen, me imagino, desde tiempo inmemorial. Y tienen una capacidad de convocatoria a toda prueba. ¿Quién junta, así como así, un día cualquiera a las siete de la tarde, a los presidentes de

la Confederación de la Producción y el Comercio, la SOFOFA y los ejecutivos y propietarios de los más importantes grupos económicos del país para «hablar de política»?

Ese grupo de notables empezó a presionarme en forma cada vez más abierta.

A medida que la presión fue subiendo, me sentía en un papel de creciente indignidad. Tenía que asistir a esas reuniones y dar largas explicaciones acerca de cuál era la mejor forma de construir la lista parlamentaria, explicar por qué los distritos cerrados eran malos para toda la derecha, detallar las razones para enfocar una campaña presidencial mirando hacia el centro y, en fin, señalar por qué aceptar las condiciones y la propia incorporación de Errázuriz era un grave error. Debía repetir ese libreto una y otra vez. A veces me sentía dando examen. En realidad, ¡estaba dando examen! Estaba claro, sin embargo, por qué lo hacía. Me lo recordaban al principio y al final de cada reunión.

—Hay que arreglar este asunto, Andrés. Si no, olvídate, ¡no hay un peso para la campaña!

Poco a poco sentí que la paciencia se me iba colmando. Al final de unas reuniones, en que una vez más el tema era cómo organizar las listas, saltó por enésima vez el tema de Errázuriz.

—Mira, Andrés. Todos sabemos como es Francisco Javier Errázuriz. Ninguno de nosotros lo aceptaría de socio en ningún negocio. Pero la política es la política. Te lo tienes que tragar.

Ese era el razonamiento. Inaceptable para los negocios, indispensable para la política. Aunque fuera en esta última donde se jugaba el destino del país.

En ese escenario, resolvimos junto a Manuel Feliú y la directiva convocar a un consejo general. La estrategia de Errázuriz era clara. Estirar la cuerda hasta el último minuto y sacar el máximo de ventajas. A su turno, la presión empresarial era cada vez más difícil de resistir. Y la inercia era mortal. Había que debatir el tema de una vez por todas. El partido y los propios parlamentarios tendrían que resolver si aceptábamos o no un curso que cada vez más se asemejaba a una extorsión y nos desviaba de nuestra ruta.

Yo tenía un objetivo más ambicioso: no sólo definir cómo abordar la elección presidencial y parlamentaria, sino formular un planteamiento de fondo acerca de la autonomía de la derecha, reivindicando el rol conductor de los partidos y jugarme por aprobar un acuerdo para el impulsar el financiamiento público de las campañas. Pensaba, y así lo decía, «que una correcta relación entre el mundo de la empresa y el mundo de la política es uno de los temas cruciales de los sistemas democráticos ¿Qué ocurre cuando en Italia, por ejemplo, el presidente de la Olivetti tiene que reconocer que pagó sobornos durante años? Lo natural es que este enrarecimiento empiece entre los mundos más colindantes, entre la empresa y la derecha, pero que prosiga, como se está viendo en todas las democracias, entre el dinero y el partido que está en el poder».

Y concluía: «El tema es la influencia ilegítima del dinero en la acción política. Si la relación no es correcta entre el mundo de la empresa y la centroderecha ahora que estamos en la oposición ¿qué pasará el día que estemos en el gobierno?».

Poderes fácticos

Sin embargo, impensadamente, desbaraté mi propio plan.

La semana anterior a la celebración del consejo, *El Mercurio* preparó un reportaje sobre la crisis, a esas alturas calificada de «endémica».

Yo hablo con los periodistas en forma natural y suelta. Así lo he hecho siempre. Es mi forma de ser. Jamás he tomado demasiadas precauciones, asumiendo que ellos manejan profesionalmente bien el deslinde entre una declaración publicable y una opinión informal y, por ende, de consumo interno.

En esta oportunidad el reportaje era de Pilar Molina, una periodista muy independiente a quien conocía desde años y que me daba confianza. Le expliqué apasionadamente mi tesis: la acción política de la derecha estaba condicionada por «poderes fácticos».

El día de cierre la Pilar me trató de ubicar infructuosamente. Yo andaba en el sur, proclamando a Harry Jurgensen, un candidato de lujo que, por lo mismo, concentraba la presión para «bajarlo».

Al no poder ubicarme, la Pilar habló con Alberto Espina.

—Necesito ubicar a Andrés —lo urgió—. Estoy escribiendo un reportaje que es una bomba. Pero quiero que me autorice a publicar nuestra conversación.

Alberto le preguntó de qué se trataba. La Pilar le hizo un breve resumen.

—Ah, no —le dijo Alberto—. Para una cagada de ese porte, habla directamente con él. Sólo él te puede autorizar. Por mí, que no las publiques. Es lo que Andrés piensa, pero no creo que te haya autorizado a divulgarlo.

Pilar Molina no habló conmigo, pero —sangre de periodista al fin y al cabo— hizo igual la publicación.

Por supuesto, fue un terremoto. Era un pequeño recuadro dentro del reportaje. Su título era «Allamand: hay interferencia empresarial en las decisiones de la centroderecha». Lo pesado venía adentro: «Para Allamand el conflicto de la derecha no es uno de cupos parlamentarios, sino de interferencia en el proceso de toma de decisiones» y luego una serie de declaraciones —la verdad, un poco desordenadas, precisamente por estar extraídas de una conversación informal— mezcladas con informaciones de otras fuentes y opiniones de la propia periodista:

«En la Concertación, el proceso de designación de candidatos está basado en los partidos políticos. En la derecha en cambio hay tres interferencias: los militares, los empresarios y *El Mercurio.* RN tiene el 18% de los votos pero Hernán Briones, el señor de la SOFOFA, que respalda a José Piñera vale más para designar al candidato presidencial del sector que el partido completo. Donde mejor se plasma la triple presión es en la persona de Carlos Cáceres: el enlace de los militares, el mimado de la comunidad empresarial y miembro del directorio de *El Mercurio.* Los militares ya hicieron su parte cuando sacaron brutalmente de la arena presidencial a los dos candidatos que

más prometían: Sebastián Piñera y Evelyn Matthei. Ahora le toca actuar a este grupo de empresarios que, por supuesto, no son todos. Pero toman las decisiones, se compran el cuento de la UDI de la importancia electoral de la UCC y le construyen a Francisco Javier Errázuriz un escenario donde la extorsión es permanente. Es el mismo grupo que impuso el nombre de Büchi en 1989, el mismo que manejó Siglo XXI, la entidad que administró los fondos de la campaña de 1989. Y no serán ellos los que asumirán la culpa si todo anda mal».

Después venían los nombres de Eugenio Heiremans, que oficiaba de cabeza, ya que en su casa se hacían las reuniones, y de algunos de los asistentes: José Yuraszeck, Fernando Agüero, Sergio de Castro, Pablo Baraona y Carlos Abumohor. También se mencionaba a Alfonso Swett, el más amigo mío de todo el lote. El recuadro terminaba afirmando que «Allamand cree que esta situación tiene un solo remedio: promulgar la ley de financiamiento estatal de los partidos ya que espera no depender de estos empresarios para financiar la próxima campaña electoral».

El primer telefonazo fue antes de las ocho de la mañana y no paré de contestar llamadas hasta la una, en que salí a correr para despejarme un poco la cabeza. Al cabo de una hora —transpirado de pies a cabeza y mentalmente relajado— ya había tomado mis decisiones: no desmentiría a Pilar Molina ni me escudaría en ningún *off the record* ni en un oblicuo «fuera de contexto» como algunos me sugirieron; iría a la mañana siguiente a disculparme personalmente con Carlos Cáceres, porque claramente lo había ofendido y ésa nunca había sido mi intención. Lejos de retractarme del fondo, aprovecharía el revuelo para difundir al máximo todos mis argumentos. La mano vendría dura, pero —en dialecto de rugbista— no pensaba «arrugar».

En verdad, sólo lamentaba no haber revisado la nota, porque le habría sacado las alusiones personales y habría expuesto más ordenadamente los argumentos.

INVITACIÓN A MAMIÑA

A primera hora del lunes le pedí a Cáceres que me recibiera y me disculpé personalmente. Luego me preparé para la andanada. Y fue fuerte.

—Andrés, por favor, resuelve luego el problema de la presidencia y los parlamentarios y ándate un mes a Mamiña, donde no tengas ni teléfono —me mandó decir por todos los canales de televisión Hernán Briones, presidente de la SOFOFA.

—Los candidatos apenas se les nomina van a pedirnos inmediatamente dinero; si eso es presionar, que no pidan más plata —agregó Fernando Agüero, conocido dirigente empresarial.

—Las declaraciones de Allamand no me tocan ni me llegan al cutis. Allamand es un político y yo soy un profesional, ingeniero e industrial —dijo Ernesto Ayala, presidente de la Papelera.

—Yo creo que ese niño debe tener algo malo en la cabeza —terció la mismísima Lucía Hiriart de Pinochet.

La verdad es que en nuestras filas saltaron en mi ayuda Alberto Espina, Raúl Urrutia —un amigo de fierro y un gran diputado— Sebastián Piñera, que declaró que yo había dicho «una verdad del porte de una catedral», y varios más. Jarpa, Romero, Siebert, manifestaron gran discrepancia con mis declaraciones. Prat argumentó que los poderes fácticos «contribuían a la dispersión del poder». El que más bien me excusó fue Sergio Diez, haciendo ver que «la actual generación de políticos era pensamiento hablado».

Me mantuve firme, aunque el trato humillante que me dispensaban mis críticos me llegó muy hondo. ¡Eran la arrogancia misma!

El diario *La Segunda* me abrió sus páginas para argumentar: «Jamás he pretendido atacar a Carlos Cáceres. Y si por algunas de mis expresiones, particularmente por la forma en que fueron reproducidas, se ha entendido así, le pido públicamente disculpas. Los problemas de la centroderecha son estructurales. Tienen que ver con un problema de fondo que se arrastra desde hace décadas, cual es la debilidad y falta de autonomía de la organización

partidista del sector para tomar decisiones. Jamás he hecho una generalización respecto de la interferencia del Ejército en la vida política de los partidos. Lo que he señalado es que en el caso específico del espionaje Piñera-Matthei hubo una interferencia brutal. ¡El capitán Diez no es un miembro del Ejército de Salvación! No he hablado de los empresarios en bloque. Lo que estoy diciendo es que existe un grupo identificado con la derecha económica que pretende interferir en las decisiones políticas del sector y lo viene haciendo desde hace años. Es la verdad, le duela a quien le duela. *El Mercurio* es un diario privado y es absolutamente legítimo que en los conflictos de la centroderecha, no sea imparcial en su aspecto editorial. ¡No tiene por qué serlo!»

—Y si el precio de participar en política es no poder decir la verdad, pesco mis cosas y me devuelvo a la oficina de abogados que abandoné hace diez años —rematé.

Sin embargo, mi mejor defensa fueron las declaraciones de mis más fuertes adversarios. *El Mercurio* que preparó un reportaje para la semana siguiente, incluyendo sendas entrevistas a Heiremans y Briones —titulado La Caja de Pandora de Allamand—, fue casi condescendiente. Partía consignando que «fuera y dentro de RN —incluso en la UDI— se ha comentado que en muchos aspectos Allamand tiene razón, pero que esas cosas no se dicen públicamente y menos ahora».

Heiremans decía que toda su actividad había sido ofrecer «buenos oficios», que ellos no «indicaban nombres ni preferencias», que únicamente aspiraban a que «la derecha se uniera» y que para ese fin había estado «citando a grupos independientes en forma permanente desde marzo». Era absurdo. ¿Qué poder mágico detentarían esos «independientes» para lograr tan anhelado objetivo?

El título de la entrevista de Hernán Briones era muy elocuente: «Tal vez hemos presionado demasiado a Allamand». Pero fue mucho más lejos: admitió que la SOFOFA —un organismo gremial supuestamente apolítico— había sido «expresiva» en 1989, aduciendo que «habían pasado 19 años sin partidos y pensábamos que debíamos sugerir nombres. Y sugerimos a Büchi y

tal vez a candidatos al Parlamento». También reconoció que frente a la candidatura de Jarpa de ese año «preferimos a Büchi nada más» y dijo que Siglo XXI —el chasis para recolectar fondos— seguía viva y que su objeto era «brindar apoyo político».

Marca registrada

Varios meses más tarde, Gonzalo Vial vino en mi ayuda al publicar una comentada columna en el diario *La Segunda:* «En ningún sector político ha habido ni hay independientes con las extraordinarias características del derechista. Este no pertenece a partido alguno de la derecha; suele criticarlos a todos; suele también censurar a las instituciones democráticas —por ejemplo, al Congreso y sus miembros— como anticuadas, ineficaces y corruptas. Pero, paralelamente pretende manejar la política, los partidos y hasta a los parlamentarios derechistas... desde fuera. Es una situación extraña, casi incomprensible. La *sui generis* «independencia de derecha», igual que la veneración de los «hombres fuertes», el caudillismo, el rechazo de una autoridad realmente efectiva y la extrema pasionalidad de sus conflictos políticos, explican el fracaso de la derecha chilena».

Lo más notable es que un nuevo término se incorporó al lenguaje político chileno. La expresión «poderes fácticos» se grabó a fuego y se transformó en objeto de artículos y análisis y más aún: se transformó en un término de uso general. Cada cierto tiempo, cuando veo una referencia a los «poderes fácticos», no puedo dejar de recordar la forma imprevista en que el término surgió.

De todos esos artículos conservo hasta hoy uno. Es un editorial de *El Mercurio* publicado en febrero de 1996, casi tres años después de la tormenta... Afirma que lo que se ha dado en llamar «poderes fácticos son muy deseables porque, precisamente, limitan la capacidad de represión de un pequeño grupo de políticos o gobernantes». Nótese la expresión que usa: «represión». Y a continuación viene una perla: «Las Fuerzas Armadas

y los servicios de seguridad son, evidentemente un poder, de hecho, en todas las naciones del mundo, sean democráticas o no, y se saca muy poco con ignorar esta realidad. Los uniformados son siempre importantes y sus opiniones deben considerarse con la prudencia, sabiduría y ponderación del caso. Si en esta materia no se obra con inteligencia, se pueden generar crisis como las observadas en el pasado en Chile y otras naciones».

Lo tuve que leer dos veces. Si ya es inaceptable en teoría democrática básica invitar a asumir roles políticos a las Fuerzas Armadas resulta simplemente inaudito la referencia «a los servicios de seguridad». ¡Asignarle un rol legítimo de esa índole a los servicios de seguridad supera toda lógica!

¿Cómo pudo *El Mercurio* publicar un editorial así? Y hasta hoy me pregunto, ¿cómo podrían los políticos atender las opiniones de los «servicios de seguridad»?

El que pestañea pierde

Todo el revuelo causado generó una gran expectativa para nuestro consejo general. Mis adversarios internos sostenían que había cometido un «grave error» y que le había «causado un daño irreparable al partido». Entre los periodistas circulaba el rumor de que varios senadores preparaban una censura en mi contra. Antes de la inauguración, la sala estaba llena y los periodistas hacían nata. La expectación duró apenas segundos. Al entrar al salón con el resto de la directiva, el consejo se puso de pie y me recibió con un cerrado aplauso.

Censura descartada. Apoyo revalidado.

El resto del consejo transcurrió normalmente.

Los partidarios de ir solos a la elección parlamentaria y presidencial eran muchos. Sin embargo, ni una ni otra cosa era razonable. Una lista sin la UDI conducía a la pérdida de equilibrios políticos y parlamentarios. Una candidatura presidencial hasta el final era inviable y topaba con un obstáculo adicional: Manuel sólo sería candidato de toda la centroderecha. Incluso

en esa perspectiva, y para facilitar el arreglo parlamentario —aún no conseguido— había renunciado a toda proporcionalidad en su favor en la futura convención.

El consejo adoptó por unanimidad el acuerdo de desestimar una alianza con la UCC y, en cambio, fortalecer la alianza política y electoral con la UDI.

La UDI no se inmutó. Rechazó nuestro acuerdo y mantuvo una estrategia de «unidad a toda costa». Otro tanto hizo la UCC. Nosotros aparecíamos como divisionistas y contrarios a la unidad del sector. Además, estábamos en el lado comunicacionalmente más difícil: ellos sólo tenían que decir que buscaban la unidad, nosotros entrar en la compleja tarea de mostrar los inconvenientes de la unidad en la forma que se planteaba. Era difícil. A primera vista, ¿por qué oponerse a algo tan deseable?

Había que ser perseverante y no mostrar vacilación. En política es la única forma de ser convincente. El que no perdiera los nervios y se mantuviera firme impondría sus criterios. El primero que pestañeaba, perdía.

Pestañeamos nosotros.

A poco andar fue quedando claro que resultaría imposible mantener la resolución del consejo general. Los parlamentarios que competían en distritos donde la división de fuerzas comprometía su opción, fueron desligándose progresivamente del acuerdo y dando señales de debilidad. En rigor —lo supe mucho después, con gran indignación— el mismo día en que acordamos excluir a la UCC en el consejo general, un grupo de nuestros parlamentarios comió con el propio Francisco Javier Errázuriz en su casa.

Allí le manifestaron que el acuerdo del consejo era para que no «siguiera formulando exigencias exorbitantes».

—¿Y qué piensa Allamand? —habría preguntado Errázuriz.

—Si tú bajas la pedida, lo obligaremos a que acepte —fue la respuesta.

Y así fue. Mientras pasaban los días y más se acercaba la fecha de inscripción de las listas, más débil estaba la postura original.

El otro problema fue la actitud —muy comprensible, por lo demás— de Manuel Feliú.

—Si no hay lista parlamentaria, a lo menos con la UDI, yo no sigo. Ni Longueira ni Fra Fra van a ceder. A los dos les da lo mismo que la derecha desaparezca. Pero a mí no. ¡Haz el pacto de una vez por todas!

Fuimos cayendo como en un tobogán. No había fuerza interna ni respaldo externo para mantener el planteamiento de excluir a la UCC. Fuimos cediendo posición tras posición. Además, nosotros nos creábamos nuestros propios problemas. Jarpa había anunciado dos años antes que no repostularía por la VII Región e «instaló» a Gustavo Alessandri como sucesor. Si Jarpa hubiera postulado a la reelección, nadie habría osado poner los ojos allí, pero al ser una región «abandonada» se transformó en la presa codiciada de la cacería. De igual modo varios diputados de RN resolvieron, por distintas razones, no presentarse a la reelección. Sus distritos fueron inmediatamente apuntados como aquellos que naturalmente debían ser cedidos a la UCC en exclusividad.

Mientras tanto, el plazo de inscripción de las listas se agotaba. Hacia el vencimiento, todos los partidos fijaron sus consejos generales para resolver en definitiva los pactos y los candidatos. También se despejaban inconvenientes: Errázuriz finalmente había «aceptado» ser senador declinando su candidatura presidencial. Y la UCC se había allanado a suscribir un acuerdo programático. Pero asimismo surgían inconvenientes: la UDI exigía «asegurar» una senaturía para Hernán Larraín, con nombre y apellido, en la región que Jarpa abandonaba. Para ello, a Larraín lo debería necesariamente acompañar un candidato UCC. Cualquier RN era vetado, partiendo por Gustavo Alessandri.

Tómbola de candidatos

En tal escenario, la directiva y el equipo negociador de RN convino que deberíamos acordar con los demás partidos una plantilla de candidatos para someterla al consejo general. Mi gran temor era llegar al día de la inscripción sin definiciones.

Con Errázuriz de por medio podía pasar cualquier cosa, incluyendo una división en el último minuto, cuando no quedara ni siquiera tiempo para armar una lista de reemplazo.

En la víspera de nuestro consejo general, fijado para el sábado 3 de julio de 1993, continuaban las negociaciones en un ambiente caótico. La negociación se convirtió en una verdadera tómbola. Entraban y salían distritos de una y otra categoría sin ton ni son. Errázuriz insistía en que había que buscar fórmulas hasta el «último minuto antes de la inscripción». Ese era el único escenario inaceptable, pero Errázuriz estiraba y estiraba la cuerda. Cerca de las seis de la mañana se llegó a una plantilla de acuerdo:

Casi sin dormir me vi obligado a defender ante un consejo general iracundo un acuerdo que garantizaba la unidad del sector, pero que era malo para RN: Abandonábamos 17 distritos y tres regiones. ¡Llovieron las acusaciones de haber negociado mal! Y se produjo lo peor. Todos admitían que para pactar había que ceder alguna región y varios distritos… siempre que no fueran los propios.

Jarpa pasó a encabezar el rechazo al acuerdo. Había encontrado una manera de golpear a la directiva. Y gratis. Su propósito era echar abajo un acuerdo impopular… sin asumir ninguna responsabilidad por las consecuencias. ¿Qué hacer? Una opción era dejar que se rechazara y luego intentar reanudar la negociación. Pero, ¿qué garantizaba que ella fuera mejor? Si la UDI y la UCC no habían cedido, ¿por qué lo iban a hacer ahora? En tal eventualidad lo más probable es que se concretara la división. Ya se sabía cuál era el resultado esperado de ello: una debacle para la derecha.

A la hora de almuerzo, llamé a Manuel Feliú y le conté lo que pasaba.

—¿Qué quiere Jarpa? —me preguntó—. ¡Renovación es un partido inmanejable! ¿Qué importa un diputado más o menos? ¡El tema es la unidad! Si RN rechaza el pacto, que se busque otro candidato presidencial.

Tenía una sola forma de lograr que se aprobara el acuerdo.

—Si el acuerdo se rechaza, yo renuncio —anuncié en el consejo general.

Jarpa intentó disuadirme. Se produjo un diálogo ante el silencio de todo el consejo. Yo me mantuve firme. Cuando empezó la votación le anuncié a Ricardo Rivadeneira que debía estatutariamente asumir en mi lugar. Estaba seguro de que el acuerdo se rechazaría. Necesitaba 2/3. Sólo podía aprobarse con votos de las propias regiones que se estaban quedando sin candidatos.

Me equivoqué. El consejo lo aprobó por el 70,7%. Pero nunca una votación favorable fue más amarga.

Jarpa, en las semanas siguientes, señaló que «el propósito unitario de RN nos llevó al sacrificio máximo de dejar fuera candidatos que tenían la elección asegurada». Y no disimulaba su crítica a la UDI y a Errázuriz: «Es un sacrificio inmenso y en cierto modo inexplicable, porque no se hizo para obtener mayor votación, sino por el interés de un determinado partido y una persona».

Inscripción al filo

Sin embargo, el mal rato no terminaría ahí. Errázuriz el día de la inscripción nos tuvo a todos en ascuas. Hasta las 9:00 de la noche ni siquíera se aparecía. Sólo llamaba por teléfono para aumentar las exigencias. Quería más distritos cerrados. Tampoco decidía por cuál circunscripción se presentaría finalmente como candidato a senador.

Entremedio, Jarpa nos deparaba otra sorpresa.

—Tengo los papeles firmados por Jarpa para ser candidato —me anunció reservadamente Roberto Ossandón.

No supe si reír o enfurecerme. Habíamos tenido precisamente que abandonar la VII Región Sur porque Jarpa ¡dos años antes! había anunciado a los cuatro vientos que no sería candidato. Le habíamos rogado hasta el infinito que se repostulara y se había negado. Su tozuda determinación había generado todo tipo de efectos negativos. Y ahora, a último minuto, ¡cambiaba de opinión!

Errázuriz, la última hora, la destinó, como un hábil tahúr, a tratar de obtener ventajas finales. Amenazó con competir contra Beltrán Urenda en la V Región. Roberto Ossandón postuló entonces a Jarpa por la VII Norte. La UDI rechazó la propuesta y Errázuriz consiguió lo que buscaba: «abandonó» la V Región y obligó a que se aceptase como su compañero de lista al propio presidente de la UCC, Jorge Concha, a todas luces un postulante nominal. Así, Errázuriz pasaba a ser el único candidato a senador que tendría una región «exclusiva».

Aún no estaba satisfecho. Insistía en más cupos para sus diputados. Y se negaba a firmar los papeles del pacto. Era una extorsión cada vez menos sutil. A medida que se acercaba la medianoche y el vencimiento del plazo, yo estaba desencajado. Roberto Ossandón y Rodrigo Ubilla, previendo lo peor, habían preparado dos plantillas: una con la UCC y otra sólo entre RN y la UDI. Jovino y yo la firmamos. Roberto la guardó como secreta reserva en el bolsillo de la chaqueta.

Veinte minutos antes de que el plazo expirara, partimos al Servicio Electoral. La inscripción de la lista de la derecha era un caos completo. Errázuriz, impertérrito, seguía disfrutando. Luego de amenazar por última vez con no suscribir el pacto, le arrancó un cupo más al denominado Partido del Sur, arrebatándole físicamente la planilla a su presidente, Eduardo Díaz. Era tal mi indignación que apenas me contuve. Segundos antes de que el plazo expirara, el pacto fue suscrito ante la mirada atónita del siempre eficiente Juan Ignacio García, director del Servicio Electoral.

Fue un espectáculo bochornoso.

Y lo más insólito era que yo parecía destinado a pagar toda la cuenta. Me había jugado la vida por armar una lista en la derecha sin Errázuriz y había terminado jugándome por una lista que lo incluía; había tenido que pagar altos precios para garantizar la unidad del sector y aparecía como alguien que, por favorecer a RN, dificultaba la unidad de la derecha. ¡Y en mi propio partido era criticado exactamente por lo contrario!

—No fue un pacto, sino un parto —sintetizó Manuel Feliú.

SIN DESPEINARSE

Quedaba más.

El tema presidencial no estaba resuelto.

En las semanas siguientes se iniciaron todas las negociaciones para definir el mecanismo de la convención. Daniel Platovsky y Roberto Ossandón asumieron esa responsabilidad por RN. Al menos, aún teníamos la oportunidad de tener el candidato presidencial. Pero también se evaporó. Los equipos negociadores establecieron un sistema de convención en que participarían 1.847 personas, tomando como base los resultados de las elecciones municipales. Los candidatos asumieron el compromiso formal de que «los convencionales no recibirían instrucciones ni de los partidos ni de las candidaturas independientes, de manera que actuarán con entera libertad y en un sistema de votación directa». A los tres partidos principales se les asignó el siguiente número de representantes: RN 547, UDI 449 y UCC 391. Se convino también que habría 370 independientes, equivalentes exactamente a un 20% del total, elegidos de común acuerdo. Por último, al Partido del Sur y al Partido Nacional, se les asignó el resto.

La gran convención quedó prevista para el 8 de agosto. José Piñera la rechazó y descalificó su representatividad porque era un mecanismo «cupular».

Hacia fines de julio, el cuasi inexistente Partido Nacional empezó a postular el nombre de Arturo Alessandri, solicitando que se agregara a los nombres de los otros dos en carrera: Manuel Feliú y Jovino Novoa.

—Yo sólo acepto si todos me nominan. No estoy dispuesto a participar en ninguna confrontación con otros candidatos, aunque sea amistosa. Por eso, rechacé el honorífico ofrecimiento que me hiciera RN —había declarado Arturo Alessandri

Pero ahora había cambiado de opinión. El problema era que, por el hecho de ser independiente, su candidatura no cumplía ni

siquiera con el requisito mínimo que la ley exigía: 33.000 firmas para postularse.

—Si hoy no reúno las firmas, me retiro —declaró el 7 de agosto, el día anterior de la convención.

Pues bien, don Arturo consiguió las firmas, ya que se generó un espontáneo y fuerte movimiento de la opinión pública de derecha en su favor. Un grupo muy reducido de familiares —con gran eficiencia y dedicación— montó un sistema de recolección que funcionó a la velocidad del rayo. El requisito se alcanzó sobradamente y... en tiempo récord. Entonces los organizadores de la convención acordaron que dicha candidatura nominara al 20% de independientes.

La noche antes del inicio de la misma, me llamó Francisco Javier Cuadra. Me dijo que la UDI le había sugerido a la UCC —ésa era su fuente— que apoyaran ambos a Alessandri.

—Tenemos que sumarnos a la fórmula —fue su consejo— De lo contrario, mañana RN aparecerá derrotada.

Me negué. Habíamos tomado un compromiso con Manuel de acompañarlo hasta el final y no estaba dispuesto a transgredirlo. Pero además, la maniobra no tenía presentación. Endosar el apoyo a un candidato era, en la práctica, romper con el compromiso de dejar a los convencionales en libertad de acción. Y era transformar la convención en una «fachada».

—Yo no me bajo. Y no creo que Jovino haga una cosa así. Es no respetar la palabra —dijo Manuel cuando se impuso de la idea.

Un minuto antes de empezar los discursos, Jovino me confesó que declinaría en favor de Alessandri. Me tragué lo que pensaba.

—No le digas nada a Manuel. Déjalo al menos que haga su discurso tranquilo.

El intempestivo retiro de Novoa agitó los ánimos de la convención. La primera votación arrojó 56,48% para Alessandri y 38,74% para Feliú. Novoa igual obtuvo votos y hubo unos pocos nulos. No estaban los 2/3, pero Manuel, con nobleza concedió el triunfo.

Dentro de nuestra desazón sólo pudimos rescatar que RN se había mantenido sin deserciones. Manuel obtuvo casi 10% más

que los votos del porcentaje asignado a RN. Era una pequeña satisfacción, pero igualmente era el más abatido. Consideraba que el triunfo de Alessandri era muy injusto.

—Lo llamé para preguntarle si quería ser candidato y me juró que sólo lo sería si todos lo proclamaban. Que él no competiría con nadie. Por eso acepté. ¡Llevo meses de esfuerzo, recorrí todo el país, abandoné todas mis cosas, pasé mil malos ratos y Arturo, sin despeinarse, termina de candidato! Hace dos semanas no tenía ni las firmas. ¡No es justo!

No lo era. Pero, ¿cuándo la política lo había sido?

La política no será justa, pero por Dios que tiene vueltas. Cuatro meses antes le había ido a proponer a Jovino cuatro nombres: Alessandri entre ellos. Después de meses de desgarros, terminábamos donde mismo habíamos partido.

Alessandri celebró su triunfo en el restaurante «El Parrón». Los diarios informaron que, entre otros, se sumaron al festejo Eugenio Heiremans y Ricardo Claro. Luego Carlos Schaerer, entonces redactor y hoy director de *El Mercurio* de Valparaíso, asumiría como su jefe de agenda y más cercano colaborador.

Candidatura acuática

—La candidatura Alessandri es una candidatura acuática —afirmó con ironía el candidato del Partido Humanista en el primer foro al que asistí como candidato a diputado.

Todos nos miramos sin entender.

—Es acuática, porque es como el agua: insípida, inodora e incolora.

Carcajada general.

La verdad es que pese a su encomiable esfuerzo, un ánimo a toda prueba y el notable apoyo de su familia, la candidatura de Alessandri estuvo marcada por la improvisación y la falta de respaldo. Nuestro proyecto renovador no tenía por dónde sentirse representado en ella y su plataforma era crítica de las políticas que RN había impulsado durante el gobierno de Aylwin.

—¿Usted cree que a la derecha la manejan los poderes fácticos, como denunció Allamand?

—No. A lo mejor se molestó porque sintió que le interferían en una serie de cosas, pero los poderes fácticos se identifican, en cierta medida, con la posición de la derecha. Entonces, si uno tiene aliados, ¿para qué antagonizarlos? —contestó Alessandri.

Alessandri no escondía que en su propia opinión su mayor fortaleza era «su apellido». *Pepe* Piñera insistía, aludiendo de paso a Frei, que la contienda presidencial no podía cerrarse a «dos candidatos nostálgicos del pasado, de los apellidos, de los ancestros».

La derecha enfrentaba la elección con dos candidatos independientes, dividida y sin la menor planificación. Para peor, hacia el final, la candidatura de Piñera terminó —la eterna búsqueda del voto duro— rivalizando con Alessandri acerca de quién había participado más activamente en el gobierno militar. Más que eso, Piñera avanzó a una fuerte descalificación de la persona y candidatura Alessandri.

El resultado global fue, como era de esperar, muy pobre. Alessandri se empinó apenas sobre el 24% y José Piñera recogió sólo un 6%. Eduardo Frei sacó un 58%, superando no sólo la marca de Aylwin, sino también la votación que su padre había obtenido 30 años atrás. La Concertación había ganado su segundo mandato, rompiendo la tendencia de la política chilena —surgida a contar del último gobierno radical— que instalaba en La Moneda a los opositores del gobierno anterior.

La batalla de Las Condes

—Te fuiste a meter a la boca del lobo —me dijeron mis amigos periodistas. ¿Quién te manda ir de candidato en el distrito donde viven todos «los fácticos»?

¿Por qué postulé por Las Condes? No porque fuera el lugar más fácil ni cosa que se le pareciera, sino porque Las Condes es

el distrito de mayor influencia del país, el «corazón de la derecha». RN tenía allí la más alta votación. Incluso en la elección municipal de 1992, habíamos superado a todos los demás partidos, aunque Joaquín Lavín ya estaba erigiendo un fuerte liderazgo a partir de su alcaldía.

En muchos de los contactos previos la UDI había pretendido —al igual que en 1989— que ese distrito se le asignara en exclusividad. Tal propuesta era inaceptable. Todo el equipo electoral de RN convino en que debería presentarme, abandonando la idea de postular por un distrito donde la centroderecha careciera de representación parlamentaria.

Nuestro razonamiento fue que si nuestro proyecto había quedado trizado después del espionaje y la candidatura de Alessandri no lo reflejaba, Las Condes era el escenario donde debería expresarse para recuperar vigor.

Fue una elección mucho más dura de lo que todos esperaban. La UDI hizo una movida audaz: trasladó desde Santiago al diputado Carlos Bombal, ex alcalde de esa comuna y que había obtenido en 1989 la primera mayoría como diputado. La UDI había resuelto desproteger gravemente un distrito también emblemático. El objetivo era obvio: derrotar al presidente de Renovación Nacional.

La prensa bautizó de inmediato la campaña como la «Batalla de Las Condes». En una elección con pocas incertidumbres y resultados más que previsibles, la de Las Condes fue la mayor incógnita. Y no sólo eso: los medios de comunicación le atribuyeron una enorme importancia.

Desde el primer minuto quedó claro que se confrontarían dos proyectos políticos.

—Lo que está en juego es bastante más importante que la lucha por un escaño parlamentario, porque Las Condes es un *búnker* en donde la derecha tiene concentrado el poder económico, cultural, intelectual y social. La alternativa que privilegie este sector será la que defina el futuro de la derecha. Si triunfa Allamand, habría luz verde para un liderazgo fuerte, para un proyecto liberal; si el sector privilegiara a Carlos Bombal significaría

conservar el *statu quo,* preservar el modelo de armonizar la democracia actual con el patrimonio del gobierno autoritario —dijo Óscar Godoy a la revista *Cosas.*

Una revista especulaba: si gana Bombal y se pierde Allamand, la UDI pasaría a ser el principal partido del sector, yo debería renunciar a mi cargo y RN «se transformaría en una especie de Yugoslavia, donde las facciones internas se trenzarían en una guerra interna de resultados impredecibles». A la inversa, mi triunfo me transformaría «en el líder indiscutido de la derecha», quedaría en condiciones de unir a RN y podría establecer una coalición permanente con la UDI.

En tal escenario, la campaña sería fundamental. Y la nuestra partió con problemas.

El plus del voto cruzado

—Allamand va a recibir un «voto de castigo» —fue la proclama.

Y cual profecía, empezó a cundir. En esa expresión se condensaba un cúmulo de reacciones críticas por las razones más disímiles y contradictorias.

La UDI y Bombal plantearon la campaña admirablemente bien. Bajo el slogan de «un nuevo estilo», la campaña marcaba una fuerte distancia frente a la política de los partidos y su secuencia de rencillas y reyertas. Al mismo tiempo, la figura de Lavín aparecía como elemento central y la propaganda asumía que había que elegir a Bombal, para que fuera un apoyo parlamentario a «la gestión del alcalde». La política tenía una dimensión concreta que privilegiar. Además, Bombal era «el líder unitario» —así lo decía toda la propaganda— que la derecha necesitaba. A la interrogante de por qué había abandonado Santiago con el afán de desbancar mi candidatura, la respuesta de Bombal era que en Las Condes saldríamos elegidos los dos. Por último, toda la ejecución de la campaña era técnicamente inmejorable.

Al revés, nosotros cometíamos errores. Planteamos inicialmente una campaña sobre la base de un par de lemas que no sintonizaron para nada con el electorado y también nos equivocamos al intentar generar un efecto gráfico novedoso en los afiches. En vez de recurrir a las fotos a color, usamos fotos en blanco y negro. Nunca me convencí del todo, pero acepté personalmente la propuesta… que resultó un completo fiasco. El contraste entre nuestra propaganda y la de nuestro compañero de lista era enorme. A mitad de campaña tuvimos que reemplazar toda la propaganda, reimprimiéndola completa. Un error de principiantes, que sólo el talento de Martín Subercaseaux y Andrés Nassar —grandes publicistas— logró superar.

En cualquier caso, también teníamos elementos poderosos a favor. Una trayectoria más allá de los graves problemas del último año y medio, que por lo demás generaban lecturas encontradas: algunos me consideraban culpable y otros víctima de los mismos. Un proyecto político y una batería de propuestas concretas cubriendo desde la seguridad ciudadana a la reforma educacional. Por último, nosotros rechazábamos la idea de que podríamos salir los dos: era una quimera. La Concertación siempre había superado el tercio de los votos en Las Condes y, de hecho, postulaba a la reelección Eliana Caraball, ex presidenta del Colegio de Arquitectos y destacada parlamentaria. Sólo habría votos para uno.

Cuarenta y cinco días antes del final, una encuesta interna nos dejó helados: estábamos más de diez puntos atrás de Bombal y Eliana Caraball mantenía la votación histórica del PDC. ¡Estaba perdiendo! Redoblamos el esfuerzo —las reuniones en las casas se multiplicaron hasta transformase en un esfuerzo físico y mental extenuante— y convinimos en que había que dar un giro. Sin un replanteo, estábamos muertos.

Gastón Cummins acertó en pleno al inventar un lema nuevo: «Allamand, un líder necesario».

Tuvo gran penetración porque llegaba a todo el electorado. A la derecha, para que evaluara las trayectorias y juzgara quién podía ser más importante para el futuro; al electorado

independiente y a la propia Concertación, para que viera qué oposición prefería: una al estilo RN-Allamand o una al estilo UDI-Bombal.

Los votantes de derecha, al principio, reaccionaron con irritación, ya que se les obligaba a elegir entre Bombal y Allamand. Pero al frente se produjo un fenómeno curioso. Para muchos votantes independientes y de la Concertación empezó a resultar muy importante influir en cómo se dirimiría ese duelo. Apareció con fuerza el voto cruzado. La calle me empezó a hablar.

—Yo voto por Frei y por usted.

—Es primera vez que voto por alguien de derecha.

Bernardo Matte dio la única entrevista de su vida para demostrar, fehacientemente, que era falso que todos los empresarios estuvieran con Bombal. Al revés, el grupo de apoyo empresarial era excelente: Pedro y Nicolás Ibáñez, Fernando Léniz, Daniel Platovsky, Juan Eduardo Errázuriz, Manuel Feliú y Vicente Muñiz, entre muchos otros. Las adhesiones incluían gente tan variada como Enrique Evans, Francisco *Kike* Morandé, el futbolista Patricio Yáñez o el actor Cristián García-Huidobro. Cristián realmente se pasó: había votado *No,* era de la Concertación, votaba por Frei y, como él mismo decía, no tenía un pelo de derecha. Igual me apoyó, participó —sin jamás pedir un peso— en varias proclamaciones y le dio a la candidatura una gran amplitud. También, una inyección de optimismo y alegría.

Bulnes al rescate

Jarpa, entretanto, había originado una especie de movimiento bajo la denominación Compromiso por Chile. Según Jarpa —*ad portas* del retiro—, el sector debería volver a agruparse en un mismo partido, ya que las diferencias se reducían a «aspectos personales y de estilo». Que Jarpa hablara de «estilo» era sintomático. Esa misma era la palabra que Jaime Guzmán había utilizado para intentar explicar su irreconciliable diferencia con él durante la ruptura de RN y... era la palabra-emblema de

Bombal en toda su propaganda: «El nuevo estilo». Sin embargo, la idea, tal como señaló *El Mercurio*, pasaba «por la descalificación del presidente de su conglomerado, Andrés Allamand», y tenía un raro componente: según Jarpa, la unidad de los partidos debería ser encabezada por figuras independientes. Era absurdo e incongruente con las propias opiniones de Jarpa sobre la materia, vertidas pocos años antes, donde había fustigado a quienes delegaban tareas políticas en figuras independientes.

A fin de cuentas, a nadie le cupo duda: Jarpa había llamado a no votar por mí.

Era un ataque a mi postulación en el momento más difícil. Roberto Palumbo me insistió en que fuera a hablar con Jarpa y le pidiera que me apoyara públicamente. Según Roberto, ésa era la forma de terminar con esas versiones. Yo me resistía.

—Habla con Jarpa, no te dejará de dar una mano. ¡Que se acuerde cómo lo apoyaste frente a Guzmán! Vamos perdiendo. Y para Renovación tu derrota sería un desastre. ¡No seas orgulloso!

¡Qué orgullo ni qué ocho cuartos! Yo dudaba porque pensaba que Jarpa se negaría. Pero hice de tripas corazón y subí a su oficina del segundo piso. Jarpa me recibió frío y formal, sabiendo —creo yo— de antemano a qué venía.

—Vengo a pedirle ayuda. En el último tiempo todos, yo el primero, habremos cometido errores. Usted me conoce desde «cabro» chico y sabe que nunca le he pedido nada personal. Ahora lo hago, por mí y por el partido o, si usted prefiere, al revés. Primero por el partido, luego por mí.

—Yo a usted no lo apoyo —fue la tajante respuesta, seguida de una explicación tan mala que ni siquiera la recuerdo.

Un par de semanas después *El Mercurio* entrevistó a don Francisco Bulnes. El titular no pudo ser más elocuente: «Bulnes le sale al paso a Jarpa».

—Me limito a pedirles a los militantes de Renovación Nacional y a la gente de la derecha lo contrario de lo que les pidió Jarpa. Les pido que trabajen por la candidatura de Andrés Allamand. La considero de mucha importancia para la derecha y su futuro. Es

un político muy dotado que combina el ser hombre de acción con ser muy profundo. Tiene pasta de líder y la derecha va a necesitar líderes.

No sólo eso. Me apoyó en las tesis más polémicas. Aludiendo a mis declaraciones sobre los poderes fácticos, dijo que mejor habría sido no decir nada, «pero que en el fondo tiene la razón, la tiene. Uno de los grandes problemas de la derecha es que mucha gente se mantiene en política toda la vida, ejerce una gran influencia en las decisiones, pero no hacen vida de partido. Son francotiradores. Me refiero especialmente a los empresarios. A los militares no, *El Mercurio* tiene todo el derecho a dar su opinión en las páginas editoriales, pero no a distorsionar las noticias como suele hacerlo. Mientras la gente de la derecha no se convenza de que la política hay que hacerla dentro de los partidos, la derecha no andará bien ni alcanzará a ser mayoría».

Fue un respaldo absolutamente decisivo.

En la quemada

Para los políticos, los días de elección son muy especiales. Es una mezcla de cansancio y ansiedad. Es un equilibrio entre el «ojalá que nos vaya bien» y el «ojalá que esto termine». Es un corte entre el ayer y el mañana. En las elecciones, uno pone arriba de la mesa sus convicciones y las somete al juicio de los ciudadanos. Son ellos quienes tienen la palabra. Apoyan o rechazan, confirman o reprueban. En el fondo, juzgan. El día de las elecciones, y ahí está su magia y su belleza, se invierten los papeles. Hasta que no llega ese día, somos los dirigentes los que tomamos las resoluciones. A nosotros se nos pregunta. Nosotros opinamos. Cuando se inicia la jornada electoral la única opinión que importa es la de los que votan.

Las horas de los días de elecciones tiene distinta duración. Los minutos no son iguales: parten lentos, adquieren una duración normal al mediodía, después de que uno ha votado y antes de que cierren las mesas. Hay que comer algo y tratar de

dormir un poco, para estar despejado en la noche... pero casi nunca resulta. A partir del cierre de las mesas y hasta los primeros cómputos, el tiempo se acelera y cuando los cómputos se desencadenan es simplemente vértigo, caen en cascada y la diferencia entre el triunfo y la derrota es la misma que existe entre el cielo y la tierra. Si uno gana, las horas son intensas y alegres; si pierde, largas y tristes. Cuando uno gana quiere que mañana sea ahora mismo y si pierde, que la noche nunca termine y que al día siguiente nadie se despierte.

¡Qué manera de sufrir!

Apenas empezaron a llegar los resultados, el panorama se pintó negro. Bombal tenía tres o cuatro puntos de ventaja y faltaban esos mismos puntos para doblar a la Concertación.

Sólo hacia las siete de la tarde respiré.

¡Habíamos doblado! Bombal obtuvo el 34,9 % de los votos y yo el 31,2%, lo que hacía un total de 66,1%. La Concertación sólo sumaba 31,9%. Por primera vez, la centroderecha doblaba en un distrito. Sin embargo, el dato más notable no era ése, sino el «voto cruzado»: la lista de diputados de la centroderecha obtuvo casi 19.000 votos más que los candidatos presidenciales Alessandri y Piñera.

El comentario no se hizo esperar.

—Allamand salió gracias a la Concertación.

¿Cuál era el resto de los resultados a nivel parlamentario?

La lista de la centroderecha obtuvo el 36,6%, superando el registro de 1989, que era 34,2%. RN sumó un 17,8%, cifra muy parecida a la de cuatro años antes, lo que era un buen resultado, pensando que no habíamos presentado candidatos en una parte muy importante del territorio. La UDI aumentó al 14,2%.

La derecha eligió 50 diputados, dos más que en 1989. RN disminuyó dos y la UDI aumentó tres, quedando con 32 y 17 respectivamente. El caso de la UCC era singular: aparecía eligiendo cinco diputados, pero en realidad sólo uno pertenecía al partido, ya que los cuatro restante se incorporaron desde un comienzo a RN y la UDI.

La derecha eligió un senador en cada una de las nueve circunscripciones en disputa. RN reeligió a cinco de sus senadores y sólo Hugo Ortiz se perdió en la XI Región. La UDI reeligió uno y aumentó otro. Errázuriz, por su parte, obtuvo una gran votación.

La votación de la lista fue muy similar a la de la elección anterior y, como era previsible, la UCC no logró traspasar el caudal electoral que supuestamente tenía. Además —tampoco ninguna sorpresa —cuando la dupla de candidatos la integró un RN y un UDI siempre elegimos un diputado. A la inversa, en los lugares en que participaron candidatos UCC, varias veces fuimos doblados.

Conclusión: el panorama electoral no sufrió demasiadas variaciones.

Así de veleidosa es la política. ¡Tanto desgarro inútil!

Capítulo XVI

La cuña

—Sí, juro —dijimos a coro la mayoría, entre algunos «sí prometo».

Todo era emocionante. La sala y la liturgia del reglamento. Tomar posesión del escritorio y descubrir los enigmas del sistema electrónico de votación (que nunca logré manejar con soltura). Las tribunas de la Cámara estaban repletas de familiares y el ambiente mezclaba solemnidad con alegría. ¡Cuesta tanto llegar y mantenerse ahí!

Ser parlamentario es casi como adquirir un estado civil. Una especie de título. Uno, sin darse cuenta, pasa a ser el «diputado» tal o cual y el nombre propio desaparece.

En los cuatro años anteriores había estado en el Congreso Nacional muchas veces, pero siempre me sentí como lo que era: un invitado. Ahora, nadie tuvo que regalarme entradas.

Después de los saludos de rigor, salí embalado para el Senado. Habíamos aprendido la experiencia y esta vez no habría sorpresas desagradables. Desde el día siguiente de la elección, nos concentramos en la composición de las mesas de la Cámara de Diputados y el Senado. Luego de vacilaciones iniciales (algunos de los nuestros pensaban que no tendríamos votos para superar a Valdés) y actuando de la mano con la UDI, habíamos resuelto enfrentar a la Concertación en el Senado.

Cuando llegué se estaban contando los votos en un ambiente

de gran incertidumbre. Candidatos: de ellos, Gabriel Valdés; nuestro, Sergio Diez. La incógnita era absoluta. El secretario se hizo un lío homérico con el recuento. Hubo que repetirlo. ¡Empate!

Suspendida la sesión. Conversaciones, exploraciones, negociaciones. Todo sobre la marcha. Y luego, una solución salomónica: dos años —los primeros— para la Concertación; dos años —los segundos— para la oposición. En este último período, la testera quedaría a cargo de un RN acompañado de un vicepresidente de la UDI, que de paso, olvidó todos los argumentos que cuatro años atrás había usado para apoyar a Gabriel Valdés.

¡1994 no pudo partir mejor!

¿Cuál sería el sello del nuevo gobierno? ¿Cómo se perfilaría la Concertación II?

Genaro Arriagada, el cerebro tras la candidatura de Frei —primero a la presidencia del PDC y luego a la presidencia de la nación— lo definió temprano: el énfasis del segundo Gobierno de la Concertación ya no sería la transición, sino la modernización.

Una gigantesca oportunidad política estaba a la vista: el anunciado énfasis modernizador de la nueva administración, coherente con la personalidad del nuevo presidente —más ingeniero que político, más empresario que hombre de partido— inevitablemente estaba llamado a provocar quebrantos en la alianza gobernante. Cualquier modernización que Frei intentase, conceptualmente lo alejaría de la Concertación y lo acercaría a la centroderecha.

Los cambios que eran imprescindibles en educación, salud, puertos, y empresas sanitarias, por citar sólo algunas, lo distanciarían de la dirigencia de los partidos que lo apoyaban. Todas esas reformas tenderían a abrir nuevos espacios al sector privado y traerían enfrentamientos con grupos de presión —por ejemplo, los sindicatos de las empresas que deberían privatizarse— que a su turno constituían parte importante de la base política del nuevo gobierno. Frei, tarde o temprano, se enfrentaría a un dilema: la modernidad lo empujaría hacia nuestros planteamientos y el precio serían los conflictos con los suyos; si no lo hacía, reduciría su gobierno a la gestión de las inercias del pasado.

La impresión se me reafirmó cuando la directiva de RN visitó a Frei y perfilamos nuestra posición:

—La «democracia de los acuerdos» sirvió para darle estabilidad política y económica al país; ahora, debe servir para impulsar la modernización.

Al despedirnos, una secretaria se me acercó con gran simpatía para pedirme que nos sacáramos una foto.

—Voté por ti —confesó entre risas.

¡Bien lejos había llegado el voto cruzado!

Una moneda en rodaje

Sin embargo, la estrategia tomaría un tiempo antes de desplegarse. La instalación del gobierno fue a ritmo de tortuga y el armado del primer gabinete —con gran presencia de los presidentes de los partidos de la Concertación— hizo agua desde el primer día. Poco tiempo después, el gobierno se enfrascó en un tremendo conflicto con el general director de Carabineros, Rodolfo Stange. Una resolución judicial lo implicó en el caso de los dirigentes comunistas degollados y el presidente Frei —mal aconsejado— lo citó a La Moneda para pedirle su renuncia. Durante meses resonó la respuesta del general:

—Yo no renuncio.

Tan mal funcionaba el gobierno en sus primeros meses que la excusa esgrimida era el «rodaje». Nuestra respuesta se demoró un segundo: «Los autos modernos no necesitan rodaje». Hacia septiembre, Frei adoptó con brusquedad y formas poco elegantes la única solución a su alcance: reemplazó al ministro del Interior, Germán Correa, por el canciller y hombre de confianza suya, Carlos Figueroa.

Para nosotros, sorprendidos ante un gobierno que se empeñaba en tropezar con sus propios pies, el problema era la dificultad de desarrollar la estrategia de «democracia de los acuerdos II». ¿Cómo hacerlo frente a un gobierno estático e inmóvil?

Sin embargo, la pausa no venía mal, ya que la línea política de RN tenía detractores internos que debían ser convencidos.

—¡La democracia de los acuerdos se fue al cielo! Cuando se llega a un acuerdo con el gobierno, el que gana va a ser siempre la autoridad. El éxito es del gobierno y no de la oposición— declaró el senador Sergio Romero al diario *Las Últimas Noticias,* explicitando en qué posición estaban varios prohombres del partido.

Años más tarde, cuando le correspondió asumir la presidencia del Senado —cargo que ejerció con brillo, astucia y firmeza— tendría una opinión completamente distinta. Se jactaba de haber llegado a numerosos acuerdos con el gobierno, al punto que Raquel Correa, en una entrevista, lo llamó «El rey de los acuerdos».

Internamente, el debate se parecía al de cuatro años atrás: muchos pensaban que la oposición debía centrarse en las tareas de fiscalización. Otros, insistíamos en que las oposiciones se perfilan mejor cuando demuestran que tienen mejores equipos e ideas para gobernar.

Había otro elemento para avalar esa tesis: estábamos al comienzo de un mandato de seis años y era absurdo plantear, en esa etapa, una oposición frontal. Chile no aceptaría nuevamente oposiciones que le quitaran «la sal y el agua» al gobierno.

Desde mi punto de vista, la línea política así diseñada era la mejor manera de servir al país. Nos permitía seguir como fuerza constructiva, aportar ideas para gobernar e introducir una cuña en la Concertación. Mi obsesión seguía presente: para alcanzar al gobierno había que captar una franja de la Concertación. Si el eje «democracia-autoritarismo» nos era tan adverso ¿qué tal un eje «modernización-inmovilismo» para dibujar un nuevo alineamiento político?

En cualquier caso, esa posición requería de dos elementos adicionales para ser exitosa.

El primero era una adecuada interlocución con el propio gobierno. Yo no era amigo personal de Frei, pero siempre me pareció un tipo honesto, con gran vocación de servicio y sentido

de país. A diferencia de muchos, jamás lo subestimé. Al revés de los políticos que a veces hablamos de más, Frei siempre habla de menos, lo que lejos de ser un defecto, es una virtud. Otro dato: Frei no construiría a mis espaldas un *by pass* con Jarpa como lo había hecho Alywin.

El segundo era que nuestra política se convirtiera en la estrategia de toda la oposición. Para ello, había que gestar un nuevo orden en la centroderecha.

El síndrome del ojo de aguja

Por primera vez y en mucho tiempo, existían razones para ser optimista, porque las posibilidades de una acción conjunta de los partidos de derecha estaban a la vista.

Durante el gobierno de Aylwin habíamos tenido miradas de fondo distintas acerca de la transición misma y del rol opositor en ella, que obstaculizaban una acción política conjunta. En 1994 la unidad de la centroderecha estaba amaneciendo: se veía posible transformar una unión, puramente electoral, en una alianza propiamente política.

Para mí, la acción política del sector tenía cuatro problemas no resueltos.

El primero era un contrasentido: la visión del gobierno militar nos dividía más que a la propia Concertación. No era razonable perpetuar esa divergencia y la centroderecha no podía negarse a perfeccionar la institucionalidad política y económica proveniente del régimen militar. Era insensato confundir la estabilidad con la petrificación.

El segundo problema consistía en romper con una simetría absurda: admitir únicamente como opositores auténticos a los partidarios del gobierno militar. Con ese razonamiento, más que el juicio sobre el gobierno actual, lo que pesaba era la evaluación de gobierno que había terminado cuatro años antes. Demencial.

En tercer lugar: erradicar el «síndrome del ojo de aguja», conforme al cual para pertenecer a la centroderecha había que

tener ancestros liberales o conservadores, haber militado en el Partido Nacional y haber apoyado siempre y en toda circunstancia al gobierno militar. Todo aquel que no cumplía esos requisitos no era «confiable». Pero ¿cuántos pasaban por ese colador?

Lo último era que la centroderecha debía admitir su diversidad sin dramatismo y tolerar que en su interior existieran tendencias y visiones diferentes.

Los otros pasos eran fortalecer los partidos, tener un programa común y transformar, entonces, la alianza electoral en una coalición política. En simple, emular a la Concertación.

Irse para volver

Jarpa resolvió abandonar la política activa. Y esta vez parecía que hablaba en serio.

En marzo se le tributó una cena de homenaje en el Estadio Italiano, a la que asistieron más de 1.500 personas. Los organizadores se ocuparon de destacar que no era un homenaje «partidista», sino de toda la derecha. Los oradores principales fueron Arturo Fontaine A., Manuel Feliú y Ricardo Rivadeneira. Roberto Palumbo, siempre buen amigo, editó un libro con recuerdos de su trayectoria.

Mis relaciones con el «jarpismo» no eran las mejores, por lo que no me extrañó que, aunque era presidente del partido, ni siquiera me ofrecieron decir un par de palabras. Algunos me aconsejaron que replicara al desaire no asistiendo al homenaje. Me pareció una niñería. Fui como cualquier hijo de vecino, me senté en una mesa cualquiera y traté de pasar lo más inadvertido posible.

Dentro de las curiosidades del mentado «retiro», Sergio Fernández, le escribió un panegírico en *La Segunda,* instándole a no abandonar la vida política. No dejaba de ser curioso que sus más enconados adversarios políticos en la derecha lo acogieran, y nosotros lo viéramos partir casi con indiferencia. Algo —quizás no político— quedó ahí fuera de lugar.

De cualquier forma, Jarpa no ayudaba a algo distinto.

—Allamand era considerado su hijo político. ¿Cuándo dejó de serlo? —le preguntaron en una entrevista.

—Cuando cumplió 18 años —y más tarde agregó: «Los hijos se van de la casa».

El homenaje a Jarpa motivó crónicas suspicaces y no faltaron las publicaciones que recordaron sus anteriores anuncios de «retiro»:

—Me voy a dedicar al campo —dijo luego de abandonar el Ministerio del Interior en 1985.

—Mi compromiso termina y punto. Necesito recuperar tiempo para dedicarme a mis cosas —dijo en febrero de 1988, días antes de ser reelecto por dos años como presidente de RN.

—Con el casamiento de mi primera nieta, entro en etapa de jubilación. Tengo ganas de dedicarme al campo, al guitarreo, a los caballos. Eso me llena el espíritu —señaló en enero de 1991, en la mitad de su mandato como senador.

—Cuando termine mi período de senador, no voy a seguir participando en política —dijo en agosto de 1992, poco antes de lanzar la candidatura de Evelyn Matthei.

—A partir de marzo, pienso dedicarme a mis actividades privadas y a mi trabajo en el campo —dijo en noviembre de 1993.

Y ahora, marzo de 1994: «Me he retirado tanto del Senado, como del cargo directivo del partido. Naturalmente, como chileno, si convocan a las reservas entrenadas para asumir responsabilidades, habría que hacerlo. Espero que no caigamos en una nueva crisis».

En cualquier caso, la salida —más virtual que real— de Jarpa de la arena política dejó al descubierto la enorme fuerza de su liderazgo personal y lo inasible de su pensamiento. ¿Cómo definirlo? ¿A qué concepto acudir sin tener que trajinar en el consabido lugar común del rescate de lo «nacional»?

Jarpa sólo cumplía su destino: irse para volver.

Dos compadres

Durante el primer semestre de 1994 dudé mucho si seguir o no al frente de Renovación. De partida, me faltaban ganas, ya que los últimos cuatro años habían sido durísimos. Las presidencias de los partidos son maquinarias trituradoras, son cargos llenos de malos ratos donde siempre hay invitaciones pendientes, lugares donde a uno lo esperan, giras programadas. Llevaba demasiados años al frente, no había parado desde 1983, cuando partimos con la Unión Nacional. ¡Eran ya diez años de tiempo completo dedicados a la vida partidaria!

La vida familiar se resentía, estaba lejos de los amigos personales, mis hijas crecían a mayor velocidad de lo que me gustaba, ya ni jugaba fútbol en la Liga Providencia, algo que una vez por semana me oxigenaba los pulmones y el alma. ¡Tenía tantas ganas de tener más libertad! Y estaba el problema del Parlamento, donde me sentía —es cierto— como león enjaulado. ¡Se perdía tanto tiempo! Costaba tanto que se movieran los pesados engranajes, pero lo que más me inquietaba era la imposibilidad material de ser simultáneamente presidente de partido y buen parlamentario.

Tampoco aparecía claro un nombre para dejar en mi puesto. Ricardo Rivadeneira y Carlos Reymond, que me habían acompañado en la última directiva, no estaban en disposición de abandonar sus profesiones y dedicarse a RN 24 horas diarias.

Poco a poco se me impuso la conveniencia de seguir un tercer y último período. Además, si me hacía a un lado, se desataría una álgida competencia entre las dos facciones que cohabitaban en el partido y la frágil unidad lograda se resquebrajaría. Tampoco era irrelevante para el futuro del proyecto el próximo presidente. Al interior de RN la idea progresista no las tenía todas consigo. El núcleo de senadores contrarios no cedía e, incluso, había ido progresivamente adoptando predicamentos cada vez más adversos a cualquier cambio institucional. En el hecho, venían retrocediendo desde los plantea-mientos que habíamos adoptado —todos juntos y Jarpa el primero— a

fines de la década de los 80. Para mí, ése era un problema de fondo.

Las diferencias sobre cómo enfrentar al gobierno eran eso: diferencias. Y pasajeras. La idea de comprometer al partido definitivamente con un orden institucional con claros componentes autoritarios era una cuestión de fondo. A mi juicio, tenía que ver, ni más ni menos, con nuestra identidad democrática.

El sector todavía llamado «jarpista» y que más adelante se bautizaría como «duro» —luego de un interregno en que intentó el vistoso anacronismo de «nacional doctrinario»— casi me resolvió los problemas cuando insinuó levantar una lista para competir por la presidencia. Jarpa declaró que «era difícil que el presidente del partido pudiera ser parlamentario». Sergio Romero declaró que nadie debía «apernarse» en RN y Francisco Prat, junto a Alberto Cardemil, aparecían como posibles candidatos al cargo máximo. La prensa empezó a hablar del «fin de la tregua» en Renovación. Tal escenario era ideal, ya que generaba automáticamente una competencia democrática donde se enfrentarían las dos visiones y líneas políticas.

Pero no pasaba de ser una amenaza para mejorar posiciones negociadoras.

—Tendríamos que ser idiotas para plantear así el problema —me confesó Alberto Cardemil—. Si nuestra lista es contra ti, perdemos lejos. Lo que queremos es tener una adecuada influencia en la conducción del partido. Vamos a pedirte integrar una mesa unitaria.

A su vez, los más firmes partidarios de la directiva consideraban que había que «pasarles la máquina» a los «duros».

—Midámosnos de una vez por todas —reclamaban—. Les vamos a ganar lejos.

Mientras calibraba qué hacer, ocurrió un hecho imprevisto.

—Sería una desgracia para Chile si Allamand no gana las elecciones internas, porque una derecha moderada y democrática es fundamental para seguir progresando —declaró el presidente del PPD, Jorge Schaulsohn.

—El «jarpismo» se sacó la careta y emerge como una fuerza

retrógrada y fiel a la dictadura militar que hace inviable a RN como fuerza democrática —agregó el presidente del PS, Camilo Escalona.

Más todavía, ambos me aconsejaban —¡por los diarios!— «competir y ganar la elección interna», ya que de lo contrario, nadie sabrá «quién lidera realmente la colectividad».

Fue una intervención inconsulta y contraproducente. ¿Qué tenían que meterse en casa ajena? Los llamé indignado y rechacé tajantemente tales declaraciones. Pero ambas provocaron un efecto impensado.

—Allamand quiere elecciones para quedarse con el poder total en el partido —declararon varios parlamentarios y dirigentes.

Una fortaleza se tornó en debilidad. Mi posición personal era tan fuerte al interior del partido que virtualmente podía imponer cualquier directiva. ¡Jamás había sido ésa mi intención!

Todo presidente de partido aspira a conducir de una forma en que toda la tripulación se sienta identificada. Por otro lado, la gobernabilidad de Renovación era muy esquiva. Alberto Espina era firme partidario de la integración. Su argumento era nítido: «No se puede manejar el partido sin que esté representada en la conducción la línea dura. ¿Cómo vas a entenderte con el Senado? Es mejor que tengamos un representante de ellos aquí, para que todo sea más gobernable».

Cuando se iniciaron las negociaciones quedó claro que el sector «jarpista» no tenía fuerza. Ni siquiera se discutió mi presidencia. Querían cuatro cargos de los siete de la directiva y la primera vicepresidencia.

Nuestra respuesta fue categórica: No. Sólo dos de siete. Alberto Espina sería mi segundo, Rodrigo Ubilla asumiría la secretaría general e integrarían la mesa Roberto Ossandón y Raúl Urrutia. El nombre fijo de los «duros» era Alberto Cardemil. El segundo puesto asignado a ellos deberían elegirlo entre María Angélica Cristi y Roberto Palumbo. Aceptaron el trato y eligieron a éste último. La secretaría general es una porción muy importante y de altas exigencias, Ubilla estaba pintado para ella:

sólida formación en ciencias sociales, experto electoral y —algo exótico en política— ningún afán de salir en los diarios.

La verdad es que, al menos en apariencia, el «jarpismo» aceptó todo.

El presagio de Bulnes

Una vez lograda la integración, se convino un estatuto para que las discrepancias se manejaran «puertas adentro» y no quebrando el frente hacia la opinión pública. Un gran problema que habíamos tenido antes era que cada vez que la directiva adoptaba una decisión por mayoría, el o los derrotados se sentían autorizados para defender públicamente su punto de vista minoritario. En la práctica, eso hacía que la conducción del partido se expresara a «dos voces», debilitando desde la partida cualquier resolución.

Los dos Alberto —Espina y Cardemil— redactaron un documento de carácter reservado para desterrar esa mala práctica. Era clave convenirlo con el propio Cardemil, quién había declarado que prefería no integrar la directiva, porque «si entro, tengo la obligación de plantear los temas dentro de ella y si se resuelve otra cosa, me resto a ser oposición y no puedo diferir». Hacia adelante, tal como él lo planteaba, la voz minoritaria o se sumaba a la mayoría o se mantenía en silencio, pero sin boicotear desde la mesa misma sus determinaciones.

También se convino que el tema institucional —centrado en los senadores designados, que era el punto más controvertido— se resolvería democrática y definitivamente en un consejo general convocado al efecto más adelante.

El único aspecto que me dejó un sabor amargo fue la imposibilidad de incorporar a Sebastián Piñera a la directiva. Nunca hubo un veto formal del sector «jarpista», sino un argumento persuasivo: que las personas con aristas más conflictivas no integraran la mesa. También —al otro lado— se quedaban afuera Prat, Siebert y algún otro.

Además, se daban pasos fundacionales en materia de organización, adoptándose la elección directa de las autoridades del partido por todos sus militantes. Era una medida para avanzar hacia más altos niveles de democracia interna que el Consejo general anterior había rechazado. ¡Los partidos de derecha no podían seguir marcando el paso!

No tenía razones para estar eufórico por el acuerdo, desde el momento en que había sido básicamente conservador, pero a quien le pareció pésimo fue a don Pancho Bulnes, que me trataba de usted sólo cuando estaba enojado.

—No le van a respetar nada. Usted debió presentar su propia lista. Ha cometido un grave error. Ojalá que esté equivocado, pero creo que le van a hacer la vida imposible.

Cuando con Alberto Espina intentamos explicarles las bondades del estatuto pactado con Cardemil, nos miró de arriba abajo.

—¡Qué ingenuidad! —masculló.

Así fue.

La democracia de las libertades

El séptimo consejo general se celebró en Valparaíso, el primer fin de semana de noviembre de 1994 y el interés periodístico se centró, en vista del acuerdo alcanzado para la directiva, en la elección de la comisión política.

Aproveché el día sábado para replantear nuestro proyecto: primero había sido la «democracia de los acuerdos», luego la de las «alternativas» y ahora, inauguraríamos la «democracia de las libertades».

El proyecto retomaba con fuerza la idea del nuevo ordenamiento para la derecha, insistía en romper las viejas categorías del *Sí* y el *No* y planteaba —era el corazón del argumento— que «no tiene coherencia confiar en la libertad en el campo socioeconómico, asumiendo que las personas adoptan decisiones correctas en mercados abiertos, transparentes y competitivos; y no aplicar idéntica premisa en el campo de la política, suponiendo

arbitrariamente que en este ámbito las decisiones de la mayoría son invariablemente incorrectas, lo cual conduce a adoptar resguardos institucionales para evitar presuntos efectos indeseados. La centroderecha tiene que recuperar su convicción en que la libertad es una sola y que, cuando se la escinde, sólo se la mutila y empobrece».

Simplemente se trataba de entender, como dice Vargas Llosa, que las libertades políticas y económicas son «las dos caras de una misma moneda».

—Para ganar, a la centroderecha le falta asumir con convicción sus ideas y demostrar que no le teme a la democracia —afirmé.

No faltaron algunas voces disidentes, aunque el planteamiento tuvo amplia acogida. El senador Prat intervino para advertir sobre los «peligros de la democratitis».

El domingo fue día de elecciones y el respaldo a la línea progresista fue abrumador, de diez cargos a llenar, claramente siete se identificaban con ella: Pedro Daza —un hombre muy valioso para RN, de un entusiamo contagioso— Francisco Bulnes, Ricardo Rivadeneira, Jorge Morales, Renato Gazmuri, Daniel Platovsky y Raúl Torrealba. Y los tres restantes —Gustavo Alessandri V., Félix Viveros y Federico Ringeling— eran no sólo viejos conocidos, sino personas con las que me resultaba fácil entenderme políticamente.

Qué Pasa, siempre interesada en remover heridas, dijo que el «jarpismo» había sufrido «una derrota aplastante», incluida la del «escudero de Jarpa», Gonzalo Eguiguren, quien no salió electo para la comisión política.

Jarpa, que había anunciado que no asistiría al consejo general —en congruencia con su anunciado retiro de la política partidista— apareció de improviso el día domingo. Habló con cuanto consejero general pasó por su lado, pidió la palabra en el momento en que la sala estaba más llena e hizo un discurso de su sello, incluyendo como clímax —un recurso trillado— la petición de renuncia del canciller José Miguel Insulza, en esos días muy atribulado por el resultado del arbitraje de Laguna del Desierto, aunque no llevara vela en ese entierro, íntegramente

imputable al pésimo manejo del tema por parte del gobierno de Aylwin.

Sin embargo, esta vez tuvo una muy baja respuesta entre los consejeros generales. A mí no me extrañó: los últimos años había estado en cuanta refriega interna era posible imaginar, sus aportes al partido se habían reducido al mínimo y trasuntaba una gran animosidad frente a los nuevos aires que se respiraban en Renovación. Por último, a nadie se le escapaba su actuación, al filo de la abierta deslealtad, durante la última campaña.

Qué Pasa le refregó implacable que, pese a haber sido llamado «de urgencia» por sus huestes, «frente a la platea toda su pirotecnia no pudo evitar la debacle».

Salvavidas de plomo

Sin embargo, el verdadero efecto político del consejo no fue ni la elección de la comisión política, ni los cambios estatutarios, ni las resoluciones adoptadas, ni la reaparición del «retirado» Jarpa. Todos los diarios concluyeron que mi tercer período al frente de RN era una proclamación presidencial anticipada.

La Época lo bautizó como el primer paso de la «Operación 2000», afirmando que por primera vez, aparecía en la derecha el embrión de un proyecto capaz de vencer su supuesta debilidad endémica, es decir, «la ausencia de vocación de poder». *El Mercurio* no se quedó atrás: «El lanzamiento presidencial de Allamand», tituló su reportaje postconsejo. Según la crónica, «Allamand es tácitamente, desde ahora, el candidato presidencial de RN. Tendrá la edad precisa en 1999, lo conoce todo el país, tiene buena imagen, genera cohesión entre las bases, en las cuales existe seguridad de que no cederá el paso a otros postulantes de la derecha, como le sucedió al partido en las dos últimas oportunidades. Además, su elección demostró que parte importante del 'poder fáctico' está deseoso de apostar por él y probó que puede quitarle votos a la Concertación». El periodista Fernando Villegas ironizó, preguntándose qué ideas nos unirían el

99, para luego «bendecirme», afirmando que en la derecha «hay gente brillante como Sebastián y José Piñera y de oropel como los inefables Alessandri, que aún arrancan suspiros a las señoras que salen a pasear sus chihuahas, pero ninguno junta las cualidades de Allamand, que además irradia esa fuerza sin mácula todavía».

Rafael Otano, en *Apsi* lo describió con su original estilo:

—Andrés, como le dice con familiaridad, a veces algo perversa, toda la gente, a quien en las filas gobiernistas inevitablemente se le quiere y en sus propias filas se le recela, pero en fin se le sigue, se ha cargado con la mochila pedregosa de una temeraria candidatura presidencial, que le va a hacer blanco de todas las ballestas del reino. Pero este atropellado caballero es así. Siente la felicidad de abrir nuevos flancos que le permitan ejercer su radical dialéctica del combo y del abrazo. Por todas partes tiene amigos, pero sabe que están a un milímetro de la traición. En este país se perdona todo, menos ponerse en la lista de aspirantes para sitiar el castillo de La Moneda.

Yo estaba consciente del peligro que significaba, porque convertirse en candidato con cinco años de anticipación era como que a uno le regalaran un «salvavidas de plomo», pero no fui capaz de desautorizar las voces que alimentaban la idea. Nunca encontré la manera de generar un desmentido verosímil y con algunas de mis declaraciones alenté la imagen del prematuro candidato.

Fue un grave error.

De ahí para adelante, cada una de mis acciones políticas quedaría marcada por una interrogante que erosiona cualquier pedestal: ¿lo está haciendo porque cree que está bien o porque le sirve para su candidatura?

Al interior del partido se generaron dos fenómenos inversos. En las bases, la reacción fue de entusiasmo y alegría. Sentían que uno de ellos estaba en el cajón de partida de la carrera grande y, esta vez, no habría «retiros» de última hora que obligaran a apostar por caballos ajenos. Entre los dirigentes la situación era distinta, ya que mis adversarios encontraron motivo para relanzar sus ataques.

Lo peor es que me repetía una y otra vez —aunque no era capaz de seguir— la advertencia que me había traspasado, con ingenio y sabiduría, don Jorge Batlle, un prestigioso político uruguayo: «No te olvidés, pibe. En política, el que se precipita... se precipita».

Genes caníbales

La derecha tiene genes caníbales y éstos brotaron con inusitado vigor: que mi pensamiento político era adverso a las Fuerzas Armadas, que no era «leal» con el gobierno militar, que no tenía afinidad ni relación alguna con Pinochet. Más adelante, que no era «confiable», que no favorecía la unidad del sector, que vivía tan obsesionado por captar al electorado del PDC que me había ido mimetizando con ellos, que era sospechoso ser tan «cercano» al PPD. Por último, como alguna vez insinuó el propio Hernán Larraín y varios más: «Allamand no es de derecha».

Nunca se me olvida el resultado de un almuerzo con el equipo editorial de *El Mercurio,* gestado por Roberto Ossandón quien insistía en que «no se puede ser candidato de la derecha con el principal diario en contra». Al final, Hermógenes Pérez de Arce lo resumió todo:

—A veces, no te sentimos de los nuestros.

A todo esto estaba la información de las encuestas: hacia fines de 1994, ocupaba el primer lugar de la centroderecha, seguido de Carlos Bombal y Sebastián Piñera, que había tenido una muy rápida recuperación después del espionaje.

Sin embargo, la medición de quién era considerado la «figura más importante de la oposición», a la que se atribuía «potencial presidencial», me era aún más favorable. Desde fines de 1992 estaba en el primer lugar y durante todo 1993 y 1994 la distancia con el resto se agrandó, hasta que la medición del CEP en diciembre de 1994 me asignó un 25%, seguido por Pinochet con un 7%, Jarpa con un 4% y luego Sebastián Piñera y Francisco Javier Errázuriz, ambos con un 3%. Al frente, Ricardo

Lagos también se disparaba. Los diarios empezaron a hablar de un futuro duelo: Lagos v/s Allamand.

En esas mismas semanas le preguntaron a Pablo Longueira qué opinaba de mi candidatura. Su respuesta graficó muy bien cómo «caía» mi nombre en la cúpula de la UDI.

—Tengo seis alternativas mejores: Joaquín Lavín, Carlos Bombal, Hernán Larraín, Jovino Novoa, Hernán Büchi y Sergio Fernández. Los nuestros son infinitamente mejores.

En esas semanas, como a las personas a las que los huesos les advierten el cambio de clima, algo me alertó del peligro.

«¿Qué opina de las encuestas?» me preguntaron en *Ercilla.*

—Estoy contento, pero con lo más chico que me van a disparar será con un *bazooka.*

CÁRCEL CON *JACUZZI*

Hacia fines de 1994, la atención política se centró progresivamente en el caso Contreras y su inminente y definitiva resolución por parte de la Corte Suprema. Era el proceso judicial emblemático de la transición. ¿Por qué podía estar procesándose al general Manuel Contreras? No por haber sido el jefe de la tenebrosa DINA, ni por ninguno de los múltiples delitos que los agentes de esta repartición habían cometido bajo su mando directo: se le enjuiciaba por el asesinato en Washington de Orlando Letelier, crimen expresamente excluido de la ley de amnistía de 1978.

El proceso duraba ya casi dos décadas. Sus folios escondían toda una historia política y judicial y eran una ventana al oscuro mundo de los servicios de inteligencia.

Era, por supuesto, el caso judicial que generaba las mayores pasiones. Para los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos representaba la posibilidad de obtener el castigo de quien más aborrecían. Desde la vereda opuesta, era un proceso injusto, casi una confabulación.

En una obvia anticipación al desenlace esperado, el gobierno resolvió construir una cárcel especial: era evidente que el general

Contreras, de ser condenado, no iría a parar a la Penitenciaría como un reo común y corriente.

El gobierno adoptó, la primera semana de enero de 1995, la decisión de construir la cárcel recurriendo a un mecanismo administrativo excepcional que permitía actuar rápido y sin licitaciones, vía decreto del Ministerio de Obras Públicas.

La iniciativa fue consultada a los partidos de la Concertación, que le entregaron su respaldo. «Aunque le pongan *jacuzzi,* que vaya preso», fue la frase atribuida al secretario general del PPD, Patricio Hales. Pero no era coser y cantar: «No iré a ninguna cárcel» había anunciado amenazante el ex director de la DINA.

Todos olvidaron un pequeño detalle: que el ministro del ramo era Ricardo Lagos. Y éste, sorpresivamente, se opuso al decreto aduciendo razones «éticas y morales». Cuando fue conminado por otros ministros a firmarlo, Lagos se negó y presentó su renuncia al presidente Frei. Se desató una crisis de gabinete y nunca antes la Concertación se había asomado tan riesgosamente al precipicio de la ruptura.

La razón de Lagos saltaba a la vista: no quería quedar facilitando lo que sería visto como un privilegio irritante del mundo militar.

El cálculo no estaba muy errado. Gladys Marín, secretaria general del PC, dijo que la actitud del gobierno era «cobarde» y reflejaba el sometimiento de la Concertación «al poder militar». En cambio, el general Pinochet declaró que «cárceles para militares existen en todo el mundo; en Argentina tienen casas». El locuaz fiscal Torres dijo que era una medida «muy positiva».

El gobierno apagó su incendio enviando un proyecto de ley al Parlamento. Lo que originalmente se haría por decreto, terminaría haciéndose por ley y así todos serían codeudores solidarios con la determinación. La crisis de gabinete se fue diluyendo. La renuncia de Lagos no fue rechazada sino muy tácticamente «retirada» y los reparos «éticos y morales» del ministro desaparecieron por arte de magia.

Castañas con la mano del gato

Nuestra primera reacción fue rechazar el proyecto, porque el Congreso no debía prestarse para solucionar un problema interno de la Concertación. En mi opinión, Lagos había actuado «como un gran taimado», más cerca del oportunismo que de los principios. El propio Andrés Zaldívar avaló nuestra posición, cuando dijo que el proyecto de ley era «sacar las castañas con la mano del gato». También temíamos que la iniciativa se prestase para estigmatizar aún más a las Fuerzas Armadas. ¿No bastaría acaso con un pabellón en algún penal seguro? Nadie entendía nada. Pinochet y el Ejército aparecían a favor de la cárcel para militares; RN y la UDI en contra.

Un par de días después, al conocerse el proyecto de ley enviado por el gobierno, surgió otro problema —que a poco andar se transformaría en el verdadero problema— y que, en honor a la verdad, el propio Lagos había mencionado cuando presentó su renuncia. Una antigua norma del Código de Justicia Militar establecía que la detención y privación de libertad del personal uniformado podía realizarse en cuarteles o establecimientos militares, y sólo la condena definitiva se cumpliría en un establecimiento penitenciario común y corriente. El gobierno militar estiró la norma y amparó a los oficiales generales en retiro. Pero lo grave era que la abusiva interpretación de la misma había generado una situación anómala: un militar condenado podía evitar la pena si aparecía un nuevo proceso, ya que en tal caso, prevalecerían las normas de éste sobre las del juicio terminado. Resumen: por esa vía, ningún militar cumpliría su condena en una cárcel, configurándose un privilegio odioso e inexplicable… hubiera o no cárcel especial.

Pero no eran los vericuetos jurídicos los decisivos, sino los políticos y los principios. Lo que estaba en juego era si el general Contreras y otros como él, a quienes la justicia condenara, irían o no a la cárcel; si se debía o no mantener un privilegio inadmisible.

Al interior de Renovación Nacional el tema de Contreras generaba algunos conflictos.

—No veo a un general de la República en una cárcel, ni en el mundo se ve a un director de inteligencia juzgado por actos llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones de jefe de seguridad —declaró a *La Tercera* el senador Francisco Prat.

¿El asesinato de Orlando Letelier era «ejercicio de sus funciones»?

Cuando se debatió el tema en la Cámara de Diputados —con las tribunas atestadas de público— me correspondió fijar la posición de RN. Intervine estrictamente apegado a los principios: todos —militares o civiles— deben cumplir las sentencias, sin atenuantes y sin subterfugios, porque nadie está al margen de la ley; las penas deben cumplirse en cárceles donde se asegure la integridad física de los condenados, porque aún el peor de los criminales tiene ese derecho; el privilegio inaceptable proveniente de una interpretación abusiva de la legislación penal militar debía terminar, pero no al costo de derogar antiguas normas legales que nadie nunca había objetado y que tenían fundamento en la doctrina y en la práctica.

En la Cámara de Diputados el proyecto fue aprobado por la Concertación y rechazado por nosotros. En el Senado los RN, la UDI y todos los senadores designados votaron en contra y el proyecto se fue a pique. El tema tendría que resolverse en una comisión mixta, pero ya a esas alturas el problema había cambiado de cariz. Si era o no necesaria, quién y cómo se construiría la cárcel eran cuestiones adjetivas. Ahora la pregunta era si la oposición cohonestaría o no la mantención de un privilegio aberrante. El resto sería música. Y después ¿con qué autoridad moral Renovación podría abordar los temas de derechos humanos y, en general, los de la justicia?

En la vida política, a veces impensadamente, hay disyuntivas que marcan y distinguen. La fisonomía de los partidos y de sus dirigentes se forma a la luz de sus conductas frente a hechos polémicos de notoriedad pública más que a la sombra de sesudas formulaciones programáticas o elevadas reflexiones doctrinarias.

RN —y yo mismo— estábamos en una de esas disyuntivas.

Ni cárcel, ni ley, ni nada

El senador designado Santiago Sinclair y Bruno Siebert, ambos generales en retiro, me pidieron una reunión para tratar el tema.

—El Ejército quiere que el proyecto sea rechazado —me dijeron.

—No entiendo. ¿No estaba a favor el propio Ejército de que hubiera cárcel especial? —pregunté.

—Ahora hay una apreciación distinta de los hechos. Ni cárcel, ni reforma alguna al Código de Justicia Militar, ni nada.

—¿Están conscientes de que eso será simplemente mantener un privilegio cuyo directo, próximo y ultraconocido favorecido será Contreras? ¿Cómo podríamos explicar una cosa así ante el país?

—Hay cosas que se hacen y no se explican. Los senadores institucionales, la UDI y la mayoría de Renovación están de acuerdo con nosotros —me señalaron en tono de advertencia.

—No cuenten conmigo para eso —fue mi respuesta.

Un par de días después me llamó el general Víctor Lizárraga, a cargo del comité asesor del comandante en jefe del Ejército. El mensaje de Sinclair y Siebert era «informalmente oficial».

No fue el único llamado. En la trastienda de la tramitación legislativa empezaba a jugarse sólo una de las fases de una intrincada partida de ajedrez —llena de aperturas, gambitos, enroques— que se prolongaría hasta fines de octubre. Para entonces, finalmente Contreras ingresaría al penal de Punta Peuco, poniéndose fin a una trama en que se mezclaron atisbos de resistencia, ingresos y salidas de recintos militares y hospitales, operaciones distractivas y complejas negociaciones.

El equipo ministerial a cargo de sacar adelante el proyecto —Carlos Figueroa, Genaro Arriagada y Soledad Alvear— se había trasladado tiempo completo a Valparaíso, para que el asunto saliera adelante. Carlos Figueroa también se dio cuenta de un cambio en los sectores más cercanos al Ejército y llamó al

ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, para que Pinochet pusiera orden. ¡Se estaba jugando a fondo, al riesgo de quebrar la Concertación, por una cárcel que los militares habían pedido! ¡Era inaceptable que ahora cambiaran de opinión!

Pero habían cambiado. En nuestra bancada de diputados hubo algunas vacilaciones —los teléfonos sonaron esos días con singular intensidad— y en el Senado, al parecer, las aguas estaban también divididas. Hablé con Miguel Otero para sondear el ambiente y coincidimos en que rechazar todo el proyecto era imposible. Urdimos una salida distinta. En la comisión mixta plantearíamos un acuerdo político: se mantenía la antigua norma del Código de Justicia Militar, pero se le agregaba un artículo «bis» para terminar con el resquicio. Miguel Otero lo redactó al vuelo:

«La circunstancia de existir un mandamiento de detención o prisión expedido con anterioridad o posterioridad al momento de hallarse ejecutoriada la sentencia, no obstará al cumplimiento de la pena ni modificará el régimen penitenciario al que deba someterse el condenado».

Además, el gobierno debía comprometerse a que hasta el fin del mandato los artículos respectivos del Código de Justicia Militar no se tocarían. A esa altura de cómo, cuándo y quién construiría la cárcel, nadie se acordaba.

El debate en la comisión mixta duró más de siete horas e intervinieron más de 25 parlamentarios. En RN teníamos la duda de cómo votaría la UDI. Para seguir echándole pelos a la sopa, la bancada más adversa al acuerdo era la de senadores del PDC. Se oponían por razones de índole menor: les molestaba sobremanera nuestra exigencia de cerrar el paso a nuevas modificaciones legales y, sobre todo, seguían enfadados con Lagos y su publicitada renuncia.

En un momento del debate en la comisión interrumpí a Ricardo Hormazábal, que hacía de cabeza de los senadores contrarios al acuerdo y hallaba todo malo.

—Ricardo —le dije— que quede claro: nosotros hemos hecho un importante esfuerzo. Si Contreras no va a la cárcel será culpa tuya, no nuestra.

A las dos de la madrugada nuestro acuerdo se había impuesto casi por unanimidad. Sólo Sergio Fernández votó en contra, aunque en la sala también se sumaría a la votación favorable.

Al día siguiente, correspondía que ambas Cámaras votaran el acuerdo de la comisión mixta. Un minuto antes de empezar cruzó el hemiciclo José Antonio Viera-Gallo.

—¿Estás seguro de lo que estás haciendo? —me dijo.

—¿Por qué me lo preguntas? —contesté un tanto sorprendido.

—Debes saber que no te lo van a perdonar nunca.

Capítulo XVII

Olla a vapor

Domingo 26 de marzo de 1995.

Como siempre, me levanté temprano. Fui a buscar los diarios al antejardín.

Abrí *El Mercurio.* Y el diario me estalló en la cara.

A todo lo ancho de la portada del cuerpo de Reportajes, el titular era el siguiente: «Juro por mis hijos: jamás usé drogas». En el epígrafe se leía: «Andrés Allamand, presidente de Renovación Nacional».

La entrevista dominical de Raquel Correa partía refiriéndose a la sesión especial de la Cámara de Diputados —televisada en directo a todo el país— que había tenido lugar el miércoles anterior: «Se lució en la discusión sobre la droga. Fue, desde luego, el más aplaudido. Y para el recuerdo le quedan los muchos mensajes que le enviaron sus colegas, incluso adversarios políticos. Los abrazos y hasta las lágrimas. Elocuente, con un discurso completo y bien dicho, tal éxito no tuvo nada de extraño. Lo curioso es que el mismo Allamand encabezaba todas esas listas anónimas, más mortíferas que la peor de las verdades. Desde que el ex ministro Cuadra hizo su famosa denuncia —que hay parlamentarios cocainómanos— y más aún, desde que la acusación al bulto fue ratificada por la diputada Evelyn Matthei y el diputado Longueira, la olla hervía a todo vapor».

Estaba al medio de una pesadilla.

NADA CUADRA

La revista *Qué Pasa* del sábado 14 de enero de 1995 estaba llamada a hacer historia. Y escándalo. Incluso antes de salir a la venta en los quioscos, ya que los suscriptores la reciben un día antes.

La edición traía una entrevista del director, Cristián Bofill, a Francisco Javier Cuadra. El título era golpeador: «Algunos parlamentarios consumen droga». Y el contenido aún más:

«Año a año el tema de la droga viene subiendo. Hasta ahora, la información pública se ha concentrado en el consumo de sectores populares. Pero hay informaciones que circulan en el campo de análisis político sobre riesgos potenciales y lo más preocupante es que en la clase dirigente haya crecido el número de consumidores de drogas. Hay algunos parlamentarios y otras personas que ejercen funciones públicas que consumen drogas. Lo más grave es que se trata de políticos con relevancia potencial. Al consumir estupefacientes, esas personas se transforman en protectoras indirectas de las redes de narcotráfico, ya que son vulnerables a recibir presiones».

Hablé con Francisco Javier Cuadra esa misma noche, ya que no había que ser muy inteligente para advertir que sacarían roncha. Según él, sus puntos de vistas estaban fundamentados en antecedentes que obraban en su poder. Y, pese a mi insistencia, de ahí no lo saqué. Todo era raro. ¿Se habría ido de lengua? Difícil. ¿Pretendía alcanzar un renovado protagonismo público? Quizás. ¿No habría medido las consecuencias? Improbable. ¿Tenía antecedentes concretos sobre algún parlamentario y quería generar un ambiente antes de denunciarlo? Podía ser. ¿Era una operación política? Tenía sentido. ¿Era una campaña distractiva? Muchos así lo pensarían. Los alegatos finales del caso Contreras en la Corte Suprema estaban por comenzar. ¿Quería generar algún efecto político? Posible.

Lo que no me tragué ni por un segundo fue una suerte de altruismo mezclado con mesianismo que alcanzó a insinuarme

como motivo. No calzaba por ningún lado. La piedra que había lanzado era demasiado grande como para pretender esconder la mano, tendría que dar los nombres. Francisco Javier pareció admitirlo y masculló algo así como «no tengo inconveniente, cuando sea oportuno». Le advertí que tenía un tropel de periodistas detrás de mí y le anticipé el tenor de lo que les diría.

Cuando corté el teléfono: nada cuadra, pensé.

—La denuncia es de extrema gravedad. Espero que Francisco Javier Cuadra entregue a Investigaciones, a Carabineros o directamente al Ministerio del Interior los antecedentes fidedignos y concretos que posee. Es su obligación —declaré a los diarios al día siguiente.

Mientras tanto, Cuadra le declaraba al Canal 13 que estaba dispuesto a entregar los nombres, asegurando que las autoridades tendrían acceso a dicha información.

Entretanto, se había desatado un vendaval.

—Hay que pedir al señor Cuadra que actúe como una persona de honor y dé los nombres. Si no, yo personalmente buscaré los medios para que este señor responda a lo que considero una denuncia calumniosa —afirmó el senador Ricardo Hormazábal.

—Me parece muy grave y de una irresponsabilidad abismante. No es posible que se hagan afirmaciones de esta naturaleza sin fundamentos. Muy gráficamente podría decir que «se le arrancó la moto a Cuadra» —señaló el senador Beltrán Urenda.

—Se trata de una imprudencia temeraria. No puede salpicar a una institución completa como es el Congreso Nacional —agregó el senador Sergio Romero.

—Es curioso que el ex ministro Cuadra haga acusaciones de esta naturaleza, cuando el país está preocupado del caso Letelier y del fallo que emitirá la Suprema. No debió lanzar una «cortina de humo» que hiere la legitimidad de una institución esencial del Estado —argumentó el diputado José Antonio Viera-Gallo.

—Es irresponsable y muy sospechosa en su oportunidad —remachó el diputado Jaime Estévez.

—Si los hechos son así, son graves. Hay que combatirlos y denunciarlos. Pero no se puede hacer una denuncia así sin dar nombres y apellidos —declaró Jovino Novoa.

—Son opiniones ligeras e irresponsables, si no se está en condiciones de demostrarlo —intervino el ex presidente Aylwin.

—¡Es una canallada! —manifestó el diputado Juan Carlos Latorre.

Sin embargo, los más indignados eran el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados: en declaración conjunta, afirmaron que las declaraciones eran «altamente atentatorias contra el honor de los parlamentarios» y se mostraron partidarios de iniciar acciones judiciales.

Apenas unas pocas declaraciones se apartaban del tenor general. Unas eran de Evelyn Matthei, quien desde el primer momento apareció respaldando las afirmaciones de Cuadra. Sin embargo, en su caso, a mí me sorprendió algo distinto: la revista *Qué Pasa* —que a poco andar generaría un verdadero cordón umbilical con Cuadra y los que respaldaban su acusación transformándose en su vocera— consignaba que ella había afirmado a voz en cuello que «esto no es una canallada. ¡Canallada es lo que me hicieron a mí hace dos años!».

¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? ¿Y por qué Evelyn Matthei asumía con tanta fuerza la denuncia de Cuadra? Hasta donde yo entendía, sus relaciones eran pésimas. Francisco Javier siempre había sido escéptico de sus condiciones políticas y un duro crítico de sus actuaciones en el caso espionaje. ¿Qué encubierta complicidad estaba asomando la cabeza?

Frascos de orina

El día lunes el tema se trató en la directiva y también en la comisión política. ¿Cómo manejarlo? La denuncia era de un militante y ex vicepresidente.

Hubo unanimidad en que Cuadra debía entregar los nombres y que no podíamos respaldar sin antecedentes una denuncia de

este tipo. Se acordó pedirle a Ricardo Rivadeneira —una vez más, una misión imposible— hablar con Francisco Javier para intentar indagar qué se traía entre manos. Al margen de ser un hombre de ecuanimidad reconocida, Ricardo es un distinguido penalista, amigo y vecino del propio suegro de Cuadra.

Sólo un detalle me llamó la atención. Alberto Cardemil mencionó que Cuadra lo había llamado el viernes en la mañana para avisarle del contenido de la entrevista.

Qué raro —pensé yo, pero no dije nada—. ¿Por qué a Cardemil? Cuadra tenía una relación personal mucho más cercana conmigo e incluso con Alberto Espina. De hecho, Francisco Javier expresaba siempre un cierto desdén por Cardemil.

—Es apenas un mal imitador de Jarpa —me repitió más de una vez.

Mientras se desarrollaba la comisión política y se debatía el tema, me di cuenta de un inusual movimiento entre los asistentes. Salían y entraban como si algo ocurriera afuera.

Alberto se me acercó y me dijo:

—Están llamando del diario *La Tercera* a un grupo de parlamentarios para que nos vayamos a hacer un test antidrogas. ¿Quieres venir? Vamos a ir varios.

—Es una estupidez —le dije en voz baja—. ¡No les hagan el juego!

A mí me parecía una infinita torpeza. Y una precipitación. Por entonces tenía claro que había dos caminos: ignorar la denuncia y dejar que muriera sola o accionar judicialmente. Si no hacíamos nada, no faltarían los que dirían que Cuadra había acertado en el blanco; a la inversa, si accionábamos judicialmente, se nos diría que estábamos reaccionado «corporativamente». Salir corriendo a hacernos un test antidrogas era una pésima señal, porque se está invirtiendo el peso de la prueba.

Partió Alberto. Y no solo. De los nuestros fueron Sergio Romero, Ignacio Pérez, Alberto Cardemil, Ángel Fantuzzi y Sebastián Piñera. En el laboratorio se encontraron con Sergio Bitar, Carlos Ominami, Iván Moreira, Evelyn Matthei y Juan Carlos Latorre. En el noticiario de la noche vi las imágenes. Era un

espectáculo grotesco. Aparecían los parlamentarios con frascos de orina en la mano. Unos se reían, otros se mostraban humillados, algunos con cara perpleja. Todos —salvo Evelyn Matthei— decían que habían ido para despejar «cualquier sospecha» y acto seguido descargaban la artillería en la «irresponsable e infundada» denuncia de Cuadra y lo amenazaban con las penas del infierno si no daba los nombres. ¡Era absurdo! Los telespectadores se estarían preguntando en sus casas, si la denuncia era tan al «voleo», ¿por qué entonces correr a hacerse exámenes?

—Es una reacción histérica —comentó Jorge Schaulsohn.

Sirvió de poco y nada. A los dos días aparecieron voces que indicaban que el único test válido para detectar el consumo era un sofisticado examen de pelo que sólo se hacía en Estados Unidos.

El Senado acordó emplazar a Cuadra a que diera los nombres. Tenía 48 horas para hacer llegar sus antecedentes a la autoridad que estimase competente. En caso contrario, iniciaría un requerimiento judicial. En la Cámara el asunto resultó un poco más difícil: Schaulsohn se oponía y con él varios más.

El razonamiento de Jorge era simple y muy ajustado a su formación norteamericana. Jurídicamente, había un conflicto con el valor de la libertad de expresión y, en caso de duda, debería siempre prevalecer ésta. Políticamente, era «inflar» la denuncia y transformar a Cuadra en víctima, en circunstancias que era el agresor. Además, se preguntaba con buen ojo qué haría el Parlamento si otros hiciesen idéntica denuncia. ¿Se querellaría contra todos?

—Andrés, hazme caso. Hay que dejar a ese huevón hablando solo.

Frío presentimiento

Mientras en la Cámara se resolvía qué hacer, Alberto Espina arregló una reunión de la directiva con Cuadra en su casa. Tuvo lugar el martes 17 de enero y a ella asistieron los dos Alberto, Ricardo Rivadeneira y yo.

A poco andar me convencí de que era un esfuerzo inútil. Los dos Alberto le insistían, tan persuasivamente como podían, para que compartiera los antecedentes que decía poseer. Le hacían ver que contaba con nosotros para respaldar su denuncia, pero ¿cómo hacerlo si no nos informaba de nada? Ricardo analizaba su posición legal: un requerimiento del Senado y la Cámara no era broma. Yo me mantenía a la expectativa. Nada me cuadraba. Menos ahora. Francisco Javier estaba incómodo. Un frío presentimiento me empezó a rondar. ¿Quién calzaba mejor con aquella definición de políticos de «relevancia potencial» que nosotros mismos? Ya había incipientes rumores circulando en el sentido de que el blanco —aún oculto— éramos nosotros, pero me resistía a darles crédito.

—Francisco Javier —le dijo Alberto Cardemil—. Aclaremos un asunto, ¿vas a dar o no los nombres? Se lo prometiste al Canal 13.

—No —respondió tajante—. Me voy a ir con ellos a la tumba.

—¿Por qué cambiaste de opinión? —preguntamos varios.

—Porque he recibido amenazas de muerte contra mi familia.

No le creí una sola palabra. Estaba mintiendo.

—Vámonos —dije visiblemente irritado—. Esto es inútil. No va a decir nada.

Los emplazamientos del Senado y la Cámara no tuvieron respuesta. Vencidos los plazos, ambas corporaciones interpusieron sendos requerimientos ante los tribunales. Y contrataron a dos de los mejores penalistas del país: el Senado a Alfredo Etcheverry y la Cámara a Luis Ortiz Quiroga. Ambos confirmaron el sólido fundamento jurídico de la acción. También se acompañaron al proceso oficios emanados del Ministerio del Interior, Carabineros e Investigaciones. Los tres señalaban que en tales instituciones no tenían antecedente alguno sobre consumo de drogas entre parlamentarios.

El 21 de enero Cuadra envió una escueta renuncia a RN.

Veneno en dosis

El fundamento de las acciones era el mismo: la difamación, injuria o calumnia a parlamentarios es delito.

El foco del escándalo se trasladó a los tribunales y el cambio de atmósfera coincidió con el receso parlamentario de febrero. Me fui de vacaciones al extranjero la mayor parte del mes y me olvidé del lío.

A la vuelta supe que la denuncia de Cuadra había dado lugar a diversas especulaciones, hipótesis, artículos periodísticos, crónicas y opiniones. *La Nación,* el diario de gobierno, a mediados de febrero, señalaba que «tres son las hipótesis que circulan para esclarecer los reales motivos del ex ministro Cuadra. Una auténtica preocupación por depurar a la política y, de paso, perfilarse como actor relevante de opinión; una cortina de humo para acallar el caso Letelier y presionar en favor de los inculpados; o bien, una operación de inteligencia militar para provocar el recambio en los liderazgos derechistas».

Lo que no había amainado un segundo era la sostenida campaña de rumores. Otro diario decía que el «temporal» político desatado por Cuadra había «anegado» el Congreso con nóminas de parlamentarios drogadictos. Los periodistas eran alimentados a diario con nombres de los supuestos consumidores. Las famosas listas «viajaban» por las oficinas de redacción. Además, había en los medios una serie de datos fragmentarios que parecían sin sentido. Por ejemplo, se mencionaba un «charter aéreo», de vuelta del partido final del campeonato de fútbol del año anterior, «lleno de políticos celebrando con alcohol y drogas».

El asunto adquirió relevancia de nuevo en marzo. Longueira había presentado a fines de enero un proyecto de acuerdo en la Cámara para que, además de establecerse una comisión investigadora, los parlamentarios declararan bajo juramento que no consumían drogas, se sometieran a exámenes para acreditarlo y renunciaran al fuero para los efectos de cualquier investigación. Su iniciativa no fue aprobada.

En dos palabras, los que apoyaron el proyecto sostuvieron

que la Cámara de Diputados había reaccionado mal y que la «pelea comunicacional» la estaba ganando Cuadra, porque la gente le creía a él y no a la Cámara. Los que la rechazaron argumentaban que ello no sólo era indigno, sino que contradictorio con la acción emprendida. La propia Cámara le había exigido los nombres al acusador. Éste no había aportado ninguno. ¿Por qué girar en 180 grados? Además, habiendo recibido una respuesta negativa de todos los organismos policiales, ¿qué investigación podría llevar adelante la Cámara?, ¿con qué medios y qué atribuciones?

El rechazo del proyecto de acuerdo provocó una reacción furibunda en Longueira.

—He llegado a la convicción de que hay parlamentarios que consumen drogas —declaró en una entrevista dominical de *El Mercurio*.

—¿Y lo dice sin pruebas? —le preguntó Raquel Correa.

—No tengo pruebas. No estoy afirmando que haya parlamentarios que se drogan, sino que tengo la convicción personal de que es así —era la insólita respuesta.

Para hacer esas declaraciones bastaba tener la «convicción».

Hasta ese minuto la denuncia de Cuadra aparecía solitaria. El único apoyo anterior era de Evelyn Matthei, quien declaraba que no tenía «ninguna duda de que hay diputados que consumen drogas». No aportaba demasiado, ya que era evidente su animosidad contra RN. La intervención de Longueira —de gran influencia en la UDI— varió el cuadro. De hecho, ese partido no cuestionó más a Cuadra y se deslizó en la práctica hacia el apoyo de la denuncia. ¿Cómo podría haberla seguido cuestionando? Las declaraciones de Longueira eran réplicas simétricas de las que habían originado todo el revuelo. Y peor aún, Longueira reconocía que no tenía antecedentes. Al menos Cuadra decía tenerlos. Todo lo que se había dicho de Cuadra, en cuanto a la irresponsabilidad de su denuncia y al daño que ocasionaba al Congreso, podía repetirse respecto de los dichos de Longueira y Evelyn Matthei. Si la Cámara hubiera sido coherente, debería haber interpuesto idéntico requerimiento. Por supuesto, no lo hizo. El vaticinio de Jorge Schaulsohn había sido certero.

EN LA MIRA

Hacia fines de marzo el escándalo ardía. La Cámara acordó realizar una sesión especial para «analizar la situación del narcotráfico en el país». Televisión Nacional, en vista del revuelo, obtuvo una franquicia: trasmitirla íntegramente y en directo.

Yo había delegado el manejo del problema en los dos Alberto —Espina y Cardemil— en razón de que mi relación personal con los tres «denunciantes» era mala. Mis desacuerdos con Longuiera eran públicos, la animosidad en mi contra de Evelyn Matthei evidente y Francisco Javier Cuadra estaba empezando a personalizar en mí su denuncia. Cualquier acción que yo sugiriera siempre tendría lecturas múltiples.

Después de la actitud de la UDI, los rumores se iban concentrando en RN. Espina estaba furioso porque el proceso judicial contra Cuadra avanzaba a paso de tortuga. Paralelamente, la actuación de Longueira se unía con la de Evelyn Matthei: se sentaban uno al lado del otro en el hemiciclo y nadie tenía dudas de que actuaban coordinadamente.

A medida que se acercaba la sesión, los rumores iban *in crescendo*. Mis amigos periodistas, al principio con la incomodidad del que trasmite un mensaje desagradable, me advertían que mi nombre encabezaba las listas. Nadie, por supuesto, tenía ningún dato que pudiera vincularme ni por asomo con el mundo de las drogas, pero empezó a urdirse una explicación: «Nadie normal puede tener la energía de Allamand». Y luego venía una descripción de mi jornada de trabajo. Yo pensaba que mi vitalidad era el peor argumento, porque a poco andar la droga transforma a la gente en una piltrafa.

Un día me llamó Daniel Platovsky para contarme que en el circuito empresarial andaba el mismo cuento. En esos círculos, las declaraciones de Longueira habían calado hondo.

Sentí una mezcla de ira e impotencia.

—Daniel, ¿Cómo me defiendo de un rumor?

—No sé, pero tienes que hacer algo. Y rápido.

La sesión especial de la Cámara me resolvió automáticamente el problema. Inicialmente pensaba no intervenir, pero Alberto Cardemil me hizo cambiar de opinión.

—Eres el presidente del partido y éste es un problema nacional. Además, si no intervienes, vas a incrementar los rumores. Andrés, los versos principales son en contra tuya.

El agente de la Guerra Fría

Me pasé los siguientes cinco días concentrado en mi intervención. De partida —con la ayuda de María Pía Guzmán y del Instituto Libertad— trabajamos un planteamiento integral respecto del tema. Luego de exponerlo me descolgaría al tema de la denuncia de Cuadra y los rumores.

Cuando estaba de cabeza preparando mi discurso, dos informaciones simultáneas me indujeron a atar cabos sueltos. El vicepresidente del Senado, Ricardo Núñez, le recordó al senador Ignacio Pérez que tuviéramos cuidado. Un personaje llamado Lenín Guardia lo había ido a visitar casi junto con aparecer la entrevista de Cuadra. Objetivo: que supiera que la denuncia no era en contra del Senado ni del PS, sino contra RN. Jaime Estévez, presidente de la Cámara de Diputados, habló directamente con Espina por lo mismo: Lenín Guardia también lo había visitado para transmitirle idéntico mensaje y, al igual que Ricardo Núñez, nos advertía para que estuviéramos alerta. Saltaba la primera pista importante para descubrir en qué andaba Cuadra.

El último día me encerré a armar el esquema del discurso. Con esos datos en la cabeza volví a mirar un largo reportaje de *Cosas* titulado «Francisco Javier Cuadra, radiografía de un operador político» que relataba exhaustivamente su trayectoria. Señalaba, por ejemplo, que después de concluir su etapa como embajador en el Vaticano, Cuadra «mismo reconoce que el único que le tendió la mano fue Andrés Allamand. A comienzos de 1990 lo invitó a participar en el Instituto Libertad. Pedro Ibáñez,

Bernardo Matte y Andrés Allamand estaban recién formándolo y consideraron que Cuadra era la persona adecuada para que hiciera de cabeza. Allamand y Cuadra eran amigos desde la Juventud Nacional». Ahí saltaba de nuevo el extraño personaje, Lenín Guardia, agregándose que en la publicación «Informe Confidencial» elaborado por el general (r) Ernesto Videla, se señalaba que «en círculos de gobierno se sostiene que Cuadra habría recibido la información de una empresa de seguridad que dirige Lenín Guardia».

Más adelante, venía un recuadro sobre «Lenín Guardia: la vida de un informante secreto» al que por su tono nadie atribuyó demasiada importancia inicial. La semblanza parecía haber salido de una novela de Le Carré: ex MIR, ex GAP, vinculado a la ETA, amigo de varios generales del Ejército. Cuatro matrimonios en el cuerpo, afición a los autos convertibles. Su oficio era la información y la fachada una empresa de fumigación y desratización. «Cultiva la amistad de sus amigos, entre ellos Francisco Javier Cuadra, y siempre sorprende por el enorme caudal de información que maneja. Para algunos, oscuro y siniestro; para otros, divertido y chispeante. Guardia hace recordar a un oficial de la Guerra Fría: siempre alerta, cuidadoso, mirando al trasluz, hurgando en los vericuetos del poder, buscando situaciones límite que lo inyectan de la pasión que experimentaba en una época que ya se fue».

Agarré el teléfono y averigüé lo más que pude.

—Ten cuidado. Es un huevón raro que tiene que ver con servicios de inteligencia.

—La empresa de seguridad le presta servicios a la Municipalidad de Las Condes.

—Tiene inmejorables contactos en el Ejército.

—Es socialista.

—No es socialista.

—Tiene contratos de «desratización» con La Moneda... y las Fuerzas Armadas.

—Es un «sapo»... y un mitómano.

—Es amigo de varios generales.

—Es informante del gobierno.

—Es un ex agente de la CNI.

—Es un doble agente.

Las dos últimas respuestas se repitieron consistentemente varias veces. Los que así me lo aseguraban eran personas en quienes confiaba. ¿Quién era Lenín Guardia? Lo que yo iba a hacer era mencionarlo en el discurso. ¡El gobierno tendría que explicar quién era el extraño sujeto y qué vela llevaba en el entierro!

Ya para entonces mi estrategia había ido adquiriendo forma: Iba a generar un escenario de transparencia. ¡Basta de navegar en las tinieblas del rumor!

Adrenalina en la Cámara

El ambiente en el hemiciclo era de inusitada expectación.

Me acerqué a Jaime Estévez, para avisarle que pensaba mencionar a Lenín Guardia, haciendo pública la advertencia que él nos había hecho. Jaime no alcanzó a reaccionar, porque lo llamaron de la testera a presidir la sesión, pero me hizo una seña de que me mandaría una nota. En ese mismo instante, un junior del Congreso me entregó un papel:

—El señor Lenín Guardia quiere hablar urgente con usted. No quiere colgar. Está al teléfono esperando.

¡Era increíble! ¿Cómo me podía estar llamando el mismo Lenín Guardia? Eran contadas con los dedos de la mano las personas que sabían que pensaba mencionarlo. ¡Y esa misma decisión la había adoptado ayer! ¿Sería, de nuevo, la intervención de los teléfonos?

Lo primero: no dejarme entrampar. Le pedí a José Antonio Galilea que fuera a recibir por mí la llamada y que tratara de memorizar todo.

—Rarísimo. Un gallo Lenín Guardia dice que sabe que tú piensas referirte a él. Que no lo hagas. Que no le hagas caso a lo que te ha contado la gente del PS. Que todo es falso. Que él te puede explicar. ¡No entiendo nada! —me explicó José Antonio.

Yo trataba de atar todos los cabos. En eso llegó la nota de Jaime:

«Andrés, creo que si te enredas con un señor raro, vas a quedar tú metido, comprometido. Desde el punto de vista de la imagen, sería fatal enredarnos con un personaje oscuro. Habla bien hacia arriba. No te hagas cargo de la mierda, porque uno sale con más mierda. Ojalá, tampoco, me mezcles a mí. Estamos a otra altura de esos miserables. Jaime».

Lo pensé. Jaime, como presidente de la Cámara, sin duda sería acosado por la prensa. Él se había portado bien con nosotros al avisarnos. Ahora quería que no lo mencionara. Había tenido un gesto leal. Bien. Aceptado. Pero, en lo demás, no alteraría ni una coma mi libreto. Ya me tocaba intervenir.

Sin saberlo, estaba iniciando el mejor y más impactante discurso de mi vida.

La Época, al otro día, señaló: «Muchos diputados esperaron con crispación el turno de Allamand. Otros tantos reconocieron que habrían deseado salir de la sala cuando inició pausadamente sus palabras. El aire estaba cargado de adrenalina. El discurso era la respuesta esperada ansiosamente —y esto explica la respiración contenida en los escaños— de quien era percibido como el principal blanco de las denuncias que vienen agitando el ambiente político desde enero».

Yo, absolutamente compenetrado en mi exposición, no alcanzaba a darme cuenta. Terminé la primera parte de acuerdo al libreto y encaré con fuerza la segunda:

—Este debate sería hipócrita si no aludiéramos a una secuela de hechos que finalmente han conducido al escenario ideal para los narcotraficantes. ¿Cuál es el propósito del narcotráfico al infiltrar los poderes públicos? Muy simple: su desprestigio. El narcotráfico quiere una sociedad donde nadie confíe en el gobierno, nadie confíe en la policía, nadie confíe en el Poder Judicial, nadie confíe en el Parlamento. ¡El narcotráfico quiere una sociedad sin instituciones y sin defensas; una sociedad de rodillas frente a su agresión!

Tomé aire.

—Hay que decir que los objetivos de los narcotraficantes, objetivamente, coinciden con los de los enemigos de la democracia, porque éstos también desean, para hacer viables sus propósitos autoritarios, una sociedad con instituciones democráticas vapuleadas y servidores públicos desprestigiados.

Aplauso cerrado desde las tribunas y también en la sala. Luego expliqué de qué forma las denuncias irresponsables y sin fundamento dañaban «irreparablemente a las instituciones y a las personas, rompiendo un principio básico de toda sociedad civilizada, cual es que a la gente se le presume inocente, no culpable».

Había expectación. Y tensión. Seguí:

—Ha quedado claro que la forma más rápida para alcanzar notoriedad es la acusación genérica. Mientras más altas sean las investiduras, mientras más prestigio tengan las instituciones, más grandes serán los titulares de la prensa. Aquí, ¡para ser figura hay que difamar! Y que lo sepan nuestros colegas en el Parlamento, que han trabajado silenciosamente en el tema de la droga. Los que legislan, los que estudian, los que investigan. ¡A ustedes no los van a convidar a ningún programa de televisión! ¡No van a ser entrevistados «estrellas» en ningún diario del domingo! Para ustedes el anonimato, pero para los que difamen con escándalo, toda la celebridad, toda la popularidad, toda la visibilidad. ¡Ése es un incentivo perverso!

Segundo aplauso cerrado.

—Ha quedado claro que en Chile puede prosperar la herramienta política más abyecta: el rumor propagado con orquestación profesional, en un ambiente donde es aceptable la cobardía moral. Así se difama a los parlamentarios en bloque, con la astucia de no individualizar a ninguno. Así, se acusa a todos, pero a la vez a nadie. Por lo mismo, nadie puede defenderse, porque si alguien lo hace se le aplica aquello de que «el que se excusa se acusa».

Estaba «lanzado».

—Aquí circulan listas anónimas. Algunos periodistas deslizan nombres al oído. Se habla de supuestas redadas en que parlamentarios habrían sido detenidos. Se menciona tráfico de influencia

para sacarlos del atolladero. Pero todo está siempre cubierto por el *off the record.* Se afirma en los pasillos lo que nadie está dispuesto a decir en la sala. Siempre hay argumentos para no dar ningún antecedente concreto y evadir todos los emplazamientos. ¡Lógico! Una estrategia de esta naturaleza requiere tanto de la penumbra como del tiempo prolongado. Sólo así la orquestación profesional del rumor logra el daño que persigue.

Y entonces mencioné a Lenín Guardia.

—No quiero desviar la atención de esta sesión, pero quiero decir que RN va a exigir al gobierno que entregue todos los antecedentes que tiene sobre el señor Lenín Guardia. Vamos a pedir que se investigue la participación que a este sujeto, ex miembro de la Central Nacional de Inteligencia, le ha correspondido en todo este episodio.

Terminé diciendo que «en estos días he visto desánimo, náuseas, la impotencia de sentirse injustamente agredido» en muchos parlamentarios y llamé a no prolongar ese estado de ánimo que era brindar «una gigantesca victoria a los narcotraficantes y a los enemigos de la democracia».

Cuando finalicé —de nuevo en palabras de *La Época*— «un tropel de parlamentarios, entre los cuales se mezclaron incluso algunos ministros, llegó en cosa de segundos al escaño del diputado para saludarlo, felicitarlo, abrazarlo, apretarlo».

Entre ellos, el ministro del Interior, Carlos Figueroa, que casi al mismo tiempo me dijo:

—Andrés, es el mejor discurso desde que volvió la democracia—. Acto seguido, le preguntó a un asesor: —¿Quién cresta es Lenín Guardia?

En un solo sector el discurso provocó mutismo: la bancada de la UDI se mantuvo en hermético silencio. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Nadie dijo nada, salvo el diputado independiente Karelovic, que al aplaudir hizo aún más patente el contraste. Pero esa reacción colectiva fue más expresiva que mil palabras.

Mi argumentación tampoco tuvo mayor impacto en *El Mercurio,* que editorializó afirmando que si la Cámara realmente quería despejar todas las dudas, «nada costaría que todos sus

miembros se sometieran a las pruebas científicas más avanzadas para acreditar su absoluta desconexión con el vicio más inquietante de nuestro tiempo». Era un claro apoyo político a las denuncias. A mí me pareció increíble. Si un ex ministro de Allende hubiera afirmado que «algunos generales consumen drogas», sin aportar ni un asomo de prueba, ¿habría *El Mercurio* sugerido que todo el Estado Mayor hubiera partido a hacerse exámenes antidrogas?

Cajón de avispas

Mencionar a Lenín Guardia fue como patear un cajón lleno de avispas.

—Lenín Guardia es un personaje que entre 1970 y 1973 era «orejero», informante y «soplón» del *Coco* Paredes, ex director de Investigaciones. Posteriormente, salió al exilio y cuando regresó se dice que fue informante de la DINA —declaró el senador Ignacio Pérez Walker.

—Guardia estaría implicado en una suerte de red de espionaje para conocer la vida íntima de cada uno de los parlamentarios y de otros servidores públicos —expresó el vicepresidente del Senado, Ricardo Núñez, agregando que era necesaria «una investigación a fondo, no sólo sobre Lenín Guardia, sino acerca de todos quienes estuvieron claramente vinculados a la DINA y la CNI, porque no pasaron de ser agentes a vendedores de maní en la esquina».

—Nosotros no asumimos la militancia del señor Guardia, que desde 1980 ha trabajado en contra del PS. La cloaca de los que fueron los servicios de seguridad del régimen militar no se ha destapado todavía —declaró Camilo Escalona, presidente del Partido Socialista.

Los diarios aportaron lo suyo y dieron a conocer el extraño currículo de Guardia y un sinfín de otras historias. Como aquélla «conocida en los círculos influyentes del socialismo» que se remontaba a mediados de los 80 y conforme a la cual Lenín Guardia le propuso a un grupo de dirigentes comunistas una

reunión con los generales Herman Brady y Osvaldo Pedreros, que tuvo lugar, pero el «contertulio del Ejército era el general Gordon» por entonces… ¡director de la CNI!

Lenín Guardia inició inmediatamente su defensa. Negó tener algo que ver con la CNI y empezó transmitir con histriónico dramatismo que yo le había hecho «a un hombre de izquierda un daño irreparable. Me siento un cadáver caminando». Sin embargo, confirmó las reuniones con Núñez y Estévez, aunque dijo que habían tenido por objeto «transmitir que la denuncia de Cuadra no significaba atacar personas, crear situaciones de crisis, cortinas de humo ni mucho menos». Era una explicación estúpida. Ese «mensaje» era lo que Cuadra había dicho a los cuatro vientos desde el primer día y en la propia entrevista. No justificaba ni una reunión de tres minutos.

Más importante fue que declarara repetidamente que no había tenido «relación alguna con el gobierno pasado ni el actual».

Cuando Carlos Figueroa, en la Cámara de Diputados, preguntaba a voz en cuello quién era Guardia estaba a 120 kilómetros de la respuesta. Si hubiera preguntado lo mismo sentado en su despacho de La Moneda, la respuesta habría estado a 120 metros.

Antes de una semana el propio subsecretario del Interior, Belisario Velasco, se vio obligado a clarificar que Lenín Guardia era un asiduo informante del gobierno desde 1990, agregando que había hecho significativos aportes en la investigación del asesinato de Jaime Guzmán, el secuestro de Cristián Edwards y el desbaratamiento del grupo terrorista MAPU-Lautaro.

Carlos Figueroa, el ministro del Interior, afirmaba que desconocía tal rol, pero su propio subsecretario —Velasco— lo contradecía diciendo que «sí estaba en antecedentes». El juez Alfredo Pfeiffer, que había llevado los casos de Edwards y Guzmán, ponía en duda que hubiera sido una pieza clave en la investigación de ambos delitos. Luego, el aura de criollo *James Bond* con que Belisario Velasco había intentado recubrir a su informante, empezó a crujir cuando el propio Guardia dejó entrever que era informante remunerado.

Todo los días aparecían hechos distintos y emergían más y

más datos de un opaco submundo político-policial. Fui un domingo en la mañana a hablar con Genaro Arriagada —ministro de la Presidencia— que me podía dar una buena orientación acerca de cómo seguir adelante y hasta dónde llegar. El consejo no pudo ser más claro:

—¡Nunca he visto algo más sucio que lo que intentan hacerte! Destapaste un tarro de mierda. De lo peor, pero tú eres presidente de partido. No un detective. Vuelve a la política, y que esto, lo resuelvan los tribunales.

Esparciendo veneno

Un par de meses más tarde, hacia fines de mayo, nos sorprendió una noticia emanada —precisamente— de los tribunales. El ministro instructor, que ya tenía vencido el plazo legal para dictar sentencia, en vez de hacerlo, había adoptado una extraña resolución: privar del conocimiento del sumario a los querellantes y al querellado. Además, había despachado una nueva orden de pesquisa a Investigaciones y había ordenado la citación de varios testigos.

Algo había pasado. El curso procesal se había alterado dramáticamente.

A mediados de junio, Nelson Contador, nuestro abogado, nos llamó porque tenía novedades importantes que comunicarnos. Había tenido, finalmente, acceso al expediente: Cuadra había efectuado graves cargos en contra nuestra.

—Desde un punto de vista penal, nada. Pura «paja molida». Ahora, desde el punto de vista noticioso, puede ser complicado.Todo depende de cómo lo presenten los periodistas.

—¿A quién acusa Cuadra? —pregunté.

—Principalmente a tí. A puros RN. Se acabó el disparo a la bandada. Ahora afinó la puntería. Lean el expediente. Pero les advierto que van a tener ganas de vomitar.

El 11 de mayo, Francisco Javier Cuadra había comparecido personalmente ante el juez y declarado lo siguiente:

«Tengo información sobre el consumo de cocaína, en circunstancias de tiempo distintas del senador Ignacio Pérez Walker y de los diputados Andrés Allamand, Alberto Espina y René Manuel García. Además, tengo información indirecta sobre otros parlamentarios y dirigentes políticos que han practicado o practican análogo consumo».

La declaración de Cuadra señalaba que «de estos hechos tienen información los señores Víctor Matthei Fornet, empresario; don Luis Contreras, contador; don Francisco Eguiguren Correa, empleado, y don Felipe del Villar, abogado y concejal de la Municipalidad de Vitacura».

Conforme a la pormenorizada declaración de Cuadra que rola a fojas 359 y siguientes del expediente, el primer testigo —el señor Matthei— se habría impuesto de mi «adicción a la marihuana, inicialmente y luego cocaína» por expresiones de un tercer testigo: Luis Undurraga Finlay.

El segundo testigo —el señor Contreras— se remitía como presunta fuente a otros cuatro terceros testigos. Un tal Carlos Gary que habría visto consumir droga a los senadores Ignacio Pérez Walker y Sebastián Piñera; un detenido —ni siquiera identificado y del que nunca más se hablaría en todo el proceso— que supuestamente le habría vendido «varias veces cocaína» al diputado Espina; una dama vinculada sentimentalmente al tal Gary, que habría visto personalmente consumir drogas al diputado René Manuel García; y una «señora de apellido Stern» quien hasta hace poco trabajaba conmigo y que habría dejado de hacerlo desilusionada porque yo estaba «reventado por la droga».

El tercer testigo —Francisco Eguiguren— también se remitía a otro testigo: el concejal de Estación Central Felipe Palacios, quien supuestamente le habría informado que «durante los años 80», es decir, ¡cinco años antes a lo menos! compraba «cocaína y la consumía con el diputado Allamand».

El cuarto testigo —Felipe del Villar— presuntamente habría obtenido la «información» también de terceros testigos: el abogado Jaime Barros, quien le habría señalado en una ocasión

no precisada que yo estaba «muy mal, al parecer queriendo significar que consumía bastante droga» y a la ex mujer de éste, Noel Echeñique, quien supuestamente le habría formulado un comentario similar.

A medida que se desplegaba el relato, más en evidencia quedaba su fragilidad, pero llegaba al límite de lo absurdo al final cuando Cuadra declaraba: «Debo señalar que tuve conocimiento de que en el viaje aéreo especial de Lan Chile desde El Salvador a Santiago, con motivo del partido decisivo de la Copa de Fútbol entre Universidad de Chile y Cobresal, a fines de 1994, miembros de la tripulación debieron solicitar al diputado Espina que moderara su conducta, pues he sido informado que practicaba ejercicio inusuales, colgándose de los compartimentos destinados a guardar maletines personales y que se ubican arriba de los asientos».

¡Ahí estaba en papel sellado el cuento del avión!

Las sospechas que desde semanas nos rondaban se habían verificado. Sin embargo, toda la «información» era absolutamente inconsistente. Pura basura. Apenas testigos de «oídas» que se remitían a terceras personas, con relatos inverosímiles. Pero a nadie podía escapar un hecho evidente. Todos los testigos los había aportado Evelyn Matthei: su propio hermano (Víctor Matthei), su jefe de campaña en San Antonio (Contreras), uno de los encargados de la juventud de su frustrada candidatura presidencial (Francisco Eguiguren, hijo de Gonzalo) y un concejal de Vitacura, distrito de Las Condes (Felipe del Villar) elegido cuando ella representaba ese distrito. Incluso, el ridículo cuento del avión, que parecía escaparse de esa tónica, no se escapaba. El piloto se llamaba Matthei.

Los testigos de los testigos

El ministro instructor se dio a la tarea de interrogar personalmente a los testigos. Y todo el enclenque entramado se derrumbó estrepitosamente.

El 16 de mayo, a fojas 366, compareció Víctor Matthei, quien declaró que Luis Undurraga, le habría comentado, después de mi entrevista con Raquel Correa, «mira cómo caen los angelitos» y, en otra oportunidad, que yo era «como tonto para consumirla». Matthei sostenía que Undurraga le habría señalado que los diputados Espina y Schaulsohn eran también consumidores. Pero más adelante, a fojas 378, compareció Luis Undurraga, quien declaró que «no le dije eso y tendría que estar loco para decirlo. Es cierto que yo voy al estudio de abogados donde también tiene oficina el señor Allamand, pero el parlamentario no se dedica al ejercicio profesional, pienso yo, desde que ha empezado sus actividades políticas. Yo no lo he visto nunca a él. Ignoro por qué el declarante señor Matthei me menciona como autor de los dichos que el tribunal me indica. Tampoco es efectivo que le haya hecho análogos comentarios en el sentido de que los diputados Espina y Schaulsohn consumían cocaína. Ni siquiera conozco a esos parlamentarios».

El 17 de mayo a fojas 367 compareció Luis Contreras, quien en breve declaración expuso que un tal Carlos Gary, que hacía trabajos de propaganda callejera, habría visto en la campaña parlamentaria del año 1993 al senador Pérez Walker consumiendo cocaína. Pero el 22 de mayo, a fojas 368, compareció el tal Gary, haciendo ver que no aportaría «información alguna». Más adelante, cuando llegó al tribunal el extracto de filiación de este sujeto quedó al descubierto que tenía ficha policial... ¡de asaltante y monrero! Más tarde, a fojas 369, apareció la dama, «sentimentalmente vinculada» a Gary, quien declaró haber asistido a una «reunión» en el casino de Viña del Mar, donde habría visto consumir drogas a dos ex parlamentarios, sin identificarlos. Pero «no recuerdo al diputado René Manuel García», añadió.

El 17 de mayo, a fojas 368, compareció Francisco Eguiguren, quien definió a Palacios como alguien a quien «no le hacía demasiado caso y no puedo dar absoluta fe de lo que me decía, porque puede tratarse también de una mentira». Sin embargo, a continuación venía el relato: supuestamente yo habría ido a dejar a Palacios a su casa en una oportunidad —cuya fecha el

testigo no podía precisar— ocasión en la cual le habría preguntado si tenía un «mote», esto es un gramo de cocaína, a lo que Palacios me habría contestado negativamente. Entonces yo le habría dicho que ahí tenía uno «y sacó de su billetera un par de papelillos con cocaína, pero ésta estaba reseca y no servía». Por Dios, pensaba yo mientras leía, ¿quién va andar trayendo papelillos inservibles de cocaína en la billetera como *souvenir?* Era imbécil sólo pensarlo. Pero a fojas 371 comparecía Felipe Palacios y tajantemente declaraba que todo el relato «no es efectivo, no recuerdo que ello haya sucedido, es más preciso que ello: nunca sucedió».

Del Villar no aparecía por ninguna parte, pero sí Jaime Barros y Noel Echeñique. Ésta última, a fojas 381, con fecha 6 de junio, negaba tajantemente haber formulado cualquier comentario a Del Villar, y otro tanto declaraba Barros en las fojas siguientes.

Por último, a fojas 407 vuelta, el 9 de junio, comparecía Felipe del Villar ante el juez y declaraba «que no es efectivo que el abogado Jaime Barros, a quien conozco, me haya comentado que Allamand «está muy mal», dando a entender que consumía droga. Del Villar sólo recordaba que hace unos cuatro años más o menos Jaime le había comentado que yo estaba muy mal anímicamente, pero ello «era con motivo del accidente ocurrido a su hijo».

El cuento del avión era aún más insólito. A fojas 406 y 407, los pilotos de Lan Chile, Alejandro Dalbadie y Julio Matthei declararon que nadie les había reportado nada anormal. A su turno, a fojas 413 y 414, ambas el 12 de junio, las azafatas de Lan Chile, Alejandra Villarroel y Leonor Goldzwieg, dijeron que dentro del ambiente de alegría que inundaba el avión de regreso «en ningún momento» Alberto Espina había adoptado «actitudes indebidas y mucho menos colgado de las partes destinadas a las maletas».

—¿Qué significa jurídicamente el cambio de estrategia? —le pregunté a Nelson Contador.

—Que Cuadra se entrampó solo. Ya no puede usar el argumento de que sus declaraciones son una forma de crítica o análisis político. Ahora tiene que probar sus dichos. Si no, va preso.

A todo esto, nuestra preocupación no era el proceso, sino cómo evitar que toda esa mugre se publicara. Una misión imposible. En todos los diarios se sabía que Cuadra había entregado una lista de testigos. Y nuestra mayor preocupación era *Qué Pasa*. No nos equivocamos. La edición de la primera semana de julio estuvo íntegramente destinada a ventilar el secreto del sumario.

La entrega informativa fue un modelo de mala intención. *Qué Pasa* se pavoneó de haber conseguido «en exclusiva» el sumario y, aunque expresaba que «la munición presentada por Cuadra para denunciar a los parlamentarios de RN está lejos de ser sólida» y que «se han acumulado una serie de evidencias de que el ex ministro no actuó en forma responsable ni trasparente al citar nombres», no tuvo empacho en transcribir todas las declaraciones.

Al trascender a los medios, el daño era ya irreparable. ¿Cuántos se quedarían con las acusaciones —burdas, falsas, grotescas, pero acusaciones al fin— y no prestarían igual atención a los desmentidos? ¿Cuánto se nos aplicaría aquello de que «cuando el río suena piedras trae»? ¿Cómo afectaría el escándalo a nuestras familias?

Quedé desolado. Y para qué decir cuando un día llegué tarde a mi casa —a eso de las 2:00 de la mañana— y estaba prendida la luz en la pieza de mi hija mayor. La María Olivia había leído *Qué Pasa*.

—Papá, ¿cómo pueden publicar esas mentiras?

Traté de explicar, en una poco feliz analogía con los comentaristas deportivos, que «eran cosas de la política».

—¿Por qué no vuelves a ser abogado? La mamá dice que antes vivíamos mejor. La política no vale la pena —me contestó.

La frase me quedó rondando hasta tarde. Y eso que en casa la María Olivia era la que más aguantaba la política.

Ricardo Rivadeneira, viendo nuestra desazón e impotencia, preparó entonces un reclamo ante el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación. La sentencia estableció que «no se divisa qué relevancia informativa podía tener la transcripción de las declaraciones y, en cambio, aparece indiscutible que ellas

dañan injusta e irreparablemente la honra y fama de personas que ni siquiera los testigos, ni la Justicia, ni siquiera la revista han estimado que se hallen comprometidas ni afectadas por estos dichos irresponsables. Más grave es el daño si se considera que los perjudicados son personeros políticos, sujetos a la pasión e injusticia inherente a ese tipo de actividades que durante los largos años, es probable, se alimentarán del recuerdo impreciso, pero denigratorio de estas publicaciones». Al final ordenaba a *Qué Pasa* publicarla íntegramente.

SHOW EN LOS TRIBUNALES

El 14 de junio el ministro sumariante encargó reo a Francisco Javier Cuadra. Su ingreso a la cárcel fue otra vez noticia de primera página. Y Cuadra, una vez más recurriendo a sus dotes de experto en comunicaciones, montó su *show*. No solicitó la libertad bajo fianza —que le habría sido concedida de inmediato— sino que presentó un amparo para ir al fondo del asunto y enervar de una vez la acción. En el intertanto, la amplia cobertura televisiva le permitiría jugar el rol de víctima y apelar al espíritu compasivo de los chilenos que se enternecen aun con los peores delincuentes cuando los ven en la cárcel.

Los diarios, además, publicaron que su defensa sería asumida en estrados por Alberto Ríos, el mismo abogado que exitosamente defendiera a Evelyn Matthei en su desafuero en el caso de espionaje. Pablo Rodríguez «asesoraría» a la defensa. ¡Se repetía el elenco del espionaje!

Entremedio —y cuando aún el recurso estaba pendiente— el general Pinochet consideró adecuado emitir una señal: Hernán Novoa, asesor jurídico de la Comandancia en Jefe del Ejército, visitó la cárcel y a la salida, preocupándose de ser profusamente fotografiado y filmado por la televisión, declaró que había sido «portador de un saludo y mensaje de solidaridad» de Pinochet, quien le ofrecía a Cuadra «ayuda de cualquier tipo que pudiera necesitar».

—Es el mundo al revés. Cuadra difama a las instituciones y denigra a un grupo de parlamentarios de RN; ante la falsedad de sus imputaciones es encargado reo y el general Pinochet, en vez de solidarizar con los afectados, lo hace con el agresor —contesté cuando me preguntaron por el «gesto» de Pinochet.

En esos días Alberto Espina me convenció de la necesidad de efectuarnos un examen de pelo. Su argumento era lógico: éramos los directamente acusados y de alguna forma dependíamos de lo que dijeran o no dijeran testigos.

Fuimos al laboratorio de la Universidad Católica y nos tomamos las muestras ante el propio director y éstas, debidamente selladas, partieron a Estados Unidos, que es donde se efectúan los exámenes. Los resultados descartaron cualquier consumo. Acompañamos los certificados al proceso y los diarios también publicaron los resultados.

El asunto era de nunca acabar. En junio *La Tercera* en primera página se refería al caso y adentro traía la siguiente nota:

«Nadie se imaginaría que en pleno centro de Santiago un vendedor que ofrece guantes en la calle Huérfanos tiene que ver con el escándalo que ha remecido al Congreso desde casi comienzos de año. Ese vendedor es Patricio Pino, quien fue *junior* del diputado Andrés Allamand, hasta 1979. Como en una película de espionaje, le ofrecieron declarar que el presidente de Renovación Nacional es un adicto a la cocaína. Pino se negó, 'porque yo no doy falsos testimonios'».

—Efectivamente, me ofrecieron dinero. Vinieron el martes 13, Patricio Vergara y Eduardo Labarca, como a las 8:40 de la noche, a ofrecerme dos millones de pesos.

—¿Pero ellos qué le dijeron exactamente?

—Me preguntaron qué me parecía todo este lío de Allamand. Les dije que no tenía idea. Entonces me dijeron: «Tú eres la persona clave, que podís liquidar a Allamand».

¿Quién está detrás de todo esto?, pensaba yo. ¿Quién puede estar ofreciéndole plata a un auxiliar que dejó de trabajar conmigo hace más de seis años?

Sin embargo, la defensa de Cuadra no tuvo éxito. Su recurso

fue rechazado unánimemente en la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema también rechazó el recurso y, de paso, ordenó efectuar algunas diligencias.

Seis largos meses más tarde, en diciembre de 1995, una vez que se habían efectuado todas y cada una de las diligencias, el ministro dictó sentencia. Y condenó a Francisco Javier Cuadra.

Sin embargo, en esa misma fecha me di cuenta de que aunque ganáramos todas las instancias procesales siempre perderíamos en la prensa. La *Qué Pasa* de la semana siguiente, en una amplia y destacada entrevista, obviamente armada y previamente convenida, le permitía en bandeja a Cuadra reiterar todos sus dichos, descalificar el proceso y la investigación judicial llevada a cabo, no obstante que ni una sola queja sobre la misma existía en el expediente. De paso, entregaba versiones falsas sobre diversos hechos sin siquiera ser contrainterrogado. ¿El punto de vista del Senado, la Cámara o de RN? Simplemente no se consignaba.

Sin embargo, las sorpresas no terminaban. A principios de enero de 1996 la Corte de Apelaciones —a través de la misma sala que antes había ratificado la encargatoria de reo— absolvió a Cuadra. El fallo fue de nuevo titular de primera página.

—Doy gracias a Dios, porque estamos en una República democrática y se puede comprobar que hay tribunales que pronuncian un fallo histórico en materia de libertad de expresión. Realmente da gusto ser chileno —declaró rápidamente Cuadra.

Era una declaración impúdica. Yo sólo atiné a decir que no me parecía que la libertad de expresión pudiera confundirse con «una patente de corso para difamar e injuriar a las personas». La revista *Qué Pasa* se encargó de publicar que «mientras en la tarde del jueves 11, Ríos (abogado de Cuadra) analizaba el fallo, el principal enemigo interno de los líderes de RN mencionados por Cuadra, el ex senador Sergio Onofre Jarpa, lo llamó obviamente para felicitarlo».

Ahora, todo quedaría en manos de la Corte Suprema. Se repitió la «liturgia» jurídica de alegatos y la prensa informó extensamente que el bullado proceso llegaba a término. Sólo faltaba la última y definitiva palabra.

—El fallo quedó en acuerdo —nos informó Nelson Contador que hizo un alegato sólido y convincente.

—¿Cómo crees tú que va a andar la cosa? —preguntó Alberto Espina.

—En la Corte nunca se sabe. Ya vieron lo que pasó con la apelación.

—¿Quién integró la sala? —volvió a preguntar Espina.

—Presidió Roberto Dávila y la redacción quedó a cargo de Bañados.

—Creo que nos va a ir bien —le dije a Alberto Espina.

EL JUEZ DEL CERRO

El Pochoco es un cerro de la misma altura que el Manquehue. Tiene una vista espectacular. Hacia abajo se desparrama Santiago. Hacia atrás se alza la magnífica cordillera.

El camino de ascenso es una huella escarpada que serpentea entre matorrales y árboles autóctonos. Casi siempre es posible ver águilas y, con suerte, un par de cóndores. Entrado el invierno, se cruzan chillas y algún culpeo. A buen paso y en buena forma se puede hacer cumbre en algo más de una hora. Y toma a lo menos otra hora bajar.

El Pochoco tiene magia. Atrapa a quien alguna vez lo sube. Y los hace volver una y otra vez. Yo empecé a subirlo en 1992. Y me enamoré de su paz, energía y belleza. Cada fin de semana, invierno o verano, lo subo. Habitualmente con Gastón Cummins (que siempre me gana en llegar arriba); con Bernardo Matte (que me trajo la primera vez); con mi hijo Raimundo (que siempre se queja que vamos muy rápido); con alguna de mis hijas (cuando por milagro se han acostado temprano); con mi perro rottwieler (antes de que fuera expulsado de la casa por una conjura conjunta de la Bárbara y las niñitas) o, muchas veces, solo. A mí me gusta ir temprano, al alba. Ojalá partir antes de las ocho. Ahí es cuando me quedo solo: todos consideran que ésa es una hora criminal.

Siempre que subo el Pochoco me encuentro con un hombre relativamente mayor. Flaco, de pómulos prominentes, peinado hacia atrás. Se le adivina más bien hosco. Saluda apenas con un ademán sin jamás cruzar palabra y sigue su camino.

Se llama Adolfo Bañados.

Cosas de la política

El fallo fue apenas un paliativo para un período que recuerdo con pesadumbre:

«La libertad de expresión está garantizada por la Constitución, pero al mismo tiempo, el ejercicio de esta facultad es sin perjuicio de los delitos que puedan cometerse. Uno de esos delitos que desvirtúan el ejercicio de la libertad de expresión, es precisamente el que se tiene por configurado en estos autos», estableció la sentencia. Más adelante consignó que las declaraciones de Cuadra debían haberse apoyado en «datos confiables» lo que no había acontecido, ya que el condenado «adelantó únicamente vagas sospechas que no fueron confirmadas ni remotamente por el proceso».

Eduardo Frei Montalva decía que para ser político hay que tener «cuero de elefante». Está bien, pero eso se aplica a los rigores propios del oficio. La política no tiene por qué estar rodeada de una periferia inmunda en que se desbocan pasiones miserables y se desatan propósitos ocultos.

El daño, en todo caso, al prestigio del Congreso, y en general, a la política fue muy grave, especialmente porque durante 1995 se tramitó con tanta o más publicidad otro proceso —cuya denuncia original correspondió a Pablo Longueira— que identificó a funcionarios de la Cámara involucrados en tráfico de drogas. Obviamente, lo de los funcionarios no le importó a nadie y las sospechas inmediatamente recayeron sobre los parlamentarios. Sin embargo, luego de un par de años de publicitada investigación no se logró comprometer a ningún diputado.

No obstante que en el sumario interno de la Cámara hay

constancia de los denodados e irregulares intentos del juez por involucrar a toda costa a algún parlamentario.

¿Al final del día cuál es el balance?

Pablo Longueira es, desde 1998 presidente de la Unión Demócrata Independiente.

Evelyn Matthei, independiente apoyada por la UDI, ganó en 1997 con holgura una senaturía por la IV Región. En su última campaña se mostró partidaria de legalizar las drogas a fin de combatirlas con más eficacia.

Lenín Guardia se transformó en personaje público, un «analista» con una portentosa habilidad para ser entrevistado.

Pese a su condena y deplorable actuación, Francisco Javier Cuadra mantiene su prestigio como consultor político, es habitualmente interrogado por los medios de prensa, participa en programas de televisión y aparece como uno de los hombres más cercanos al general Pinochet.

Cosas de la política.

Capítulo XVIII

La punta del estilete

A todo esto —en paralelo— la actividad propiamente política seguía su curso. Desde abril de 1994, cuando realizamos una minicumbre en Jahuel —políticamente muy insípida— el trabajo opositor se había robustecido. El pacto Unión por Chile funcionaba con regularidad, al punto que *El Mercurio* —un año más tarde— decía que «las relaciones entre Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, tradicionalmente conflictivas, presentan una visible mejoría».

Durante esos largos meses, el único problema había sido la UCC. Semana por medio Errázuriz intentaba que el pacto acogiera iniciativas muy discutibles o por cualquier razón, amenazaba con retirarse de la alianza.

Para nadie era una sorpresa. Errázuriz es genéticamente personalista y el ordenamiento del sector le quitaba protagonismo a la UCC. Era evidente que a medida que se acercaran los retos electorales —la elección municipal y luego la parlamentaria— Errázuriz inventaría algo para levantar su alicaído perfil y el de su partido apéndice.

El pretexto que andaba buscando lo encontró temprano en 1995: quiso evitar que el diputado por Coyhaique, Valentín Solís (a quien él mismo había expulsado de la UCC) se incorporara a RN. Cuando lo admitimos en nuestras filas, la UCC se retiró de la Unión por Chile, no sin antes taparme de insultos

y sindicarme como responsable del «quiebre de la alianza opositora».

—Allamand aplica la política del «perro tozudo». Él ladra y el resto se tiene que quedar mudo —acusó el ex presidente de la UCC, Jorge Concha.

—Aquí el único perro es Concha, que trabaja de pastor alemán de Errázuriz— contesté sobre la marcha.

El trabajo opositor se hizo aun más fluido sin ese incordio y la Unión por Chile le planteó al gobierno iniciar un «diálogo para la modernización». Pese a la buena acogida del propio Frei, los partidos de la Concertación bloquearon la idea. En tal diálogo, a la hora de las iniciativas concretas —por ejemplo, la privatización de las sanitarias— habría más respaldo para el gobierno en la oposición que en sus propias filas.

Fracasada tal posibilidad, la Unión por Chile inició unas jornadas programáticas con el título de «Modernizar a Chile». Las reuniones convocaban a parlamentarios y figuras destacadas y se traducían en propuestas para áreas específicas.

«La oposición que tiende aburridamente al orden parece haber encontrado el semblante de un diseño estratégico: apropiarse de lo que ella considera la idea más demandada de estos tiempos: la modernización del país. Y, al mismo tiempo, meter el puñal para ensanchar las diferencias y el desorden que brota al interior del gobierno», afirmó el periodista Mauricio Gallardo. Según él, ese camino no era suficiente para convertir a la oposición en alternativa de gobierno —tarea de mayor envergadura que exigía otros ingredientes—, pero sí era una afilada «punta de estilete».

La reserva entrenada

A principios de abril de 1995, Jarpa anunció su retorno formal a la política. «Jarpa cabalga de nuevo» tituló una publicación. «¿Alguna vez se retiró?» preguntó con ironía Ricardo Lagos.

Once meses después de su retiro y a los 74 años volvía a la arena porque «si no se reinicia la lucha, el país se va a desintegrar». ¿Desintegrar? Al menos no lo parecía. Jarpa tuvo que recurrir a su baúl de frases para justificar su retorno. Durante las semanas en que lo explicó, revolvió todos y cada uno de los temas posibles:

«Hay que terminar con la corrupción, los malos acuerdos internacionales, la drogadicción y la falta de conducción política. Hay que ayudar a prevenir los desastres que conocimos en la década del 60 y del 70. Nadie sabe quién gobierna en Chile. Estoy dispuesto a asumir de nuevo mi lugar en la primera línea de la lucha por Chile, por la gente de trabajo, por los campesinos y agricultores del país. Me preocupa el Mercosur. ¡Hay que ver lo mal que se manejó lo de Laguna del Desierto! El Nafta puede ser muy malo si es que vamos a ser un satélite de la economía norteamericana».

El guión parecía escrito por Coppola. ¡Si le agregábamos los helicópteros y la música de Wagner, casi se podía ver *Apocalipsis now!*

A todo esto, ¿que decían los números? Chile en 1995 crecería a más del 8%, alcanzaría una tasa récord de ahorro, el desempleo no subiría del 7% y la inflación rondaría el 8%.

En ese mar de lugares comunes, era fácil para los periodistas urgirlo a que definiera la gran crisis que justificaba su retorno. Ahí la respuesta se uniformaba:

—Que vayamos derivando hacia un gobierno socialista.

Jarpa fue ambiguo al opinar sobre la marcha de la oposición y sólo insinuó que no bastaba la acción de los partidos, sino que se necesitaba «movilizar sectores gremiales, productivos, del trabajo y la producción como lo hicimos desde 1970 a 1973». ¡Por favor! ¿En qué se parecía el Chile de 1995 al de la UP? En cuanto a mí —pregunta obligada en las entrevistas que otorgó— declaraba que no venía «a arrastrar el poncho».

Lo notable era que las rebuscadas razones de Jarpa omitían las únicas crisis reales: la incubada en torno al caso Contreras y el malestar que emanaba de las filas del Ejército ante la avalancha de procesos reactivados en contra de su personal.

¿Que haría Jarpa?

—Pertenezco a la reserva entrenada. Cada uno conoce su puesto —respondía.

CHILE HEMOFÍLICO

Mientras el caso Contreras monopolizaba la atención pública, las tensiones subterráneas en el mundo militar iban en aumento. La razón fundamental era que los tribunales habían cambiado la interpretación de la ley de amnistía, acogiendo la «Doctrina Aylwin» de 1991: primero, individualizar a los culpables y luego, sobreseer. Centenares de procesos se habían abierto o reactivado.

Por otro lado, los familiares de los detenidos desaparecidos seguían sin saber dónde estaban los restos de sus deudos.

El país debía hacer un esfuerzo por resolver tales problemas, apenas barridos bajo la alfombra. ¡De allí siempre irrumpen aumentados!

A principios de julio, en conjunto con la UDI, formulamos la «Propuesta por la Paz y el Futuro», que se tradujo en un proyecto de ley de Miguel Otero, Sergio Diez, Sebastián Piñera, Hernán Larraín y Carlos Letelier, para terminar con la doble interpretación que los tribunales daban a la ley de amnistía. En algunos casos, establecido que el delito era anterior a 1978, el juicio finalizaba; en otros se alargaba indefinidamente. El proyecto optaba tajantemente por lo primero.

La iniciativa ordenaba que en el plazo de 90 días se sometiera a proceso a los culpables o bien se sobreseyeran definitivamente las causas. Sin embargo, —y esto era básico— de ocurrir esto último, el juez mantenía la investigación abierta indefinidamente, pero sólo para recibir, bajo secreto y reserva de identidad, datos para ubicar los restos de los detenidos desaparecidos. Adicionalmente, se facultaba a los jueces para el «ingreso, allanamiento, excavación o exhumación en recintos militares».

Sin embargo, el gobierno, a través de su vocero, José Joaquín Brunner, descartó la idea:

—No vamos a tomar iniciativas de ninguna especie en la materia.

¿Por qué actuaba así? Para evitar la crítica de las organizaciones de derechos humanos y no repetir el papelón de la ley Aylwin.

Las semanas siguientes, actuando con Jovino en una afiatada dupla —no andaba descaminado Jaime Guzmán cuando decía que era una de las personas más inteligentes que conocía—, nos abocamos a promover nuestra propuesta ante la Iglesia Católica, el Consejo de Pastores de las Iglesias Evangélicas, el presidente de la Corte Suprema y la Corporación de Reparación y Reconciliación. La propuesta cobraba aceptación y parecía haber descolocado al gobierno y a los partidos de la Concertación. ¿Cuándo hablaríamos con ellos? Más adelante, cuando la idea hubiera ganado suficiente terreno.

Una reunión a la que yo asignaba gran importancia era la que tuvimos con el presidente de la Comisión Verdad y Reconciliación, Raúl Rettig. Jovino tenía sus dudas: Guzmán había sido muy crítico del Informe Rettig. Mi razonamiento era que si lográbamos convencerlo de las bondades de nuestro proyecto, éste recibiría casi una bendición.

El resultado no pudo ser mejor. Raúl Rettig valoró nuestra iniciativa y fue aún más lejos respecto de la amnistía:

—Debe aplicarse una vez que se establece que el delito se cometió en el período cubierto por aquélla y no es necesario llegar a individualizar a los autores de la acción delictual.

—Esclarecido el delito y que se encuentra dentro del ámbito de la amnistía, no es necesario seguir investigando. No se justifica llevar la investigación a la determinación de los responsables— dijo en esos días el propio Patricio Aylwin admitiendo que había cambiado de opinión.

Unas semanas antes, Adolfo Zaldívar había pronunciado en el Senado un discurso en la misma línea, afirmando que Chile no podía «trasformarse en una comunidad hemofílica, donde día a día se producen sangramientos y no cicatrizan las heridas».

No fue necesario resolver el problema de cómo abordar a los partidos de la Concertación. Los cuatro presidentes —Alejandro

Foxley, Jorge Schaulsohn, Camilo Escalona y Anselmo Sule— nos pidieron una reunión especial para tratar el tema.

—Vengan el sábado a mi casa a tomar desayuno —dijo Jovino, que estaba inaugurando por esos días su nueva casa en Vitacura.

El sábado 11 de agosto de 1995 aparecieron puntualmente a las nueve de la mañana. La conversación nos dio la pauta de cuán hondo había calado la propuesta en el mundo de la Concertación. Escalona advirtió que no discutiría los aspectos técnicos del proyecto, porque lo estaba estudiando una comisión especial del Partido Socialista. Allí estaría el hueso más duro de roer.

El principal punto de la Concertación era que si íbamos a dejar atrás los temas del pasado la agenda debía incorporar las materias constitucionales. ¡No sólo los juicios eran un problema, también lo eran diversos aspectos de la Constitución! Y aunque aclaraban que no se trataba de un trueque, ambas materias debían ser abordadas. Me mantuve a la expectativa: los versos no eran para Renovación sino para la UDI, que siempre había rechazado cualquier cambio constitucional. Jovino, que maneja los silencios como nadie, permanecía impasible.

El principal interés nuestro era involucrar al gobierno, ya que se mantenía «tomando palco», como si los problemas tuvieran lugar en un país de otro continente.

Al día siguiente dirigimos una carta abierta a nuestros invitados, afirmando que debía avanzarse en la «tramitación legislativa del proyecto presentado por la Unión por Chile» y reclamando la necesidad de incorporar al gobierno en las conversaciones, ya que «resulta absurdo suponer que acuerdos de esta envergadura puedan ser adoptados sin el concurso activo del Poder Ejecutivo».

Finalmente, venía el tema de las reformas constitucionales.

—Redáctalo tú. A ti te aprieta el zapato —le dije a Jovino.

El párrafo quedó así: «Mantener —en relación a vuestra propuesta de ampliar los temas— en planos claramente separados las conversaciones sobre derechos humanos y reconciliación, con aquéllos de índole político-institucional. Nosotros

reiteramos nuestra disposición receptiva, propia del funcionamiento normal de cualquier democracia, a analizar tales materias en su propio mérito, en la instancia y tiempos adecuados».

Aunque no abría la puerta de par en par, era un claro progreso.

García Márquez

—¿Con quién vas a comer esta noche? —me preguntó Max Marambio.

—Había quedado de juntarme con Alberto Espina.

—¿Por qué no se vienen a comer con García Márquez? Le he contado de ti y quiere conocerte. La Sol ya habló con la Bárbara. No hay problema que venga Alberto y su señora y si quieres traer a alguien más tampoco hay inconveniente.

Conocimos a Max en Cuba, en uno de los primeros viajes con Juan Andrés. Tan pronto supo en lo que andábamos, estuvo dispuesto a ayudarnos en lo que necesitáramos. Max es un próspero empresario, le gustan como a mí los deportes, es un gran conversador y siempre mira las cosas con originalidad. Está casado con Soledad Correa, gran amiga de la Bárbara.

Pensé en mis amigos escritores y rumbo al Hotel Hyatt, llamé a Arturo Fontaine y pensé en Raúl Zurita, pero no los encontré. A quien sí pillé fue a Isabel Izquierdo, quien mas que rápido deshizo un compromiso.

García Márquez estaba terminando su *Noticia de un secuestro* y fue fascinante saber del relato, sus fuentes y cómo la historia se desplegaba. Hablamos de libros, escritores, cuentos, películas. La anécdota de haber enviado el único original de *Cien años de soledad* a su editor por correo me pareció insólita. ¿Y si se hubiera extraviado? «No teníamos plata para nada». De política no se habló una sola palabra.

Quedamos de almorzar al día siguiente en el Due Torri.

La conversación esta vez partió con Cuba. García Márquez se había reunido con Clinton unos meses antes y había quedado sorprendido, ya que el mandatario había leído sus obras más

importantes. García Márquez estaba convencido —y creo que aún lo está— de que si Clinton y Fidel Castro se reunieran, dejarían atrás 40 años de conflicto y enemistad.

—Por ahora, eso sólo puede pasar en uno de tus libros —fue mi comentario.

García Márquez estaba preocupado por la situación de Colombia, donde enormes complicaciones surgían a partir de las investigaciones sobre dineros del narcotráfico en la campaña del presidente en ejercicio, Ernesto Samper, cuya denuncia original la había formulado Andrés Pastrana.

García Márquez tenía mala impresión de Pastrana. Los separaban, según él, demasiadas cosas.

—Vas a cambiar de opinión cuando lo conozcas personalmente —le dije y puse en mi disco duro ayudar a acercarlos algún día.

Andrés Pastrana pasaba por un mal momento. No asimilaba una derrota electoral por menos de 20.000 votos y mucho menos se conformaba de haber sido derrotado con malas armas. Para peor, la opinión pública colombiana había reaccionado en su contra por la denuncia, al percibir su actitud como la de alguien resentido.

Cuando le conté a Andrés que había trabado una incipiente amistad con García Márquez reaccionó con displicencia.

Un tiempo después, en Cartagena de Indias, con motivo de un seminario del BID al que ambos asistían, se dio la oportunidad perfecta para juntarlos.

Quedamos de ir a comer a un restaurante del que todos nos habían hablado, el Mr. Barilla. A García Márquez le encantaba. «Así debe ser el infierno», me dijo. En realidad, no era para tanto, pero el lugar y el ambiente eran únicos. Hasta cierta hora se comía y luego, literalmente, la gente bailaba arriba de las mesas. «Sólo poseídos por algún demonio se puede bailar así», murmuraba García Márquez.

—Hoy comemos en Mr. Barilla. Vamos a hacer un grupo entretenido —le anuncié a Pastrana, contándole que entre ellos estaría Ronnie MacLean, ex alcalde La Paz y también buen amigo suyo.

—Yo a eso no voy —fue la respuesta.

—¡No seas niño chico! Vas a ser presidente de Colombia y es una estupidez que ni siquiera te hables con García Márquez.

Amurrado y todo, partió con nosotros.

Años más tarde, García Márquez se jugó a brazo partido por el triunfo de Pastrana, otorgándole un respaldo muy importante. Por ahí tengo guardado —junto a una dedicatoria lindísisma para mi hija Ignacia en un ejemplar de *Cien años de soledad*— un fax de puño y letra que envió a todos los diarios el día que Andrés se transformó en el presidente más votado de la historia política colombiana.

A quien le pareció mal mi encuentro con García Márquez fue a Sergio Onofre Jarpa. Varias semanas después, apareció en la comisión política y me lanzó un fuerte ataque, más personal que político. Teniendo a la mano un recorte de la *Qué Pasa,* que informaba en función de chismes de la visita de García Marquez, afirmó que no eran convenientes «tales amistades del presidente del partido, que crean confusión», aludiendo a que Max Marambio había sido miembro del GAP de Allende y que García Márquez era un escritor «marxista que había criticado por todo el mundo el régimen militar».

El tono —tremendamente agresivo y hostil— fue el presagio de un enfrentamiento sin cuartel. Respondí con inusual violencia: no aceptaba que pretendiera calificar mis amigos. La verdad es que me había sacado de quicio. Después de un fuerte intercambio de palabras, intervinieron varios miembros de la comisión para apaciguar los ánimos. La tabla se despachó rápido y cuando la sesión terminó todos respiraron aliviados.

Ya no tuve dudas a qué había vuelto Jarpa a la política.

El esquivo punto final

La tercera semana de agosto de 1995, el gobierno resolvió cambiar de política: no podía seguir siendo un espectador pasivo. El ministro del Interior me llamó para decirme que Frei me invitaría

a La Moneda para tratar el tema y que le había encomendado a él y al ministro Arriagada el manejo completo del asunto. El gobierno estaba afinando tres proyectos de ley distintos. Querían informarnos a Novoa y a mí de su contenido general antes de que viéramos al presidente.

Nos reunimos después de comida, el 17 de agosto, en la casa de Carlos Figueroa, donde nos explicaron el contenido de la propuesta presidencial, que luego se bautizaría como Frei I. Eran tres proyectos: el primero modificaba la Constitución en materia de senadores designados, Tribunal Constitucional y Consejo de Seguridad Nacional; el segundo modificaba la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y el tercero era una propuesta para agilizar los procesos judiciales contra personal uniformado.

—¿Para qué metieron la ley orgánica de las Fuerzas Armadas? —fue mi primera pregunta.

—Edmundo Pérez Yoma lo pidió. Si vamos a cerrar la transición, hay que terminar también con ese problema.

Jovino y yo miramos con cara de escepticismo, recordando como el «boinazo» había paralizado indefinidamente un proyecto anterior.

—Tranquilos. El ministro de Defensa asegura que va a haber buena recepción en las Fuerzas Armadas y que ha conversado el tema con Pinochet. Faltan sólo aspectos menores y, según Edmundo, eso sólo se puede hacer con un proyecto de ley arriba de la mesa.

Carlos Figueroa, que es profesor de derecho procesal, indicó las líneas centrales del proyecto de derechos humanos, advirtiendo que al interior del gobierno se vislumbraban fuertes dificultades con las organizaciones de derechos humanos y el Partido Socialista.

Era una fórmula más complicada que la nuestra, pero original. Su arranque era «que los procesos no pueden eternizarse ni cerrarse artificialmente». Proponía la designación de ministros de Corte con dedicación exclusiva por dos años a cargo de los juicios, incluidos los que llevaba la justicia militar; establecía, al igual que el nuestro, un procedimiento secreto para recibir

información y autorizaba a los magistrados a ingresar a recintos militares. La originalidad era que en tales procesos el juez, en ninguna circunstancia, podía detener, arraigar ni someter a proceso a los inculpados. A diferencia de nuestro proyecto, no establecía un plazo perentorio para terminar los juicios, pero los sobreseimientos debían dictarse cuando se determinase el paradero del desaparecido, e incluso si ello no había ocurrido, cuando el Tribunal hubiere llegado «fehacientemente a la conclusión de que el desaparecido ha fallecido y que no es posible establecer el paradero físico de sus restos».

La propuesta iba mucho más lejos que la ley Aylwin y validaba plenamente la amnistía de 1978. ¿Qué otra cosa era establecer un juicio en que ni siquiera se podía encargar reo a nadie? En 1989 el programa de la Concertación planteaba abolir la amnistía; seis años más tarde, este proyecto la afirmaba.

Pensé de inmediato que la izquierda y los grupos de derechos humanos jamás lo aceptarían. Siempre habían considerado la amnistía de 1978 espuria e ilegítima, sostenían que una gama importante de los delitos comprendidos eran inamnistiables y jamás se habían resignado a que los culpables no fueran castigados.

—Es una ley de punto final —declararon apenas lo leyeron.

Y tenían razón. A la larga eso era.

Segundo Acuerdo Nacional

El nudo visible del debate constitucional serían los designados, pero allí nuestra posición no podía ser más clara: Renovación había abogado desde 1989 por su abolición y sólo había aceptado la institución como transitoria. El problema con el Consejo de Seguridad era que la Concertación insistía en dejarlo como un simple organismo asesor del presidente, sin ninguna facultad real. Y en el Tribunal Constitucional se terminaba con la intervención de las Fuerzas Armadas en el nombramiento de sus integrantes, algo absolutamente inusual en

las democracias. De hecho, tal intervención había sido otra de las medidas adoptadas en la hora undécima. Ni la Comisión Ortúzar ni el Consejo de Estado la contemplaban. También era importante para nosotros fortalecer las facultades de fiscalización de la Cámara.

—No hagamos aquí una discusión que tomará meses. La idea de hoy era sólo informarles. Ustedes urgieron a que el gobierno interviniera y así ha sido. ¡No hay como darles gusto! —intervino el dueño de casa.

—De aquí arrancan las negociaciones —confirmó Arriagada.

—Los caballos están apenas entrando a las gateras —dijo Figueroa como buen aficionado a la hípica.

A la salida cambiamos rápidamente impresiones con Jovino.

—¿Qué opinas? —me preguntó.

—A mí me parece que para partir está bien.

—No está mal. A mí también lo de las Fuerzas Armadas me pareció muy raro. ¡Tienen que haber cambiado mucho las cosas! Voy a averiguar mañana a primera hora.

Esa noche casi no pude dormir. Vislumbré una gran oportunidad ¡Iba a ser posible cerrar la transición! Las cosas se habían ido encadenando como digitadas por una misteriosa mano invisible. Los procesos abiertos contra personal de las Fuerzas Armadas exigían una solución y una vez alcanzada ésta, se despejarían los obstáculos para avanzar en las reformas constitucionales pendientes. A esas alturas, algunos defensores de las instituciones autoritarias en la Constitución del 80 habían cambiado de argumentación: ya no eran defensas contra el comunismo —un enemigo transformado en espectro— sino que resguardos para «evitar agravios» a las Fuerzas Armadas. Esa razón desaparecería junto con los juicios pendientes. También, a esa altura, era evidente que tales mecanismos autoritarios eran de dulce y de agraz: le daban un inmenso poder al presidente y, por lo mismo, terminarían volviéndose en contra de la propia derecha.

La vida es un escenario de oportunidades. A veces se abren luego de arduos empeños; otras, caen del cielo. Algunos optan

por tomarlas; otros, las dejan pasar. ¿Qué es el liderazgo sino crear y aprovechar oportunidades?

Desde el día siguiente me aboqué a lo que consideraba fundamental: —Chile necesita un segundo Acuerdo Nacional —declaré a la prensa.

Partida en dos

—He estado meditando mucho. Chile tiene una oportunidad histórica para progresar, pero perdemos energías en temas que no se resuelven. ¡Hay que terminar de una vez por todas los juicios! ¡Cómo no va a ser posible que se entregue la información que están pidiendo los familiares de los desaparecidos! Déjame aclararte que lo de la Constitución me importa más por el país que por mí mismo. Si la derecha se sigue negando a todos los cambios, los nuevos designados no serán como los de ahora. ¡Pero cómo va a ser razonable que Chile tenga que seguir dando explicaciones por tener una democracia como no hay en ningún lado!

El monólogo del presidente Eduardo Frei —mucho más largo de lo habitual— transmitía convicción. Durante la conversación le expresé mis dudas por haber metido el tema de las Fuerzas Armadas y por la manera en que se abordaban algunos temas constitucionales.

—Tengo claro que habrá que buscar acuerdos. Cuando le explique al país la gran importancia que le asigno a todo esto, voy a recurrir a una frase de mi padre. Él decía que «no se humilla quien pide por su patria». Eso es lo que quiero pedirte como presidente de la República: que me ayudes a sacar adelante un entendimiento que Chile necesita.

A la salida me crucé con Jovino en la sala de espera.

Vas a ver que el presidente está en muy buena disposición —le dije a la pasada.

Enfrenté a los periodistas señalando que «se ha abierto un espacio muy importante para un debate sereno y en profundidad»,

haciendo ver que la propuesta del gobierno tenía «cosas buenas y otras malas». De ahí me fui corriendo a una entrevista que tenía pactada con *Hoy*, que me esperaba para cerrar la edición. El título de portada fue «Allamand: voy a ayudarle a Frei».

Al término de la entrevista escuché por la radio a Jovino haciendo declaraciones. Fue un balde de agua fría: ¡Eran un rechazo total! Mucho peor, Jovino se apartó de raíz de su estilo prudente y señaló que la propuesta que acababa de oír del presidente «era una burla».

—¡No entiendo nada! Jovino a la salida dijo que todo era una burla ¿Qué pasó? Ayer estaba en una actitud completamente distinta. No dijo una palabra en contra —le pregunté por teléfono a Carlos Figueroa.

—Yo tampoco entiendo nada. Sólo te puedo decir que me llamó Jovino en la mañana para decirme que la directiva de la UDI había rechazado de plano toda la propuesta del gobierno. Dijo que lo sentía mucho, pero que le había ido muy mal.

La oposición y, de alguna forma la derecha, estaban partidas en dos.

DETRÁS DEL PORTAZO

—Es como mezclar el aceite con el vinagre —dijo Pinochet ese mismo día en la mañana, haciendo un enfático gesto negativo con ambas manos.

No era de extrañarse que el general Pinochet rechazara cambios constitucionales. Lo raro fue que lo hiciera antes… siquiera de hablar con el presidente Frei.

En ese contexto, lo más importante era impedir que prevaleciera la «política del portazo» —así etiqueté la actitud de Jovino— y evitar que la discusión se cerrara antes de abrirse.

El cuadro interno también se movió. El inefable senador Prat declaró que la reacción de Novoa «era compartida por una amplía mayoría de parlamentarios de RN, entre los que me incluyo». A nivel de senadores, inmediatamente me apoyaron

Sergio Diez y Miguel Otero: nadie con más autoridad que Diez —profesor de Derecho Constitucional y miembro de la primitiva Comisión Ortúzar— para hablar de temas constitucionales y nadie mejor que Otero —distinguido profesor de Derecho Procesal— para encabezar el proyecto de derechos humanos. Además, por trayectoria, ambos debían ser más que «confiables» para el gobierno militar: lo habían apoyado siempre.

El mar estaba bravo, pero ¿qué tan distinta era la situación a la de las reformas de 1989? Poco y nada. En esa oportunidad también la reacción inicial había sido ferozmente contraria, pero luego las cosas habían tomado el camino de la racionalidad. A medida que pasara el tiempo, la fuerza de los argumentos se impondría. Y no creía que la UDI fuera a mantenerse contra viento y marea en su planteamiento. En primer lugar, porque el gran favorecido con una solución al tema de derechos humanos era el Ejército y, en segundo lugar, porque tenía pruebas de que la negativa a toda reforma —en algunos altos dirigentes de esa colectividad— respondía más a razonamientos tácticos que a cuestiones de principios.

¿Por qué pensaba así? Porque apenas unas semanas antes Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma nos habían abordado a Alberto Espina y a mí para hacernos un planteamiento formal.

—El análisis de la UDI es que toda la acción conjunta con RN no llevará a ninguna parte si no alcanzamos un completo entendimiento electoral. Queremos proponerles una fórmula.

La fórmula de la UDI consistía en aceptar la eliminación de los senadores designados y aumentar las circunscripciones senatoriales: una en la V, VI y VIII regiones y dos en la Región Metropolitana. En total, diez nuevas plazas de senadores. La UDI y RN debían asignarse entre sí los nuevos escaños «en exclusiva»: Dos para RN y tres para la UDI. En los antiguos, se mantendría el esquema de competencia.La fórmula, de puño y letra de Chadwick y Coloma, no era producto de ninguna improvisación.

—¿Qué opina Jovino y Longueira? Sin el acuerdo de ellos esto no vale nada —pregunté algo ingenuamente.

La respuesta de Coloma no se hizo esperar.

—La UDI no es como Renovación. Aquí nadie corre con colores propios. Longueira es coautor de la fórmula y Jovino está plenamente informado.

Alberto pidió un poco de tiempo, ya que había que procesar internamente la propuesta. Al observarla vimos que tenía una petición adicional: en la VI Región la vieja y la nueva circunscripción senatorial serían en exclusiva para la UDI. ¿Un detalle dentro del acuerdo global? Quizás, pero el diablo siempre está en los detalles.

—Lo de la VI no pasa. Ya hemos hecho demasiados sacrificios allí —opinaba Alberto Espina.

Doble razón para hablar con Jarpa: informarle de la oferta y ver cómo reaccionaba, ya que después de su retorno a la política desde la misma VI Región, le había pedido formalmente que fuera candidato a senador por allí.

Nos reunimos con Jarpa en la sede de Antonio Varas, en presencia de Alberto Cardemil y Roberto Palumbo. Espina le explicó en detalle la fórmula.

—Hay que estudiarla a fondo. Es muy importante la presentación que se haga y, desde ya, por ningún motivo podemos terminar abandonando la VI Región. ¡El partido no lo perdonaría!

Alberto Espina transmitió esa posición a Chadwick y Coloma.

—Hemos avanzado, pero hay problemas Es muy difícil irnos de toda la VI.

El asunto luego se enfrió, pero a mí no se me olvidó la propuesta. Sólo me daba un poco de risa cuando algunos UDI afirmaban que mantener los senadores designados era un asunto «absolutamente de principios».

Rebeldes, pero gentiles

El 22 de agosto de 1995, Frei expuso su propuesta por cadena nacional. A mí me había quedado dando vuelta la invocación a su padre: «Personalmente tocaré todas las puertas que sean necesarias para llegar a un entendimiento. Como dijo mi

padre: no se humilla quien pide por su patria. Dejemos a un lado toda pequeñez y sectarismo».

No tuvo mucho efecto. Al día siguiente, los ocho senadores institucionales y los tres de la UDI anunciaron el rechazo al proyecto de reforma a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Y al subsiguiente, todos los senadores de Renovación, más Antonio Horvath, Arturo Alessandri y Francisco Javier Errázuriz suscribieron una declaración advirtiendo «que dicha iniciativa no cuenta con nuestro respaldo».

—No tuve más remedio que sumarme. Algunos querían que la declaración matara también los otros dos proyectos. ¡No te imaginas el ambiente! ¡Te han declarado la guerra! Jarpa los ha estado llamando toda la mañana uno por uno. ¡A Siebert sólo le falta desfilar! Va a ser muy difícil resistir la presión que se nos viene encima —me explicó Sebastián Piñera desde Valparaíso.

Sergio Romero encabezó la conferencia de prensa para dar a conocer la declaración y, al hacer un curioso aporte al manual de buenas maneras de la política, reflejó el clima reinante en la sala de senadores.

—¿Esta declaración no le quita el piso a la directiva del partido y a Allamand?

—No le pedimos permiso, porque no existen órdenes de partido, pero, le avisamos.

Rebeldes pero gentiles. ¡Gran gesto de caballerosidad! ¡Qué deferencia! Apenas cuatro días antes la comisión política del partido había adoptado, por unanimidad, el acuerdo de estudiar las propuestas de Frei, pidiendo un informe a la comisión de estudios constitucionales. Antes de empezar su tramitación, una de las tres iniciativas había sido decapitada. Y no dejaba de ser irritante. ¡Yo mismo se lo había advertido al gobierno!

Para peor, esa semana tuve que viajar a Seúl, Corea, a una reunión de la Pacific Democratic Union en la que fui electo vicepresidente de la organización. No alcancé ni a ponerme contento. En mi pieza del hotel me esperaba un fax con un recorte de *La Segunda:* ese mismo día Jarpa había ido a visitar a Jovino Novoa y declarado que «una minoría de extrema izquierda está

tratando de imponerle al gobierno el desarme de la institucionalidad. Con la UDI vamos a impedir que estos proyectos se lleven adelante. Renovación Nacional no está de acuerdo con la iniciativa del gobierno, a pesar de la buena disposición mostrada por el presidente del partido».

A la vuelta planteé en la directiva que la actitud de los senadores era un abierto desafío a la institucionalidad interna y que la de Jarpa se pasaba de la raya. Al insinuar que debía intervenir el tribunal supremo nadie me apoyó.

—Sería apagar un incendio con bencina —comentaron.

¡Pido la palabra!

Los siguientes meses estuvieron marcados por la confusión y el conflicto interno. El pacto Unión por Chile dejó de funcionar. La sala de senadores se escindió en dos. Y la división alcanzó a los diputados: Alberto Cardemil y Luis Valentín Ferrada se las ingeniaron para que 17 diputados firmaran una declaración muy contraria a la iniciativa. Sergio Diez, Miguel Otero y Sebastián Piñera formularon públicamente propuestas para modificar, en forma distinta a la planteada por el gobierno, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad.

El mayor problema era la dificultad para ordenar el debate. En todo caso, ese problema al menos tenía solución relativa: la última reforma estatutaria interna —a instancias del entonces vicepresidente Prat— estableció que cualquier reforma constitucional debía ser analizada por la comisión política en dos sesiones especialmente convocadas al efecto, votándose al final de la segunda.

A esa fecha, los partidarios de las reformas habíamos advertido que, para algunos de los miembros de partido; parte del problema era aparecer apoyando una iniciativa del gobierno. Cardemil insistía en que el partido debía tener «su propia propuesta de reformas». Pues bien, tales sesiones servirían no sólo para fijar un planteamiento frente al plan Frei I, sino para impulsar aquellas reformas que RN consideraba importantes.

En definitiva, el informe de nuestra comisón de estudios acogió la eliminación de los designados; aceptó algunos y rechazó otros cambios referidos al Consejo de Seguridad Nacional y propuso un sistema de nombramientos del Tribunal Constitucional distinto del vigente, pero también diferente al del Ejecutivo. Síntesis apretada: más enredo.

La primera sesión de la comisión política sirvió para que quedara claro que había un foso conceptual y político entre los partidarios y contrarios a las reformas. También fue evidente que en esta instancia había una clara mayoría pro reforma y que las posiciones eran difícilmente conciliables. Como señaló el senador Prat, el planteamiento antirreformista era «irreductible».

—¿Cuál va a ser el procedimiento para resolver? —preguntó Bulnes.

—La directiva, recogiendo los términos del debate, va a formular una propuesta concreta, materia por materia, la que se someterá a votación en la segunda sesión prevista por el reglamento.

Era la única manera. Entonces intervino Jarpa, para plantear un «asunto de procedimiento».

—Señor presidente, la fundamental importancia de las materias tratadas para el futuro del país hace indispensable que las resoluciones se adopten en el consejo general. Propongo formalmente que el actual debate sea elevado al organismo máximo del partido.

¡Era una manera olímpica de restarle facultades a la comisión política! Algunos defendieron con energía sus fueros y otros argumentaron que el consejo no era adecuado para debatir temas tan complejos. Los de más allá plantearon que era una argucia dilatoria, a los de más acá no les gustaba la fórmula y a los del costado no les parecía mala la idea.

—La directiva no tiene inconveniente en acoger la propuesta del ex senador Jarpa y que el consejo general tenga la última palabra —resolví sobre la marcha. Y luego levanté la sesión.

—Te equivocaste. Vas a perder lejos. Ahora te vas a convencer de que las bases no te apoyan —me dijo amenazante, pero muy contento el senador Bruno Siebert.

—Compadre, puso toda la carne en la parrilla —me comentó Alberto Espina.

—No hay otra salida. Si perdemos nos vamos para la casa.

También era mejor que las definiciones se lograran luego de un debate entre todos los dirigentes. De la frase de Jarpa, se leía claro que objetarían los resultados a que arribara la comisión política aduciendo —ya lo decían algunos diarios— que era muy favorable a mis planteamientos, pero jamás podrían hacer lo mismo con la resolución de un consejo cuya convocatoria ellos mismos habían solicitado.

El debate interno vitalizaría al partido y el consejo sería un evento político de importancia nacional. ¿Qué mejor oportunidad para mostrar al país el carácter democrático del partido? Así debían los partidos adoptar sus resoluciones importantes. Luego de un debate a fondo y siempre de cara al país.

De Frei I a Frei II

Por esas fechas el gobierno —a partir de una idea surgida en conversaciones con los senadores Otero, Diez y Piñera— había reformulado su propuesta original e incluido en la nueva la mayoría de los puntos de vista de Renovación Nacional. Había nacido Frei II.

En lo medular, acogía la propuesta sobre mayor fiscalización de la Cámara y, en materia de senadores designados, terminaba con la senaturía vitalicia de los ex presidentes que Frei I mantenía. En el Tribunal Constitucional, abandonaba su fórmula original y acogía una idea de Miguel Otero: la Corte Suprema prepararía un quina, el presidente de la República escogería un nombre y el Senado lo debería ratificar con un alto quórum. La lógica era establecer exigentes filtros y la participación de los tres poderes del Estado. En cuanto al Consejo de Seguridad; acogía una idea surgida de los senadores Diez, Otero y Piñera: el Consejo, en vez de votar, sólo dejaría constancia de la opinión de sus miembros, resolviendo así el punto más álgido de la controversia acerca de sus facultades y funcionamiento.

El conflicto pendiente, en relación al Consejo de Seguridad, era que éste podía cuestionar una resolución presidencial, del Congreso Nacional o del Tribunal Constitucional, exigir una votación y adoptar un acuerdo que así lo dejase establecido. ¿En qué democracia es imaginable una situación así? El origen de esa disposición había sido dejar un espacio institucional a las Fuerzas Armadas, para que éstas dejaran constancia de sus puntos de vista en momentos de grave conflicto político, pero no establecer una tutela sobre el poder civil y sus máximos organismos. Si en vez de votar, los representantes de las Fuerzas Armadas podían dejar constancia de sus opiniones se salvaba el problema. ¡Hasta el Instituto Libertad y Desarrollo —presidido por Cáceres y dirigido por Cristián Larroulet— consideró la fórmula positiva!

Las propuestas eran —cómo no iba a ser así, proviniendo de nosotros mismos— más que aceptables para RN y el consejo general sólo debería hacerle ajustes menores.

Hacia noviembre, eran pocos los que podían seguir el detalle técnico y minucioso de las fórmulas y contrafórmulas. El conflicto se había centrado en un aspecto que, según Jovino Novoa, era «de definiciones políticas de fondo, ya que toda alianza está constituida sobre dos pilares: un sistema económico y un orden político institucional, y sobre éste ultimo, la directiva de RN abandona nuestras ideas en un aspecto fundamental».

Para mí también era un asunto de fondo: la derecha seguía aferrada a un orden político de democracia restringida o daba un paso al frente para reasumir el ideario de la democracia liberal. Ése y no otro era el problema. No había escapatoria.Tampoco podía soslayarse en vaguedades como que lo importante era «estar unidos». ¿Unidos para qué?, ¿para defender la democracia prestigiada en todas las latitudes o una forma deformada de la misma?

Si la propuesta constitucional enfrentaba dificultades hacia la derecha, con la propuesta sobre derechos humanos ocurría lo mismo hacia la izquierda. Miguel Otero, Carlos Figueroa y la acuciosa Soledad Alvear trabajaron durante semanas una fórmula, bautizada Otero-Figueroa, que establecía que los procesos serían llevados por jueces del crimen con dedicación exclusiva,

se mantenía el que no habría procesamientos ni arraigos, las citaciones se harían protegiendo las identidades y todas las diligencias para entregar información sobre los detenidos desaparecidos se registraría en cuadernos secretos que se destruirían al sobreseerse las causas. Pese a que era menos buena que la propuesta original de Frei, seguía siendo un avance.

A fin de dotarla de solemnidad fue suscrita en La Moneda ante el presidente de la República el sábado 4 de noviembre.

Sin embargo, los diputados socialistas la rechazaron de inmediato y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos anunció una acusación contra el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por «violar el derecho a la justicia».

—La fórmula Otero-Figueroa está debajo del mínimo ético. La idea de no vincular el sobreseimiento definitivo a la verdad es tan punto final como ponerle plazo a los procesos, ya que permite cerrarlos sin encontrar a los desaparecidos —dijo la influyente abogada y dirigente socialista Pamela Pereira.

Fue la lápida desde la izquierda. Alejandro Foxley, presidente del PDC, quien se había jugado por sacar adelante los proyectos, perdió la paciencia. Declaró que el gobierno no tenía por qué «cogobernar» con el Partido Socialista. Y a sus dirigentes les dirigió una frase que fue recibida como un grave insulto:

—No se puede estar contando muertos indefinidamente.

Choque de trenes

El consejo general de RN se fijó para el 11 y 12 de noviembre en Temuco.

La secretaría general imprimió afiches con el lema «Todos Juntos al Futuro» que se pegaron en las sedes de RN. Un lema tan optimista como alejado de la realidad. La prensa lo bautizó con más certeza: «Choque de trenes».

Nunca Renovación Nacional se había movilizado internamente con tanta intensidad. En todas las regiones se efectuaron

debates abiertos al público, en los que el plato de fondo fue el duelo entre los vicepresidentes Alberto Espina y Alberto Cardemil.

Yo dirigí una carta a los miembros del consejo. No fui el único. Lo mismo hicieron Sergio Romero, Francisco Prat, Gustavo Alessandri, Bruno Siebert, Sergio Diez y varios más. Jarpa se instaló en la oficina del segundo piso de la sede de Antonio Varas a llamar —uno por uno— a los dirigentes regionales.

En los días anteriores al consejo surgió un problema: ¿qué pasaría si los parlamentarios no acataban las resoluciones del consejo? Me pareció impensable, a lo más una bravata: ellos habían solicitado la convocatoria al consejo, habían hecho una intensa campaña previa con los consejeros generales, habían viajado por todo el país y se aprestaban a participar en un encuentro que, además, —así lo afirmaban a los cuatro vientos— ganarían sin problemas. ¿Cómo iban a desconocer el resultado? Por lo demás, Alberto Cardemil, que actuaba como el vocero más «oficial» de las fuerzas contrarias a la reforma, había zanjado el tema:

—Los dirigentes de un partido deben someterse siempre a las orientaciones de las instancias superiores. Si esas orientaciones no coinciden con su visión de las cosas, tienen que apartarse del partido con discreción.

Los defensores más acérrimos del régimen militar no escatimaron esfuerzos para lograr crear un clima adverso hacia nuestra iniciativa en el mundo de la derecha. El mejor ejemplo fue un artículo de Alfonso Márquez de la Plata, ex ministro de Pinochet y que ni siquiera era miembro de RN, publicado estratégica y destacadamente por *El Mercurio* el mismo domingo en que el consejo estaba reunido. Se titulaba «RN en una encrucijada histórica» y en él se leía que «pocas veces en la historia un partido de oposición tiene en sus manos el destino de una nación. Los chilenos hemos concentrado nuestra atención en los acontecimientos de Temuco. Las decisiones que allí se tomen tienen preocupados a todos quienes se han identificado con el ideal libertario, como asimismo a los empresarios e inversionistas. Las Fuerzas Armadas y Carabineros observan en silencio,

pero de alguna manera han expresado su desconsuelo frente a la posibilidad de que la democracia, por ellos impulsada y cristalizada en la Constitución Política, sea destruida».

Ese era el clima que algunos querían crear. Y tenían medios de sobra para hacerlo.

Temuco, capital política

El consejo no defraudó las expectativas de nadie y Temuco fue, por un par de días, la «capital política» del país.

Fue una maratón de discursos. En los dos días hubo más de 30: doce a favor de las reformas, doce en contra y el resto neutros.

Varios consejeros plantearon de entrada definir el carácter que tendría para los parlamentarios la resolución que se adoptara.

—Queremos que nos digan si van a respetar o no el acuerdo del consejo —preguntaron Miguel Bauzá, Catalina Parot y varios dirigentes más.

Al final del primer día, Roberto Palumbo preparó un proyecto de resolución revisado a la letra por Alberto Espina y Alberto Cardemil:

«El consejo general declara que, no obstante la libertad de los parlamentarios para realizar labores legislativas y reconociendo, desde luego, la improcedencia de las órdenes de partido, los acuerdos adoptados por el consejo general constituyen la orientación general que inspira la acción del partido y, por ende, son un elemento fundamental que los parlamentarios no pueden menos que acatar voluntariamente al momento de concretar sus decisiones políticas. De otro modo, la democracia interna y la conducción del partido se hacen virtualmente imposibles».

Cuando se le dio lectura, ante un expectante silencio, estaba preparado para que empezaran las objeciones. Había preparado una andanada de argumentos para salir al frente.

¡No hubo ni una sola! El acuerdo fue adoptado unánimemente.

Respiré tranquilo. Ningún tren se descarrilaría.

En definitiva, durante dos días, el debate enfrentó dos puntos

de vista acerca de la arquitectura democrática permanente para el país. Unos argumentaban acerca de la conveniencia de mantener instituciones autoritarias, atribuciones inéditas para las Fuerzas Armadas y restricciones a la soberanía popular. Otros postulaban depurar la institucionalidad de esos elementos y hacerla plenamente compatible con los principios de la democracia liberal. Allí se entraba de lleno al debate que concentraba más la atención: los senadores designados.

Un segundo antes de cerrar el debate se sentó a mi lado Alberto Cardemil.

—Traigo una proposición de nuestro sector. Si acordamos rechazar las reformas del Consejo de Seguridad y del Tribunal Constitucional, damos la unanimidad para eliminar a los designados.

—Acepta. Es una buena solución y garantiza la unidad del partido —dijo de inmediato Roberto Palumbo, que estaba sentado al otro lado.

—¿Hablaste con Espina? —le dije.

—Sí, preguntó quién estaba detrás. Yo le contesté que Jarpa y el resto de los senadores, salvo Prat y algún otro.

—No. Ahora ya es tarde. Es hora de votar.

—¡Tenías un acuerdo en la mano! —me reprochó Roberto tan pronto se alejó Cardemil.

—No tenía nada. ¿Qué seriedad puede tener un acuerdo así? —repliqué—. ¡No se aguanta un segundo. ¿Cómo van a explicar el apoyo a eliminar a los designados los mismos que han quebrado lanzas por mantenerlos? ¡Éste es un asunto de principios y no un regateo de bazar!

Había gran incertidumbre acerca del resultado. Jarpa en la víspera había vuelto a declarar que «el consejo rechazará las reformas» y otro tanto habían señalado varios parlamentarios.

¡Se equivocaron!

Las propuestas más polémicas se aprobaron con porcentajes superiores al 60%.

—Ahora viene lo más difícil —me dijo un dirigente al despedirse.

—No va a ser fácil acostumbrarse a votar —añadió otro—.

Vinimos cinco de Coquimbo. Tres estábamos a favor y dos en contra.

—Te felicito —me dijo Francisco Prat a la salida, dándome la mano, mientras nos filmaba el Canal 13.

Ganar para perder

Habíamos ganado, pero era como haber perdido.

Al día siguiente, la UDI desahució «definitivamente» su alianza con RN. Los ocho senadores designados más los tres UDI pusieron el grito en el cielo. *El Mercurio,* desde el primer día, sembró dudas sobre la obligación —al menos moral— de acatar lo resuelto, aludiendo editorialmente al «carácter necesariamente ambiguo sobre el efecto vinculante para los legisladores de las resoluciones adoptadas» y haciendo ver que «resta ahora observar la interpretación que los legisladores de RN darán al acatamiento voluntario acordado por su consejo general».

Y partió un tenaz forcejeo: la directiva demandando el cumplimiento de la palabra; varios senadores escabulléndose con diversas argucias.

Tres semanas después de Temuco recibimos un duro golpe. El almirante Merino —en su única actuación pública después de abandonar la Junta—, Arturo Alessandri y Hernán Büchi —los dos últimos candidatos presidenciales de la derecha—, Jovino Novoa, Sergio Fernández, Carlos Cáceres y el propio Jarpa suscribieron una declaración, publicada en costosas inserciones en los diarios, denominada «El Valor de la Estabilidad». Calificaban las reformas como «el más grave y audaz paso de todos los que se han intentado en los últimos años, ya que certeramente apuntan a destruir los equilibrios establecidos en la Constitución de 1980». Acto seguido, venía una cerrada defensa de los senadores institucionales, del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de Seguridad. La declaración, detrás de la cual me pareció advertir la fría inteligencia táctica de Jovino

Novoa, terminaba llamando a «alentar y apoyar a los parlamentarios y a todos los que han asumido la defensa de la estabilidad democrática» y criticando a quienes «abandonan las convicciones propias para creer que se puede ganar con la de los adversarios».

La declaración era de una enorme mala fe, ya que nos imputaba propósitos que no teníamos y deformaba las reformas que impulsábamos. En cualquier caso, embarcar al almirante Merino fue un gran acierto: era respetado en el mundo de la derecha, no era un «político» y, después de Pinochet, era la representación viva del gobierno militar. Para mí, lo más indignante era la inclusión de algunos de los firmantes, particularmente de Büchi, Cáceres y, por supuesto, Jarpa.

Büchi había apoyado claramente la eliminación de los designados en su campaña presidencial. Cáceres había sostenido en 1989 que no eran «una institución esencial» y Jarpa, para qué hablar. ¡Sobraban los testimonios que revelaban que había favorecido muchos de los cambios que hoy impugnaba! ¡Y venía saliendo de un consejo general donde había hecho valer todos sus argumentos! ¿Cómo podía hacer algo así contra una resolución adoptada democráticamente por su propio partido? Además, la actitud de Cáceres me pareció muy incomprensible. Junto a Miguel Otero y Sergio Diez habíamos tenido la deferencia de visitarlo y analizamos largamente las reformas con él; con Arturo Marín, su asesor directo en 1989, y Luis Larraín, subdirector de Libertad y Desarrollo. Incluso Arturo Marín me envió una carta, luego de la reunión, en que se consignaban sus apreciaciones, pero que en nada se aproximaban a la imputación de aviesas intenciones de la declaración. Renovación y yo mismo reaccionamos con extrema dureza y me gané una segunda —también ácida y desagradable— polémica con Carlos Cáceres.

Más adelante, otro golpe provino de una publicación dominical de (¡quién más!), *El Mercurio*, donde en primera página del cuerpo de Reportajes aparecían, en una foto sacada ex profeso, los siete senadores contrarios a la reforma. «Los senadores rebeldes» se titulaba. En ella se dejaba constancia de que la directiva no había logrado persuadirlos y se consignaba que con

su postura «además de sellarse el destino de las reformas constitucionales, RN puede entrar en una compleja crisis».

La publicación no fue en vano, porque hasta ese momento, varios senadores vacilaban sobre cómo votar y les resultaba muy incómodo desconocer el acuerdo del consejo. No estoy sugiriendo ni siquiera que fue un elemento decisivo, pero «galvanizó» una actitud que antes no cobraba cuerpo. Sin tal foto, por cierto, nada habría cambiado, pero una vez publicada todos mis esfuerzos se estrellaron contra una muralla.

La política tiene estos códigos. A veces una declaración, una entrevista, un discurso o un hecho cristaliza comportamientos. Era como para acordarse de la famosa sentencia de Alfonso Guerra, mano derecha de Felipe González y cancerbero del PSOE: «El que se mueve no sale en la foto». Acá los de la foto no se movieron más.

La UDI tampoco se dejó estar. Pablo Longueira dijo que estaban dispuestos a apoyar en las próximas elecciones a los parlamentarios que rechazaran las reformas y a «levantar a sus mejores hombres para hacer frente a aquéllos que no cumplan esa condición».

Mano de plasticina

Mi situación era patética. Un diario publicó un largo reportaje con una reseña de toda mi vida política cuyo título era elocuente: «El ganador acorralado».

Internamente la posición de la directiva se fortalecía, mientras arreciaba la campaña en contra desde los centros neurálgicos de la derecha y, por cierto, desde el Ejército y los círculos cercanos a Pinochet.

Más del 70% de los consejeros generales llamaron a los senadores rebeldes a acatar las resoluciones del consejo general, ya que «es evidente que cualquier organización de personas cuya institucionalidad es sobrepasada y en que no son respetados los compromisos contraídos, está condenada en una primera etapa

al descrédito y al conflicto permanente y, más adelante, a la inorganicidad y desmembramiento». La unanimidad de los diputados declaró que «es indispensable respetar las resoluciones del consejo general, considerando especialmente que ellas no son fruto de la imposición sino de la participación, reflexión y discusión de sus dirigentes».

Sin embargo, todos esos pronunciamientos eran interpretados afuera como presión indebida. El propósito de obligarlos a cumplir el compromiso que ellos mismos habían contraído era considerado, en varios artículos, como una práctica «estalinista» y casi a diario se publicaban opiniones de prestigiadas figuras de la derecha que reivindicaban la «actuación en conciencia de los legisladores», elogiándolos por oponerse a quienes querían implantar una «dictadura partidista».

No obstante, ante la opinión pública las cosas estaban mejor. En diciembre el CEP publicó una encuesta: 2/3 del país eran partidarios de introducir modificaciones importantes a la Constitución. En el mundo de la derecha, donde supuestamente nuestras posiciones eran muy minoritarias, los datos fueron una sorpresa para muchos: el 60% respaldaba las reformas. En RN nos pareció un resultado espectacular. Bastaba recordar cómo se habían jugado las figuras más prominentes del régimen militar en contra —partiendo por Pinochet— para apreciar el buen resultado obtenido.

Tal resultado tampoco influyó en nada.

Mis últimos recursos fueron una presentación al tribunal supremo y una carta abierta a los senadores abiertamente rebeldes. La consulta al tribunal solicitaba que el organismo resolviera la manera en que los acuerdos del consejo general debían cumplirse.

A fines de enero de 1996, el tribunal supremo emitió su dictamen señalando:

«Que los parlamentarios gozan del privilegio legal —una calificada excepción al deber de lealtad que obliga a todos los afiliados a un partido político— para votar en el Congreso contra las orientaciones y línea política de éste.

«Que el referido privilegio no obsta a que los parlamentarios,

asuman por decisión propia y voluntaria el compromiso de respetar los acuerdos que el partido, a través de sus organismos, adopte.

«Que es público y notorio que los parlamentarios concurrieron al consejo general de Temuco, intervinieron activamente en sus deliberaciones y, antes de que se sometieran a votación las proposiciones en debate, adoptaron el compromiso de acatar voluntariamente su resultado.

«Que es también incuestionable que no pueden pretender *a posteriori* que las materias resueltas eran de aquellas en las cuales su conciencia individual los obligaría a actuar en un sentido determinado, porque en tal caso, jamás deberían haberlas sometido a la resolución del consejo.

«Que, aún a cubierto de sanciones legales y estatutarias, es evidente que los parlamentarios que se negaren a cumplir con tales acuerdos infringen gravemente el compromiso moral que pesa sobre ellos, desde el instante que asumieron el compromiso de acatar los acuerdos que el consejo adoptara; que tal eventual infracción es contraria a la buena fe, a la recta conciencia, constituye una falta a la convivencia interna y será juzgada del modo más severo por el resto del partido, la opinión pública imparcial y, a la postre, la historia misma».

Contundente y concluyente.

Los senadores rebeldes consideraron el dictamen un «agravio» y declararon que no «reconocían a ninguna autoridad u órgano partidario la facultad para calificar nuestra conducta moral o formularnos reproches éticos». La comisión política advirtió entonces, que «quienes se resisten a cumplir su palabra, se rehusan injustificadamente a aceptar las orientaciones fijadas por el consejo general y desconocen toda autoridad al tribunal supremo debieran retirarse voluntariamente de Renovación Nacional».

Aún después de ello, seguímos explorando cuanta posibilidad era imaginable: respaldamos una fórmula ideada por Luis Valentín Ferrada que, a pesar de apartarse de los acuerdos de Temuco, flexibilizaba la posición de los «duros»; solicitamos que se aprobara sin compromiso ulterior la idea de legislar, permitiendo así

que el propio Senado reformulara los términos de los proyectos; aceptamos circunscribir la reforma al tema de los designados (lo mismo que ellos habían propuesto antes de votar en Temuco) y llegamos, incluso; a aceptar convocar un nuevo consejo si esta vez todos se comprometían a respetar su resultado.

Nada dio resultado.

Para peor, en aquellos que respaldaban las reformas —dentro y fuera del partido— tales concesiones generaron una fuerte crítica.

—Allamand tiene mano de plasticina. Un presidente tiene que ser capaz de que se cumplan los acuerdos.

En abril de 1996, a través de una carta abierta a los senadores rebeldes, quemé los últimos cartuchos argumentales explicando que las mismas instituciones que hoy defendían, a la larga se volverían en nuestra contra:

—Aquéllos que a brazo partido han defendido la rigidez absoluta de la Constitución deberán observar impotentes cómo la Concertación, disponiendo de mayorías que nosotros mismos les habremos facilitado, impondrá sin contrapeso su voluntad.

Los senadores rebeldes ni siquiera se molestaron en contestar.

Ahí quedó la profecía.

Causa sin clientes

A todo esto, el proyecto Otero-Figueroa, aprobado por nuestra comisión política y por el consejo general, también hacía agua a los dos costados. A un lado, los socialistas no variaron un ápice su oposición frontal y empezaron las dudas al interior de la propia Democracia Cristiana. Las agrupaciones de derechos humanos estaban fuera de sí. Y al otro lado, a las Fuerzas Armadas... el proyecto tampoco les gustaba.

Nunca entendí las razones de ese rechazo. Había asuntos de competencia entre la justicia militar y civil que pueden haber influido, o bien; no querer aceptar que jueces civiles pudieran inspeccionar terrenos militares, pero eran razones de menor envergadura. Después salió una interpretación muy rebuscada que

sostenía que establecer requisitos para aplicar la amnistía era muy negativo... sin hacerse cargo de que en los casos de detenidos desaparecidos la amnistía no se aplicaba. Cada vez que yo hacía ver que la fórmula tenía un valor político y de enorme legitimidad al establecer que en las investigaciones nadie podría nunca someterse a proceso, la respuesta era que ello ya «estaba asegurado con la amnistía de 1978».

La Corte Suprema pareció quitarle importancia al proyecto Otero-Figueroa cuando aparentemente —en un nuevo cambio de rumbo— reinició la aplicación de la amnistía en el sentido favorable a la no investigación de las circunstancias del delito. *El Mercurio,* la UDI y el Ejército, al unísono, hicieron ver que con ello toda norma era innecesaria. ¡No había nada que modificar!

—Esa no es ninguna garantía. La Corte Suprema puede cambiar veinte veces de opinión —insistía Miguel Otero.

El día 11 de enero de 1996 estaban citados al Senado los auditores militares de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y, acto seguido, las más destacadas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Miguel Otero estaba confiado en que los argumentos que personalmente había expuesto a los auditores, finalmente los pondría de su lado. Su rostro progresivamente demudado fue el reflejo de la sorpresa que sentía cuando los auditores —con el arrogante fiscal Torres Silva haciendo de cabeza— fueron rechazando uno a uno los artículos del proyecto Otero-Figueroa. Y otro tanto ocurrió, una hora y media después, con las organizaciones de derechos humanos.

¡A ninguno les gustaba! ¡Unos y otros preferían dejar las cosas tal cual!

Al término de la sesión, no pude evitar dirigirme al fiscal Torres y los otros auditores.

—¡Por Dios que les va a costar caro! Esta oportunidad no se va a repetir.

No les hizo ni mella.

Me respondió el fiscal Torres, displicente y ufano:

—El Ejército sabe mejor que nadie que es lo que le conviene.

Lo concreto es que a las Fuerzas Armadas todo lo que no fuera un punto final inmediato les parecía insuficiente. Y las organizaciones de derechos humanos rechazaban que no hubiera posibilidad de sancionar a los culpables y la sola idea de que pudiera configurarse una causal —la que fuera— de sobreseimiento definitivo.

Cuando llegamos a almorzar, Sergio Romero —también en contra de todo, como el resto de los «duros»— nos recibió con una sonrisa de oreja a oreja.

—Por Dios que eres porfiado Miguel. Te lo dije mil veces: Eres un abogado que no tiene cliente.

El proyecto Otero-Figueroa había sido políticamente fusilado.

Polvo entre los dientes

Cuando, a mediados de abril de 1996, finalmente se votaron las reformas en el Senado, no hubo ni tensión ni drama ni expectación ni incertidumbre. El desenlace era conocido de antemano.

Las reformas del Consejo Nacional de Seguridad y el Tribunal Constitucional necesitaban 31 votos. Las otras sólo 28.

Sólo tuvimos 25. Faltaron tres. Votaron en contra todos los institucionales, los tres UDI y los tres independientes: Errázuriz, Horvath y Alessandri. Entre los nuestros a favor lo hicieron Sergio Diez, Sebastián Piñera, Miguel Otero e Ignacio Pérez. En contra se pronunciaron Julio Lagos, Alberto Cooper, Sergio Romero, Mario Ríos, Francisco Prat, Enrique Larre y Bruno Siebert. Cuatro a favor, siete en contra.

Una paliza. Y para peor —desde ese mismo día para la prensa, los analistas y el mundo político— el gran derrotado no había sido ni el gobierno ni Frei, sino yo. Sin embargo, mi mayor angustia era saber que tal votación había socavado irremediablemente la ética colectiva esencial para la vida de un partido.

Al volver de Valparaíso sentía la boca amarga. Nunca había pensado en lo acertado que es aquello de morder el polvo de la derrota.

Capítulo XIX

El paso de la quinta columna

—¿Vas a imitar a Felipe? —me preguntó Carlos Zepeda, leyéndome el pensamiento mientras se ocupaba del asado.

El primer fin de semana después de una derrota grande es siempre el peor. ¡Sobra el tiempo para repasar todo una y otra vez!

La pregunta arrancaba del libro *El galope muerto,* publicado en 1987 por el periodista argentino Jacobo Timmerman. Allí se hacía un paralelo bastante desproporcionado:

«Aparte de la nacionalidad, dos cosas separan a Felipe González de Andrés Allamand. El chileno es más bajo y milita en la derecha. El chileno también tiene un rostro joven, fresco y expresivo; la sonrisa acogedora, la risa explosiva y las respuestas rápidas. Y está convencido de que la única inteligencia política que puede abrir las puertas para el ingreso de Chile a la democracia es la derecha».

Cuando el PSOE no aceptó la tesis de Felipe de desprenderse del marxismo, éste presentó su renuncia a la secretaría general. ¿Debía hacer lo mismo? La referencia venía al caso porque los personajes de la política española habían estado presentes en la larga discusión que acababa de terminar. Para algunos, yo aspiraba a «aznarizar» a la derecha chilena, y ello generaba insólitos comentarios de mis adversarios: afirmaban que Aznar era un «oportunista que se volcaba al centro», que renegaba del pasado franquista y que «en vez de enfrentar a Felipe González, se mimetizaba con él».

Los que se agarraban la cabeza a dos manos eran los acompañantes de José María Aznar cada vez que el futuro presidente del gobierno español visitaba Chile.

—¡Joder! El único lugar donde la derecha nos fastidia es en Chile ¡No entienden ni la política ni conocen el mundo!

Carlos Zepeda no se equivocaba. Aunque había declarado lo contrario, era justo lo que estaba rumiando: renunciar.

—Yo creo que debo irme. No se me ocurre cómo puedo seguir dirigiendo el partido —dije al final de la comida el martes siguiente al del rechazo en el Senado.

El comedor de los diputados de RN se había ido vaciando, y al final sólo quedaba el grupo cercano. La reacción fue espontánea y unánime.

—¡Eso es lo único que nos faltaba! Más de una vez te dijimos que las cosas se veían mal. Y ahora te mandas cambiar —dijo Juan E. Taladriz.

—Es el mundo al revés. ¡Ellos fueron los desleales, que se vayan ellos! —saltó René Manuel García.

—Consigamos alguien más neutral. Quizás es lo que se necesita cuando hay un partido tan dividido —dije yo.

—Con eso se termina de reventar Renovación —agregó Arturo Longton.

—Mira cuál es el mensaje. Al que no respeta los estatutos ni las autoridades ni el consejo, lo premian. O le ofrecen la presidencia o le preguntan a quién ponemos como árbitro —señaló Teodoro Ribera.

—Para ti puede ser buena salida, pero para el partido y los demás es harto mala —reflexionó Raúl Urrutia.

—No puedes irte —remachó José A. Galilea.

En ese momento tales argumentos —que mezclaban elementos humanos que distorsionaban la racionalidad política —me parecieron fuertes.

Entonces, decidí seguir.

A fines de abril, un consejo general extraordinario puso fin formal al largo episodio de las reformas. En él se confirmó «la validez y la vigencia de los acuerdos de Temuco destinados a

perfeccionar el actual orden constitucional, principalmente en las siguientes materias: fortalecer las facultades de fiscalización de la Cámara, cambiar la forma de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional; modificar el sistema de funcionamiento del Consejo de Seguridad y establecer que el Senado será íntegramente elegido por la ciudadanía, eliminando a los senadores designados al término de sus actuales mandatos.

En verdad, nada nuevo. Sólo que fue aprobado con casi el 90%. El único avance importante fue la definición de las relaciones que debían existir entre el consejo —vale decir, el partido— y los parlamentarios. Se estableció que en el futuro todo candidato debería expresamente adherir al programa del partido y, en consecuencia, con ese elemento a la vista el consejo evaluaría si estaba dispuesto a renovar su confianza en un parlamentario que se apartara de sus términos. Estaba claro: el consejo aprobaba el programa y las candidaturas. Las segundas, sólo prosperarían en favor de aquéllos que coincidieran con el primero.

Hubo algunos corcoveos y alguien intentó argumentar, sin resultado, que la norma contradecía el espíritu de la Constitución. Al revés, se apoyaba en el ordenamiento jurídico que los senadores rebeldes tanto habían invocado para negarse a cumplir los acuerdos del consejo.

—Jurídicamente es impecable, pero políticamente será inútil. La mayoría de los que rechazaron las reformas ni siquiera aspiran a ser candidatos y, si mi ojo no me engaña, a la primera de cambio, van a renunciar al partido —me dijo Sergio Diez.

El ojo no falló. Dos años más tarde Prat, Siebert y Cooper, tres de los siete senadores rebeldes, habían renunciado a Renovación Nacional.

La quinta columna ya había cumplido su misión.

Alud de críticas

¿Cuáles habían sido los errores?

La crítica que centraba mis errores en una supuesta actuación

«individualista» me parecía fuera de lugar. Era cierto que desde el principio me mostré partidario de las reformas y posiblemente no debí apoyar tan explícitamente las propuestas de Frei. Quizás, pero no es menos cierto que seguí todos los escalones del partido para adoptar las decisiones: la directiva, la comisión política y el consejo general. No di un solo paso sin el apoyo de las respectivas instancias partidarias y no creo que a un presidente de partido se le pueda exigir más.

El argumento de que las reformas no eran «oportunas» siempre me pareció una estupidez. El momento era inmejorable al haber un tácito «amarre» con los temas de derechos humanos. Además, a esas alturas, seguir diferiéndolas era sinónimo de «fosilizar» el sistema hasta el año 2005... a lo menos. Obviamente, la eliminación de los designados debía necesariamente ocurrir antes del segundo bloque de nombramientos previsto para 1997. ¡Si la idea de zanjar el tema en un Consejo venía de 1994! Cada vez que alguien me decía que no era oportuno yo preguntaba una sola cosa. ¿Entonces, cuándo? No había respuesta.

Creo que también a la larga perjudicó haber encarado el tema con una argumentación en cascada. A mí me nacía espontáneamente apoyar las reformas únicamente por los principios: las instituciones cuya reforma proponíamos no se avenían con la democracia liberal. Sin embargo, tal argumento era el que mayor conflicto interno generaba y muchos me aconsejaban no usarlo. Debido a ello, se caía en un asunto pragmático: las instituciones cuestionadas no eran tan malas, sino que lo sería su utilización hacia delante.

Cuando me preguntaban por los nuevos senadores designados yo contestaba casi como autómata: «También hay que eliminar a los designados por lógica política. A William Thayer lo reemplazará Edgardo Boeninger. A Olga Feliú la sucederá Enrique Silva Cimma. A Sergio Fernández lo va a reemplazar Enrique Correa. ¿Alguien cree que Stange va a reemplazar a Huerta? La senaturía de Pinochet es un espejismo. Llegará al Senado con más de 80 años, pero dos años después lo hará Frei con 58».

En simple, los senadores designados han servido, pero cuando los designen ellos, se nos volverán en contra. Era cierto, pero debilitaba la razón de los principios. Por último, el argumento electoral —jamás ganaríamos defendiendo instituciones autoritarias— era una vuelta de tuerca distinta a las dos anteriores.

Intuyo que los argumentos en vez de sumarse se fueron restando, como cuando en un juicio una petición subsidiaria termina erosionando la demanda principal.

Tampoco evalué bien el ambiente hostil en el mundo de la derecha. Trabajé con una premisa equivocada: cuando quedara claro que no estábamos proponiendo nada, absolutamente nada diferente al plantamiento de RN y, en general, de la derecha en 1989, se produciría un vuelco a favor. Sin embargo, no fue así. ¿En qué minuto se produjo la vuelta atrás? Sigo sin entenderlo. Cualquiera habría pensado que de 1989 a 1996 las posiciones evolucionarían desde el autoritarismo, pero había ocurrido lo inverso. Y el misterio mayor: ¿cuándo y por qué cambió Jarpa? Un enigma insondable.

Algunos senadores insistían en que después de las reformas de julio de 1989 no había quedado nada pendiente. Una noche en Valparaíso, en un ambiente extrañamente relajado, pude abordar el tema con los senadores más adversos. Andaba con las citas y fui sacando papel tras papel:

—Sobre la supresión de los senadores designados y la integración del Tribunal Constitucional, materias no incluidas en la reforma de 1989, hubo coincidencias entre Renovación Nacional y la oposición democrática (hoy Concertación), quedando pendientes tanto los términos precisos de un eventual proyecto de reforma, como la oportunidad en que podría ser impulsado. (Programa de Renovación Nacional, noviembre 1989).

—El tema de los senadores institucionales quedó zanjado con el aumento de los senadores elegidos y con la idea de que los senadores designados se mantengan sólo por un primer período. (Jarpa, diciembre de 1989).

—Dejar sin efecto, estando ya consolidado un nuevo régimen democrático, el precepto que establece los senadores designados. (Programa de Hernán Büchi. 1989).

Y así un buen rato.

Fue como si oyeran llover.

También fue malo que el tema se planteara como un conflicto «cuyo eje emocional es una lucha de lealtades entre el liderazgo de Andrés Allamand y la ligazón que los miembros de ese partido tienen con las Fuerzas Armadas». Y mucho peor, que todo el debate se fuera mezclando personalmente conmigo.

Empezó a parecer más y más —muchas veces alentado por mis propios partidarios— que la reforma era una base para mi plataforma presidencial insinuada el año anterior.

Sin ir más lejos, los diarios consignaron en referencia a la declaración antireforma encabezada por el almirante Merino que «ninguno de los firmantes se explica cómo el presidente de RN, que aparece como el líder indiscutido de la derecha, pudo haber dado pasos en que claramente no estaba representando la posición de su sector, y no entienden que no considere imposible ser el representante de la derecha con el 40% de su partido, el 70% de los senadores y el único partido aliado en contra de su posición».

La verdad es que jamás había actuado con la lógica de preservar una posición expectante. Si mi obsesión, como mis adversarios decían, era ser candidato presidencial, lo razonable era evitar meterse «entre las patas de los caballos» y no empujar un carro contra viento y marea. Al revés, hice lo contrario: arriesgué tal posicion para provocar un resultado que sigo considerando indispensable para el país y la propia derecha.

Así las cosas, me molestaba sobremanera que se insinuara que me movía un afán electoral. Pero reaccioné mal, es cierto. Para que no siguieran con la especulación, declaré «que no voy a ser jamás el candidato de la Academia de Guerra, ni de algunos editorialistas, ni de los empresarios que organizaron la celebración del cumpleaños de Pinochet». Y luego los desafié:

—El candidato a enfrentar en 1999 es Ricardo Lagos, no Andrés Zaldívar ni Gabriel Valdés. A la izquierda en el futuro hay que derrotarla con votos, no con tanques. Y yo me siento preparado para enfrentar, palmo a palmo, a Ricardo Lagos en una elección democrática.

Y, por último, lo que jamás imaginé fue que siete senadores no fueran a cumplir su palabra. No se me pasó por la cabeza! Mis cálculos no iban más allá de dos y máximo tres. Fueron siete y faltaron sólo tres votos para eliminar a los senadores designados.

Al final, mis reflexiones terminaban en un solo punto. ¿Habría estado dispuesto a hacer algo distinto? Es decir, sabiendo que el gobierno, de todas maneras antes de 1997, iba a plantear reformas constitucionales, ¿estaba dispuesto a navegarlas mirando al techo? No. Era un asunto de principios y hasta hoy sigo convencido de que el tiempo me dará la razón. De mejor o peor manera, con más o menos destreza, habría sostenido la misma posición.

—Si es así, quédate tranquilo. Uno en política debe dar todas las peleas que cree importantes para el país. Pero no es obligación ganarlas todas. Además, a esos siete senadores no los movía ni el Espíritu Santo —opinó don Pancho Bulnes.

Así entiendo el liderazgo. Abrir caminos, empujar las cosas, construir nuevas realidades. Sin embargo, no es menos cierto que el liderazgo efectivo es una ecuación entre conducir y representar. El que se limita a representar a su gente, abdica de conducirla, pero el que aspira a conducirla sin antes persuadirla, tampoco lo logra.

Adiós a la UCC

Si había resuelto continuar, iba a tratar de hacerlo lo mejor posible. Me dediqué de lleno a organizar la campaña municipal que ya estaba por iniciarse.

Para variar, había un serio problema para organizar las listas. El sistema electoral había sido modificado poco antes, bajando el umbral necesario para ser electo alcalde. La norma, más próxima a la deseable elección directa, establecía que sería alcalde aquel candidato que superase el 30% de los votos.

La imaginación electoral de la UDI es infinita. Ante el cambio en las reglas del juego, Pablo Longueira inventó una fórmula que

supuestamente le permitiría a la derecha ganar un gran número de alcaldías: la idea era que los partidos de centroderecha acordaran apoyar un solo candidato en cada comuna y, para no dispersar votos, a éste lo acompañaría el número exacto estimado de concejales posibles de elegir. Por ejemplo, si en una comuna la centroderecha no podía aspirar a elegir a más de tres concejales, el modelo era identificar a un candidato principal y flanquearlo sólo con dos candidatos pasivos. Como se trataba de ganar la alcaldía, el mejor desempeño de estos acompañantes era... no sacar ningún voto a fin de que todos confluyeran al candidato principal.

La fórmula de Longueira establecía que los candidatos debían presentarse como independientes, esto es renunciar a sus militancias. ¿Por qué esa exigencia? Porque en la mayoría de las comunas la concentración debería recaer en un candidato de RN —lejos el partido más fuerte de la centroderecha a nivel municipal— y se quería evitar que al día siguiente Renovación apareciera con una enorme respaldo.

Sin embargo, la fórmula era ingeniosa sólo en apariencia. De partida, de funcionar, bastaba que la Concertación hiciera otro tanto para que su efecto no sólo se anulara, sino que se revirtiera en términos absolutos.

La comisión política a principios de abril de 1996 señaló que discrepaba «de la fórmula electoral adoptada por el consejo general de la UDI, ya que entrega a las cúpulas de los partidos la designación de los candidatos, impidiéndole a la ciudadanía decidir libremente a su futuro alcalde, reedita los graves inconvenientes de los pactos por omisión y afecta; además, en forma grave la credibilidad de los partidos políticos, al exigir renuncias artificiales a los mismos».

Estaba claro: los nuestros no iban a renunciar para presentarse disfrazados de falsos independientes.

A todo esto, la UCC —¡era que no!— aceptó entusiasmada el invento, al extremo que algunos le asignaron la paternidad al propio Errázuriz. Y se hizo público que la UCC y la UDI tenían un acuerdo para encarar juntos la campaña. Durante abril y mayo (la elección era en octubre) se mantuvieron conversaciones

con ambos partidos, pero nosotros no teníamos apuro: sabíamos que era absurdo intentar construir una lista sin RN. Nuestro objetivo estaba claro. RN aspiraba a que sus candidatos ocuparan el 50% de la lista. Cómo la UDI y la UCC se repartieran el resto, nos era indiferente.

La fórmula —casi de alquimia— empezó a cojear cuando Joaquín Lavín, el más importante de los candidatos de la UDI, anunció que no renunciaría a la militancia. Y entró en serios problemas cuando Errázuriz —como siempre— planteó exigencias exorbitantes. A todo esto, nuestro equipo a cargo de la selección de candidatos —Raúl Urrutia, Lily Pérez, Gustavo Alessandri V., Roberto Palumbo y el propio Rodrigo Ubilla— efectuó un trabajo tan preciso, que estábamos en condiciones de presentar listas completas en todo el país.

A mediados de julio, la UDI había perdido la paciencia con Errázuriz y la UCC que, para variar, negociaba a dos bandas: con la UDI y bajo cuerda con RN. Más que eso, un grupo de altos dirigentes de la UCC, a instancias de Errázuriz, desconocieron todo acuerdo con la UDI y públicamente se manifestaron a favor de pactar con RN.

En la UDI cundió la irritación. Todos estaban saturados de las maniobras de su díscolo asociado.

Entretanto, mi apreciación general no había cambiado. Mientras antes nos «operáramos» de Errázuriz, tanto mejor. El 17 de julio fue posible hacerlo: ante la sorpresa de todos y en una operación fulminante, RN y la UDI suscribimos un completo pacto electoral: enfrentaríamos la elección municipal cada uno con el 50% de los candidatos, pudiendo cada cual incorporar independientes. De paso, definimos que utilizaríamos el mismo criterio para la elección parlamentaria de 1997. Como ya tenía la experiencia de 1993, esta vez me preocupé de dejar establecido que «los partidos podrán asignar algunos de sus cupos parlamentarios a integrantes de otros partidos políticos. No obstante, en ningún caso esto último podrá derivar hacia peticiones de distritos cerrados, omisiones, vetos u otras fórmulas que limiten el derecho de cada partido a llevar candidatos». En castellano, si al año

siguiente la UDI quería volver a hacer tratos con la UCC, allá ellos, pero a nosotros no nos afectaría.

—La UDI nos traicionó. Han borrado con el codo el compromiso con nosotros. ¡Nos dejaron en la estacada! —dijo estupefacto el presidente de la UCC, Alejandro García-Huidobro.

—Con la UDI no se juega —replicó Jovino Novoa.

Más allá del episodio y del sorprendente mutismo que sobrevino en Errázuriz, lo ocurrido era una victoria conceptual. Para 1997 la lista de la centroderecha se conformaría, sin traumas ni conflictos, con los criterios que sin éxito habíamos defendido en 1993. Dos pájaros de un tiro.

Tiro de gracia

La siguiente preocupación era lanzar la campaña. Nos rondaba la idea de una plataforma que unificara a un partido aún convaleciente de graves quebrantos. La idea que fue ganando terreno consistía en platear la campaña en términos políticos, haciendo ver que había que derrotar a la fuerza emergente de la Concertación, es decir, al socialismo.

A mí no me convencía mucho —era anticipar el tema de 1999 y apartarse de la lógica aterrizada que tanto éxito nos había traído en la campaña municipal de 1992— pero igual preparé un discurso en esa línea. El lanzamiento fue en agosto.

El planteamiento se estructuró en la siguiente línea.

Primero, el principio de ordenamiento de la Concertación (según el cual el partido mayoritario, esto es el PDC, tiene derecho preferente para nominar el candidato presidencial), había terminado ante el afianzamiento del liderazgo de Lagos. Segundo, la coalición había confirmado que tendría candidato único en 1999. Tercero, al frente de la Concertación habría un cambio de timón. Cuarto, el socialismo era una opción legítima, pero mala para Chile.

Todo era un ejercicio de anticipación: siempre había creído que 99 sería la gran oportunidad para la derecha. La Concertación

completaba diez años en el poder, inevitables conflictos internos habrían emergido y, sobre todo, parte importante del mundo demócrata cristiano podría apoyarnos… si levantábamos una buena alternativa. De aquí hasta la elección presidencial la gran pregunta de la política chilena sería una sola:

«¿Hacia dónde emigrarán los demócrata cristianos?»

Me sorprendí por el efecto que provocó el planteamiento. Las críticas de la Concertación llovieron.

Sin embargo, la peor vino del lugar menos pensado:

—No veo que en Chile vaya a haber socialismo de nuevo —declaró Jarpa en conferencia de prensa. Y luego remachó: «Yo creo que Lagos es poco socialista y eso es lo mejor que tiene».

No dejaba de ser paradójico. ¡Me enmendaba la plana quien precisamente había retornado a la política un año antes para detener al socialismo! Patricia Politzer en *La Tercera* dijo que era «un mal momento de Allamand». La lectura generalizada fue la de *La Época:* Jarpa aprovechó la ingenuidad táctica de Allamand «para propinarle a su ex delfín un nuevo vapuleo público. El otrora paladín del antisocialismo echó por tierra el discurso de su tardío émulo con un sólo dicho». Y la conclusión más obvia: «Si el diputado Allamand reconoce en el «jarpismo», el discurso más propio de la derecha, la Concertación debiera decidirse a hablar con el autor y no con el intérprete».

Era muy poco más lo que tenía que hacer al frente del partido. Mi autoridad estaba minada. Yo mismo consideraba que era un papel poco digno. Además, todo sería inútil: aunque cantara la Canción Nacional, incluso con la última estrofa, siempre habría alguien en RN que saldría a los diarios a decir que desafinaba.

Tsunami en Las Condes

Pese a todo, me esforcé al máximo en los siguientes meses. No pasé por alto que para varios de los candidatos a alcalde mi proximidad era más bien incómoda. No querían de cerca a alguien

tan conflictivo para la derecha y cuya estrella parecía apagarse. Ya contaba las largas semanas que me quedaban para abandonar la presidencia y delegué progresivamente el manejo del partido en Alberto Espina y la campaña municipal en Rodrigo Ubilla.

Los resultados de la elección de octubre de 1996 marcaron dos tendencias políticas. La derecha aumentó su votación desde el 32,0 al 34,3% y la Concertación bajó levemente desde el 55,3 al 54,9%. La segunda tendencia se dio dentro de la Concertación, confirmado el análisis sobre el destino descendente del PDC: por primera vez el bloque PPD, PS, PR lo superó terminando con una larga hegemonía.

En la oposición, Renovación obtuvo el 18,4% y la UDI el 15,6% (el 0,3 % restante corresponde al Partido del Sur). Ambos crecimos, aunque más la UDI, que acortó la brecha con nosotros.

Para RN el resultado general fue muy bueno, ya que obtuvimos la más alta votación en la historia del partido y nuestro avance en materia de alcaldes fue espectacular: saltamos a 88, en tanto que la UDI progresó a 44. Nuestra presencia en el mundo municipal no podía ser más significativa: uno de cada cuatro alcaldes era RN, teníamos más alcaldes que el PS y el PPD juntos.

Gran alegría fue para mí que —entre otros— Raúl Torrealba, Martita Ehlers, Pedro Sabat, Carlos Alarcón, Antonio Garrido, Mario López triunfaran en Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, Peñalolén, Independencia y Quinta Normal. Si uno miraba los resultados poniendo la vista en la situación socioeconómica de las comunas, RN había crecido sostenidamente en aquéllas de clase media y populares.

Sin embargo, nos afectaron la pérdida por fallo fotográfico de Lily Pérez en La Florida; la división de nuestras fuerzas en Providencia; un candidato débil en Viña del Mar y, sobre todo, el espectacular triunfo de Lavín en Las Condes. Sacó ¡casi el 80% de los votos!

Lo de Joaquín Lavín fue, como dijo un diario, un verdadero *tsunami*.

El efecto político no se hizo esperar: al día siguiente ya era la figura más importante de la derecha y la candidatura presidencial

se dibujada en su horizonte. La victoria de Lavín no sólo fue el tema obligado durante meses, sino que de alguna forma «catapultó» una completa estrategia política y electoral. Lo más grave fue que la leímos mal.

—Lavín es apenas una flor de invernadero —declaró Luis Valentín Ferrada.

Como pasa tantas veces en política con las frases ingeniosas, más adelante... hubo que tragársela.

La pirueta de Jarpa

—No lo vas a creer, pero Jarpa me apoya como nuevo presidente del partido —me dijo Alberto Espina.

Efectivamente no lo creí. No podía ser cierto.

Pero lo era.

Después de la elección municipal, Renovación Nacional se abocó al recambio de sus autoridades. Con absoluta nitidez se perfilaron dos candidaturas: Alberto Espina y Alberto Cardemil. Ambos eran vicepresidentes y reflejaban sin disimulo las corrientes internas.

Desde el principio, Alberto Espina contó con un fuerte respaldo de una gran mayoría de los diputados. A fines de noviembre, un grupo de ellos le pidió públicamente que organizara una directiva de unidad. Entretanto, el penúltimo fin de semana del mes apareció una entrevista de Jarpa en que éste, sorprendentemente, aparecía como muy lejano a Cardemil («hace mucho tiempo que no hablo con él»), abogaba en favor de una mesa unitaria y respecto de Espina decía que «tendré oportunidad de conversar con él, ya que tiene oficina al lado. A veces los muchachos se sienten conmigo y después de les pasa...».

Alberto Espina, que a esas alturas descifraba los mensajes codificados de Jarpa harto mejor que yo, habló con él. Y con gran sorpresa comprobó que Cardemil había caído en desgracia. Jarpa estaba dispuesto a apoyarlo a él siempre que armara una lista unitaria —Ángel Fantuzzi debería tener en ella un lugar de privilegio— y que no volviera a tensionar al partido con el tema de las

reformas constitucionales. Según Jarpa el tema, de ser retomado, debería afrontarse «de común acuerdo con los parlamentarios».

El apoyo de Jarpa a Espina descolocó a Cardemil. Fue para él un chaparrón de agua fría.

—No estoy abatido. Una solución impuesta desde arriba, por muy importante que sean las personas que lo planteen, no es una solución buena para nadie —fue su reacción.

Pero su candidatura había abortado. Más adelante admitiría que Jarpa había hecho «procesalmente inviable mi postulación». ¿Cómo se puede ser candidato de «jarpismo» con Jarpa en contra?

—¿Por qué crees tú que Jarpa me apoya a mí y no a Cardemil? —me preguntó Espina.

—No tiene ni pies ni cabeza. En un momento creí que sabía captar sus motivaciones. Ya no. Dejé de tratar de entenderlo.

Alberto Espina fue electo presidente sin oposición, en una mesa que, además, integraron Ángel Fantuzzi, Rodrigo Ubilla y Roberto Palumbo. Aplicando la fórmula aprobada en la última modificación estatutaria, el consejo general eligió como vicepresidentes a Raúl Urrutia, Alberto Cardemil y María Angélica Cristi. Como los dos últimos se impusieron sobre Pedro Daza y Lily Pérez, no había que darle muchas vueltas para concluir que Espina había quedado políticamente muy solo.

No era un misterio que yo apoyaba a Alberto Espina. Para mi gusto, tenía todas las condiciones para ser un gran presidente y, además, contaba con una ventaja inapreciable: seis años de experiencia diaria, compartiendo mano a mano la conducción en momentos más que difíciles, le evitaría incurrir en mis errores. Tenía mejores relaciones que yo con los senadores «duros», motor sin desgaste, bagaje de ideas propias, carácter para imponerse y las ganas que se necesitan para una empresa así.

La derrota de la política

Le di varias vueltas al contenido de mi último discurso como presidente de RN. Al fin y al cabo, habían sido seis años a todo

vapor a los que había que agregar cuatro desde su fundación. Diez años en total. No lo podía creer. Me parecía ayer cuando nos lanzamos —con harto entusiasmo y quizás no demasiada agua en la piscina— a unir a la derecha en un partido amplio y democrático. Cuando preparaba mi intervención, me di cuenta de que la franja de vida que va entre los treinta y los cuarenta años —por ahí, la mejor— se me había esfumado en el intento.

Si me ponía a recordar todas las aguas que habían pasado debajo del puente —bien turbulentas, a decir verdad— no paraba más, así es que resolví que lo más importante era concentrame en advertir sobre la «nueva enfermedad de la política».

Mi razonamiento era que el triunfo universal de la democracia, paradojalmente, estaba conduciendo a la derrota de la política. En su raíz, influía un fenómeno cultural: la sociedad contemporánea transitaba desde la «desviación colectivista», propia de la década del 60, caracterizada por metas comunes, protagonismo del Estado y vigencia de los partidos, a la «desviación individualista» de los 90, marcada por metas individuales, retraimiento del Estado y auge de los liderazgos personales. Si la enfermedad antigua había sido su exacerbado ideologismo, la nueva era un pragmatismo despojado de ideales. No desconocía que la política debe tener una dimensión práctica, donde se evalúe la eficiencia de los administradores en la solución de lo cotidiano, pero llamaba a no perder de vista que la política iba más allá:

—Imaginar que las contiendas políticas del futuro se reducirán a una competencia de puentes inaugurados o de metros cuadrados construidos es apenas una degradación más de la política. Así como se equivocaron quienes proclamaron el fin de la historia, aún más perdidos andan los que anuncian el fin de la política.

En lo que respecta a la vida interna, reiteré que la «columna vertebral de un partido era la voluntad de sus miembros —y, particularmente, de sus parlamentarios— de actuar unidos; algo imposible si nadie está dispuesto a ceder un ápice en sus planteamientos para que se puedan adoptar decisiones comunes y si tampoco hay ánimo para asumir como propia la opinión

mayoritaria». En el fondo, se trataba ni más ni menos de aceptar el principio democrático como método para zanjar diferencias.

Asumí que durante mi gestión había cometido errores, que mis formas no siempre eran las más prolijas y que quizás anduve demasiado rápido. Era cierto que me había sobrado franqueza y faltado astucia. Sin embargo, para mí lo importante era dejar constancia de que me iba agradecido de la presidencia de Renovación Nacional, porque en un mundo en que tantos viven obsesionados por las cosas materiales, había podido dedicar mi vida a servir ideas y valores. Pese a todo, y aunque la suma de malos ratos superaba a todos los buenos momentos, me sentía privilegiado:

—Cuando tantos agrietan sus vidas infectados por el egoísmo, yo he podido dedicar mi vida al servicio público.

Me costó terminar, ya que se me atragantó la garganta:

—Los que me conocen saben que me cuesta expresar mis sentimientos. En estos años, casi sin darme cuenta, mis hijas se transformaron en mujeres y muchas veces les hice falta. En todo este tiempo, mi mujer me ha apoyado mucho más de lo que yo la he acompañado. Hemos tenido satisfacciones pero también amarguras profundas y definitivas. Renovación Nacional, pese a todo, es mi familia.

El guiño de Chaplín

—Jarpa está a favor de las reformas a la Constitución —me dijo Alberto Espina.

—¡Ahora sí que no te lo creo! ¡Es una tomadura de pelo!

—Tampoco confiaste que me apoyaría para presidente. He organizado una comida hoy junto a la mesa —Cardemil, Palumbo, Fantuzzi— y quiero que vengas tú y Ricardo Rivadeneira, como ex presidentes del partido.

El gobierno había presentado el 18 de marzo de 1997 un proyecto de reforma constitucional. Esta vez el tema era uno solo: eliminación de los senadores designados. Frei se jugaba la última reforma. El postrer intento.

—Hoy prevalece un clima más propicio para que esta enmienda llegue a ser aprobada. Incluso el gobierno decidió mantener la figura de los senadores vitalicios, que favorece al general Pinochet, para facilitar la iniciativa —declaró el ministro del Interior, Carlos Figueroa.

La comida tuvo lugar en el Hereford Grill de avenida El Bosque, el lunes 24 de marzo. Allí se empezó a dibujar una nueva fórmula que de nueva tenía poco: alzar los quórum de reforma de las leyes orgánicas, conjuntamente con la eliminación de los senadores designados. La verdad es que era sorprendente: un cambio radical apenas con meses de diferencia. ¿Qué tecla oculta, algo o alguien, había martillado en Jarpa?

Al final de la comida, concluyó Espina:

—Don Sergio, sería bueno que usted se mostrara públicamente partidario de la idea para que vayamos avanzando.

—Está bien. Mañana le digo algo a los periodistas.

El miércoles 26 de marzo todos los diarios traían sus declaraciones. «Jarpa acepta analizar la reforma constitucional», tituló *La Tercera.* «Jarpa dispuesto a estudiar reformas constitucionales», escribió *La Época.* «Jarpa: Corresponde analizar nuevas circunstancias para reforma constitucional», informó *El Mercurio.*

Pero ¡no había absolutamente ninguna nueva circunstancia! Así se lo recordó la UDI a Jarpa:

—No han cambiado para nada las condiciones que motivaron a nuestro partido a rechazar el anterior proyecto —declaró su comisión política.

Alberto Espina, por su parte, hizo ver que el cambio de Jarpa era una «una contribución importante y decisiva. Estamos construyendo un consenso interno».

El lunes 31 de marzo, también en el Hereford Grill, los mismos asistentes trabajamos a fondo la fórmula. Al final de una larga conversación, quedó definida: se eliminaban los senadores designados, se elevaba de cuatro séptimos a tres quintos el quórum para modificar las leyes orgánicas y se establecía un estatuto para los ex presidentes en la forma de una opción: asumían como senadores sólo por un período de ocho años o, en el evento de no

aceptarlo, gozaban a perpetuidad de un fuero en equivalente al de un senador en ejercicio.

Esta última norma surgió de una doble apreciación: yo insistía en que dejar a los ex presidentes vitaliciamente en el Senado era absurdo y perjudicial para nosotros. Alberto Cardemil estaba básicamentre preocupado de Pinochet: «No puede estar un solo segundo sin fuero».

Alberto Espina tomó notas, punto por punto, en un papel.

—Tenemos un acuerdo —dijo Espina—. La mesa va a plantear la fórmula a la sala de diputados y luego a la sala de senadores. De lo que quiero estar seguro es de que no me voy a quedar sin piso a mitad de camino.

Espina miró a Cardemil, quien hizo un gesto con la mano dándole la palabra a Jarpa.

—Cuente conmigo —respondió Jarpa.

—Don Sergio —insistió Espina—. Este es un tema que nos ha creado muchos problemas en el pasado. Perdone que se lo pregunte tan directamente, pero necesito saber, derechamente, si usted me va a apoyar. Si no lo hace, yo prefiero dar libertad de acción a los parlamentarios.

—Ya le dije que lo voy a apoyar. Esta fórmula le da estabilidad al país. En la Cámara usted no debiera tener problemas y, aunque yo no puedo asegurarle el voto favorable de los senadores, sería muy embromado para ellos rechazar esta proposición. Además, ésta va a ser una propuesta de Renovación Nacional, no del gobierno.

Al día siguiente, Alberto Espina explicó y obtuvo la aprobación de la fórmula. Y al subsiguiente, el 2 de abril, *El Mercurio* informaba: «RN acepta suprimir designados a cambio de elevar quórum. La postura fue aprobada en la bancada parlamentaria y fue diseñada en una cena en la que participaron el presidente Alberto Espina, los ex presidentes Andrés Allamand y Sergio Onofre Jarpa, además del diputado Alberto Cardemil y Roberto Palumbo».

El 16 de abril, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó la propuesta de Renovación, mediante una indicación

que virtualmente reemplazaba el proyecto del Ejecutivo. Seis días más tarde, tan intempestivamente como había apoyado la reforma, Jarpa puso marcha atrás. Ahora estaba en contra de la reforma. ¡Nadie entendía nada! Los periodistas que habitualmente cubren RN tenían una sola voz: «Don Sergio se achaplinó».

Al día siguiente enfrentaron a Jarpa sus más reconocidos partidarios entre los diputados: Alberto Cardemil, Ángel Fantuzzi y Claudio Rodríguez, el jefe de la bancada. «Diputados de RN aislan a Jarpa y dan respaldo unánime a las reformas», tituló un diario.

Alberto Espina se anotó un gran triunfo consiguiendo que todos los diputados de Renovación Nacional votaran como tabla en la sala. Y aunque la reforma quedó aprobada en la Cámara tampoco sirvió de nada: el Senado volvió a rechazarla.

Tiro por la culata

Cuando se produjo el segundo rechazo, ya más lejos de la refriega, me pude dar cuenta de hasta dónde llegaba la ceguera de aquéllos que se oponían a la reforma. Ya no estaban mezcladas las materias que supuestamente era «complicadas»: enmiendas al sistema de nombramiento del Tribunal Constitucional, y cambio al funcionamiento del Consejo de Seguridad. La fecha, 1997, era muy posterior a la que habíamos convenido en 1994, de suerte que no había argumento alguno que formular respecto de la oportunidad. El aumento de los quórum estabilizaba las leyes orgánicas y, por último, la reforma no podía ser más beneficiosa para el propio Pinochet en términos personales, políticos e históricos: mantenía su título de senador y el fuero que según sus «representantes» tanto le importaba. Como la reforma también terminaba el absurdo de que Aylwin no fuera senador, el juramento de ambos al inaugurarse el próximo Parlamento estaría cargado de un positivo simbolismo para el país. Se incorporaban al Senado, al mismo tiempo, las dos figuras más importantes del proceso de transición. Y todavía más: ¡el título de

senador de Pinochet pasaba automáticamente a estar refrendado por la totalidad de los parlamentarios de la Concertación! ¡La legitimación definitiva! ¿Cómo no darse cuenta de que en caso contrario, ese cargo sería ferozmente cuestionado en Chile y el extranjero?

Es cierto que la Constitución, reformada en 1989, le había mantenido ese derecho, pero la idea entonces era que los designados duraran sólo un período. También, no faltarían los que afirmarían que ésa había sido una negociación con Pinochet en el poder y, por ende, con la Concertación entre la espada y la pared. ¡Nada de eso podría decirse ahora! Y por último, que al momento que Pinochet dejara la comandancia en jefe, ocho años después de abandonar el poder, todos sus adversarios políticos aprobaran explícitamente su nueva posición institucional era también refrendar el papel jugado por él durante toda la transición. ¿Cómo no apreciarlo así?

Pinochet juró en medio del escándalo, fue objeto de una acusación constitucional y tuvo que enfrentar la activación de los juicios seguidos en el extranjero. ¿Cómo podrían haber quebrado lanzas en su contra los parlamentarios de la Concertación, que con sus votos hubiesen validado expresamente su calidad de senador vitalicio?

Estoy seguro de que para los que votaron en contra de esta reforma —para el propio Pinochet— ello terminará siendo un tiro por la culata, porque se dilapidó una oportunidad más para resolver un conflicto constitucional que hasta hoy divide a los chilenos.

Capítulo XX

Cruce de caminos

En 1997, después de dejar la presidencia de RN, asumí como director del Instituto Libertad y me concentré de lleno —junto a un equipo formado por Pedro Daza, Emita Budinich, María Luisa Brahm y varios otros colaboradores— a la preparación del programa político con que el partido debería enfrentar la elección parlamentaria de diciembre de 1997. Se llamó Chile necesita un cambio y me dio —por fin, después de tantos años— algo de calma para plantear soluciones a algunos de los principales problemas concretos del país. La idea que lo cruzaba era que una propuesta política debía fusionar dos elementos: una visión general del país y de los principios que inspiraban nuestro proyecto político y una batería de propuestas programáticas para abordar, «aterrizadamente» los problemas más importantes. Lo primero sin lo segundo era filosofía; lo segundo sin lo primero, pragmatismo desnudo.

También me desempeñé como presidente de una comisión investigadora de irregularidades en la empresa de Agua Potable Lo Castillo. Allí constaté de primera mano que la gestión privada de servicios públicos requiere marcos reguladores adecuados, fiscalización y multas en serio y, sobre todo, instrumentos legales al alcance de los usuarios, para protegerse de malos manejos empresariales.

En el horizonte ya se dibujaba la elección senatorial de Santiago —por su repercusión e importancia— una suerte de primaria

anticipada. Y el camino no estaba despejado. Todo indicaba que la lista de la centroderecha la formaríamos otra vez Bombal y yo, y que al frente tendríamos una dupla de temer: Alejandro Foxley y Jaime Estévez.

Entregado como estaba al propósito de alejarme de la vorágine asociada a la presidencia del partido y pensando en una campaña senatorial bien armada, nuevamente el destino se me cruzó por delante.

Visto en retrospectiva, el episodio pareciera remitir al guión de una película de suspenso, con todos los ingredientes de rigor: una organización criminal dedicada al narcotráfico, personajes oscuros con apodos de maleantes, un alto funcionario judicial de apariencia bondadosa vinculado a una organización mafiosa, una mujer inteligente y hermosa a cargo de la acción del Estado para desbaratar una red de distribución de drogas, un alto magistrado —de hecho el más alto de todos— controvertido, polémico e «imprevisible». El gran trasfondo de la historia era la crisis profunda del Poder Judicial; el detonante, una acusación constitucional contra el presidente de la Corte Suprema; y el efecto directo, un paquete innegable de repercusiones políticas y electorales.

Pero ¿qué diablos tenía que ver eso conmigo? En principio, nada. Hasta que las piezas —como en las malas novelas que abusan de la coincidencia— encajaron con una facilidad pasmosa. Posiblemente por eso el episodio mantuvo al país en ascuas durante largas semanas.

La Operación Ana Frank

Todo partió a principios de abril de 1997, cuando los medios de comunicación dieron cuenta de la desarticulación de la mayor red de narcotráfico y lavado de dinero en la historia del país. La investigación se había iniciado más de dos años antes y, al momento de hacerse pública, cobró una veintena de detenidos en Chile y el extranjero, más de 50 arraigados y la incautación

preliminar de bienes de la organización criminal avaluados, a vuelo de pájaro, en más de cien millones de dólares. Cabecilla de la banda era Mario Silva Leiva, alias el *Cabro Carrera,* un personaje que nada tenía que envidiar al más pintado de sus «colegas» colombianos: compartía con ellos incluso la afición por los caballos de carrera, una huella digital del «gremio».

La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, y el director general de Investigaciones, Hernán Mery, informaron ampliamente de la pesquisa —vaya a saberse por qué la llamaron Operación Ana Frank— y, según consignó la prensa, «ambos advirtieron que en la investigación aún falta verificar si existen funcionarios policiales y judiciales implicados». La titular del CDE agregó «que hay que partir del supuesto de que toda organización criminal tiene un aparato corrupto que la protege».

Tales declaraciones generaron natural curiosidad periodística. La expectación se acentuó el 15 de abril, cuando un abogado del CDE declaró que la querella por asociación ilícita, que tramitaba un juzgado de Valparaíso, a cargo de la jueza Beatriz Pedrals, se había ampliado contra dos actuarios judiciales.

Al día siguiente, el presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, expresó su preocupación por la noticia y declaró que había llamado a la jueza para pedirle mayor información cuando «existieran antecedentes concretos». ¿Propósito?: «Para yo dar cuenta al pleno» de la Corte, que es la reunión de todos los ministros del máximo tribunal. Los diarios de la siguiente semana insistieron en que había miembros del Poder Judicial involucrados («Al descubierto red de empleados judiciales que colaboraba con los narcotraficantes», tituló *La Segunda*) y Jordán, que a esas alturas empezó a ser lógicamente asediado por la prensa, reiteró el 23 de abril que «se comunicó con la jueza Pedrals para obtener antecedentes y le solicitó que lo mantuviera informado sobre la veracidad de la denuncia». Añadió que era «muy fácil hacer imputaciones, pero todo tiene que ser probado o no pasa de ser una murmuración».

El 26 de abril la prensa informó, bajo el título de «Nuevas

evidencias de protección a traficantes», del caso de Rita Romero, una pieza importante en la organización del *Cabro Carrera,* también denunciado por el CDE. ¿Qué había pasado? Tal persona, el año anterior había sido procesada por utilización de un pasaporte falsificado e insólitamente, ya que estaba más que acreditada su culpabilidad, la causa había sido sobreseída. Cuatro días después, Jordán declaró a un diario que deseaba comprobar si existían irregularidades, haciendo ver que «desde el momento que pedí el expediente y decidí presentarlo al pleno, es porque hay algo que no es regular».

El cielo derrumbado

A principios de mayo surgieron los primeros signos de tensión entre el CDE y el presidente de la Corte Suprema. Los abogados de aquél insistían en la tesis de la «red de apoyo judicial al narcotráfico» y los periodistas se hacían mil conjeturas respecto de cuán comprometidas podrían estar altas esferas del Poder Judicial. La lógica era atendible: el Consejo no se «habría 'tirado a la piscina' sin tener pruebas irrefutables». A la inversa, Jordán insistía en que no se habían detectado irregularidades y que el «asunto de los funcionarios judiciales se ha magnificado terriblemente, porque antecedentes concretos de conductas indebidas que lleguen a lo ilícito no hay ninguna». Informaba, además, haber interrogado «a los dos actuarios que aparecían mencionados en la ampliación de la querella y que llegó a la misma conclusión».

Sin embargo, el 11 de mayo el cielo se le derrumbó en la cabeza a Jordán y, de pasada, a toda la Corte Suprema: los diarios informaron que el CDE había ampliado de nuevo la querella, esta vez contra Marcial García Pica, ex fiscal de la Corte de Apelaciones, hombre ampliamente conocido en esferas judiciales por sus más de 60 años de carrera.

Sin embargo, dos días más tarde —el 13 de mayo— Jordán informaba que la Corte Suprema estaba tranquila, ya que no tenía «ningún antecedente que vincule al ex fiscal García Pica con

los ilícitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, atribuidos al grupo que dirige Silva Leiva». Fue más lejos y aunque reconoció no poder hablar en términos de inocencia o culpabilidad, afirmó a renglón seguido que le parecía «muy extraño que este caballero esté comprometido en una situación irregular», agregando que «como funcionario era un buen hombre, preocupado de la gente más modesta y de ayudar a los demás».

No fue el único magistrado que se expresó en esos términos.

—No lo creo —dijo la presidenta de la Corte de Apelaciones, Raquel Camposano, cuando le preguntaron por las vinculaciones de García Pica con el *Cabro Carrera.*

—Se trata de una persona intachable, que se ha desempeñado en forma muy correcta y, en especial, en esta tarea de la Fiscalía —expresó el propio fiscal de la Corte Suprema, Enrique Paillás.

—Desde el punto de vista humano yo creo que es extraordinario —agregó el ministro de la Corte Suprema Guillermo Navas.

—Don Marcial García Pica siempre ha sido un hombre correcto y tal vez lo que pueda haberse interpretado mal es su afán de ayudar a la gente modesta —agregó Marcos Aburto, el ex presidente de la Corte Suprema, casi imitando las palabras de Jordán.

«Sorprendente defensa de sus pares», tituló *La Tercera.*

Inmediatamente aparecieron en los diarios filtraciones que parecían respuesta a los dichos de Jordán y de los otros ministros: la prueba contra García Pica eran conversaciones telefónicas grabadas. La tensión aumentó por el tenor crítico de una declaración de Clara Szczaranski, que hacía ver que cuando había comunicado, por «deferencia y respeto», la ampliación de esta querella al «presidente de la Corte Suprema, sin entregarle detalle particular alguno, pues ello es sólo competencia del juez instructor», éste «junto con agradecer ese gesto, manifestó ya poseer todos los antecedentes de esta diligencia». El reproche era sólo perceptible para los abogados: los sumarios son secretos. ¿Por qué Jordán conocía la querella desde antes? Y ¿cómo la había obtenido?

En un nivel político, la primera intervención correspondió al diputado Teodoro Ribera de RN, quien en la Cámara de Diputados se preguntó por las atribuciones de Jordán para actuar como él lo había hecho, haciendo ver que le parecía que su conducta era «inadecuada y le hace mal a la justicia». Al otro día, Carlos Bombal señaló que «la droga ya había entrado en diversas instituciones del país, incluido el Congreso Nacional, de modo que la situación amerita una revisión de todos los organismos, porque ésta puede ser la punta del *iceberg*».

Hasta la intervención de Teodoro —con quien siempre conversaba sobre temas constitucionales— yo seguía el asunto con el interés que merecen las materias importantes, pero sin adentrarme en mayores detalles. Hasta ahí, todo no hacía más que confirmarme una convicción que venía expresando públicamente desde hacía años: que el Poder Judicial estaba en una profunda crisis y pidiendo a gritos una completa modernización. Incluso, durante el gobierno de Aylwin trabajé junto a Boeninger una modificación al sistema de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, que fue rechazado de plano en la sala de senadores por RN, ya que contemplaba la intervención del Senado en los mismos.

Para quien no estuviera siguiendo el caso con lupa, todo era confuso y las declaraciones de Jordán lo eran aún más. Pero sus palabras saltaron francamente al descontrol cuando respondió a Teodoro:

—Nunca me he inmiscuido en cosa alguna. Debe haber estado en un estado emocional muy particular para decir lo que dijo. Él se constituye en mi mentor espiritual, para enseñarme las cosas que debo y no debo decir.

Luego, para responder a las críticas sobre su actuación, habló sobre la justicia en Chile:

—Ésta es una gran familia, en que si hay situaciones que afecten a los miembros del Poder Judicial tengo el deber de averiguar para que la Corte tome las providencias necesarias. Llamé a los actuarios, porque tengo pleno derecho a interrogarlos, para que si hubieran cometido alguna situación irregular presentaran

inmediatamente sus renuncias. No soy el juez de primera instancia. Estoy en posición de jefe de servicio.

El temporal no sólo no amainó, sino que se transformó en huracán cuando los diarios publicaron la grabaciones de una conversación telefónica entre García Pica y el *Cabro Carrera*. Y con razón. ¡Eran un escándalo! Se trataban de «padrino» y «ahijado». El capo de la banda desembozadamente le pedía que hablara con tal o cual ministro y el ex fiscal oblicua, pero claramente, le pedía plata a cambio.

En ese contexto, las palabras de los «supremos» hacia García Pica quedaron muy fuera de lugar. El abogado de éste acusó al CDE de actuar hipócritamente, por quejarse de las filtraciones del proceso y haber hecho trascender las grabaciones. Pero «algo empezó a oler más que a podrido en Dinamarca». El impacto fue enorme: otro golpe al plexo del alicaído prestigio de los tribunales.

Fue entonces cuando, con gran descriterio, Servando Jordán resolvió tomarse sus vacaciones.

¡SALTA LA LIEBRE!

Poco y nada debe haber descansado Jordán, porque el escándalo no cedió. Y se inflamó definitivamente cuando el 1 de junio Carlos Bombal y Pablo Longueira denunciaron que «el sistema judicial chileno ha sido penetrado por la nefasta influencia de la droga» y le solicitaron a Jordán que no reasumiera sus funciones hasta que se esclareciera el bullado caso del *Cabro Carrera*.

¿Motivo? Haberse ido de vacaciones en vez de enfrentar desde su cargo la grave acusación que pesaba sobre el Poder Judicial, sus declaraciones en favor de García Pica y haber interrogado a los mentados actuarios. En el fondo, le pedían la renuncia: el proceso en cuestión duraría años y no reasumir mientras éste durase era quedarse en la casa para siempre.

El mundo político reaccionó adversamente: Jaime Estévez,

junto a los senadores Ominami y Núñez, dijo que la petición era «una venganza» por haber presidido Jordán la sala que había sentenciado a Manuel Contreras; el vicepresidente del PDC, Roberto León dijo que el propósito de la UDI era «dañar las instituciones», ya que en el último año había denunciado corrupción en el Ejecutivo, consumo de drogas en el Legislativo y ahora embestía contra el Poder Judicial y, en la misma línea, el vocero del gobierno —José Joaquín Brunner— señaló que el propósito de la UDI era «debilitar a los Tribunales de Justicia».

El siguiente fin de semana los diarios fueron durísimos contra la Corte Suprema y el propio Jordán, en particular un reportaje de Blanca Arthur en *El Mercurio.* El diario y dicha periodista ya había tenido un grave desencuentro con Jordán, a raíz de un reportaje anterior sobre la Corte Suprema en el que la actuación del ministro había sido muy equívoca. Ahora, el artículo dominical afirmaba que los diputados de la UDI «habían puesto el dedo en la llaga», recordaba que Jordán había enfrentado serias dificultades para ser electo presidente de la Corte 1996, ya que sus pares no «dudaban ni de su capacidad ni de su inteligencia, pero sí tenían reservas de su accionar» y además mencionaba, como elemento adverso a Jordán, «la historia conocida en toda la Corte crípticamente con el número siete».

¿Qué historia era ésa? De acuerdo a *El Mercurio*, «una que relata que siendo presidente subrogante Marcos Aburto —en reemplazo de Enrique Correa Labra— debió ausentarse por un día, lo que significó que Servando Jordán quedara interinamente a cargo del máximo tribunal. Y en ese único día tomó siete quejas que Aburto había repartido en distintas salas y las concentró en una sola, donde fueron relatadas por un hombre cercano a Jordán, Jorge Correa, y votadas favorablemente. La gravedad del asunto no radicó en concentrar las causas, sino en que éstas se trataban, ni más ni menos, que de la excarcelación de diversos procesados por narcotráfico en una causa por internación de cocaína que se llevaba en Arica, la que había sido negada por la Corte de Apelaciones. El resultado fue que los liberados —conocidos colombianos— huyeron, quedando detenido

sólo el chileno Angel Vargas, posteriormente indultado por el presidente Frei».

En dos palabras —el caso luego se estudió exhaustivamente— el problema estaba en que la Corte Suprema había, primero, negado las excarcelaciones y más tarde, sin razón aparente, había cambiado abruptamente de opinión otorgándolas. A primera vista aparecían diversas irregularidades formales en la tramitación de la queja, con visos de configurar un turbio «fraude procesal».

Cuando leí el reportaje —al final del cual se mencionaba que la UDI estudiaba una acusación constitucional— no tuve duda de que el asunto había cambiado de cariz. La imputación no podía ser más grave: se acusaba al presidente de la Corte Suprema de manipular una situación procesal para favorecer a poderosos narcotraficantes.

Jordán resolvió interrumpir sus vacaciones. ¡Era que no! Y lo hizo de muy mala manera. Se mostró muy dolido por las publicaciones de la prensa en su contra y cuando le preguntaron por Bombal su respuesta fue de lo peor:

—Lo único que voy a expresar es que ese señor que aparece como la primera figura en todo esto no sabía que existía. Me he impuesto de su existencia por este asunto en que ha figurado, figurado, figurado. Tengo un antecedente respecto de él, que en un supuesto también podría hacer efectivo.

—¿Qué tipo de antecedente?

—Puede ser un antecedente que es un hombre muy cariñoso, que es un hombre excepcional o puede ser otra cosa.

—¿De alguna irregularidad?

—No puedo decir sobre qué.

Como era de esperar, frente a tales expresiones absolutamente inaceptables, Bombal lo emplazó de inmediato para que en el plazo de 24 horas mostrara los antecedentes que decía tener. Jordán replicó en términos aún peores —si caben—, ya que argumentó que los antecedentes que decía tener eran los publicados en la revista *Cosas* en enero de ese mismo año: una imputación —que Bombal refutaba— acerca de haber facilitado la

detención de un profesor de la UC, detenido desaparecido, a manos de la DINA. ¿Qué podía tener que ver una cosa con la otra?

Jordán nunca imaginó el cúmulo de consecuencias que provocó con esas declaraciones que reflejaron malas artes. Con ellas, no sólo se enajenó parte importante del mundo político (el senador Sergio Bitar dijo que había utilizado un procedimiento «mafioso»), sino que él mismo perjudicó el extenso descargo que ese mismo día difundió para hacer frente a las acusaciones de fondo formuladas en su contra.

Más importante que todo eso: ahí selló su suerte, puesto que en ese mismo momento Carlos Bombal, Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma y Andrés Chadwick resolvieron acusarlo constitucionalmente.

Llueve sobre mojado

La respuesta de diez carillas que Jordán había preparado durante sus agitadas vacaciones partía representando la «inusitada campaña de desprestigio dirigida en mi contra, primero por el señor Bombal y luego, en publicaciones en *Cosas, Qué Pasa, El Mercurio* y *La Tercera*, en donde se han distinguido las periodistas Patricia Politzer y Blanca Arthur». Luego, se centraba en el caso de Arica, que no sólo había sido mencionado por *El Mercurio,* sino también por *La Tercera* en un reportaje titulado «Las aguas turbias de la justicia». Allí se repetía la historia de Arica y se agregaba que la libertad de los narcotraficantes se había concedido sin siquiera «un escrito que la justifique».

Jordán aducía que nunca había sido presidente subrogante el año 1991 y que tampoco había presidido la tercera sala cuando se concedieron las excarcelaciones. Aclaraba que sí había existido un escrito pidiendo la libertad de los reos, copiaba la resolución que la concedía —dictada por el entonces presidente de la Corte, Marcos Aburto, y los ministros Enrique Zurita y Osvaldo Faúndez, además del abogado integrante Fernando Fueyo, en abril de 1991— e informaba que nada había tenido

que ver con la designación del relator Correa. También explicaba que los reos se habían fugado años después de habérseles concedido la libertad provisional. En resumen —decía— era absolutamente inocente de lo que lo acusaban.

Un punto fuerte de su respuesta era que la discutida resolución había sido adoptada —excluyéndolo para este efecto— por tres ministros y un abogado integrante de sólido e incuestionado prestigio en el foro. Y de allí mismo se agarró la izquierda para lo obvio: interpuso su propia acusación constitucional contra todos los ministros que habían participado en el caso Arica.

El resto del mes de junio le siguió lloviendo sobre mojado a Jordán y a la Corte Suprema. Una entrevista dominical a Sergio Urrejola, presidente del Colegio de Abogados, dejó en evidencia que la justicia vivía «su peor momento». Cuando le preguntaron a Sergio qué opinaba de la elección de Jordán como presidente de la Suprema, no se anduvo con eufemismos:

—Lamentable.

Al interior de RN la situación era de cautela. Alberto Espina, como presidente, insistía en que no había que prejuzgar y, por ende, lo que correspondía era esperar la acusación. Desde el comienzo, sin embargo, Luis Valentín Ferrada y Alberto Cardemil fueron extraordinariamente críticos de la actuación de la UDI. Según Ferrada, todas las actuaciones de Jordán eran impecables, ya que se limitaban al ejercicio de la llamada «superintendencia correccional» y se apegaban a las prácticas de la Corte Suprema en la materia. En la conducta de la UDI él veía una maniobra político-electoral, más que un propósito serio y fundado: «la UDI está haciendo el ridículo nacional».

Mientras tanto, yo me concentré en un asunto diferente: elaborar una propuesta de modificación constitucional para cambiar el sistema de nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, estableciendo que el presidente debía escoger de una quina un nombre, el que debía ser ratificado por los 2/3 del Senado. Meses después, una reforma constitucional casi calcada así lo establecería.

Hacia fines de junio, Bombal definía «la médula» de la acusación que preparaba la UDI:

—O es posible investigar a fondo la penetración del narcotráfico en los tribunales o lisa y llanamente el país entró en el peor camino de la corrupción. Con las actuaciones de Jordán no hay ninguna garantía para que el Consejo de Defensa del Estado pueda seguir investigando las redes de narcotráfico descubiertas.

El último fin de semana de junio, *La Segunda* y *El Mercurio* publicaron *in extenso* —más de cincuenta carillas— la acusación que sólo se interpondría días más tarde, «privilegio» publicitario que entiendo ni antes ni después ninguna acusación —incluyendo la que se interpuso contra Pinochet en 1998— ha recibido.

A su vez, en esos mismos días, Carlos Bombal lanzó su campaña senatorial con un masivo programa de pintura callejera. Los muros de comunas populares —La Florida, Puente Alto, La Pintana, La Granja, San Joaquín y todo el resto— se llenaron de propaganda. ¿Qué decían los rayados? «Bombal barre la droga».

Por supuesto, no fui el único que advirtió el hecho:

—Es altamente cuestionable que la persona que impulsa la acusación haya ordenado pintar la Región Metropolitana poniéndose como el adalid de la lucha global contra el narcotráfico —declaró públicamente Alejandro Foxley, futuro candidato a senador del PDC por la zona.

Cargos van y cargos vienen

La acusación, luego de un largo preámbulo doctrinario sobre el alcance de la causal «notable abandono de deberes», se descolgaba por la polémica elección de Jordán como presidente del máximo tribunal del país en la forma de un «antecedente» y se detenía latamente en el caso de Arica —a esas alturas ya famoso—, presentado como «un escándalo sin precedentes».

Sin embargo; aquí venía la primera sorpresa: ¡el caso de Arica no se incluía en la acusación!

—No deducimos el caso Arica porque forma parte de una resolución dictada por un tribunal, donde a los diputados no nos es legítimo pronunciarnos —aclaró Carlos Bombal a una revista.

Las acusaciones tienen capítulos, es decir, hechos y cargos concretos a partir de los cuales se debe acreditar la causal que se invoca. ¿De qué se acusaba a Jordán? Uno, de haber interrogado a los actuarios, haberse impuesto irregularmente de la ampliación de la querella a García Pica y haber formulado declaraciones exculpatorias respecto de aquéllos y éste. Dos, haber traído a la vista el expediente del caso de Rita Romero y emitir en éste una resolución judicial. Y, por último, haber hecho declaraciones ofensivas contra el diputado Bombal.

Todo lo anterior configuró un hecho muy confuso ante la opinión pública, ya que a Jordán no se le acusaba de liberar narcotraficantes, sino de otras actuaciones.

A partir de los hechos de Jordán —todos conocidos desde hacía semanas— la acusación afirmaba que «el actual presidente de la Corte Suprema ha comprometido gravemente su comportamiento ministerial no en una, sino en la mayoría de las causas de relevancia que se investigan o han investigado por la esfera judicial relativas al tráfico ilícito de estupefacientes» y señalaba que «cada vez que aparece un proceso vinculado al narcotráfico, se hace de él en forma subrepticia, demostrando un interés particular en su conocimiento, violando todas las normas del debido proceso, actuando entre las partes involucradas y, lo que es más grave, adelantándose a emitir juicios exculpatorios». La acusación se cerraba afirmando que «el señor Jordán se ha convertido en un impedimento para el desarrollo de nuestra justicia, para el combate contra el narcotráfico, y por ende, para el fortalecimiento de nuestro sistema institucional».

¿De qué lo están acusando?, me pregunté cuando terminé de leer. Era difícil imaginar una imputación más grave para cualquier juez. De un patrón de conducta, pensé para mis adentros. Ni más ni menos, que de ser un agente protector del narcotráfico.

Un cargo letal.

NÚMERO PREMIADO

El Hotel Montecarlo queda a la entrada de Reñaca, es tranquilo, tiene una linda vista y al grupo de diputados de RN que nos habíamos «arranchado» allí —puesto que el Congreso funciona en Valparaíso— nos trataban con especial simpatía.

Bastaba cruzar la calle y uno ya estaba corriendo al lado del mar, con el viento (y no pocas veces la lluvia) en la cara. Así se ordenan las ideas, uno planifica mejor lo que tiene que hacer, piensa sobre los temas que le preocupan o, simplemente, se entretiene mirando el paisaje. ¡Es la mejor manera de empezar el día!

La mañana del miércoles 2 de julio corrí hasta más lejos que de costumbre. Sólo una vez antes en la historia de Chile se había acusado constitucionalmente a un presidente de la Corte Suprema. A esa hora se sorteaban los diputados que deberían constituir una comisión que, luego de estudiar la acusación, debería proponer a la Cámara su aprobación o rechazo.

La acusación acaparaba cámaras y titulares. En un año electoral la presencia en los medios de comunicación es muy importante y Bombal parecía haber descubierto una buena veta. Más que eso, estaba montado arriba de una causa popular, dado el desprestigio del Poder Judicial y la temperatura noticiosa de un asunto como el narcotráfico. Tenía en la mira además, a un personaje percibido como antipático, arrogante, sobre el que se tejían sórdidas historias, alejado de moldes habituales (¿cuántos presidentes de Cortes Supremas en el mundo andan en moto?), detestado por los periodistas y con ninguna capacidad para desenvolverse ante los medios de comunicación.

Puesto que las murallas no estaban pintadas de balde, era bastante evidente que la acusación iba a ser un tema de la campaña. Las acusaciones constitucionales son un recurso de naturaleza política y, como tal, generan efectos que pueden transformarse en retornos electorales. Probablemente, es inevitable que así sea, pero mientras corría, no dejaba de plantearme reservas

acerca de una estrategia que, buscando obtener dividendos electorales, echara mano de la acusación constitucional sin atender demasiado a su procedencia y fundamento. Yo mismo, en una entrevista en la revista *Cosas*, había tratado de fijar una posición transparente frente al tema. El título fue «La Corte Suprema requiere cirugía mayor». Señalé que la Corte era «autista», porque había demostrado cero receptividad para tomar conciencia de su propio desgaste; critiqué fuertemente las amenazas de Jordán contra Bombal («¡son inadmisibles, inaceptables!»); hice ver que la acusación era gravísima y que procedía realizar una investigación exhaustiva; anticipé que se «abría la temporada de caza», ya que estaba seguro de que la izquierda acusaría a varios ministros más, y pude argumentar en favor de nuestra propuesta de reforma de la Corte Suprema.

Cuando volví al hotel, noté a Mario (mi chofer-asistente-secretario-ayudante-contador-telefonista, gran compañero y sobre todo, una de las mejores personas que conozco) muy agitado.

—No lo va a creer —me dijo.

—¿Qué pasa? —le pregunté.

—Lo sortearon en la comisión que tiene que informar lo de Jordán.

La coincidencia era increíble. Según el reglamento, se han de sortear entre los diputados —excluyendo a quienes presentan la acusación— cinco nombres para formar la comisión informante. El universo eran 110 y el mío fue el primero. Realmente era insólito. Tengo pésima suerte. ¡Nunca me he ganado nada ni en una rifa de circo!

Pues bien, aquí salí premiado. La interpretación no se hizo esperar. *El Mercurio* escribió que «era demasiada la coincidencia de que fuera sorteado quien estaba más complicado con el tema, por el protagonismo que lograba su contendor como candidato al Senado, Carlos Bombal. ¿Fue justicia divina o un presente griego? Ni él mismo lo sabe. Allamand se enfrenta ahora a un desafío histórico, porque en nadie como en él recaerán las miradas para ver la forma en que conduce la comisión que tiene por tarea informar a la sala si la acusación es procedente o no». Luego,

venía algo que parecía entre vaticinio e invitación: «Para Allamand será muy difícil no sumarse a la ola de los demás partidos que no vacilan en admitir que existen méritos para acusar a Jordán. Todo apuntaría a que el camino de Allamand es transformarse en el gran acusador».

El sorteo también favoreció (no estoy seguro de que ésa sea la palabra exacta) a Carlos Balbontín, Ramón Elizalde, Carlos Valcarce e Ignacio Walker.

Mar sin orillas

Tenía buenas relaciones con todos y, por supuesto, con Carlos Valcarce, diputado RN… por Arica. La participación de Ignacio Walker me parecía bien. Lo sé un tipo equilibrado, estudioso y serio. Aunque nunca hemos sido amigos cercanos, conozco a Ignacio desde siempre: fuimos compañeros, no de curso pero sí de colegio en el Saint George's, y luego estudiamos Derecho en la misma Universidad, donde ambos culminamos la carrera con tres coloradas en el examen de licenciatura. También compartíamos el orgullo de haber llegado juntos al Parlamento en 1994.

—Andrés, creo que no te conviene ser presidente de la comisión —me dijo Ignacio—. Van a estar mirándote al milímetro. Al mínimo error te van a cortar la cabeza. Yo no tengo ese riesgo.

—Por lo mismo prefiero dar la cara —contesté—. Nadie sabe cómo terminará esto, pero al menos, no van a poder decir que actué desde la trastienda.

El fin de semana posterior a nuestra nominación nos juntamos para analizar lo que se nos venía por delante.

Nuestro propósito era garantizar un debido proceso y que no se repitiera el caso Cereceda: una acusación visible y otra invisible. Para eso, lo primero era generar un escenario adecuado tanto para que los acusadores pudieran acreditar los fundamentos de su acción, como para que el acusado pudiera refutarlos. Además, queríamos que todo fuera transparente.

—Voy a proponer la plena publicidad del trabajo de la comisión, incluidas actas, documentos, papeles, absolutamente todo —le dije—. No es lo normal, pero es lo lógico.

Ignacio estuvo de acuerdo y fue aún más allá.

—Acepta todas las diligencias que los acusadores te pidan. ¡Lo que sea! Si haces lo contrario, van a decir que está protegiendo a Jordán.

Creo que con Ignacio hicimos un buen trabajo. Serio y desapasionado. Sabíamos estar frente a una acusación extremadamente grave. Nos parecían inaceptables las declaraciones de Jordán contra Bombal, pero nos costaba pensar que ese despropósito fuese suficiente para configurar la causal de notable abandono de deberes. Como el caso de Arica tampoco formaba parte de la acusación, a la larga nos fuimos dando cuenta de que, jurídicamente, íbamos a tener que decidir dos cosas: si las actuaciones concretas de Jordán correspondían a la forma normal en que la Corte Suprema ejerce su función correccional y qué valor tenían sus declaraciones en favor de los funcionarios judiciales y García Pica.

Sabíamos que siendo el «notable abandono de deberes» la única causal que permite destituir a los ministros de Corte, tarde o temprano íbamos a toparnos con dos concepciones extremas. Como me lo dijo Teodoro Ribera, hay quienes señalan que el «notable abandono de deberes» se configura sólo cuando los ministros incurren en inobservancias que impiden el funcionamiento de los tribunales (no concurrir a la vista de las causas, no proveer los escritos de las partes, etc.). Y hay quienes, yéndose al otro extremo, creen que por esta causal es posible, incluso, revisar las sentencias, lo que es aberrante.

Yo sabía para dónde iba Teodoro y me quedó aún más claro cuando me pasó la fotocopia de las intervenciones de Andrés Chadwick y del propio Carlos Bombal en anteriores acusaciones —todas por causas de derechos humanos— en contra de otros ministros. La interpretación que la UDI siempre había dado a la causal era la más restringida posible.

Ahora, la acusación interpuesta por la UDI cambiaba radicalmente el criterio: «A nuestro entender, constituye notable

abandono de deberes la infracción o inobservancia de cualquier obligación o deber que pesa sobre un magistrado del más alto tribunal del país, sea éste de carácter adjetivo o formal, o bien sustantivo o de fondo».

A mí me pareció que se pasaban de la raya. Una causal no puede ser un acordeón que se expande o contrae al compás de la conveniencia. Como dijo Alberto Cardemil, a partir de esta nueva interpretación, la causal era un «mar sin orillas»

Sintonía fina

Sin embargo, estas aproximaciones jurídicas de sintonía fina, que nosotros debíamos obligadamente tener en cuenta, no conectaban para nada con la opinión pública. Si alguien hubiera hecho una encuesta, el 99% de los interrogados habría respondido que a Jordán lo acusaban de liberar narcotraficantes.

Empeñados en contar con el máximo de antecedentes, Ignacio y yo convinimos en disponer de «asesoría directa» de nuestra completa confianza para tener a la mano puntos de vista descontaminados del ajetreo en que nos sumergiríamos en los próximos días. Ignacio apeló a Cristián Maturana y Patricio Zapata. Yo, a la ayuda inapreciable de Juan Luis Ossa y Ricardo Rivadeneira.

Una vez que Jordán respondió a los cargos, se clarificó cuáles serían los dos puntos principales controvertidos.

Por una parte, los acusadores sostenían que Jordán había tomado indebidamente conocimiento de las querellas contra los actuarios y García Pica. Que se había constituido en tribunal «de facto» y con sus declaraciones los había «exculpado». Que su desempeño configuraba un cuadro de protección a los inculpados, una señal de amedrentamiento a los tribunales y una intromisión solapada en un proceso en tramitación.

Frente a eso, Jordán aducía que se había impuesto de las querellas porque la jueza Pedrals, a petición suya, se las había enviado para los efectos de abrir una investigación administrativa.

Dentro de ésta se habían tomado las declaraciones y todo había sido informado al pleno de la Corte. Según él, sólo había desempeñado el cometido disciplinario que le correspondía en función de su cargo y nada reprochable había en su conducta, negando obviamente haber «exculpado» a nadie.

La Comisión le consultó a la jueza Pedrals —elogiada a más no poder en su desempeño por el propio CDE— si la solicitud de remitir las querellas había constituido alguna forma de presión o le había obstaculizado de alguna manera su trabajo. Su respuesta fue concluyente:

—La actitud del señor Jordán no me ha impedido actuar con plena y total autonomía, ni ha constituido presión alguna.

En cuanto a si el procedimiento utilizado por Jordán —traer a la vista piezas del sumario, tomar declaraciones y realizar otras diligencias similares aún antes de informar al pleno— era habitual o no, el propio secretario de la Corte Suprema aseveró que lo era «desde siempre» y aún más expresivo fue el testimonio prestado por el ex presidente de la Suprema, Marcos Aburto:

—Así es desde hace muchos años. El pleno autoriza, en términos generales y permanentes, al presidente para que en casos en que se encuentre en juego la conducta funcionaria y que lleguen a conocimiento del tribunal por cualquier medio, reúna los antecedentes a fin de que el tribunal tome las decisiones que el caso amerita.

Poco después, procedimos a establecer si Jordán había o no dado cuenta al pleno, ya que los acusadores decían que no lo había hecho y que sus actuaciones eran siempre solapadas.

Así se hizo: «Es efectivo que el presidente Jordán en forma somera dio cuenta al tribunal pleno del hecho de haberse ampliado la querella del CDE; incluso algunos señores ministros recordaron que había leído una parte de la conversación telefónica grabada que habrían tenido el querellado García Pica y el procesado Silva Leiva».

Ignacio Walker fue especialmente cuidadoso al momento de solicitar una certificación sobre este punto. Había que disipar cualquier duda en cuanto a que el presidente de la Corte no

hubiere informado al pleno en su sesión del miércoles 7 de mayo, es decir, dos días después de que la jueza le mandó las querellas. La certificación no tardó en llegar: «El pleno de la Corte Suprema tomó conocimiento de la certificación solicitada. Fue presidido por el subrogante Enrique Zurita y contó con la asistencia de los ministros Dávila, Beraud, Toro, Araya, Valenzuela, Álvarez, Bañados, Carrasco, Correa, Garrido, Libedinsky y Ortiz».

El segundo eje de la acusación, asociado al proceso por la falsificación del pasaporte de Rita Romero, se clarificó más rápidamente.

El cargo era que Jordán había hecho que se le remitiera el expediente y luego, había dictado una resolución en el proceso criminal, a lo que tanto los acusadores como la presidenta del CDE asignaban enorme importancia.

El descargo de Jordán planteaba que cuando el CDE denunció las irregularidades en ese proceso, él efectivamente había pedido el expediente, advirtiendo de inmediato que contenía irregularidades, a raíz de lo cual había procedido a abrir un sumario administrativo. Hecho eso, había ordenado devolver el proceso y dado cuenta al pleno, el cual sancionó a los culpables. Según él, no había dictado ninguna resolución en el proceso criminal, sino en el expediente administrativo.

La verdad es que todo este caso siempre me pareció una tinterillada. Ningún juez, por muy superior que sea, puede intervenir en un proceso cuyo conocimiento le corresponde a otro juez. Los acusadores afirmaban que «ni aún a pretexto de la existencia de un presunto sumario administrativo el presidente de la Corte Suprema puede dictar una resolución en una causa en estado de sumario y en trámite». Y era eso, precisamente, lo que se le imputaba a Jordán. Pues bien ¿y qué decía entonces la bendita resolución? Cualquiera habría pensado que decretaba la libertad de algún inculpado, que sobreseía la causa o que ordenaba destruir el pasaporte falsificado. Pero no, nada de eso. El texto de su resolución se limitaba a lo siguiente: «Devuélvase al juzgado de origen, quien deberá mantener la causa en custodia

por el secretario del tribunal». Eso era todo. ¡Que el expediente se guardara para impedir su extravío!

El asunto era absurdo, pero los acusadores insistían en que Jordán físicamente había dictado la resolución en el expediente criminal. El acusado aseguraba que no. En definitiva, tal como explicó el secretario de la Corte Suprema, cuando Jordán pidió el expediente, le fue enviado con un oficio. Jordán estampó su resolución al dorso de ese documento el que debía, lógicamente, ser acompañado al expediente administrativo, volviendo el proceso a su tribunal de origen, junto a una fotocopia del mismo. Pero ocurrió que el funcionario que debía coser ese oficio lo hizo en el expediente equivocado: original y fotocopia se intercambiaron. ¡Eso era todo! Pero igual se armó una polémica de varios días para establecer dónde diablos se había estampado la resolución.

La polémica dejó al descubierto otra cosa: la certeza de la UDI sólo podía provenir de haber visto el expediente. Y eso podría haber ocurrido sólo en dos lugares: en el propio juzgado o en las oficinas del CDE, y en ambos casos era violación del secreto del sumario.

A todo esto, el tono general de la comparecencia de Clara Szczaranski ante la comisión fue muy adverso a Jordán. Ignacio Walker, no sé si por olfato o porque manejaba algún antecedente, me había anticipado que sería así. Lo concreto es que cuando se publicaron las actas de las sesiones en que ella intervino, *El Mercurio* tituló: «Para Consejo de Defensa del Estado Jordán interfirió la labor de otro tribunal». La UDI, de ahí en adelante, afirmó que el CDE había confirmado el mérito de la acusación.

Sin embargo, Clara Szczaranski afirmó ante la Comisión que cuando Jordán pidió y obtuvo los antecedentes de García Pica y los actuarios pensó que «tal vez sólo era curiosidad o un exceso de celo que no iba a tener consecuencias para el proceso, pero cuando opina sobre el imputado, exculpándolo, o sobre la calidad de las pruebas, desvirtuándolas, está teniendo injerencia en lo jurisdiccional». Respecto del caso de Rita Romero, aclaró que Jordán no había tenido absolutamente nada que ver con las resoluciones, abiertamente irregulares, dictadas para sobreseer el proceso.

Más que eso, cuando se le preguntó directamente si las conductas de Jordán obstaculizaban la tramitación de las causas por narcotráfico, su respuesta no dejó lugar a dudas:

—Jamás he dicho que el presidente de la Corte Suprema impida la investigación de los delitos de narcotráfico.

Sentencia anticipada

Con todo, los aspectos jurídicos no parecían importarle a nadie y pocos reparaban en que el avance de la investigación había ido desmoronando los cargos. Eran dos planos separados: el trabajo de la Comisión decía una cosa, los diarios otra. Tampoco parecía tener relevancia alguna que en nuestro sistema político la acusación no sea un procedimiento para que los parlamentarios expresen su falta de confianza o respaldo a las autoridades —como ocurre en los regímenes parlamentarios— sino que tiene el carácter de un auténtico juicio constitucional que exige cargos fundados, basados en hechos acreditados y encuadrados en la propia Constitución. Por mucho que las autoridades de la República susceptibles de ser acusadas merezcan un juicio negativo entre los parlamentarios (sea o no justificado), ese hecho no basta para destituirlos si previamente no se ha acreditado la conducta ilícita que la Constitución señala como fundamento.

El tema, sin embargo, fue polarizándose cada vez más: a favor o en contra de Jordán, a favor o en contra del avance de la droga, a favor o en contra de la Corte Suprema. No sólo entre gente de la calle. También la llamada «clase dirigente» entró en el mismo juego.

—Yo tengo juicio formado hace rato —me dijo a la salida de un ascensor Fanny Pollarollo—. Estos caballeros alguna vez tendrán que pagar por los derechos humanos.

Cuando fuimos con Ignacio Walker a hablar con uno de los penalistas más prestigiosos del país, la respuesta, aunque desde un ángulo diferente, no fue muy distinta.

—No sigamos discutiendo la acusación. Está más que claro que no tiene mucho fundamento, pero el problema es que Jordán es un carajo. ¡Hay que aprovechar como sea la oportunidad para echarlo!

Hablé con Carlos Figueroa, ministro del Interior para preguntarle si había una opinión del gobierno sobre el tema.

—No —me dijo—. El gobierno ha resuelto marginarse del tema, ya que es un asunto de otro poder del Estado, pero para mí, Jordán es un muerto caminando. Los diarios lo han masacrado. Y nadie va a gastarse un segundo en ver el trabajo de tu comisión. Para la opinión pública la sentencia ya está dictada.

Fui a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile invitado por el profesor Raúl Tavolari —una gran ayuda para el trabajo de la comisión— a explicar el caso a sus alumnos y antes conversamos el tema en la sala de profesores. Ante un grupo que se había formado, Juan Agustín Figueroa, sin ningún recato, relató el caso de un abogado integrante, a quien supuestamente Jordán le habría pedido que intercediera por un narcotraficante en un proceso tiempo atrás. Mientras discutíamos sobre si un antecedente así podía ser tomado en cuenta por los diputados —cosa en la cual ninguno estuvo de acuerdo— yo memoricé el nombre del protagonista de la historia.

Al volver a mi oficina, conseguí su teléfono:

—Mire Andrés, a lo que me pregunta le contesto que no refuto ni avalo, ni sí ni no. Mi respuesta no puede interpretarse ni para bien ni para mal. Si usted me cita a la comisión no voy a ir o, si voy, le contestaré exactamente lo mismo.

La verdad es que estábamos llenos de rumores… que de ahí no pasaban.

De cualquier manera, la conversación más importante la tuvimos con uno de los más prestigiados ministros de la Suprema. Ignacio Walker había sido su alumno, así es que aceptó recibirnos en su departamento un domingo… a las 8:00 de la mañana.

—Apenas me llamaron quise hablar con ustedes y creo tener autoridad moral para hacerlo. Fui uno de los que quiso que Jordán no fuera electo presidente de la Suprema. Es una persona

que cree que siempre viene de vuelta. En la Corte decían que se parecía a Gary Cooper. Y Jordán se lo creyó. Su designación era inconveniente, pero aquí no hay que resolver si debió ser elegido, sino si debe ser destituido. ¡Y por Dios que es distinto!

—Estamos llenos de rumores sobre Jordán —le agregué.

—Lo de chivo expiatorio es asunto viejo. En la Corte también circulan los rumores, pero cuando yo mismo he pedido que concreten los cuentos, nunca aparecen. ¿Pueden ustedes imaginar lo que significaría destituir a la cabeza de la Corte Suprema? ¡Aquí sólo hay que actuar con certezas!

Y, por último, remató la conversación.

—¿Quieren una opinión franca? Yo he seguido toda la acusación y la conozco bien. Jordán tiene muchos defectos, pero... de lo que está siendo acusado definitivamente no es culpable. ¡No permitan que se cometa una injusticia!

EN LA ENCRUCIJADA

A medida que se acercaba el momento de resolver, a mí se me clarificaba más el panorama internamente, al tiempo que mi situación se hacía cada vez más compleja en términos públicos. «Allamand sabe que está entre dos fuegos. Que si vota contra Jordán aparecerá apoyando la acusación de su competidor UDI, y si lo hace a favor, lo acusarán de estar coludido con el narcotráfico» escribió *El Mercurio*.

Estaba más que de cajón que no faltarían interesados en que las cosas se percibieran así. Y las mismas voces que el año pasado habían llenado los pasillos de la Cámara con infundios en mi contra ahora reaparecieron.

Muchas veces he tenido dudas antes de tomar una decisión política. A veces uno vacila, es difícil prever las consecuencias, calibrar los pro y los contra. Sin embargo, aquí no tuve ninguna vacilación, porque para mí el problema era diferente: desde el principio resolví separar intelectualmente la decisión de sus efectos personales y políticos. Si llegaba al convencimiento de

que había fundamento para acusar, así lo iba a hacer y, de lo contrario, simplemente votaría en contra del libelo. Así de simple. La verdad es que no tengo estómago para sentenciar a alguien de cuya culpabilidad no estoy convencido. Y tampoco reclamo por ello condecoraciones. Quiero creer que la mayoría en mi lugar habría hecho lo mismo.

No me fue difícil actuar así, por lo demás. Todos mis amigos —partiendo por Juan Luis y la Lucía, cuya opinión de «madre superiora» era siempre atendida en los trances difíciles— y todo mi equipo más cercano me respaldaron de la mejor manera imaginable.

—Ayer se comentó el tema en el comando de la campaña —me dijo Bernardo Matte—. No te voy a insistir en que electoralmente aparecer defendiendo a Jordán puede ser mortal y sabes lo que yo mismo pienso del personaje. Pero te llamo para decirte que resuelvas lo que a tí te parezca. En una cosa así, de conciencia, te vamos a apoyar siempre.

Para despejar las últimas dudas, la reunión final que sostuvimos con Ignacio Walker y nuestro «equipo asesor» resultó extremadamente esclarecedora. En concreto, correspondía dilucidar si las declaraciones de Jordán rebajándole importancia y gravedad a la conducta de los actuarios y de García Pica daban mérito para recomendar la acusación. Me parece estar oyendo a Ricardo Rivadeneira en el rigor de su argumentación:

—Exculpar a alguien requiere dolo, esto es, voluntad de hacerlo. Fíjense en todas las declaraciones de Jordán. ¡Todas se las sacan los periodistas a tirones! Y un día dice una cosa y al siguiente se contradice. Yo no veo que allí haya habido ánimo de exculpar. Los demás ministros que opinan sobre García Pica dicen casi lo mismo que Jordán. ¿También los podrían acusar por eso? ¡Por favor, si un «supremo» le quiere mandar un mensaje a un juez no lo hace por el diario! Con esto me pasa lo mismo que con el resto de las actuaciones de Jordán. La UDI dice que actúa solapadamente, pero no es así. Pide las querellas por teléfono, se las mandan por fax, interroga a los testigos en su propio despacho de la Corte Suprema y cuando le van a informar

de la querella, en vez de quedarse callado, se anticipa a decir que ya la tiene. ¡Él mismo, solito, le informa a los diarios de todas las cosas por las que después lo acusan! A mí me parece que no es el *modus operandi* de alguien que protege a narcotraficantes.

No pude estar más de acuerdo con su parecer. También con que, de todos modos, correspondía formularle a Jordán un fuerte reproche, aunque dejando claro que en nuestra opinión sus dichos no tenían la densidad suficiente para destituirlo. El informe de la comisión así lo consignó: «Las declaraciones del acusado aparecen como imprudentes y necias. Y han excedido el límite aceptable por la virtud de la prudencia».

—Digamos las cosas como son. Si al final Jordán es destituido, nadie va a creer que fue por palabras más o palabras menos, ni por la forma en que se tramitan los expedientes administrativos en la Suprema. Todo el mundo pensará que fue por estar coludido con el narcotráfico. Y con los antecedentes que tenemos ni el país, ni la Corte Suprema, ni el propio Jordán se merecen una cosa así —afirmó Cristián Maturana.

Juan Luis Ossa y Patricio Zapata eran de idéntica opinión.

MATAR AL TIGRE Y HUIR DESPAVORIDO

El punto de mayor tensión del trabajo de la comisión fueron mis diferencias con Longueira y Bombal. Ellos sostenían que mi calificación de la acusación —la imputación a Jordán de ser un agente protector del narcotráfico— era inexacta. Ambos insistían en estar acusándolo sólo de «notable abandono de deberes». A la hora del debate final se demostraría que no era una discusión semántica.

Efectivamente, cuando se inició el debate en la sala de la Cámara el viernes 25 de julio, ése fue quizás el principal punto de discordia. Respecto de todo lo demás —los hechos, los argumentos y contrargumentos— las sorpresas fueron muy pocas. Pero Andrés Chadwick, en representación de la UDI, levantó el tema:

—Reclamo un derecho: que la interpretación, el alcance y la profundidad del cargo que se formula lo dejemos a los acusadores. Hay algunos que afirman que el cargo consistiría en que el presidente de la Corte Suprema sería una especie de agente protector del narcotráfico. Falso, absolutamente falso. El cargo es: conductas ministeriales ejercidas fuera de la ley, que inciden en una investigación jurisdiccional en estado de sumario, sobre una causa de narcotráfico y lavado de dinero, sin calificativos.

¿Sin calificativos? ¡Por favor! El planteamiento no me convenció a mí ni tampoco a muchos otros diputados. Jorge Schaulsohn fue enfático:

—Respecto de esta acusación hemos observado un doble juego. A medida que se estima por los acusadores que la vara está demasiado alta, la acusación es reformulada: ya no es por narcotráfico, es por falta de deberes ministeriales. ¡Qué duda cabe que aquí se partió con una acusación de ser parte de una red de narcotráfico! Se nos pide ahora que juzguemos al señor Jordán por conductas ministeriales que han incidido en una causa criminal. Pero ¿en qué han incidido? ¿Acaso el proceso no sigue adelante? ¿No ha declarado la jueza Beatriz Pedrals que nada le impide llevar adelante la causa? No basta con decir, aquí hay que probar que las actuaciones de Jordán —independientemente de cómo las califiquemos— han perjudicado la causa criminal.

Y luego concluyó:

—El cargo verdadero, de ser parte de una red de narcotraficantes ha sido abandonado, incluso por los acusadores y la nueva versión de la acusación no resiste el menor análisis desde el punto de vista de las pruebas. He escuchado decir que si se vota contra la acusación no se está firme en la lucha contra el narcotráfico, pero ¡con tropelías jurídicas no se lucha contra el narcotráfico ni se fortalece nuestra institucionalidad!

El debate fue largo y agitado. Volaron los argumentos a favor y en contra, pero yo prestaba especial atención a los que no tenía idea cómo votarían.

—Más allá del recinto hay una gran expectación, pero no siempre la voz enardecida del pueblo es la voz serena y justa del

Creador. El juicio popular no repara en sutilezas procesales: es simple, crudo y directo. Aquí la sentencia es clara: alguien tiene que pagar por los desmanes del Poder Judicial. ¿Quién más indicado que su máximo exponente? Sobre todo si es atípico: jurista no alineado, pintor, escultor, motociclista, púgil, díscolo, imprudente, «Rambo procesal». Pero no hemos sido convocados a pronunciarnos sobre el genotipo de don Servando Jordán. Debemos decidir si es efectivamente «un agente protector del narcotráfico». Sé que hoy se quiere retirar abruptamente esta acusación, que está en el trasfondo de todo lo que se ha afirmado. ¡No es nuevo aquello de matar al tigre y salir despavoridos ante la visión de su piel! Quiero resumirlo todo en una confesión íntima. Mi voluntad ha sido acusar constitucionalmente a Jordán. Desgraciadamente, tal deseo no logré sustentarlo en una convicción plena acerca del gravísimo delito que se le imputa —dijo en su original estilo Nelson Ávila.

Principios en las estrellas

Cuando me correspondió intervenir al final de la sesión, la mayoría de los argumentos ya estaban dados. Por eso, resolví tratar de enfocar el tema desde otro ángulo. Dije que «los principios se parecen a las estrellas, están presentes en el cielo para iluminar en los momentos de duda» y luego solté todo lo que tenía adentro:

«El primer principio es que en democracia se enjuicia a las personas por cargos concretos y definidos y sólo se les sanciona cuando éstos se acreditan. ¡Y los cargos de una acusación no son de plasticina y no pueden cambiarse al antojo de quienes las deducen!

«El segundo principio es que no es legítimo sancionar a las personas por razones que no constan en los respectivos procesos.

«El tercer principio, es que no hay juicios populares y ¡por favor! los juicios populares modernos no son como los de antaño, que tenían lugar en la plaza pública. Hoy los juicios populares se digitan desde las salas de redacción de los medios de comunicación.

«El cuarto principio es que no hay juicios universales y aquí hay varios que han dicho que la acusación debe prosperar porque se enjuicia al conjunto de la justicia chilena. ¡No se pretenda aquí en un acto de expiación colectiva purgar la postergación a que el Poder Judicial ha sido sometido por el poder político por décadas!

«El quinto principio es que las «razones de Estado» son repugnantes para la democracia. ¿Por qué lo menciono? Porque hay demasiados que me han dicho que «hay que destituir a Jordán para dar una señal fuerte al narcotráfico». ¡Pero nunca una señal positiva puede surgir de un procedimiento espurio!»

Finalmente, dije que «el día en que los medios de comunicación y la voz de las encuestas que nos dicen que es tanto más popular acusar a Jordán que no hacerlo, suplanten la mente, independencia y autonomía de los miembros del Parlamento, la democracia será una cáscara». Dije más que eso: «¡Ni siquiera le tengo simpatía al señor Jordan!»

Se votó a la una de la madrugada. Y todo terminó con el mismo suspenso y emotividad que había partido.

Era previsiblemente tan estrecho el resultado que durante más de media hora se debatió cómo se contabilizarían las abstenciones: si a favor o en contra de la acusación, resolviéndose que se computarían en contra.

—En votación —dijo finalmente Gutenberg Martínez, el presidente de la Cámara.

Cuando el marcador electrónico arrojó el resultado, una exclamación de asombro llenó la sala: ¡empate! 42 votos a favor, 42 en contra. Allí quedó consignada la solitaria abstención de Camilo Escalona.

—No me voy a sumar a la acusación de la UDI. Me abstendré en espera de que se vote la segunda acusación. Ahí veremos si se quiere renovar la Suprema o tomar venganza porque el general Contreras esté preso —explicó a la prensa.

¿Cómo se llegó a ese resultado? A favor, en bloque, votaron el Partido Socialista y toda la UDI. En contra votaron todos los RN. La DC y el PPD se partieron por mitades.

Sin embargo, y como por arte de magia, cuando aún se contaban los votos, en la boca de todos los parlamentarios de la UDI reapareció el cargo abandonado. Ellos estaban muy conformes, ya que habían hecho todo lo posible para «dar una señal fuerte contra el narcotráfico que no prosperó por culpa de una máquina para exculpar a Jordán».

Para variar, en RN nos creamos nuestro propio problema: Luis Valentín Ferrada asumió en la sala —a título personal— la defensa de Jordán. Eso hizo creer a mucha gente que el rechazo de la acusación era una orden de partido en RN y Maximiano Errázuriz pareció corroborarlo cuando afirmó que había resuelto no votar a favor de la acusación, porque la directiva del partido así se lo había pedido. *El Mercurio* no se demoró en editorializar contra el «alineamiento unánime de RN», aunque el mismo reproche podría formulársele en idénticos términos a la UDI, que también se había alineado, sólo que en la postura inversa. Y tampoco trepidó en afirmar que nuestra actuación se «había interpretado como la consecuencia más de un análisis político que de los méritos de la acusación». ¿Cuál podría haber sido ese «análisis», siendo que era evidente que votar así sólo nos perjudicaría electoralmente?

No fue necesario que pasara mucho tiempo para que ello me quedara claro en vivo y en directo. En la mañana del día siguiente, en la luz roja de Estoril con Las Condes, un matrimonio me hizo señas desde el auto del lado. Querían decirme algo y pasarme un papel que parecía ser un volante. Abrí el vidrio del lado derecho y me estiré para recibirlo.

—Perdiste dos votos —me dijeron—. ¿Cómo pudiste salvar a ese corrupto y ordinario de Jordán?

El papel era un volante impreso con la siguiente leyenda: «Bombal, Chile te cree» y aparecía dibujada una escoba con otra frase más. Esa ya la conocía: «Bombal barre la droga».

Cuando llegué a mi casa tenía varios recados: volantes parecidos se habían repartido en todo Santiago.

LIBRETO EN PIEDRA

A todo esto, la segunda acusación constitucional interpuesta por la izquierda y centrada exclusivamente en el caso Arica continuaba su tramitación y, junto con el avance de la investigación, se desplomaba todo su fundamento como un castillo de naipes.

En efecto, la comisión informante, por cuatro votos contra uno, desechó la acusación, ya que un mejor conocimiento de los hechos, el testimonio de quienes habían participado directamente en los mismos, particularmente del propio abogado del CDE a cargo del caso y nuevas evidencias —como que los reos se habían fugado dos años después de otorgada la libertad— disipó por completo la tesis del «fraude procesal». Ya no sólo se trataba de que la Cámara no podía revisar el fundamento de una resolución, sino que la acusación misma carecía de todo fundamento.

—Por más que uno pueda rastrillar el proceso, no cabe duda de que al momento de las pruebas —cuestión esencial de toda acusación— no se advierte dónde puedan estar aquellas violaciones que permitan entender que hay una conducta susceptible de ser acusada constitucionalmente. Y la más injusta de las injusticias es tratar de hacer pagar a alguien por un delito respecto del cual no tuvo responsabilidad —expresó Juan Antonio Coloma.

¡Hasta diputados de la UDI se descolgaban de la acusación!

La segunda acusación fue rechazada por 49 votos y obtuvo apenas 24 a favor: sólo la apoyaron la bancada socialista en pleno, algunos PPD y apenas cuatro UDI: Bombal, Longueira, Orpis y Paya. En contra votaron todos los demás. Esta vez, al menos, —algo es algo— nadie comparó las consideraciones políticas con los méritos de la acusación.

Lo notable es que el caso más polémico, precisamente el que había dado consistencia a las acusaciones contra Jordán, se evaporaba como la niebla matinal ante los primeros rayos de sol.

No sólo eso.

Los ministros Aburto y Zurita —a quienes se había pretendido destituír con votos de izquierda y de la UDI— terminaron como senadores designados.

La misma Clara Szczaranski, un par de meses después, afirmaba haber «defendido» a Jordán diciendo que le había parecido «lícito que, en pos de lograr claridad administrativa, él hubiere abierto investigaciones respecto de lo que sucedió con los actuarios o con el pasaporte falso, en el caso de Rita Romero» y que sólo había objetado sus declaraciones sobre García Pica y los actuarios.

Sin embargo, la elogiada jueza Pedrals ni siquiera sometió a proceso por «asociación ilícita» ni por ningún otro motivo a los actuarios a quienes supuestamente Jordán había «exculpado», ¿Qué hizo el CDE?

El ex fiscal García Pica —un personaje más cerca de la obscuridad que de la beneficencia— sólo fue sometido a proceso por prevaricación (un delito distinto al que se le imputaba) y también fue absuelto, ya que operaron en su favor una serie de inexplicables tecnicismos. Al igual que con los actuarios, el CDE nunca pudo probar el delito de asociación ilícita y se allanó mansamente a lo resuelto por el tribunal.

¡Qué absurdo! Jordán estuvo a punto de ser destituido por un fallo —el de Arica— en que se determinó que no tenía arte ni parte y por «exculpar» a sujetos que, conforme al mérito del proceso y las pruebas, ni siquiera lo necesitaban.

Finalmente —y sin duda que fue un efecto positivo— prosperó la reforma constitucional para cambiar el sistema de nombramiento de la Corte Suprema… aunque a ella también se opusiera inicialmente la UDI por considerarla negativa.

Tal como esas misteriosas tormentas tropicales que de un momento a otro agitan los cielos y revuelven furiosamente las aguas, el caso Jordán me cayó encima. Yo quedé con mi conciencia tranquila... y con la firme sospecha de que el libreto de este episodio estaba de antemano escrito en piedra. Tras la trama advierto una estrategia política exitosa que fue catapultada por coincidencias, antiguas animosidades y otros intereses que convergieron con espontaneidad. La justicia chilena, la Corte Suprema y el propio Jordán era un blanco al que apuntaban —con buenas y malas razones— demasiados arcos y flechas. También

desde la ribera de la buena fe, me quedo abismado de las enormes brechas que pueden llegar a separar las percepciones de las personas. Lo mismo que a mí me pareció débil y no concluyente, fue suficiente para forjar la convicción de que Jordán debió ser destituido en muchas personas que son razonables, bienintencionadas y decentes.

El caso, de todos modos, todavía hoy suele rebotarme. ¡Cómo pudiste cometer ese error!, me dicen a veces, incluso mis amigos cercanos. Yo me limito a responder que a la gente hay que condenarla cuando se le prueba aquello de lo que se le acusa. En fin, ya llegó a mis manos un estudio académico de la Universidad Finis Terrae acreditando que las acusaciones constitucionales fueron «prácticamente la noticia más importante del año 1997» y que en su tratamiento informativo «hay un aspecto que no se puede eludir. El virtual «asesinato de imagen» que sufrió el presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, por parte de los medios, aunque algunos sostienen que él contribuyó a forjarlo a través de su antipatía hacia la prensa y falta de claridad».

Estoy seguro de que el tiempo enfriará la temperatura emocional que rodeó aquel episodio en que intervine, aunque a ello poco contribuya el propio Jordán, querellándose a diestra y siniestra contra todo periodista que se le acerque. Más adelante, las cosas se mirarán con mayor equilibrio y menos pasión.

En la vida institucional de un país las acusaciones constitucionales no son un asunto menor.

Capítulo XXI

Lluvia en el infierno

A pesar de la proximidad del verano, el 12 de diciembre de 1997 amaneció nublado. Yo me había acostado tarde, una vez que se fueron todos. Me levanté como pude. Mario —más silencioso que de costumbre— ya había llegado. Era casi como si no se hubiera ido.

En la casa se dejaba sentir todo el peso de la derrota electoral del día anterior. Necesitaba aire.

—Vamos al cerro —dije.

Sonó el teléfono. El primero que llamó fue Jaime Ravinet. El segundo, Jorge Schaulsohn. La tercera —me sorprendí primero, me emocioné después— la propia Mireya Baltra. Cada cual a su manera me transmitió un sólo sentimiento: que lo sentían.

La verdad es que no sabía qué decir. Apenas agradecer con la garganta apretada.

Empecé a subir. A los quince minutos me descubrí casi corriendo. Era una tontería. No tenía ningún apuro.

Me paré en el mirador que queda a mitad de camino a tratar de ordenar la cabeza. El dolor me consumía. Pero, ¿qué era lo que más me dolía?

Yo no he tenido una vida fácil. Y siempre he sabido que toda existencia entremezcla en distintas proporciones penas y alegrías, triunfos y fracasos.

¿Era ésta la primera derrota grande que sufría? No. Había otras. Sí, era muy distinta.

Las derrotas personales uno se las traga solo. A lo más, apoyado en la mujer, la familia, los amigos. Las derrotas políticas, en cambio, contagian al resto. Involucran a todo el ejército de buena voluntad que siempre está detrás de una campaña. Y —no es para menos— uno siente que defraudó a toda esa gente.

Más allá del momento amargo, ¿cuál sería el futuro del proyecto? El horizonte no podía ser más negro. La derrota era aplastante. Aplastante para mí y para Renovación. El esfuerzo de quince años empezaba a evaporarse. Tenía 41 años. Desde los 27 me había dedicado en cuerpo y alma a una empresa que parecía en completa bancarrota. Casi quince años. Los mejores años de la vida, dicen.

La única tranquilidad era haber reaccionado bien en la peor hora. Todo lo vivido el día anterior aún palpitaba. Sólo me aliviaba no sentir ningún resentimiento. Y si a alguien no podía culpar era a la gente. Jamás me he refugiado en aquello de que «nuestro mensaje fue incomprendido» y no lo iba a hacer ahora. Había estado bien decir que la «primera norma de alguien que ama la democracia es recibir de buen ánimo el veredicto del pueblo, tanto cuando es favorable como cuando es adverso».

Seguí subiendo. Y —cosa rara— empezó a llover.

Un rato más tarde descubrí lo que más me dolía: saber en la campaña todo lo había hecho muy mal. En situaciones de amargura la mente actúa como pantalla protectora. Busca culpables. Pretexta justificaciones. Pero yo no tenía a mi alcance esa coartada fácil: soy pésimo para engañarme a mí mismo.

Esa mañana de diciembre llovió a cántaros. Bajé un par de horas más tarde. Empapado y muerto de frío.

—Don Andrés —me dijo Mario—, el teléfono no ha parado.

Eran más de treinta llamados. Le contesté a Gastón Cummins.

—¿Qué hay, Andrés?

—Me quiero morir. Pero acabo de hacer un descubrimiento.

—¿Cúal? —me preguntó.

—Que en el infierno llueve.

JORDÁN Y OTRAS YERBAS

Tres semanas después de la acusación contra Jordán, una encuesta interna arrojó datos devastadores. Mientras yo caía en casi diez puntos, Bombal mejoraba sus posiciones. De ahí en adelante la mayoría de las encuestas —que hasta ese momento eran muy parejas— fueron casi invariablemente adversas. Según las cuentas de Rodrigo Ubilla, mi jefe de campaña, estábamos muchos, muchos votos detrás.

—En una elección estrecha es difícil ganar votos; pero recuperarlos es casi imposible —sentenció temprano.

Sin embargo, no todo era culpa del episodio Jordán. En rigor, las dificultades habían empezado a principios de año.

La primera sorpresa fue en febrero de 1997. Desde el interior de RN surgieron infidencias extrañas. *El Mercurio* explicaba que «según altas fuentes de RN», sobre la base de encuestas privadas, Sebastián Piñera disputaba la primera mayoría en ambas circunscripciones de Santiago, en tanto Allamand «lucharía apenas por un cupo con los candidatos de la UDI Carlos Bombal y Jovino Novoa» por lo que «según trascendidos, un sector de RN estaría pensando en apoyar la postulación de Sebastián Piñera para los comicios presidenciales de 1999».

Estaba en Estados Unidos, acompañando a Frei en su visita oficial, cuando supe la noticia. Era pleno verano y la actividad política era poca. El asunto sería tema. Y así fue. Un enredo. Sebastián declaraba una y otra vez que «cada cosa tiene su tiempo... hoy Allamand tiene la primera opción», con lo que dejaba las cosas peor que antes. Otras publicaciones titulaban que los dos estábamos «a un paso del *ring*». Todo era extemporáneo. Por lo demás, hasta ese momento Piñera insistía en no postular a la reelección —había anunciado intempestivamente su retiro en 1995— pese a todas las peticiones que le habíamos hecho para que cambiara de opinión. Yo, el primero. Una candidatura de Sebastián Piñera era óptima para el partido y para mi propia

candidatura. Automáticamente potenciaba el proyecto, lo ponía a competir en todo Santiago y generaba una importante sinergía.

Las bromas en el avión presidencial no pararon. El que se lo tomó en serio fue Juan Gabriel Valdés, con quien nos sentamos juntos en varios tramos del viaje.

—¿Para qué te debilitan los tuyos? —se preguntaba en voz alta.

A medida que se acercaba la fecha de inscripción de los candidatos, se armaba más polémica por la nueva competencia Bombal-Allamand. Mis amigos más lejanos al mundo de la política me aseguraban que era un error. ¿Para qué poner a los dos mejores candidatos en el mismo lugar? Más aún, cuando ahora, a diferencia de 1993, no había ninguna posibilidad de doblar a la Concertación.

¡No te muevas!

Un día domingo en la noche vino a verme a mi casa Ernesto Silva, uno de los responsables de la campaña de Bombal. Con Ernesto estábamos bastante distanciados desde los duros días del quiebre de RN, allá por el año 1988.

—No tienes ninguna posibilidad de ganar —me argumentó de entrada—. Y si alguna tenías, la perdiste con la acusación de Jordán. Antes de la acusación, Carlos también te estaba ganado en toda la circunscripción. La imagen de RN es pésima y la tuya está muy deteriorada. Nosotros vamos a tener una campaña fácil y tú una difícil. Yo sé que va a costar que nos creas, pero no queremos que te pierdas. Lo mejor para todos es que Carlos y tú se vayan a regiones.

Le oí con atención. Me pareció de buena fe.

Santiago tiene dos circunscripciones senatoriales: Oriente y Poniente. Le expliqué a Ernesto que había sugerido que Carlos Bombal fuera en el Poniente, donde la UDI tenía un gran núcleo de diputados y yo en el Oriente, donde ocurría lo inverso, pero que tal posibilidad se había frustrado luego de que la UDI la rechazó de plano: Jovino Novoa era el candidato del Poniente.

—Además, si no vamos Carlos y yo, ¿quién se queda en la zona Oriente?

—Ese no es tu problema. ¿Cómo Renovación no entiende que pierde mucho más que un senador? En la UDI somos distintos —concluyó—. Nosotros, jamás te arriesgaríamos! Preséntate en otra parte!

Al día siguiente, le pregunté a la Bárbara su opinión.

No tuvo dudas. Era mejor ser candidato en alguna región. Abordar otros problemas. Conocer otra gente. Cambiar de ambiente. Acá sólo se repetirían todos los conflictos. Además, ya por esa fecha la Bárbara había generado un fuerte rechazo hacia todo lo que oliera a Renovación y, en general, a política.

—No te das cuenta, pero estás prisionero de la política —me repetía.

Y algo de eso había. Pero más que prisionero estaba enclaustrado. Sumido hasta el cuello. Había perdido la distancia que siempre hay que mantener con los asuntos públicos. Una vez le oí decir a Aylwin que después de ser presidente lo que más apreciaba era leer los diarios como cualquier vecino. ¡Sólo los políticos sabemos lo desgastantes que son los diarios y lo agobiante que pueden ser los noticiarios de televisión! La gente los lee por rutina; los políticos por trabajo. Al principio, uno quiere que la gente lo reconozca —señal inequívoca de una carrera en ascenso—; al final, disfruta pasando inadvertido. ¡Siempre atrasado! ¡Como gitano de un lado a otro! Y lo peor, dando examen, sujeto al juicio público, en boca —para bien o para mal— de los demás. Sin escape.

Había algo más que no quería reconocer frente a mí mismo: estaba golpeado. Me sentía como esos jugadores que cuando tienen que jugar la final del campeonato resienten en los huesos lo duro de la temporada. En los últimos conflictos había contrariado lo que la propia derecha consideraba «políticamente correcto». Eso es lo que más me desgastaba: siempre enfrentado a los propios. Y tampoco ayudaba a tener la cabeza fría el fuego por demostrarle a todos —particularmente a los que desde dentro de RN habían sido tan arteros— que tenía la razón.

Con todo, cuando planteé la posibilidad de cambiar de región, la respuesta de la directiva y de mi equipo fue una sola:

—¡No te muevas!

Pese a ello, para afirmar la idea, declaré a los diarios que yo era un *boy scout:* postularía donde más le conviniera a RN. Al mismo tiempo, propuse que me reemplazara Sebastián Piñera: dos pájaros de un tiro. Recuperábamos a nuestro mejor senador y asegurábamos otra senaturía. Sin embargo, la UDI rechazó de plano tal idea y planteó, en cambio, que lleváramos un independiente con olor a «fáctico» ¡Algo inaceptable! ¿Cómo pedirle a Renovación que abandonara la zona más importante electoralmente del país? De todas formas, nunca me «jugué» al límite por cambiar de lugar. Quizás por no aparecer acobardado o por sentirme rehén de haber repetido tantas veces que «los líderes están para asumir las posiciones más difíciles y no las más cómodas».

Esa última argumentación sulfuraba a mi hermano Pablo.

—Es una perfecta estupidez. Con ese criterio los generales deberían ir manejando el primer tanque.

Alberto Espina, recogiendo la opinión mayoritaria de los dirigentes, se mandó una analogía que todavía me retumba en los oídos:

—Que nos pidan que cambiemos de zona a Allamand y Fantuzzi es como que a Nelson Acosta le pidan que cambie de la selección chilena a Marcelo Salas y al *Bam Bam* Zamorano.

La suerte quedó echada. Era candidato por el lugar más difícil.

UN ERROR Y OTRO MÁS

Definida la competencia entre Bombal y yo, estaba claro que se repetiría el duelo de 1993. Y ahora con mayor proyección.

Pero siempre resultó difícil encajar en el formato de una campaña senatorial el dilema entre dos formas distintas de entender la identidad, el lugar y la proyección de la derecha. Los temas de la campaña fueron muy distintos. En el fondo, la campaña

tendría que ver con los proyectos, pero en la superficie tendría que ver con otros tópicos.

El enfoque de la candidatura de Bombal quedó acreditado desde el principio. «Yo estoy con Bombal» firmaba Joaquín Lavín, junto a una foto de ambos en actitud relajada. Luego venían los lemas: «Porque lucha contra la droga; porque combate la corrupción; porque es un líder de unidad; porque fue un gran alcalde y es un gran diputado; porque es un líder que lucha por las cosas que realmente importan».

¡Un modelo de comunicación política eficaz! El apoyo de Lavín era importante, puesto que después de la elección municipal su figura había emergido con vigor. Siempre había tenido una evaluación personal alta, pero también empezó a ascender como «personaje más importante de la oposición». En marzo de 1997 Joaquín me superaba levemente allí, pero hacia el final de la campaña lo hacía con amplitud: 26,8% contra 18,8%.

El tema de la droga y la corrupción enlazaba perfecto con la acusación constitucional. La apelación a la unidad era un sutil golpe al mentón: refrescaban que mis esfuerzos tendientes a reformar la Constitución habían «dividido a la derecha». El recuerdo de la gestión como alcalde permitía al candidato una imagen de realizador que «sintonizaba» con la que le prestaba Lavín. Por último, aquello de luchar por «lo que importa» era también un recurso certero. La democracia y sus instituciones era más un problema de «los políticos» que de la gente.

A la inversa, yo me debatía en la confusión. Mis materiales de campaña nunca explicaron correctamente al electorado el significado de votar por mí. Eran técnicamente buenos y gráficamente impecables, pero de contenidos difusos. Enfatizaban una trayectoria eminentemente política: «Allamand ha jugado un papel relevante en todas las etapas políticas que han configurado el Chile de hoy». Y todo era en retrospectiva, a pesar de que una campaña siempre debe tener contenidos concretos hacia adelante.

Tampoco resultó la conformación de mi equipo electoral. En la circunscripción hay ocho distritos. En tres de ellos RN tenía

diputados (María Angélica Cristi, Alberto Espina y Maximiano Errázuriz) y en un cuarto nuestra candidata (Lily Pérez) tenía un gran perfil. En otros tres, había diputados UDI (Iván Moreira, Jaime Orpis, Darío Paya) y en el último —Las Condes— ahora competirían María Pía y Guzmán Julio Dittborn.

En los cuatro distritos donde éramos fuertes, la UDI presentó candidatos que nunca hicieron campaña. En ellos, Bombal llamaba sin tapujos a apoyar a los candidatos a diputados de RN. Esa hábil estrategia terminó por complicar a nuestros equipos en terreno: si el candidato a senador UDI apoyaba al diputado RN, era difícil «devolverle la mano» llamando a votar por el candidato a senador RN.

La idea de dar la campaña en equipo con los diputados no funcionó. Más aún, ahí mismo se evidenciaba mi debilidad: así como unos trabajaron codo a codo conmigo, otros preferían tenerme a miles de kilómetros de distancia. Y los resultados no mienten: yo apenas superé los 200 mil votos, los candidatos a diputados de RN casi llegaron a 300 mil.

—Don Andrés, algo pasa con los discursos. La gente parece atenta, pero a mí me da la impresión de que están pensando en otra cosa —dijo Mario, de vuelta de una reunión en La Florida.

Yo también notaba que la comunicación con la gente era difícil. Después de años de experiencia, uno tiene cierta elocuencia y oficio, por lo que nadie se iba a ir de una reunión por aburrimiento, pero algo pasaba.

Me convencí del problema después de los debates en televisión a los que el mundo político les había asignado un papel clave. Los comentaristas dijeron que Jaime Estévez y yo tuvimos los mejores desempeños en los foros. En la práctica, sin embargo, no tuvieron relevancia: los *ratings* fueron bajísimos.

Nunca logré percibir hasta qué extremo el ambiente general era refractario a la política. Los jóvenes no se inscribían en los registros. El golpe más revelador llegó el día de la elección: 300 mil votos en blanco, 940 mil votos nulos. No acudieron a votar un millón 100 mil personas. Abstención, nulos, blancos y no inscritos se acercaban al 40% del universo electoral.

Dos más dos: en un ambiente propicio para cultivar el mensaje «apolítico» de la UDI, mi propuesta politizada se estrellaba contra un muro de indiferencia.

Si esa falta de sintonía era grave, fue mucho peor lo que ocurrió con la franja de propaganda electoral.

Habíamos resuelto dar la campaña con el contenido del programa que preparé en el Instituto Libertad, cuyo lema era «Chile necesita un cambio». Pero desde el primer día ese mensaje se sobregiró. Para potenciar la idea central, se exageró la crítica. Era, sin duda, la franja más confrontacional de todas. A la inversa, la franja de la UDI era todo armonía. La imagen que se grabó en la mente de la ciudadanía era la de los candidatos de la UDI, con Lavín a la cabeza, caminando por una playa solitaria.

Era imposible para el electorado entender que RN, el partido de los acuerdos y la estabilidad, el que se había desangrado por reformar junto al gobierno la Constitución, apareciera ahora como su más feroz opositor ¡Simplemente no era creíble! Y lo peor es que en la retina de los telespectadores el equipo que le ofrecía cambiar con un estilo pragmático, realizador y cercano a la gente, era la UDI. ¡Nadie sabe para quién trabaja!

Una semana antes del término de la campaña, asistí a una reunión en la Comuna de San Joaquín. Llegué —imposible algo distinto— bastante tarde. Habitualmente, esas reuniones parten con una exposición del candidato y luego se abre un espacio para preguntas. El dueño de casa no me dejó repetir esta rutina. Dijo que había que aprovechar el tiempo y que él reclamaba el derecho a ser un «entrevistador». Y me bombardeó sin pausa. ¿Cómo superar las deficiencias de la educación pública y cerrar la brecha con la particular pagada? ¿Había o no subsidios cruzados que favorecían a las Isapres? ¿Por qué el sistema de salud público funcionaba tan mal y el privado era tan caro? ¿En qué consistía la «tolerancia cero» en materia de seguridad ciudadana? ¿Cómo hacer accesible la universidad a la clase media? Y así, sin parar, durante más de una hora. La única pregunta política que me hizo se refería al por qué los jóvenes no se interesaban... en la política.

Fue la mejor reunión de toda la campaña.

—Hoy sí que ganamos votos, don Andrés —fue todo lo que dijo Mario al subirme al auto.

Pero, en realidad, estaba diciendo algo distinto: nos habíamos equivocado. Debimos plantear la campaña de forma diametralmente distinta.

Se aprieta el círculo

A principios de agosto, Jarpa renunció a Renovación Nacional y adelantó que participaría en la campaña apoyando a los candidatos que estuvieran «por respaldar la institucionalidad vigente». A los pocos días, apareció en escena para fundar un movimiento —el enésimo de su vida política— llamado Chilefuturo, junto a un grupo de acérrimos defensores del gobierno militar. En términos de organización nada, apenas una fachada, pero útil y muy bien manejada.

A los pocos días, empezó a otorgar apoyos a todos los candidatos a senadores de la UDI. Era tan obvia la movida, que en cada proclamación le preguntaban cuándo apoyaría a Bombal. Cuando lo hizo, los diarios sólo dijeron que Jarpa «confirmó su apoyo a Bombal».

La Época lo interpretó señalando que «Jarpa ha cerrado el círculo. Su decisión de abandonar RN para formar un movimiento político extra partidario ha revelado al fin su lectura más previsible y ruda: una operación en contra de la postulación de Andrés Allamand».

Como quiera que sea, la acción electoral de Jarpa fue decisiva en la campaña.

En primer lugar, porque en Renovación, para variar, cometimos un grave error. Apenas Jarpa empezó con sus apoyos, yo le resté importancia. «En democracia cada cual puede apoyar a quien le parezca», dije, asumiendo que había tenido —a diferencia de otros que desde dentro atornillaban al revés— la decencia de renunciar al partido. Sin enganchar en ninguna polémica

sólo insinué que su movimiento debería haberse llamado «Chile-pasado».

La reacción del partido, sin embargo, fue bastante más allá de esa ironía. Alberto, en su calidad de presidente, lo enfrentó duramente. En declaraciones furibundas lo acusó de representar «un pasado lleno de odiosidades» en lo que no dejaba de tener razón: a fin de cuentas, Jarpa se había enfrentado duramente con diversos liderazgos jóvenes: Jaime Guzmán, Sebastián Piñera, Alberto Espina y yo mismo.

El apoyo de Jarpa fue útil para los candidatos de la UDI, ya que el electorado castiga severamente al candidato que polemiza con su compañero de lista. Jarpa no era candidato, de modo que sus planteamientos aparecían carentes de interés personal y, por venir de quien venían, penetraban en el electorado tradicional de la derecha. Hizo un «trabajo sucio» en favor de los candidatos UDI y socavó apoyos importantes para los RN.

Lo insólito fue que Jarpa terminó trabajando en contra de algunos de sus más fieles y fervorosos partidarios de Renovación y apoyando a algunos de sus detractores políticos más severos. Sin embargo, en ninguna zona se sobregiró tanto a sí mismo como en Santiago-Poniente, donde apoyó a Jovino Novoa en perjuicio de Ángel Fantuzzi, sin duda el más fiel de sus amigos al interior de RN.

Todavía recuerdo el día en que lo hizo. Me topé con Ángel —italiano hasta los poros, buen amigo hasta los huesos—, ya que teníamos que grabar para la franja de televisión. Me dijo lo mismo que le repetiría a los periodistas.

—No entiendo cómo don Sergio apoya a personas que hasta hace muy poco lo detestaban. Pero sobre todo, ¿cómo me hace esto a mí, cuando sabe que por él estoy en la política?

Estaba desolado. Sentía el *sappore amaro vil tradimento.*

Igual a Jarpa le seguía diciendo «don Sergio».

«LA DERECHA LIBERAL NO EXISTE...»

Hubo otro elemento perjudicial: la actitud de los adversarios. La lista de la Concertación estaba formada por dos muy buenos candidatos: Alejandro Foxley, ex ministro de Hacienda de Aylwin y ex presidente del PDC, y Jaime Estévez, uno de los artífices de la renovación socialista y ex presidente de la Cámara de Diputados. También estaba Mireya Baltra, histórica dirigente del PC, que hizo una campaña casi sin medios, pero recogió sin problemas la votación incondicional de esa colectividad: más del 7%.

La dinámica de la campaña, los foros, las entrevistas y todas las actividades terminaban enfrentándome a mí con los dos primeros. La razón era simple: tanto Foxley como Estévez estaban muy advertidos de la votación «cruzada» que me había favorecido cuatro años atrás. Esta vez, no iban a aceptar ese drenaje. Desde el primer día me «empujaron» hacia la derecha y en los debates —dado que Bombal virtualmente se marginaba de los mismos— siempre terminaba yo polemizando con los dos.

Las entrevistas de la última semana de ambos candidatos mostraron una coordinación perfecta: el título de una de Foxley era: «La derecha liberal ha perdido todas las batallas»; la de Estévez era: «Pinochet sigue siendo el caudillo de la derecha». Y adentro el mensaje era compacto y coordinado:

—La derecha liberal ha perdido total vigencia. Ese proyecto fue de muy pocas personas que tomaron el poder formal en RN, pero que nunca lograron que prendiera en la derecha. Hoy surge una derecha conservadora donde se aglutina la UDI, Jarpa y Pinochet en el Senado —declaraba Foxley.

—Aquí ha fracasado la derecha liberal. RN es en su alma más conservador que la UDI. Si a la gente no le gusta Pinochet, vota por nosotros. El drama de Allamand es ser de derecha y no gustarle a los militares, lo que es una contradicción —remachaba Estévez.

Ambos sostenían a coro que mi campaña no tenía ninguna posibilidad de disputar votos en el centro político y que estaba

en un dilema insalvable: «Si Allamand se mueve al centro, le va a traspasar todos los votos duros a Bombal; y si se «endurece», pierde todos los votos del centro».

Tal enfoque fue eficaz. Cuando hay cuatro voces y dos participan de una misma posición, se nota. Era otra paradoja: en términos de estabilidad y adecuado funcionamiento del sistema democrático, RN era la «mejor» derecha para la Concertación, pero por lo mismo, era la «peor» derecha a la hora de las contiendas electorales. En principio al menos, una derecha militarista y autoritaria no era una amenaza; una derecha democrática, abierta y volcada al centro, en cambio, sí lo era.

La única forma que se me ocurrió para contestar tal embestida fue recordar los múltiples aportes que tal «derecha inexistente» había efectuado para favorecer la transición, pero tampoco resultó. Lo que tenía ganas de preguntarles era otra cosa.

—¿A qué derecha van a recurrir si alguna vez la estabilidad democrática peligra?

La chispa que faltaba

Los que la ingeniaron y ejecutaron susurraron el nombre aún embriagados por la arrogancia: «Operación del siglo».

Más tarde, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan Villarzú, la calificó de otra manera: «El robo del siglo».

Endesa España, gigante de la energía, necesitaba una cabeza de playa en América Latina para ampliar sus inversiones. Con ese objetivo, había mostrado interés en adquirir el control de Enersis, un *holding* empresarial gestado a partir de la privatización de Chilectra, a fines del gobierno militar. Enersis, como propietaria de un importante paquete accionario de Endesa Chile, tenía el control de esta compañía, la principal empresa de energía del país. A su vez, los propietarios de Enersis eran un conjunto de sociedades conocidas como Chispas.

José Yuraszeck, presidente de Endesa y gerente general de Enersis, no aceptó vender Enersis directamente, sino que propuso

a los españoles, en cambio, vender paquetes accionarios de Chispas. ¿Por qué razón? Porque las acciones de las sociedades Chispas eran de dos tipos. Las clase A, equivalentes al 99,94% del capital accionario, en manos de trabajadores de las antiguas empresas privatizadas y otros inversionistas, incluidas numerosas AFP; y las clase B, equivalentes al 0,06% restante, pertenecientes a un grupo de 14 ejecutivos liderados por el propio Yuraszeck. Estas últimas, sin embargo, detentaban la gestión y el control de la empresa.

Atendidas las prerrogativas de unas y otras acciones, Yuraszeck pudo negociar precios distintos: por cada Chispa A los españoles pagarían entre 220 y 260 pesos, a través de una oferta pública de acciones. Por cada Chispa B, en cambio, pagarían 185 mil pesos, es decir un valor 800 veces mayor.

¿Precio total ? Mil quinientos millones de dólares.

Tan pronto apareció el trasfondo de la operación, suscitó el rechazo de las AFP, los fondos de inversión, diversos accionistas y el público en general. Las superintendencias de AFP y Valores, semanas después aplicaron la multa más alta de la historia de Chile a los ejecutivos encabezados por Yuraszeck, la que después —algo muy chileno— quedó en nada. De igual forma, empezaron a emerger aspectos desconocidos de la negociación, claramente perjudiciales para la empresa chilena. Un poco más tarde, la operación pomposamente denominada «alianza estratégica» fue dejada sin efecto por el propio directorio de Enersis.

Sebastián Piñera, accionista de las sociedades Chispas, fue uno de los primeros en rebelarse, exigiendo un «precio justo» por las acciones serie A. Por su carácter de senador de la República y su indiscutible autoridad en materias económicas, su crítica adquirió gran resonancia pública. El tema alcanzó rápidamente connotaciones políticas. Sebastián cuestionó la operación, afirmando que no se había cautelado el interés de todos los inversionistas y recomendó a los accionistas no vender sus títulos hasta obtener el precio que correspondía. Durante casi un mes fue uno de los principales detractores de la operación. Según él, la operación había sido «luces para unos pocos y chispas para muchos».

Sin embargo, en noviembre de 1997, Sebastián llegó a un acuerdo con Endesa España, obteniendo para sus acciones un precio muy superior al resto. El comentario de la prensa fue uno solo: los españoles, que ni siquiera necesitaban sus acciones, toda vez que ya tenían el control de Enersis, las habían adquirido para «acallar la presión pública que el senador estaba ejerciendo».

El propio Andrés Navarro, un empresario de excepcional calidad humana, socio y amigo suyo, declaró que «lo que hizo Sebastián tiene mala imagen, pese a que éticamente no cometió ningún pecado. Yo no lo hubiera hecho».

Era difícil que el tema quedara afuera de una entrevista que concedí a *La Tercera* a fines de noviembre.

—Usted señala que RN es independiente de grupos económicos, ¿qué piensa de lo ocurrido con Endesa-Enersis?

—Tengo un juicio extraordinariamente crítico. La acción de Yuraszeck es repudiable. El directorio de Enersis señaló que se había extralimitado en sus funciones, ocultado información y actuado en abierto conflicto de intereses. Yuraszeck, hacia fuera, ha dañado la imagen del empresariado chileno y, hacia adentro, ha dado argumentos a los enemigos de la economía de mercado. Cuando los empresarios actúan con la voracidad de los tiburones favorecen las ideas socialistas.

—¿Qué opina del arreglo económico al que llegó Sebastián Piñera?

—Hay que hacer una separación tajante entre el mundo de los negocios y el mundo de la política. Le he señalado a Sebastián, en más de una oportunidad, que no se puede ser protagonista de la política y activista de los negocios. Hay que optar: el que entra a la política abandona los negocios; el que está en los negocios abandona la política.

Esa fue mi respuesta. Estoy seguro de que la motivación de Sebastián no fue la plata. Lo que no resistió fue otra cosa: demostrarle a todos que a él no le metían el dedo en la boca impunemente.

Sebastián reaccionó señalando que mis declaraciones las había estimado desleales. Días después agregó una frase que me pareció especialmente ofensiva. En la entrevista donde todo había

partido yo señalaba que «en mi caso personal, desde que asumí un cargo destacado en RN, abandoné absolutamente mi estudio de abogado, nunca más tomé un caso ni un cliente. Y jamás en mi vida he solicitado para nadie una audiencia, trámite o gestión vinculada a cualquier asunto comercial». Sebastián retrucó ironizando respecto de quienes actuaban así: «O eran muy ricos o reciben ayuda económica de alguien».

Tales juicios me obligaron a una respuesta. Dije que «al Senado no se va a cortar cintas en inauguraciones ni a pavimentar calles, sino que a resolver problemas de principios», que jamás actuaba con deslealtad y que, al revés, muchos de los problemas de mi vida política tenían que ver, precisamente, con la franqueza para abordarlos y, por último, que quienes me conocían sabían «que no tengo aspiraciones materiales de ninguna naturaleza y que con mi familia vivimos austeramente». Frente a quienes me decían que lo «aconsejable» en un caso así era callarse, también tenía respuesta:

—Una de las razones del desprestigio de la política es que los principios se defienden hasta que se topan con la familia, los amigos y el partido. ¡Eso no puede ser!

Mientras tanto, la polémica ganaba titulares. Primera página en *La Tercera,* primera página en *La Hora,* comentario obligado en los programas radiales, largas crónicas en *El Mercurio.* Nunca pensé que mi actitud me fuera a retribuir apoyo electoral, pero jamás imaginé tampoco que se volvería en contra. Pero bruscamente algunos medios empezaron a torcer el problema, desplazando la crítica desde la conducta de Sebastián a mis declaraciones.

Qué Pasa, que había tratado duramente a Sebastián la semana anterior, no sólo no valoró mi conducta, ajustada a su propia línea editorial, sino que la atribuyó antojadizamente a presuntas viejas rivalidades, en una crónica que mezclaba intrigas y verdades a medias. Y más que eso, publicó una portada cuatro días antes de la elección con las caras de Sebastián y la mía, separadas por una trizadura y con el siguiente título: «Las razones del quiebre» ¡Imposible peor cierre de campaña!

El comentario político de la última semana de *El Mercurio* también fue lapidario: «A no dudarlo, las declaraciones de Allamand tendrán un efecto disociador dentro de su colectividad y probablemente tengan también algún impacto en la elección senatorial de Santiago-Oriente. Algunos celebrarán la independencia del candidato, pero otros estimarán que su estilo confrontacional no hace sino dificultar la unidad de la centroderecha, como lo ha insinuado su compañero de lista, Carlos Bombal. Y la unidad de la oposición parece ser una meta muy anhelada por amplios sectores simpatizantes de la centroderecha».

¡Bonita extrapolación! ¿Cómo saltamos de las Chispas a la unidad de la centroderecha? ¿Y de cuándo acá tanta preocupación por la armonía interna de RN?

El gobierno, por su parte, tampoco desaprovechó la oportunidad:

—Estamos ante una oposición de derecha que está destinada a autodestruirse progresivamente —declaró el vocero José Joaquín Brunner.

El resultado no pudo ser peor, sin considerar el serio distanciamiento personal que produjo con Sebastián. Nadie valoró la defensa a ultranza de un principio. Dio pábulo para que se reflotara mi imagen conflictiva. Algunos presentaron el episodio como una forma de cerrarle el paso a la intervención en política de los empresarios. Bombal, de paso, se dio un *picnic:* siguió imperturbable defendiendo a Yuraszeck y se dio el lujo de «solidarizar» con Sebastián… filtrando el hecho a la prensa.

Resultado: derrotado en cada uno de los frentes.

Según los viejos sobreentendidos de la política chilena, éste era un tema en el que más valía esquivar. Ser ambiguo. Es cierto que podría haber dicho lo mismo en forma más elusiva. Yo —lo reconozco— fui de una franqueza brutal. Y esto —no hay vuelta que darle— en la política chilena no cae bien.

Palos de ciego

Hacia el final, la campaña adquirió perfiles más políticos. Bombal enfatizaba que su candidatura representaba la unidad de la derecha frente a quienes, por introducir el tema constitucional, la habían dividido: «Si Allamand pierde, se fortalece la unidad». ¿Y qué opinaba del proyecto de derecha liberal? «Un mito, un cuento inventado por un grupo que no ha tenido ninguna realización concreta».

Todavía quedaban, en todo caso, más equivocaciones.

El tema de la acusación de Jordán era uno de los argumentos usados por la campaña de Bombal en las reuniones en casas y en un masivo programa de llamados telefónicos.

Tuvimos la confirmación de la manera más directa. Llamaron por teléfono a mi casa. Contestó mi hija Ignacia.

A primera vista parecía una encuesta telefónica, pero no era encuesta. Era campaña, y de la peor clase.

—¿Qué opina usted de Joaquín Lavín?

—¿Sabía usted que apoya a Carlos Bombal?

Y luego de ese preámbulo, el ataque:

—¿Sabía usted que la droga es el mayor problema que enfrenta Chile?

—¿Qué opinión tiene de la acusación constitucional de la UDI, liderada por Carlos Bombal, para detener el tráfico de drogas y la corrupción en los tribunales?

—¿Sabía usted que Andrés Allamand se opuso y ordenó a los diputados de RN votar en contra?

—¿Considera usted grave que por culpa de Allamand el país haya perdido una gran oportunidad en el combate contra las drogas?

La Ignacia no resistió más. Le dijo que todo era mentira y que era una vergüenza que llamaran a nuestra propia casa.

Silencio al otro lado de la línea.

Otro desatino fue la forma de encarar el tema presidencial que, por la publicación de nuevas encuestas muy favorables a Joaquín Lavín, se introdujo como tema de la campaña parlamentaria.

En mi equipo había preocupación, ya que existía la impresión de que mucha gente nos abandonaba porque pensaba que un eventual triunfo mío, lejos de allanarle el camino a Lavín, que era el que aparecía mejor posicionado, generaría un fuerte conflicto de liderazgo en la derecha. Surgió la convicción de que había que hacer algo para contrarrestar esa percepción.

Creímos ver la oportunidad cuando Lavín hizo declaraciones que parecían recoger muchos de mis enfoques. Dije entonces que ellas «ratificaban la visión estratégica por la que he sido criticado en los últimos años. Lavín sostiene que para ganar la presidencia hay que abandonar el esquema político tradicional Derecha-Concertación; yo vengo diciendo hace diez años que hay que romper el alineamiento entre el *Sí* y el *No*; Lavín sostiene que el gobierno militar debe ser juzgado por la historia; yo he planteado que la centrodercha tiene que mirar más hacia adelante que hacia atrás. Yo he sostenido que debemos captar la adhesión de quienes han acompañado a la Concertación; Lavín ha ido mucho más lejos: quiere incorporar a gente de la Concertación a trabajar en nuestro proyecto».

Días después reconocí que él «tenía la primera opción presidencial» y que no tendría ningún inconveniente en trabajar en su candidatura. «Lavín más Allamand es más que Lavín solo, de la misma manera que la suma de RN y la UDI es más que el esfuerzo individual de cada partido», agregué.

Tampoco resultó. Si el propio Lavín estaba llamando a votar por Bombal ¿cómo podía yo convencer a alguien que votar por mí le convenía a Lavín?

La última equivocación la cometimos al final. Era tan malo el resultado que arrojaban nuestras encuestas entre las mujeres mayores de todo el barrio alto, que mi comando resolvió —con mis dudas, pero finalmente con mi aprobación— enviarles una carta que recordaba mi pasado anti-UP, campaña de FESES incluida, y hacía ver que mi presencia en el Senado sería útil para frenar «el avance socialista» en la Concertación. Estoy seguro de que fue muy contraproducente.

Como si todo fuera poco, no faltó la mala suerte.

—Atropellaron a la mamá, pero ya está en la casa. No te preocupes —me dijo la Olivia que, infatigable y siempre de buen ánimo, me acompañaba en los interminables recorridos de los fines de semana.

¡Lo que faltaba! Haciendo casa a casa en La Granja, a la salida de un pasaje, la embistió de frente un ciclista. Resultado: un fuerte golpe en la cabeza y una fisura en el hombro.

TARDE APARECE EL DILEMA

Los días previos a la elección sirvieron para que los medios de comunicación fijaran el sentido de la elección. *Las Últimas Noticias* señaló que el interés por el resultado de la zona Oriente es «sólo la punta del *iceberg* de una pugna mayor, un choque para saber quién manda en la derecha». La revista *Hoy* dijo que «si Allamand es derrotado, cae su proyecto de derecha y su posibilidad de ser candidato presidencial». *La Tercera:* «Es el duelo que concita mayor atención, porque lo que está en juego es cuál de los dos proyectos de derecha se impondrá en la política nacional», agregando que el de Bombal era el de la derecha tradicional, «la que defiende los enclaves autoritarios» y la nuestra una derecha «más liberal y progresista». *El Mercurio* señaló, más cauto, que era la circunscripción que generaba mayor expectación, ya que «algunos piensan que aquí se define el futuro de la centroderecha».

Mi angustia ante el presentimiento cada vez más claro de un resultado adverso iba a la par con mi impotencia ante la dificultad de perfilar un contenido propiamente político de la campaña. La gran ironía era que el dilema clave, nunca reflejado con nitidez durante toda la contienda electoral, reemergía recién al final.

Ni un solo diario se atrevió siquiera a insinuar que el triunfo de Bombal o mi derrota fuera a tener un mínimo efecto sobre las drogas, la corrupción o el narcotráfico. Nadie dijo tampoco que se jugaba «un estilo de hacer política». Y a decir verdad, nadie tampoco durante toda la campaña… ¡ni una sola vez me preguntó mi opinión sobre los senadores designados!

Los primeros resultados adversos no fueron sorpresa. Algunos periodistas me hicieron ver que sólo eran los primeros cómputos y que las cosas podían cambiar. Sabía que no sería así. La única sorpresa fue lo abultada de la derrota. Perdí en todas las comunas salvo dos. Y en el Barrio Alto —Providencia, Vitacura y Las Condes— donde está la mayor votación de la derecha, mi derrota fue apabullante. Bombal sacó el doble de votos.

Para peor, Renovación estaba perdiendo en todo el país.

Al poco rato llamé a Carlos Bombal para felicitarlo. A través del teléfono se podía sentir la euforia. Él y su gente tenían toda la razón del mundo al festejar

Mi sede se empezó a llenar de amigos y colaboradores. Los que querían estar cerca en el peor de mis momentos. El ambiente se fue cargando de emoción. No faltaron los llantos y las caras de tragedia. Yo sólo pensaba que ser líder es saber reaccionar mejor que los demás en las circunstancias adversas. No me iba a permitir ninguna debilidad, al menos en público. Iba a estar firme y tranquilo. Iba a dar la cara. Contestar todo lo que me preguntaran. Ojalá que las manos no me temblaran y la voz no se quebrara.

Enfrenté la conferencia de prensa más amarga de mi vida. Hasta alcancé a advertir algo de lo que había ocurrido, explicando que «en un escenario general de desconfianza, rechazo y crítica hacia la política, la imagen y el perfil de un accionar pragmático que entregó la UDI, fundamentalmente a través de Lavín, ha generado un vuelco en el electorado de la centroderecha». Nuestro proyecto había sufrido un revés que sería absurdo negar. Hacia adelante habría que «rearticularlo, ya que Chile igual necesita una derecha con fuerte compromiso democrático, independiente y que ponga el interés de Chile por delante». Y en cuanto a Lavín, la pregunta obligada, dije que su opción se había fortalecido y que yo me apartaría absolutamente de la norma tradicional en la derecha que es «aserrucharle el piso y descalificar a la persona que va al frente».

Si alguien me preguntaba si me retiraría de la política, sabría que contestar: que no me retiraba, que me habían retirado los electores.

Nadie lo hizo.

Cuando terminé sentí la camisa pegada a mi espalda. Era transpiración fría.

Al día siguiente, la mayoría de los diarios recogieron aquella frase mía de que la política es «sin llorar». Y no usaron eufemismos. Hablaron de debacle. Afirmaron que el proyecto liberal había sido demolido. Otro dijo que mi derrota era estruendosa. También informaron que José Yuraszeck había llegado a la sede de la UDI a participar en los festejos.

Puertas adentro

En los días siguientes el diagnóstico empezó a emerger. Habíamos fallado en las reglas básicas. Nunca captamos el clima de la elección, nunca transmitimos un mensaje nítido, nunca logramos jugar en la cancha apropiada y más de una vez nos metimos solos en la menos favorable. Por último, el perfil general de la campaña no fue coherente ni con la trayectoria personal, ni con la del partido. El electorado castigó a un partido sumido en eternos cismas internos. Renovación era sinónimo de conflicto perenne. Y aún así, a nivel de diputados, mantuvimos nuestra supremacía en el campo opositor. En donde nos barrieron fue en el Senado. Disputamos diez sillones. Ganamos sólo dos.

La UDI tuvo enormes méritos. Colocó inmejorablemente sus piezas en el tablero, aunque ello es mucho más fácil de hacer en un partido que toma sus decisiones verticalmente, que en uno que debe someterse a procedimientos de democracia interna. El posicionamiento UDI era claro como el agua. Abiertamente partidarios del gobierno militar, «pinochetistas» sin complejos y portadores de una oferta nueva traducida en la esperanza de una política distinta, «al servicio de los problemas reales de la gente» cuyo emblema en ascenso era Lavín. La gente premió su orden interno, su disciplina táctica y la mística para trabajar en equipo. Eso ya era suficiente. Pero había también un trabajo de base digno del mayor elogio. No se explican de

otra forma, por ejemplo, los triunfos con abrumador respaldo para Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira, Patricio Melero, por nombrar sólo cuatro, en electorados tradicionalmente hostiles a la centroderecha.

Cualquiera se preguntará cómo llegó a ser posible, en el caso de mi campaña, una cadena de errores y despropósitos. Ya he consignado algunas explicaciones y podría agregar otras, pero no sé hasta qué punto estos elementos responden a las interrogantes de fondo. Seguramente hay algo más serio y más profundo. Mis adversarios dirán que allí están las mejores pruebas de lo desorientado que llegué a estar en la campaña. No lo descarto. Otros afirmarán lo que Jorge Schaulsohn siempre me repite:

—Entiende dónde te equivocas. Quieres representar a una derecha que no existe. Pudiste dirigirla un tiempo siempre a contrapelo de ella misma, pero jamás lograrás que vote por ti. ¿Cómo no te das cuenta? La derecha está feliz porque perdiste, salvo los que te apoyaron que son unos héroes. ¡La Concertación es la que más siente tu derrota... aunque tampoco vota por ti!

Hay otra dimensión en el asunto que considero bastante más perturbadora. Quiero pensar que si mi campaña senatorial extravió la brújula fue básicamente porque el proceso de desgaste que sufrí antes de iniciarla —y no estoy pensando sólo en lo que había ocurrido en RN— impidió que pudiera desplegar los alcances de mi postulación.

Quienes no comparten mis ideas sobre la derecha dicen que es precisamente mi proyecto el que fue rechazado por la ciudadanía en diciembre de 1997. En cambio siento —y lo digo sinceramente— que nunca lo alcancé a exponer con la debida serenidad y de ello aún me recrimino.

Mirando hacia atrás, ahora veo que el proyecto nunca se pudo expresar bien, con fuerza y nitidez. Al principio, porque al coexistir con el contexto militar autoritario tuvo que navegar en aguas ambivalentes; luego, porque no pudo aprovechar su tiempo opositor: los proyectos políticos se templan en la oposición. Ahí se expresan con vigor y libertad. RN, en cambio, tuvo que destinar enormes esfuerzos más que a impulsar su proyecto, a

forjar los acuerdos que facilitaron la transición y el asentamiento de la democracia.

Además influyeron otras cosas. Algunas absolutamente anormales y muy difíciles de manejar ¿O el espionaje y la acusación de consumo de drogas es habitual en la vida de un partido? ¿Hubo fallas humanas? Sin duda. ¿Errores de dirección? Varios. ¿Fue Renovación una hoguera de vanidades y ambiciones como algunos interesadamente quieren presentarnos? Francamente no lo creo. Me niego a aceptar la estigmatización simplista que más de alguien quiere endosarnos.

De cualquier forma, el proyecto resistió el embate de los adversarios, ya que de otro modo no se explica que, luego de cinco elecciones nacionales, aún hoy siga siendo el segundo partido en términos de votación nacional. Pero fue muy débil para resistir el *boicot* interno.

Si en alguna parte el partido se desfondó fue en su interior. Creo, quizás sólo quiero creer, que el proyecto no fracasó: sólo abortó.

—Las dos derechas no existen —declaró Carlos Bombal después de la elección—. Hay sólo un nuevo camino para toda la derecha.

—Para clarificar el futuro de la derecha y Chile, deben quedar al lado los que equivocan el camino —dijo Jarpa.

—Se debilita y se desecha por largo tiempo la llamada derecha liberal —agregó un analista del PDC.

—Todo el potencial de una de las tendencias de Renovación, que está relacionada con una corriente ascendente en las democracias avanzadas, está anulado por la tendencia autoritaria contraria —analizó Óscar Godoy, agregando que mi derrota «no sólo se debe a errores del candidato, sino a la conducta desleal de muchos de sus competidores internos. RN será un partido impotente para generar cualquier liderazgo, mientras no se creen condiciones de integridad, solidaridad y lealtad partidaria».

Sin embargo, quien superó todos los márgenes, fue el senador Francisco Prat.

—La derrota de Allamand es identificable en dos hechos. Un proyecto aterrizado, que es el proyecto Bombal. La opción Allamand presenta un proyecto de sociedad forzado, exótico. Un proyecto de ingeniería política, que no es acorde con la naturaleza social chilena ni con su historia. No es la línea política de la derecha. Es un proyecto de cafetería, de humo, de conversa, de una tasca.

Estoy seguro de que si un extranjero lee esas declaraciones pensaría que provienen del más enconado adversario, pero jamás creería que son de un senador del mismo partido. A mí no me extrañaron. Prat fue siempre el paradigma de la deslealtad partidaria.

No fue la única declaración de adentro que me dolió. Algunos saltaron a decir, con dudoso oportunismo, que toda la línea política —que ellos mismos habían aprobado— debía ser abandonada y otros declararon que yo había perdido porque... nunca realmente me había jugado por los valores de una derecha liberal.

A los pocos días dejé de leer los diarios.

Capítulo XXII

Desde principios de 1998 vivo en Estados Unidos. Trabajo en Washington y mi casa está en Vienna, Virginia. Es la última estación de la línea naranja del metro y el lugar es realmente muy bonito: la casa está en una zona boscosa cuya vegetación tiene tanto o más vigor que la del sur de Chile.

Creo que fue una muy buena decisión venirme a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí formo parte de un equipo a cargo de los temas de gobernabilidad, reforma del Estado y sociedad civil. Sin embargo, ese enunciado apenas resume el vasto catálogo de materias que vemos aquí: modernización de la Justicia, programas de seguridad ciudadana, puesta al día de la función legislativa, reforma educacional y muchas otras. No sólo eso: desde este cargo he podido ser testigo presencial de la creciente importancia que se le está atribuyendo en todo el mundo a los aspectos políticos institucionales como factor para el progreso económico.

Mi trabajo ha sido doblemente interesante ya que también me ha facilitado el acceso a las dinámicas intelectuales y políticas a través de las cuales la región se está globalizando y cambiando de perfil. Eso no es todo. Basta abrir el diario en Washington para que cualquier persona intelectualmente inquieta quede atrapada sin vueltas en debates políticos apasionantes y entre las formas de pensar que están contribuyendo a perfilar el futuro.

He podido compatibilizar mi trabajo con la Universidad de Georgetown, lo que ha sido fundamental para poder escribir este

libro. Es más: incluso me las he arreglado para incursionar en el ejercicio de la profesión de abogado. El mundo legal norteamericano, muy entremezclado con la política, es una jungla que vale la pena conocer.

*

Necesitaba airearme. En los últimos años, por efecto de las presiones internas del partido y del lugar en que fui quedando en el ajedrez de la política chilena, viví demasiado encerrado en coyunturas y conflictos. Siento que no tuve respiro. Cada vez que había un poco de calma, se incubaba una nueva crisis. A la larga, pasar años y años trabajando tan intensamente puede terminar siendo empobrecedor: no hay oportunidad de levantar cabeza, de mirar las cosas con mayor distancia y serenidad, de renovar la carga de ideas contra la cual uno gira y gira todos los días.

La distancia puede llegar a ser una gran medicina. Además, como los perros luego de una pelea grande en que han llevado la peor parte, necesitaba, lamerme las heridas sin espectadores. Requería ordenar mis ideas, mirar las cosas asignándole sus justas proporciones, aquietar los sentidos. El cambio de aire era fundamental para sistematizar las experiencias, aprender de los errores y cerrar un capítulo de mi vida.

Le di vueltas y vueltas a la alternativa de quedarme en Chile. Pero yo me conozco y sabía que en último término iba a resultar un poco utópico bajar la cortina de la contingencia, entre otras razones porque mi propia gente me iba a presionar para no salirme del día a día de la política.

*

También era importante otro elemento: a partir de los resultados de 1997, la figura de Joaquín Lavín adquirió nítido perfil de candidato de la centroderecha. Para mí, el liderazgo de

Joaquín es respetable. El fortalecimiento de su plataforma electoral, a partir de su gestión en la Municipalidad de Las Condes —refrendado por un gran apoyo ciudadano y alta valoración en las encuestas— es un fenómeno político de proporciones. El proyecto que él representa —centrado en los llamados problemas de la gente, lejos de los partidos y sin énfasis en las instituciones— ha ganado clara adhesión en el mundo de la derecha e incluso más allá. Joaquín tiene todo el derecho del mundo a desplegarlo con la lealtad del sector. A mí me gustaría mucho, por cierto, que su programa incorporara al menos algunas de las definiciones y propuestas por las que tanto he luchado, pero con realismo no es algo que dependa de mí, sino de él. Ojalá que Lavín tenga éxito. Su oportunidad, ganada en buena lid, es enorme: la votación de la centroderecha tiene un piso muy sólido, desde que la última elección parlamentaria nos acercó al 40%. Además, deberá enfrentar al candidato de un gobierno que refleja desgaste y la Concertación —otrora granítica— muestra anchas fracturas. Lo favorece también otra circunstancia: por primera vez en 40 años, no habrá un nombre democratacristiano en la cédula de votación. ¡Un escenario electoral y político inmejorable!

*

Una de las cosas buenas de vivir acá ha sido rescatar tiempo para mi familia. Estoy orgulloso de ella. Me siento en deuda con la Bárbara y los niños: la Olivia, la Ignacia, Juan Andrés, Raimundo. El aporte de todos ellos a la vida familiar es tan estimulante que el mío, por comparación, me parece pobre. Y para qué digo nada si miro hacia atrás: elegí una actividad demasiado absorbente y el tiempo que le sustraje a la casa es irrecuperable. No hay día que no deje de maravillarme la transformación de mis niñitas en jóvenes hechas y derechas, que tienen ideales propios y opiniones intransables acerca de todo; tampoco hay día en que no me sienta «pillado» por el proceso

a través del cual Raimundo va camino de convertirse en un adolescente inquieto, amistoso, expansivo, alegre... y en un buen proyecto de «midfielder» del Tornado, equipo de la liga de «soccer» infantil de Vienna. Juan Andrés acá sigue su esforzado camino de rehabilitación y está plenamente integrado a la casa. A todos nos sube el ánimo lo bien, grande y buenmozo que lo encuentran nuestros amigos cuando nos visitan. Estar acá ha servido también para que todos apreciemos la tarea de la Bárbara en la Fundación Alter-Ego. ¡Aun en países desarrollados hay tantas cosas que hacer por los niños que presentan discapacidades y necesidades especiales para su educación!

*

La detención del general Pinochet en Londres me tomó tan de sorpresa como al resto de los chilenos y me impactó lo mismo que a todo el país. Una semana antes había leído la ahora famosa entrevista suya en *The New Yorker,* cuyo primer párrafo se me quedó grabado: «Yo sólo fui un aspirante a dictador. Soy un estudioso de la historia y la historia enseña que los dictadores nuncan terminan bien», decía el general, según el entrevistador, con «una irónica sonrisa». Más adelante viene aquella frase que tanto han reproducido los diarios: «Inglaterra es el lugar ideal para vivir». Yo pensé que la entrevista —cuya parte final tiene lugar en Londres— iba a ser leída como una provocación por los grupos de izquierda y los activistas de derechos humanos, pero jamás se me pasó por la cabeza su arbitraria detención. Pero una cosa es advertir que el solo hecho del viaje es una muestra de la desaprensión con que el entorno de Pinochet ha mirado el tema de los derechos humanos y otra muy distinta es no reconocer que todo el procedimiento en su contra está cargado por el sello del trato discriminatorio, abusivo y el doble estándar. Que nuestro país tenga aspectos pendientes en su transición no autoriza a que otras naciones —valiéndose de un marco jurídico incompleto

y ambiguo—, intervengan nuestros procesos políticos y judiciales. Yo siento que han abusado con Chile.

*

No creo, como tanto se ha dicho, que la transición chilena haya fracasado, incluso después de constatar el clima de polarización que vivió Chile luego de la detención de Pinochet en Londres, si bien admito que ello evidenció algunas de sus falencias.

Hablar de fracaso es subestimar la convergencia ciudadana en torno a la democracia como sistema político y a la economía social de mercado; también es mirar en menos el dinamismo que alcanzó el desarrollo socio-económico desde la llegada de la democracia y hasta antes que factores externos y malas reacciones internas lo frenaran transitoriamente. En el quejumbroso diagnóstico del fracaso de la transición existe también una obstinada negativa a reconocer que la sociedad chilena hoy se desenvuelve en una atmósfera muy distinta a la del período autoritario. Al mismo tiempo que son muchas las libertades públicas que se han expandido, también son muchos los temores que se han disipado. Por otro lado, no es poca cosa ni deja mal parada nuestra restauración democrática el que, no obstante todas las tensiones vividas, cualquier regresión autoritaria sea sólo un espejismo.

Es cierto que desde el maximalismo político estos avances pueden ser «ninguneados» con relativa facilidad. Cuidado. Los chilenos debiéramos saber bien en qué terminan las lecturas políticas que desprecian por distintas razones —por «formal», por incompleta, por limitada— cualquier institucionalidad democrática. Esa historia ya la conocemos. Tampoco es justo cargar como peso muerto en el morral de la transición insatisfacciones muy complejas y frustraciones profundas que más tienen que ver con la fisonomía que está adquiriendo la sociedad contemporánea. La globalización y varios de los fenómenos asociados a la modernidad, son hechos percibidos en demasiados lugares de manera hosca, y no exenta de desencanto.

No es la transición lo que hay que tirar a la basura. Lo que en realidad hay que botar son las posiciones de dogmatismo, rigidez e intolerancia que han impedido cerrarla definitivamente.

La transición chilena no esta fracasada. Sólo está interrumpida. El gradualismo original que la inspiraba se detuvo y diversos factores influyeron para obstruir una evolución indispensable. Sin embargo, hoy es clara la agenda pendiente de la transición: una reforma institucional que aumente los grados de consenso y confianza en el sistema político y una solución realista —además de equilibrada— a los problemas originados en violaciones a los derechos humanos. Ciertamente hay más: la ubicación de las Fuerzas Armadas y de Orden en el edificio constitucional es un asunto primordial. Ni la marginación de antaño ni la actual ingerencia política parecen razonables. Yo pienso que la última página de la transición se escribirá cuando todos los sectores políticos democráticos sientan a las Fuerzas Armadas a la misma distancia. Y cuando ellas, neutrales, respetadas y profesionales, estén donde deben estar. Lejos, pero por sobre la contingencia política. Integradas a las tareas del desarrollo y pilares de un estado moderno.

*

Hay algunos que me dicen que he exagerado los efectos de mi derrota electoral como candidato a senador. Que «antes siempre habías ganado» y que todo político «alguna vez, tiene que perder una elección». Yo siento que es más que eso. A mí me duele, por supuesto, perder una elección, pero lo que me resulta perturbador es saber que más que derrotarme los adversarios, perdí a manos de los míos. Es allí donde el proyecto al cual he dedicado mi vida encuentra sus mayores detractores y obstáculos.

Hay políticos que tienen la flexibilidad suficiente para defender alternativamente casi cualquier punto de vista y se doblegan dócilmente ante la fascinación de estar al medio del escenario casi sin que les importe el libreto o el contenido de la obra que están interpretando. Yo no puedo.

*

Hay quienes han escrito que imaginar una derecha comprometida con las instituciones democráticas, amplia en sus fronteras, factor de equilibrio en el espacio político, jugada a fondo por la igualdad de oportunidades y con la expansión de las libertades como su huella digital, es «una contradicción con la naturaleza misma de las cosas». Según ellos, estaría en la esencia de la derecha «conservar al mundo tal como es» y asumir el «lujo de la democracia» únicamente hasta que los «intereses prevalecientes no sean puestos en peligro». Desde ese enfoque, mi fracaso se debería a que «Allamand ha arado en el mar». Francamente no creo que ello sea así. No es ésa la trayectoria de la derecha en Chile y tampoco en las democracias asentadas.

En cualquier caso, el esfuerzo de transformación de un sector político es una tarea políticamente muy compleja. No basta un partido grande si su amplitud responde más bien a la suma de grupos heterogéneos. No basta que tenga un alto número de parlamentarios si no hay tiempo ni ganas para que emerjan con fuerza valores colectivos que permitan decantar la amistad y la lealtad. De igual forma, una empresa política exitosa demanda respeto al armazón institucional interno y una ética de la actuación conjunta. Estas son condiciones que deben fluir con la misma espontaneidad con que las personas civilizadas comen bien sentadas a la mesa.

*

¿Qué es lo más importante para un líder político? No hay duda. Oír con la mente abierta. Si en la vida hay que dar hasta que duela, en la política hay que escuchar hasta que agote. Sólo que no es fácil y en cada paso hacia arriba se hace más difícil. También hay que aprender a esperar. Havel lo ha escrito maravillosamente: «Hay políticos que entienden la espera como una etapa para aguardar una ayuda caída del cielo, pero ésa es

sólo una ilusión; hay otros que esperan como expresión del «noble respeto al ritmo interno de las cosas, a cuyas profundidades jamás penetraremos completamente. La primera espera es como la de los niños, que procuran hacer crecer las flores estirándolas; la segunda es la de los que siembran buenas semillas y dejan a las plantas el tiempo que ellas necesitan. Esta segunda «es más que la simple espera. Es la vida. La vida como una alegre participación en el milagro de la existencia».

*

La renovación de un sector político es un gran esfuerzo cívico e intelectual y advierto carencias en el esfuerzo que nosotros desplegamos: faltó un trabajo más sistemático con los jóvenes, ya que así habríamos asegurado la trasmisión de las ideas y la irrigación de savia nueva. Faltó más tiempo y paciencia para incorporar al proyecto personas a las cuales la velocidad del grupo de avanzada les parecía tememaria o sospechosa. Faltaron mejores formas para expresar nuestros puntos de vista sin herir inecesariamente. Y también faltaron insumos que alimentaran la vida del partido que impulsaba el proyecto de cambio. ¿En qué sentido digo esto último? En uno muy simple: la renovación de la izquierda en Chile no sólo se produjo a consecuencia del fracaso de los socialismos reales observado, cuando no vivido en carne propia, por la dirigencia exiliada. El proceso partió en serio cuando una legión de intelectuales y profesionales —¡para qué nombrarlos!— se incorporó a los partidos de izquierda a empujar y darle contenido a la renovación del socialismo arcaico. Por lo mismo, lee mal la Democracia Cristiana chilena su actual crisis si concluye que ella sólo se debe al «desgaste del ejercicio del gobierno. El fondo de la crisis del PDC —a mi modo de ver— es que no produce ninguna idea política nueva desde Eduardo Frei Montalva.

En la derecha hay también un valioso grupo de profesionales e intelectuales —habría que agregar también de empresarios— que cultivan el ideario de la libertad, pero que siempre

encuentran pretextos para estar lejos de los partidos, que es donde, a la larga, se hace la política y se influye en la marcha del país. ¡Siempre habrá razones para criticar los partidos y descubrir sus fallas! Esa no es excusa válida. En el fondo esas personas tienen que asumir una sola cosa: que los partidos no son trajes de confección cortados por sastres italianos. Son como las camisas de las grandes tiendas: S, M, L y XL. No hay más. Por lo mismo deben convencerse que hay que ayudar desde adentro.

*

Cuando miro hacía atrás, más me convenzo de que en política lo único trascendente son las ideas. Allí está la matriz que le otorga sentido y dirección. La vitalidad de un proyecto político descansa en la vigencia de sus ideas y creo que aquéllas por las que he luchado viven, aunque no sé dónde ni con qué fuerza.

La historia es muy importante, ya que proporciona los códigos que permiten a los pueblos entender su presente. Además, sólo con el cristal trasparente del conocimiento de la historia se pueden juzgar los acontecimientos y las personas. Sin embargo, de pronto advierto que para los propios protagonistas es fácil dejarse secuestrar por la historia y transformarse en rehén de los agravios del propio pasado. Hay que evitarlo a toda costa: no hay política posible desde el rencor.

*

Creo saber cómo se sienten los dirigentes de Renovación Nacional en todo Chile. Más de una vez me lo imaginé corriendo por los parques de Washington. Están como los hinchas de un club que tuvo grandes éxitos, pero que vive una mala etapa que se prolonga más de la cuenta: ya no disputa campeonatos, no llena los estadios, no acapara titulares. Sin embargo, allí están clavadas en las paredes —empezando a ponerse amarillas— las

fotos de gloriosos equipos del pasado y aún está vivo el recuerdo de aquella jugada genial que permitió ganar la última Copa. En el fondo ellos esperan: esperan que una hornada de jugadores jóvenes les dé vida nueva a las viejas camisetas, que se logre armar de nuevo el plantel que antaño los rivales temían o que simplemente sea ahora a los adversarios a quienes les toque navegar con el viento en contra. Están ahí, como siempre lo estuvieron. Sin más ambiciones que servir a su país.

Acá me he dado cuenta que Renovación vivió a contramano. La regla de la política chilena es que los partidos exitosos arrancan de una pequeña elite que trabajosamente progresa, templando en la adversidad y a la sombra de los desafíos del crecimiento la cohesión de sus integrantes y la coherencia de sus mensajes. Quizás Renovación fue grande e importante antes de tiempo. De cualquier forma, de abajo hacia arriba o al revés, quizás todo se resuma en que ningún proyecto político puede escapar a su propia travesía del desierto. Es inevitable que la cumpla y es todavía mejor que la aproveche.

*

No sé cuándo ni cómo voy a volver a Chile. Me siento demasiado bien con mi familia aquí. Tengo un trabajo lleno de perspectivas e interesantes oportunidades académicas y profesionales. Siento que no puedo tirar todo por la borda al primer impulso de nostalgia. Es cierto también que lo pasé mal. ¡No voy a venir a llorar ahora! Pero eso mismo hace que después del naufragio uno mire con cautela la navegación en aguas hostiles. ¿Puedo abandonar la política? No sé. A veces pienso que sí, a veces que tarde o temprano el destino es el destino.

Hace unos meses almorcé con Jean Francois Fogel, un escritor, y destacado redactor de *Le Monde,* con quien comparto la pasión por el rugby, la avidez por los buenos diarios y el agrado de las sobremesas sin premura. Por supuesto conversamos de Chile, la política, la derecha, Renovación.

—Sabes —me dijo pensativo al segundo café—. Cuando hablas de tu país y de la derecha, tus palabras mezclan el cariño con el dolor. Para tí, la política es hoy como un amor roto.

—Puede ser —admití.

—Andrés, no te engañes. A veces alejarse es apenas otra forma de amar.

Este libro se terminó de imprimir
en el mes de julio de 1999,
en los talleres de Antártica Quebecor S. A.,
ubicados en Pajaritos 6920,
Santiago de Chile.

Otros títulos:

Gabriel Valdés: Señales de historia
Elizabeth Subercaseaux

Serrat y su época
Margarita Rivière

Las Morla: Huellas sobre la arena
Pilar Subercaseaux

Esta es una historia de la transición chilena desde la orilla de la derecha. Es también una crónica personal del esfuerzo por reconciliar los principios y objetivos de este sector con la democracia, luego de largos años de autoritarismo. Y es asimismo un gran testimonio de entrega personal y coherencia política.

Andrés Allamand rompe en este libro con muchas convenciones. De partida, hace a un lado el manto de silencio que rodeó episodios y acuerdos fundamentales del proceso democratizador. Al llamar las cosas por su nombre, pone en aprietos extendidos eufemismos de la política chilena. Y al entregar impresiones y detalles inéditos echa por tierra el viejo supuesto que obligaba a los políticos —salvo a la hora de las memorias tardías— a callar entretelones, ocultar identidades y hablar siempre con una regla de cálculo en la mano.

Admirado por muchos de sus adversarios y combatido por muchos de sus aliados, Allamand acomete una obra reveladora y valiente.

